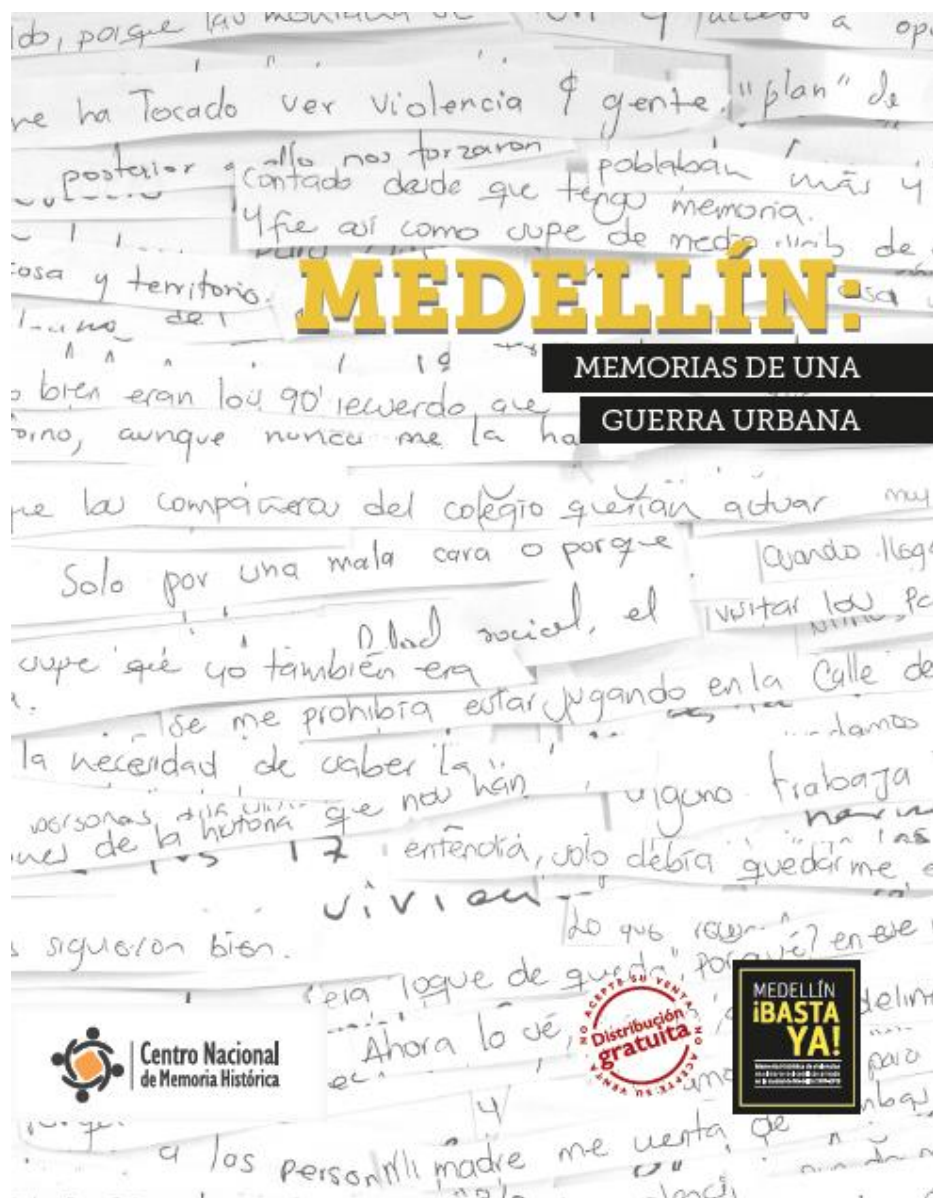


Medellín

Memorias de una guerra urbana



MEDELLÍN: MEMORIAS DE UNA guerra urbana

Marta Inés Villa Martínez
Ana María Jaramillo Arbeláez
Jorge Giraldo Ramírez
Manuel Alberto Alonso Espinal - Profesor Universidad de Antioquia
Sandra Arenas Grisales - Profesora Universidad de Antioquia
Pablo Bedoya Molina
Luz María Londoño Fernández

RELATORES Y RELATORAS

Pablo Zapata Tamayo
Alejandro Cortés Arbeláez
Irene Piedrahíta Arcila - Profesora Universidad de Antioquia
Andrea Natalí Romero Vargas
Wilmar Martínez Márquez - Profesor Universidad de Antioquia
Santiago Olarte Chaparro
Natalia Cardona Berrío
Eliana Sánchez González
Annie Chancie
Investigadores e investigadoras

Isabel González
Laura Cartagena Bermúdez
Mariana Díaz Hernández
Ana María Muñoz Guzmán
Jaime Bornacelly Castro
Lina Martínez Mejía
Judith Nieto
Natalia Maya
Margarita Isaza
Ana Fernanda Marulanda
Daniel Esteban Bedoya Betancur
Asistencia de investigación

Marta Salazar J. (coordinadora)
Focus Narrativo (registro fotográfico)
Natalia Botero (laboratorios visuales)
Robinson Úsuga (laboratorios visuales)
Facultad de Comunicaciones Eafit (laboratorios visuales)
Nathalia Montealegre (asistente)
Luisa Saldarriaga (asistente)
Sara Isabel del Portillo (diseñadora gráfica)
Estrategia comunicativa

Patricia Nieto (investigadora)
Adriana Restrepo (investigadora)
Annie Carolina Téllez Arroyave (practicante)
Karen Cardona Quintero (practicante)
Xamara Mesa (practicante)
Diego Alejandro Sánchez (practicante)
Estefany Largo (practicante)
Isabel Cristina Echavarría (practicante)
María Isabel Pérez (practicante)
Sara Yulieth Ospina (practicante)

Felipe Murillo Carvajal (practicante)
Daniel Hernández (voluntario)
Tiffany Botero (voluntaria)
Otros colaboradores

MINISTERIO DEL INTERIOR

Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República de Colombia

Guillermo Rivera Flórez
Ministro del Interior

Hugo Fernando Guerra Urrego
Coordinador del Grupo de Articulación Interno para la Política de Víctimas del Conflicto Armado

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

Gonzalo Sánchez Gómez
Director General

Camila Medina Arbeláez
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica

CORPORACIÓN REGIÓN

Marta Inés Villa Martínez
Directora

UNIVERSIDAD EAFIT

Juan Luis Mejía Arango
Rector

Escuela de Humanidades
Centro de Análisis Político

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Mauricio Alviar Ramírez
Rector

Instituto de Estudios Políticos
Escuela Interamericana de Bibliotecología

MEDELLÍN: MEMORIAS DE UNA guerra urbana

ISBN: 978-958-8944-84-5

Segunda edición: diciembre de 2017.

Número de páginas: 524

Formato: 18 x 23 cm.

Coordinación Grupo de Comunicaciones:

Adriana Correa Mazuera

Coordinación editorial:

Tatiana Peláez Acevedo

Edición y corrección de estilo:

Nicolás Pernet

Diseño y diagramación:

Andrea Leal Villarreal

APOYO Gráfico:

Juan Sebastián Sanabria

Georreferenciación:

Julio E. Cortés

Fotografías:

Portada: Collage elaborado con base en las cartas escritas por habitantes de la ciudad como parte de la estrategia comunicativa “Llegó la carta”. Por: Juan Sebastián Sanabria.

Internas: © El Colombiano, Harold García para el CNMH, archivo personal Jenny Giraldo, Sandra Arenas, Álvaro Cardona para el CNMH, archivo Corporación Región, María Paula Durán para el CNMH, archivo personal Luis Fernando Londoño, archivo Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), archivo Movice, archivo ACJ-YMCA, Focus Narrativo, archivo Barrio Comparsa, archivo Corporación Cultural Nuestra Gente, archivo Corporación Picacho con Futuro y archivo Corporación Convivamos.

Impresión:

Panamericana Formas e Impresos S.A.

© Centro Nacional de Memoria Histórica

Carrera 6 N° 35 – 29

PBX: (571) 796 5060

comunicaciones@centrodememoriahistorica.gov.co

www.centrodememoriahistorica.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia

Impreso en Colombia. Printed in Colombia

Queda hecho el depósito legal.

Cómo citar:

Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), Medellín: memorias de una guerra urbana, CNMH- Corporación Región - Ministerio del Interior - Alcaldía de Medellín - Universidad EAFIT - Universidad de Antioquia, Bogotá.

Este informe es de carácter público. Puede ser reproducido, copiado, distribuido y divulgado siempre y cuando no se altere su contenido, se cite la fuente y/o en cualquier caso, se disponga la autorización del Centro Nacional de Memoria Histórica como titular de los derechos morales y patrimoniales de esta publicación.

Medellín : memorias de una guerra urbana / Centro Nacional de Memoria Histórica y otros ; fotografía Juan Sebastián Sanabria y otros; prólogo Gonzalo Sánchez Gómez. -- Bogotá : Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017.

524 páginas : tablas, mapas, gráficos ; 23 cm.-- (¡Basta ya! Regionales)

ISBN 978-958-8944-84-5

1. Comunas - Medellín (Colombia) 2. Conflicto urbano - Medellín (Colombia) 3. Delincuencia juvenil - Medellín (Colombia) 4. Problemas sociales - Medellín (Colombia) I. Sanabria, Juan Sebastián, fotógrafo
II. Sánchez Gómez, Gonzalo, 1945-, prologuista III. Centro Nacional de Memoria Histórica IV. Serie. 364.36 cd 21 ed.

A1588151

CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

Contenido

<i>Introducción</i>	9
<i>Prólogo</i>	12
<i>Introducción</i>	15
¿De qué violencias nos ocupamos?	17
Las cifras	18
Los períodos	19
Los actores del conflicto armado	21
¿Qué hicieron? El repertorio de violencias	23
¿Por qué Medellín?	25
Los impactos	27
¿Qué hizo la sociedad?	28
Un relato desde la memoria	30
Estrategia comunicativa	32
El texto	33
<i>1. Medellín: desorden, tragedia e institucionalización</i>	35
1.1. El marchitamiento de la primavera de Medellín: 1965-1981	36
1.2. El “gran desorden” y el desafío armado del Cartel de Medellín: 1982-1994	42
1.3. Una calma frágil y corta	53
1.4. La disputa por el orden y la urbanización del conflicto armado: 1995-2005	57
1.5. Hacia la estabilización del orden institucional: 2006-2014	66
1.6. A modo de síntesis	73
<i>2. Trayectoria de los actores del conflicto armado en Medellín</i>	77
2.1. Inicios de la presencia guerrillera (1965-1981)	77
2.2. Entre el auge y el declive de la izquierda armada y el Cartel de Medellín. Emergencia del paramilitarismo (1982-1994)	79
2.2.1. La izquierda: entre la política y las armas	83
2.2.2. Un nuevo actor en escena: las milicias	87

2.2.3. Auge y declive del Cartel de Medellín.....	91
2.2.4. Los inicios del paramilitarismo.....	95
2.3. Los reacomodos de la guerrilla y la segunda ofensiva paramilitar (1995-2005).....	97
2.3.1. El retorno de las FARC.....	97
2.3.2. Los Comandos Armados del Pueblo (CAP).....	98
2.3.3. La reorganización de las estructuras criminales y sus vínculos con el paramilitarismo.....	99
2.3.4. El Bloque Metro.....	101
2.4. Entre la reinserción y la pertenencia a estructuras criminales (2006-2014).....	107
2.5. Síntesis.....	110
3. Modalidades y repertorios de violencias.....	112
3.1. Modalidades y repertorios de violencias en Medellín.....	112
3.1.1. Los antecedentes: violencias selectivas y desafío revolucionario (1965-1981).....	112
3.1.2. Guerra sucia y turbulencia: los años de la violencia (1982-1994).....	116
3.1.3. De las disputas territoriales a la guerra: reacomodo de las transacciones y conflicto armado urbano (1995-2005).....	129
3.1.4. De la violencia a la inseguridad: crimen organizado y nuevas formas de victimización (2006 – 2014).....	137
3.2. Las violencias que se narran.....	140
3.2.1. Las violencias no pasaron de lado.....	141
3.2.2. El uso de la capucha: “fueron los muchachos”.....	145
3.2.3. Los aprendizajes criminales.....	146
3.2.4. La crueldad y el exceso.....	148
3.2.5. Las violencias que se callan o esconden.....	150
3.3. Las violencias que se cuantifican.....	152
3.3.1. Las violencias letales.....	154
3.3.2. Las violencias no letales.....	165
4. Una ciudad herida: daños, pérdidas y transformaciones.....	180
4.1. Una ciudad con miedo.....	182
4.2. Una ciudad que acuna la desconfianza.....	186
4.3. Una ciudad dolida.....	190
4.3.1. Las huellas del sufrimiento: tristeza y dolor.....	190
4.3.2. Una responsabilidad que se invierte: la sensación de culpa y vergüenza.....	194
4.3.3. Rencor, odio, venganza y más violencia.....	196
4.4. Una ciudad coartada.....	197
4.4.1. La limitación de las libertades y la autonomía.....	198
4.4.2. La participación coartada.....	202
4.5. Una ciudad estigmatizada.....	208
4.6. Un Estado entre varios fuegos.....	212

4.7. Una ciudad en transformación	215
5. Memorias de resistencia y sobrevivencia	222
5.1. Por la defensa de los derechos humanos y el derecho a la vida: 1982-1994.....	224
5.1.1. La defensa de los derechos humanos como resistencia frente a la violencia política.....	224
5.1.2. Construcción colectiva de un pacto social para buscar alternativas para la ciudad.....	230
5.1.3. La Mesa por la Vida y la Convivencia: “elegimos la vida”	233
5.1.4. Quitar espacios a la guerra y al miedo	235
5.1.5. El arte le susurraba a la ciudad que algo andaba mal.....	241
5.2. Las víctimas irrumpen en el escenario de la ciudad, 1995-2005.....	243
5.2.1. Visibilizar los daños	243
5.2.2. La no violencia, la convivencia y el respeto por la vida	250
5.2.3. Música para decirle no a la guerra	254
5.2.4. Inicia el proceso de construcción colectiva de la memoria.....	257
5.2.5. La defensa de los defensores de derechos humanos.....	259
5.2.6. El valor de llamar las cosas por su nombre	260
5.3. La memoria como resistencia: 2006-2014	263
5.3.1. En honor a nuestras víctimas, para que no nos vuelva a pasar	263
5.3.2. Resistir en medio de la confrontación armada	271
5.3.3. La cultura como alternativa de vida y resistencia	273
5.3.4. Exigir verdad, justicia y reparación.....	276
5.4. Acciones de sobrevivencia y resistencia en lo cotidiano.....	280
5.4.1. Códigos de sobrevivencia: “aprendiendo a moverse”	281
5.4.2. Resistencias subterráneas: “hacerle el quite”	286
5.4.3. Lugares de refugio: “yo sobreviví gracias a...”	294
5.4.4. Cuando el espacio del trabajo es un campo de batalla: “haciendo frente”	297
5.4.5. Gritos, susurros, silencios: las formas de contar, expresar o negar la violencia.....	300
5.4.6. Solidaridad y protección: levantarse día tras día	303
5.5. A modo de síntesis	307
Recomendaciones	310
Referencias.....	317

Introducción

Siempre será motivo de agradecimiento y admiración la enorme generosidad con la que las personas que han sido victimizadas responden a los llamados para compartir sus experiencias y relatos. A pesar de que esta es una sociedad que aún no demuestra toda la solidaridad y compasión necesarias para comprender su sufrimiento públicamente, casi sin excepción nos encontramos con su absoluta disposición para contarnos y para ayudarnos a entender una y otra vez. A ellas muchas gracias por su palabra.

Agradecemos a los cientos de personas que, sin ser víctimas directas, se dispusieron a compartir su testimonio, muchas de ellas cargadas también de sentimientos de miedo, de sufrimiento, de rabia, de frustración y de agradecimiento por esta ciudad paradójica. No conocíamos a la gran mayoría de estas personas: llegaron por convocatorias abiertas transmitidas a través de espacios virtuales o por invitación de otros; participaron en conversatorios, en entrevistas individuales y colectivas, en talleres sobre relatos de la violencia; algunas escribieron cartas, nos compartieron sus fotografías personales, nos invitaron a recorrer sus barrios, en fin, nos dejaron entrar sin tapujos por un pequeño postigo a sus vidas. Todo esto nos permitió entender que, al contrario de la aparente saturación de relatos de la violencia, aún se necesitan espacios para nombrar el horror y el sufrimiento, pero también la resistencia y la esperanza, para tramitarlos e incorporarlos a un relato colectivo.

Igualmente, agradecemos la colaboración de varias instituciones: a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Oficina de Derechos Humanos), que contribuyó con información y participación en talleres de memoria; a integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en conversatorios como parte de las actividades del trabajo de campo; a la IV Brigada del ejército que contribuyó con información; a la Agencia de Reintegración en Medellín, que nos facilitó la realización de entrevistas y talleres con desmovilizados en proceso de reintegración; a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que nos facilitó documentos y valiosa información de seguimiento a la situación de derechos humanos. La Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín ofreció un valioso apoyo: nos ayudó a establecer el contacto con varios grupos de víctimas, nos suministró la información que requerimos para la documentación de casos, y varios de sus funcionarios participaron, como ciudadanos y ciudadanas, en los talleres de memoria. Todo ello nos permitió enriquecer la descripción y el análisis de los temas abordados.

Un gran equipo de jóvenes investigadores y profesionales estuvieron a cargo del minucioso trabajo de campo, en el que se dio importancia tanto a los principios éticos como a los estéticos, y se buscó disponer de lugares confortables y respetuosos para la escucha, así como ofrecer información

oportuna sobre el proyecto. Otra parte del equipo, que incluyó practicantes y voluntarios, centró sus esfuerzos en una minuciosa búsqueda de bibliografía, revisión de archivos de prensa y de algunas organizaciones sociales. A todos ellos y ellas, muchas gracias por su compromiso profesional y humano.

El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Corporación Región agradecemos a la Universidad de Antioquia y particularmente al Instituto de Estudios Políticos (IEP), a Adriana González y a Juan Carlos Vélez, su equipo de dirección en el tiempo en el que se desarrolló este proyecto; a la Escuela Interamericana de Bibliotecología (EIB), bajo la dirección de Margarita Gaviria; a la Facultad de Comunicaciones, que participó en el primer trayecto de esta investigación, durante la decanatura de David Hernández, con la investigadora Patricia Nieto. A la Universidad Eafit y a su rector, Juan Luis Mejía, por haber aceptado la invitación que hicimos a emprender este proyecto. Como lo hemos reiterado en muchas ocasiones, hacerlos partícipes de esta iniciativa fue una manera de reconocer su trayectoria investigativa, tanto personal como institucional. En el caso del IEP, el legado de María Teresa Uribe, pionera en los estudios sobre violencia, ha sido absolutamente relevante para este informe. Sin la decisión académica y política de estas universidades de aliarse a este proyecto hubiera sido imposible sacarlo adelante.

La Alcaldía de Medellín, encabezada por Aníbal Gaviria (2012-2015), y específicamente las directoras de la Unidad de Víctimas (Luz Patricia Correa) y del Museo Casa de la Memoria (Lucía González), dieron origen a este proyecto. Esta investigación nació a partir de una discusión impulsada por el Comité de Justicia Transicional y la Unidad para la Atención y Reparación de víctimas (UARIV) sobre la perspectiva de considerar a Medellín como sujeto de reparación colectiva. En ese momento se puso en evidencia la necesidad de construir un relato sobre lo que nos pasó como ciudad para poder avanzar en esta discusión y tomar medidas para garantizar la no repetición. Para ello buscaron al Centro Nacional de Memoria Histórica con la propuesta de hacer el informe *Medellín: memorias de una guerra urbana*. Para estas instituciones va un reconocimiento por su mirada visionaria y consecuente con el deber de la memoria del Estado.

También va nuestro más sincero agradecimiento a quienes aceptaron la invitación a acompañar este proceso en un comité asesor, una instancia convocada para la interlocución en el proceso de investigación, para velar por la rigurosidad de sus resultados y la coherencia con los objetivos trazados: Pilar Riaño, Andrés Suárez, Gerard Martin, Marta Ruiz, Daniel Pécaut, Jorge Orlando Melo y Rafael Grasa. Max Yuri Gil acompañó la elaboración de la propuesta y su primera fase de implementación y ha hecho una juiciosa labor de interlocución en lo que siguió. Sus aportes, recomendaciones y advertencias fueron fundamentales para el equipo de investigación.

Finalmente, hacemos un reconocimiento al Comité Técnico de este proyecto, del que hicieron parte en diversos momentos: Camila Medina, Viviana Ferro, Iván Darío Romero, Hugo Fernando Guerra (Ministerio del Interior) y Juan Fernando Vélez (Corporación Región). A pesar del alto componente administrativo de estas instancias es importante reconocer que siempre hubo un cuidado de los contenidos y del objetivo central de este proyecto. Este espíritu permitió sortear muchas de las dificultades encontradas en el camino.

Esperamos que este informe ofrezca pistas sobre lo que significa la construcción de paz y el sentido del posconflicto en contextos urbanos, y permita retomar los enormes aprendizajes que esta historia de vida y muerte arroja para transitar este camino.

Centro Nacional de Memoria Histórica
Corporación Región

Prólogo

Por Gonzalo Sánchez G.

Director del Centro Nacional

de Memoria Histórica

La ciudad de Medellín ha sido siempre un territorio con una fuerte vocación de ciudadanía, capaz de generar una identidad afirmativa entre sus habitantes, capaz de autotransformarse; una ciudad, en fin, con vocación de futuro.

Pero por otro lado, el rostro de la ciudad reflejó también el estigma de ser considerada como la ciudad más violenta, durante más de tres décadas; eso nos dice mucho sobre los niveles de interiorización, rutinización y legitimación de la violencia en amplios sectores de la sociedad.

Una combinación de atrocidades convirtieron a Medellín en un símbolo nacional e internacional de la violencia: bombas, sicarios, milicias, narcos, guerrillas, paramilitares y bandas... la convirtieron en la ciudad del mal.

Era necesario preguntarse por la trama y el sentido de las violencias cruzadas, de las imágenes fragmentadas, y de la posibilidad de conformar un relato que le diera inteligibilidad a ese mosaico de órdenes criminales, comprometidos a menudo con los de la legalidad, en forma encubierta y en ocasiones ostensible y arrogante.

Este cruce de violencias llevó a un desorden funcional, a un *sistema de guerra*, como diría Nazih Richani¹, es decir, a una situación en la cual todos los perpetradores son beneficiarios, no así la población civil que los sufre a todos. Lo que se vivió en Medellín fue una tensión casi insuperable entre *los territorios de la guerra y las guerras del territorio*, para decirlo en términos de la analista mexicana, Ana Esther Ceceña, aludiendo a otros contextos². A la larga, la proliferación o saturación de aparatos armados generó escasez de territorio para albergarlos a todos, o para su expansión, lo cual hizo inevitable no solo las guerras intestinas, sino las confrontaciones entre viejos u ocasionales aliados. Del sistema de guerra se pasó a un *sistema de retaliaciones*.

¹ Ver *Sistemas de Violencia: la economía política de la guerra y de la paz en Colombia*.

² "Los territorios de la guerra, las guerras del territorio". Ver ALAI América Latina en movimiento: <https://www.alainet.org/fr/node/188005>.

Ese “desorden funcional”, que opera inicialmente como criminalidad concertada, parecía perpetuarse por sus dinámicas internas. Se necesitaron interferencias externas que rompieran la cadena de complicidades tácitas o expresas para que se expresara ahora un tercer sistema: el *sistema de las solidaridades comunitarias*. Esa es la trilogía que puede expresar el conflicto en Medellín: un sistema de guerra que se transforma en sistema de retaliaciones; y un tercer sistema que le permite finalmente sobrevivir: el sistema de solidaridades que también la caracteriza.

Mucho se ha especulado y se seguirá especulando sobre la forma como las destrezas empresariales propias de la región fueron trasladadas al crimen, e hicieron de este una nueva y acaudalada industria.

Esas son algunas de las inquietudes que suscita este informe: ¿cómo se pudo pasar de la coexistencia funcional y concertada de todos los actores armados, a la confrontación hobbesiana entre todos? Por lo pronto, sabemos ya cuál fue el resultado. Los que se apoyaron inicialmente para crecer o defenderse, después se buscaban entre sí para eliminarse. La funcionalidad podía tener y tuvo su final.

Este texto nos introduce en el túnel, el túnel por el cual discurrió la ciudad, pero nos lleva también hasta el otro lado, en donde la ciudad vuelve a lucir sus colores de primavera.

Este informe es un acto de reconocimiento, pero es también una empresa de dignificación; porque si Medellín ha logrado superar ese estigma, si Medellín se ha fortalecido como una ciudad-resistente, lo ha sido a través de sus redes solidarias, a través de su extendida geografía de lugares de memoria y a través de sus acciones institucionales. Pero sobre todo, la ciudad ha logrado superar ese estigma de décadas gracias al trabajo de sus líderes sociales creativos y de funcionarios ejemplares; y— nunca nos cansaremos de repetirlo,—gracias al tesón de las organizaciones de Derechos Humanos y de víctimas de la ciudad, que junto con las del resto de Antioquia han tenido un papel protagónico a nivel nacional .

En Medellín se puede encontrar el universo completo de las víctimas del conflicto armado y de las otras violencias que ha padecido el país. Comenzamos ahora —y es nuestra deuda con tanta dignidad atropellada—, a reconocer las luchas silenciosas, los gestos heroicos, los desafíos organizativos y las resistencias discretas que se manifiestan en todos los rincones de la ciudad.

En este informe se registra la más heterogénea sinfonía de voces que hayamos escuchado a lo largo de nuestro trabajo en el Centro Nacional de Memoria Histórica: víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, universidades, instituciones nacionales e internacionales, e

incluso autoridades policiales e integrantes de las fuerzas armadas, se reúnen en estas páginas, y podrán reconocer aquí su voz y su perspectiva. En ese sentido, el enfoque participativo del que siempre hemos partido en nuestros informes, en el caso *Medellín* logra ir mucho más lejos.

Quisiera señalar, por último, que la sola idea de este informe general acerca de un territorio específico, tuvo un impacto multiplicador. En ese sentido, el *Basta Ya Medellín* es una contribución a la paz territorial que se inscribe en un esfuerzo institucional mayor, que hoy se replica en regiones como Catatumbo y Montes de María, pues el reconocimiento de las memorias regionales es el cimiento estable y duradero de la paz territorial que es la única que puede hacer realidad el sueño de todos los colombianos.

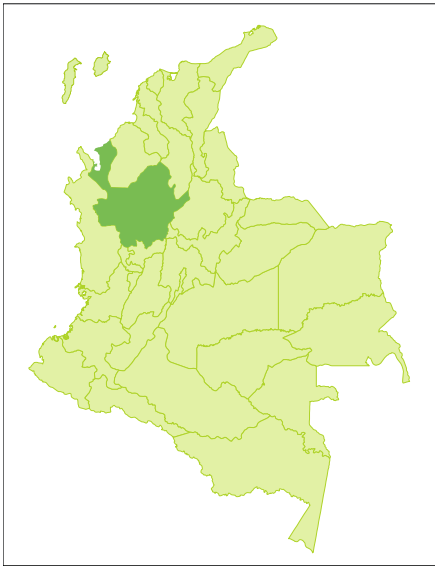
Introducción

Medellín está ubicada al noroccidente de Colombia y es la capital del departamento de Antioquia. Con sus 2.464.322 habitantes a 2015 según el Dane, es la segunda ciudad más grande de Colombia y fue reconocida, al menos hasta mediados de la primera década de este siglo, como una de las ciudades más violentas del país y del mundo. Las 6.810 personas asesinadas en 1991 fueron la punta del iceberg de esta situación.

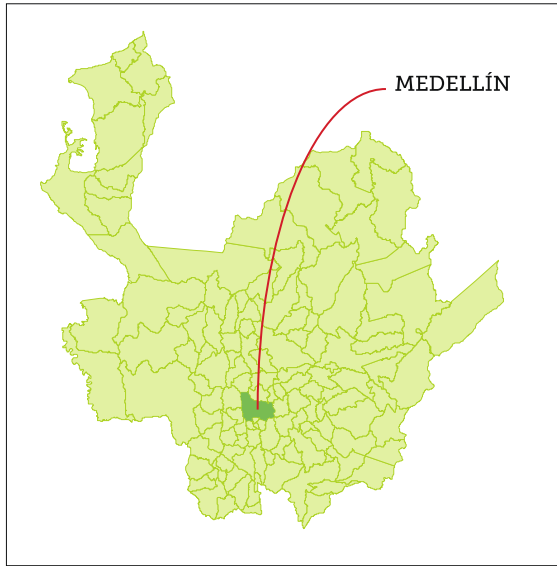
Mapa 1.

Localización de Medellín en Colombia y Antioquia

COLOMBIA



ANTIOQUIA



Fuente: Elaboración propia.

Las bombas en lugares públicos, el aniquilamiento de líderes de izquierda y defensores de derechos humanos, el secuestro, los asesinatos de personas consumidoras de drogas, trabajadoras sexuales y habitantes de calle, las masacres de galladas de jóvenes, los ataques terroristas y con explosivos, el miedo y la zozobra colectiva han consolidado esta imagen. Medellín se convirtió, hacia mediados de los años ochenta, en una ciudad agónica, marcada por la puja entre la vida y la muerte. En respuesta a ello, diversos sectores de la sociedad desplegaron un conjunto de acciones colectivas e individuales, sociales e institucionales, para resistir y sobreponerse a los impactos devastadores de estos fenómenos de violencia. Esto le ha permitido ganar otra distinción: la de ser una ciudad que ha logrado resistir, se ha sobrepuesto y transformado a pesar de las violencias o, tal vez, debido a ellas.

Aunque en la vida cotidiana, en las representaciones y percepciones de la ciudad, esta situación se denomina simplemente *violencia*, es en realidad el resultado de una suma y superposición de varias violencias, desde las agenciadas por actores del conflicto armado (guerrillas, paramilitares,

sectores de la fuerza pública), por actores del crimen organizado (narcotraficantes, bandas, combos) hasta la violencia común, intrafamiliar, callejera y vecinal. Este informe se ocupa sólo de una parte de ellas: las que de manera específica hacen referencia al conflicto armado.

Como veremos, a pesar de la visibilidad mediática y política de algunos sucesos y personajes de la ciudad, de la gran proliferación de literatura sobre estas violencias, y de la existencia de varios ejercicios de memoria, especialmente por parte de las organizaciones de víctimas, la ciudad carece de un relato sistemático que permita a la sociedad comprender la relación entre estas violencias y las dinámicas del conflicto armado, así como sus particularidades locales.

En consonancia con la misión otorgada por la Ley 1448 de 2011 (llamada “ley de víctimas”) al Centro Nacional de Memoria Histórica de aportar al esclarecimiento y la comprensión de las causas de la guerra en Colombia, el informe *Medellín: memorias de una guerra urbana* centra su mirada en el conflicto armado y las violencias asociadas ocurridas en la ciudad de Medellín entre 1980 y 2014. Describe cuál fue el repertorio de violencias desplegado por los actores partícipes de esta confrontación armada, los factores que posibilitaron su emergencia y persistencia en la vida urbana, los impactos generados a la población y la manera como esta respondió para enfrentar y sobreponerse a los estragos de estas violencias.

Los múltiples hechos asociados al conflicto armado y a las violencias han quedado en la memoria de sus habitantes como una honda cicatriz y hacen hoy parte del relato colectivo de la población medellinense. Puede decirse que casi todas las personas en la ciudad tienen entre sus historias algo que contar sobre su relación personal con lo sucedido. Por esta razón, en esta investigación las voces de los pobladores y, en especial, de las víctimas, ocupan un lugar central. Sus memorias hacen parte de una historia que aún está por contarse sobre esta ciudad. Si bien no se trata de un informe de una comisión de la verdad que establezca responsabilidades jurídicas, sí se busca aportar al esclarecimiento de las dinámicas asociadas a estos hechos. Hoy está claro que hay una conexión profunda entre la reconstrucción de la memoria histórica de lo que nos ha pasado y la posibilidad de construir una sociedad democrática en el posconflicto. También se sabe que la garantía de los derechos de las víctimas, incluyendo sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, como centro de su dignificación, debe involucrar de diversas maneras a la sociedad en su totalidad. El informe *Medellín: memorias de una guerra urbana* tiene esa pretensión y se sitúa en ese horizonte.

¿De qué violencias nos ocupamos?

En Colombia, como se pudo ver en la presentación del informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV)³, no ha sido posible establecer un consenso sobre la caracterización del conflicto armado dadas las diferencias en aspectos relacionados con las causas o los orígenes del mismo, la periodización o los principales responsables: paramilitares, Estado y guerrillas.

A pesar de la diversidad de enfoques, Eduardo Pizarro (2015, páginas 45-46), en su calidad de relator de dicha comisión, destacó algunos elementos de consenso que darían cuenta de la especificidad del conflicto armado en Colombia. En primer lugar, se trata de un *conflicto prolongado*, ya sea que se adopte como punto de partida la época de La Violencia o alguno posterior. Es un *conflicto complejo*, debido al gran número de actores involucrados: Estado, guerrillas y paramilitares. Es un *conflicto discontinuo*, dados los contrastes en la evolución de los actores armados. Y es un *conflicto con enormes diferencias regionales* que se pueden apreciar en la multiplicidad de dinámicas y modalidades del mismo.

En el caso que nos ocupa los grupos armados ilegales del conflicto armado nacional tuvieron presencia en Medellín y desplegaron acciones propias de la guerra y enfrentamientos armados en la ciudad. Este suceso involucra tres actores centrales: guerrillas (ELN y FARC) o milicias articuladas a ellas (Milicias Bolivarianas); paramilitares (Bloque Metro, Bloque Cacique Nutibara —BCN—, Frente José Luis Zuluaga) y miembros de las Fuerzas Armadas del Estado (Ejército y Policía).

En este sentido, cuando se habla de la urbanización del conflicto armado no se está pensando en la ocupación de espacios de la ciudad por actores ilegales externos a ella, sino en la articulación y despliegue de estrategias de guerra en la ciudad a través de la acción conjunta de actores locales y actores vinculados al conflicto nacional. En esta investigación haremos referencia a violencias políticas desplegadas por las guerrillas, los paramilitares y sectores de las Fuerzas Armadas en Medellín y, en segundo lugar, a las modalidades de victimización perpetradas por grupos criminales organizados que de manera consciente prestaron sus servicios, se asociaron o se articularon con algunos de los otros actores del conflicto.

³ Conformada por 12 expertos y en cumplimiento del acuerdo suscrito entre el Gobierno nacional y las FARC el 26 de agosto de 2012, esta Comisión tuvo el propósito de aportar “a la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo, y para el esclarecimiento de la verdad” (Comisión Histórica del Conflicto y de sus Víctimas, 2015).

No obstante, esta delimitación, útil especialmente para distinguir y describir los actores del conflicto y las modalidades de victimización, tiende a diluirse cuando se constata que en las narraciones de muchos de los acontecimientos violentos es imposible para las víctimas precisar la identidad de sus perpetradores. Cuando se hace una lectura de los impactos del conflicto armado y de las violencias asociadas o de las respuestas que la población ha tenido frente a ellos no es fácil establecer autorías específicas. Lo que narran las víctimas y los pobladores son los impactos y las repuestas frente a una violencia generalizada, amalgamada y difícil de clasificar.

Las cifras

Según cifras oficiales suministradas por el Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica⁴ y de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de Víctimas (UARIV)⁵ se calcula que en Medellín, entre 1980 y 2014, al menos 132.529 personas fueron víctimas reconocidas del conflicto armado⁶. El desplazamiento forzado es, de lejos, la principal modalidad de victimización con 106.916 víctimas. Le siguen, en su orden, el asesinato selectivo (19.832), la desaparición forzada (2.784 víctimas) y la aterradora cifra de 221 masacres (1.175 víctimas). Además, se presentaron otras formas de violencia que no son letales pero que demuestran la magnitud y degradación del conflicto armado: acciones bélicas (784 víctimas), secuestro (484), violencia sexual (336), reclutamiento forzado (136), atentado terrorista (80) y daño a bienes civiles (12). Esto quiere decir que en una ciudad con 2.644.322 habitantes cerca de 5 de cada 100 personas han sido víctimas directas del conflicto armado y de las violencias asociadas. Esto confirma además una de las características del conflicto armado nacional: su impacto predominante en la sociedad civil no combatiente.

Sin embargo, el impacto del conflicto en la ciudad podría ser mucho mayor si se tienen en cuenta el número de víctimas indirectas (familiares, amigos, vecinos de las personas desaparecidas, asesinadas, secuestradas o desplazadas), el posible nivel de subregistro de estos delitos, dado el alto número de personas cuya declaración no ha sido tomada en cuenta por el Registro Único de Víctimas por considerar que sus características no corresponden a

4 El Observatorio reporta cifras sobre víctimas de asesinato selectivo, desaparición forzada, masacres, violencia sexual, reclutamiento forzado y acciones bélicas.

5 Aunque este sistema de información registra el número de casos y de víctimas de las diversas formas de victimización, tomamos especialmente el dato de desplazamiento forzado, que no es reportado por el Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica.

6 Hasta diciembre 1 de 2016, la UARIV reportó en Medellín 410.776 víctimas del conflicto armado (<http://rni.unidadadvictimas.gov.co/RUV>). Pero esta cifra recoge años anteriores a 1980 y a la población que ha sido recibida en la ciudad en condición de desplazada de otras localidades de Antioquia y de toda Colombia.

la naturaleza formal del conflicto armado⁷,
o incluso el bajo nivel de denuncias, sobre todo hasta mediados de los años noventa⁸.

Los períodos

Si bien en la memoria de los pobladores predomina la percepción de que cuando se habla de conflicto armado y sus violencias se hace referencia a un suceso continuo que siempre ha sido así, en realidad este ha tenido variaciones a lo largo del tiempo. Según el tipo de actores y dinámicas de confrontación, las modalidades de victimización y algunos eventos significativos que fueron señalados en los relatos de la población como hitos de memoria colectiva, este informe identifica cuatro períodos:

El primero va de 1965 hasta 1981. En él se configuran los factores que luego van a detonar el conflicto armado. En ese momento se percibe la presencia en la ciudad de diversas expresiones organizativas relacionadas con el conflicto armado nacional. Durante estos años se sabe de prácticas de justicia privada agenciadas por sectores institucionales; el negocio de las drogas comienza a marcar dinámicas económicas y sociales; y se hacen visibles las demandas de sectores sociales y políticos que buscan reformas políticas y económicas. Según los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH y del Registro Único de Víctimas (RUV) entre 1976 y 1981 se registraron 150 víctimas de violencias asociadas al conflicto armado en la ciudad. Este período está caracterizado por bajas cifras de victimización y termina en 1981 con el surgimiento del grupo de justicia privada Muerte a Secuestradores (MAS), a raíz del secuestro de Marta Nieves Ochoa.

El segundo período ocurre entre 1982 y 1994. Su principal característica es el despliegue de la violencia y el terrorismo del Cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, y, al mismo tiempo, el ejercicio de la violencia política, con alta complicidad de las instituciones estatales, conocida como “guerra sucia”. Como se describirá en los primeros capítulos de este informe, alrededor del narcotráfico crecieron pequeños grupos armados de la izquierda radical, en su mayoría independientes de las guerrillas rurales formadas en la década del sesenta, así como milicias barriales. También lo hicieron grupos de justicia privada que antecedieron el paramilitarismo y que realizaron acciones en contra de líderes y organizaciones de izquierda.

⁷ Según datos suministrados por la UARIV, hasta el 1 de octubre de 2016 se había negado la solicitud de reconocimiento a 121.251 casos. Las mayoría de solicitudes corresponden a denuncias por desplazamiento forzado (72.241), homicidio (22.262) y amenaza (18.001)

⁸ Fue la Ley 387 de 1997 sobre desplazamiento forzado la que creó el registro para el desplazamiento forzado y la Ley 1148 de 2011 la que lo hizo para las otras formas de victimización.

En esos años —como afirmó María Teresa Uribe— las fuerzas del Estado fueron insuficientes para garantizar el orden y apelaron muchas veces a prácticas ilegales reconocidas como “guerra sucia”. Uno de los rasgos centrales de esta crisis fue “la aplicación del desorden para controlar otro desorden” (Uribe, 1990a, página 53). Este período está marcado por el aumento general de las formas de violencia, lo cual se puede ver en las 11.249 víctimas relacionadas con las violencias asociadas al conflicto armado en la ciudad registradas por el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH y por el RUV. Este período terminó con la desmovilización de uno de los actores: las milicias populares.

El tercer período se dio entre 1995 y 2005, y se configura alrededor de la expansión de los paramilitares y las guerrillas rurales en el país y en Antioquia, lo cual conduce a que el departamento se convierta en el principal territorio bélico de Colombia. Medellín, y su región metropolitana, fue el centro geográfico y logístico de este conflicto y se convirtió en objetivo de la disputa militar entre organizaciones paramilitares (en algunas de las cuales los narcotraficantes jugaron un papel central) y entre ellas y organizaciones milicianas y guerrilleras. Durante este momento la ciudad fue objeto de una intervención militar más contundente por parte del Estado, cuyo episodio más conocido fue la operación Orión. Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH y el RUV, entre 1995 y 2005 la ciudad tuvo 52.004 víctimas de violencias asociadas al conflicto armado. Esto quiere decir que en este período ocurrieron el 39,2 % de los casos de victimización asociados al conflicto armado. Este momento culminó con la desmovilización paramilitar (BCN en 2003 y Héroes de Granada en 2005).

El último período identificado en este informe se dio entre 2006 y 2014. El declive de guerrillas y paramilitares desde comienzos del siglo XXI demuestra los avances en la contención de la violencia por parte del Estado y el aumento de su capacidad operativa en la definición e implementación de políticas de seguridad. También hubo un mayor rechazo social a la violencia y a la guerra. Sin embargo, la ciudad fue testigo de un reacomodo de estructuras criminales y fue epicentro de la reinserción de paramilitares desmovilizados. Esto estuvo acompañado de complejos procesos de rearme y de nuevas expresiones de violencia, como el asesinato de líderes, especialmente de jóvenes relacionados con propuestas de resistencias artísticas y culturales, la exacerbación de las llamadas *fronteras invisibles*, el asesinato y la violencia contra las mujeres. De hecho, según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH y el RUV, entre 2006 y 2014 la ciudad tuvo el número más alto de víctimas 68.310 víctimas, la mayoría de ellas de desplazamiento intraurbano.

Los actores del conflicto armado

En Medellín han actuado, durante las tres décadas a las que hace referencia este informe, los grupos armados que han tenido expresión a nivel nacional (guerrillas y paramilitares), así como expresiones locales (milicias) y consecuencias variadas del narcotráfico. A esta confluencia se suma la respuesta, con frecuencia laxa, permisiva e improvisada, de las instituciones públicas llamadas a garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos. Incluso se ha denunciado la participación de algunos sectores de la fuerza pública en acciones ilegales. Esto da lugar a una suerte de “desorden” en el que la violencia se convierte en un recurso fácil no sólo para los actores ligados al conflicto armado, sino para una buena parte de la población.

Estas son relaciones y expresiones dinámicas. Durante estos años, la ciudad pasó de ser un escenario de retaguardia para los actores armados, importante ante todo para el aprovisionamiento de recursos (militares, económicos y de base social), a convertirse durante la segunda parte de los años noventa en un espacio geoestratégico para la movilidad y despliegue de la disputa, así como para el control de recursos, territorios y base social. Lo que se ha llamado *urbanización de la guerra* da cuenta de este cambio, pero es el resultado de decisiones y estrategias fraguadas en el período anterior.

En efecto, diversas expresiones guerrilleras y milicianas han tenido presencia en Medellín desde su aparición a finales de los años sesenta y hasta la segunda década del siglo XXI. Pero estas no siempre tuvieron el mismo peso en la dinámica urbana y en las confrontaciones del conflicto armado en la ciudad. Aunque en sus inicios las guerrillas le asignaron a la ciudad un papel secundario, en los años ochenta esta adquirió mayor importancia en el ámbito político y militar, acorde con las estrategias definidas para avanzar hacia la toma del poder. Fueron las milicias, algunas de ellas cercanas a estos grupos guerrilleros, las que desde finales de la década de los ochenta comenzaron a ejercer presencia y control en algunos territorios estratégicos de la ciudad. Sin embargo, su rasgo distintivo no fue pretender hacer la revolución sino reclamar cierta legitimidad como adalides de una supuesta restauración del orden y la seguridad a partir del exterminio de ciertos sectores sociales estigmatizados. No obstante, la crisis de este proyecto miliciano a mediados de los años noventa (un fenómeno exclusivo de Medellín) y la decisión de sus agrupaciones más representativas de establecer negociaciones con miras a su desmovilización (1994-1996) fueron hechos que marcaron un cambio en el panorama de los actores armados en la ciudad.

Sin embargo, no todas las milicias activas se desmovilizaron. Algunas de ellas continuaron, y al mismo tiempo aparecieron nuevas agrupaciones, como los Comandos Armados del Pueblo (CAP). Igualmente, las FARC reaparecieron a finales de los años noventa, debido a los planes

estratégicos de su jefatura nacional orientados a dar el salto hacia una guerra de posiciones. Estos sucesos hicieron que la ciudad adquiriera una mayor importancia estratégica, pero esta vez como escenario de confrontación, particularmente en aquellos sectores en los que estas agrupaciones lograron ejercer un control territorial. No obstante, una vez más los propósitos nacionales de la guerrilla se vieron frustrados al sufrir la derrota militar a manos de la ofensiva paramilitar y de la fuerza pública, encabezada por el Ejército.

El paramilitarismo, como se ilustrará en el primer y segundo capítulo, también ha tenido una importante trayectoria si se tiene en cuenta que su historia se remonta a la década de los ochenta, con el surgimiento de la organización Muerte a Secuestradores (MAS) y sigue con los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), los hermanos Castaño y las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad (Convivir)⁹ en los años noventa. A todo esto se sumó la articulación entre intereses del narcotráfico y de paramilitares en el proyecto contrainsurgente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), liderado por los hermanos Castaño, narcotraficantes que también fueron cofundadores de los Pepes. De su dirección hicieron parte Diego Fernando Murillo, alias *Don Berna*, y Carlos Mauricio García, alias *Doble Cero*, los respectivos jefes del BCN y del Bloque Metro, que desde 1997 desarrollaron una ofensiva contra las expresiones de la guerrilla en la ciudad que culminó con la derrota de estas y el dominio transitorio del BCN ubicado en la comuna 13. La decisión de *Don Berna* de participar en las negociaciones de paz de los paramilitares con el gobierno de Álvaro Uribe condujo a la desmovilización de la mayoría de bloques paramilitares, entre ellos el Cacique Nutibara, en 2003, y Héroes de Granada, en 2005. Estas desmovilizaciones marcaron un punto de inflexión en la presencia de actores del conflicto armado en la ciudad.

Como lo planteó el informe *Colombia ¡Basta ya!*, producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), el narcotráfico ha sido uno de los factores que explica la persistencia y magnitud del conflicto armado en Colombia. Este inyectó recursos y alentó la creación de nuevos ejércitos, corrompió y permeó al Estado. No fue algo externo al conflicto armado; por el contrario, se reinventó y pervivió en las mismas condiciones geográficas, sociales y económicas donde estaba situado el conflicto y permitió que este continuara (CNMH, 2013, página 193). A lo largo de este informe daremos cuenta de las condiciones específicas que ha tenido el narcotráfico en la ciudad de Medellín, pues sin este fenómeno no pueden entenderse la magnitud de la violencia, su persistencia, sus impactos ni las muchas formas de victimización.

⁹ Creadas en los años noventa durante el gobierno de Ernesto Samper e institucionizadas mediante el Decreto Ley 356 de 1994 durante la presidencia de César Gaviria. Tenían legalmente el derecho a portar armas y equipos de comunicación de uso exclusivo de las fuerzas militares para proteger a sus comunidades y colaborar con la fuerza pública en la lucha contrainsurgente

Su relación con guerrillas y paramilitares favoreció el empoderamiento de diversos tipo de agrupaciones, bandas, combos y comandos, que se distinguieron por sus acciones violentas.

Finalmente, el Estado también hizo parte del conflicto armado. En la ciudad hubo varios elementos que favorecieron la privatización de la seguridad o la aceptación de la “justicia por propia mano”, como la crisis de la justicia, los problemas de corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos por parte de algunos sectores de la Policía y Ejército, o de organismos de inteligencia nacionales (como el Departamento Administrativo para la Seguridad, DAS) y locales (el Departamento de Orden Ciudadano, DOC). A estos problemas se sumaron los desaciertos en los que incurrieron varios gobiernos locales a la hora de promover la participación ciudadana en la seguridad a través de comités de vigilancia barrial y de las Convivir. Estos factores condujeron a que el Estado fuera un actor más de los problemas de la ciudad.

La confluencia de estos actores en la ciudad, especialmente en algunos barrios periféricos, dio pie a numerosas disputas, pero también a pactos y a alianzas transitorias. Así se creó un ambiente propicio para el intercambio de técnicas criminales, lo que condujo a una mayor eficacia del delito.

¿Qué hicieron?

El repertorio de violencias

En el trasfondo de las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín siempre estuvieron presentes las disputas por el control del orden en espacios y territorios específicos de la ciudad. Todos los actores del conflicto armado en la ciudad apelaron a los asesinatos selectivos, la desaparición forzada, la violencia sexual, el desplazamiento forzado, las masacres, el secuestro, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y el daño a bienes. Pero lo hicieron en diferentes magnitudes y con diferentes objetivos, en la medida en que cada uno de ellos tenía una idea diferente de orden y unas formas estratégicas de ejercer control sobre territorios, poblaciones y recursos.

Según los datos recopilados por el Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Medellín no se reconoce al autor en la mayoría de los casos de victimización (49 %). En el 51 % restante los autores reconocidos son, en su orden: grupo paramilitar (25 %), guerrilla (15 %), grupo posdesmovilización (15 %), y agentes del Estado (1 %).

En el caso de los paramilitares las modalidades de victimización más usadas en Medellín fueron los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, la violencia sexual, las masacres, el reclutamiento de menores, los desplazamientos forzados y las torturas. Sus violencias tenían como finalidad mostrar su llegada a los territorios. Por ello su repertorio de violencias respondió principalmente a una estrategia de guerra en la que el ejercicio del terror y el miedo fue un elemento central, tal como se ve en los casos de violencia sexual contra líderes comunitarios y sociales, o en los desplazamientos forzados masivos en El Salado (comuna 13) o en el Popular 1 (comuna 1). Además, después de la desmovilización de los bloques paramilitares, la desaparición forzada y el desplazamiento forzado intraurbano aumentaron considerablemente en la ciudad debido a la intención manifiesta de ocultar hechos que pudieran asociarse con las acciones de estos grupos.

Las guerrillas y milicias desplegaron un modelo de violencia ejemplarizante en aquellos territorios que estaban en disputa con otros actores, y un modelo de violencia más o menos limitada en aquellos espacios que no eran disputados y en los cuales estaba en juego el control y la aceptación de la comunidad. Las modalidades de violencia más usadas por estos grupos fueron los asesinatos selectivos, los secuestros, los daños a bienes, las acciones bélicas, el reclutamiento de menores, las torturas, las amenazas y el desplazamiento forzado selectivo e individual. En el período 1982–1994, los grupos de milicias independientes en las zonas nororiental y noroccidental impusieron unas formas particulares de orden en los territorios recurriendo, fundamentalmente, a dichos mecanismos. En el período 1995–2005, correspondiente a la urbanización de la guerra, el secuestro, el reclutamiento de menores y los asesinatos ejemplarizantes aumentaron considerablemente.

Algunos sectores de la fuerza pública y de los organismos de seguridad del Estado también apelaron a formas de violencia ilegal y realizaron asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y masacres. En el período 1982–1994, muchas de las masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas cometidas en la ciudad estuvieron asociadas a miembros de organismos estatales como el B2, el F2, el DAS y el Departamento de Orden Ciudadano (DOC), según los relatos e informes de organismos de derechos humanos. Durante la urbanización del conflicto armado las actividades de estos actores se concentraron en las acciones bélicas y en los asesinatos selectivos. Después del proceso de desmovilización de los paramilitares se los asoció con desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de miembros de ONG, líderes sociales y militantes de la izquierda.

Finalmente, durante la década de los ochenta y hasta 1993, Pablo Escobar y los Extraditables¹⁰ utilizaron los atentados terroristas, los secuestros políticos y los asesinatos selectivos de jueces, periodistas, policías y militantes de izquierda, en este caso en complicidad con el MAS y algunos miembros de la fuerza pública. Estas violencias justicieras, vengativas e indiscriminadas contra la población pero, al mismo tiempo selectivas frente a algunos personajes, buscaron someter e intimidar a sectores del Estado y de la sociedad que amenazaban sus intereses.

El otro elemento común a todos estos actores y sus formas de violencia fue el uso de la crueldad y de los excesos. Los mecanismos y repertorio de violencias de milicias, guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales en la ciudad trascendieron el acto de matar y amenazar. Ese repertorio incluyó estrategias de sometimiento que siempre llevaban las huellas del terror.

En un número grande de casos de victimización atribuidas al conflicto armado, los actores que desplegaron las modalidades de violencia no fueron completamente exógenos a los barrios y comunidades donde aquellos ocurrieron. En los testimonios suelen aparecer con alguna frecuencia frases como: “La capucha oculta el rostro del hijo de mi vecino” o “a mi vecino”, y por eso en muchos casos los actores violentos no son totalmente ajenos a las dinámicas comunitarias. En un número importante de casos los grupos armados tratan de enlazar, solucionar o agudizar conflictos latentes o precedentes en esas comunidades o incluso resolver conflictos que tienen un carácter eminentemente privado.

¿Por qué Medellín?

Ayudar a entender por qué el conflicto armado alcanzó esta magnitud y permanencia es uno de los propósitos de este relato. Este informe constata que un factor determinante ha sido el narcotráfico y la manera como permeó el conflicto armado y la sociedad en general. Varios narcotraficantes antioqueños crearon grandes aparatos armados propios y los dispusieron contra las guerrillas, las instituciones estatales y, frecuentemente, contra la población inerme. Pero al mismo tiempo una parte de su estrategia fue permear estas mismas estructuras. Sectores de las guerrillas y agencias del propio aparato estatal fueron cooptados por los narcotraficantes, lo que facilitó la expansión de su poder. Otro elemento que explica el impacto del narcotráfico en el conflicto y en las violencias de la ciudad fue su sintonía con las demandas no satisfechas de la población, para la cual este negocio también representó el único canal de ascenso social posible

¹⁰ Grupo conformado por diferentes organizaciones relacionadas con el llamado Cartel de Medellín con el fin oponerse a la extradición mediante amenazas directas y acciones terroristas. De él hicieron parte Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Ledher, Juan David Ochoa, Jorge Luis Ochoa y Fabio Ochoa.

por sus formas rápidas de enriquecimiento en una cultura que hacía apología del consumo, las drogas y la muerte.

Un factor explicativo adicional tiene que ver con la respuesta estatal. Frente a la proliferación de actores y prácticas violentas, el caos y la inexistencia de un poder hegemónico, las autoridades municipales, en general, carecieron de la visión y los medios suficientes para encarar la situación, y los entes nacionales sólo actuaron con decisión y relativa eficacia cuando se percibió que estaba amenazada la seguridad pública. Mientras tanto, hubo muy poca consideración por la situación de las personas y la vulneración de sus libertades y derechos fundamentales. Además, algunos sectores de la fuerza pública se vieron comprometidos en la persecución y asesinato de dirigentes sindicales, alentaron prácticas de privatización de la seguridad y actuaron en connivencia con grupos paramilitares que fueron funcionales a su noción particular de seguridad y orden. Esto y los altos índices de impunidad explican también las dinámicas y magnitud alcanzadas en este conflicto.

También la economía tuvo que ver en la detonación y persistencia del conflicto armado. Los momentos de agudización del conflicto y sus violencias asociadas en la ciudad coincidieron con dos crisis económicas de profundos efectos sociales, una entre 1982 y 1985, y la otra entre 1998 y 2001. Las características de la estructura productiva de Medellín hicieron que esas crisis nacionales tuvieran un mayor impacto para sus habitantes, en especial cuando se consideran el desempleo y la pobreza medidos según ingresos. El peso de las crisis económicas recayó principalmente en el segmento juvenil de la población, el cual sufrió los rigores del desempleo y la desescolarización con más intensidad que en los otros centros urbanos del país. Esto llevó a que jóvenes excluidos del mercado laboral y de la oferta educativa buscaran vincularse a actividades ilegales y sirvieran para satisfacer la demanda de guerreros de distintos bandos. Fue así como esta población terminó constituyendo el grueso de las víctimas directas de los múltiples conflictos de la ciudad.

La presencia de actores armados en la ciudad se relaciona además con prácticas sociales e institucionales de la ilegalidad afianzadas históricamente, con una tradición de bajo cumplimiento de la ley y una estima alta del éxito económico a toda costa. Finalmente, hubo múltiples intercambios de saberes criminales que sirvieron para una expansión de la violencia propiciada por otras organizaciones más grandes y con un sentido más estratégico. Estos factores ayudan a entender también por qué el conflicto armado en Medellín perduró y alcanzó tales dimensiones, pues han creado las condiciones para el asentamiento, expansión y pervivencia de dichos actores por lo menos durante tres décadas.

Los impactos

Las violencias y las dinámicas del conflicto armado afectaron en Medellín a toda la ciudadanía. No obstante, sus impactos se han expresado de manera diferenciada en los distintos sectores sociales y en los distintos territorios de la ciudad. La gran mayoría de los barrios populares se vieron directamente afectados por la presencia de los distintos grupos armados legales e ilegales que ejercieron un control directo sobre la vida, los usos del espacio, las relaciones y la economía local de estos sectores. También, debido a la intensidad de los enfrentamientos y acciones contra la población (asesinatos, desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual) se produjeron mayores niveles de vulnerabilidad y empobrecimiento.

Los sectores de ingresos medios y altos se convirtieron en blanco de diversos tipos de violencias de algunos grupos armados, como las redes del narcotráfico en medio de su guerra declarada contra el Estado y contra algunas figuras de la élite local. Los secuestros, asesinatos, exilios y extorsiones a sus inversiones en zonas rurales y urbanas hacen parte de las variadas modalidades de violencias directas sufridas por estos grupos poblacionales. A medida que el conflicto armado crecía en la ciudad, muchos empezaron a sentir que la violencia también los tocaba y el sentimiento de estar permanentemente en riesgo fue cada vez más generalizado.

La magnitud y la cercanía de estas violencias han tenido también impactos profundos en las emociones individuales y colectivas de la ciudad. Algunos de estos impactos han sido debilitantes e incluso paralizantes, como el miedo, la tristeza, el dolor, la culpa o la vergüenza, mientras que otros, como la rabia o el deseo de venganza, se convirtieron en un motor que, en ocasiones, ha alimentado las múltiples violencias.

El tejido social y comunitario se debilitó en medio del ambiente de desconfianza, miedo, zozobra e incertidumbre que experimentó la ciudadanía durante los años críticos del conflicto armado urbano en Medellín. La libertad y la autonomía se vieron coaccionadas y muchos se ausentaron del espacio público mientras languidecían los vínculos de solidaridad. El asesinato de personas representativas de la vida social y comunitaria, líderes cívicos, dirigentes políticos, religiosos, educadores, entre otros, las desapariciones y los desplazamientos, afectaron la cohesión social y las dinámicas colectivas.

Estos impactos se han transformado en el tiempo a la par con los cambios en las dinámicas del conflicto y las variaciones en las modalidades de victimización. Por ejemplo, el “estado de terror” que se vivió durante los años del recrudecimiento de la violencia entre finales de los ochenta y principio del dos mil es narrado como algo “muy horrible que ocurrió”. Sin embargo, las huellas que han dejado en las relaciones sociales y en las subjetividades persisten ya que

se instauraron en el corazón de la cultura de la ciudad. El miedo, la exclusión, la desconfianza, la estigmatización de sujetos y territorios siguen estando presentes y expresan la profundidad de las afectaciones generadas por las dinámicas del conflicto armado y las violencias en Medellín.

¿Qué hizo la sociedad?

Medellín resistió la violencia gracias a la capacidad de movilización, acción y creatividad de diversos sectores de la sociedad. A pesar de la hondura de los daños causados y de lo irreparable de muchos de estos impactos, la violencia generó (y sigue generando) múltiples movimientos y respuestas que quieren enfrentar, detener, sobreponerse o transformar los impactos negativos. Una buena parte de estas respuestas han provenido de organizaciones sociales, de instituciones locales y de personas que han desplegado un importante repertorio de acciones que explican, en últimas, por qué la ciudad no sucumbió a pesar de la crisis.

Entre 1982 y 1994 una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil hicieron presencia en el espacio público, interactuaron con las instituciones e hicieron propuestas para buscar alternativas a la violencia, exigiendo el derecho a la vida. Esas organizaciones, algunas de las cuales ya existían mientras otras fueron creadas debido a la coyuntura, se hicieron visibles con sus acciones para enfrentar la guerra. Estas acciones tuvieron como telón de fondo dos hechos notorios: la creación de la Consejería Presidencial para Medellín, y el proceso de elección y celebración de la Asamblea Nacional Constituyente (1990-1991). Ambas ofrecieron un marco institucional y un ambiente en el que se reconoció la profunda crisis a la que la ciudad había llegado.

La Asamblea Nacional Constituyente, cuyo objetivo fue la formulación de una nueva constitución para reemplazar la de 1886, tuvo además una clara relación con el conflicto armado, los procesos de desmovilización de grupos guerrilleros y, especialmente, las demandas de ampliación de la democracia. La creación de la Consejería Presidencial, por su parte, respondió a la situación de violencia que atravesaba la ciudad, aunque no sólo referida al conflicto armado, y a fenómenos como el asesinato de líderes de organizaciones de izquierda y derechos humanos, atentados terroristas agenciados por el narcotráfico y la emergencia de múltiples expresiones de violencia que afectaron directamente la vida de miles de personas. Reconocer la crisis, mirarla a los ojos y ponerle rostro fue la primera respuesta. La otra fue convocar a la sociedad para reconocerla, comprenderla y enfrentarla. Entonces cientos de organizaciones e instituciones educativas, eclesiales, asociativas, la mayoría de ellas ligadas a barrios y comunas marcadas por la violencia, impulsaron acciones que hoy sirven para explicar la supervivencia de la ciudad y la conversión de

la crisis en oportunidad. Las expresiones culturales y artísticas tuvieron especial relevancia en la búsqueda de nuevas formas de relatar y transformar simbólicamente los desmanes de la guerra.

Entre 1995 y 2004, durante el período denominado “urbanización de la guerra”, apareció con fuerza la población desplazada, gran parte de ella proveniente de municipios de Antioquia y de Chocó, pero también de otras regiones del país azotadas por la violencia. Llegaron buscando un lugar en la ciudad, exigían que la sociedad viera los múltiples impactos sufridos por la guerra y las demandas de las víctimas del conflicto armado. Al mismo tiempo las organizaciones sociales y de derechos humanos continuaron la labor de denunciar el fenómeno paramilitar y su connivencia con sectores de la fuerza pública.

En el período que va de 2005 a 2014 tomó fuerza el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, además del desplazamiento, la desaparición forzada, el reclutamiento, el secuestro y la violencia sexual, entre otras. A esto contribuyeron de manera especial los desarrollos legislativos derivados de la ley para la atención integral del desplazamiento forzado (Ley 387 de 1997) y la promulgación de la llamada ley de víctimas (Ley 1448 de 2011), que es resultante de la movilización en torno a demandas de verdad, justicia y reparación después de la ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005). De otra parte, las organizaciones de mujeres y jóvenes se hicieron aún más visibles como portadoras de las reivindicaciones relacionadas con la defensa de la vida, el derecho al territorio y la cultura. Este período también estuvo caracterizado por la emergencia de la memoria como recurso de resistencia y transformación de las heridas dejadas por el conflicto armado en la ciudad y sus territorios.

Pero no se trató de una acción de resistencia sin contratiempos. En los tres períodos, en unos más que en otros, organizaciones y líderes que denunciaron abiertamente las violaciones de los derechos humanos fueron perseguidos, amenazados y, en algunos casos, asesinados. Al mismo tiempo que hubo un creciente proceso de incorporación del discurso de los derechos humanos a las prácticas y políticas institucionales, este discurso siguió siendo objeto de estigmatización. Además, diversos poderes armados cooptaron organizaciones sociales y los recursos públicos destinados para ellas, sin el control de las instituciones públicas.

En los ámbitos individual y cotidiano, sectores significativos de la población de Medellín encontraron siempre formas de resistir a los violentos intentos de dominio y control de los actores armados. En toda la ciudad se usaron acciones de resistencia subterránea, connivencia o adaptación: desde la confrontación a los que querían imponer su orden a la fuerza hasta acciones invisibles que buscaban reconfigurar la cotidianidad perdida por la guerra.

Un relato desde la memoria

Medellín: memorias de una guerra urbana ofrece un relato sobre las violencias que ha padecido Medellín en los últimos 34 años en el marco del conflicto armado que ha existido en Colombia desde hace más de medio siglo. Describe las dinámicas y expresiones del conflicto armado en la ciudad, los actores que intervinieron, los contextos que hicieron posible su magnitud y pervivencia, sus impactos y las respuestas que nacieron de la sociedad local. El informe quiere aportar a la construcción de la memoria colectiva del país a partir del reconocimiento de las voces de las víctimas en una ciudad que resulta emblemática de la lógica, dinámicas, relaciones e impactos del conflicto en un contexto urbano.

Atendiendo a este propósito, se construyó una estrategia investigativa y comunicativa con la que se buscó comprender el conflicto armado y las violencias asociadas a partir del reconocimiento de sus dimensiones subjetiva y humana, teniendo en cuenta que la reconstrucción de los hechos a partir de la memoria no genera una sola versión de lo acontecido, sino que devela múltiples miradas, percepciones, vivencias y explicaciones que dependen del lugar de enunciación que tienen los sujetos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Cómo impactó esto a la ciudad? ¿Cómo se respondió? Fueron las preguntas guía de un intenso trabajo de campo y exploración bibliográfica.

Las víctimas, en su heterogeneidad, fueron un grupo privilegiado en esta investigación. Hacia ellas se desplegó una buena parte de la indagación: se escucharon las voces de víctimas de desplazamiento forzado, desaparición forzada y violencia sexual. Se atendió el relato de defensores de derechos humanos y sindicalistas, familiares de policías asesinados, militantes de organizaciones de izquierda y personas exiliadas. También fue un propósito explícito escuchar las voces de quienes, aunque no fueron víctimas directas, tuvieron su propia construcción y relato sobre lo que ha pasado: artistas, empresarios, personal médico, académicos, líderes de opinión, miembros de la fuerza pública, profesionales, periodistas, servidores públicos, miembros de organizaciones sociales, líderes de iglesias y pobladores comunes y corrientes hacen parte de esta investigación.

El trabajo de campo fue cuidadosamente estructurado para obtener el mayor número de voces y miradas posibles sobre las formas de victimización, el género, el territorio, la edad, la clase económica y las adscripciones políticas e ideológicas. Quienes participaron de las consultas lo hicieron de manera voluntaria, y tuvieron información explícita sobre los objetivos y los alcances de este proyecto. Las estrategias fueron planificadas y llevadas a cabo partiendo de los elementos conceptuales, metodológicos y ético-políticos construidos por el CNMH en el texto *Recordar y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir memoria histórica* (2013a), así como

del acumulado de la Corporación Región en la elaboración de diversos informes sobre memorias del conflicto armado¹¹.

Con los talleres de memoria¹² se buscó, a partir del enfoque y las técnicas interactivas propuestas por el CNMH, reconocer las experiencias y percepciones individuales y colectivas en torno a la violencia; elaborar líneas de tiempo en las que se identificaron los principales hitos de violencia en la ciudad e identificar las respuestas de la población y los grupos sociales a esta. Los grupos focales conformados por grupos poblacionales con identidades de intereses, roles o experiencias de victimización¹³, ahondaron en los sentidos y las interpretaciones que estos sectores han construido sobre el conflicto armado y las consecuencias específicas sufridas en razón del mismo. Con las entrevistas a profundidad¹⁴ se buscó conocer la trayectoria de personas que, en función de su rol o del tipo de victimización que sufrieron, han construido un relato y una explicación sobre lo que les pasó.

No obstante, sabemos bien que no basta con esos relatos y que la posibilidad de comprensión de lo sucedido pasa por la exploración de otras fuentes que ofrezcan insumos para armar el rompecabezas. Por eso otra parte del ejercicio investigativo fue la revisión sistemática de la bibliografía existente, de archivos institucionales y la revisión de prensa local y nacional ente 1980 y 2014.

Finalmente, con el propósito de recoger diversos saberes acumulados, se encargó a 11 expertos documentos que profundizaran sobre dimensiones o aspectos específicos del conflicto armado y las violencias en Medellín¹⁵. La información y el análisis que estos textos ofrecen fueron incorporados a este informe.

¹¹ Entre ellos: Informe de comuna 13 (CNMH, 2011a), San Carlos (CNMH, 2011), San Rafael (CNMH, 2016) y Granada (CNMH, 2016a).

¹² Se realizaron 20 talleres con la participación de 324 personas. Estos fueron los grupos con los que se realizaron los talleres: equipo de investigadores del proyecto; adultos mayores de 40; profesionales de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas; habitantes del corregimiento La Loma; mujeres participantes de procesos adelantados por la organización Mujeres que Crean; guías y mediadores del Museo Casa de la Memoria; estudiantes del diplomado de periodismo de la facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia; grupo de hombres asociados en torno a la búsqueda de nuevas masculinidades; habitantes de la zona noroccidental de la ciudad; sindicalistas; familiares de policías; sectores LGTBI; habitantes de la comuna 14; víctimas de la Unión Patriótica; afrodescendientes; integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas; empleados del sector financiero; personas que hacen parte de la Universidad de Antioquia; integrantes de la organización de víctimas Madres de la Candelaria; excombatientes que hacen parte del proceso de reintegración promovido por la Agencia Colombiana de Reintegración.

¹³ Se realizaron 13 grupos focales en los que participaron 102 personas de diversos colectivos: creadores, sindicalistas, defensores de derechos humanos, víctimas de violencia sexual, rama Judicial, maestros, policías, miembros del Ejército, acompañantes de procesos de reintegración, exiliados, víctimas de desaparición, funcionarios públicos, comerciantes.

¹⁴ Se realizaron alrededor de 70 entrevistas a profundidad con hombres y mujeres, víctimas, servidores públicos, académicos, exmilitantes de grupos armados, dirigentes sociales y políticos, miembros de fuerza pública, empresarios y pobladores, entre otros.

¹⁵ Estos documentos fueron: "Violencia y narcotráfico" (Duncan, 2016); "Violencia y universidad" (Pérez, 2016); "Violencia y mujeres" (Ramírez, 2016); "Violencia y sindicalismo" (Escuela Nacional Sindical, 2016); "Violencia y guerrillas" (Daza, 2016); "Violencia y policía" (Ruiz, 2016); "Violencia y arte" (Giraldo, 2016); "Violencia y literatura" (Alzate, 2016); "Violencia política" (Gil, 2016); "Violencia y empresariado" (Lopera, 2016); "Violencia e institucionalidad" (Leyva, 2016).

Estrategia comunicativa

Las acciones de comunicación realizadas en *Medellín: memorias de una guerra urbana* fueron concebidas desde el inicio como herramientas para aportar a la investigación. A través de una estrategia comunicativa que buscaba movilizar a la población en torno a las preguntas de investigación se pusieron en marcha una serie de dispositivos que, a la vez que daban a conocer el proyecto, recogían las vivencias y testimonios de los habitantes de la ciudad que hacen parte de este relato.

Con la estrategia digital “Llegó la carta” se pidió a la población contar sus experiencias y vivencias de la violencia¹⁶; se realizaron conversatorios en lugares públicos¹⁷, recorridos urbanos para identificar lugares de memoria relacionados con las huellas de la violencia¹⁸; se realizaron dos laboratorios sociales en los que se recopilaban diversos testimonios: memorias develadas¹⁹ y *transmedia*²⁰, cuatro talleres de *stopmotion* con jóvenes de diversas instituciones educativas de la ciudad²¹. Adicionalmente se implementó una fuerte estrategia de información a través de redes sociales (YouTube, Twitter, Facebook e Instagram)²², las cuales permitieron la divulgación y el reconocimiento del proyecto en el ambiente virtual.

Estas acciones comunicativas aportaron a la metodología de la investigación, pues los relatos funcionaron como insumo. Además se involucró a una capa amplia de la población en la construcción de sus memorias. El relato que ofrecemos es el resultado de esta polifonía.

¹⁶ Esta propuesta apeló a esa forma de comunicación que se usaba antes. Aprovechando ese recuerdo, invitamos a las personas a que escribieran cartas a la investigación. El relato íntimo que propicia la carta hace que el lenguaje de estos relatos sea muy particular. A cada carta que llegó le entregamos una respuesta escrita por las personas que participaron en el proyecto, lo que le daba también un carácter personal a la acción comunicativa. Se recogieron alrededor de 500 relatos.

¹⁷ Se realizaron 15 conversatorios en ferias del libro, casas de la cultura de diferentes barrios y con estudiantes en colegios y universidades.

¹⁸ Se realizaron 9 recorridos; 5 por lugares emblemáticos de acontecimientos relacionados con la violencia en la ciudad (Parque de San Antonio; La Macarena; Cementerio Universal; bar Viejo Baúl, Adida; Museo Casa de la Memoria) y 4 territoriales (noroccidental, nororiental, centro occidental y Universidad de Antioquia).

¹⁹ Estos fueron liderados por la profesora Natalia Botero y el colectivo Focus Narrativos de la Universidad de Antioquia. Se realizaron 12 talleres de narrativas visuales en diferentes sectores de la ciudad, en los cuales se intercambiaron historias sobre hechos vividos durante el conflicto armado. El diálogo se iba plasmando en fichas y después en un dibujo a través de procesos químicos fotográficos. Ver Botero (2015).

²⁰ Este fue realizado con habitantes del corregimiento La Loma y liderado por la Universidad EAFIT. A partir del diálogo con esta población y su experiencia con el desplazamiento forzado se hizo un proceso de construcción de cartografías. El resultado fue una plataforma transmedia construida colectivamente con estudiantes y habitantes que recoge el proceso desde diversas narrativas.

²¹ Estos talleres fueron liderados por Lluvia de Orión, un colectivo de la ciudad que viene proponiendo una reflexión sobre la memoria histórica a partir de herramientas como la animación. Se eligieron 4 instituciones educativas, algunas con procesos en memoria histórica, otras con interés en abordar estos temas. El resultado fue cortometrajes de casi dos minutos de duración cada uno. Estos recogieron una mirada desesperanzadora de los jóvenes sobre la guerra. Los jóvenes plantearon en sus videos asuntos estructurales como la impunidad y la “ley del barrio”; también hicieron una invitación a llamar las cosas por su nombre: “no es cosa del pasado”, “curva de los muertos”. La forma como se abordó el tema y la técnica que se usó permitió llegar a un público adolescente para que ellos también pudieran hacer sus aportes a este informe.

²² Facebook: <https://www.facebook.com/medellinbastaya/?fref=ts>; Twitter: <https://twitter.com/Medellinbastaya>; Instagram: <https://www.instagram.com/medellinbastaya/>; Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYIJmE-YL49yTmYmrAY80qA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0.

El texto

El capítulo uno, “Medellín: desorden, tragedia e institucionalización”, presenta el contexto explicativo que ha permitido la emergencia y transformación del conflicto armado

El capítulo dos, “Trayectoria de los actores del conflicto armado en Medellín”, describe la trayectoria, evolución y transformación de los actores armados que han tenido presencia en la ciudad.

El capítulo tres, “Modalidades y repertorios de violencias”, presenta de manera detallada el repertorio de violencias empleadas por los actores armados, las memorias de estas violencias narradas por las víctimas y las cifras para cuantificarlas.

El capítulo cuatro, “Una ciudad herida: daños, pérdidas y transformaciones”, describe los impactos emocionales, sociales, culturales y económicos del conflicto armado y las violencias asociadas, los daños, las pérdidas y las transformaciones ocasionadas en la ciudad.

El capítulo cinco, “Memorias de resistencia y sobrevivencia”, presenta las acciones de resistencia y sobrevivencia desplegadas por diversos sectores de la sociedad en los distintos períodos que han caracterizado el conflicto armado en Medellín.

Al final, se presenta una sección de recomendaciones en la que se proponen medidas orientadas hacia la reparación de las víctimas y, especialmente, a la observación de garantías de no repetición.

Dada la amplitud del tema el informe responde a una delimitación que deja necesariamente por fuera temas que requerirán nuevos ejercicios investigativos: un trabajo a fondo sobre el papel de la justicia, los organismos del Estado y fuerza pública, el papel de las élites económicas y empresariales, la relación con medios de comunicación y el significado de las artes en estas memorias, entre otros.

El informe que aquí ofrecemos no pretende ser la única verdad ni la última palabra sobre el tema. Sabemos que este texto se inscribe en un campo de disputas por la memoria y que muchas personas y sectores de la sociedad, algunos de los cuales no aceptaron participar de este proceso, tendrán objeciones al respecto. El trabajo de memoria está en pleno auge y seguramente muchas voces no han sido aún escuchadas. Y sin duda los procesos de justicia restaurativa que se desprenden del

Acuerdo Final entre las FARC y el Gobierno aportarán nuevas perspectivas. Bienvenidos sean la discusión y el debate.

1. Medellín: desorden, tragedia e institucionalización

La violencia en Medellín ha concentrado la atención del Estado, la academia y los medios de comunicación, y con razón. No se trata sólo del miedo y el agobio que afectan la percepción de autoridades y pobladores. Tomando en cuenta los datos de homicidios, Medellín fue la ciudad más violenta de Colombia entre 1980 y 2005. También fue la más violenta de América Latina, una región que, a su vez, fue la más violenta del mundo en el mismo período. En ese lapso, la tasa colombiana de homicidios por cada 100.000 habitantes osciló entre 28,5 y 78, mientras que la del segundo país más violento, Venezuela, se movió entre 10 y 35 (Soares y Naritomi, 2010, páginas 20, 38).

Este fenómeno generalizado, complejo y degradado (Franco, 2009, páginas 386-387) ha sido estudiado bajo categorías como narcoterrorismo, seguridad y crimen organizado, pero pocas veces tratando de hallar los nexos con el conflicto armado nacional (Jaramillo, 2009). Y, sin embargo (según los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica), Medellín fue el municipio que más sufrió los rigores del conflicto armado en las últimas tres décadas (tabla 1).

Tabla 1. Municipios más victimizados de Colombia, 1980-2014. Número de víctimas

Asesinato selectivo	Medellín 19.832	Cúcuta 1.339	B/bermeja 1.274	Ciénaga 1.217	Turbo 917
Secuestro	Argelia (A) 629	Valledupar 542	Cali 495	Medellín 484	Aguachica 426
Desaparición forzada	Medellín 2.784	Turbo 1.166	Santa Marta 996	Bogotá 827	B/bermeja 770
Acción bélica	Medellín 784	Tame 619	Vistahermosa 495	Arauquita 475	Uribe 380
Masacres	Medellín 1.175	Tibú 328	Turbo 316	Apartadó 254	B/bermeja 250
Atentado terrorista	Bogotá 120	Soacha 107	Medellín 80	Granada (A) 35	Florencia 23

Estos datos contrarían la idea general de que el conflicto armado fue un fenómeno exclusivamente rural o periférico. Las grandes ciudades sufrieron enormes daños por la acción de los diferentes bandos en contienda y, entre ellas, Medellín ocupó un lugar preeminente. Como capital de Antioquia —el departamento más victimizado de Colombia según los datos del CNMH— tiene sentido que Medellín fuera escenario destacado de las dinámicas bélicas. Pero las dimensiones de lo ocurrido en la ciudad están anudadas con fuerza a su trayectoria social y política y a la incubación de expresiones de violencia organizada, política o criminal, con fuerte arraigo local.

La variedad de expresiones violentas, de ejecutores y víctimas, la mutabilidad de las circunstancias a lo largo de más de 30 años, desembocan en un paisaje que resulta difícil de descifrar. Por eso los propósitos de este capítulo son: indicar los rasgos del conflicto armado en Medellín, las violencias que pueden considerarse asociadas a él, las explicaciones sobre por qué ocurrieron allí de un modo más drástico y doloroso que en otras ciudades, y cómo el Estado colombiano y sectores de la sociedad antioqueña enfrentaron este problema. Para responder estas preguntas se parte de las interpretaciones más habituales en los estudios sobre la ciudad y se cotejan semejanzas y diferencias con los otros grandes centros urbanos del país, en especial Cali.

El texto se ocupará, primero, de las condiciones que tenía Medellín en los años sesenta y setenta del siglo pasado, las cuales configuraron los antecedentes para la irrupción de una crisis marcada por diferentes violencias. En segundo lugar se explicará la exacerbación de la violencia que se presentó en Medellín (y en el país) entre 1981 y 1994. El tercer apartado dará cuenta del breve interregno vivido desde entonces hasta el escalamiento del conflicto armado nacional. Su expresión en la ciudad será el tema del cual se ocupará un cuarto apartado. La quinta sección mostrará la reacción del Estado central ante la situación de Medellín, la sinergia creada con la sociedad y la administración local y sus resultados, como respuesta a las dos crisis señaladas antes. Al final se esbozará una síntesis del capítulo para ofrecer una lectura panorámica de las conclusiones que se derivan del estudio.

1.1. El marchitamiento de la primavera de Medellín: 1965-1981

Aunque la urbanización de la población colombiana fue rápida y prematura respecto a indicadores mundiales, y a veces se le atribuyeron efectos perversos sobre la vida citadina, “Colombia vivió un proceso de urbanización típico, similar en su velocidad y magnitud a otros países de la región [latinoamericana]” (Gaviria, 2010, página 18). En 1964 los colombianos ya vivían mayoritariamente en las ciudades, y se concentraban en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla,

ciudades que albergaban el 15,7 % de la población en 1951, el 22,8 % en 1964 y el 32,6 % en 1993 (Murad, 2003, página 19). Este crecimiento se atribuye a la transición demográfica resultante de la disminución de la mortalidad respecto a una tasa de fecundidad todavía alta a mitad del siglo XX (Gaviria, 2010, página 4); al mejoramiento de la calidad de vida, la provisión de bienes y servicios públicos; y a las dinámicas de La Violencia (Ortiz, 1998, página 105). Vásquez (1990) señala que entre 1951 y 1964 el crecimiento poblacional de Medellín se debió en un 57,7 % al proceso migratorio, mientras que en Bogotá la incidencia de este fue del 61,1 %, y en Cali, la ciudad donde más influyó, fue del 71,5 %.

Sin embargo, en poco tiempo Medellín, la “ciudad de la eterna primavera”, comenzó a marchitarse: el crecimiento urbano desbordó los límites del área planificada y se expandió a terrenos irregulares. El déficit de vivienda incentivó la ocupación de predios y, con ello, se dio la emergencia de prácticas ilegales. Durante los años setenta y ochenta, las iniciativas que los gobiernos locales y nacionales pusieron en marcha para contener y organizar la expansión urbana tuvieron una escasa incidencia. Los nuevos barrios se erigieron como espacios con escaso control territorial, donde el gobierno era incapaz de proveer bienes públicos como seguridad, educación y salud, aunque, a diferencia de otras ciudades, sí fue eficiente en la prestación de servicios públicos domiciliarios²³. En ellos vivían, entre 1958 y 1972, 600.000 personas, o sea el 50 % de la población (Primed, 1996, página 29). Esto derivó en un desigual desarrollo de la ciudad que marcó enormes diferencias económicas y sociales entre las porciones formal e informal del territorio, acentuado por la segregación realizada por los planeadores (Botero, 1996, página 522) y, poco a poco, por la heterogeneidad de los nuevos pobladores, entre sí y con la población tradicional de la ciudad (Coupé, 1996, página 568). Esta trayectoria sociodemográfica no fue muy distinta a la de las ciudades principales del país. Cali, por ejemplo, vio cómo la construcción ilegal siguió intensificándose durante la década de los ochenta, específicamente en la zona oriental, actual distrito de Aguablanca. Y la legalización de numerosos lotes no logró mitigar el problema, como lo muestra el déficit de vivienda de la ciudad, que para 1993 era casi el doble de Medellín, 41,47 % y 21,49 %, respectivamente (DANE, 2006).

Durante los tres primeros gobiernos del Frente Nacional (1958-1974) la situación de la economía colombiana fue relativamente buena, con un crecimiento promedio del 5 % anual y con variaciones en los índices de precios cercanos o inferiores al 8 % (con excepción de tres años). El buen desempeño económico y las políticas sociales tuvieron un impacto positivo en los

²³ Algunos de los barrios de Medellín surgidos durante la década de los sesenta a partir de los procesos de invasión y loteo pirata fueron: Santo Domingo Savio, Popular 1 y 2, Granizal, La Isla, Moscú, El Raizal, Campo Valdés, Villa Guadalupe, San José de la Cima, Andalucía, La Frontera, La Francia, Manrique Oriental, Versailles, Santa Cruz y Germania (Naranjo, 1992, página 16).

indicadores de desigualdad, salud, educación y nutrición (Urrutia, 2012, páginas 254-256) y, en general, en el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), con un sesgo que benefició más a los centros urbanos. Durante la primera mitad de los años setenta la situación se deterioró bastante: la tasa de inflación en 1974 se triplicó (27 %) respecto a la de 1970, el déficit del Gobierno se duplicó en el mismo período, los salarios reales sufrieron pérdidas hasta de una quinta parte de su poder adquisitivo y la economía tuvo una recesión entre 1974 y 1976 (Kalmanovitz, 1986, páginas 433-459). La pobreza, medida por ingresos, aumentó, y el avance educativo perdió impulso: los “estudiantes, los docentes y los establecimientos educativos, que habían crecido rápidamente en las décadas anteriores, dejaron de crecer” (Gaviria, 2010, página 21). La inconformidad social se desató en todo país y en las ciudades particularmente, y se expresó en protestas estudiantiles y huelgas. Basta decir, al respecto, que el número de huelgas creció de 63 en 1973 a 107 en 1974 y 246 en 1975, y se mantuvo alto hasta 1977, con duraciones inusitadas en algunos casos (Archila, 2003, páginas 202-203).

Puede decirse que los resultados económicos y sociales en las ciudades grandes del país dependían en buena medida de la gestión del gobierno central. La capacidad de los gobiernos locales estaba limitada por las políticas públicas a cargo de “más de 120 entidades descentralizadas de carácter nacional (...) en medio de gran escasez de recursos y de la clientelización” (Leyva y Aristizábal, 2016, página 22). Los cambios en las formas de relacionamiento político entre el centro y las regiones fueron diferentes en cada caso. En efecto, entre 1958 y 1982 Bogotá tuvo diez alcaldes con períodos de 36 meses en promedio, Cali tuvo 17 con un promedio cercano a año y medio, mientras que en Medellín hubo 25 mandatarios con un año de gobierno cada uno en promedio. En Bogotá hubo varios mandatos de cuatro años o más, pero en Medellín era extraño que una administración durara dos años completos. Esto generó una gran inestabilidad en las políticas públicas, afectó la calificación y estabilidad de la burocracia municipal y sumió a la ciudad en una desorientación cuyos efectos no eran perceptibles en el corto plazo.

Un ejemplo palpable de este declive puede hallarse en el campo educativo. En 1922 Antioquia tenía un porcentaje de población estudiantil (10,6 %) —concentrada en la capital— que superaba el de Colombia (6,5 %) y el de Cundinamarca (4,5 %), y que contribuía a configurar lo que podría llamarse un “proceso civilizatorio” en el departamento (Ramírez, 2011, páginas 229-231). A partir de entonces, las administraciones municipal y departamental apenas pudieron atender la demanda derivada del crecimiento de la ciudad y desde la década de los setenta hasta mediados de los años noventa “el sistema escolar no logra crecer al ritmo de la población, en un momento en que esta cambia a un ritmo más moderado” (González, 1996, página 759). Entre finales de los años setenta y mediados de los ochenta cayó la matrícula en la educación superior (Álvarez,

1996, páginas 551-561). La nacionalización de la educación en el segundo lustro de los años setenta sólo empeoró la falta de visión y acción de la dirigencia local.

Esta pérdida de orientación de un proyecto regional que venía desde finales del siglo XIX, y que era apreciado por propios y extraños como exitoso, está relacionada con el fraccionamiento de la élite dirigente. En primer lugar, se produjo una “ruptura entre las élites patronales y las élites políticas durante la década del sesenta” (Restrepo, 2011, página 136), en correspondencia con un fenómeno nacional que ya había señalado Daniel Pécaut (2012 [1987], página 495). Este quiebre llevó, de un lado, a que la élite empresarial antioqueña se retrajera hacia los asuntos técnicos y económicos “sin preocuparse por las transformaciones políticas y sociales” (Restrepo, 2011, página 263). Por otro lado, permitió el empoderamiento en la esfera política de otros sectores “más interesados en la reproducción de su propio poder que en marcarle rumbos de futuro a la región” (Uribe, 2010, página 286). Este fenómeno llevó a un declive del interés público en favor del clientelismo y el rentismo de una clase política cada vez más autónoma y corporativa, y a la concentración del empresariado en los negocios. Al parecer, esto no ocurrió en Cali, donde el orden de la ciudad estuvo regido bajo un consenso sólido entre miembros de una misma élite económica y política (Crespo, 2009, página 190)²⁴.

En segundo lugar, durante la década de los setenta se ponen en evidencia las convulsiones en la configuración de los esquemas de propiedad en la economía antioqueña que conducirán a la aparición de bloques de poder bien diferenciados. En ese momento se conocieron como “tomas hostiles” la puja, muchas veces exitosa, de conglomerados económicos no antioqueños para quedarse con empresas tradicionales, lo que condujo a la presencia de los grupos Santodomingo y Ardila Lulle en la región. Como reacción surgió un “sistema de propiedad cruzada” que mucho más tarde se conocería como Grupo de Empresas de Antioquia (GEA) (Restrepo, 2011, páginas 198-199, 205).

También en la actividad económica se vio en esos años la aparición de lo que se denominó una “clase emergente”, resultante de una nueva y boyante actividad económica: la producción y exportación de estupefacientes, primero marihuana y luego cocaína. Uno de los principales estudios sobre la “narcoeconomía” identificó seis núcleos regionales entre los que se contaba uno con influencia en Antioquia, el Chocó y el Viejo Caldas (Betancourt y García, 1994, página 43)²⁵. Los traficantes de narcóticos se apalancaron en las prácticas ancestrales del contrabando,

²⁴ Crespo se apoya en las ideas de “facciones trenzadas”, de Enrique Ogliastri y Carlos Dávila (1988), y de la “hegemonía filantrópica” de Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán (2014 [1990], página 479).

²⁵ Los otros cinco eran: el núcleo costero en el Caribe (La Guajira, Córdoba y Magdalena principalmente); el valluno en el Pacífico y el sur del país; el central en la zona esmeraldífera; y el oriental en Bucaramanga, Cúcuta y la frontera con Venezuela; un “núcleo suelto” en el Viejo Caldas y el norte del Valle.

aceleradas por el crecimiento de la demanda de artículos de consumo suntuario, y aprovecharon “la crisis de los productos básicos de la agroindustria, la minería o el comercio de las burguesías locales, y los consiguientes traumatismos sociales, económicos, culturales y de orden público” para consolidarse (Betancourt y García, 1994, página 45).

En 1977 el valor de la droga producida en Colombia equivalía “a la tercera parte de las exportaciones legales de café”, y el café representaba más de la mitad de los ingresos nacionales por exportación (Pécaut, 2006 [1979], página 237). Aunque el tamaño de la economía del narcotráfico es difícil de estimar, ciertos cálculos sugieren que las ganancias anuales de la economía de las drogas duplicaron, entre 1976 y 1986, la inversión bruta del sector privado (Thoumi, 1994, páginas 204-207).

En el ámbito ideológico, el monopolio tradicional y firme del catolicismo en Antioquia empezó a resquebrajarse con la emergencia local de fenómenos típicos de la contracultura occidental de los años cincuenta y sesenta. Se dio la aparición de pequeñas agrupaciones políticas de izquierda que surgieron después de la Revolución cubana (1959) y de la disputa ideológica entre chinos y soviéticos. También hubo iniciativas intelectuales de carácter marxista que convirtieron a Medellín en un nicho de periódicos, revistas y editoriales que contribuyeron a modificar el clima intelectual en la ciudad. O movimientos con más sabor criollo como el Nadaísmo, con presencia notable también en Cali, que mezclaba elementos de diferentes vanguardias y que fungía como contestación social y movimiento artístico.

No se trató sólo de que a la Iglesia católica le hubiera aparecido una competencia externa. Tanto o más importantes fueron la división en su estructura interna y la pérdida de influencia entre una feligresía que antes se daba por descontada. Francisco de Roux ha identificado tres vertientes después del Concilio Vaticano II (1962-1965): i) una conservadora y tradicionalista, ii) otra liberal que abogaba por modernizar la Iglesia, y iii) una franja socialista, inspirada en la teología de la liberación (citado en Beltrán, 2013, página 83). Este último sector cobró auge tras la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano celebrada en 1968 en Medellín, que fue precedida por el famoso manifiesto del grupo sacerdotal Golconda (con notoria participación de curas antioqueños) y que demostró la radicalización de sectores del clero proclives, incluso, al uso de la violencia (Calvo y Parra, 2012, página 136). Sobre la pérdida de influencia de la Iglesia católica tal vez bastaría indicar que, durante los años sesenta y setenta, Colombia fue el país de América Latina donde más mujeres recurrían a métodos de contracepción (Beltrán, 2013, página 80), a pesar de las prohibiciones eclesásticas. La Arquidiócesis de Medellín

realizó un censo en 1961 que despertó las alarmas porque descubrió el crecimiento de fenómenos como las madres solteras y otros que denotaban la crisis del modelo católico de familia (Arango, 1991, página 185).

Este panorama fue caracterizado por María Teresa Uribe (1990a, página 53) como una pérdida del “*ethos* sociocultural” antioqueño, que desde el siglo XIX señalaba la centralidad de la familia en la formación ética de los individuos, y el valor del trabajo duro como medio para lograr el enriquecimiento individual y colectivo. Puede añadirse que se trató del derrumbe de la hegemonía de un tipo muy peculiar de representaciones sociales que deja de ser compartida por el conjunto de la sociedad antioqueña y que empiezan a ser desafiada por otras concepciones de grupos amplios de individuos y colectividades²⁶. En efecto, uno de los estudios pioneros sobre valores en Colombia mostró que en Medellín había menos consenso que en Cali alrededor de los valores modernos y que se notaba ya una inquietante diferencia entre los mayores y los más jóvenes que generaba interrogantes sobre “el progreso hacia la modernización” en la ciudad y mostraba una pérdida de la confianza de los sectores medios y juveniles en sus capacidades para “imponerse sobre las circunstancias” (Webber y Ocampo, 1975, páginas 126, 232)²⁷.

El final de la violencia política de mediados de siglo y la pacificación del país, consolidada en la segunda mitad de los sesenta, coincidieron con la fundación de las guerrillas revolucionarias rurales. Su presencia, hasta 1981, fue periférica y casi anecdótica en los departamentos que tenían por capitales a los grandes centros urbanos. A finales de los años sesenta se conoció la presencia de un frente guerrillero del EPL en las tierras bajas de la vertiente norte del Nudo de Paramillo; en 1973 en el nordeste antioqueño se desarrolló la operación militar Anorí que, en la práctica, puso fin a la primera etapa del ELN; y casi al mismo tiempo se supo de la aparición del Frente 5 de las FARC en Urabá. En el Valle del Cauca la presencia guerrillera fue más débil y se limitó a las acciones del Frente 6 de las FARC en el norte caucano. Hasta 1980 la presencia guerrillera en Cundinamarca se limitaba a las acciones del Frente 4 de las FARC que actuaba en el Magdalena Medio, y se movía por las tierras cálidas del occidente boyacense y el suroccidente santandereano (Echandía, 1999, páginas 104-118). La actividad urbana de las guerrillas rurales se limitaba a tareas logísticas e ideológicas que buscaban servir al desarrollo de la lucha armada en el campo y a preparar las condiciones para una insurrección en las

²⁶ Para esta caracterización de las representaciones sociales se sigue el modelo interpretativo propuesto por Serge Moscovici (1988) y una interpretación análoga en Salazar y Jaramillo (1992). El acontecimiento más ilustrativo, quizá, de este conflicto de valores fue el Festival de Rock de Ancón (1971). Un síntoma de los malestares en la sociedad antioqueña puede leerse en el texto de 1964 “Medellín, a solas contigo” (Arango, 1974) o en los poemas de Helí Ramírez (1979).

²⁷ Este trabajo aplicó encuestas como método empírico a finales de los años sesenta. El capítulo sobre Medellín fue elaborado por David W. Coombs (páginas 80-129).

ciudades. A fines de los años setenta Bogotá fue el centro de la actividad de guerrillas urbanas que seguían el modelo tupamaro, como el Movimiento 19 de Abril (M-19) y la Autodefensa Obrera. El M-19 tenía, además, sus raíces en el área metropolitana de Cali.

La tranquilidad en el centro del país y la debilidad de los proyectos guerrilleros permitieron que la violencia urbana concitara la atención de los medios de comunicación y las autoridades. Hay mucho trecho entre el descuartizamiento de Ana Agudelo, en 1968, célebre caso conocido como “el caso Posadita”, que corresponde a la vieja época del crimen urbano, y el secuestro de Diego Echavarría Misas, en 1971, que tal vez inaugura un período en el que el crimen organizado, el ánimo de lucro y el desafío a la autoridad ya son patentes y deliberados (Jaramillo, 1996, página 552)²⁸.

En los años setenta, el delincuente individual fue desplazado por aparatos de violencia como las bandas (primero) y las pequeñas unidades guerrilleras dedicadas al asalto bancario y el secuestro (después).

Pero fue la actividad criminal de los narcotraficantes la que adquirió mayor notoriedad por sus hazañas comerciales y sus primeros crímenes escabrosos. Hasta bien entrada la década de los setenta Antioquia y el Valle del Cauca tenían una participación en el porcentaje de homicidios nacionales que era proporcional a su población, pero desde 1979 la región antioqueña empezó a destacarse como la que presentaba más casos en Colombia (Franco, 2009, página 385). En 1978 la tasa de homicidios por cien mil habitantes de Medellín (40,6) superó por primera vez la de Colombia (28,5). El número de homicidios en la ciudad se triplicó entre 1976 (271) y 1980 (828). Medellín, el centro de la industrialización y puntal de la modernización del país, entró en un período turbulento que la convirtió en la ciudad más violenta del mundo.

1.2. El “gran desorden” y el desafío armado del Cartel de Medellín: 1982-1994

En 1977 el procurador general de la Nación afirmó que Colombia estaba pasando “de las manos del Sagrado Corazón de Jesús a las manos de la mafia” (Martin, 2014, página 90). A pesar de esta situación las preocupaciones de las autoridades eran otras: un año después, el entrante gobierno de Julio César Turbay expidió el Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978 (conocido como el Estatuto de Seguridad) cuyo propósito fue facilitar la lucha del Estado contra la subversión armada y la represión contra las protestas sociales. El giro en el diagnóstico de las

²⁸ Relatos recientes de estos hechos son, respectivamente, los libros *Déjame gritar* de Jorge Mario Betancur (2013) y *El mundo de afuera* de Jorge Franco (2014). En Cali también fue notorio el paso a una criminalidad más organizada (Camacho, 2014b [1990], página 76).

autoridades parece sorprendente pero es explicable: las guerrillas revolucionarias exhibían un “nuevo carácter” y la intervención de las fuerzas militares en la formulación de las políticas de orden público se antepone a las consideraciones de las autoridades civiles (Pécaut, 2006b [1987], página 318; 2006a [1983], páginas 291-294).

Esta decisión se vio impulsada por el incremento de las acciones guerrilleras en las ciudades, principalmente del M-19 y del grupo Autodefensa Obrera, que tenían origen y vocación urbana, así como por las reorientaciones estratégicas de las viejas guerrillas de los años sesenta que habían decidido adoptar tácticas más ofensivas (FARC), insurreccionales (EPL) o que estaban en proceso de reagrupamiento (ELN). Desde principios de los años ochenta empezó a crecer el número de frentes de las guerrillas. En el norte y nordeste de Antioquia aparecieron los frentes 18 y 36 de las FARC, el EPL consolidó su presencia en Urabá con un frente rural (Jesús María Alzate) y otro suburbano (Bernardo Franco), y el ELN revitalizó su actividad en el nordeste antioqueño (José Antonio Galán) y creó el frente Carlos Alirio Buitrago en el oriente, y el Compañero Tomás en el bajo Cauca. De modo fugaz, en 1986, una fuerza conjunta del EPL y el M-19 se movió entre la orilla occidental del río Cauca, a la altura de Santa Fe de Antioquia, y los Llanos de Cuivá, en inmediaciones de Santa Rosa de Osos. En el Valle del Cauca, el M-19 era el responsable de la mayoría de actos insurgentes debido a su decisión de crear una guerrilla rural en el suroriente de ese departamento y las zonas cercanas del Cauca y Huila (Echandía, 1999, páginas 104-118).

En un primer momento, el impacto que el M-19 había causado en las guerrillas tradicionales llevó a que parte de sus integrantes buscaran una táctica militar urbana más agresiva, aunque sus dirigentes preservaron el protagonismo rural. Esta decisión de las jerarquías guerrilleras hizo que de su seno surgieran fracciones radicales que creían que el escenario de la lucha armada debían ser las ciudades y que la crisis que vivía el país tenía todos los rasgos de una situación revolucionaria (Giraldo, 2015, páginas 478, 499). La explosión de siglas de pequeños grupos de activistas armados fue aún más exuberante en Medellín que en las demás capitales colombianas. Decenas de militantes desencantados por lo que consideraban una alta traición a la revolución por parte de los grupos de izquierda más antiguos y formalizados se dedicaron a crear minúsculas facciones guerrilleras en la capital antioqueña. “En una sociedad radicalizada como la de Medellín, no era muy difícil conseguir adeptos a propuestas mesiánicas como las de estos pequeños grupos” (Medina, 2006, página 74). A contrapelo de los lemas revolucionarios y del exitoso ejemplo de la Revolución sandinista (1979), la izquierda armada colombiana se decantó por un camino lleno de cismas que, en no pocos casos, condujo a enfrentamientos armados entre agrupaciones rivales. Las acciones armadas de propaganda o financiación se hicieron muy numerosas, hasta el punto de que los comandos urbanos del EPL podían desarrollar casi un acto

diario a comienzos de la década y, según la Policía, tres cuartas partes de los 200 asaltos bancarios de 1988 se atribuían a estos grupos (Daza, 2016, páginas 62, 80). La investigadora Ana Daza identificó este proceso como el “tránsito de los proyectos políticos nacionales a las estrategias militares locales” (Daza, 2016, página 58).

A pesar de la abundancia de grupos que podrían inscribirse en el conflicto armado con presencia urbana en Medellín, fue en Cali donde la violencia política se destacó en la primera mitad de los años ochenta. Esto se explica por la fortaleza allí de grupos muy activos y temerarios como el M-19 y el Ricardo Franco, cuyas retaguardias rurales estaban a menos de 50 kilómetros del centro de la ciudad, en puntos que se volvieron célebres, como Bolo Azul o Los Robles. Ambos grupos efectuaron una operación militar en Yumbo, área metropolitana de Cali, con participación de más de 150 combatientes, en agosto de 1984 (Pécaut, 2006b [1987], página 326). En sectores como Aguablanca, La Ladera, Siloé y Terrón Colorado, el M-19 pretendió asumir funciones estatales, como la provisión de seguridad y justicia, hasta que el Gobierno nacional decidió, a principios de 1986, llevar a cabo una operación militar que tuvo un saldo calculado en su momento en “17 muertos y 40 heridos” (revista *Semana*, 6 de enero de 1986).

En Medellín las posibilidades de discernir la participación de los distintos tipos de violencia en esos años, tal y como lo hicieron Camacho y Guzmán (2014 [1990]) para Cali, es muy difícil. En los años ochenta la modalidad de violencia distintiva de las guerrillas fue el secuestro, ya que más de la mitad (34) de los secuestros cometidos en Medellín les fueron atribuidos a estas, y allí ese delito fue mucho más frecuente que en Cali²⁹. Por lo demás, estaba relativamente claro que las organizaciones violentas de lo que empezó a llamarse el Cartel de Medellín tenían mayor capacidad de daño, coordinación y objetivos unificados que la constelación de la izquierda armada.

De los estudios hechos sobre narcotráfico pueden colegirse divergencias sustanciales entre los carteles de Cali y Medellín³⁰ en cuanto a i) el tipo de relación que se estableció con las élites tradicionales, ii) la relación con los sectores pobres de la población, y iii) la estructura organizacional de los traficantes de drogas en ambas ciudades. Con respecto al primer rasgo, mientras Pablo Escobar “planteaba una resistencia abierta a las élites por sus pretensiones de reivindicación social, la jefatura del cartel de Cali optó por evitar que sus aspiraciones sociales condujeran a rupturas” (Duncan, 2015, páginas 255-256). Esta diferencia hizo que, en los años

²⁹ Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, en la década ocurrieron 66 secuestros en la ciudad y los presuntos autores que siguieron en importancia a las guerrillas fueron delincuencia común (14) y no identificado (13).

³⁰ En sentido estricto, en Medellín no existió propiamente un cartel del narcotráfico sino más bien una red. Se usa el término “Cartel de Medellín” por la extensión que ha adquirido entre los colombianos.

ochenta, en la capital de Antioquia hubiera una confrontación abierta entre los narcotraficantes, por un lado, y el Estado y la élite tradicional, por el otro, mientras en la capital del Valle del Cauca se presentó una situación de connivencia. En cuanto la relación con los sectores pobres, algunos jefes del Cartel de Medellín —como el propio Escobar y Carlos Lehder— usaron una narrativa política contra el imperialismo yanqui y la oligarquía, y de identificación con emociones y demandas de franjas empobrecidas de la población (Salazar, 2001)³¹. Respecto a su estructura, los carteles de Medellín y Cali tenían formas organizacionales distintas, ya que los narcotraficantes antioqueños estuvieron menos organizados y centralizados que sus pares caleños, por lo que en Medellín había más posibilidades de que el ejercicio de la violencia se saliera de las manos de los líderes de la organización, y que incluso hubiera confrontaciones violentas entre sus miembros, mientras que en Cali esto era menos probable (Camacho, 1992, páginas 297-298). Esto llevó a que durante la década de los ochenta la violencia asociada al narcotráfico fuera más pronunciada y visible en Medellín que en Cali.

El punto es que mientras algunos narcotraficantes antioqueños optaron por la confrontación abierta, los narcotraficantes caleños se decantaron por la cooptación del sistema político local. Fue tal el nivel de penetración de los narcotraficantes caleños en el sistema social que estos terminaron proveyendo seguridad para toda la ciudad, lo que en la práctica significó la renuncia de la élite local al control del orden público (Salazar, 2015). En Medellín los vínculos entre los narcotraficantes y los jefes políticos de todos los partidos fueron evidentes y, en algunos casos, no se limitaron a la financiación de campañas políticas³². El propio Pablo Escobar fue concejal de Envigado y se hizo elegir a la Cámara de Representantes por un directorio liberal, pero desde el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, cuando se declaró la guerra entre el Estado y la facción mafiosa de Pablo Escobar, estos vínculos fueron más difusos y vergonzantes. Sólo el Nuevo Liberalismo, como colectivo, mantuvo una postura crítica y vertical ante el fenómeno del narcotráfico, además de algunos dirigentes aislados de los partidos tradicionales³³.

³¹ Al respecto, resulta ilustrativa una carta de Pablo Escobar al periodista Jairo Calle Coneo. En ella (junio de 1991) Escobar explicó: "Mi lucha se dio por ideales ajenos a la ambición o al dinero: familia, libertad, vida, derechos de nacionalidad y de patria, clases marginadas y desprotegidas y derechos humanos (...). Me queda otra enorme satisfacción: mi dinero siempre cumplió una función social. No lo enterré en canecas o en 'caletas', lo invertí en obras sociales para la comunidad y para el pueblo" (Calle, 2011).

³² Para las relaciones de la mafia y distintos jefes de los partidos tradicionales en Antioquia, Marulanda (1990) y Salazar (2001); para las relaciones entre narcos y guerrillas, Marulanda (1990, página 33) y Villarraga y Plazas (1994, páginas 223-225).

³³ Los casos más conocidos que ilustran el nexo entre dirigentes políticos y narcotraficantes son el de Jairo Ortega Ramírez, presidente del movimiento Renovación Liberal, que impulsó a Escobar a la Cámara de Representantes (*El Tiempo*, 22 de mayo de 2005); Federico Estrada Vélez, asesinado en mayo de 1990 mientras fungía como senador (*El Mundo*, 30 de mayo de 2016); y Orlando Vásquez Velásquez, destituido por intentar armar un montaje contra el exfiscal Alfonso Valdivieso (*El Tiempo*, 18 de octubre de 1996) y detenido por sus relaciones con el cartel de Cali (*El País* de España, 4 de mayo de 1996).

Las respuestas de las sucesivas alcaldías ante los avances del crimen se caracterizaron, hasta 1990, por la creación de “cuerpos de seguridad alternos a la policía nacional” (Ruiz, 2015, página 6), y por la autorización de iniciativas cívicas de conservación de la seguridad. En 1968, mediante el Acuerdo 17, el Concejo de Medellín había creado el Departamento de Seguridad y Control (DSC) (que se reforzó en los años ochenta), un aparato conformado mediante mecanismos clientelistas, con personal carente de las mínimas calificaciones profesionales —en ciertos casos con antecedentes penales— y sin supervisión o control a sus actividades. En Medellín se conocieron denuncias y hubo debates en el Concejo Municipal sobre las acciones arbitrarias de este cuerpo y la falta de profesionalización de sus agentes³⁴. Sin duda, el máximo exponente de cómo estos organismos se convirtieron en ejecutores de una violencia extrema y orientada por intereses particulares fue el Departamento de Seguridad y Control de Envigado, que se convirtió en uno de los brazos armados del Cartel y cuyos miembros fueron condenados por crímenes que incluyeron el asesinato de casi 400 personas entre 1987 y 1991 (Ruiz, 2015, página 7)³⁵. Además de todo esto, los gobernantes de Medellín animaron a la ciudadanía a “crear grupos de autoprotección en los barrios” mediante la expedición del Decreto 358 de 1979 (Jaramillo, 1996, página 560). Desde entonces proliferaron grupos, con nombres como Amor por Medellín o Muerte a Jaladores de Carros, que lanzaban advertencias mediante panfletos y marcaban a sus víctimas con sindicaciones. En Cali también proliferaron estos grupos de “limpieza social” (Guzmán, 2012, página 357), pero allí no hay registro de presencia de organismos parapoliciales municipales en dichos grupos³⁶.

Estas iniciativas de los gobiernos locales fueron un síntoma tanto de la distancia que existía entre ellas y la Policía Nacional —un cuerpo dependiente del Gobierno central, con el cual no existían mecanismos claros de interrelación— como del juicio de que la presencia policial era deficiente, máxime con la novedosa y creciente violencia en el Valle de Aburrá³⁷. Más negativa aún era la relación entre la Policía y la comunidad, marcada por la desconfianza y el franco desprestigio debido a la corrupción de muchos agentes y a los actos de represión indiscriminada,

³⁴ En sesión del Concejo de Medellín del 26 de enero de 1981, el concejal Alberto Betancur González denunció el caso de dos agentes del DSC que de manera arbitraria detuvieron a dos personas y las mantuvieron como rehenes mientras los amenazaban con violarlos y matarlos. En sesión del 10 de noviembre de 1982, el concejal Carlos Restrepo Arbeláez criticó al DSC y pidió fortalecer la meritocracia para evitar que se colaran personas con antecedentes penales pero con un buen padrino político (Archivo Histórico de Medellín, Acta 17 de 1981 y Acta 4 de 1982 del Concejo de Medellín, Tomos 1.123 y 1.129).

³⁵ Con el Decreto 677 de 1990 se puso fin a estas organizaciones.

³⁶ Cabe señalar que entre 1988 y 2013 Cali tuvo el mayor número (466) de “homicidios por exterminio social”, mientras que Medellín ocupó el tercer lugar en esta escala (361), antecedida por Cúcuta (376) (CNMH, 2015, páginas 147-148).

³⁷ Esto se refleja en las palabras que el alcalde Álvaro Uribe pronunció en una sesión del Concejo de Medellín: “Padece la institución policial una honda crisis de legislación, número de efectivos y dotación, que anula los esfuerzos de abnegados oficiales. Baste con saber que en el Valle de Aburrá se cuenta con 1.900 entre oficiales y agentes a tiempo que la necesidad haría superar los 5.000 [...]. Teóricamente Seguridad y Control debería desaparecer. Pero, me pregunto ¿cómo hacerlo sin la seguridad de un número suficiente de efectivos de Policía? ¿Su discutible presencia jurídica acaso no advierte sobre el imperativo de una Policía municipal, o por lo menos fija y adscrita al municipio que le dé la oportunidad al alcalde de cumplir el deber de jefe del orden público?” (Archivo Histórico de Medellín, Acta 1 de 1982 del Concejo de Medellín, Tomo 1.129, página 8).

especialmente contra los jóvenes. Siniestra era la fama de organismos como el servicio de inteligencia F2 de la Policía o del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) (sin embargo, las intervenciones de estas entidades en esos años no han sido investigadas ni esclarecidas). La política nacional había predispuesto a la Policía a tratar cualquier expresión de inconformidad social como un problema de orden público y el gobierno de Turbay Ayala puso al Ejército nacional a enfrentarse con los líderes sociales, tratados como sospechosos de actividades subversivas. La amplia participación de miembros y exmiembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas en distintas agrupaciones criminales —en especial de los narcotraficantes— puso en evidencia un dislocamiento en la fuerza pública que condujo a que esta fuera un factor más de desorden y vulnerabilidad.

Entre 1982 y 1986 se produjo una crisis económica en el país cuyas expresiones fueron un enorme déficit comercial (que se septuplicó entre 1980 y 1982), el debilitamiento de la industria, una debacle en el sector financiero y el déficit del Gobierno central que llegó al 7 % del PIB en 1982 (Kalmanovitz, 1986, páginas 522-525). Esta crisis tuvo mayores repercusiones negativas en Medellín que en las otras ciudades, debido a las características de su estructura productiva (Sánchez, 2012). Por ejemplo, aunque las quiebras e intervenciones en el sector financiero tuvieron alcance nacional, uno de los grupos involucrados, el Grupo Colombia, con filiales como el Banco Nacional y la Financiera Furatena, tenía mayor penetración en Antioquia. Los problemas en la industria manufacturera fueron mucho más graves en el ramo de textiles, que estaba afincado en la región desde principios del siglo XX y que vio perder más de la mitad de los empleos (Arango, 1991, página 125). Los efectos sobre el empleo fueron drásticos: en 1984 la tasa de desempleo de Medellín (16,25 %) era muy superior a la de Bogotá (11,39 %), Cali (12,73 %), y al promedio de las siete áreas metropolitanas del país (11,12 %). La protesta social también aumentó en el país, en especial entre los trabajadores: las huelgas se hicieron más frecuentes y masivas que en la década anterior (Archila, 2003, página 202); la participación estudiantil, barrial y del activismo político de izquierda fue notoria, sobre todo en los paros nacionales convocados en 1981, 1985 y 1988, lo que produjo la respuesta represiva de la fuerza pública, en medio de una sobrevaloración del peligro comunista³⁸.

Medellín también presentaba un rasgo demográfico particular: era la ciudad del país con el mayor segmento juvenil masculino (15 a 29 años) (16,1 %), por encima de Cali (14,5 %) (DANE, 1985). Los efectos de la crisis se sintieron de manera más fuerte entre los jóvenes, grupo en el que se registraba una tasa de desempleo de 38 % en 1980, según un estudio de la Cámara de Comercio

³⁸ Véanse las denuncias del senador Iván Marulanda sobre el adoctrinamiento anticomunista en las Fuerzas Armadas en la plenaria del Senado del 23 de septiembre de 1987 (Marulanda, 1990, páginas 104-112).

(Arango, 1991, página 125), y en 1991 superaba en 4 puntos el promedio nacional (Mejía, Londoño y Granda, 1994, página 56). También empeoró la retención escolar hasta el punto de que, algunos años después de conjurada la crisis económica, en 1990, la tasa de inactividad de la ciudad (17,6 %), en particular de los hombres entre los 12 y 29 años, era la más alta entre las ciudades principales del país (DNP, 1991, página 6). Este fenómeno no afectó a todos los jóvenes por igual: el riesgo recayó principalmente en aquellos en condición de pobreza ya que “mientras las tasas de escolarización en secundaria son de 100 % en el estrato 6 y 88 % en el estrato 5, en los estratos 2 y 1 son de 53,3 % y de 38,3 %, respectivamente” (DNP, 1991, página 6). Este fue un factor que aumentó la vulnerabilidad juvenil frente a las dinámicas violentas emergentes y el éxito de los numerosos grupos armados de la ciudad. No es de extrañar, por tanto, que la inmensa mayoría de las víctimas de homicidio entre 1979 y 1984 fueran jóvenes de entre 20 y 24 años de edad, con tasas para su grupo etario que triplicaban o más los indicadores nacionales (Franco, 2009, página 383; García y otros, 2012).

Tomando como base el año 1983 (en el que hubo 869), el número de asesinatos en la ciudad se duplicó en dos años (1.749 en 1985), luego se cuadruplicó cinco años después (3.603 en 1988) y creció 8 veces en el año terrible de 1991 (6.809), cuando uno de cada cuatro de los homicidios colombianos ocurrió en la ciudad. La relación de muertes violentas entre hombres y mujeres (en serie larga hasta 2008) fue de 13 a 1 (García y otros, página 1.701). Mientras tanto la tasa de homicidios en Cali estuvo fluctuando un poco por encima de la nacional y muy distante, por debajo, de la tasa de Medellín.

El ojo de este huracán de violencia fue el aparato armado del narcotráfico, cuya actividad tuvo epicentro en Medellín pero se irradió a gran parte del país y, en casos puntuales, a Europa y toda América. En este proceso podemos encontrar algunos hitos: el acuerdo de los jefes del narcotráfico para reaccionar al secuestro de Marta Nieves Ochoa (13 de noviembre de 1981) que condujo a la conformación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS); la destrucción de la estructura político-militar del M-19 en Antioquia con un saldo estimado de “400 muertos entre militantes, amigos y familiares de los guerrilleros y veinte militantes retenidos” (Salazar, 2001, página 105); y la guerra abierta contra el Estado por parte del Cartel de Medellín a raíz del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla (30 de abril de 1984), ordenada por Escobar. Esta última confrontación llevó a que Medellín padeciera los efectos de “unos 60 carros-bomba y otros 140 atentados con explosivos” entre 1988 y 1993 (Martín, 2014, página 191). También cabe destacar la ola de asesinatos selectivos del grupo armado del narcotraficante Fidel Castaño que buscó el exterminio del Comité de Derechos Humanos Antioquia, entre octubre de

1987 y agosto de 1989 (Martin, 2014, páginas 183-185)³⁹. En último lugar estaría la contienda entre los carteles de Cali y Medellín, iniciada en 1988, que condujo a muchos asesinatos y atentados con explosivos a las residencias de los capos y a sus negocios (Salazar, 2001, páginas 215-222).



“Terror en la plaza”. Fuente: El Colombiano, 17 de febrero de 1991, página 10A.

Más allá de sus propios aparatos armados, los narcotraficantes penetraron y se sirvieron de diversas redes sociales para hacer partícipes a ciudadanos comunes y corrientes de los riesgos y beneficios de la exportación de cocaína (a través de un mecanismo conocido como “la apuntada”) así como para usar la violencia subcontratada, que hizo que la figura distintiva de la violencia de este período fuera el sicario (Salazar, 1990). De este modo se propagaron aprendizajes que difundieron y escalaron los recursos de la ilegalidad para el lucro y la venganza. El sicario estuvo, así, a disposición de la sociedad entera para la solución de controversias, el cierre de negocios y el forcejeo en los conflictos sociales. El ambiente general de desorden y la prontitud y ubiquidad del recurso a la violencia permitieron que medraran los oportunistas y pulularan los crímenes de sangre.

Los conflictos entre los distintos aparatos armados de Medellín no fueron permanentes ni unidireccionales. Los ataques de los narcotraficantes al M-19 se limitaron al episodio del secuestro de la hermana del clan Ochoa, pero fueron de estrecha colaboración antes y después; los jefes de Cali y Medellín fueron socios durante mucho tiempo; Escobar mantuvo

³⁹ La novela *El olvido que seremos* (Abad, 2006) se ocupa, en parte, de este hecho.

buenas relaciones con la izquierda armada pero Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño tuvieron una disputa sangrienta contra las FARC y el Partido Comunista. Varias de las pequeñas guerrillas urbanas independientes se vincularon al negocio de la coca o trataron de extorsionar a los traficantes, y enturbiaron más las aguas cuando intervinieron, esgrimiendo motivos de solidaridad, en las numerosas huelgas de la época. Al mismo tiempo muchos, tal vez demasiados, miembros de la Policía se involucraron con estos bandos. Miembros activos de las Fuerzas Armadas fueron acusados por el procurador general de la Nación de participar en las actividades criminales del MAS (Jiménez, 1986, páginas 112-120). Algunos altos funcionarios del Estado, todavía en 1988, justificaban la existencia de grupos de autodefensa⁴⁰. La “violencia en concesión”⁴¹ se usó para sacar del camino a dirigentes sindicales o comunitarios y para atacar a los militantes de las organizaciones políticas vinculadas con las guerrillas en tregua con el gobierno de Belisario Betancur (como la Unión Patriótica y el Frente Popular) y de otras como A Luchar. Pero las víctimas no eran sólo de abajo o de la izquierda, para usar esta topología. Hubo asesinatos selectivos, atentados y secuestros contra empresarios, administradores, instalaciones productivas y oficiales, funcionarios públicos —en particular jueces— y dirigentes de los

partidos tradicionales⁴². Los periodistas, en general, y todo lo que se relacionara con el diario *El Espectador* en particular, incluyendo un busto de su director en el Parque de Bolívar, fueron blancos de la violencia. En medio de este ambiente hubo muchos extravíos de los objetivos de los ejecutores de violencia: por ejemplo, la masacre con tiros de gracia en la discoteca Oporto (23 de junio de 1990) sólo para que los jóvenes de clase alta sufrieran⁴³, o la sucesión de ataques de la izquierda armada contra el Centro Colombo Americano, un ente educativo y cultural no gubernamental (Martin, 2014, páginas 295-296).

Hacia fines de los años ochenta el recrudecimiento de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado colombiano, las colaboraciones entre narcos, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la fuerza pública para enfrentarse al capo, el fortalecimiento del proyecto

⁴⁰ Véase el cuestionamiento del senador Iván Marulanda, en 1987, a los ministros de Defensa, Rafael Samudio, y de Justicia, José Manuel Arias Carrizosa (Marulanda, 1990, páginas 95-136).

⁴¹ El concepto de violencia política en concesión es de Vincenzo Ruggiero (2009, página 2), quien la identifica como la violencia institucional “constituida por las operaciones de coacción que son ‘contratadas’ a los grupos criminales organizados, en beneficio de quién actúa institucionalmente”.

⁴² Muchos ataques contra integrantes del sector productivo pasaron inadvertidos debido a su desconfianza en las autoridades (CNMH, empresario, entrevista, Medellín, 2015); el secuestro fue la principal forma de victimización cometida contra ellos por narcotraficantes y guerrilleros (Lopera, 2015, página 21). Para la victimización de los miembros del sector judicial véase GMH (2010, páginas 309-352).

⁴³ No hay claridad respecto a los responsables de esta masacre. Ha sido atribuida a sicarios de Pablo Escobar, al Departamento de Seguridad y Control de Envigado (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1993) y a integrantes de la Policía (CNMH, empresario, entrevista, Medellín, 2015).

paramilitar en el Magdalena Medio y la ruptura de la tregua de las FARC dieron paso a una nueva situación.

La decisión del Gobierno colombiano de asumir el desafío de la organización de Pablo Escobar condujo a una delimitación más clara de las relaciones de enemistad que pusieron frente a frente, por primera vez desde que el narcotráfico se hizo notorio, a la Policía Nacional y a las bandas narcotraficantes. Esto condujo a un choque directo que hizo que entre 1990 y 1993 los policías de Medellín fueran víctimas de ataques letales en un porcentaje mayor (13,5 % de las muertes totales en el país) al registrado en Cali (5,1 %). Algunos estimativos indican 153 agentes muertos en Medellín, más 112 en Antioquia, entre 1990 y 1993 (Ruiz, 2015, página 19), y 690 sólo en la ciudad en todos los años ochenta (Martin, 2014, página 308)⁴⁴.



"Mortal ataque contra el Cuerpo Elite". Fuente: El Colombiano, 13 de abril de 1990, página 14B.

Estos años marcaron el comienzo de la "guerra sucia", es decir, la ocurrencia frecuente de asesinatos selectivos contra líderes sociales y políticos de distintas adscripciones. Fueron los tiempos de irrupción de los atentados contra dirigentes sindicales (Colorado, 2015, página 108) y contra personas adscritas a la Universidad de Antioquia (Pérez, 2015, página 25). Funcionarios públicos, especialmente judiciales, líderes políticos y sociales (sobre todo sindicalistas) fueron víctimas de atentados personales atribuibles a narcotraficantes, paramilitares, guerrillas y miembros de la fuerza pública. Pero, sin duda, el más emblemático de los casos de la "guerra sucia" fue la masacre de Segovia, el 11 de noviembre de 1988, en la que murieron 43 personas víctimas de una retaliación indiscriminada por parte del jefe político liberal César Pérez García debido a la derrota electoral de su facción por parte de la Unión Patriótica (GMH, 2010a, páginas 151-153). Este caso muestra cómo políticos de la periferia antioqueña afincados en Medellín y

⁴⁴ Entre 1997 y 2011 se presentaron en Medellín 176 asesinatos de policía más 1.786 heridos en acciones relacionadas con la prestación del servicio (Policía Metropolitana, 2016, página 43).

cobijados por un partido como el Liberal (que en esos años detentaba la Presidencia) respondieron de manera violenta a un desafío político en clara asociación con un grupo paramilitar⁴⁵. Pérez García, todavía a nombre del Partido Liberal, pudo seguir actuando en política electoral durante más de 20 años hasta su captura en 2010 y posterior condena en 2013.

En el segundo lustro de los años ochenta se presentó una mutación muy importante de la presencia guerrillera en la ciudad. Desde la década de los setenta las guerrillas usaban la ciudad como centro de apoyo logístico, sanitario, lugar de proselitismo político y fuente incipiente de recursos económicos (PNUD, 2003, páginas 60-64). El M-19, con su vocación urbana y su intención de aprovechar la tregua con el gobierno de Betancur, promovió “campamentos de paz” que, según numerosos testimonios, sirvieron como puntos de adiestramiento militar a jóvenes de barrios populares. Muy activos en los asentamientos subnormales de Cali, sus integrantes tuvieron presencia en barrios de Medellín como Caicedo, Villatina, Popular y Castilla. Las guerrillas tradicionales, creadas en los años sesenta, promovieron comandos urbanos en el afán de mejorar su capacidad de acción militar y planearon la creación de milicias que, según su acervo teórico, debían apoyar la eventual insurrección. Militantes y simpatizantes de estas guerrillas, así como de los previos grupos autónomos, se radicalizaron y dieron un paso crucial para la ciudad: la conformación de estructuras armadas de carácter territorial (barrial).

Estos grupos milicianos recogieron el acumulado de agravios de los jóvenes, las enseñanzas de los choques con la Policía, la anomia propiciada por la expansión del narcotráfico y la equívoca y débil acción del Estado en la ciudad. Sus principales características fueron: i) una vaga afinidad ideológica con los proyectos insurgentes y un discurso de reivindicación social, ii) autonomía en la orientación de sus actividades y iii) dedicación fundamental a acciones de vigilancia barrial e intervención en la gestión comunitaria (siempre con alta discriminación por razones “morales”), lo que muchas veces implicó asesinatos y desplazamientos forzados⁴⁶. Su principal influencia estuvo en las comunas 1, 2, 3, 4 y 6, en las zonas nororiental y noroccidental, las cuales, a principios de los años noventa, albergaban 583.000 habitantes, es decir, el 34 % de la población de la ciudad. El 26 de mayo de 1994 se firmó el “Acuerdo final para la paz y la convivencia, Gobierno nacional, departamental y municipal y milicias de Medellín” que permitió la reincorporación de 843 milicianos (Giraldo y Mesa, 2013, páginas 221-

⁴⁵ “Según el paramilitar, Henry de Jesús Pérez –entonces comandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM)– el político liberal lo había contactado a través de Fidel Castaño y le había pedido que perpetrara la masacre para recuperar el poder político que había perdido en la región por el éxito electoral de la Unión Patriótica” (GMH, 2010a, página 63).

⁴⁶ El trabajo pionero sobre el armamento juvenil es *De la barra a la banda* (Bedoya y Jaramillo, 1991). El trabajo etnográfico de referencia es de Gilberto Medina (2006): *Una historia de las milicias de Medellín*. Esta síntesis se apoya en Daza (2016).

223), el cual, según la Consejería de Paz, incluía al 85 % del total de la ciudad (Villarraga, 2009, página 399).

1.3. Una calma frágil y corta

La coyuntura que se desató en 1991 alrededor de las negociaciones de paz con el M-19 y el EPL, el proceso constituyente y la entrega concertada de Pablo Escobar a las autoridades, ayudaron a mitigar la situación en la ciudad. El homicidio empezó a descender desde mediados del año y no dejó de hacerlo hasta 1998, el terrorismo de los narcos desapareció con el abatimiento de su capo, la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista desactivó un núcleo miliciano en Moravia y, en 1993, se inició un acercamiento que condujo al acuerdo con las milicias populares en el primer semestre del año siguiente. Así se desmontaban los principales generadores de violencia en la ciudad. La renovación de las instituciones públicas, con nueva Constitución Política, la implementación de la elección popular de gobernantes locales y regionales y la gestión de la Consejería Presidencial para Medellín alentaron la esperanza de que la ciudad dejaría atrás casi 15 años de conmociones. La inauguración del metro, en noviembre de 1995, afianzó un sentimiento de orgullo que parecía sepultado.

La sociedad estaba cansada. El Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993 mostró que, por primera vez desde su fundación, la ciudad había pasado a ser expulsora de gente y que Cali la desplazaba, única ocasión durante el siglo XX, del segundo lugar del país en población (DANE, 1993). Gran parte de la cohorte de jóvenes varones había desaparecido, lo que dio lugar a la anomalía demográfica de que el 54 % (876.789) fueran mujeres y sólo el 46 % (753.220) hombres, mientras que los números para Colombia eran respectivamente de 51 % (16.813.301) y 49 % (16.296.539) (Bernal, 2005, página 27). La diferencia con Cali, cuyas cifras eran de 53 % de mujeres (878.563) y 47 % de hombres (787.905), era pequeña pero notoria (DANE, 1993). La situación social de los medellinenses era, obviamente, mucho peor que antes de la crisis y que en las demás áreas metropolitanas: mientras en 1991 el desempleo urbano del país cayó 0,1 %, en Medellín aumentó 1,6 %, lo que equivalía a 54.000 nuevos desempleados; la tasa neta de escolarización era del 66,6 %, mientras en Cali era 68,11 %; el 17,6 % de los hombres entre 12 y 29 años (64.000) ni estudiaban, ni trabajaban, ni buscaban trabajo, mientras el promedio de las 4 principales ciudades era 12,2 %; en desigualdad por ingresos (0,516) también las superaba (0,467); y se estimaba un déficit evidente de espacios públicos (DNP, 1991, páginas 5-7)⁴⁷.

⁴⁷ Este diagnóstico –que se usó para justificar el Programa Presidencial para Medellín– reconocía que Medellín estaba en mejores condiciones que las demás áreas metropolitanas en cuanto a salud y necesidades básicas, e igual en términos de pobreza.

La espiral violenta y la crisis económica no lo explican todo. Aunque después de 1982 los alcaldes se estabilizaron en períodos de dos años, el municipio careció de recursos suficientes para atender los problemas sociales debido, entre otras cosas, a su propia crisis de endeudamiento; los pocos recursos disponibles (que representaron hasta 1994 cerca del 20 % del presupuesto) se dedicaron a vías. Ni las reformas legislativas a favor de la descentralización adoptadas a mediados de los años ochenta ni las que se hicieron en desarrollo de la Constitución de 1991 “trajeron mayores transformaciones en las capacidades del Estado local hasta la década del dos mil” (Leyva y Aristizábal, 2016, página 17). A comienzos de la década del noventa era evidente que Medellín y sus autoridades estaban desbordados no sólo por la inseguridad sino también por los problemas sociales.

Los escandalosos indicadores de violencia exigían nuevas medidas en un contexto en el cual —según palabras del consejero presidencial— “no tenemos un sistema de policía y de justicia, ni siquiera en el sentido más primitivo del término” (Melo, 1994, página 7)⁴⁸. Esta precariedad era nacional pero, además, antes del año 2002 Medellín nunca tuvo más policías por habitante que Cali (Ruiz, 2015, página 13) a pesar de que —según cualquier medición— la situación era al menos el doble de grave. En 1992, en plena persecución de Escobar, la tasa de policías de Medellín era de 15 por cada diez mil habitantes, la de Cali 28 y la de Bogotá 24. Entre las principales ciudades, Medellín sólo superaba a Barranquilla y Cúcuta. Antioquia vivía una situación aun peor respecto al Valle del Cauca: 14 frente a 25 (Llorente, 1999, páginas 472-473).

Como se dijo, los homicidios empezaron a descender en Medellín pero en 1996 todavía había más de 4.000 y la tasa rebasaba los 200 por cada cien mil habitantes, cifra que ni antes ni después tuvo ninguna ciudad. En la capital vallecaucana, mientras tanto, la situación empeoró en los años noventa, cuando se alcanzó un pico de 120, debido a la pérdida de control de los narcotraficantes del Cartel de Cali sobre la ciudad: “No es coincidencia que 1994, el año en el que su autoridad sobre Cali colapsara a la vista de todos, sea también el de mayor violencia en la historia de la ciudad” (Salazar, 2015, página 18). La calma antioqueña era, entonces, relativa pero descansaba en dos hechos significativos: la desarticulación del aparato criminal de Pablo Escobar y la movilización gubernamental y ciudadana para enderezar las cosas.

Sin embargo, el legado de dos décadas de ascenso y poderío del narcotráfico en Antioquia habría de sentirse intensamente en varios aspectos después de la muerte del capo. Las

⁴⁸ Este texto corresponde al discurso con el cual el consejero Jorge Orlando Melo se despidió de su cargo en el IV Seminario Alternativas de futuro para Medellín, el 14 de septiembre de 1994.

expresiones —que la revista *Semana* calificó de “histéricas” (2 de enero de 1994)— que se presenciaron en el funeral del capo en Jardines Montesacro eran una muestra de la profunda influencia del Cartel en la ciudad. En el país era palmario un amplio acuerdo social acerca de que el recurso a la violencia era siempre probable y justificado dependiendo del valor de los objetivos buscados. Los narcotraficantes pusieron a prueba a la sociedad no sólo frente a la violencia extrema, masiva y muchas veces gratuita, sino también ante la posibilidad de obtener admiración, y constantemente recibieron señales de condescendencia y aprobación entre amplios sectores de la sociedad. Una década después de la muerte de Escobar, la justificación de la violencia extrema en el Valle de Aburrá todavía estaba en un rango entre el 8 % y el 22 % de la población, y prevalecía entre los jóvenes y los hombres (Duque, Toro y Montoya, 2010, página 70).

En una sociedad conocida por ser emprendedora, con grandes sectores de la población atrapados entre el desempleo y la atracción del consumo masivo, y con desconfianza en el logro por vías legales, los narcotraficantes ofrecieron un modelo de vida y un camino rápido de ascenso social para hacerlo posible y redefinieron “los valores, las normas y los hábitos de la población” (Duncan, 2015, página 130). En su momento, este cambio social se describió como una subcultura que “se proyectó sobre diversos sectores sociales, dejando una huella profunda en el alma de la ciudad” (Salazar y Jaramillo, 1992, página 110). Los narcotraficantes propiciaron una apropiación y reorientación de sentido, especialmente en dos campos simbólicos de peso en la sociedad antioqueña: la religiosidad y el deporte, de manera que santos, vírgenes, lugares de oración, éxitos deportivos y estrellas de fútbol terminaron enlazando su reputación con la de los criminales. No menos importante fue el ataque que el narcotráfico representó a la ilusión educativa, esto es, a la idea de que la educación es la base del progreso social y del bienestar de los individuos (Silva, 2010, páginas 307-308). Otro efecto notable en el imaginario social fue la alteración de la noción de tiempo entre los jóvenes que se concentró en el presente y desarrolló una suerte de nihilismo que un cineasta rotuló, con gran fortuna, como “no futuro”⁴⁹.

Cuando el narcotráfico emergió en la sociedad colombiana el repertorio de violencias disponibles era macabro. A los narcotraficantes, a lo sumo, puede atribuirse su capacidad para industrializarlo y ampliar su alcance. Los testimonios disponibles cuentan sobre escuelas de sicarios, campos de entrenamiento e intercambios de técnicas que fluyeron en doble vía con la delincuencia común, las guerrillas e incluso con mercenarios extranjeros. Los agentes narcos,

⁴⁹ La referencia, ya clásica, es la película de Víctor Gaviria *Rodrigo D. No futuro* (1991) y su banda sonora, en especial las canciones “Sin reacción” y “No te desanimes, mátate” de Mutantex. El tema lo había planteado antes el sociólogo Rodrigo Parra Sandoval (*Ausencia de futuro: la juventud colombiana*, 1985).

guerrilleros y paramilitares aprovecharon la mano de obra disponible para construir un bagaje criminal que permitió la reproducción de la violencia bajo ropajes disímiles (Rubio, 1999, página 79; Beltrán, 2014, página 63). Esto explica, además, que después de la desaparición de grandes generadores de violencia, como el Cartel, las milicias o los paramilitares, persistan formas de violencia que se asocian con el conflicto armado y se mantuvieran niveles altos de homicidio en ciertas zonas. No es raro que entre las víctimas esta continuidad se describa indiferentemente bajo nombres como “los muchachos”, “combos” y, más recientemente, como “paras”⁵⁰.

En este contexto se dieron dos medidas del Gobierno nacional que recuperaban las viejas ideas de propiciar los servicios de seguridad privados y locales. La primera provino del Decreto 356 de 1994, firmado por César Gaviria en las postrimerías de su gobierno, que autorizó la creación de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), activadas en 1995 por una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Gutiérrez, 2012, página 118). Mauricio Romero (2003) identificó 414 Convivir operativas en el país en 1997, 65 de ellas en Antioquia. Según datos provistos por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Antioquia, en el departamento llegaron a operar 82 Convivir, 31 de ellas en el Valle de Aburrá y 26 en Medellín. La información disponible sobre las Convivir en la ciudad es poca pero es posible suponer que, al igual que ocurrió en otros lugares del país, estas se fueron disolviendo cuando en la Sentencia C-572 de 1997 la Corte Constitucional señaló que los integrantes de estos organismos no podían portar armas de uso privativo de la fuerza pública. La segunda surgió de la conversión de las milicias populares en la Cooperativa de Seguridad y Servicio a la Comunidad (Coosercom), que implicó un inédito proceso de “reintegración sin desmovilización” ya que sus 306 integrantes operativos podían portar revólveres calibre 38 y escopetas calibre 12, con el fin de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada a la comunidad. En virtud de esto, Medellín tuvo entre junio de 1994 y noviembre de 1996 una fuerza parapolicial legal que llegó a representar hasta el 25 % del tamaño de la Policía de la ciudad (Giraldo y Mesa, 2013, página 235). Este modelo de delegación y privatización de la seguridad fue un fracaso. La desaparición de las milicias no fue determinante en la tendencia descendente de los homicidios que se presentó en este período. La cooperativa creada activó nuevos conflictos con las comunidades y la fuerza pública, y ni ella ni las autoridades pudieron gestionar las divergencias internas y la disciplina de los reinsertados, lo que llevó a que al

⁵⁰ Esta forma de nombrar se basa en la regularidad de los mecanismos de violencia y, a veces, en la continuidad en la identidad de los perpetradores, lo cual no significa que sean los mismos desde una perspectiva sociológica. María Teresa Uribe describió este como un fenómeno de “flujos y porosidades” (1997, páginas 133-134). Ejemplos ilustres son Hernán Darío Velásquez, alias *El Paísa*, y Diego Fernando Murillo, alias *Don Berna*. Velásquez fue sicario del Cartel de Medellín y fue capturado en 1989. Estando en prisión se contactó con las FARC y, al quedar libre, ingresó al Bloque Oriental. Posteriormente se convirtió en el jefe de la columna móvil Teófilo Forero (*Semana*, 19 de agosto de 2014). Murillo, por su parte, estuvo vinculado al EPL y después pasó a trabajar para la familia Galeano, antigua aliada de Pablo Escobar. Años después adquirió notoriedad como comandante del Bloque Cacique Nutibara de las AUC (*Verdad Abierta*, 7 de enero de 2009).

momento de la liquidación de Coosercom (1996) hubieran sido asesinados 187 exmilicianos, “equivalentes al 22,2 % del total, la cifra más alta para cualquier proceso de reinserción en Colombia” (Giraldo y Mesa, 2013, páginas 225-227).

Cuando el consejero presidencial Jorge Orlando Melo dejó su cargo, y sólo habían transcurrido seis meses desde la firma del acuerdo con las milicias populares, advirtió sobre el peligro que representaría un eventual fracaso de este. Consciente del saldo que dejaban dos décadas de aprendizaje criminal, dijo: “ninguna sociedad debe tener asesinos, y cuando tiene unas cuantas decenas es preocupante, y si tiene unos centenares algo muy grave tiene que estar ocurriendo: pero en Medellín, repito, son unos cuantos miles, y unos cuantos miles los secuestradores y los que hacen uso de la violencia” (Melo, 1994, página 8). El respiro que se percibía en la ciudad en los pocos años posteriores a la muerte de Escobar, con la intervención de la Consejería Presidencial y la reintegración de los milicianos, no fue más que eso, y al poco tiempo dio paso a otra fase violenta, pero diferente, de la vida de la ciudad y la biografía de sus gentes. Un anuncio de ella —como lo hizo notar Martín (2014, página 324)— fue la bomba en el Parque San Antonio que explotó el 10 de junio de 1995, mató 22 personas y destruyó *El Pájaro* de Fernando Botero.

1.4. La disputa por el orden y la urbanización del conflicto armado: 1995-2005

En la primera mitad de los años noventa se llegó a la resolución de los conflictos entre el Gobierno y cinco organizaciones guerrilleras, de las cuales cuatro de ellas (M-19, EPL, PRT y CRS) tenían una incidencia relativamente importante en la ciudad, junto con el Cartel de Medellín y las milicias populares. Sin embargo, dos actores armados con vocación nacional se movían en la sombra preparándose para lo que sería la fase más aguda de la guerra colombiana entre 1996 y 2005 (CNMH, 2013, página 156): guerrillas y paramilitares.

En 1993, después de las fallidas negociaciones entre el Gobierno y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) en Tlaxcala (México) y Caracas (Venezuela), las FARC realizaron su VIII Conferencia, la cual sería fundamental para el desarrollo de la guerra en el país. En consonancia con la decisión de privilegiar definitivamente lo militar por encima de lo político, se propusieron construir un ejército insurgente capaz de enfrentar a las fuerzas militares y derrotarlas en el campo de combate. También reafirmaron el objetivo de urbanizar el conflicto armado trazado en la VII Conferencia celebrada en 1982 (Pizarro, 2006, páginas 188-189). Su punto de partida fue reconocer el fracaso de las experiencias milicianas previas por lo que determinaron que sus frentes debían aproximarse a las ciudades y bloquear sus vías de acceso. En Antioquia, las

FARC crearon los frentes 9 y 47 en el oriente, y 34 en el occidente. Pero sin duda sus esfuerzos se concentraron en Cundinamarca. Algunos bloques crearon frentes urbanos: el Oriental creó el Frente Antonio Nariño para Bogotá, el Occidental creó el Frente Manuel Cepeda para Cali, y al Bloque José María Córdoba se le encargó la tarea de llevar a las FARC a Medellín (CNMH, 2014, página 181). De otro lado, en Antioquia el ELN creó el Frente Che Guevara en el suroeste, y el Frente Bernardo López y la Compañía Anorí en el nordeste; también reforzó su actividad en Medellín y algo en Cali.

Al despuntar la década de los noventa se conoció la existencia del grupo Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), conformado por narcotraficantes enemigos y antiguos socios del capo, que forjó una alianza implícita con el Cartel de Cali, la DEA y la Policía (*El Espectador*, 28 de octubre de 2013)⁵¹. Durante esos mismos años el narcotraficante Fidel Castaño había emergido como uno de los triunfadores de la guerra contra Escobar (revista *Semana*, 27 de junio de 1994). Después de su muerte, su vocación contrainsurgente fue continuada por sus hermanos, Vicente y Carlos, quienes se propusieron forjar un proyecto armado nacional y en 1994 crearon las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) (Romero, 2003, página 194). El poderío de las ACCU creció y en 1997 se transformaron en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una federación que pretendió agrupar bajo un mismo paraguas a diferentes grupos antisubversivos (Duncan, 2006, páginas 294-332). En el momento de su creación, las AUC señalaron que uno de sus principios era “no abandonar la lucha mientras que la guerrilla permanezca en pie de guerra” (*El Tiempo*, 21 de abril de 1997). En consonancia con lo anterior, las AUC se plantearon el objetivo de responder a la urbanización de la guerra desarrollada por la guerrilla.

En los meses transcurridos entre las masacres de “El Aracatazo” y “Bajo del Oso”, cometidas respectivamente por paramilitares y FARC en Urabá (1995), y la masacre paramilitar en El Aro (Ituango), en octubre de 1997, el país se sumergió en una profunda crisis institucional originada en la denuncia de que la campaña del presidente de la República, Ernesto Samper, había sido financiada por el Cartel de Cali. Una profunda división se expresó en los partidos, gremios, grupos económicos y sindicatos; así como en las Fuerzas Armadas. Así que la crisis política no se circunscribió ni a los canales institucionales ni a la capital de la República, y afectó a agentes sociales en todo el país. A la precaria institucionalidad de Medellín se sumó la inestabilidad en el Gobierno central: la Consejería Presidencial desapareció, el acuerdo de paz con las milicias se hizo a la par de la segunda vuelta electoral presidencial, la Consejería para la Paz entró en empalme y se reorientó a buscar un acuerdo con el ELN, la Policía Nacional —de la que

⁵¹ Las relaciones de la Policía con los Pepes fueron de dominio público. Esta alianza afianzó unas relaciones que continuaron oficiales de la Policía con narcotraficantes y paramilitares y que han sido condenados en fechas recientes, como el general Mauricio Santoyo.

desconfiaba el 70 % de los ciudadanos— se concentró en una serie de reformas internas entre 1995 y 1997 (Llorente, 1997, páginas 419-430). Medellín, una ciudad que hacía esfuerzos por ordenarse, se encontró inmersa en un país que empezaba a perderse en un laberinto.

Ante la persistencia de decenas de pequeños grupos armados que empezaron a distinguirse como “combos” y “bandas”, la administración municipal —con el visto bueno del Gobierno central— promovió pactos “de no agresión” que procuraban atenuar los conflictos entre ellos o con la fuerza pública sin que se les exigiera su desarme. Estos pactos implicaban un reconocimiento tácito de estos grupos por parte de las autoridades y, con frecuencia, la transferencia de dineros públicos a actores ilegales. Para 1999 en Medellín “se habían establecido procesos de mediación y pactos que comprometían a cerca de 160 grupos armados (bandas, combos y milicias) a los cuales estaban articuladas aproximadamente 3.000 personas en 86 sectores de la ciudad” (Vélez, 2001, página 69). La tendencia hacia la privatización de la seguridad era evidente. En esos años, las autoridades nacionales y locales renunciaron a buscar imponer al Estado como único detentador de la violencia legítima. Se aceptó que en la ciudad había una “falla básica de seguridad” y se optó por recurrir a una alternativa pactista para enfrentarla. En otras palabras, el mecanismo para enfrentar el problema de la violencia fue la delegación negociada de la función de provisión de la seguridad en grupos armados. Esta alternativa pactista, bien vista en su momento por amplios sectores de la sociedad, terminó siendo contraproducente. Funcionaba, a lo sumo, como una solución a corto plazo; pero a mediano y largo plazo contribuyó a la permanencia de numerosos grupos armados en la ciudad, pues generó incentivos para competir en el mercado de la provisión de seguridad como instrumento para establecer control social y territorial con la aquiescencia del Gobierno (Gutiérrez y Jaramillo, 2004, página 19). Se trató de un caso paradigmático de aquello que María Teresa Uribe llamó “la negociación del desorden” (1997a, página 171). A inicios del siglo XXI, se calculaba que en Medellín existían unas 650 bandas (*El Mundo*, 26 de noviembre de 2002).

Entre los rescoldos de las desmovilizaciones y el caos de los grupos armados barriales y las bandas, era posible constatar la existencia de dos organizaciones territoriales con marcado acento político, como el ELN y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). El ELN logró conservar, además de su estructura político-militar tradicional, su proyecto miliciano en algunos barrios de la comuna 13 y fortalecerlo a lo largo de la década de los noventa (Daza, 2016, página 137). El surgimiento de los CAP data de los años 1993 y 1994, en coincidencia con el agotamiento de las milicias populares, y se ubica también en la comuna 13 (Daza, 2016, páginas 137-138). Respecto a las FARC, su proyecto miliciano nacional estaba bastante rezagado en 1997 (CNMH, 2014, página 203) y, al parecer, más aún en Medellín. Los éxitos estratégicos de las FARC consistieron en crear y acercar frentes rurales a las grandes ciudades: en los municipios de las estribaciones

de la cordillera Central, cercanos a Cali, y antes dominados por el M-19; en Cundinamarca, donde se concentraba su llamado “centro de despliegue” hacia Bogotá, llegaron a tener 17 frentes (CNMH, 2014, página 194); y, buscando el Valle de Aburrá, los frentes 9 en el altiplano del oriente y 34 en la cuenca del río Cauca, al occidente.

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se encontraron en un principio con las mismas dificultades que las FARC. Con Medellín como meta estratégica, crearon el Bloque Metro bajo la comandancia de un exoficial del Ejército, Carlos Mauricio García, y montaron sus primeras estructuras en municipios del oriente y el nordeste, cercanos al Valle de Aburrá, pero la penetración en el área metropolitana no mostró buenos resultados (Martin, 2014, páginas 383-384). En ese preciso momento el proceso de expansión paramilitar estaba entrando en la encrucijada de pasar del uso de los recursos del narcotráfico a vincular a jefes y estructuras de narcos puros dentro de la federación, lo que terminó por generar fracturas y guerras internas (Duncan, 2006, páginas 322-324). Una de las más sangrientas se desató en Medellín entre el Bloque Metro y la llamada Oficina de Envigado, que había quedado bajo la dirección de Diego Murillo (alias *Don Berna*), fundador de los Pepes, y usufructuario de los restos del aparato armado de Escobar⁵². La decidida narcotización de las AUC se reflejó en esta disputa y en la forma personal en que García asumió la denuncia sistemática contra Murillo y su organización (Palou y Llorente, 2009, página 10). El éxito de Murillo consistió en apoyarse en los recursos violentos y económicos del narcotráfico e imponer su hegemonía sobre multitud de bandas armadas, proceso que culminó cuando derrotó a su principal opositora en la ciudad (La Terraza) en 2000. De esa manera se conformó el que luego sería conocido como Bloque Cacique Nutibara (BCN), una red que les daba sentido a los comandos del narcotráfico, los descendientes de las milicias, las bandas de la delincuencia común y el anterior proyecto paramilitar (Alonso, Giraldo y Sierra, 2007).

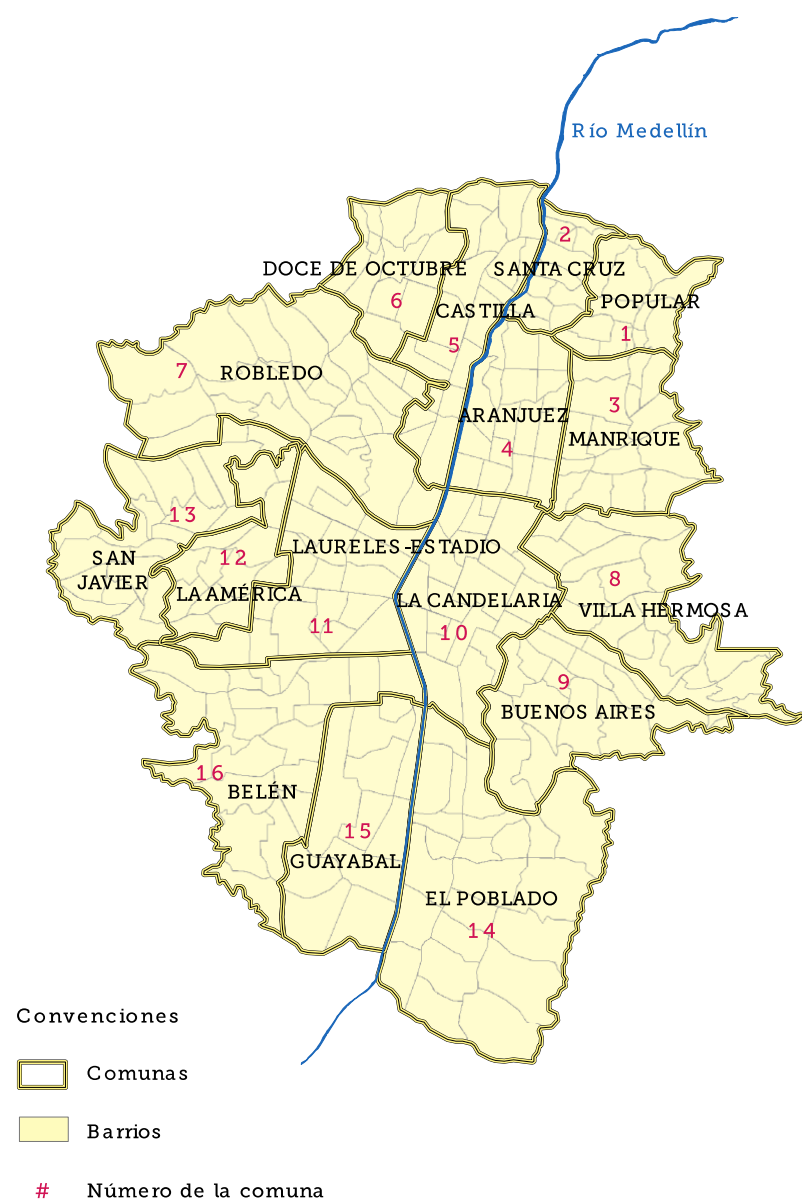
A fines de la década de los noventa los choques armados no se limitaron a las disputas sectoriales entre grupos de narcotraficantes o a la definición de la supremacía paramilitar en la ciudad. Las disputas por la regulación entre grupos armados de fuerte arraigo barrial estuvieron al orden del día. Confrontaciones violentas entre el ELN y los CAP, y entre estos y otros grupos criminales (como Los Cucas) se dieron en la comuna 13 (Daza, 2016, páginas 138-142). En 1999 las FARC pusieron un carro bomba contra las instalaciones del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) en Medellín, en un atentado que “produjo la muerte de nueve personas: dos funcionarios de la Fiscalía, uno del DAS, dos del Ejército y cuatro peatones” (*El Tiempo*, 17

⁵² El documental *La Sierra* (Margarita Martínez y Scott Dalton, 2005) es un testimonio vívido de esta guerra. El rock local siempre ha sido un cronista atento de los dramas de la ciudad, en este caso son muestras los trabajos de Juanes, *Fíjate bien* (2000), y Frankie ha muerto, *Medellín p.m... La conflagración* (2005).

de octubre de 2000). Para este momento, sin embargo, era claro que no se trataría de una guerra entre dos bandos, pues el paramilitarismo ya había llegado a la ciudad. Este conflicto, tanto por la presencia de grupos armados como por los reportes de homicidio, se concentró en 5 comunas: Buenos Aires, Doce de Octubre, Robledo, San Javier y Villa Hermosa (Giraldo, 2008, página 102) (ver mapa 2: distribución de Medellín por barrios y comunas). El secuestro extorsivo aumentó abruptamente en los años noventa en todo el país —más aún a finales y continuó a comienzos del nuevo siglo— y siguió siendo una de las formas operativas más frecuentes de la guerrilla, con números absolutos y relativos mayores que los de Cali (aunque esta ciudad también padeció mucho).

Mapa 2.

Medellín por barrios y comunas



Fuente: Alcaldía de Medellín.

Cuando la crisis de legitimidad del gobierno Samper se resolvió por el relevo presidencial en 1998, el país sintió los efectos de la caída de los mercados en el Extremo Oriente y entró en una

crisis económica comparable a la que había experimentado en la década de 1930, época de la Gran Depresión. Entre 1997 y 2003 el crecimiento del PIB per cápita fue 0 % y el del PIB por trabajador fue -1,7 % (Ocampo, 2010, página 131). Entre 1996 y 1999 “la tasa [de desempleo] aumentó de 9 % a casi 20 %. La tasa del año 2000 fue la mayor de la segunda mitad del siglo XX” (Gaviria, 2010, página 36). Sólo entre 1999 y 2000 Colombia tuvo dos millones más de personas pobres y la incidencia de la pobreza en Medellín fue 16,4 % más alta que en Cali y 14 % más alta que en Bogotá (González, 2010, página 258)⁵³. En Medellín, como en los años ochenta, más gente seguía empobreciéndose con las crisis económicas y los jóvenes seguían siendo el segmento más vulnerable. Sin metáforas, los jóvenes desempleados eran un ejército de reserva. No es raro, por tanto, que el ciclo de descenso sostenido del homicidio que empezó en 1991 terminara en 1998 y se diera paso a un ciclo de ascenso que acabó en 2003.

Con respecto a 1998, el homicidio creció anualmente en 8 % (1999), 4,3 % (2000), 17,8 % (2001) y 22,6 % (2002). Los números absolutos distan mucho del clímax violento que hubo entre 1989 y 1994 y las tasas de crecimiento fueron más bajas aún, pero hay varios indicios de que la violencia fue más organizada: la concentración territorial, descrita antes, y el peso del homicidio entre los hombres dan cuenta de esta organización. Este último rasgo podría apoyarse señalando que entre 1979 y 2008 la razón del homicidio hombre/mujer “fue 13:1, con la mínima en 2002 y 2005 de 7:1 y la máxima en 1998 de 44:1” (García y otros, 2012, página 4). Esta es una aproximación sugestiva que muestra que la mayor mortalidad masculina se produjo entre 1998 y 2002, precisamente el período en el que se dio la urbanización del conflicto armado.

Estos años coincidieron con la explosión del desplazamiento forzado. Con respecto al año anterior, en 1995 se triplicó el número de personas desplazadas que llegaron a Medellín (9.261). En 1997 los desplazados fueron más de 15.000 y en el momento más fuerte en 2001 eran 41.636 personas. El tamaño de este drama humanitario en Cali fue mucho menor, como lo ilustran sus cifras en los años mencionados: 1995 (644); 1997 (713); 2001 (12.886). Como era de esperarse, el grueso de la población desplazada tuvo “un componente alto de menores de 20 años y de jefatura femenina de baja escolaridad” (Sardi, 2010, página 354), lo cual supuso una presión adicional para la oferta de servicios básicos, aumentó la población juvenil e intensificó la variedad de sectores sociales en gran parte de la ciudad. El desplazamiento forzado hacia Medellín es comprensible por la centralidad que representa la ciudad no sólo respecto a Antioquia, sino también para Chocó y las zonas limítrofes de la costa Atlántica. Sin embargo,

⁵³ La incidencia de la indigencia era de proporciones similares: Medellín: 12,3 %, Cali: 7,6 % y Bogotá: 8,6 % (González, 2010, página 262). Esto demuestra que Medellín, después de dos décadas, seguía siendo muy vulnerable a las crisis económicas.

debe leerse también como una expresión de las conexiones entre el conflicto armado rural y las dinámicas políticas y sociales de la gran urbe⁵⁴.

La fase estratégica de llevar la guerra a las ciudades tuvo un despliegue muy desigual. El ELN y las FARC hicieron presencia en Cali, pero más allá del secuestro 150 civiles en la iglesia La María, en 1999, y de los diputados del Valle del Cauca, en 2002, la guerra se desarrolló sobre todo en las zonas rurales (Guzmán y Moreno, 2007) y Cali no vivió una guerra comparable a la de Medellín o a la de centros urbanos más pequeños como Barrancabermeja. Tampoco padeció con tanta frecuencia el conflicto Bogotá, donde la actividad de las FARC se limitó a ataques selectivos de sus fuerzas especiales en lugar de una campaña de control territorial.

En Medellín hicieron presencia todos los grupos protagonistas del conflicto armado nacional, con el agravante de que en esta ciudad había una base disponible de bandas, combos y guerreros retirados de todos los viejos bandos que reactivaron sus destrezas en el ejercicio de la violencia y las pusieron al servicio de las grandes organizaciones militares (Vélez, 2001, página 72). En Medellín, “la diferencia es que los dos bandos se enfrentan dentro de la misma ciudad por intermedio de milicias y bandas” (Pécaut, 2003, página 72). Ya en 2000 el grupo de Murillo (sin presentarse aún como Bloque Cacique Nutibara) había logrado, mediante el aniquilamiento o la cooptación de grupos armados preexistentes en la ciudad, establecer un monopolio de la coerción en numerosos barrios. Luego de dismantelar al Bloque Metro el único reto importante quedaba en la comuna 13. Las milicias del ELN y los CAP estaban copadas por sus enfrentamientos con bandas y la incursión de paramilitares en distintos barrios. Entonces, las FARC apelaron a un recurso temerario para fortalecer las posiciones insurgentes en la zona centro-occidental de Medellín: trasladar masivamente (se habla de buses y camiones) combatientes rurales (Daza, 2016, páginas 144-146), presumiblemente de los frentes 9, 18 y 34. Muchos barrios de la comuna se convirtieron en teatro de guerra, retaguardia para acciones de secuestro y atentados en el resto de la ciudad.

El 20 de febrero de 2002 se rompieron los diálogos de El Caguán entre el Gobierno y las FARC y el 7 de agosto se posesionó Álvaro Uribe con un mandato de “seguridad democrática”; de inmediato se incrementaron las operaciones militares tanto del Gobierno como de la guerrilla. Tanto desde la Alcaldía como desde la Gobernación se pedía más apoyo del Gobierno central para un mayor pie de fuerza para la ciudad (Consejo de Seguridad, Acta 016 de 2002, junio 12 de 2002, Acta 029 de 2002, septiembre 9 de 2002). Entonces el Gobierno nacional decidió efectuar una operación militar que se presentó como una retoma de la zona por parte del

⁵⁴ Crónicas ejemplares del desplazamiento hacia Medellín pueden leerse en Nieto (2008).

Estado. Orión fue el nombre dado a la operación conjunta de las fuerzas del Estado en la que participaron, junto a la Policía y el Ejército, la Fuerza Aérea, el DAS y la Fiscalía. Se desarrolló intensamente entre el 16 y el 18 de octubre de 2002 en los barrios 20 de julio, las Independencias, Belencito, El Corazón, Nuevos Conquistadores y El Salado.



"La comuna 13 de nuevo se ve envuelta por el fuego cruzado". Fuente: El Colombiano, 17 de octubre de 2002, página 2A.

La iniciativa estatal tuvo una resistencia notable por parte de unidades guerrilleras de las FARC, el ELN y los CAP. Al comienzo de la intervención, la Policía desactivó un bus cargado con dinamita que bloqueaba una vía de acceso a la zona y el mismo día el Batallón 44 fue atacado con granadas. El balance final así lo confirma: 9 muertos de la insurgencia, 4 de la fuerza pública y 4 civiles, al parecer uno de ellos fuera de combate (*El Colombiano*, 30 de octubre de 2005). Según fuentes no oficiales, durante los combates hubo 40 civiles heridos, entre ellos 16 menores de edad (10 de ellos menores de 12 años), 6 desaparecidos, 308 detenidos (de los cuales 170 fueron judicializados y 82 recibieron medida de aseguramiento) y 7 denuncias por torturas. La fuerza pública incautó 20 fusiles, una subametralladora, 2 carabinas con mira telescópica, 4 lanzagranadas de 40 milímetros, 50 kilos de explosivos, municiones y equipos de comunicación. En las semanas restantes de 2002 continuaron los allanamientos y capturas en la zona por parte de la fuerza pública. En los meses posteriores hubo denuncias sobre actividad paramilitar en el lugar: 39 desaparecidos durante 2003 (6 hallados muertos) y 11 asesinatos en La Divisa, Juan XXIII y La Pradera durante 2003 y comienzos de 2004. El 2 de febrero de 2005 se reportó un enfrentamiento entre el Ejército nacional y milicianos en el que murió una persona que había sido recientemente liberada de la cárcel de Bellavista. En 2004 un miembro de la Dirección Nacional

del ELN fue detenido en un operativo en Medellín junto con otros 10 miembros del grupo, en un barrio limítrofe con la comuna 13.

La existencia del Bloque Cacique Nutibara fue entonces breve, pues en el momento en que se consolidó como grupo hegemónico se iniciaron las conversaciones entre el Gobierno nacional y las AUC. Estos diálogos dieron paso, en primera instancia, a una tregua de los diferentes bloques en el país en diciembre de 2002 y, luego, a un proceso de desmovilización que empezó en Medellín, a fines de 2003, y terminó en el Urabá chocoano tres años después, con un balance de 31.671 combatientes desmovilizados. El Bloque Cacique Nutibara, cuyo radio de acción exclusivo era el Valle de Aburrá, desmovilizó 868 integrantes, un total levemente superior al de las milicias populares (843) y equivalente al 72 % de la fuerza que había desmovilizado el M-19 en todo el país 14 años antes. A comienzos de agosto de 2005 el Bloque Héroes de Granada (BHG) desmovilizó 2.033 integrantes, muchos de los cuales actuaban en Medellín, municipios del sur del área metropolitana y del oriente cercano, y tenían fuertes vínculos con Diego Murillo y antiguos lugartenientes del Cartel de Medellín.

El año 2005 marcó también el repliegue de las FARC —y con más fuerza del ELN— “a sus retaguardias” (CNMH, 2013, páginas 178-193). Las desmovilizaciones individuales de guerrilleros de las FARC, incentivadas por el Estado, se multiplicaron en el país desde entonces: si entre 2003 y 2005 el promedio anual fue de 1.265 desmovilizados, en el quinquenio siguiente (2006-2010) se elevó a 2.113 (CNMH, 2014, página 282). En Antioquia, para ese año, ya habían desaparecido los frentes 9 y 47 en oriente, y el 5 y el 34 de las FARC se habían replegado hacia Chocó; habían desaparecido los frentes Bernardo López, Carlos Alirio Buitrago, Che Guevara y Compañero Tomás del ELN en el nordeste, oriente, suroeste y bajo Cauca, respectivamente.

Una peculiaridad del conflicto armado en esos años fue la ocurrencia, probada o al menos bajo investigación, de un número importante de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas militares, también llamadas “falsos positivos” en varias zonas del país. En la jurisdicción de la IV Brigada (que incluye gran parte de Antioquia, incluyendo el Valle de Aburrá) se registraron 335 muertes entre 2000 y 2007, por las cuales se investigan con medida de aseguramiento a 273 uniformados (Ejército Nacional, 2015)⁵⁵.

El trabajo de la Agencia Colombiana para la Reintegración muestra las magnitudes del reclutamiento efectuado por los grupos armados ilegales en la ciudad, quedando por incluir la

⁵⁵ Para un análisis de los “falsos positivos” como efecto perverso de una política nacional ver Acemoglu y otros (2016).

desmovilización colectiva de las FARC. Hasta 2015 se habían desmovilizado 2.338 combatientes de todos los grupos armados ilegales nacidos en Medellín, cifra ocho veces más grande que la de los nacidos en Cali y que equivale a más de dos veces los nacidos en Bogotá. Aunque es entendible que la mayoría de los medellinenses desmovilizados provinieran de los grupos paramilitares, dado su carácter colectivo, llaman la atención los 155 desmovilizados individuales de las guerrillas, 75 % de ellos de las FARC (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2015). Las cifras, sin embargo, subestiman el fenómeno ya que no identifican a los habitantes de la ciudad, no nacidos en ella, que se vincularon a esos grupos.

Después de la desmovilización paramilitar, las autoridades judiciales empezaron a revelar los múltiples nexos entre dirigentes políticos de Medellín y Antioquia con distintas estructuras paramilitares con el propósito de que estas movilizaran el electorado para provecho de los primeros. Se trató de una trama mucho más sofisticada que la simple financiación de campañas por parte de los jefes mafiosos dos décadas atrás. Más de 20 políticos regionales han sido investigados desde entonces y algunos ya recibieron condenas, como los conservadores Antonio Valencia Duque y Óscar Suárez Mira, y los liberales Rubén Darío Quintero, Humberto Builes Correa y Mario Uribe Escobar, en su momento adscritos a empresas electorales como Alas Equipo Colombia, Cambio Radical o Colombia Democrática. Investigaciones judiciales apuntan a que estos jefes políticos asentados en Medellín y su área metropolitana buscaban afianzar sus capitales políticos con el apoyo paramilitar en zonas como Urabá o el Bajo Cauca, e incluso en barrios de Medellín. La consecuencia política más clara de este fenómeno a nivel regional fue el cambio acelerado del mapa político de Antioquia a partir de 1997, por el cual la izquierda electoral prácticamente desapareció y “nuevas figuras y partidos de derecha irrumpieron en la escena política” (López, 2007, página 124). Las denuncias se multiplicaron en lo que va corrido del siglo y es presumible que el tamaño del fenómeno “parapolítico”, que todavía está siendo investigado, sea mucho mayor que lo que los jueces han logrado determinar.

Desde 2005, y en correspondencia con iniciativas gubernamentales propias de una situación de posconflicto (programa de reinserción, ley de justicia y paz, Grupo de Memoria Histórica, ley de víctimas), la administración municipal emprendió una serie de proyectos destinados a atender a los desmovilizados y a las víctimas, apoyo a desplazados y fomento de programas de retorno, ejercicios de memoria, además de las medidas encaminadas a fortalecer la capacidad de gobierno en barrios y comunas.

1.5. Hacia la estabilización del orden institucional: 2006-2014

En el año 2005 el número de homicidios en Medellín bajó, por primera vez desde 1983, de los mil (782); la tasa por cien mil habitantes se situó por debajo de la nacional y de la tasa de Cali por

primera vez desde 1978 (SISC, 2016). Varios factores confluyeron para llevar a esa reducción. En primer lugar —y a pesar de su carácter polémico— la operación Orión tuvo “un claro impacto en la caída de los homicidios de Medellín y su Área Metropolitana” (Palou y Llorente, 2009, página 29). En segundo lugar, la tregua unilateral declarada por los paramilitares con motivo de los acercamientos con el Gobierno nacional en busca de una negociación (Martin, 2014, página 461). En tercer lugar, no obstante las críticas a la desmovilización paramilitar (Amnistía Internacional, 2005), el impacto que esta tuvo en la reducción de los asesinatos en la ciudad fue apreciable. Este impacto en Medellín fue evidente, en especial cuando se desagregan los datos: las comunas con mayor proporción de desmovilizados presentaron un mayor descenso de los homicidios entre 2003 y 2005 (Betancur, 2010). Mientras los barrios de las zonas suroriental y suroccidental, que no recibieron reinsertados, disminuyeron el homicidio en 9,6 % y 20 %, respectivamente, los barrios de la zona centro-oriental, que acogieron el 17,1 % de los desmovilizados, presentaron una disminución del 43,5 % y los de la zona nororiental, que recibió el 34,6 % de los reinsertados, disminuyó sus cifras de homicidio en un 55,1 % (Giraldo y Preciado, 2015, página 6). Este hallazgo coincide con evaluaciones del impacto de esa desmovilización para todo el país⁵⁶.

Las características básicas de la violencia en Medellín cambiaron significativamente desde entonces: el grupo etario más victimizado pasó de la franja más joven (18 a 24 años) a una mayor (25 a 30 años), la participación de las armas de fuego en los homicidios se redujo de cerca del 95 % a poco más del 70 % y la ubicación del crimen se desplazó desde las zonas precarias de ladera hacia los asentamientos formales de los márgenes del río Medellín que cruza el centro de la ciudad, en especial las comunas La Candelaria, Castilla y Aranjuez (ver mapa 2: Medellín por barrios y comunas). La ciudad pasó de ser un teatro de guerra a un laboratorio de seguridad.

Los asesinatos de Gustavo Upegui y Daniel Ángel (2006) y la extradición de Diego Murillo (2008) marcaron una transformación del narcotráfico, el cual pasó de la situación “de un gran capo narcotraficante que dirigía y subordinaba las bandas y combos especializados en la violencia a cambio de un porcentaje de las rentas del narcotráfico internacional a bandas y combos con mucha mayor autonomía y sin acceso a las rentas del tráfico internacional” (Duncan, 2015, página 25). La más reciente guerra entre los herederos de las bandas del narcotráfico se presentó en 2009 entre las facciones de alias *Sebastián* y alias *Valenciano*, lo que duplicó el homicidio y demostró que los grupos subsistentes habían adoptado las estrategias criminales de sus antecesores (incluidas las milicias y las guerrillas) y reproducían formas de victimización de la población que daban la impresión de que, en algunas zonas, todo seguía siendo igual al pasado.

⁵⁶ “Durante la desmovilización, entre 2003 y 2006, se registra una reducción adicional y significativa de las acciones armadas de los paramilitares, de la tasa total de homicidios, de homicidios políticos (...). Esas tendencias se mantienen cuando el período de análisis posdesmovilización se extiende hasta 2011” (López, 2016, página 344).

En el plano político y administrativo en 2004 se presentó en Medellín el hecho inédito (ya visto en 1992 en Barranquilla y en 1995 en Bogotá) de la elección de un candidato independiente como alcalde de la ciudad. La administración de Sergio Fajardo (2004-2007) se nutrió de la experiencia acumulada de la ciudad desde 1991 y de algunos de los proyectos exitosos de las alcaldías de Antanas Mockus (1995-1997) y Enrique Peñalosa (1998-2000) en Bogotá. En lo que concierne a los fenómenos de conflicto armado y violencia en la ciudad esta alcaldía abrió nuevas perspectivas que se desarrollaron, con los énfasis propios de cada gobernante, en las alcaldías de Alonso Salazar (2008-2011) y Aníbal Gaviria (2012-2015). Las administraciones anteriores, con fuertes restricciones presupuestales y políticas, desarrollaron “intervenciones mediadoras” en seguridad y convivencia, esto es, “programas de asistencia que intentan desarmar los espíritus, ofrecer alternativas de inserción social y lograr, por esta vía, la neutralización de las armas” (Jaramillo, Ceballos y Villa, 1998, página 125). En contraste, durante los últimos 12 años los gobiernos municipales consolidaron una política de seguridad y convivencia que trajo un incremento sustancial de la inversión en seguridad ciudadana, que pasó de niveles inferiores al 1 % del presupuesto a sumas que representaban cerca del 4 % del mismo. Se mantuvo una coordinación fructífera con las entidades nacionales; se crearon y fortalecieron instituciones locales y descentralizadas, entre ellas las de justicia cercana al ciudadano; se ejecutaron políticas públicas con un énfasis deliberado en derechos humanos y se sostuvo una cooperación con agencias humanitarias, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que contó con apoyo local, privado y público, para su funcionamiento; además se crearon programas de apoyo a las víctimas del conflicto armado.

El cambio resultó tan impactante que pronto Medellín se convirtió en objeto de estudio y de reconocimientos internacionales. Al respecto se puede mencionar el trabajo de Francis Fukuyama que le dio resonancia a la expresión “milagro Medellín” (Fukuyama y Colby, 2011) o los premios que ha recibido la ciudad desde 2006, bien sea por el urbanismo social, la resiliencia o su capacidad de transformación⁵⁷. Esto contrasta con lo ocurrido en Cali, ciudad en la que “entre 1999 y 2010, durante doce años y según este indicador [tasa de homicidios], se puede pensar que se consolida una situación de violencia endémica” (Guzmán, 2012, página 363). Como suele pasar en los procesos sociales, el municipio de Medellín, encabezado por sus alcaldes y burocracias, logró catalizar en este lapso una serie de procesos políticos, administrativos y sociales que se remontan al menos a 1991 con las reformas impulsadas desde la Consejería

⁵⁷ Entre los galardones están el Premio Verde Verónica Rudge en diseño urbano de la Universidad de Harvard y el premio Lee Kuan Yew World City Prize (el “Nobel de las ciudades”). Véase un balance periodístico reciente: Juan Gossain (*El Tiempo*, 29 de octubre de 2016).

Presidencial para Medellín. Un cambio de este tipo no tuvo lugar en Cali, ciudad donde sólo desde 2012 se ha recuperado la excelencia en la gestión municipal.

Es pertinente mencionar las intervenciones que distintos gobiernos nacionales desarrollaron con políticas generales o focalizadas en la ciudad. Un proyecto pionero y de enorme influencia fue la Consejería Presidencial para Medellín que operó durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994). La Consejería significó un nuevo modelo de gestión pública basado en la integración de la sociedad civil, las agencias de cooperación internacional y los actores privados, al proceso de toma de decisiones públicas. Este es un momento en el cual jugó un papel decisivo la intervención del Gobierno central para suplir las deficiencias administrativas municipales. Algunas de las acciones más importantes fueron la creación de la Corporación Paiseña Joven y del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales (Primed). La primera se encargó, de la mano de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, de elaborar las políticas públicas de juventud, proceso en el que participaron la Alcaldía, las universidades, la Iglesia, y algunas organizaciones comunitarias y no gubernamentales. La segunda, encargada del mejoramiento integral de barrios, también tuvo el apoyo de entidades con experiencia en la gestión urbana, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno alemán, representado por el Banco Kreditanstalt für Wiederaufbau (Leyva, 2010, página 277). Las políticas nacionales de negociación o sometimiento a la justicia desarrolladas durante los gobiernos de Gaviria, Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2014), contribuyeron a la desactivación de muchas organizaciones violentas de la ciudad. Las intervenciones nacionales generales se presentaron tanto en Medellín como en Cali, pero no así las intervenciones focalizadas: la capital del Valle no se vio beneficiada por nada similar a la experiencia de la Consejería Presidencial.

En segundo lugar debe mencionarse el conjunto de reformas tendientes a establecer una descentralización efectiva en el país, que con el correr de los años habría de beneficiar a ciudades como Medellín. Las principales reformas fueron la elección popular de alcaldes, que empezó a hacerse efectiva en 1988 y las leyes 60 de 1993 y 152 de 1994, que le dieron competencias y recursos a los municipios para atender salud, educación y saneamiento, “apuntando a consolidar la labor del gobierno local más allá de sus funciones administrativas y de infraestructura vial” (Leyva y Aristizábal, 2016, página 21). Los efectos de estas reformas no rindieron sus frutos plenamente sino hasta el año 2000. Mientras tanto, las cinco primeras alcaldías populares, encabezadas por políticos adscritos a los partidos tradicionales (cuyos períodos eran de dos años) lidiaron con enormes limitaciones presupuestales y técnicas, lo que hizo obligatorio orientar la gestión pública en coordinación estrecha con diferentes actores sociales (Leyva, 2010, página 281). No obstante, durante ellas se dieron esfuerzos en temas de convivencia, mejoramiento barrial y participación. En contraste, Cali parecía tomar la delantera en

materia de seguridad y convivencia con la elección de un alcalde que se presentaba como un líder cívico, Rodrigo Guerrero (1992-1994). El burgomaestre, defensor de una aproximación epidemiológica a la violencia, creó la Consejería para el Desarrollo, la Seguridad y la Paz (Dese paz), “diseñó y puso en marcha el primer Sistema de Vigilancia de Lesiones Fatales en Colombia en 1993, haciéndolo parte de la estructura del gobierno municipal, y creó en la Universidad del Valle, el Centro de Investigación sobre Salud y Violencia (Cisalva)” (Salazar, 2015, página 24). Sin embargo, Guerrero contó con poco apoyo político y sus medidas tuvieron poco impacto en la disminución de la violencia homicida en Cali. Lo paradójico fue que a pesar de que la capital del Valle fue pionera de nuevas estrategias para reducir la violencia, mientras Medellín parecía rezagarse, el “milagro metropolitano” nunca llegó a presentarse en Cali (Gutiérrez y otros, 2013, página 7).

Otro elemento que permite entender la trayectoria que siguió Medellín para la superación de una crisis que, con altibajos, se prolongó durante dos decenios, provino de la sociedad civil. Alrededor de la Consejería se dio el encuentro entre organizaciones y movimientos sociales y económicos, y de estos con los funcionarios y entidades públicas. Este proceso se dio en el escenario de los seminarios Alternativas de Futuro para Medellín, que tuvieron el objetivo de propiciar un pacto social para trascender la crisis de ciudad. Los proyectos de la Consejería aprovecharon y a la vez impulsaron transformaciones que venían incubándose en diversos sectores sociales. Tal es el caso de los organismos no gubernamentales (ONG) que existían desde principios de los años ochenta, pero que a la luz de la situación nacional, los acuerdos de paz y el proceso constituyente reorientaron su labor hacia lo que pudiera llamarse una “cooperación crítica” con el Estado. Los movimientos sociales barriales y sindicales que, gracias al aprendizaje de años de movilizaciones e interacciones entre ellos y con el Estado, replantearon su orientación, abandonando premisas radicales y se comprometieron con transformaciones concretas a nivel local y sectorial. Otros grupos empezaron a aglutinarse alrededor de nuevas aspiraciones posmateriales, como ambientalistas, mujeres o musicales juveniles. También apoyaron este proceso sectores del empresariado que decidieron asumir un papel cívico activo y que fueron fundamentales para el afianzamiento de las alianzas público-privadas; y grupos académicos de universidades y colegios locales que ayudaron a entender los problemas de la ciudad y tuvieron cierto protagonismo en los asuntos públicos.

A partir de este conjunto se incubaron una serie de espacios de participación que, con cambios, lograron prevalecer durante largo tiempo. También se formaron o promovieron liderazgos que tuvieron resonancia en los sectores público, privado y social. Ejemplo de esto fueron los procesos de planeación estratégica desarrollados en la ciudad y el departamento en la segunda mitad de los años noventa, la creación de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo (1996) y Medellín

Cómo Vamos (2006), así como la institucionalización de la participación ciudadana en la planeación local, reflejada en Acuerdo 43 de 2007 del Concejo Municipal.

En estas acciones hubo énfasis muy específicos promovidos por esta variedad de actores civiles: el barrio, los jóvenes y la educación. Por ejemplo, se buscó la visibilización del barrio como espacio concreto de las relaciones sociales. Este se vio en un principio como objeto de políticas de mejoramiento de vivienda y vías o como espacio de participación, pero después como territorio que exigía espacios públicos para una comunidad que debe contar con una presencia cercana del Estado local para cumplir las demandas e iniciativas de sus pobladores. No puede dejar de mencionarse la importancia otorgada a la juventud como el segmento social más vulnerable que necesitaba atención particular por parte de los entes públicos y privados. Los niños, niñas y adolescentes adquirieron un mayor protagonismo nacional en su reconocimiento como grupo de especial protección constitucional en los artículos 44 y 45 de la Constitución Política de 1991. Una muestra de esto fue la creación de una Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia y la expedición del Conpes 2626, sobre política social para mujeres y jóvenes. El correlato local de lo anterior empezó con la Consejería Presidencial para Medellín, la cual hizo un gran énfasis en “la atención a la población joven de la ciudad, principalmente de las llamadas ‘comunidades populares’”⁵⁸. A partir de entonces se han desarrollado, no sin altibajos, diferentes políticas de atención a la juventud (Márquez y Mejía, 2015, página 47-60). Se insistió en la cobertura universal de la educación y en la calidad de la misma como una de las respuestas a los problemas de la ciudad y así se pudo ver en las declaraciones de las organizaciones de la sociedad civil, lo que se anticipó a medidas nacionales como el Plan Decenal de Educación (1996-2016). Hubo muchas iniciativas sociales y privadas, como la alianza de ONG Maestros Gestores de Nuevos Caminos (1991) y la Fundación Empresarios por la Educación (2001).

Algunos liderazgos sociales se esforzaron, en la década de los noventa, por introducir el tema de la ética ciudadana en la agenda pública local a través de seminarios y publicaciones. Un ejercicio seminal lo promovieron la Corporación Región y el Programa por la Paz de la Compañía de Jesús en 1992. Otros hitos importantes se dieron de la mano de la Cámara de Comercio, el diario *El Colombiano*, el Ateneo Porfirio Barba Jacob y Confiar. Desde 2004 los sucesivos gobiernos de la ciudad han venido monitoreando los indicadores de cultura ciudadana con el apoyo de Corpovisionarios.

⁵⁸ “Medellín es una de las pioneras en el país a la hora de institucionalizar las políticas de juventud mediante el Acuerdo 07 de ese mismo año [1994], el cual les da fundamento a la Oficina de la Juventud y al Consejo Municipal de Juventud (CMJ)” (Márquez y Mejía, 2015, página 50).

Finalmente debe destacarse la contribución de las autoridades locales. En el aspecto financiero, que es crucial para fortalecer los presupuestos de inversión y atender las demandas ciudadanas, el municipio estableció un esquema que permitió la transferencia de recursos de Empresas Públicas de Medellín. En los años noventa se iniciaron programas para asentamientos subnormales y para la atención al río. Durante lo que va corrido del siglo XXI creció la capacidad y la discrecionalidad de las alcaldías para orientar el gasto y emprender proyectos. Eso permitió una amplia intervención urbanística y social en los sectores más pobres y excluidos de la ciudad, así como ampliar los modos y alcances del transporte masivo, lo que mejoró notablemente la integración física de la ciudad y el valle. El vínculo más cercano entre los ciudadanos y el gobierno local también se pudo ver en el notable descenso de la abstención electoral en las elecciones de alcalde, que pasó de 72 % en 1994 a 47 % en 2007 (Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, 2012, página 73).

La suma de todos estos factores permitió que comenzara a darse la estabilización del orden institucional. Esto necesitaba, en primer lugar, un sustento institucional que se encontraba en la Constitución Política de 1991 y en las leyes dirigidas a fortalecer la descentralización municipal. En segundo lugar, se necesitaba la apropiación de esta base institucional por parte de la ciudadanía y de los gobiernos municipales. Esto empezó a ocurrir durante la década de los noventa cuando, debido al nivel exacerbado de violencia que vivió la ciudad, diversos sectores (academia, ONG, empresas, medios de comunicación) fueron capaces de encontrarse para buscar una salida conjunta a la crisis en la que estaba sumida Medellín.

El punto máximo de esta confluencia fueron las coaliciones políticas que se articularon alrededor de diversas alcaldías desde 2004, en las que convergieron medios de comunicación, la izquierda moderada, personas sin partido y sectores del empresariado. Esta coalición amplia y heterogénea fue fundamental para la estabilización del orden institucional, pues la construcción de Estado habría sido muy difícil en una sociedad fracturada y dividida. Una evaluación reciente señala que la ausencia de una coalición semejante en Cali explica parcialmente la incapacidad de las autoridades caleñas para disminuir sustancialmente la violencia homicida, en contraste con sus homólogos de Medellín (Gutiérrez y otros, 2013).

Este proceso ha servido para darle una nueva oportunidad a toda la ciudad, a sus dirigentes y a sus habitantes, y ha creado un ambiente de optimismo que está ayudando a la recuperación del tejido social y la gobernabilidad. Sin embargo, la consolidación de estos logros sigue teniendo amenazas: un entorno regional muy frágil, economías informales y criminales que limitan el alcance del Estado de derecho, sectores políticos clientelistas y ambiguos en sus relaciones con el crimen organizado son retos enormes para la superar la pobreza y lograr la inclusión social.

1.6. A modo de síntesis

Desde la perspectiva estadística así como desde la dolorosa percepción de sus habitantes la violencia exacerbada que vivió Medellín durante más de tres décadas (entre comienzos de los años ochenta y los primeros años del siglo XXI) parece un continuo de horror: formas de victimización, permanencia de los principales perpetradores, amplia cobertura territorial e impactos similares. Detrás de esa penosa monotonía se pueden identificar, sin embargo, dos crisis que presentan facetas diferentes.

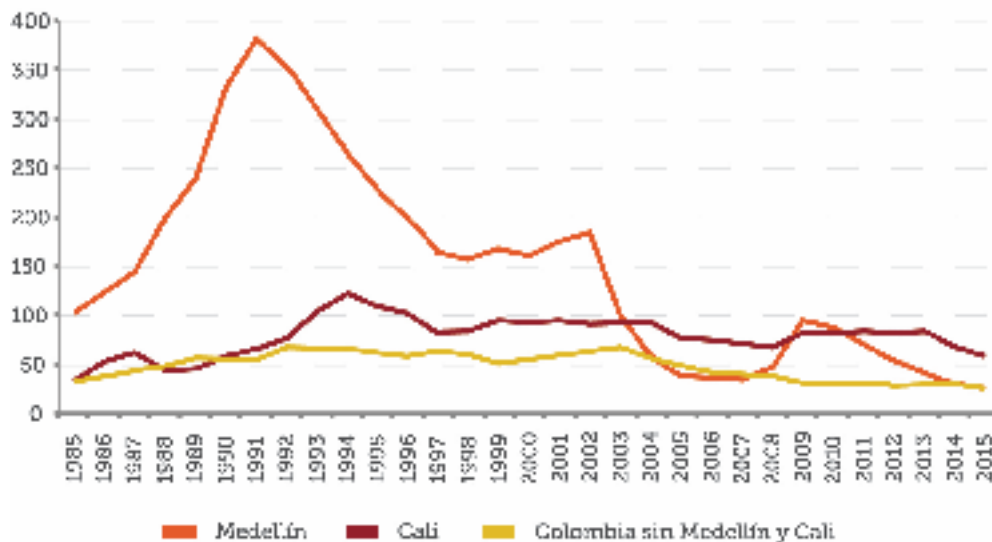
La primera, entre 1982 y 1994, estuvo impulsada por el despliegue de la violencia y el terrorismo del grupo narcotraficante encabezado por Pablo Escobar, quien logró coordinar por distintos medios a bandas de delincuentes y a un alto número de sicarios. A su alrededor medraron pequeños grupos armados de la izquierda radical, en su mayoría independientes de las guerrillas rurales formadas en la década del sesenta, y milicias barriales, más numerosas, pero no menos autónomas. En esos años las fuerzas del Estado fueron insuficientes para garantizar el orden y en el intento apelaron muchas veces a prácticas ilegales, nombradas como “guerra sucia”, por lo que uno de los rasgos de esta crisis fue “la aplicación del desorden para controlar otro desorden” (Uribe, 1990a, página 53).

La segunda crisis, entre 1995 y 2005, se configuró alrededor de la expansión de los paramilitares y las guerrillas rurales en el país y en Antioquia, lo que llevó a que el departamento se convirtiera en el principal territorio bélico de Colombia. Medellín, con la región metropolitana, fue el centro geográfico y logístico de este conflicto y se volvió objetivo de la disputa militar entre organizaciones paramilitares (en algunas de las cuales los narcotraficantes jugaron un papel central) y entre ellas y las organizaciones milicianas y guerrilleras. La ciudad fue objeto de la intervención militar del Estado más contundente durante este período con la operación Orión (pero también con otras).

¿Por qué Medellín fue el escenario urbano del país donde hubo más incidencia de la violencia política y narcotraficante? (gráfica 1).

Gráfica 1.

Tasa de homicidios, Medellín, Cali y Colombia sin ambas, 1980-2015



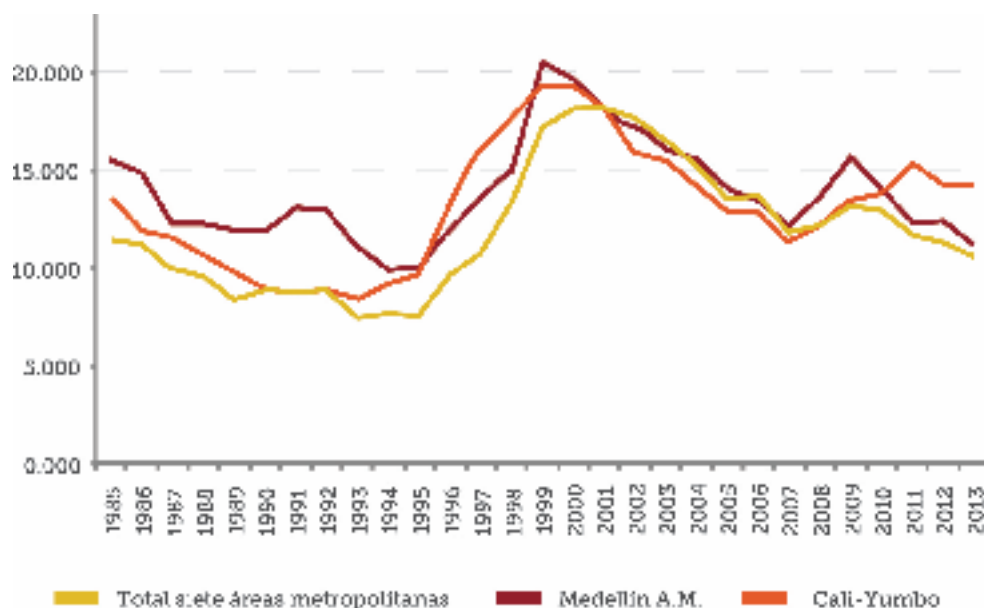
Fuentes: Medellín, SISC; Cali y Colombia, Forensis. Cálculos propios.

A lo largo de este tiempo se han postulado muchas explicaciones razonables para los niveles de violencia y del cruce de guerras entre narcotraficantes, guerrillas, paramilitares, milicias y bandas en Medellín. Una situación como esta no es anómala, teniendo en cuenta el contexto del conflicto armado colombiano. Sin embargo, parece excepcional dadas sus dimensiones. Aquí se proponen siete líneas explicativas de la tragedia de la ciudad en este período:

1. Los momentos de agudización del conflicto armado y sus violencias asociadas en la ciudad coincidieron con dos crisis económicas de profundos efectos sociales, entre 1982 y 1985 y entre 1998-2001. Las características de la estructura productiva de Medellín hicieron que esas crisis nacionales tuvieran un mayor impacto negativo para sus habitantes, en especial cuando se consideran el desempleo y la pobreza medida según ingresos. Estas crisis alentaron diversos sectores económicos informales y muchos claramente criminales.

Gráfica 2.

Tasa de desempleo en principales ciudades de Colombia 1984-2012 (%)



Fuente: entre 1984 y 2005, Encuesta Nacional de Hogares y Encuesta Continua de Hogares, homologadas por Arango y Posada (2006); entre 2006 y 2013, Gran Encuesta Integrada de Hogares.

2. El peso de las crisis económicas recayó principalmente en el segmento juvenil de la población (el más numeroso en las principales ciudades), el cual sufrió en Medellín los rigores del desempleo y la desescolarización con más intensidad que en los otros centros urbanos del país. Esto permitió que jóvenes excluidos del mercado laboral y de la oferta educativa pudieran vincularse a actividades ilegales, nutrir la demanda de guerreros de distintos bandos y terminar constituyendo el grueso de las víctimas directas de los conflictos de la ciudad.
3. Las autoridades locales, en general, carecieron de la visión y los medios suficientes para encarar la situación y los entes nacionales sólo actuaron con decisión cuando se percibió que estaba amenazada gravemente la seguridad pública, en particular contra Pablo Escobar (1988-1993) y las FARC (2002). Entre tanto, hubo muy poca atención a la vulneración de las libertades y derechos fundamentales de la población.
4. Los imaginarios de la sociedad antioqueña han estado caracterizados por el bajo cumplimiento de la ley, la observación de una religiosidad laxa y ritualista, y una estima alta por el éxito económico. Estos sirvieron de sustrato para la connivencia con los grupos armados ilegales. Las bandas del narcotráfico, en especial, llevaron a extremos muy violentos esta desregulación de los comportamientos sociales y convirtieron la ilegalidad en conducta masiva y admirada.
5. En la ciudad se mantuvo un segmento importante de población adiestrada en el uso de las armas, la comisión de delitos violentos y la creación de grupos capaces de planear y ejecutar complejas acciones ilegales, que intercambiaron técnicas criminales y sirvieron de dispositivos de expansión a organizaciones como guerrillas y paramilitares. Aun después

de la disolución de las organizaciones políticas y criminales de alcance nacional se siguen sintiendo los efectos de este aprendizaje criminal en la ciudad.

6. En este contexto ciertos narcotraficantes antioqueños crearon grandes aparatos armados propios y los dispusieron en confrontación franca contra las guerrillas, las instituciones estatales y, frecuentemente, contra la población inermes. Durante el período que va de 1982 a 2005, los grupos más violentos de narcotraficantes actuaron en concierto con grupos paramilitares y, ocasionalmente, con miembros de la fuerza pública.
7. Decenas de guerrillas locales y autónomas, actuando bajo forma de comandos o milicias, realizaron acciones indistinguibles de la criminalidad común, como el secuestro y el asalto bancario, y sometieron a la población de muchos barrios a su dominación. Las guerrillas nacionales promovieron milicias en la ciudad e intentaron, a principios del siglo XXI, mantener una guerra urbana de posiciones.

2. Trayectoria de los actores del conflicto armado en Medellín

La memoria sobre la violencia y el conflicto armado en la ciudad contempla actores armados que han tenido expresión nacional, más otras expresiones de nivel local, así como del narcotráfico, cuya historia ha tenido un impacto significativo en la ciudad y en la vida cotidiana de sus habitantes.

No se trató de un fenómeno coyuntural. En Medellín es posible dar cuenta de la presencia de actores como las guerrillas desde los años sesenta, y de los paramilitares desde comienzos de la década de los ochenta. Pero esta permanencia se ha dado en paralelo con importantes transformaciones que han propiciado la aparición de nuevos actores, ya sea como producto de disputas internas o por el establecimiento de formas de interrelación entre estos, por la emergencia de nuevas agrupaciones o su disolución por procesos de negociación con el Gobierno. De ahí la importancia de delinear trayectorias que puedan facilitar el reconocimiento de cambios y continuidades y las circunstancias que dieron lugar a ello. Como se podrá apreciar, Medellín se destaca por el protagonismo político y militar de los actores antes mencionados, pero con importantes variaciones. Se trata de una realidad cambiante de la cual se hablará tomando como marco de referencia los períodos definidos, algunas de sus características como su permanencia en la ciudad, así como ciertas decisiones estratégicas que marcaron puntos de inflexión en su devenir.

2.1. Inicios de la presencia guerrillera (1965-1981)

Los comienzos de las guerrillas en Colombia se remontan a la década de los sesenta con el surgimiento de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 1964⁵⁹, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en 1964⁶⁰ y el EPL (Ejército Popular de Liberación), brazo armado del PCML (Partido Comunista Marxista Leninista) en 1967⁶¹. Su localización en zonas

⁵⁹ Las FARC se constituyeron oficialmente bajo este nombre en septiembre de 1966. Es la confluencia de dos procesos: desde 1961 el Partido Comunista adoptó la tesis de combinación de todas las formas de lucha y en 1964 como respuesta al ataque del Ejército colombiano a la zona de Marquetalia contra la autodefensa campesina creada bajo la influencia de los comunistas en el sur del Tolima se inicia la conformación de varios focos guerrilleros que se agrupan bajo el nombre del Bloque Sur (Pécaut, 2008, página 23).

⁶⁰ El ELN estuvo inspirado en la Revolución cubana de 1959. La acción con la cual se dio a conocer fue la toma de Simacota en el departamento de Santander, llevada a cabo por un grupo compuesto por 22 hombres bajo la conducción de Fabio Vásquez y Víctor Medina Morón (Medina, s.f., página 72).

⁶¹ El PCML y su brazo armado, el EPL, surgieron como una disidencia del Partido Comunista debido a las discrepancias de un sector encabezado por Pedro Vásquez Rendón contra lo que percibían como una línea reformista conciliadora del Partido Comunista con el Frente Nacional y la defensa de un tránsito pacífico al socialismo (CNMH, 2013, página 120).

rurales produjo simpatías entre sectores sindicales, estudiantiles, de la intelectualidad, cristianos laicos y sacerdotes rebeldes inspirados en los preceptos de la Teología de la Liberación⁶².

La conformación de redes de apoyo urbanas a los frentes guerrilleros del EPL y del ELN que empezaron a operar en Antioquia se vio favorecida por un auge del movimiento estudiantil, el sindicalismo independiente⁶³ y las protestas protagonizadas por habitantes de los denominados barrios piratas y de invasión contra intentos de desalojo y abuso policial. Para los jóvenes de la época la participación en manifestaciones, paros, huelgas o grupos juveniles promovidos por párrocos progresistas se convirtió en la puerta de entrada a una experiencia política en la izquierda y a establecer algún vínculo con las guerrillas.

Al finalizar la década la protesta social se radicalizó. Una expresión de ello fue el paro cívico del 14 de septiembre de 1977, considerado un hito en la historia de los movimientos sociales en Colombia por la participación masiva de la población en las principales ciudades y por la parálisis que provocó. Esta protesta fue objeto de particular atención por parte de las fuerzas de izquierda y las guerrillas, quienes vieron allí una muestra de que el país se enrubaba hacia una insurrección general (CNMH, 2013, página, 131). Pero también incidió en un endurecimiento del régimen del Frente Nacional evidenciado en la expedición del Estatuto de Seguridad por parte del gobierno de Julio César Turbay (1978-1982), el cual contempló medidas tales como el aumento de penas por los delitos de secuestro, extorsión y ataques armados, permitió que tribunales militares juzgaran a civiles y que se extendiera la categoría de “subversión” a la propaganda agitadora, la incitación a la revuelta y la desobediencia a las autoridades (CNMH, 2013, página 133).

A la par de la protesta en la ciudad, las guerrillas dieron impulso a pequeños grupos armados para contribuir al sostenimiento de los frentes guerrilleros. El PCML-EPL, por ejemplo, creó las Brigadas Urbanas Militares (BUM) y el comando Pedro León Arboleda (PLA), cuya misión era realizar labores de inteligencia y apoyo logístico. La selección era rigurosa y sólo algunas pocas personas lograban pertenecer a ellas (CNMH, hombre adulto, entrevista, Medellín, 2016). Pero el interés por consolidar la guerrilla en el campo motivó la creación de las fuerzas especiales encargadas no sólo de una labor militar sino también de la formación de cuadros reclutados en el medio estudiantil y sindical para ser trasladados a los frentes guerrilleros que operaban en Antioquia. A mediados de la década de los setenta el Comité Central del PCML procedió a la

⁶² La Teología de la Liberación es una corriente teológica nacida en América Latina tras la aparición de las Comunidades Eclesiales de Base, el Concilio Vaticano II y la II Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, que se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres.

⁶³ El sindicalismo independiente es una corriente que agrupa a sindicatos que se han separado de las centrales tradicionales, la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) con influencia del Partido Liberal y la UTC (Unión de Trabajadores de Colombia) con influencia del Partido Conservador.

conformación de un comando destinado al trabajo guerrillero urbano: el Pedro León Arboleda, después de la muerte de Pedro León Arboleda, máximo dirigente del PCML en 1975. Dicho comando se distanció de la Dirección Nacional del Partido. En 1982 se dispuso la disolución de esta agrupación (Villarraga, 1994, páginas 125-126).

Las diferencias en asuntos como la importancia asignada a la ciudad y su relación con la lucha armada en el campo llevaron a la aparición de agrupaciones disidentes, especialmente en el denominado campo marxista-leninista: “tendencia marxista-leninista”, “liga marxista-leninista”, “línea proletaria”, “ruptura”. Desde diversas ópticas se coincidía en criticar lo que consideraban incapacidad de la dirección del PCML para orientar el trabajo político en la ciudad y para utilizar en beneficio de los propósitos revolucionarios el auge del movimiento estudiantil y campesino (Restrepo y Contreras, 2000, página 28).

A pesar de los avances en su inserción en la ciudad, la guerrilla era vista como un fenómeno distante que no representaba mayores riesgos para la seguridad. El centro de atención era la delincuencia común asociada a bandas relacionadas con delitos contra la propiedad. Sin embargo, a mediados de la década de los setenta empezó a crecer la alarma por la cada vez más frecuente aparición de los “asesinos de la moto”, lo que empezó a poner en evidencia la emergencia de un nuevo fenómeno: el narcotráfico.

2.2. Entre el auge y el declive de la izquierda armada y el Cartel de Medellín. Emergencia del paramilitarismo (1982-1994)

Los dos últimos años del gobierno de Turbay (1980-1982) también fueron críticos en materia de orden público en Medellín. Las protestas estudiantiles continuaron. El Liceo de la Universidad de Antioquia, el Tecnológico Pascual Bravo y el Liceo Marco Fidel Suárez, entre otros, se convirtieron en el escenario de expresión de una nueva generación de estudiantes cada vez más radicalizada. En particular, las guerrillas encontraron un ambiente propicio para ganar nuevos adeptos y avanzar en la construcción de sus redes de apoyo. Según Pablo García, estudiante del Liceo de Antioqueño y quien a finales de esta década fue uno de los fundadores de las Milicias del Pueblo y para el Pueblo (MPPP):

Eso era como una bolsa de valores, donde todas las organizaciones habidas y por haber cotizaban sus acciones. Los muchachos del Liceo le tenían un nombre a las disputas en que se enfrascaban las organizaciones de izquierda para captar militantes: le decían “encostalamiento”. Cada organización contaba con un orador de oficio, que iba a las asambleas, reuniones, actos culturales y hacía alusiones pegajosas a su organización. Después, otros muchachos, si uno mostraba interés, lo invitaban a la cafetería y ya hacían la propuesta más directa; es decir, los que hablaban tejían la red, el costal con las palabras y los

otros la tiraban a ver qué pescaban (Daza, 2016, página 84).

La ciudad adquirió cada vez mayor importancia para las guerrillas. En su XI Congreso, realizado en 1980, el PCML cambió el enfoque de guerra prolongada basado en una acumulación de fuerzas que iba del campo a la ciudad por el de un proceso insurreccional. La ciudad y no el campo se consagró como el escenario principal de lucha. Aunque ello no implicó un replanteamiento del alzamiento armado como forma principal de lucha, se le prestó más atención a las acciones políticas orientadas a madurar las condiciones para un estallido insurreccional.

También el ELN le prestó más atención a la ciudad. En ello pudo haber influido el trabajo con las comunidades promovido por sectores del clero simpatizantes del ELN y un acercamiento al paradigma de la Revolución sandinista que reconocía el potencial revolucionario de la lucha social y matizaba el del foco guerrillero (CNMH, 2013, página 132). En 1983 se realizó la Reunión nacional de héroes y mártires de Anorí, en donde se trazaron directrices para la reconstrucción de sus redes urbanas que habían sufrido un serio revés a raíz de la operación Anorí, adelantada por el Ejército contra el frente guerrillero que operaba en el nordeste antioqueño y que culminó con la muerte de Antonio y Manuel, hermanos del fundador del ELN, Fabio Vásquez Castaño, en octubre de 1973.

Por su parte, las FARC, en su VII Conferencia, realizada en 1982, y de acuerdo con la decisión ya adoptada desde 1966 de su transformación de autodefensa en una guerrilla ofensiva, diseñó un plan estratégico orientado a duplicar el número de combatientes, así como el de sus frentes, y avanzar sobre las ciudades mediante la conformación de frentes urbanos. Esta decisión se sustentó en la apreciación de que se estaba dando una situación revolucionaria marcada por el aumento de la movilización popular, los paros cívicos y las huelgas obreras (Aguilera, 2010, página 116).

Lo anterior se tradujo en la adopción de un modelo que combinaba elementos de la guerra popular prolongada y de la estrategia insurreccional similar al de la triunfante Revolución nicaragüense. Los cálculos eran que para 1985-1990 se estaría realizando el cerco sobre Bogotá para asegurar el control de poblaciones aledañas y la instalación de un gobierno provisional. En Medellín las FARC empezaron a hacer presencia en el barrio Santo Domingo en la frontera urbana del nororiente alrededor del año 1982. Para sus habitantes no eran claros los motivos de su llegada: “Esa gente no decía nada. Solamente llegaron. No hacían reuniones ni nada, solamente llegaron” (entrevista con habitantes del barrio Santo Domingo, 2015, citado en Daza, 2016, página 139). Es posible considerar que su objetivo era ofrecer apoyo a los frentes guerrilleros que iniciaron operaciones en municipios del oriente antioqueño pertenecientes a la

zona de embalses y asegurar el control de un corredor que facilitara la conexión con la ciudad. También las Milicias Bolivarianas hicieron presencia en el sector de la Iguaná, otro lugar de importancia estratégica por facilitar el acceso a uno de los megaproyectos de la ingeniería antioqueña: el Túnel de Occidente.

El ELN, de acuerdo con el relato de un exdirigente del ELN definió los lugares que se querían privilegiar (zonas de la periferia y el área industrial) para construir una organización amplia, semilegal y clandestina, y hacer preparativos para una toma de la ciudad (CNMH, hombre adulto, entrevista, Medellín, 2016). Posteriormente, en un congreso realizado en 1986 se planteó la necesidad de avanzar en una articulación de la acción que desarrollaban los frentes rurales con sus estructuras en las ciudades (Aguilera, 2010, página 220).

Pero fue el M-19 (Movimiento 19 de abril)⁶⁴ el que hizo del espacio urbano un escenario privilegiado para sus acciones políticas y militares, de lo cual empezó a dar muestras con acciones como el robo de las armas en el Cantón Norte (1978) y la toma de la embajada de la República Dominicana (1980) en Bogotá. El M-19 se erigió como un modelo para imitar entre activistas del movimiento estudiantil e integrantes del ELN y del EPL en Medellín. Así evoca su influencia un exjefe miliciano: “El M-19 había señalado el camino a seguir para la guerrilla colombiana. Con sus intrépidas acciones había demostrado que era más publicitado un golpe de mano de un comando guerrillero en la ciudad, que el de un frente rural que se tomara un apartado pueblo” (Medina, 2006, página 71).

En Medellín el M-19 se apoyó en un sector de la Anapo Socialista⁶⁵ del cual hacían parte concejales y líderes con una importante trayectoria. Israel Santamaría, por ejemplo, dejó de lado su carrera política para liderar la construcción de un frente guerrillero en Antioquia. Este intento fracasó ante la arremetida del Ejército. Así recuerda esta experiencia un exdirigente de la Anapo en Medellín:

Eso era gente que se movía aquí muy cerquita de Medellín: San Cristóbal, San Pedro... y una vez armaron un campamento ahí en la represa de Río Grande y el Ejército mató un poco de gente ahí, prácticamente destruyó esa columna. Eso tuvo que haber sido entre el 85-86 (...). En ese operativo murió Israel Santamaría. Y ahí por ejemplo hubo dirigentes sindicales que renunciaron, se salieron de las fábricas,

⁶⁴ El representante a la Cámara Israel Santamaría, el senador Carlos Toledo y un grupo de guerrilleros urbanos encabezados por Jaime Bateman, escindidos de las FARC en 1974, conformaron la guerrilla del Movimiento 19 de abril, cuyo lema fue “con el pueblo, con las armas, al poder” (CNMH, 2013, página 20).

⁶⁵ La Anapo (Alianza Nacional Popular) fue un partido político fundado por el exgeneral Gustavo Rojas Pinilla. Participó en las elecciones de 1970 con Rojas como candidato. El dudoso triunfo de su contrincante, el candidato conservador Misael Pastrana, marcó el origen de la corriente de la Anapo Socialista, que servirá de plataforma política al Movimiento 19 de Abril. Su objetivo fue defender el triunfo del pueblo burlado el 19 de abril de 1970.

fueron a entrenarse al Cauca, que era el lugar donde entrenaban, y vinieron a montar esa columna aquí porque el M-19 no tuvo guerrilla rural en Antioquia (CNMH, hombre adulto, entrevista, Medellín, 2016).

Adicionalmente, el M-19 sufrió otro importante revés con el desmantelamiento de sus redes de apoyo en la ciudad por parte del MAS en represalia por el secuestro de Marta Nieves Ochoa. Sólo volverá a ser protagonista a mediados de la década de los ochenta con el impulso a los “campamentos de paz”.

La instalación de estos campamentos fue autorizada por el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) como parte de las negociaciones de paz que se adelantaban con el M-19. En declaraciones a los medios de comunicación el ministro de Gobierno, Jaime Castro, advirtió que mientras funcionaran como centros de agitación política y sin pretensiones de alterar el orden público y dentro del ordenamiento jurídico constitucional vigente podrían existir. Voceros del M-19 manifestaron que en los campamentos de la organización no se estaba impartiendo instrucción militar, sino que simplemente se realizaban ejercicios físicos (*El Colombiano*, junio 5 de 1985, página 1).

En Medellín dichos campamentos se instalaron en el barrio Popular (comuna 1), en Villatina (comuna 8) y en Castilla (comuna 5). Los relatos de personas que tuvieron alguna cercanía con estos campamentos coinciden en la novedad que representaron para los jóvenes que asistieron a cursos de formación política y adquirieron conocimientos en ciertas técnicas militares que algún tiempo después pondrían en práctica al hacer parte de bandas barriales.

Al romperse las negociaciones con el Gobierno, el M-19 abandonó de manera intempestiva estos campamentos, pues el Gobierno ordenó cerrarlos. Este hecho ocurrió después de la declaración que hizo Carlos Pizarro sobre la ruptura de negociaciones con el Gobierno y, en consecuencia, “regresarían con sus armas al monte” (*El Colombiano*, 25 de junio de 1985, página 2A).

De este modo quedaron a la deriva jóvenes que frecuentaban estos campamentos. En el barrio Popular empezó a operar la banda de Los Nachos que se dedicó a la extorsión y los asesinatos hasta ser exterminada por otra banda reconocida por sus acciones de “limpieza”, llamada Los Capuchos, que luego se convertiría en objetivo militar de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (MPPP).

En el barrio Villatina y de acuerdo con testimonios obtenidos con habitantes del sector donde operaron los campamentos, después de su desmantelamiento por el M-19 se desató una ola de violencia protagonizada por jóvenes que quedaron armados y empezaron a organizarse e impartir

seguridad y justicia por sus propios medios. Algunos de ellos luego harían parte de las Milicias 6 y 7 de noviembre (Blair y otros, 2008, página 108).

2.2.1. La izquierda: entre la política y las armas

Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se produjo un hecho inesperado que iba en contravía de las predicciones de la izquierda con respecto a un mayor endurecimiento del régimen político. Inmediatamente después de asumir la Presidencia el 7 de agosto de 1982 Betancur hizo una propuesta de tregua y diálogo nacional encaminado a la construcción de una salida política al conflicto armado que ya se venía agudizando con la expansión de las FARC y del ELN y la aparición de grupos paramilitares. Este viraje motivó nuevos debates y cambios en las estrategias de las guerrillas.

Bajo el amparo de los Acuerdos de La Uribe entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur surgió la Unión Patriótica (UP) en mayo de 1985, la cual se presentó como un movimiento político amplio, democrático, de oposición a los partidos tradicionales y con un programa democrático que coincidía en varios de sus puntos con las propuestas de las FARC (Aguilera, 2010, página 128). A su vez, el PCML había suscrito junto con el M-19 y el grupo Auto Defensa Obrera (ADO) un acuerdo para el cese del fuego y el diálogo nacional y fundó el Frente Democrático Revolucionario, y luego la Unión Democrática Revolucionaria (UDR). El ELN, a pesar de su oposición a los acuerdos de tregua y diálogo por considerarlos una estratagema para desarmar política y militarmente al movimiento guerrillero, impulsó la creación del movimiento político A Luchar, en el marco del Encuentro Obrero Campesino y Popular realizado el 16 y 17 de marzo de 1985 (Restrepo y Contreras, 2000, página 45).

La emergencia de estas expresiones políticas de las guerrillas significó un cambio en la condición de marginalidad de la izquierda, y le ayudó a divulgar sus ideas y propuestas, ampliar su base de apoyo social y política, tener una incidencia en el campo electoral y en la formación y proyección de una generación de líderes de izquierda, varios de los cuales fueron posteriormente asesinados. Así sucedió con Óscar William Calvo, cabeza del Movimiento Unión Democrática Revolucionaria, representante oficial del EPL, el 20 de noviembre de 1985, y Bernardo Jaramillo, representante de la Unión Patriótica, el 22 de marzo de 1990.

La trayectoria de estos movimientos en la ciudad fue evocada por líderes sindicales que vivieron de cerca esta experiencia. Estos resaltan el avance que representó para la izquierda contar con estos movimientos, pero también hablan de los miedos que experimentaron ante los señalamientos y amenazas que creen que se orquestaron desde la IV Brigada, así como las consecuencias que

acarreó la “doble militancia” entre dirigentes y activistas que tuvieron un papel destacado en organizaciones y movimientos sociales.

No sé qué me van a decir los compañeros porque yo sí creo sinceramente que la doble militancia no justifica el asesinato, y el ser miembro activo de todas las formas de lucha no justifica. Pero eso fue la causa de la muerte de muchos compañeros. La doble militancia sindicalista de ADIDA (Asociación de Institutores de Antioquia) y pertenecer al Partido Comunista o pertenecer al EPL. O en los municipios ser activista sindical y pertenecer al ELN, eso sí no lo podemos negar (CNMH, hombre adulto, grupo focal con sindicalistas, Medellín, 2015).

A propósito de esta situación, un líder del movimiento A Luchar se refirió a las tensiones que suscitaba la discusión entre los partidarios de la combinación de todas las formas de lucha y de quienes se inclinaban por centrar todos los esfuerzos en el trabajo político de masas y así poder marcar las diferencias con quienes se dedicaban a actividades militares, por los riesgos que ello entrañaba y que podían dar al traste con la labor política justo cuando se hacían más frecuentes los asesinatos y desapariciones de defensores de derechos humanos a mediados de la década de los ochenta.

Éramos muy irresponsables porque salíamos de la célula para la asamblea del barrio, para la asamblea estudiantil, para la asamblea del sindicato, para la comunidad eclesial de base. Porque siempre tuvimos una expresión muy clara, entonces allí éramos ciudadanos y dos horas antes estábamos en actividad clandestina (CNMH, hombre adulto, entrevista, Medellín, 2016).

Paralela a la acción política de masas se promovió la actividad militar. El ELN, por ejemplo, impartió formación militar en escuelas clandestinas puestas en funcionamiento en lugares apartados de la ciudad y en municipios aledaños. En área rural del municipio de San Pedro de los Milagros funcionó la escuela Luis Fernando Builes.

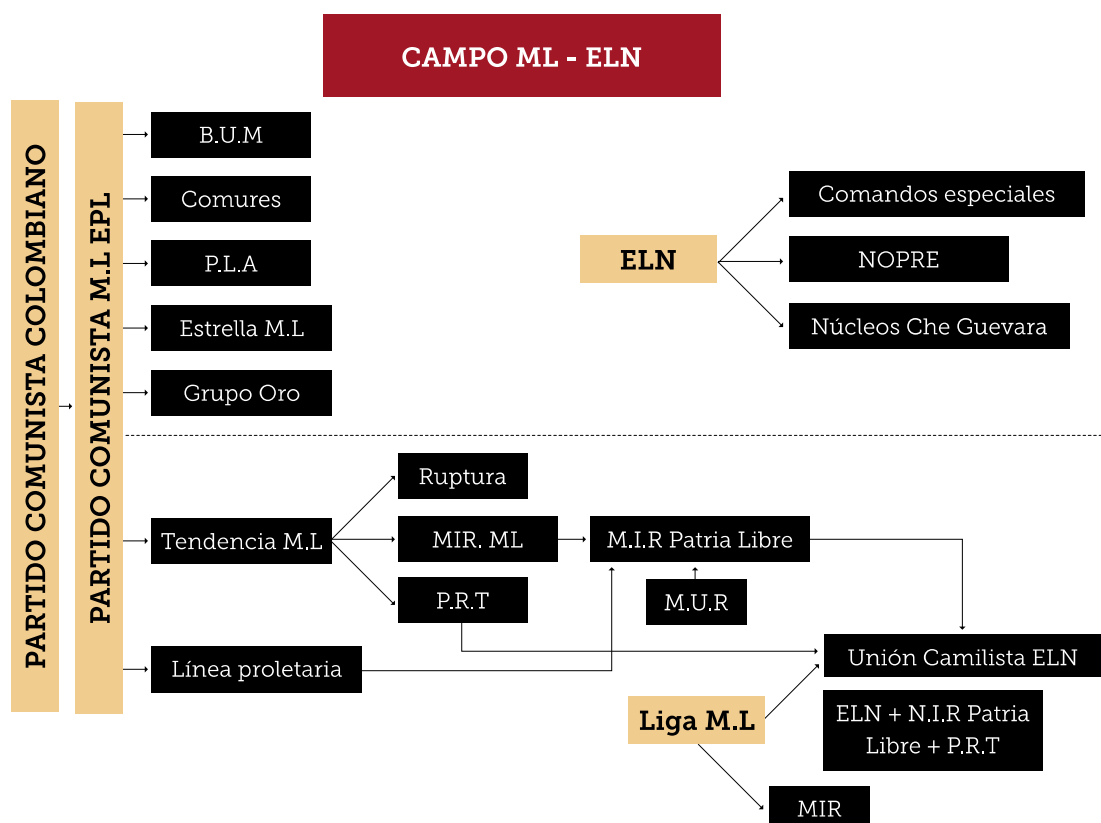
El PCML procedió a la creación de unos comandos armados denominados Comures (Comités Militares Urbanos y Rurales). La novedad con respecto a anteriores experiencias, como la de las fuerzas especiales, fue la participación no sólo de combatientes profesionales sino de ciudadanos obreros o estudiantes que seguían en esa condición pero que empezaban a participar de algunas actividades militares (Daza, 2014, página 32). Esto ayudó a ampliar la construcción de redes de apoyo y dimensionar la importancia del entorno barrial para las acciones militares y con miras a la preparación de un posible levantamiento popular (CNMH, hombre adulto, entrevista, Medellín, 2016).

Este tipo de iniciativas no lograban satisfacer las expectativas de sectores inconformes con lo que consideraban una falta de compromiso de direcciones burocratizadas o corrompidas por los llamados “petrodólares”, en lo que atañe al ELN, o por estar cada vez más influenciadas por el reformismo y volver la espalda a la lucha armada, en lo que concierne al PCML (CNMH, hombre adulto, entrevista, Medellín, 2016). En el fondo, lo que estaba en juego era cuál forma de lucha se iba a privilegiar: la política o la armada. Los sectores más radicales empezaron a darle solución a este dilema con la conformación de pequeños núcleos dedicados a acciones militares en la ciudad orientadas a la construcción de una guerrilla urbana.

En Medellín la fragmentación de la izquierda fue un fenómeno más acentuado que en otras ciudades del país. En los relatos de varios entrevistados y en los talleres de memoria se hizo alusión a diversas agrupaciones. La comparación de esta información con otras fuentes permite dibujar el siguiente panorama.

Figura 1.

Campo ML-ELN



Fuente: Elaboración propia con base en datos aportados en el trabajo de campo y por Villarraga (1994), Archila (2008) y Restrepo y Contreras (2000).

El relato de quien fuera uno de los integrantes del grupo La Estrella es revelador sobre el ambiente de la época y los motivos que condujeron a jóvenes inconformes a hacer parte de este tipo de agrupaciones.

Bueno, yo me levanté en un municipio de gran actividad de la izquierda desde mediados de los años setenta. Había mucha movilización sindical, estudiantil y popular (...). En el año 80 fue la gran huelga obrera de Coltejer. La Policía los reprimió y mató a un obrero que se llamaba Adolfo Tafur. Entonces eso generó una radicalidad. Yo creo que eso fue la primera pelea en que yo participé, fue en 1980 en el parque de Itagüí en una confrontación con la Policía después de una marcha obrera y eso pues nos radicalizó, generó un ambiente muy violento. Yo creo que nosotros en ese momento no teníamos ninguna duda de que la opción era la vía armada.

Me fui involucrando en actividades con células clandestinas para el estudio de la teoría revolucionaria y para promover como acciones de propaganda al interior de la institución que eran sobre todo grafitis, inscrito en la acción de un organismo que había salido del PCCML y el EPL que se llamaba el Núcleo Marxista Leninista La Estrella y ese núcleo tenía su base de actuación en Medellín y en Itagüí tenía una presencia importante (...). Así comencé a participar en acciones clandestinas en otros colegios de la ciudad. Entonces yo iba por ejemplo a acompañar las entregas de volantes, acciones de pintas, tomas de colegios y cosas así, y en eso pues eso normalmente los más grandecitos iban armados y nosotros íbamos ahí en el respaldo y llevábamos bombas molotov y papas y estas cosas pues como de la lucha popular. Eso se complementó con que comenzamos a tener unas salidas a prácticas de tiro en los alrededores de Medellín. Los paros cívicos podían durar 4, 5 días y nosotros estábamos todo el día en función de eso. Programábamos cierre de vías, barricadas y esperábamos a la Policía para confrontarla con piedras, con bombas y con cosas de estas. Entonces por esa vía uno se fue vinculando ya a la estructura militar del núcleo ML La Estrella. Entonces pues comencé a ser parte de una célula militar (...), participé en incendio de la Caja Agraria en Castilla, en un tropel que se armó en el 83-84 con motivo de la visita de Reagan, colaboré en un asalto a una agencia de viajes en el Parque de Bolívar para conseguir recursos. Las cosas iban bien hasta que se empezaron a advertir problemas de descomposición. Yo me acuerdo que con la plata del robo compramos 20 subametralladoras y cuando se necesitó este señor que le decíamos (...) se había gastado en bazuco y licor 10 armas de esas. Entonces eso fue un proceso que se le hizo en el interior, se le expulsó, hubo propuestas de que se le matara y finalmente como había sido un tipo fundador se le expulsó. Entonces en el 85 vino el problema con los Galeano y esto tuvo consecuencias fatales para la organización (CNMH, hombre adulto, entrevista, Medellín, 2016).

En contraste con esta marcada tendencia a la división, otros sectores de izquierda promovieron algunas iniciativas en pro de la integración. Esta fue la experiencia de la Unión Camilista UC-ELN, resultante de proceso de integración del Movimiento de Integración Revolucionaria Patria Libre (MIR), del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del ELN. Pero también en ella se acentuaron las diferencias entre los llamados “históricos” y los renovadores partidarios de articularse a las conversaciones de paz que se venían adelantando entre el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y el M-19, el PRT y el Quintín Lame, y de conferir una mayor autonomía al movimiento A Luchar. Sin embargo, estas iniciativas fueron rechazadas por los “lainistas” (miembros del frente Domingo Laín). Así fue como se gestó el proceso de constitución de una

nueva organización, la Corriente de Renovación Socialista (CRS), que manifestó su voluntad de establecer conversaciones con el gobierno de César Gaviria con miras a la desmovilización y reintegro a la vida civil, lo cual se concretó en 1994 mediante un acuerdo político con este gobierno (Restrepo y Contreras, 2000, página 81).

2.2.2. Un nuevo actor en escena: las milicias

Al finalizar la década de los ochenta se empezó a conocer la existencia de un nuevo grupo armado, las MPPP, cuyo propósito era restablecer el orden y la seguridad apelando a la eliminación de personas y bandas catalogadas como indeseables, asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, robos y violaciones, en barrios donde había un fuerte sentimiento de inseguridad y la disposición de los sectores más afectados a ofrecer apoyo a grupos que pudieran hacer justicia con mano propia. En estas circunstancias la irrupción de las milicias tuvo una amplia acogida. Sin embargo, la simpatía por el proyecto miliciano no fue unánime. En un escenario de deliberación pública y encuentro entre sociedad civil y Estado, el Seminario de Alternativas de Futuro para Medellín, en 1991, líderes sociales expresaron su preocupación por los problemas que esto podía ocasionar. De igual manera un analista de la violencia, Álvaro Camacho, puso en cuestión la pretensión de las milicias de justificar sus acciones y advirtió sobre sus efectos al contribuir a “una privatización de la seguridad, a pesar de tener a la gente supuestamente contenta” (Camacho, 1992, página 296).

Dado el lugar que en la memoria de los habitantes de Medellín ocupan las milicias, así como su impacto en las dinámicas de la violencia y en diversas modalidades de victimización, como se analizará en el capítulo siguiente, es necesario detenerse en algunos aspectos relacionados con su perfil y trayectoria.

Las milicias han sido consideradas un “actor híbrido”⁶⁶, dada la combinación de rasgos propios de la guerrilla, de grupos de vigilantes y justicieros que se conformaron en barrios de la zona nororiental y que antecedieron a las milicias, y de aprendizajes adquiridos en bandas cuya existencia se multiplicó a raíz del auge del Cartel de Medellín.

Aunque las milicias se asocian con la guerrilla, este rasgo no es generalizable a todos los grupos milicianos. Su aparición no parece haber sido el resultado de un plan estratégico por parte de las guerrillas del EPL y ELN, aunque rápidamente se conformaron milicias que expresaron sus simpatías por el ELN y contaron con un apoyo de su parte, aunque este no necesariamente implicó una relación orgánica. Lo que primó fue dejar hacer, pues como explica un exmilitante del

⁶⁶ Ver al respecto Alonso, Giraldo y Sierra (2012), Jaramillo, Villa y Ceballos (1998), Arcos (2005), Bedoya (2010), Valencia y Paz (2015).

ELN, de lo que se trataba era que adquirieran una dinámica propia (CNMH, hombre adulto, entrevista, Medellín 2016), lo cual es compatible con el modelo organizativo que adoptó el ELN desde la década de los ochenta de otorgar relativa autonomía a los frentes de guerra (Aguilera, 2014, página 232).

El EPL también promovió algunas milicias pero no logró mantener el control de las mismas, en momentos en que venía adelantando un proceso de negociación con miras a su desmovilización a fines de los años ochenta. Esta es una experiencia distinta a las Milicias Bolivarianas, cuya presencia y acción respondió a directrices impartidas por las FARC en su estrategia de expansión.

Para las MPPP, a diferencia de las guerrillas, la Policía antes que un enemigo fue valorado como otro actor armado con el que se podía establecer cierta división de responsabilidades en la vigilancia del territorio, teniendo en cuenta las difíciles condiciones topográficas de algunos sectores de la periferia a los cuales no tenían acceso patrullas motorizadas. Mientras que la Policía debía transitar por vías principales, los milicianos lo hacían por los callejones para reducir al máximo la posibilidad de choques armados (Medina, 2006, página 98).

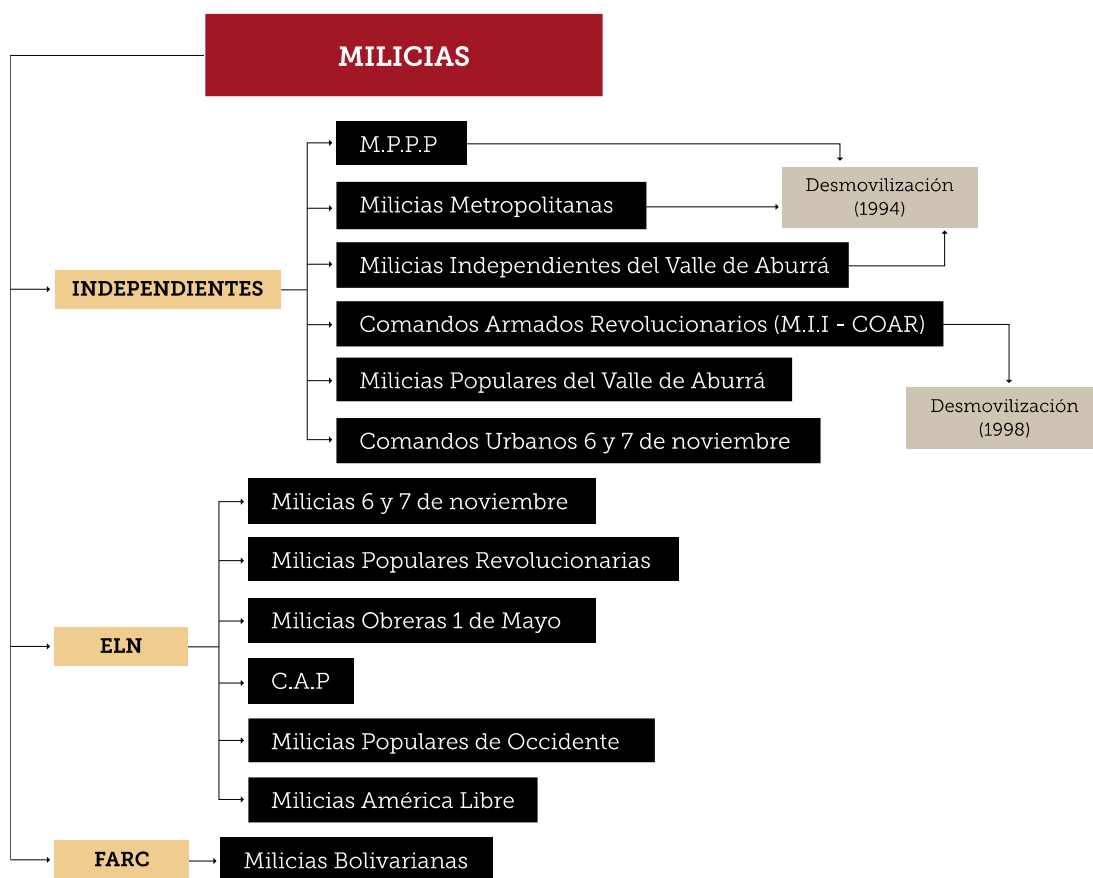
Con respecto al narcotráfico las milicias actuaron con un criterio pragmático por las ventajas que este podía traer en recursos para asegurar el control de territorios. En su biografía sobre Pablo Escobar, Alonso Salazar se refiere a los acercamientos de Escobar con algunos jefes milicianos, *Lucho*⁶⁷ y Pablo García, para establecer un pacto de paz y evitar que las bandas a su servicio en el barrio Castilla y en barrios altos de la zona nororiental perdieran hombres y territorios a manos de las milicias. El resultado fue una tregua que se celebró con fiestas en los barrios (Salazar, 2001, página 269).

El proyecto miliciano tuvo un crecimiento vertiginoso a comienzos de la década de los noventa, de forma que el experimento iniciado con un solo grupo en 1988 se multiplicó. La trayectoria de las MPPP ayuda a entender los alcances de este proceso expansivo. Entre 1989 y 1992 hicieron presencia en los barrios populares Santo Domingo, Granizal y Santa Inés. Luego llegan a barrios más lejanos como El Picachito y 12 de Octubre, en la comuna noroccidental, y la Floresta y 20 de Julio, en la zona centro occidental. Parecía que las milicias no encontraban grandes obstáculos a no ser por la resistencia de bandas que impidieron su ingreso o se enfrentaron hasta ser derrotadas. En este punto se optó por establecer pactos para convivir en el territorio.

⁶⁷ La relación de *Lucho* con Escobar llegó a ser muy estrecha. Fue uno de los convocados por él a la cárcel La Catedral donde estuvo recluso. Se afirma que *Lucho* se comprometió a cuidar secuestrados y Escobar como gesto de amistad le regaló veinte subametralladoras (Salazar, 2001, página 286).

Figura 2.

Organigrama de las milicias



Fuente: Elaboración propia con base en datos aportados en el trabajo de campo, por Medina (2006) y Jaramillo (1993).

Esta situación terminó por generar un gran desorden en sus filas. Las disputas entre las agrupaciones milicianas en competencia por el control de territorios y las pugnas por el liderazgo las hizo más vulnerables a la acción de bandas enemigas y del Ejército, que desde el año 1992 intensificó las labores de inteligencia en los barrios de influencia milicianas (Bahamón, 1992, página 34).

La competencia por el liderazgo también tuvo impacto en la aparición de grupos disidentes, un fenómeno similar a lo que aconteció con las guerrillas en los años ochenta, motivado, entre otras razones, por los cuestionamientos a los desafueros cometidos por mandos milicianos y sus nexos con ciertas organizaciones criminales.

Ante este panorama, el jefe de las MPPP, Pablo García, y otros líderes decidieron establecer conversaciones con el gobierno de César Gaviria en el año 1991, siguiendo el ejemplo del EPL y del M-19. Después de varios meses de negociación y con la mediación de la Iglesia católica y de algunos dirigentes reinsertados del EPL las MPPP, las Milicias Independientes del Valle de Aburrá (Corriente de Renovación Socialista) y las Milicias Metropolitanas de Medellín suscribieron un acuerdo final para la paz y la convivencia con los gobiernos nacional, departamental y

municipal, el 26 de mayo de 1994. Sin embargo, de este acuerdo no hicieron parte otras milicias con influencia en las zonas centro oriental (La Sierra y 8 de Marzo) y centro occidental (comuna 13).

En el acuerdo final entre Gobierno y las milicias se contempló, entre otros asuntos, la creación de una Cooperativa de Seguridad y Servicio a la Comunidad (Coosercom), como alternativa para los milicianos desmovilizados y con un personal total autorizado de 358 miembros, de los cuales 306 serían operativos. Esta Cooperativa se apalancaría con un contrato con el municipio de Medellín de dos años y los integrantes de esta podían portar armas, detener personas y entregárselas a las autoridades. Visto en retrospectiva se trató de un caso claro de delegación abierta y legal del monopolio de las armas a un cuerpo privado de seguridad, que implicaba un proceso de privatización de la seguridad (Giraldo y Mesa, 2013, página. 13).



"Un acuerdo histórico para Medellín". Fuente: El Colombiano, 27 de mayo de 1994, página 12C.

Esta no fue la única experiencia de desmovilización. El 29 de julio de 1998 se suscribió un acuerdo entre el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados (MIR-COAR) con el gobierno de Ernesto Samper. En dicho acuerdo⁶⁸ se plantearon los compromisos de parte y parte para hacer realidad su desmovilización y su conversión en un movimiento político. De

⁶⁸ Ver detalle de este acuerdo en: http://www.cedema.org/uploads/mir_coar.pdf.

acuerdo al relato de uno de los fundadores del MIR-COAR, su origen se encuentra asociado al EPL, pero ante la perspectiva de la desmovilización de esta guerrilla aceptaron la propuesta de las MPPP para operar en la zona nororiental. Las diferencias frente al incumplimiento de un pacto de no agresión con una banda por parte de Pablo García hicieron que optaran por seguir operando de forma independiente (CNMH, hombre adulto, entrevista, Medellín, 2016).

Mientras que en Medellín se asistía al fracaso de Coosercom, en el país se puso en marcha otra experiencia de cooperativas de seguridad y vigilancia, las Convivir, a lo cual se hizo referencia en el capítulo anterior. A sus miembros, apelando al derecho legítimo de autodefensa, se les permitió portar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y llevar a cabo labores de inteligencia, de las que se valía la fuerza pública para avanzar en los operativos contra las guerrillas. Dicha iniciativa recibió el respaldo de gremios económicos del país, alcaldes y gobernadores, entre ellos el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, pero fue vista con preocupación por Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos por el riesgo de que por medio de dichas organizaciones se legalizaran los grupos de autodefensas que venían operando en el país.

Aunque se anunciaron medidas de control y reglamentación de sus funciones, las demandas sobre abusos y violaciones hacia la población llevaron a que en 1997 la Corte Constitucional restringiera su actuación y se les exigiera divulgar sus identidades. Finalmente el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones Convivir, a mediados de 1998, anunció su desmonte. A partir de entonces muchos de sus miembros aparecerían vinculados a los grupos paramilitares (Tribunal Superior de Medellín, 2015).

En Medellín esta relación fue advertida y cuestionada en debates del Concejo Municipal, al poner de presente el fracaso de la experiencia de Coosercom y la necesidad de apuntar a un fortalecimiento del monopolio del Estado sobre el uso de las armas (Martin, 2011, página 17). Las Convivir se convirtieron en uno de los factores que permitió el resurgimiento del paramilitarismo y ayudó a superar el relativo estancamiento que estas habían padecido en los años del gobierno de César Gaviria por las pugnas internas y la concentración de sus esfuerzos en la guerra contra Pablo Escobar (CNMH, 2013, página 158).

2.2.3. Auge y declive del Cartel de Medellín

Hacia el final de los años setenta se había constituido el denominado Cartel de Medellín⁶⁹ pero su existencia no se había hecho pública. Esta situación cambió con la conformación del MAS y su

⁶⁹ El término *cartel* fue introducido por la DEA a partir de 1982 a raíz de una incautación efectuada cerca a Cleveland, Estados Unidos. Desde entonces, el término fue utilizado por la justicia norteamericana para explicar las alianzas entre narcotraficantes y reunir en un solo proceso las diferentes

utilización como una tribuna para legitimar su empresa criminal. En uno de sus comunicados el MAS justificó la ejecución de delincuentes comunes y guerrilleros para “obtener financiación a costa del sacrificio de la gente que como nosotros hemos traído progreso y trabajo al país donando escuelas y hospitales” (Salazar, 1991, página 52). El denominado Cartel de Medellín fue un conglomerado delictivo en el que se compartía, a veces, hasta determinado grado y guardando siempre autonomía financiera, laboratorios, pilotos, rutas y redes de distribución en Estados Unidos. Participaban además de Pablo Escobar y su banda, los Ochoa Vásquez⁷⁰, los Galeano y los Moncada (de Itagüí) y los hermanos Castaño⁷¹, en alianza con Gonzalo Rodríguez Gacha, oriundo del municipio de Pacho (Cundinamarca) y Carlos Ledher, oriundo de Armenia, capital del departamento de Quindío, donde tenía su base de operaciones (Martín, 2014, página 32).

Esta heterogénea agrupación criminal logró concentrar un enorme poder fundado en su eficacia para la constitución de redes destinadas a la producción, procesamiento y transporte de cocaína a los mercados del exterior, para el lavado de dinero, en vínculos con autoridades de Policía, miembros del Ejército, jueces y políticos. Todo esto respaldado con un poderoso aparato armado para arreglar disputas entre los propios narcotraficantes, amenazar y exterminar a sus enemigos y retar el poder del Estado.

Pablo Escobar logró construir una compleja estructura armada que le facilitó su consolidación como jefe máximo del Cartel. Ello fue posible gracias a una división del trabajo entre bandas y las “oficinas” a las cuales se podía acudir para arreglar disputas, desde la pérdida de algún cargamento hasta una venganza, o coordinar actividades criminales. En el primer quinquenio de los años ochenta las bandas de oficina alcanzaron gran notoriedad: la de Ricardo Prisco, en Aranjuez; la Kika, en Castilla, y el Chopo, en La Estrella son ejemplos de ello. Estas, a su vez, coordinaban bandas de sicarios con una gran experiencia en todo tipo de actividades criminales (Salazar, 2007, página 179).

Lo anterior fue el resultado de una labor de reclutamiento de jóvenes de barrios populares que vieron en el narcotráfico una oportunidad de enriquecimiento y reconocimiento social. Por añadidura, Escobar aprovechó la experiencia adquirida por algunos jóvenes en galladas o

investigaciones judiciales (Retrepo, 2015, página 25). Aunque es un término de uso común no necesariamente corresponde al perfil que presentan organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

⁷⁰ Los hermanos Ochoa Vásquez montaron, desde los años setenta rutas para exportar cocaína aprovechando redes de inmigrantes colombianos en EE. UU. y Europa. Para ello se apoyaron en la cobertura legal que les ofrecía unos negocios de caballos de cría y un restaurante de tradición llamado Las Margaritas, de propiedad de su padre (Martín, 2014, página 92).

⁷¹ Los vínculos de Fidel y Carlos Castaño con el narcotráfico también se tejieron desde la década de los setenta. El primero en hacerlo fue Fidel al establecer relación con delincuentes que hicieron el tránsito de la delincuencia común al narcotráfico. Carlos, por su parte, desde muy joven se vinculó como sicario de Escobar (Ronderos, 2014, página 155).

combos de barrio. La conexión entre estas formas organizativas con el narcotráfico dio lugar a la conformación de un aparato de guerra formidable que jugó un papel clave en la difusión de una subcultura criminal⁷² (Duncan, 2015, página 13).

El poder de seducción del narcotráfico también se puso de manifiesto en el reclutamiento de intelectuales y activistas que habían recibido formación militar por parte de la guerrilla y tuvieron destacada participación en protestas estudiantiles. A varios de ellos se les asignó la responsabilidad de realizar atentados (Daza, 2016, página 12).

La operación de las redes del narcotráfico tuvo efecto en el posicionamiento de Medellín y del Valle de Aburrá como parte de una red global de ciudades epicentro de la cocaína. Asimismo sirvió para crear una territorialización local del crimen, con la cúpula del Cartel operando desde el sur, en particular desde Envigado y El Poblado, y a través de su red de oficinas de cobro; con las bandas duras del norte de la ciudad, en las comunas nororiental, noroccidental y en el municipio Bello, subcontratando al mismo tiempo con las bandas sicariales de los barrios más altos y marginales. En toda la ciudad se usaban locales ubicados estratégicamente que operaban como sitios de carga y descarga de camiones, así como otros negocios de fachada y lugares de funcionamiento de las oficinas, y se tenía un enclave (el barrio Antioquia) donde operaba el mercado de armas, drogas y la conexión con el aeropuerto Olaya Herrera, lugar desde el cual se despachaban cargamentos de droga al exterior (Martin, 2014, página 197).

Pablo Escobar se convirtió en promotor de la campaña “civismo en marcha” en 1979, y la llevó en particular a los sectores populares de Envigado, Medellín y Bello. También aportó los recursos necesarios para la remodelación de canchas de fútbol, sobre todo en barrios de las comunas nororiental y noroccidental, la construcción de un barrio para los pobres por medio de la Corporación Medellín sin Tugurios y la repartición de mercados, drogas y dinero.



Collita de entrada a clásico de fútbol promovida por la Corporación Medellín sin Tugurios. Fuente: archivo personal Luis Fernando Londoño.

⁷² El término “subcultura criminal” fue introducido por criminólogos norteamericanos para denotar aquellos casos en que comunidades y grupos sociales optan por sistemas normativos alternos a los de la “gran sociedad”. Estos sistemas incluyen el uso de prácticas criminales sobre todo entre jóvenes hombres para realizarse y obtener el éxito social que tendrían muy poco chance de obtener si siguieran las reglas establecidas (Duncan, 2015, página 5).

La decisión de Escobar de incursionar de manera directa en la política en 1982 al lanzarse como candidato a la Cámara de Representantes con el grupo Renovación Liberal, que lideraba Jairo Ortega, y adherir públicamente a la candidatura presidencial de Luis Carlos Galán marcó un punto de inflexión en la trayectoria del Cartel de Medellín y en su deriva violenta. En agosto de 1983, a poco más de un año de ejercer como parlamentario suplente, Escobar se vio forzado a retirarse del Congreso debido a las denuncias que el recién posesionado ministro de Justicia del presidente Belisario Betancur, Rodrigo Lara Bonilla, hizo sobre sus vínculos con el narcotráfico. El 20 de octubre de 1983 la Cámara de Representantes le levantó la inmunidad parlamentaria

La respuesta de Escobar no se hizo esperar. En la noche del 30 de abril de 1984 dos sicarios que se desplazaron de Medellín ametrallaron el carro en el que se desplazaba Rodrigo Lara Bonilla. La reacción del Gobierno fue contundente, el 2 de mayo el presidente Betancur anunció el inicio de la extradición de nacionales a Estados Unidos. La aplicación de esta medida afectó de manera directa al Cartel de Medellín pues fue extraditado Hernán Botero, banquero, copropietario del histórico Hotel Nutibara, expresidente del club local de fútbol Atlético Nacional, acusado de operaciones de blanqueo de dinero.

La opción por la violencia como estrategia para encarar el desafío del Gobierno ahondó las fisuras que se venían presentando entre Escobar y los Castaño (Fidel y Carlos) para quienes el enemigo era la subversión y no el Gobierno, y con los Ochoa, que tampoco se mostraban dispuestos a emprender una guerra contra el Estado⁷³. Las presiones ejercidas por Escobar a los narcotraficantes exigiendo el pago de contribuciones para financiar su guerra le granjeó cada vez más enemigos. La ruptura del Cartel se dio con el asesinato de Fernando y Mario Galeano (alias *Kiko*) y William Moncada, culpados del robo de un dinero guardado en una caleta que Escobar consideraba suyo pero que también los Galeano reclamaban.

Al poco tiempo de haberse producido este hecho, en enero de 1993 y con el liderazgo de los hermanos Castaño, se oficializó públicamente la alianza anti Escobar bajo el nombre de los Pepes, que contaban con el respaldo de otros narcotraficantes de Medellín y del Cartel de Cali. A su turno, el gobierno de César Gaviria (1990-1994) reconfiguró el Bloque de Búsqueda⁷⁴ del cual

⁷³ Poco después de la expedición del Decreto Presidencial 3030 de diciembre 17 de 1990, en el que se precisó la garantía absoluta de la no extradición para quienes se entregasen, Fabio Ochoa se entregó de manera voluntaria. Luego lo harían sus hermanos Jorge y Juan David. En 1999 este último fue capturado y extraditado a Estados Unidos sindicado de hacer parte de una red de blanqueo y de tráfico de cocaína en Miami. Esta vez el joven fue de inmediato extraditado a Estados Unidos donde recibió una sentencia de varias décadas de prisión (Martín, 2014).

⁷⁴ El Bloque de Búsqueda se formó en 1989, cuando la guerra de Escobar contra el Estado estaba en su máximo nivel. Después de que Escobar se entregara en 1991, los miembros se dispersaron y conformaron unidades regulares. Sin embargo, tras la fuga de Escobar de La Catedral, el Bloque de Búsqueda fue reformado rápidamente. En esta segunda persecución de Escobar, el Bloque contaba con unos 600 miembros y tenía su sede en la Escuela de Policía Carlos Holguín, en Medellín (McDermott, 2016).

hicieron parte más de 1.300 agentes de la Policía Nacional y el Ejército entrenados para operaciones especiales en las ciudades y respaldados por agencias norteamericanas de seguridad, como la CIA y la DEA, así como por miembros de la Fuerza Aérea y el Ejército norteamericano, el cual aportó alta tecnología en comunicaciones.

La alianza entre narcotraficantes enemigos de Escobar y el Estado le asestó duros golpes a Escobar. Según Carlos Castaño se trató de una guerra que dejó muchos muertos: “nosotros hacíamos los operativos irregulares, encontrábamos al enemigo y lo ejecutábamos. El Bloque de Búsqueda de la Policía, por su lado, asestaba otros golpes, algunos de ellos con nuestra información” (Aranguren, 2001, página 49).

Esta guerra tuvo una pausa a raíz de la aceptación de Escobar de la propuesta del gobierno de César Gaviria (1990-1994) para su sometimiento a la justicia. Su ingreso a la cárcel La Catedral⁷⁵ se produjo el 19 de junio de 1991. Aunque esta prisión contaba con dos anillos de seguridad, una malla electrificada de 4.000 voltios custodiada por el Ejército y un cuerpo de guardias penitenciarios, Escobar impuso su propia ley y desde allí continuó ordenando asesinatos y secuestros.

Después de 396 días de cárcel Escobar se fugó con ocho personas más. El ministro de Justicia, Jaime Giraldo, renunció, al igual que miembros de la guardia del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario). Su evasión dio lugar a la más grande persecución jamás vista en Colombia, en la que participaron cuerpos de inteligencia, el DAS, el CTI y cuerpos élite de EE. UU. con el objetivo exclusivo de dar de baja a Escobar.

Tras 499 días de persecución Escobar fue dado de baja el 2 de diciembre de 1993. Con ello se puso fin a una etapa turbulenta en la historia del narcotráfico en la ciudad y en el país, aunque esto no implicó la desaparición de este fenómeno sino una recomposición y el protagonismo de otros capos, como ocurrió con *Don Berna*.

2.2.4. Los inicios del paramilitarismo

Los años ochenta marcaron los inicios de paramilitarismo en Medellín, auspiciado por Fidel y Carlos Castaño, para quienes el exterminio de subversivos y sus colaboradores se convirtió en una obsesión alimentada por un sentimiento de venganza contra la guerrilla de las FARC debido al secuestro de su padre, quien murió en cautiverio aunque ya habían pagado rescate por él.

⁷⁵ La Catedral estaba ubicada a 2.375 metros de altura sobre el nivel del mar en la parte más alta de las lomas del municipio de Envigado, en la vereda Arenales, a 14 kilómetros del casco urbano.

Desde los años ochenta los hermanos Castaño le dieron inicio a su proyecto de constitución de una fuerza armada en condiciones de responder a la expansión de la guerrilla. Para ello, según Carlos Castaño, llevaron a cabo acciones en los municipios de Amalfi, Remedios y Segovia en el nordeste antioqueño y a él se le encomendó la tarea de avanzar en la construcción de una red urbana en Medellín con el objetivo de rastrear a los hombres de la guerrilla (Aranguren, 2001, página 104).

Según Carlos Castaño, la información que mediante tortura obtuvieron de un guerrillero que se les había escapado en Segovia y luego se desempeñó como profesor de un colegio en Medellín los puso en alerta sobre la fortaleza de la subversión en ciudades como Medellín y Bogotá, pues allí residían los llamados “padrinos”, aliados ocultos de la guerrilla, “personas prestantes que viven en la legalidad, facilitan secuestros y reciben un porcentaje de las utilidades que arroja el secuestro” (Aranguren, 2001, página 86 y página 111).

Entonces se empezaron a llevar a cabo de forma sistemática asesinatos de los inculcados de estos vínculos con la guerrilla en Medellín, Segovia, Remedios y San Carlos, “se trató de operaciones limpias sin un escolta muerto, sin inocentes heridos y sobre todo muy rápidas” (Aranguren 2001, página 104). En Medellín, según Castaño la tarea de identificación se hizo más difícil porque al lado de sindicalistas respetables “estaban los guerrilleros que se disfrazaban de sindicalistas”. Así que se dedicó a “anularles el cerebro a los que en verdad actuaban como subversivos de ciudad” (Aranguren, 2001, página 115).

Para Castaño, el ELN era el grupo que más guerrilleros tenía manejando sindicatos, pero las FARC eran hábiles “dado que su pretensión no era acceder a la presidencia del sindicato sino infiltrar gente en cargos medios, como los de personero o tesorero [...]. Ellos camuflaban muy bien a sus peces gordos, los mismos que manejaban el dinero y además les indicaban a quién extorsionar y secuestrar. Una telaraña tan bien tejida que las FARC se sorprendieron muchísimo cuando se comenzaron a morir. Mi trabajo en la lucha urbana antisubversiva comenzaba a dar sus frutos” (Aranguren, 2001, página 116).

El adelanto de esta ofensiva, como se analiza en el capítulo siguiente, cobró la vida de numerosos sindicalistas, defensores de derechos humanos y militantes de la UP. Para ello Castaño afirma que contó con la asesoría del denominado “grupo de los seis”, conformado por “hombres al nivel de la más alta sociedad colombiana” (Aranguren 2001, página 116). Él les entregaba “una relación escrita con sus nombres, cargos de ubicación, cuál se debía ejecutar, y el papelito con los nombres se iba con ellos a otro cuarto, de allí regresaba señalado el nombre o los nombres de las personas que

debían ser ejecutadas y la acción se realizaba con muy buenos resultados [...]. Nunca vi cómo se identificaba y elegía el objetivo pero sí se veían los efectos de la respuesta violenta de la subversión armada” (Aranguren, 2001, páginas 116 y 117).

Esta ofensiva contra los denominados “guerrilleros de civil” fue un rasgo distintivo de paramilitarismo, sobre todo desde la segunda mitad de los años ochenta. Los hermanos Castaño, Rodríguez Gacha y otros líderes paramilitares participaron en operaciones clandestinas junto a miembros del Ejército, la Policía y el DAS para cometer numerosos magnicidios de candidatos de izquierda a más de mil miembros de la UP que fueron asesinados (Duncan, 2014, página 277).

2.3. Los reacomodos de la guerrilla y la segunda ofensiva paramilitar (1995-2005)

A pesar de los reveses sufridos por las guerrillas del ELN y las FARC, estas no cesaron en su intención de hacer de la ciudad un lugar de importancia estratégica para sus planes de expansión de los frentes guerrilleros que operaban en varias regiones del departamento de Antioquia. Desde los inicios de la década de los noventa se diseñó una estrategia destinada a asegurar el control de territorios localizados en la periferia que conectaban lo urbano con lo rural, es decir, lugares aptos para ser transformados en corredores estratégicos para sus actividades⁷⁶.

2.3.1. El retorno de las FARC

En su VIII Conferencia, realizada en 1993, las FARC reconocieron las dificultades que habían tenido con la creación de milicias en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, puesto que en ocasiones las suplantaban y habían caído en el “vandalismo” (Aguilera, 2014, página 181). No obstante, se propusieron recuperarlas para que asumieran las tareas que se les asignaba en el plan estratégico orientado a hacer el tránsito de la guerra de guerrillas a una guerra de posiciones. Lo cual requería la ampliación del número de combatientes, un ensanchamiento de las redes urbanas y la conformación de milicias, ambas estructuras configuradas como extensión de cada frente. Entre sus funciones estaba realizar labores de inteligencia, apoyo logístico, tareas de finanzas y el ajusticiamiento de “delatores, desertores y de mandos militares comprometidos en crímenes contra el pueblo”. Al Bloque Oriental se le encargó crear las condiciones para cercar, bloquear y ejercer dominio sobre Bogotá y al José María Córdoba hacer lo propio con Medellín y en segundo lugar Urabá (Aguilera, 2014, páginas 181-182).

⁷⁶ La comuna 8, por ejemplo, se ubica alrededor de la entrada a la zona rural de Santa Elena, que a su vez comunica con el oriente del departamento; y la comuna 13 está cerca de la carretera al mar, que lleva a Santa Fe de Antioquia y de ahí al Golfo de Urabá.

Las FARC reforzaron su presencia en sectores donde ya habían incursionado en la década de los ochenta (barrio Santo Domingo) y extendieron su actuación hacia los barrios La Honda, la Cruz, Caicedo y Villatina (Daza, 2016, página 20). La comuna 13 también hizo parte de sus planes. Un hecho recordado es la manera como las FARC “desembarcaron” en 1989: “entonces las FARC se activaron, hicieron su acarreo y trajeron 40 hombres. Los metieron dentro de un camión. Es que de ellos [FARC] había muy poquita gente [antes]. Ahí es que empezaron a fortalecerse, llegaban ya armados. El que hubiera parado ese camión, se habría muerto” (CNMH, hombre adulto, entrevista, Medellín, 2016). Su posterior derrota a raíz de la ofensiva paramilitar en la comuna 13 no implicó un abandono total de la ciudad. Al parecer siguieron operando unas estructuras clandestinas que cumplían la función de redes de apoyo a los frentes de la guerrilla en Antioquia y una labor política para consolidación del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MB), creado el 29 de abril de 2000 en San Vicente del Caguán, Caquetá.

2.3.2. Los Comandos Armados del Pueblo (CAP)

Con esta nueva agrupación se cierra un ciclo en la historia de las milicias en Medellín iniciada en la década de 1980. En la comuna 13 algunos de los integrantes de las MPPP que no se desmovilizaron permanecieron e incurrieron en delitos que generaron rechazo entre la población. Las disputas internas ocasionaron la muerte de sus principales líderes, pero hubo quienes tomaron el relevo y se empezaron a dar a conocer como una nueva milicia, los CAP (Comandos Armados del Pueblo).

Las milicias del ELN que no hicieron parte de la desmovilización y mantuvieron su presencia en la comuna 13 aceptaron compartir territorio con los CAP. Sus líderes recibieron instrucción militar en campamentos del ELN y realizaron algunas operaciones conjuntas: “el ELN los aglutinaba, los acogía, protegía, lideraba, los influenciaba, pero sin dejar de ser grupos independientes” (CNMH, hombre adulto, entrevista, Medellín, 2016). Hacia los años 1997-1998 esta situación cambió. Los CAP y el ELN se trenzaron en disputas por el control de territorios en las que los CAP obtuvieron la mayor ventaja y lograron ampliar su dominio territorial en varios sectores estratégicos de la comuna 13.

Los CAP se dieron a conocer mediante la distribución de comunicados, panfletos y declaraciones a los medios de comunicación. El comandante, alias *Hugo*, puso de presente sus diferencias con las milicias tradicionales: “Hemos querido ser un grupo miliciano con un carácter verdaderamente político. No quedarnos en la celaduría de los barrios o en el asistencialismo comunitario”. También hizo una defensa de su línea política “basada en la historia de la izquierda en nuestro país y el acumulado científico del marxismo-leninismo” y la “ética revolucionaria”, su no

acogimiento ni al DIH “porque con ello se quería limitar ciertas acciones militares propias de la lucha guerrillera” y por ser “el resultado de construcción de la burguesía europea con base en situaciones de guerra bastante ajenas a las del conflicto nuestro” (*El Colombiano*, 12 de agosto de 1997).

Por las declaraciones ante el Tribunal de Justicia y Paz de Fredy Alonso Pulgarín, alias *La Pulga*, miliciano raso de las CAP, se pudo establecer la forma en que los CAP procedieron al reclutamiento de jóvenes en la comuna, el tipo de entrenamiento que recibieron y funciones asignadas. *La Pulga* reconoció su responsabilidad en el asesinato del sacerdote José Luis Arroyave, el 20 de septiembre de 2002, acusado por los CAP de colaboración con los paramilitares. La sentencia expedida por el Tribunal Superior de Medellín contra este integrante de los CAP marca un hito en la superación de la impunidad frente a las acciones de las guerrillas en la ciudad (Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, 2016).

La intervención del Ejército y la ofensiva paramilitar en la comuna 13, así como la desaparición y posterior asesinato de dos de sus máximos cabecillas, conocidos con los alias de *Nando* y *Carlos* el 27 de noviembre de 2001, ocasionó su derrota militar y desaparición como grupo armado.

2.3.3. La reorganización de las estructuras criminales y sus vínculos con el paramilitarismo

Después de la muerte de Escobar se dio un proceso de reorganización de las estructuras criminales en la ciudad y el Valle de Aburrá. La que se impuso fue la Oficina de Envigado⁷⁷, cuyo poder se sustentó en la construcción de una serie de alianzas con bandas ubicadas en diversas zonas de Envigado, Itagüí, Bello y Medellín, a partir de las cuales comenzó a ejercer un amplio dominio territorial, útil al narcotráfico y a otras actividades criminales. El resultado fue una empresa criminal que empezó a operar como una estructura en red, es decir, con unas jerarquías bien definidas pero con grados de autonomía necesarios para garantizar éxito en sus acciones (Restrepo, 2015, página 79).

Este reacomodo de la criminalidad contó con el concurso de capos que hicieron parte de los Pepes, como fue el caso de *Don Berna*, el más beneficiado con la eliminación de Escobar y quien logró asumir el liderazgo de la Oficina para establecer un “orden” sustentado en el cumplimiento de ciertas reglas o códigos de comportamiento por parte de todas las bandas de acuerdo a sus zonas de operación, tipo de actividades y al pago de los respectivos tributos a la “oficina”.

⁷⁷ La existencia de esta organización criminal se remonta a la años ochenta, durante los tiempos de Escobar. Ver al respecto Restrepo (2015, página 29).

Al igual que Escobar, *Don Berna* se rodeó de hombres de confianza, entre ellos Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias *Rogelio*. Durante los años 1993 y 1994 este estuvo adscrito como investigador y escolta al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), desde donde comenzó su carrera delictiva trabajando para la Oficina de Envigado en labores de inteligencia para evitar que sus “patrones” tuvieran problemas judiciales. También mantuvo los vínculos que desde la época de los Pepes estableció con la Policía, particularmente con el coronel Danilo González (McDermott, 2016, página 10).

El ascenso de *Don Berna* en la Oficina de Envigado coincide en el tiempo con la llegada de Carlos Castaño a la dirección de las ACCU después de la muerte de su hermano Fidel en 1994. Atendiendo una invitación de Castaño, *Don Berna* asistió a una reunión en la cual se acordó darle un nuevo impulso al proyecto paramilitar en Medellín (Serrano, 2009, página 130). Pero el asesinato de narcotraficante José Santacruz, tercero en el organigrama del Cartel de Cali y en el cual implicaron a *Don Berna* motivó su salida de la ciudad hacia el Nudo del Paramillo, en medio camino entre Medellín y el Golfo de Urabá, donde se encontraba el comando central de las AUC.

Durante la ausencia de *Don Berna* un acontecimiento volvió a disparar las alarmas sobre las acciones de las guerrillas en la ciudad: el secuestro de los hijos de Gustavo Upegui, figura clave en la estructura de mando de la Oficina de Envigado. Carlos Castaño encargó a la banda La Terraza para que trabajara en el rescate de los secuestrados en alianza con agentes de la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro (UNASE) del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, de la SIJIN y del DAS. La persecución de los presuntos secuestradores y de las posibles conexiones de dos plagiarios con la guerrilla dejó un número no determinado de desaparecidos y decenas de homicidios entre 1995 y 1996 (Instituto Popular de Capacitación, Corporación Jurídica Libertad, 2010, página 35).

Carlos Castaño por esta época también promovió la conformación de los GRAU (Grupos de Autodefensa Urbana) que se esperaba pudieran actuar en coordinación con la IV Brigada. De conformidad con la versión libre de Osman Darío Restrepo Gutiérrez, desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara, y Raúl Emilio Hasbún, alias *Pedro Bonito*, desmovilizado del Bloque Bananero:

La llegada de ese grupo a Medellín obedeció a la solicitud que le hizo a Carlos Castaño el entonces comandante de la Cuarta Brigada, general Alfonso Manosalva Flórez, de crear un grupo de autodefensa en el corregimiento de Belén Altavista con el fin de contrarrestar la presencia de la guerrilla en el sector. Éste envió a Raúl Emilio Hasbún, quien se reunió con el general en su oficina de la Cuarta Brigada en Medellín, según relató el propio postulado. Y efectivamente, una vez evaluada la situación, en nombre de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU- le dio la orden a Carlos Vásquez (*Cepillo*) de

conformar el grupo que envió a Medellín (Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y paz, 2015).

Este plan no tuvo el éxito esperado. Sin embargo, el reordenamiento y unificación de las fuerzas paramilitares alrededor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997 facilitó el diseño y puesta en marcha de la ofensiva sobre la ciudad en momentos en que las FARC, en boca del *Mono Jojoy*, anunciaban la urbanización de la guerra como el nuevo paso en su estrategia hacia la toma del poder.

La arremetida paramilitar se inició con una nueva ola de asesinatos y con una estrategia orientada al control de territorios que les parecieron en manos de la guerrilla. Para ello se designó a Mauricio García, alias *Doble Cero*⁷⁸, integrante del Comando Central de las AUC que mantenía una difícil relación con *Don Berna* por sus diferencias sobre la injerencia de narcotraficantes puros en las AUC.

2.3.4. El Bloque Metro

Doble Cero tuvo éxito inicial en su ofensiva y logró hacer presencia en varias zonas de la ciudad: las partes altas de la comuna 8, Villa Hermosa, Santo Domingo, Popular I y Popular II, Santa Cruz, comuna 13, Moravia y zona limítrofe noroccidental entre Medellín y Bello. También hizo presencia en Belén Altavista, Belén Zafra, Belén Aguas Frías, Belencito Corazón y Manrique, en este último brindando seguridad, sobre todo para los transportadores azotados por las bandas que se disputaban el control de las rentas generadas como producto de las extorsiones a este sector.

Para ello contó con el concurso de combatientes reclutados en Urabá, municipios del oriente antioqueño y en Medellín. A sus efectivos se sumarían integrantes de las milicias 6 y 7 de Noviembre en el sector de La Sierra después de haber sido derrotados. Al indagar por los motivos de este cambio de bando, un exmilitiano argumentó la pérdida de ideales de la guerrilla y no encontrar mayor diferencia entre su vieja y su nueva militancia: “quítele al ELN lo de terrorista marxista leninista y verá que hay mucha afinidad con las autodefensas” (*Semana*, 2002, marzo 25).

En el Bloque Metro se pudo ver el intento de construcción de un ejército claramente contrainsurgente en el contexto urbano. Sin embargo, las especificidades de una ciudad como

⁷⁸ *Doble Cero*, al retirarse del Ejército en 1988, empezó su carrera paramilitar en las autodefensas de Córdoba y Urabá, en ese entonces bajo el mando de Fidel Castaño. Con el beneplácito de la casa Castaño, *Doble Cero* fundó en el oriente y nordeste de Antioquia y en Medellín el Bloque Metro de las ACCU, cuyo objetivo era desterrar a la guerrilla. Quizás ha sido el jefe paramilitar más “puro”, en el sentido de que su objetivo primordial siempre fue la lucha contraguerrillera. Después de perder su guerra contra *Don Berna* huyó a Santa Marta donde fue asesinado en mayo de 2004 (*Verdad Abierta*, 2008).

Medellín, escenario de competencia de diversos tipos de actores armados, hizo que *Doble Cero* tuviera que apelar a un modelo de subcontratación con organizaciones criminales de alta capacidad operativa como la banda La Terraza, que operaba como centro de coordinación de una parte importante de la delincuencia en la ciudad. Pero el principal problema para *Doble Cero* fue no haber contado con la colaboración de su enemigo *Don Berna*, que continuaba siendo el jefe de la Oficina de Envigado (Alonso y otros, 2012, página 449).

Doble Cero explicó de la siguiente manera su ofensiva contra la subversión en Medellín:

[La guerrilla] controlaba sus grupos poblacionales por medio de ciertas personas que estaban infiltradas dentro de la población civil, los milicianos, encargados de mantener el terror dentro de la población civil. (...) La estrategia inicial era ubicar por medio de inteligencia a los milicianos, darlos de baja, romper ese círculo de terror, quitarles el apoyo de la población civil y luego entrar a combatir al grupo armado. Esa estrategia incluía dar de baja a los milicianos y había varias formas: caerles hasta bien adentro y darlos de baja, o eliminarlos, pues, cuando dieran la oportunidad. (...) En algún momento del conflicto hay que hacer contraterrorismo (...) enfocado hacia la mente de las personas, en la medida que está llena hasta aquí de terror de la guerrilla. Eso no es una cosa casual, eso es algo premeditado, está dentro de la estrategia de la guerra, de que hay que entrar duro para impactar de alguna forma. Es que realmente lo que estas guerras buscan, lo que define esta guerra, es cómo ganarse la población civil y a la población civil definitivamente se la gana con una estrategia del bueno y del malo, de zanahoria y garrote. Hay que mostrarle el garrote y después hay que mostrarle la zanahoria. ¿Cierto? Porque si uno llega compartiendo dulces al campesino le da más miedo el otro, o sea, entre el fusil de un guerrillero y un dulce, el campesino va por el fusil. Entonces, inicialmente, hay que mostrarle otro fusil (Cívico, 2009, páginas 92-93).

La visión de *Doble Cero* concuerda con los planes estratégicos de las AUC a partir de 1997 y con el objetivo de recuperar aquellas regiones que consideraban sometidas al control de las guerrillas. La estrategia consistía en la combinación de métodos de terror en una fase de incursión y posteriormente de consolidación y legitimación fundada en su capacidad para garantizar la seguridad y atención a necesidades básicas de la población (González, 2002, páginas 61-62).

La presencia del Bloque Metro coincidió con la ofensiva del Frente José Luis Zuluaga perteneciente a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), comandado por Luis Fernando Zuluaga, alias *MacGyver*. No están claras las razones que motivaron su incursión en la ciudad y si existió o no alguna coordinación con *Doble Cero* y con las AUC. Lo cierto es que llevaron a cabo acciones en varios sectores de la comuna 13, áreas de influencia de las FARC, del ELN y de los CAP. Sin embargo, la muerte de algunos de sus integrantes que provenían del área rural lo llevó a desistir del intento.

Pero tampoco el Bloque Metro se logró consolidar ante la confrontación con *Don Berna*, a pesar de algunos intentos de mediación por parte de Carlos Castaño. De acuerdo con la reconstrucción realizada por el periodista Juan Diego Restrepo (2015), apoyada en fuentes judiciales y entrevistas con funcionarios e investigadores judiciales de la Unidad Nacional de Fiscales, *Don Berna* buscó apoyos para atacar al Bloque Metro tanto en el área rural como en la urbana. Inicialmente obtuvo el respaldo de los jefes paramilitares Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias *Macaco*, Éver Veloza García, alias *HH* y Ramiro Vanoy, alias *Cuco Vanoy*. En fuerza sumó el apoyo de los bloques Central Bolívar, Calima y Mineros. Luego movilizó la estructura de la Oficina de Envigado para esa confrontación. Citó a Daniel Alberto Mejía Ángel y a Carlos Mario Aguilar Echeverri, quienes en ese momento tenían el control sobre buena parte de las bandas armadas de Medellín, y les ordenó que conformaran un bloque paramilitar con todos los hombres que pudieran para darle manejo al problema con el Bloque Metro y erradicar las milicias de las guerrillas. “Aquí es donde ‘*don Berna*’, ya como miembro de la autodefensa, se idea ponerle el nombre de Bloque Cacique Nutibara” (Restrepo, 2015, página 102-103).

En cumplimiento de esta orden, Mejía y Aguilar citaron a por lo menos 300 líderes de bandas armadas del Valle de Aburrá a una finca ubicada en zona rural del municipio de Envigado. En esa reunión, los dos emisarios del narcotraficante les dijeron que a partir de ese momento comenzarían a operar como paramilitares del BCN y la muerte sería el castigo para quien no acatara. Así, bajo la presión de la Oficina de Envigado se constituyó una nueva estructura urbana, que entraría a disputarle el territorio al Bloque Metro y a todas las bandas aliadas.

La emergencia del BCN fue vista por integrantes de bandas y combos como una buena oportunidad económica y de cobrar venganza contra las milicias que los habían hecho salir de los barrios, tal como lo relató un exintegrante del BCN:

Los milicianos (nosotros les decíamos los milicianos) llegaban y lo mataban a uno o lo metían por allá en un calabozo. Entonces por eso empezó el conflicto en el barrio, hasta que todo el mundo se cansó y empezó un apoyo [al BCN] y usted sabe que un apoyo uno no lo puede desperdiciar si es por la vida de uno también. Para mí es muy maluco que un *man* esté encima de uno que porque tiene un fierro y que “vení” y hay que hacer las cosas como ellos quieren. Nadie tuvo que pedir nada, el pueblo ya estaba cansado (CNMH, hombres adulto, grupo focal con desmovilizados del BCN, Medellín, 2016).

En el BCN se concentraron los aprendizajes criminales adquiridos por los integrantes de bandas que prestaban sus servicios a la Oficina de Envigado y que de tiempo atrás habían dado muestras de su capacidad militar y su influencia sobre la población, especialmente en sectores donde ejercían el control. A diferencia de lo que pasó en otras ciudades colombianas donde la

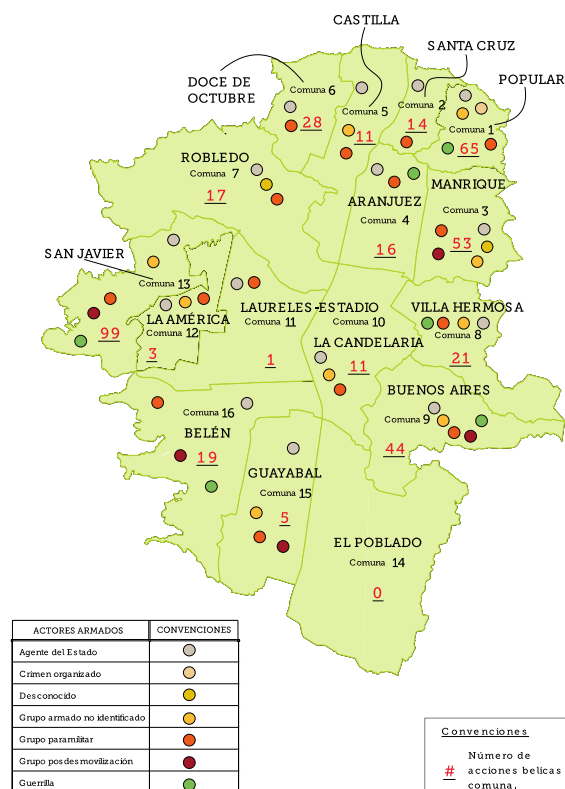
presencia paramilitar fue la resultante de una “estrategia de desplazamiento desde el campo a la ciudad” (Duncan, 2005, página 3), en Medellín se construyó “desde adentro”.

La eficacia de este modelo paramilitar se puso en evidencia en la ofensiva del BCN centrada en territorios de influencia guerrillera. Esta comenzó con su establecimiento en la comuna 7, lugar desde donde se expandió hacia las zonas occidental y noroccidental de Medellín y a los corregimientos de San Cristóbal, Palmitas y San Antonio de Prado, San Félix de Bello e Itagüí, zonas que representaban los bordes donde tenían influencia. Posteriormente incursionaría en los barrios Moravia, El Bosque y El Oasis, Santo Domingo 1 y 2 y los Populares de la zona nororiental, en las comunas 8 y 9 de la zona oriental de la ciudad, finalmente en la comuna 13 el principal bastión de la guerrilla (Gil, 2009, página 81).

El siguiente mapa muestra la presencia territorial y las hostilidades que tuvieron lugar entre grupos armados organizados, de acuerdo a los criterios de clasificación del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH

Mapa 3.

Acciones bélicas por comunas y por actor armado en Medellín: 1980-2014



Fuente: Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto. Centro Nacional de Memoria Histórica (2016).

La derrota de las guerrillas no sólo dependió de su capacidad militar sino de los vínculos de actores armados con instituciones gubernamentales. Así lo indican los resultados de la investigación realizada por el Instituto Popular de Investigación y la Corporación Jurídica Libertad

sobre la impunidad en Antioquia, según la cual la ofensiva paramilitar que se desplegó en Antioquia y en Medellín se hizo posible gracias a la cooptación de la Fiscalía Seccional, durante el período de Luis Camilo Osorio como fiscal general de la Nación (2001-2005). Según esta investigación, se conformó un equipo de “amistosos” con el fin de favorecer judicialmente el proyecto paramilitar, y se contó con la participación de Guillermo Valencia Cossio, encargado de la Fiscalía en Medellín.

Los escándalos mediáticos que afectaron la Fiscalía Seccional Medellín entre agosto y septiembre de 2008 ocasionaron el traslado de Valencia Cossio a Tunja y posteriormente su captura, procesamiento y condena por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, violación de asuntos sometidos a reserva, destrucción de documento público y utilización de información privilegiada para favorecer a un destacado integrante de la estructura paramilitar conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, comandada por Daniel Rendón Herrera, alias *Don Mario* (Bedoya, 2010, página 78).

Los acuerdos que existían con el sector dominante de la Fiscalía General de la Nación para favorecer a varios de los integrantes de la llamada Oficina de Envigado también beneficiaron a *Rogelio*, de quien el mismo ente acusador tenía amplia referencia sobre sus actividades al servicio del paramilitarismo siendo funcionario del CTI y posteriormente como uno de los más importantes miembros de la jerarquía de la Oficina de Envigado, tal como lo destacó un exmiembro de esa organización criminal (Bedoya, 2010, página 63).

Las confesiones del exgeneral Mauricio Santoyo, quien fuera jefe de seguridad de la Casa de Nariño en la presidencia de Álvaro Uribe, comandante de Policía del Gaula en 1996 y comandante del Cuerpo Élite Antiterrorista de 2000 a 2002, ante una corte de Estados Unidos para responder por sus vínculos con la Oficina de Envigado muestra los nexos entre integrantes de las fuerzas militares y las AUC.

Entre el 31 de octubre de 2001 y el 28 de noviembre de 2008, Santoyo “suministró apoyo y recursos materiales” a las Autodefensas Unidas. Hacía chuzadas ilegales para recoger información y ayudarles a las AUC “en la comisión de actos terroristas y narcotráfico”. También admitió que facilitó el traslado de oficiales corruptos a zonas donde les podían ser útiles a las AUC. Alertó a los mafiosos sobre pesquisas de agentes secretos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Colombia contra ellos. Y “notificó a miembros de las AUC que iban a ser capturados, incluso en casos de autoridades colombianas con la DEA” (*Semana*, 2012, 8 de diciembre).

Otro factor que ayudó al éxito del BCN fue el apoyo de sectores económicos y de la población afectada por las acciones de la guerrilla⁷⁹. De acuerdo con información del Tribunal Superior de Medellín (2015, página 121) empresarios privados de diversos sectores (industriales, ganaderos, comerciantes, mineros, bananeros) y en muy distintos niveles promovieron y financiaron las Convivir y los grupos paramilitares. Sin embargo:

Aún no se ha establecido de manera clara si bien dichas empresas y empresarios son extorsionados, financian o mantienen o apoyan dicha estructura paramilitar. Es decir, la información hallada hasta el momento refiere sólo a cuentas y pagos, lo cual mantiene en la penumbra si se está hablando de proveer recursos (voluntariedad) o de pagos obligados por amenazas (obligatoriedad) (Lopera, 2016, página 20).

Aunque la derrota de las guerrillas en la comuna 13 le despejó el camino a un dominio paramilitar, *Don Berna*, quien ya había iniciado acercamientos con el Gobierno, decidió a finales de 2003 desmovilizar gran parte de la estructura del BCN. Acto seguido procedió a la creación del BHG (Bloque Héroes de Granada), como parte de una estrategia para preservar su poder armado y disponer de alternativas en caso de fracasar la experiencia de desmovilización del BCN.

Entre los individuos que se presentaron a esta desmovilización muchos habían pertenecido a estructuras de delincuencia común, pero los más avezados pasaron a integrar la estructura del BHG. Al respecto un exasesor de Paz y Convivencia de la Alcaldía de Medellín manifestó:

Yo creo que el grueso real de lo que se llamaba la Oficina de Envigado era una combinación de enemigos de Escobar y amigos, iba de todo ahí, revuelto. No se entregó en la primera desmovilización por una razón muy simple: no sabían a qué atenerse. Cuando el proceso con el Cacique Nutibara empieza a ser reconocido como exitoso tanto afuera como adentro (...) dependiendo pues de muchas condiciones, los que quedaron por fuera decidieron desmovilizarse. Es que en la segunda desmovilización de la línea Berna, que fue Héroes de Granada, ahí se encontraba usted lo más granado de la delincuencia más peligrosa (CNMH, hombre adulto, entrevista, Medellín, 2016).

⁷⁹ De acuerdo a la versión de Diego Fernando Murillo Bejarano, el Bloque Cacique Nutibara llegó también a Medellín "por solicitud de empresarios y otros líderes del sector privado [...]. Las empresas no sólo financiaron sus actividades, sino que les colaboraron en su funcionamiento y operación" (Tribunal Superior de Medellín, 2015, página 86).



"Se atrevieron a dejar la guerra". Fuente: El Colombiano, 26 de noviembre de 2003, página 1.

Este proceso continuó hasta la desmovilización de 2.036 hombres y mujeres del Bloque Héroes de Granada el 1 de agosto de 2005, en una ceremonia realizada en el corregimiento Cristales, municipio de San Roque, en el nordeste antioqueño (*La Prensa*, agosto 2 de 2005).

2.4. Entre la reinserción y la pertenencia a estructuras criminales (2006-2014)

En el acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y los reincorporados del BCN de las Autodefensas Unidas de Colombia se dispuso la creación de la Corporación Democracia, una entidad que se encargaría de representar a los reincorporados del BCN haciendo las veces de interlocutor ante los gobiernos nacional y local para dar cuenta del avance del proceso de reincorporación a la vida civil de los recién desmovilizados. Los antiguos mandos resultaron ser los rostros visibles de esta organización. En 2005 los desmovilizados del BHG entraron a formar parte de esta corporación y dos de sus jefes del bloque, alias *Danielito* y *Rogelio*, se sumaron al consejo directivo de esta Corporación.

La Corporación Democracia se constituyó formalmente ante la Cámara de Comercio de Medellín el 16 de enero de 2004 y gracias a su articulación con la Alcaldía de Medellín estuvo presente en múltiples aspectos de la reinserción de los jóvenes que provenían de las estructuras de las AUC. Esto le permitió, incluso, recibir algunos recursos a través de la contratación de diversas actividades tanto culturales como deportivas y de intervenciones sociales. De esta manera varios de sus integrantes se empoderaron como nuevos actores sociales que impulsaron pequeñas corporaciones dedicadas a labores comunitarias y al desarrollo de proyectos productivos.

Para atender los retos que planteó este programa se diseñó una intervención integral, simultánea y personalizada que abarcó cinco áreas específicas: atención psicosocial a los beneficiarios (excombatientes y víctimas), sus familias y sus comunidades; estrategias educativas, incluyendo educación primaria, media, no formal y superior; generación de ingresos mediante el apoyo de proyectos productivos y la vinculación al mercado laboral; acompañamiento jurídico; e investigación y memoria histórica. Desde su conformación y hasta mediados de 2009, el Programa de Paz y Reconciliación de Medellín alcanzó a atender 4.332 personas. En junio de 2009 tenía registrados 3.655 participantes (Restrepo, s.f., página 6).

Los logros de este proceso de reincorporación fueron puestos en entredicho en la medida que se hicieron más frecuentes las denuncias de líderes y organizaciones sociales y entidades internacionales y nacionales defensoras de los derechos humanos que decían que la Corporación estaba incumpliendo sus compromisos y era usada como herramienta al servicio de readecuación de las estructuras del crimen.

Don Berna fue capturado en mayo de 2008, cuando 2.000 agentes de la Policía Nacional ingresaron a la zona de distensión paramilitar para hacer cumplir una orden de captura expedida por un fiscal de Montería que lo requería para que respondiera por varios homicidios, en un momento en que se suponía que las acciones armadas de las AUC estaban suspendidas. Fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en Cúmbita (Boyacá), y después fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 al comprobarse que seguía manteniendo nexos con el narcotráfico. Este hecho ahondó la crisis de la Corporación al darse el recrudecimiento de las disputas que se venían presentando entre los directivos que a la vez hacían parte de la Oficina de Envigado.

Después de haberse producido el asesinato de Daniel Alberto Mejía, alias *Danielito*, y Antonio López, alias *Job*, vicepresidente y presidente de la Corporación Democracia, se agudizó la competencia entre los aspirantes a la jefatura de la Oficina de Envigado. La disputa se centró

entre Erickson Vargas, alias *Sebastián*, y Maximiliano Bonilla, alias *Valenciano*. Ambos se consideraban dignos aspirantes dada su amplia trayectoria criminal.

Día a día combos alineados con uno u otro se disputaban el control de barrios y calles a sangre y fuego. Al pronunciarse sobre esta situación, el alcalde Alonso Salazar llamó la atención sobre la utilización de moderno armamento por parte de bandas y combos (*El Espectador*, enero 6 de 2010). La intensidad de los enfrentamientos hizo temer el retorno a una situación similar a la que se vivió en la época de la guerra contra el Estado por parte de Escobar.

En medio de esta disputa, el 1 de febrero de 2010 se anunció el pacto de una tregua entre ambas facciones gestionada por una comisión de notables, presidida por Jaime Jaramillo Panesso, veterano consejero de la Comisión Nacional de Paz, y Jorge Gaviria, exasesor de paz y convivencia de la Alcaldía de Medellín, quien actuó de manera independiente. Esta comisión logró un cese de los enfrentamientos entre estos bandos, pero esto no significó el fin de las acciones armadas de la disputa. Pocos meses después se reiniciaron los enfrentamientos, con el agravante del ingreso de un actor armado interesado en hacer presencia en la ciudad y aprovechar el caos que se había generado en la Oficina de Envigado para establecer su dominio: los Urabeños, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia⁸⁰.

La detención de *Valenciano* el 28 de noviembre de 2011 y luego de *Sebastián* el 8 de agosto de 2012 desactivó la confrontación, aunque se mantuvo la disputa entre los candidatos a suceder en el mando a *Don Berna* y entre esta estructura y los Urabeños. En medio de especulaciones acerca de una crisis y hasta la desaparición de la Oficina de Envigado se tuvo noticia de la realización de un arreglo entre esas agrupaciones (“pacto de fusiles”), producto de una cumbre realizada los 22 y 23 de julio de 2013 en un municipio cercano a Medellín. En este pacto se estableció un cese de los enfrentamientos y una distribución de zonas de influencia, así como el monto de las tarifas de cobro a comerciantes y el control de las plazas de vicio (*El Espectador*, octubre 6 de 2013).

A partir de entonces se configuró un nuevo momento en el que se volvió a poner de presente la capacidad de los actores del crimen para tratar de asegurar su permanencia, pero también, como se señaló en el capítulo anterior, de un fortalecimiento de las instituciones para enfrentarlos y una mayor capacidad de respuesta de la ciudadanía, expresada en la exigencia de una mayor eficacia en materia de políticas contra la inseguridad y cabal desarticulación de las estructuras criminales.

⁸⁰ Este es el nombre con que se conoce a una nueva organización surgida tras el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares colombianos en el período 2003-2008. Es considerada como una de las organizaciones más poderosas del narcotráfico en Colombia. Se conocen en la actualidad como el Clan del Golfo (Insiht Crime, octubre 9 de 2016).

2.5. Síntesis

Las continuidades y los cambios a los que hemos hecho referencia guardan una estrecha relación con la persistencia, por algo más de cuatro décadas, de un conflicto armado cuya intensidad y características condicionaron, en buena medida, el desempeño de los actores armados en la ciudad. Pero también las particularidades locales que, en lo que respecta a Medellín, tienen un peso importante, si se tiene en cuenta que no en todos los casos su quehacer se ajustó a directrices impartidas por sus instancias de dirección. También fue evidente la aparición de grupos o disidencias que optaron por actuar de manera autónoma y acorde con su propia capacidad militar.

El panorama de los actores armados en cada uno de los períodos analizados presenta importantes variaciones, tanto en el caso de las guerrillas como de los paramilitares y el narcotráfico. La trayectoria de cada actor debe ser considerada, dadas las particularidades que presenta, por ejemplo, el paramilitarismo en Medellín, aun después de haber culminado la desmovilización de los bloques paramilitares, por la manera como las disputas entre facciones de la Oficina de Envigado afectaron el orden público y produjeron diversas modalidades de victimización.

Aunque estas transformaciones no fueron exclusivas de Medellín, se vieron favorecidas en la ciudad desde la década de los ochenta por los vínculos que se entretejieron entre milicianos, exmilicianos, guerrilleros, narcotraficantes, integrantes de bandas y de la fuerza pública para doblegar al contendor, obtener recursos económicos para su sostenimiento o para enfrentar al Estado. La trayectoria de figuras como *Don Berna* o *Lucho* en el caso de las milicias, o de milicianos de base que hicieron el tránsito hacia los paramilitares, es muestra de ello.

Esta situación no fue ajena a la de algunos agentes del Estado que, en contravía de su misión de garantizar el orden y la seguridad, se desempeñaron como un actor más del conflicto. De esto es ejemplo la trayectoria de algunos integrantes de organismos de inteligencia de la Policía y otros de la rama Judicial. Por añadidura, este panorama se vio favorecido por la conformación de los Pepes y las Convivir, cuyo desempeño abonó a la configuración del paramilitarismo en la ciudad.

Sin embargo, en Medellín también son notables los cambios en los actores armados, motivados por decisiones que contribuyeron a un desescalamiento del conflicto armado, su desmovilización y reintegro a la vida civil. En la ciudad se han presentado nuevas posibilidades de dejar atrás las agrupaciones guerrilleras y de reducir el poder de los actores del crimen

gracias a acontecimientos como la desmovilización de las milicias, de los bloques de las AUC Cacique Nutibara y Héroes de Granada, de una fuerza pública con más capacidad para enfrentar el crimen y de logros en la implementación de políticas públicas en seguridad y convivencia. Todo esto aunado a la culminación del proceso de negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

3. Modalidades y repertorios de violencias

Para definir las modalidades y el repertorio con que se despliegan las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín en el lapso 1980-2014 es necesario reconocer la complejidad y múltiples combinaciones que se presentan entre los actores, los contextos, los objetivos y los tipos de violencias en la ciudad. Este capítulo describe la dinámica de las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín entre 1980 y 2014 y expone algunas dimensiones de lo que pasó, cómo pasó, cuándo y dónde, quiénes fueron las víctimas y quiénes los posibles responsables. El capítulo se divide en tres partes. En la primera se realiza una periodización de las violencias asociadas al conflicto armado en la ciudad, tomando como eje central las modalidades de violencia. En la segunda se presentan las formas como la gente recuerda y narra los procesos de victimización experimentados en sus entornos íntimos y cercanos. Finalmente se presentan las cifras y estadísticas sobre el despliegue de modalidades de violencia en la ciudad.

3.1. Modalidades y repertorios de violencias en Medellín

Entre 1980 y 2014 Medellín presentó altos niveles de confrontación violenta que se alternaban con momentos de “dominio” de algunos de los competidores armados, y procesos muy heterogéneos de enfrentamiento y negociación del Estado con algunos de ellos. Para comprender las dinámicas de las violencias desatadas en el marco del conflicto armado y el alto número de víctimas que produjeron es necesario dar cuenta de las distintas modalidades y patrones de violencia, y de sus cambios y variaciones a lo largo del tiempo.

En este apartado se presenta la línea cronológica de las violencias asociadas al conflicto armado en la ciudad y se enuncian algunas hipótesis sobre dichas violencias. No se aborda la pregunta sobre la naturaleza general de la violencia homicida en Medellín. Interesan, fundamentalmente, las modalidades de violencia ligadas al conflicto armado. Al respecto se identifican cuatro grandes períodos: las violencias selectivas y el desafío revolucionario (1965-1981); la guerra sucia y la turbulencia (1982-1994); las disputas territoriales y la urbanización de la guerra (1995-2005); y la reorganización de la criminalidad (2006-2014).

3.1.1. Los antecedentes: violencias selectivas y desafío revolucionario (1965-1981)

En varias de las actividades de trabajo de campo se escucharon narraciones que mostraron la segunda mitad de la década de los sesenta y la década de los setenta como un momento en que Medellín se encontraba en relativa calma. Una parte importante de los fenómenos violentos

experimentados en el último lustro de ese período se relacionó con los negocios del contrabando, la producción y comercialización de marihuana y otras drogas ilícitas, y la presencia de grupos articulados al mundo de la criminalidad (Martin, 2012)⁸¹. En ese momento la ciudad aún no alcanzaba la intensidad de hechos violentos de la década siguiente. En los talleres de memoria realizados se evocan de manera lejana algunos asesinatos selectivos, secuestros o amenazas⁸².

En forma paralela a las nacientes violencias asociadas a la criminalidad, la ciudad presencié algunos fenómenos de violencia que estaban emparentados con las manifestaciones y repercusiones locales del conflicto armado nacional. La presencia de guerrilleros en la ciudad en la década de los setenta (Daza, 2016) y la recepción de sus discursos en el movimiento estudiantil, grupos cívicos y comunitarios y algunos

sindicatos⁸³ condujeron al señalamiento, estigmatización y victimización de muchos de estos sectores por parte de los organismos de seguridad del Estado⁸⁴. Sin embargo, como se ha explicado en detalle en capítulos anteriores, durante esos años de marchitamiento de la primavera de la ciudad la articulación de las violencias producidas por las organizaciones criminales y las violencias asociadas al conflicto armado fue bastante baja y, posiblemente, irrelevante.

Las violencias asociadas al conflicto armado en la ciudad durante la década de los setenta se caracterizan por el predominio de formas de victimización ligadas a las lógicas nacionales del conflicto armado, e inscritas en la violencia propiamente política⁸⁵. Durante esos años se destacan, en primer lugar, las violencias desplegadas por agentes del Estado o la violencia institucional contra sectores que (real o presuntamente) desafiaban sus formas de dominación. En

⁸¹ Esas violencias se refieren a los asesinatos producidos por las pugnas internas y los ajustes de cuentas entre contrabandistas o narcotraficantes realizados por matones a sueldo, el aumento de las extorsiones, los robos bancarios y de vehículos, los secuestros extorsivos, las lesiones personales y el asesinato de funcionarios de la rama Judicial o miembros de los organismos de seguridad del Estado encargados de enfrentar a las organizaciones criminales.

⁸² CNMH, taller de memoria con víctimas, Medellín, 2015; CNMH, taller de memoria con habitantes de La Loma, Medellín, 2015; CNMH, taller de memoria con mayores de cuarenta años, Medellín, 2015.

⁸³ En las actividades de campo realizadas con sectores políticos y sociales cercanos a ideologías de izquierda, los participantes señalaron que el período que va de 1970 a 1982 se caracterizó por la presencia en la ciudad de movimientos sociales articulados al Partido Comunista (PC). Los asistentes al taller de familiares de la UP recuerdan que entre 1972 y 1979 se empezaron a conformar grupos juveniles, a proyectar películas alusivas a la izquierda en el Teatro Ópera y a promover concursos de cuentos y de pintura para niños y jóvenes de la ciudad. Estas actividades buscaban formar políticamente a las generaciones más jóvenes (CNMH, taller de memoria con familiares de la UP, Medellín, 2015). Como lo señala Ana Daza, las guerrillas también fueron una puerta a un mundo de relaciones interpersonales, de construcción de identidades personales y colectivas y de sentido de vida para muchos jóvenes desencantados con el escenario político del Frente Nacional y la predominancia política del bipartidismo (Daza, 2016, página 10).

⁸⁴ Los defensores de derechos humanos identificaron en un grupo focal la década de los setenta como un período de amplias movilizaciones, muchas de ellas asociadas a movimientos estudiantiles y populares que se conectaban con procesos nacionales, y que tenían algunas simpatías con ideologías de izquierda. Sin embargo, anotan que a la par que se estaba gestando el discurso de los derechos humanos en la ciudad, empezaron a hacerse señalamientos que los vulneraban.

⁸⁵ En su definición más genérica ella hace referencia a la violencia ejercida por un grupo para incidir en las decisiones políticas (Bobbio, Mateucci, Pasquino, 2000, páginas 1.627-1.628).

segundo lugar, están las violencias ejercidas por actores que se inscriben en las violencias de impugnación política (Crettiez, 2009, página 96), es decir, formas de victimización referidas al enfrentamiento de grupos guerrilleros con el Estado y, en algunos casos muy específicos, violencias relacionadas con la manifestación violenta de un grupo de civiles que busca expresar su malestar con las instituciones públicas o con las decisiones de un gobierno específico.

Entre 1976 y 1981 el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH y el RUV⁸⁶ registran 150 víctimas relacionadas con las violencias asociadas al conflicto armado en la ciudad. Estos eran años de violencias discriminadas y selectivas de baja intensidad que respondían a las lógicas de victimización de sociedades que se encuentran sometidas a los desafíos de grupos armados no estatales que luchan por el poder político, y las fuerzas armadas estatales que pretenden conservarlo. Las modalidades de victimización incluían, fundamentalmente, asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias⁸⁷, secuestros extorsivos y políticos, ejecuciones extrajudiciales y la aplicación de formas de justicia de retaliación⁸⁸ ejercidas por las guerrillas contra los que llamaban “enemigos del pueblo” o los “traidores de clase”.

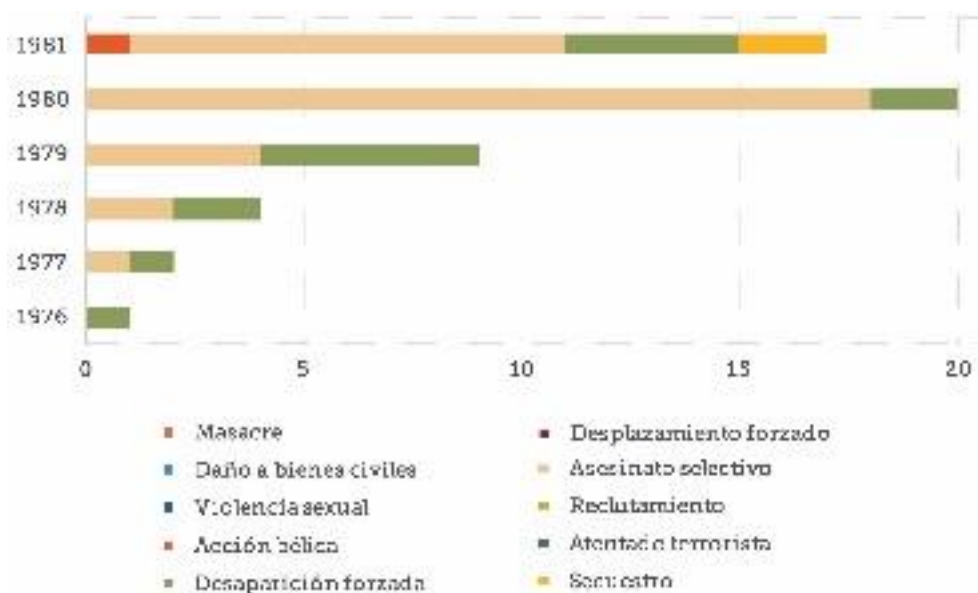
Gráfica 3.

Dimensiones y modalidades de las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín: 1976-1981

⁸⁶ Del RUV se toman, únicamente, las cifras referidas al desplazamiento forzado intraurbano.

⁸⁷ Por ejemplo, en julio de 1979 fue allanada la sede del Frente Sindical Autónomo; en agosto de ese año agentes del B2 realizaron un allanamiento en la casa del fiscal del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Comercio y en noviembre de ese año fue detenida la presidenta de ese sindicato por su presunta participación en el robo de unas armas resguardadas en las bodegas del almacén el Ley, ubicado en Manrique. En enero de 1982 fue detenido el exfiscal de Sintracomfama y en mayo de ese año fueron detenidos tres miembros de la junta directiva de Sintrabanca (ENS, 2016, páginas 5 y 82).

⁸⁸ La justicia retaliadora tiene una motivación vindicativa. Ella se orienta fundamentalmente a anunciar o aplicar castigos a los enemigos o traidores del grupo armado que la realiza. Por lo general, viene asociada a consignas como: “Las deudas de sangre se pagan con sangre”; “los cuerpos se entierran, la sangre se venga” (Aguilera, 2014, páginas 255-256).



Fuente: Elaboración propia, basada en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016.

En términos generales, esas formas de victimización se relacionaban con la aplicación del Estatuto de Seguridad Nacional y la agudización de la represión estatal durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). Este Estatuto es un referente importante en los relatos de varios de los asistentes a las actividades de campo, cuando señalaban que sus labores o las del sector que representaban se vieron afectadas por la represión que caracterizó a ese gobierno. Dicho Estatuto fue visto por ellos como el detonante de violencias como la desaparición forzada, la tortura, los allanamientos y las detenciones arbitrarias perpetradas, principalmente, por parte de miembros del B2, del Ejército, del F2 de la Policía, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y del Departamento de Orden Ciudadano (DOC).

Estas violencias acotadas y regentadas por el Estado comenzaron a transformarse, fundamentalmente, con el surgimiento del MAS. La aparición en escena de esta organización criminal y sus confrontaciones con la guerrilla del M-19 y contra todas aquellas organizaciones que cometían secuestros marcaron, según muchos testimonios, un punto de inflexión en las violencias asociadas al conflicto armado en la ciudad, porque rápidamente esta organización se convirtió en un rótulo que encubría, de un lado, las acciones ilegales perpetradas por organizaciones cercanas a las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad del Estado contra posibles apoyos, simpatizantes y cuadros de las organizaciones guerrilleras⁸⁹. De otro lado, las acciones de exterminio perpetradas por organizaciones cercanas a los organismos de

⁸⁹ De acuerdo con el portal *Verdad Abierta* (s.f.) en esa época se veían “cadáveres de hombres acribillados, estrangulados y colgados en árboles, dejaban al descubierto la crudeza de las nuevas técnicas del mensaje antisubversivo. Periodistas, juristas y sindicalistas ampliarían la lista negra de este “escuadrón de la muerte” que ahora perseguía tanto insurgentes como a inocentes. No obstante, debido a la complejidad de la organización interna del MAS, es difícil establecer la autoría intelectual y material de muchos atentados y acciones que aún permanecen en la impunidad”.

seguridad del Estado y la Policía contra habitantes de calle, consumidores de sustancias psicoactivas, mujeres en ejercicio de prostitución, expendedores de drogas y ladrones⁹⁰.

Hasta comienzos de la década de los ochenta, en Medellín las violencias asociadas al conflicto armado rara vez se cruzaron con las violencias asociadas al narcotráfico y el crimen organizado⁹¹. Sin embargo, entre 1981 y 1984 se empezaron a presentar entrecruzamientos de esos dos mundos y se volvieron más porosas las fronteras entre las acciones perpetradas por esos actores. A partir de esos años Medellín comenzó a vivir una profunda crisis marcada por la superposición o entrecruzamiento de múltiples violencias: del Estado contra los comandos guerrilleros con presencia en la ciudad, contra algunos grupos paramilitares y contra sectores del narcotráfico y la delincuencia; del paramilitarismo contra las guerrillas y sectores del Estado; de las guerrillas contra el Estado, los paramilitares y las mafias; del narcotráfico contra el Estado y la insurgencia; y de las milicias contra el Estado y las bandas.

3.1.2. Guerra sucia y turbulencia: los años de la violencia (1982-1994)

A partir de 1982 las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín se inscribieron en un contexto profundamente turbulento que hacía difícil diferenciar claramente los objetivos buscados y los medios empleados por los diferentes protagonistas. En ese escenario encontramos al capo Pablo Escobar, un antiguo ladrón de lápidas, que ahora combinaba formas de violencia indiscriminada y selectiva para poner en jaque al Estado colombiano; a un Estado que aceptaba apoyos de otros narcotraficantes para enfrentar al capo; a unas fuerzas militares y unos organismos de seguridad del Estado que, por un lado, eran las principales víctimas de la guerra declarada por el narcotráfico y, por otro, toleraban apoyos del narcotráfico para desarrollar su guerra contrainsurgente; a narcotraficantes que asumían labores de violencia política en concesión y ejecutaban acciones contra presuntos colaboradores y simpatizantes de los movimientos guerrilleros; a militares, paramilitares y narcotraficantes desplegando formas de violencia selectiva contra defensores de derechos humanos, maestros, sindicalistas y líderes estudiantiles, sociales y comunitarios; a grupos guerrilleros que apelaban a formas de violencia propias del mundo de la criminalidad para obtener recursos o ventajas militares; a organizaciones de la delincuencia común contratadas por las guerrillas para realizar secuestros y actos orientados a desestabilizar al Gobierno; a grupos guerrilleros que desaparecían y ejecutaban a algunos de sus militantes con el objetivo de garantizar la pureza de las filas o restablecer equilibrios con otros actores del conflicto; a grupos guerrilleros que amenazaban o asesinaban a

⁹⁰ “El acrónimo de MAS fue incluso adoptado por las fuerzas de seguridad para encubrir las operaciones paramilitares llevadas a cabo por miembros de las fuerzas armadas en distintas partes del país”. Amnistía Internacional (2005).

⁹¹ Como se señaló atrás, el único cruce significativo, pero en todo caso coyuntural, fueron las acciones iniciales del MAS contra los militantes del M-19.

civiles que presumiblemente eran informantes de los organismos de seguridad del Estado o que se consideraban *reaccionarios*⁹²; y a grupos de milicias en confrontación con el Estado que inclusive protegían a policías en sus barrios para que no fueran objetivo del plan pistola ordenado por Pablo Escobar.

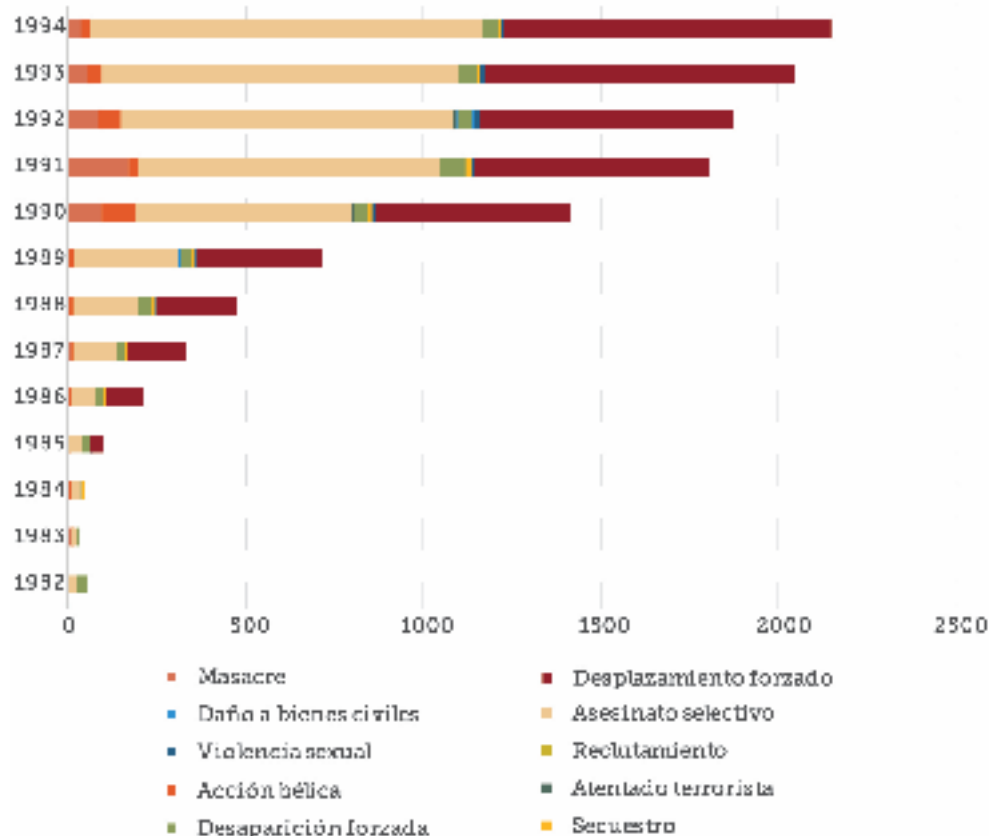
En términos de los procesos de victimización, el período entre 1982 y 1994 estuvo marcado por el aumento general de las formas de violencia, lo cual se puede ver en las 11.249 víctimas de las violencias asociadas al conflicto armado en la ciudad registradas por el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH y el RUV. El incremento en las cifras se asocia con los complejos entrecruzamientos entre las formas de violencia desplegadas por los distintos actores con presencia en la ciudad y, fundamentalmente, con el incremento de la guerra sucia, el desarrollo de la confrontación entre el grupo de los Extraditables⁹³ y el Estado colombiano y la expansión, auge y crisis del proyecto miliciano en la ciudad.

Gráfica 4.

Dimensiones y modalidades de las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín: 1982-1994

⁹² En Medellín fue tristemente célebre el caso del profesor del Liceo Antioqueño Diego Roldán: “que los NEG habían asesinado en medio de una clase, acusándolo de ser del B2” (Medina, 2006, página 164).

⁹³ El grupo de los Extraditables apareció a mediados de los ochenta con el objetivo de detener el tratado de extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos. Este grupo se atribuyó, entre otras, la muerte del coronel de la Policía de Antioquia, Waldemar Franklin Quintero, el asesinato de policías a través del denominado “plan pistola”, así como el secuestro de los periodistas Diana Turbay, Azucena Liévano, Juan Vita Richard Becerra, Hero Bush, Francisco Santos, Maruja Pachón y Gloria Villamizar. Además, pusieron varios carro-bombas en distintas ciudades del país, con el fin de presionar al Estado colombiano para no aceptar la extradición. El grupo estaba conformado por los principales capos del narcotráfico: Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder, y Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa. Este grupo se disolvió en 1991 cuando se decidió no aceptar la extradición en la Asamblea Nacional Constituyente (*El Tiempo*, 4 de julio de 1991).



Fuente: Elaboración propia, basada en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016.

El fracaso de los procesos de negociación realizados por el presidente Belisario Betancur, que llevó a la expansión de los frentes guerrilleros, el aumento del número de hombres en armas, la consolidación del paramilitarismo y los avances en la construcción de opciones políticas impulsadas desde la izquierda insurgente, estuvo acompañado por el aumento de los indicadores de violencia, la extensión general de la “guerra sucia” y la persecución a líderes de izquierda, sociales y comunitarios, estudiantes y sindicalistas, opositores del Estado, militantes del Partido Comunista y defensores de derechos humanos.

En uno de los talleres de memoria los sindicalistas señalaban que “la década de los ochenta, llamada la época de la guerra sucia, fue dura para todos los movimientos sociales. Era la época en que pasábamos de velorio en velorio, y nos vimos en peligro muchas veces” (CNMH, hombre, taller de memoria con sindicalistas, Medellín, 2015). El trasfondo de esta afirmación son los 74 sindicalistas asesinados en la ciudad entre 1984 y 1994 (ENS, 2016)⁹⁴, la desaparición forzada de personas que militaban en la izquierda, el asesinato de nueve profesores que tenían vínculos con la Universidad de Antioquia y seis estudiantes entre los años 1987 y 1994⁹⁵, la persecución,

⁹⁴ Los casos más emblemáticos fueron Luis Felipe Vélez (25 de agosto de 1987); Tiberio de Jesús Jaramillo Ruiz (15 de octubre de 1987); Juan Diego Arango Morales (5 de mayo de 1988); Heliodoro de Jesús Rojas Olarte (12 de marzo de 1991); José Oliverio Molina (27 de febrero de 1993); Hugo de Jesús Zapata y Carlos Posada (26 de septiembre de 1994); Guillermo Marín (28 de junio de 1994). Fuente: ENS, 2016.

⁹⁵ Los profesores fueron: Diego Roldán (marzo 2 de 1982); Darío Garrido (agosto de 1987); Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur (agosto 25 de 1987); Carlos López (agosto 3 de 1987); Pedro Luis Valencia (agosto 14 de 1987); Emiro Trujillo y Leonardo Lindarte (octubre 31 de 1988); Marco Aurelio Pérez (noviembre 18 de 1994) y Luis Fernando Vélez (diciembre 17 de 1987). Los estudiantes fueron: Edisson Castaño (julio de 1987); Ignacio

acoso, asesinato o desaparición de decenas de militantes de la UP, el Frente Popular y A Luchar⁹⁶, la masacre de integrantes de la Juventud Comunista (Juco)⁹⁷ y el asesinato de los integrantes del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Se trataba fundamentalmente de la configuración de una forma de violencia retaliadora contra las personas que eran señaladas de ser “subversivos de ciudad” (Martin, 2014, página 185).



“Ametralladas ocho personas en la casa de la Juventud Comunista”. Fuente: El Colombiano, 25 de noviembre de 1987, página 18b.

En el contexto de la guerra sucia y la turbulencia, las guerrillas y grupos milicianos existentes en la ciudad también amenazaron y asesinaron a maestros, líderes sociales, comunales, estudiantiles y sindicales porque se les consideraba informantes de los organismos de seguridad del Estado. Igualmente extorsionaron y secuestraron a miembros de la élite, amenazaron a políticos tradicionales, atacaron con explosivos sedes gremiales y políticas, amenazaron y asesinaron a gerentes y jefes de personal de algunas empresas presentes en la ciudad, y ajusticiaron a militantes y simpatizantes de las mismas guerrillas en sus purgas internas.

Uno de los años más importantes de este período es 1987, asociado por los participantes en esta investigación a la sensación de desasosiego producida por el asesinato de Héctor Abad Gómez el 25 de agosto.

Londoño (julio de 1987); John Villa, (julio de 1987); José A. Sánchez (julio de 1987); Orlando Castañeda (octubre 20 de 1987); Yowaldin Cardeño (julio de 1987) y Rodrigo Guzmán (octubre 17 de 1987). Fuente: Pérez, 2016, página 14.

⁹⁶ Los casos más emblemáticos fueron: Jorge Enrique Soto Gallo (desaparecido, 15 de julio de 1985), Pedro Luis Valencia (14 de agosto de 1987), Alberto León Muñoz Lopera (6 de noviembre de 1987); Francisco Eladio Gaviria Jaramillo (10 de diciembre de 1987); Carlos Gónima López (22 de febrero de 1988), Hernando Gutiérrez (22 de abril de 1988), Humberto Higuera Lancheros (7 de junio 1988), Alejandro Cárdenas Villa (28 de junio de 1989), Gabriel Jaime Santamaría (26 de octubre de 1989). Fuente: Gil, 2016.

⁹⁷ El 24 de noviembre de 1987 murieron en esta acción Orfelina Sánchez, María Concepción Bolívar, Iriam Zuluaga, Luz Marina Rodríguez, Pedro Sandoval, Marlene Arango Rodríguez y Lía Hernández. Fuente: Gil, 2016, página 32.



"Asesinados los médicos Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur T.". Fuente: *El Colombiano*, 26 de agosto de 1987, página 11A.

En el trabajo de campo se realizaron varias referencias a esta muerte y a los impactos, daños y transformaciones que trajo para ciertos sujetos y grupos en la ciudad, especialmente para los sectores políticos de izquierda. Con la muerte de Héctor Abad el enemigo se desdibujaba y cualquiera que se considerara una "amenaza" podía ser eliminado.

Era una cosa muy loca porque la ciudad estaba viviendo un ritmo [...] a los dos, tres años, entendimos que ya no había caso seguir resistiendo y que había que salir, sobre todo por la muerte de Héctor Abad Gómez y de Leonardo [Betancur]. Después de esto dijimos "aquí no hay nada, sálvese quien pueda". En ese año, el 87, todo lo que era la Universidad de Antioquia fue muy duro, porque fue una barrida muy dura. Pero eso, la muerte de Héctor Abad fue tocar fondo porque no había condiciones para seguir resistiendo y sobreviviendo. Sólo quedaron las grandes personas que tenían esquema de seguridad (CNMH, testimonio hombre, grupo focal víctimas de desaparición forzada, Medellín, 2015).

Este asesinato, tal como lo muestra el testimonio anterior, afectó de manera profunda a varios sectores sociales y políticos de la ciudad, no sólo por el papel que Abad representaba como médico, docente universitario y defensor de derechos humanos, sino también por el hecho de ser un personaje que no estaba asociado con facciones radicales de la izquierda o con activismos políticos armados. Después de este magnicidio muchos defensores de derechos humanos y líderes políticos y sociales salieron del país para resguardar su vida (CNMH, taller de memoria con profesores de la Universidad de Antioquia, Medellín, 2015), o "bajaron el perfil" para no ser reconocidos como simpatizantes de la izquierda. Sin embargo, los asesinatos selectivos continuaron hasta finales del período, lo que ayudó a desmontar una muy buena parte de los

movimientos sociales, culturales, políticos y artísticos que se gestaban en la ciudad a finales de los años ochenta.

Yo creo que el asesinato de tanto compañero [sindical y político] obedece a asumir una posición de izquierda que era, y aún hoy es, prohibida en el país. La derecha nunca ha permitido que les entremos al corral. El hecho de la izquierda intentar participar en política electoral es muy complicado para ellos, no lo permiten. Ese fue uno de los factores fundamentales por los cuales se asesinó a tanto compañero, no sólo sindicalistas sino también maestros, porque había maestros que tenían una vida tranquila, pero en medio de las estrategias de frenar a los otros sectores, estaba matar gente de la vida común y tranquila para afectar a los otros sectores. Esto fue del 84-85 al 93, una época muy dura (CNMH, grupo focal con sindicalistas, Medellín, 2015).

El asesinato de Héctor Abad Gómez cobra sentido porque sintetiza otros hechos victimizantes que también fueron narrados en los talleres de memoria: la desaparición forzada de Luis Fernando Lalinde Lalinde, el 3 de octubre de 1984; el asesinato de Pedro Luis Valencia, médico, miembro del Comité de Derechos Humanos de Antioquia y congresista de la UP, el 14 de agosto de 1987; los asesinatos de Leonardo Betancur, profesor de la Universidad de Antioquia y miembro del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, y de Luis Felipe Vélez, integrante del Frente Popular y presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), el 25 de agosto de 1987; el asesinato de Carlos Mauro Hoyos, procurador general de la Nación, el 25 de enero de 1988; el asesinato de Carlos Gónima Gómez, militante del Partido Comunista colombiano y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, el 22 de febrero de 1988; el asesinato de Gabriel Jaime Santamaría, diputado de la UP, el 26 de octubre de 1989; y el asesinato de Guillermo Marín, el 28 de junio de 1994 y Hugo Zapata, el 26 de septiembre de 1994, sindicalistas y directivos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En el contexto de la guerra sucia también aumentaron los reportes de desaparición forzada. En varios de los escenarios de campo se puso de presente la necesidad de reconocer la responsabilidad del Estado en la aplicación de este tipo de modalidades. Este asunto fue señalado, especialmente, por organizaciones sociales y políticas como el capítulo Antioquia de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y el movimiento Los Amigos de José, organización conformada para reivindicar la desaparición del estudiante de la Universidad de Antioquia José Mejía.

La desaparición forzada era una de las formas de violencia más temida y representativa de este período, pues estaba cargada de una profunda crueldad porque el daño trasciende a los familiares y amigos. Cuando se desconoce el paradero de una persona la sensación de miedo e

incertidumbre se vuelve constante, dado que alrededor de cada hecho se construyen muchas hipótesis de lo que presuntamente pudo haber pasado. Además, esta forma de violencia estaba acompañada de otras victimizaciones como la detención arbitraria y la tortura. Una artista de la ciudad narró su encuentro con esta forma de violencia de la siguiente manera:

Hubo un hecho de violencia que marcó mi vida y es que a escaso un año o año y medio de yo incursionar en esto: mi compañero fue desaparecido y yo ya tenía una bebé de cuatro meses con él. Fue mi primer encuentro con la violencia, fue muy duro, fue descubrir que todos esos sueños, que toda esa lúdica, toda esa belleza, que todo eso tan grande, tan noble que albergábamos en el corazón, que queríamos cambiar el mundo (es que no lo queríamos, estábamos convencidos que lo íbamos a cambiar) no era que lo queríamos ni lo soñábamos y que era posible transformar el otro, tocar el otro desde el amor, que era posible construir una nueva sociedad, todo eso se vino abajo con un hecho tan duro. Fue muy duro, tenía 18 años y medio con una bebé de cuatro meses y empezaron a perseguirnos como locos, no sabíamos quién hasta que nos allanaron las casas y fue el Ejército, ese fue un hecho desde la oficialidad, se “enamoraron” (así textualmente lo decían cuando nos allanaron las casas) como un mes antes de la desaparición, quince días antes (CNMH, testimonio mujer, grupo focal con creadores, Medellín, 2015).

La turbulencia de este período también está marcada por la incertidumbre que representaba la desaparición forzada para la memoria de una generación. Esta modalidad de violencia detuvo procesos sociales, culturales y comunitarios, frenó acciones políticas y generó desasosiego en aquellos sectores más afectados por esta.

3.1.2.1. Las violencias indiscriminadas



A partir de 1984 la memoria de la mayor parte de los interlocutores del trabajo de campo asocia las violencias de la ciudad con los impactos, daños y transformaciones que trajo consigo el narcotráfico y la guerra de Pablo Escobar contra el Estado colombiano. Esta tuvo como máximas expresiones los atentados terroristas contra instalaciones y patrullas de la Policía, los magnicidios, los asesinatos selectivos de políticos y funcionarios de la rama Judicial, los atentados contra civiles, el “plan pistola” contra miembros activos de la Policía nacional, los atentados terroristas contra funcionarios de los organismos de seguridad del Estado (Orozco, 2010) y la realización de secuestros extorsivos para financiar sus acciones contra el Estado, y secuestros políticos y de familiares de las élites nacionales, para presionar al gobierno de turno y para posicionar los mensajes del autodenominado grupo de los Extraditables en contra de la extradición (Lopera, 2016, página 30). A esto se suma el asesinato de miembros del empresariado y las élites que criticaban públicamente sus acciones⁹⁸.

El 18 de diciembre de 1989, Roberto Mauricio Toro Quintero, primo de la víctima, fue secuestrado por el grupo de los Extraditables. El comerciante fue dejado en libertad el 14 de enero, cuando los captores lo dejaron atado a la reja de una residencia en el barrio Laureles. En esa ocasión, Toro fue portador de un mensaje de los Extraditables al Gobierno (*El Tiempo*, 10 de noviembre de 1990).

Escobar le puso un matiz distinto a la violencia retaliadora. Su guerra estuvo marcada por el predominio de formas de victimización indiscriminadas relacionadas, fundamentalmente, con los ataques terroristas perpetrados entre 1988 y 1993. Estos ataques marcaron la representación de la década de los ochenta como “la época de las bombas”⁹⁹. A esto se sumaban otros lugares como las estaciones de policía y los Centros de Atención Inmediata de la Policía Nacional (CAI), que se volvieron lugares de paso prohibido. Las familias de policías asesinados recuerdan lo importante que era resguardar la identidad policial, pues los atentados venían de los más cercanos, incluso de vecinos o amigos de toda la vida. De esta forma evitaban no sólo la muerte, sino que protegían a familiares y desconocidos que podían estar con ellos o cruzando junto a ellos al momento de un atentado. Para los policías la acción del terrorismo y el “plan pistola” supuso, además, quedarse a dormir en las estaciones o evitar salir de sus casas con el uniforme

⁹⁸ Dos casos emblemáticos fueron el asesinato de Pablo Peláez, quien fue alcalde de Medellín entre mayo de 1984 y agosto de 1986, y Germán Posada (Lopera, 2016, página 31).

⁹⁹ El atentado con carro bomba contra Antonio Roldán Betancur el 4 de julio de 1989, el asesinato del coronel Waldemar Franklin Quintero el 18 de agosto de 1989, el carro bomba en el puente del Pandequeso contra el grupo élite de la Policía el 11 de abril de 1990 y el atentado con carro bomba contra la Escuela Carlos Holguín de la Policía el 13 de diciembre de 1990 aparecen como lugares de memoria por las implicaciones que tenía el hecho de que en cualquier lugar las personas podían encontrarse con la muerte.

puesto para no ser identificados. Por ello pedían a sus esposas que camuflaran los uniformes entre ropa sucia o que se los llevaran hasta las estaciones de Policía para ponérselos allí (CNMH, taller de memoria con familiares de policías asesinados, Medellín, 2015). En un estudio adelantado por Juan Carlos Ruiz se afirma que entre 1990 y la muerte de Escobar a finales de 1993 murieron 153 policías en la ciudad de Medellín (Ruiz, 2015, página 19).



"Él iba a trabajar a Rionegro y él tenía un carrito Renault 12 y siempre cogía las torres de Bomboná pa' coger carretera pa' Santa Helena. Cuando yo llamo al comando de Rionegro y pregunto yo 'me comunica con el agente X' y me dicen 'mi señora habló con mi teniente' y yo 'buenos días hablas con la señora de X'. 'Mi señora X tuvo un atentado, a él lo mataron' y yo 'ay no, no me diga eso'. Yo me arrodillé y lloraba y decía 'no me diga eso, yo le entrego todo lo que tengo, le entrego la casa, todo, pero dígame que es mentira'. 'No señora, a él lo mataron'" (CNMH, mujer, taller familiares de policías, Medellín, noviembre de 2015). Fotografía: Corporación Región.

El impacto del terrorismo sumado a la incertidumbre de su acción implicaba para quienes habitaban la ciudad una sensación de que cualquier cosa podía pasar. El atentado en la plaza de toros La Macarena el 16 de febrero de 1991¹⁰⁰, la masacre en el restaurante Oporto el 23 de junio de 1990¹⁰¹, y la del bar El Viejo Baúl el 4 de abril de 1990¹⁰² son centrales en la memoria de la ciudad porque mostraban que el terrorismo y la violencia del Estado en contra del Cartel de Medellín podía incluir objetivos civiles de todos los estratos sociales, lo que hacía que la violencia

¹⁰⁰ "El carro bomba, con unos 150 kilos de dinamita y metralla, fue colocado debajo del puente de la avenida San Juan y activado por un mecanismo de control remoto en momentos en que la gente salía de la corrida de toros de ese sábado. En el hecho perdieron la vida 28 personas, entre ellas tres suboficiales y seis agentes de la Policía. Además, quedaron heridas otras 140 personas" (*El Tiempo*, 23 de mayo de 1995).

¹⁰¹ El 23 de junio de 1990, pasadas las 10 de la noche, hombres armados arribaron al bar y, después de separar a los hombres de las mujeres, comenzaron a disparar. El saldo fue 23 muertos y 3 heridos (Hacemos Memoria, 2016).

¹⁰² "El 4 de abril de 1990, un grupo de hombres armados irrumpió en el bar El Viejo Baúl, en Medellín y mató seis personas inocentes. Pese a que se hicieron las denuncias correspondientes, la Policía nunca mostró demasiado interés en hacer una reconstrucción de los hechos o abrir una investigación seria sobre el caso. Se decidió que había sido una confusión. Sin embargo, el entonces alcalde, Juan Gómez Martínez, se pronunció sobre el hecho declarando el 6 de abril de 1990 a *El Colombiano*, «lamentablemente han ocurrido estas masacres sin haber podido hacer nada a tiempo». Cuando se le preguntó sobre la presunta participación de miembros de la Policía en esas matanzas el alcalde dijo «en casos como estos siempre hay rumores infundados y otros ciertos pero nada se puede afirmar mientras no se investigue y no se diluciden los hechos» (Delaube, 2015).

no se limitara exclusivamente a los ataques a las oficinas estatales, los cuarteles y vehículos de la Policía, o la sede de los organismos de seguridad del Estado.

Los papás no nos podían dejar rumbear porque los escenarios de fiesta se volvieron escenarios de terror. Los padres de los ochenta y los noventa quedaron marcados con las masacres que hubo en bares y discotecas: Oporto, Escarcha, El Viejo Baúl (CNMH, conversatorio con Casa NN, Medellín, 2015).

Esto supuso otras maneras de entender, trasegar y habitar la ciudad. El empresario y hombre cívico Nicanor Restrepo Santamaría describía así la situación:

Los atentados contra personas y bienes alcanzaron características gravísimas. El aumento del delito estuvo acompañado de una postración de la justicia [...] el crimen organizado imperó y la sociedad amenazada no encuentra apoyo suficiente para la lucha contra tales poderes [...]. Las acciones terroristas alcanzaron características gravísimas. La presencia del delito se recrudeció por la incapacidad del sistema judicial para enfrentarlo, el crimen organizado siguió amenazando la sociedad y el derecho a la vida se vio seriamente cuestionado por los crímenes políticos y por el asesinato común (Restrepo Santamaría, 2011, página 221).

La respuesta a los asesinatos de policías en la ciudad fue la irrupción de carros fantasmas y motos en los barrios disparando indiscriminadamente contra los jóvenes que se encontraban departiendo en las esquinas, parques, canchas, bares, billares y tiendas¹⁰³. Las masacres cometidas durante estos años responden, fundamentalmente, a la retaliación de integrantes de la Policía que aplicaban formas de justicia privada contra supuestos aliados de Escobar. En las memorias de la ciudad la masacre de mayor impacto fue la del barrio Villatina, ocurrida el domingo 15 de noviembre de 1992, cuando tres carros con 12 encapuchados se detuvieron en la calle 54 con la carrera 17, una cuadra antes de la iglesia Nuestra Señora de Torcoroma, y asesinaron a 8 menores de edad y un joven de 20 años¹⁰⁴.

Las masacres, además, estuvieron acompañadas de algunos volantes o panfletos que se repartían en los barrios para avisar de lo que sucedería: “Yo me acuerdo que llegaban volantes

¹⁰³ “A medida que sucedían las muertes de políticos, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, y a cada una de ellas se asociaba la imagen de un joven sicario, aumentaban las representaciones de una otredad violenta y la actitud discriminatoria hacia los jóvenes marginales [...]. Entre 1987 y 1990, más del 78 % de las víctimas de muertes violentas en Medellín fueron jóvenes entre los quince y los veinti cuatro años” (Riaño, 2006, página 30).

¹⁰⁴ La masacre dejó nueve víctimas, seis de ellos ejecutadas en la esquina de los hechos: Ricardo Hernández, 17 años; Ángel Barón, 16 años; Marlon Álvarez, 17 años; Nelson Flórez, 17 años; Giovanni Vallejo, 15 años y Jhony Cardona, 17 años. Y tres personas más a una cuadra del primer lugar de los hechos: Johana Mazo, 8 años; Óscar Ortiz, 17 años y Mauricio Higueta, 20 años. El 2 de enero de 1998 el Estado colombiano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en el caso 11141) la participación por parte de miembros de las fuerzas policiales y militares en la masacre (Delaurbe, 2015).

avisando de masacres” (CNMH, grupo focal con creadores artísticos, Medellín, 2015). Esto se presentó en Medellín, pero también en el Área Metropolitana, especialmente en aquellos barrios donde tuvo injerencia Pablo Escobar.

3.1.2.2. Las disputas por el control territorial

Las personas recuerdan los años de la violencia (1982–1994) como un período caótico y confuso en el que se cruzaban distintos actores armados y múltiples modalidades de violencia. En medio de ese panorama turbulento, los habitantes de la ciudad rememoran los asesinatos selectivos y las masacres cometidas contra jóvenes y personas que no se consideraban aptos para la vida social por tener conductas que eran consideradas inapropiadas (vagos, indigentes, recicladores, jóvenes en situación de calle, ladrones y consumidores de droga), por tener comportamientos que se consideraban desviados (trabajadoras sexuales, gais, lesbianas y travestis), o por ser vistos como peligrosos (jóvenes señalados de pertenecer a las bandas y combos). Las zonas nororiental y noroccidental, el centro de la ciudad y la Plaza Minorista de Medellín fueron identificadas en los ejercicios de campo como unos de los lugares en los que se efectuaron asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados a causa de la estrategia de “limpieza social”. La sensación de miedo y de desprotección provocada por estas formas de violencia aparece claramente delineada en el siguiente testimonio de una integrante de la población transgénero de Medellín:

En los años noventa había un impacto de lo que pasaba con mis compañeras [mujeres trans]. El miedo a salir a la calle. A una la ahorcaron, entonces uno se pregunta ¿cuándo me toca a mí? Para esas fechas escuchaba que había muchos muertos, 864 personas asesinadas por orientación sexual, para esa época todos éramos gais o maricas. Para los años noventa a mí me daba mucho miedo salir a la calle (CNMH, taller de memoria con sector LGTBI, Medellín, 2015).

Las memorias asocian a los victimarios con organismos de inteligencia y seguridad del Estado como el B2, el F2, el DAS y el DOC¹⁰⁵, y con agrupaciones que se autodenominaban de “limpieza social”, como Amor por Medellín¹⁰⁶, Mano Negra, Limpieza Total, Aburrá Tranquilo, Muerte a Jaladores de Carros (Majaca) y Asociación Pro Defensa de Medellín (Jaramillo y Salazar, 1992, página 100). Dos de los participantes de los talleres de memoria se refirieron a estas formas de violencia en los siguientes términos:

¹⁰⁵ Los participantes del taller de afrodescendientes, por ejemplo, recuerdan que en 1985 el DOC asesinó a varias personas afro, lo que hizo que describieran esta época con la expresión “mataban negros por matar” (CNMH, hombre, taller de memoria población afrodescendiente, Medellín, 2015).

¹⁰⁶ En 1987 se sindicaba a Amor por Medellín de amenazar y desaparecer a trabajadoras sexuales del sector de La Veracruz y de asesinar a jóvenes en varias esquinas de la ciudad. Ver: *El Tiempo*, 8 de mayo de 1994.

Entre los ochenta y los noventa fue muy importante como un factor generador de violencia en Medellín el Departamento de Orden Ciudadano, el temible Departamento de Orden Ciudadano. Eran policías de hecho, una especie de fuerza parapolicial aquí en Medellín, y llegaban en unos carros negros a los barrios. Cuando aparecían carros había muertos seguros (CNMH, testimonio hombre, taller de memoria población afrodescendiente, Medellín, 2015).

Se llevaban la gente y no aparecía, llegaban por la casa a llevarse gente, eran unas camionetas con blanco, como la de Los Magníficos y decían DOC, muchas veces nos patearon, entonces eran el DOC y la Policía (CNMH, testimonio hombre, grupo focal creadores, Medellín, 2015).

Al mismo tiempo, muchos barrios de la ciudad presenciaron el crecimiento descontrolado del número de bandas y la irrupción de grupos de autodefensa barrial o milicias que en sus inicios pretendían responder a las situaciones de inseguridad traídas por la reestructuración de los actores primarios del conflicto y por la proliferación de bandas y combos. Pese a las múltiples variaciones en términos de su estructura organizativa, sus estrategias y su relación con movimientos insurgentes, resulta más o menos claro que el fenómeno miliciano estuvo ligado a ejercicios de control territorial y al despliegue de modelos de control social orientados a enfrentar a los delincuentes y las bandas que operaban dentro de sus propios barrios (Ceballos, 2000).

La oferta de seguridad y control que subyacía a este proyecto, y su proceso de descomposición criminal, corrió al mismo tiempo que el despliegue de la llamada “limpieza social”, una práctica criminal que se caracterizaba por el asesinato de consumidores de narcóticos, personas de sectores LGBTI, ladrones, habitantes de calle y todos aquellos que se salieran de lo que sus perpetradores consideraban correcto. A través de justicias ejemplarizantes se quería enseñar a los pobladores que el grupo armado podía castigar fuertemente a sus enemigos y ser eficiente en la represión de cierto tipo de conductas (Aguilera, 2014, página 217). Por ello, los grupos de milicias buscaban generar una sensación de protección para responder a las demandas de seguridad de algunos pobladores.

En palabras de uno de los interlocutores del trabajo de campo, las acciones de los milicianos en barrios de las comunas 1, 2, 3, 4 y 6, tenían como finalidad mostrar, por medio de sus “actos de maldad”, que también podían proteger (CNMH, entrevista líder social de la comuna 6, Medellín, 2016). Todo esto a través de la configuración de ciertos elementos de orden marcados por la organización, demarcación y vigilancia de los territorios y de aquellos que los habitaban. Esto implicaba que estos actores fueran los encargados de proveer elementos de control a través de amenazas, asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos forzados, generando una forma ambivalente de definir la violencia que se movía entre el miedo y la protección. Las milicias exacerbaban la lógica de la justicia privada, persiguieron decididamente a los delincuentes

ajusticiándolos o desplazándolos, pero también se convirtieron en agentes del miedo en los territorios donde tenían presencia.

En el período 1982-1994 las modalidades de violencia preponderantes por parte de los actores vinculados a la dinámica del conflicto armado en Medellín fueron las masacres, el asesinato selectivo y los atentados terroristas. Estas se desplegaron preferentemente en contra de personas determinadas por el papel político o social que desempeñaban. Élite académicas, económicas y políticas, pero igualmente sindicalistas, estudiantes, policías, jueces y políticos fueron objeto de esta violencia. Estas personas fueron acusadas de ser enemigos del pueblo o de la revolución, oligarquías traidoras o subversivos de ciudad. Por ello, esta violencia ostentó un carácter retaliador claro. Tenía que ver con las razones que esgrimían los actores armados para justificar su decisión de tomar las armas. Quienes la padecieron, según la lógica de los armados, eran los responsables de que la guerra existiera.

Sin embargo, no toda la violencia de este período respondió a este carácter retaliador. Hubo atentados terroristas que no buscaban asesinar a una persona en particular, sino afectar indiscriminadamente a la sociedad; igualmente masacres cuyo objetivo no era una persona determinada sino perseguir aquellos que eran considerados marginales o delincuentes. En estos casos la violencia adoptó un carácter ejemplarizante que buscaba aleccionar a la sociedad sobre el poder de los aparatos armados.



Hombre participante de taller identifica el año 1989 como hito en la memoria de la violencia en la ciudad. En la bomba que da muerte al gobernador Antonio Roldán Betancur muere también su amigo. “Y entonces él iba caminando para la práctica, estalla una bomba y de un carro sale un bómper que para mí es esto y lo degolla; mejor dicho muere con la bomba de Antonio Roldán Betancur. Nosotros sembramos un árbol en San José, él [amigo] tenía un roble y siempre decía que si él se moría que pusiéramos un roble, y pues nosotros todos jóvenes, todos románticos, nos fuimos pa’ San José a sembrar un árbol. El árbol duró dos meses, eso lo volvieron nada y el árbol desapareció, entonces también por eso lo tacho como con la muerte” (CNMH, hombre, colcha de la memoria, personas mayores de 40 años, Medellín, octubre de 2015). Fotografía: Corporación Región.

3.1.3. De las disputas territoriales a la guerra: reacomodo de las transacciones y conflicto armado urbano (1995-2005)

Las modalidades y repertorio de las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín presentaron un nuevo rostro a mediados de la década de los noventa y hasta el primer quinquenio del nuevo siglo. Ellas tenían como horizonte central, aunque no exclusivo, el control de territorios. Dos elementos fueron centrales en esa transformación: en primer lugar, la creación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad (Convivir), que entremezclaban formas de acción legal con formas de control privado semiilegal e ilegal. Y en segundo lugar, la competencia armada (Alonso, Giraldo y Sierra, 2006) en espacios territoriales muy específicos de guerrillas, milicias, bloques paramilitares y fuerza pública, es decir, el despliegue de acciones de guerra en la ciudad relacionadas con el conflicto armado.

A través de las Convivir el Estado creó un dispositivo para el ejercicio territorial de formas ilegales de violencia, que coexistía o competía con la oferta y prestación de seguridad privada por parte de organizaciones que iban desde grandes estructuras ilegales involucradas o no con el conflicto armado colombiano hasta pequeños dominadores barriales, aliados o no con actores de la guerra o con estructuras criminales (Pérez, 2005). En el grupo focal con defensores de derechos humanos y en varias entrevistas se planteó que la entrada de las Convivir marcó un hito importante en la historia de la ciudad, debido a que representaban una articulación entre lo legal y lo ilegal que volvía aún más turbio el uso de las violencias dado el carácter ambiguo de este actor y el aparente beneficio que traía su presencia por la prestación del servicio de seguridad. En el grupo focal con creadores artísticos, las Convivir fueron reconocidas como un recurso determinante del afianzamiento del paramilitarismo y del control de territorios en la ciudad¹⁰⁷.

El segundo elemento determinante en el tránsito hacia formas de victimización ligadas casi exclusivamente a lo territorial está relacionado con la supremacía de los actores centrales del conflicto armado en la ciudad y la aniquilación, subordinación o cooptación de bandas y combos. En un primer momento, esa supremacía se dio por el resurgimiento y la extensión de la actividad miliciana en numerosos barrios populares de la ciudad a finales de la década de los noventa. Las Milicias Bolivarianas, las 6 y 7 de Noviembre y los CAP disputaron a sangre y fuego, con combos

¹⁰⁷ Así lo diría recientemente Herman Arias Gaviria, quien se desempeñaba como superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada entre 1997 y 2002: "Colombia, ha tenido experiencias negativas sobre este tema, como lo que sucedió con las cooperativas Convivir a las que se autorizaron armas que terminaron en manos de los paramilitares [...]. Naturalmente, como lo ha demostrado el sistema de justicia sobre la investigación de este fenómeno en Colombia, las cooperativas Convivir perdieron su rumbo inicial de ofrecimiento de seguridad a particulares para convertirse en apoyo de grupos ilegales, mediante la ayuda de algunos miembros de la Fuerza Pública que hoy están condenados" (Grajales, 2011, páginas 269-270).

y bandas, el control de espacios en algunas comunas (Duncan, 2015, página 21), convirtieron a muchos barrios en escenarios de guerra y desplegaron un sistema punitivo que se extendió al “delito” de sospecha de colaborar con el enemigo o resistirse al reclutamiento (Londoño, 2015). El posicionamiento territorial de esta segunda generación de grupos milicianos va aparejado con un aumento notable del desplazamiento forzado, los asesinatos selectivos y el secuestro, que en ese momento incluía la modalidad del “secuestro express”, “que consistía en el plagio de algún transeúnte desprevenido durante poco tiempo, [...] a cambio de sumas relativamente modestas de dinero en comparación con los secuestros de larga duración de la guerrilla” (Duncan, 2015, página 21). Las víctimas de esta modalidad del secuestro eran, fundamentalmente, personas de sectores de clase media de Medellín.

El crecimiento de las milicias en la ciudad y la emergencia de los CAP se vieron confrontados a finales de la década de los noventa e inicios de los dos mil por la presencia de los distintos bloques del paramilitarismo y la “metamorfosis o cambio de piel” (Martin, 2014, página 404) experimentada por la organización criminal heredada de Escobar, la cual, dirigida ahora por los Castaño y *Don Berna*, se presentó como la manifestación local de un modelo paramilitar que se empezó a expandir por la ciudad para terminar con las guerrillas¹⁰⁸. Esta guerra se desarrolló fundamentalmente en la comuna 3, la zona nororiental y los barrios La Cruz y La Honda, donde operaban las milicias bolivarianas de las FARC; en las zonas centroccidental y noroccidental, especialmente en las comunas 13 y 7, donde operaban las milicias de las FARC, el ELN y los CAP, así como en las comunas 8 y 9, donde operaban las milicias 6 y 7 de Noviembre del ELN (Gil, 2009).

En medio de estos enfrentamientos, las milicias aumentaron el reclutamiento, produjeron desplazamientos, ajusticiaron a posibles enemigos o delatores, asesinaron a jóvenes que estaban prestando el servicio militar, expulsaron a sus familias de los barrios, extorsionaron, amenazaron y asesinaron a muchos habitantes de los territorios disputados, implementaron con cierta sistematicidad el secuestro con fines extorsivos, reclutaron menores de edad, ajusticiaron a policías y soldados mientras se encontraban de civil, desplegaron formas de violencia sexual, sostuvieron enfrentamientos armados con unidades policiales y detonaron explosivos en varios puntos de la ciudad. Los paramilitares, por su parte, persiguieron a quienes estuvieron involucrados con su enemigo e implementaron de manera sistemática el asesinato selectivo en contra de supuestos colaboradores de las guerrillas en los barrios, así como la desaparición forzada con lugares de referencia sobre inhumaciones clandestinas como La Escombrera en la

¹⁰⁸ Las múltiples manifestaciones del paramilitarismo en la ciudad fueron descritas en el capítulo 2.

comuna 13 (CNMH, taller de memoria Mesa Municipal de Víctimas, Medellín, 2015)¹⁰⁹, y La Curva del Diablo en el barrio Moravia (CNMH, taller de memoria con población afrodescendiente, Medellín, 2015).

Además, reclutaron a jóvenes, produjeron desplazamientos masivos, desplegaron formas de violencia sexual, asesinaron a líderes sociales y comunitarios, pusieron en práctica un sistema de extorsión en los territorios que se extendió a todas las actividades económicas y explotaron la venta de drogas y demás renglones de la economía ilegal de la ciudad. Después de posicionarse como el actor armado dominante en muchos espacios de la ciudad, implementaron un sistema de vigilancia similar al miliciano: “le cuento que esa gente [los paramilitares] con los conductores no se mete para nada, uno tiene un problema por ahí con un vago en la calle que lo atraca y ellos hacen presencia, uno se siente seguro” (testimonio tomado de Londoño, 2016, página 399).

Con el crecimiento de la confrontación entre paramilitares y milicias reaparecieron escenarios de disputa y control social en los barrios y se repitieron las dinámicas orientadas a proteger los territorios a través de la llamada limpieza social. La madre de una víctima describió esta práctica en los siguientes términos:

Mi hijo fue asesinado en hechos ocurridos en el barrio San Pablo de Medellín en el año 2000, en la esquina de la escuela María Cano. Yo inmediatamente salí para el lugar, cuando llegué encontré a mi hijo en el suelo muerto con tres impactos de arma de fuego en la cabeza. Mi hijo tenía 20 años, trabajaba en un taller de mecánica, vivía conmigo y sus hermanos, no tenía hijos, no era casado, no tenía antecedentes judiciales, no consumía ninguna clase de sustancia psicoactiva, no tenía enemigos ni amenazas. A mi hijo lo querían mucho en el barrio, era muy trabajador y juicioso; con lo que trabajaba me ayudaba con las obligaciones de la casa, le colaboraba a los hermanos. Se rumoró de la muerte de mi hijo que habían sido las milicias que habían llegado al barrio a imponer el poder y a realizar una supuesta limpieza social. Yo no sé por qué mataron a mi hijo, él era muy bueno. Esa gente mataba indiscriminadamente con tal de generar temor a la comunidad. Después de la muerte de mi hijo, se me acercó un muchacho, al parecer de ese grupo de milicias y me dijo que la muerte de mi hijo había sido un error (CNMH, OMC, Base de Asesinato Selectivo. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

En la disputa con los grupos milicianos por el control de algunos barrios de la ciudad también participaron las Fuerzas Armadas estatales a través del despliegue de múltiples operaciones militares. La lista de estas disputas por el territorio contra los grupos milicianos en la comuna 13

¹⁰⁹ Sólo en 2002 y 2003 las violaciones a derechos humanos sobre la población de la comuna 13 dejaron, según reportes de la Corporación Jurídica Libertad, unas 650 víctimas directas, entre homicidios, torturas y detenciones arbitrarias, además de al menos 92 casos de desaparición forzada (Corporación Jurídica Libertad, 13 de octubre de 2012).

de Medellín incluyen la operación Primavera, del 1 al 3 de febrero de 2001, en los barrios Belencito Corazón, Veinte de Julio y El Salado, con un saldo de 18 detenidos acusados de ser presuntos milicianos; la operación Otoño, el 24 de febrero de 2002, con un saldo de 42 detenciones arbitrarias; la operación Contrafuego, el 29 de febrero de 2002, con un saldo de 63 allanamientos, 31 detenciones y la muerte de 5 personas que posteriormente fueron presentados como milicianos dados de baja en combate; la operación Mariscal, el 21 de mayo de 2002, con un saldo de 9 civiles muertos (cuatro de ellos menores de edad), 37 heridos y 55 personas detenidas; la operación Potestad, el 15 de junio de 2002, con un saldo de un muerto; la operación Antorcha, el 20 de agosto de 2002, con un saldo de 37 personas heridas¹¹⁰.

La magnitud del drama humanitario provocado por el enfrentamiento entre milicianos, guerrillas y las fuerzas desplegadas en el marco de la operación Mariscal puede apreciarse en el siguiente relato de una de las enfermeras del servicio de urgencias de la Unidad Intermedia de San Javier:

Y la balacera no paraba [...]. Tuvimos varios casos graves. Pero el más cruel de todos, el que a mí más me conmovió, y hasta me hizo llorar porque yo soy muy llorona, fue el de una niña que llegó con la cabeza destapada por un disparo de fusil. Verla llegar fue como una película de terror. La trajo en los brazos su hermanito, otro niño que no tenía ni quince años, que se aferraba a nosotros para que le salváramos la vida. Y su hermanita ya estaba muerta [...]. Y para acabar de completar el cuadro al papá de ella lo capturaron en la puerta del hospital. Tal vez no tenía la cédula, o del desespero no supo decir quién era, o alguien lo acusó. Lo cierto fue que la Policía se lo llevó como sospechoso, yo no sé de qué (Aricapa, 2015, página 176).

Finalmente, en la memoria de muchos habitantes de la ciudad y de la totalidad de los habitantes de la comuna 13 está la operación Orión, realizada en octubre de 2002, que favoreció la disminución de homicidios y la intensidad de la confrontación, pero también facilitó la consolidación del dominio paramilitar en aquella comuna. La intensidad de esta incursión militar se puede ver en el siguiente dibujo y el relato de un sindicalista habitante de la comuna:

¹¹⁰ Información construida con base en Corporación Jurídica Libertad (2009) y el CNMH (2011a).



“Hubo un helicóptero que mataba gente, había que tirarse al piso para esquivar las balas. Entraron matando gente. ¿Qué hizo el Estado? Álvaro Uribe Vélez sacó a la izquierda de la comuna, sacó a la guerrilla y metió a los paramilitares” (CNMH, hombre, colcha de la memoria, taller de memoria con sindicalistas, Medellín, 2015). Fotografía: Corporación Región.

Otra incursión militar de gran impacto fue la operación Estrella VI, realizada en enero de 2003 en los sectores de La Honda, El Cerro y Alto de la Cruz, en la comuna 3. Al igual que lo ocurrido en la comuna 13, el resultado de esta operación militar fue el aumento de la presencia estatal en los barrios, pero también el despliegue del proyecto paramilitar. En todo caso, la operación Estrella VI fue presentada por un medio de comunicación como una “operación contra milicias” (*El Tiempo*, 15 de enero de 2003). Al respecto se dijo:

La Fuerza Pública realizó una nueva ofensiva contra las milicias en los barrios de Medellín. Durante tres días, 1.000 hombres participaron en la operación Estrella VI, realizada contra las Farc que hacen presencia en la parte alta del nororiente de la ciudad [...]. En los barrios que fueron ocupados durante estos días en Medellín también se presentan combates entre la guerrilla y las autodefensas, ocupación de viviendas abandonadas por parte de los grupos armados y problemas en la prestación del servicio de transporte público. Aunque los resultados se presentarán hoy, el secretario de Gobierno Municipal, Jorge León Sánchez, reveló que entre las 68 personas judicializadas por rebelión y desplazamiento forzado, se encuentran varios líderes comunitarios [...]. Armas de fuego y propaganda subversiva fueron encontradas en varias residencias de los sectores de La Honda, El Cerro y Alto de la Cruz, donde se concentró la presencia de la Fuerza Pública (*El Tiempo*, 15 de enero de 2003).

Gráfica 5.

Dimensiones y modalidades de las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín: 1995-2005



Fuente: Elaboración propia, basada en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016.

En relación con los procesos de victimización, el período de reacomodo de las transacciones y conflicto armado urbano (1995-2005) presenta cuatro rasgos fundamentales. En primer lugar, significó un crecimiento vertiginoso en las formas de la violencia y en el número de víctimas. Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH y el RUV, entre 1995 y 2005 la ciudad tuvo 52.004 víctimas de violencias asociadas al conflicto armado.

En segundo lugar se retorna a modalidades de violencia marcadamente selectivas, pero esta vez en términos territoriales. Se trata de formas de victimización que tienen por objeto disputar el control espacial a los otros competidores armados y, por esta vía, garantizar el control de poblaciones, barrios y recursos. Los grupos que se disputaban el control de los barrios y comunas usaron violencias territorialmente selectivas contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y juveniles, o sus pobladores. Eran modalidades de violencia ejercidas sobre territorios en disputa que incluían, fundamentalmente, los desplazamientos intraurbanos, los

asesinatos selectivos a líderes barriales¹¹¹, las masacres¹¹², la violencia sexual, las amenazas, la tortura y el despojo de propiedades. En el taller con integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas se hizo énfasis en que varias de las personas asesinadas entre 1998 y el 2005 fueron perseguidas, señaladas y asesinadas por ser líderes comunitarios “que le hacían mucho bien a la comuna pero mucho mal al actor armado” por la capacidad de movilización y convocatoria que tenían.

Esas disputas territoriales también estuvieron marcadas por los asesinatos de personas extrañas o habitantes de otros barrios que se atrevían a transitar por los espacios en disputa. Esto es lo que se ha denominado como “las fronteras invisibles” o “barreras invisibles”, que se convirtieron en una justificación para muchos de los asesinatos selectivos que ocurrieron en la ciudad. Un líder del barrio Picacho, de la comuna 6 de la ciudad, describió la presencia de estas fronteras de la siguiente manera:

Vivía en los tugurios de El Picacho. Ahí había fronteras invisibles en las cuales los grupos armados se peleaban el territorio: los de Bello con los de acá de Medellín. Un día quemaron los tugurios, ya nos albergaron en Bello y en Zamora. Me nombraron líder para dar las casas y me tocó muy duro porque eran muchas las amenazas. Dormir en la noche a punta de balas (...) nos tocaba pasar por entre los muertos en el puente que divide los dos territorios, con 6 o 7 muertos ahí (CNMH, taller de memoria zona noroccidental, Medellín, 2015).

En tercer término, se trató de formas de victimización que se expresaron en relaciones binarias o en pareja. En el contexto de despliegue de la guerra en la ciudad, esa diada nombra, en su forma más pura, las formas de victimización resultantes del enfrentamiento entre las estructuras milicianas de las guerrillas presentes en algunos barrios y la estrategia contrainsurgente aglutinada alrededor del BCN. En su forma menos pura también incluye las acciones de las Fuerzas Armadas, de los grupos milicianos y del bloque paramilitar, contra sectores civiles de

¹¹¹ Entre muchos asesinatos de líderes sociales y comunitarios se pueden señalar: Giovanni Osorio Acevedo, dirigente juvenil barrio Villa del Socorro (enero de 1997); David de Jesús Giraldo Naranjo, líder del barrio Manrique (febrero de 1997); Jorge Andrés Zapata Mesa, promotor de pactos de convivencia entre los grupos armados en el barrio Aranjuez (marzo de 1998); Claudio Muñetón Restrepo, veedor de la Corporación Educativa Simón Bolívar del barrio Kennedy (noviembre de 1997); César Augusto Sanmartín, líder de una banda que hacía parte de la Mesa de Convivencia de la zona noroccidental (marzo de 1998); Gabriel de Jesús Bolívar, líder de pactos de paz y líder comunal en el noroccidente de Medellín (enero de 1999); Aristóbulo Giraldo Ospina, líder comunal del barrio Doce de Octubre (febrero de 1999); Iván Darío Acosta, Gabriel Bolívar y Fabián Beltrán Arenas, líderes barriales en el noroccidente de la ciudad (enero, febrero y marzo de 1999); Gladys Estella Pérez de Ocampo, presidenta de la junta de acción comunal del barrio Belén Zafra; María Lourdes Cano Pabón, dirigente cívica del mismo sector (septiembre de 1997); Gustavo Vidales, gerente de Cooprosar (julio de 1998); José Belarmino Buitrago, líder juvenil reinsertado del MIR-COAR, barrio El Pesebre (agosto de 1998); Guillermo Otálvaro, líder cívico del barrio Cauces (junio de 1999); y Jairo Alberto Álvarez, líder comunal del corregimiento de San Antonio de Prado, barrio el Limonar (diciembre de 1997). Fuente: Gil, 2016.

¹¹² Algunas masacres relacionadas con el conflicto armado fueron: masacre de cuatro jóvenes en el barrio Santa Cecilia (enero de 1997), asesinato de tres personas en el barrio Popular (mayo de 1997), asesinato de siete habitantes en el nororiente de la ciudad (enero de 1997), asesinato de cuatro jóvenes que departían en dos esquinas en el barrio Santa Inés y en la parte alta del barrio Santo Domingo Savio (septiembre de 1998), masacre de ocho jóvenes a manos de presuntos milicianos en el barrio Pichachito (febrero de 1997), masacre de cinco jóvenes que se encontraban en un billar en el barrio Aures (febrero de 1999), asesinato de cuatro mujeres en el barrio Belén Altavista (septiembre de 1997), asesinato de cuatro jóvenes en el barrio Caicedo (julio de 1997). Fuente: Gil, 2016.

territorios en disputa, que supuestamente estaban vinculados, apoyaban, daban información o simpatizaban con el bando opuesto.



"Nunca me imaginé pues que me hubiera tocado vivir esto que les comento acá. En el año 93 matan a un hermano mío. Y en el 93 ya estamos como en esa transición de los combos y la llegada de los paramilitares y en el 2003 asesinan al hijo mayor que era un joven muy perseguido como para tratar de reclutarlo" (CNMH, testimonio hombre, colcha de la memoria, taller mediadores de Casa de la Memoria, Medellín, septiembre de 2015). Fotografía: Corporación Región.

En cuarto lugar en este período también se despliegan modalidades de violencia que no hacen referencia a las disputas por el territorio, sino a disputas políticas enmarcadas en el contexto del proceso de la urbanización de la guerra. Se trata, en primer lugar, de violencias selectivas marcadas por el asesinato, amenaza y exilio de sindicalistas¹¹³, el silenciamiento de los familiares de las víctimas a través del despliegue de procesos de revictimización contra los miembros de organizaciones civiles que tenían como objetivo la búsqueda de los desaparecidos y el esclarecimiento de lo que pasó¹¹⁴, el asesinato de cuatro profesores y ocho estudiantes que tenían vínculos con la Universidad de Antioquia, así como el administrador de una cafetería ubicada en sus predios¹¹⁵, el acoso, persecución o secuestro de miembros de organizaciones no

¹¹³ En el período 1995-2007 fueron asesinados 96 sindicalistas. Algunos casos emblemáticos fueron: Orlando Alberto Gutiérrez Zapata, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) (20 de octubre de 1999); Sergio Uribe Zuluaga, afiliado a Adida (2 de agosto de 2000); Bernardo Vergara Gómez, delegado de Adida (9 de octubre de 2000); Froilán Hilario Peláez Zapata, miembro del comité ejecutivo de la subdirectiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Antioquia (23 de junio de 2007). Fuente: ENS, 2016.

¹¹⁴ El 24 de junio de 1997 una bomba de aproximadamente cinco kilogramos de dinamita destruyó la oficina y los archivos de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), seccional Medellín. El 6 de octubre de 2000 se presenta la desaparición forzada de Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve, integrantes de la junta directiva de ASFADDES en Medellín (Gil, 2016, página 50).

¹¹⁵ Los profesores fueron: Jesús María Valle (febrero 27 de 1997); Rafael Caldas (abril 30 de 1998); Hernán Henao (mayo 4 de 1999) y Guillermo Ángel (septiembre de 2001). Los estudiantes fueron: una estudiante inscrita en un curso semipresencial (febrero de 1998); Álvaro Torres (enero de 2000); David Jaramillo (noviembre 8 de 2001); Dewith Tortello (enero de 2000); Gustavo Marulanda (agosto 7 de 1999); Héctor Correa (septiembre 14 de 1998); Juan Jiménez (noviembre 8 de 2001) y Luz Aranguren (abril 27 de 2000). El administrador de la cafetería fue Hugo Ángel Jaramillo (agosto 6 de 1999). Fuente: Pérez, 2016, página 14.

gubernamentales¹¹⁶, y el asesinato de defensores de derechos humanos y de líderes sociales¹¹⁷. Además se dio la existencia de violencias indiscriminadas, marcadas fundamentalmente por el incremento de los secuestros y extorsiones ejecutadas por las guerrillas y grupos milicianos en la ciudad.

3.1.4. De la violencia a la inseguridad: crimen organizado y nuevas formas de victimización (2006 – 2014)

El fracaso de la estrategia guerrillera de urbanización de la guerra y la derrota de las guerrillas en la ciudad, el protagonismo del Gobierno central y local respecto a la seguridad y la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia definieron un punto de inflexión en las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín a partir de 2003, sin que ello implicara la desaparición de la violencia política en contra de varios sectores sociales. Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH y el RUV, entre 2006 y 2014 la ciudad tuvo 68.310 víctimas de las que se han denominado violencias asociadas al conflicto armado.

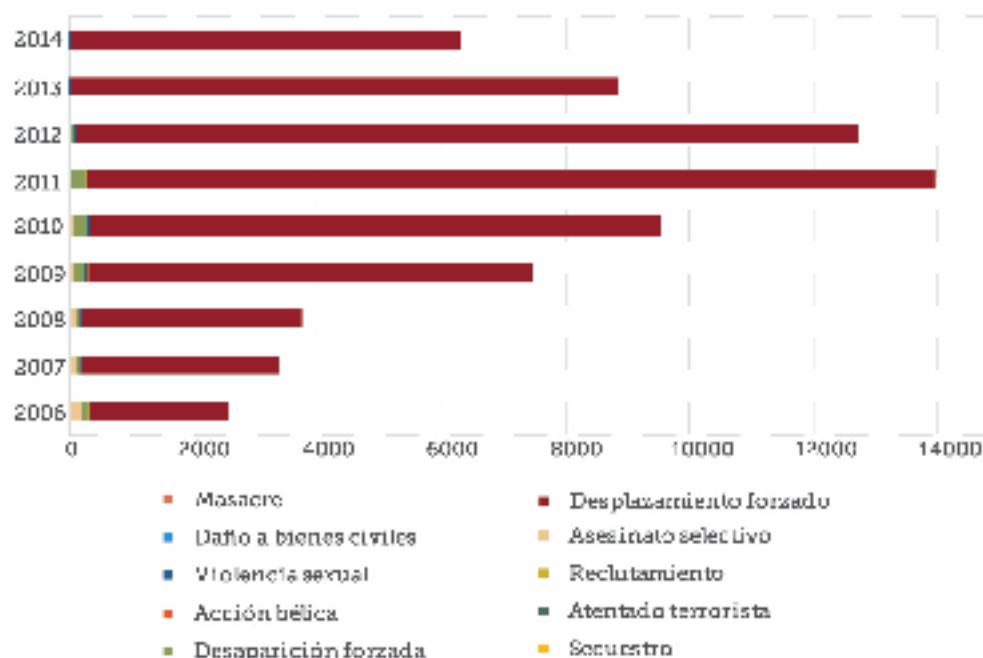
El conflicto en la ciudad de Medellín se caracterizó a partir de 2005 por la presencia de aparatos organizados de poder con expresiones criminales que dominaban conocimientos propios de los actores del conflicto armado histórico a nivel nacional. Se trata de “una criminalidad que ha adquirido un carácter mafioso, fundado en su capacidad para el ejercicio de la violencia, o la amenaza de ejercerla, su inserción social, la diversificación de sus fuentes de obtención de rentas ilegales, [...] los nexos que ha logrado establecer con la economía legal” (Jaramillo y Gil, 2014, páginas 119-120). En este último caso, a nivel formal e informal, y su capacidad para infiltrar la política institucional y disputar, mediante ejercicios de coerción, espacios de participación y representación.

Gráfica 6.

Dimensiones y modalidades de las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín: 2006-2014

¹¹⁶ El 28 de enero de 1999 ocho hombres y una mujer (pertenecientes a la banda La Terraza) secuestraron a cuatro funcionarios del Instituto Popular de Capacitación (IPC). El 1 de febrero de 1999, en un comunicado firmado por Carlos Castaño, las AUC admitieron tener en su poder a los cuatro investigadores del IPC, y señalaron este hecho como “el inicio de una lamentable pero inevitable etapa del conflicto”. El 29 de agosto de 1999 una bomba fue activada en el exterior de la sede de esta misma ONG y el 9 de octubre de 2000 fueron amenazados los integrantes del equipo de derechos humanos. A esto se sumó el asesinato de Everardo de Jesús Puerta y Julio Ernesto González, integrantes del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el 31 de enero de 1999 y la desaparición de Jairo Bedoya Hoyos, asesor de la OIA, el 2 de marzo de 2000. Fuente: Gil, 2016.

¹¹⁷ El 27 de febrero de 1998 dos hombres y una mujer asesinaron en su oficina a Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia.



Fuente: Elaboración propia, basada en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016.

Medellín ha transitado de la violencia y la guerra a la inseguridad. Esta reconfiguración de la criminalidad en la ciudad tiene como correlato una disminución importante de varias modalidades de victimización señaladas atrás y la consecuente disminución de la incidencia de las violencias asociadas al conflicto armado en la ciudad, aun cuando hay un incremento de la desaparición forzada y del desplazamiento forzado, tal como se observa en la gráfica 6. Hoy las violencias en la ciudad tienen como operadores principales a estructuras del crimen organizado que despliegan en algunos territorios formas de victimización aprendidas en el desarrollo del conflicto armado urbano reseñado en el período anterior. Esas formas de victimización remiten fundamentalmente al desplazamiento forzado, que en un número importante de casos es la consecuencia directa de los asesinatos selectivos, el control social de poblaciones, las amenazas, los enfrentamientos armados, la definición de fronteras invisibles, la implementación de toques de queda, la desaparición forzada y el reclutamiento, vinculación y utilización de niños y niñas, lo que resulta evidente en territorios como la comuna 13, la zona noroccidental y la zona nororiental.

Las personas participantes en el taller de la mesa de víctimas de Medellín señalaron que el reclutamiento de menores ha sido una de las modalidades de victimización más usada por los actores armados en la comuna 13, después de la desmovilización de los paramilitares y las confrontaciones entre bandas y combos en los distintos barrios de la comuna. Por su parte, en los talleres con habitantes de La Loma y con mediadores y mediadoras del Museo Casa de la Memoria se mencionó que el desplazamiento forzado intraurbano ha aumentado en sectores del corregimiento de San Cristóbal desde el año 2002, así como en algunos barrios de las comunas 5, 6, 8, y 13. En los talleres se hizo referencia al desplazamiento forzado en el mes de mayo de 2013 de 43 familias y 178 personas en los sectores El Cañón y San Gabriel, en la vereda La

Loma, del corregimiento de San Cristóbal (CNMH, taller de memoria, habitantes de La Loma, Medellín, 2015).

En una crónica realizada por Deisy Johana Pareja para el periódico *El Mundo* un exintegrante de un combo de la comuna 13 explicó los móviles del desplazamiento en La Loma en los siguientes términos:

Un exintegrante de un combo de la comuna 13 revela que las bandas criminales que delinquen en La Loma cometen masacres y desaparecen a sus víctimas, arrojándolas a La Arenera y a La Escombrera, violan mujeres y cooptan niñas para la guerra, las explotan sexualmente dentro o fuera de la ciudad y las obligan a ingresar celulares, dinero y armas a las cárceles (*El Mundo*, 17 de mayo de 2013).

En la misma crónica, se presenta la siguiente versión de una madre desplazada:

Claudia, desplazada de San Gabriel, asegura que si La Loma hubiese sido intervenida a tiempo, no se les saldría de las manos a las autoridades. “Dejaron que ese monstruo creciera y que aterrorizara a toda una comunidad”, dice. La madre advierte que en La Loma no hay parques ni lugares de esparcimiento para los jóvenes, la única biblioteca la cerraron por amenazas de combos, los colegios al igual que las casas se están vaciando. Además, confirma que allí continúan las desapariciones, los homicidios y las violaciones contra las mujeres (*El Mundo*, 17 de mayo de 2013).

Entre las formas de victimización ocurridas en el período 2006-2014 es necesario resaltar tres asuntos: en primer lugar, una parte importante de esas modalidades de violencia adquieren un carácter simbólico, sustentado en la reputación construida por los actores del conflicto armado que tuvieron presencia en algunos de esos barrios. Las organizaciones criminales de hoy, evocando la efectividad de las violencias de los paramilitares de ayer, recurren a las amenazas como un instrumento efectivo para constreñir el comportamiento y las acciones de los habitantes de barrios donde la violencia tuvo un impacto significativo y se instaló en las memorias y representaciones colectivas. Un ejemplo de ello se refleja en el siguiente testimonio:

Hoy la mayor violación es la amenaza, y tiene la misma eficacia del asesinato porque la gente conoce la historia. Amenazas selectivas: la sangre escandaliza mucho, la amenaza es una sofisticación del asesinato. Además, con la amenaza se presume que sigue el asesinato, por lo cual la gente se va, se desplaza (CNMH, taller de memoria con sindicalistas, Medellín, 2015).

En segundo lugar, todavía perviven en la ciudad formas de violencia estatal e institucional, cuya expresión se encuentra en la apertura de procesos judiciales contra organizaciones sociales y comunitarias, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y organizaciones de víctimas. Esta modalidad de violencia se manifiesta, fundamentalmente, a través de la judicialización de los integrantes de estas organizaciones a quienes la Fiscalía General de la Nación acusa de ser integrantes del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC o PC3), adscrito a la guerrilla de las FARC. En el grupo focal con defensores de derechos humanos se hizo alusión a que

[...] en el año 2007 aparece el famoso archivo de inteligencia donde se incluyen todo el movimiento de derechos humanos como parte del PC3. Aquí estuvieron casi todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, en donde se empezaron a hacer unas investigaciones particulares sobre defensores de derechos humanos de la Universidad de Antioquia (CNMH, grupo focal con defensores de derechos humanos, Medellín, 2015).

Finalmente, aun cuando muchas de estas modalidades de victimización se insertan fundamentalmente en la lógica del control de recursos y mercados ilegales entre organizaciones de naturaleza criminal, en este último período siguen apareciendo violencias que por su naturaleza parecen propias de la guerra. Las organizaciones criminales que participaron en los procesos de urbanización de la guerra al servicio de los paramilitares todavía implementan formas de violencia profundamente emparentadas con las dinámicas de la urbanización del conflicto. Es el caso de la desaparición forzada, el desplazamiento forzado intraurbano, el uso de menores de edad para la comisión de delitos y las amenazas y asesinatos de líderes comunitarios, activistas sociales, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos. La Alcaldía de Medellín describe este fenómeno en los siguientes términos:

Con la desmovilización paramilitar, por lo contrario, durante los procesos de reacomodamiento de las estructuras armadas en el Municipio de Medellín posterior a la desmovilización, se evidenció que parte de los integrantes que entraron a engrosar las filas de grupos delincuenciales eran excombatientes desmovilizados de grupos paramilitares, que tenían consigo aprendizajes militares, que en la práctica se materializaban en vulneraciones a los derechos humanos de los habitantes de los territorios en donde reclamaban su control. En este sentido, prácticas como el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas permanecieron vigentes en Medellín (Alcaldía de Medellín, 2015, página 33).

3.2. Las violencias que se narran

Las violencias asociadas al conflicto armado, que por lo general suelen describirse con estadísticas y gráficas, no abarcan totalmente las violencias que habitan en la memoria de la

gente que participó del trabajo de campo del informe *Medellín: memorias de una guerra urbana*. Las violencias experimentadas por muchos habitantes de la ciudad son mucho más complejas que las formas empleadas para explicarlas, y aquello que nos indican las cifras y clasificaciones suele dar sólo una descripción parcial de las formas como la gente vive y recrea lo que ha sucedido en la ciudad. En este apartado se presentan algunas reflexiones fundamentales sobre las memorias de la violencia en Medellín, a partir de la forma como ellas fueron rememoradas, comprendidas y narradas por los pobladores durante el trabajo de campo.

3.2.1. Las violencias no pasaron de lado

Varios jóvenes que participaron en los talleres y conversatorios del trabajo de campo señalaban que al intentar recordar un evento próximo sobre una muerte violenta cercana les resultaba absolutamente imposible encontrar algo para narrar, pues a ellos *las violencias les habían pasado de lado*. Sin embargo, en el taller realizado con estudiantes de la segunda cohorte del Diploma en Periodismo y Memoria Histórica de la Universidad de Antioquia, algunos de esos jóvenes que no tenían nada que contar intentaron cumplir con la tarea asignada y se les ocurrió preguntarse si en algún momento de su vida habían visto a alguien al que acababan de asesinar. Todos ellos encontraron la manera de narrar el momento en que vieron el primer muerto, el segundo o el tercero. ¿Cuántas personas que viven en Medellín han visto de cerca una muerte violenta? ¿Cuántas no la han visto? ¿Cuántos de esos muertos corresponden a las violencias asociadas al conflicto armado y cuántos no? Las cifras sobre las violencias letales del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH muestran que las probabilidades de haber visto un muerto en la ciudad eran altas, sobre todo si se habitaba en ciertas comunas y barrios. Un joven de 16 años, estudiante de grado 11 del barrio San Javier La Loma, lo expresa de la siguiente manera:

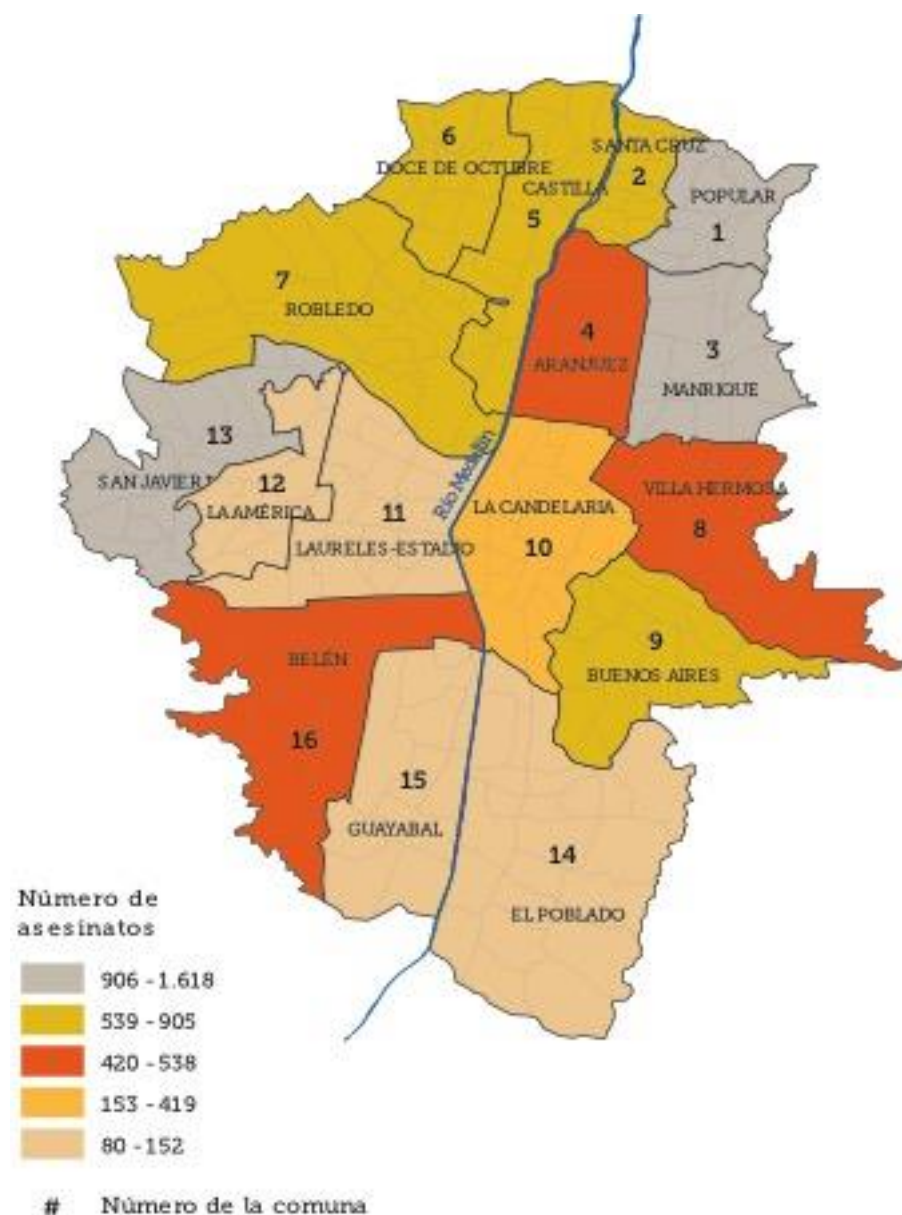
No, hasta el momento ninguna persona muy cercana, pero vecinos sí, demasiados. Más que todo compañeros cuando estaba en el colegio y cuando había esa violencia tan horrible en Santo Domingo, donde yo estudiaba. Muchos fallecieron a raíz de la violencia, sin que se conocieran las causas precisas. Uno nunca las conoce, tal vez fueron vinculados, tal vez fueron víctimas de balas perdidas, no sé, pero sí había demasiados (Martín y Atehortúa, 2015, página 101).

La intensidad de las violencias varió de comuna en comuna, y en un número importante de ellas *las violencias no pasaron de lado*. La expresión de esas violencias estuvo determinada por las formas y momentos del poblamiento, la calidad de la intervención estatal, la presencia de actores armados y grupos criminales previos, el bienestar al que podían acceder los pobladores, y la evaluación que los actores armados hacían del territorio por su posición estratégica e histórica.

Todas las comunas presenciaron muertos cercanos, pero los asesinatos relacionados con las violencias asociadas al conflicto armado se concentraron principalmente en tres comunas: la comuna 1: Popular; la comuna 13: San Javier; y la comuna 3: Manrique. Otras cinco comunas tuvieron un impacto menor, pero todavía fuerte: la comuna 9: Buenos Aires; la comuna 2: Santa Cruz; la comuna 6: Doce de Octubre; la comuna 5: Castilla; y la comuna 7: Robledo. En un lugar intermedio se ubicaron la comuna 4: Aranjuez; comuna 8: Villa Hermosa; y comuna 16: Belén. Las comunas donde las violencias tuvieron menos impacto fueron la comuna 10: La Candelaria; y un poco más abajo, la comuna 14: Poblado; comuna 11: Laureles-Estadio; comuna 12: La América; y comuna 15: Guayabal. Los corregimientos de San Cristóbal y Altavista también presenciaron un número alto de asesinatos, fundamentalmente en el período de urbanización del conflicto armado.

Mapa 4.

Asesinatos selectivos por comunas. Medellín - Antioquia



Tomando como referencia la violencia letal (asesinatos selectivos, masacres y las muertes en acciones bélicas)¹¹⁸ los barrios de la ciudad en los cuales la violencia fue especialmente intensa fueron:

Tabla 2.

Barrios con mayores hechos registrados de violencia letal en Medellín 1980-2014

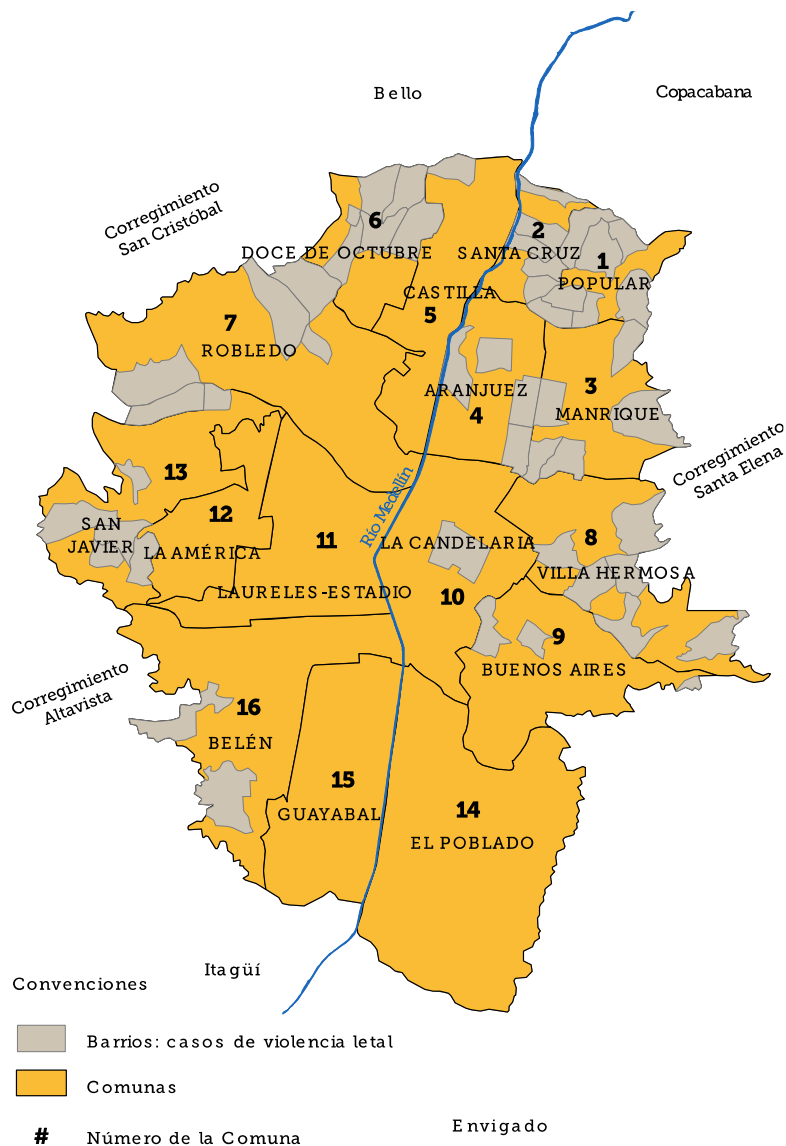
Comuna	Barrios
1	Popular 1 y 2, Santo Domingo Savio 1 y 2, Granizal, Carpinelo, San Pablo y Villa Guadalupe.
13	Veinte de Julio, Belencito, Blanquizal, El Socorro, El Salado y Las Independencias.
3	Manrique Oriental, Manrique Central, Campo Valdés, Carambolas y La Cruz.
9	El Salvador, La Milagrosa y Ocho de Marzo.
2	Villa del Socorro, Andalucía, Playón de los Comuneros y La Francia.
5	Castilla, Alfonso López y Florencia.
6	Doce de Octubre, Kennedy, Pedregal, Pichacho y Santander.
7	Aures, Bello Horizonte, Olaya Herrera, Las Margaritas, La Iguañá.
8	La Sierra, Villatina, Enciso, Llanaditas, El Pinal y Trece de Noviembre.
4	Aranjuez y Moravia.
16	Aguas Frías y Rincón.
10	La Candelaria.
Corregimientos	La Loma y Altavista.

Fuente: Elaboración propia, basada en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH.

Mapa 5.

Barrios con más hechos de violencia letal registrados en Medellín: 1980-2014

¹¹⁸ Con la información registrada en la base de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH es difícil ubicar espacialmente las comunas donde se presentó el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la violencia sexual, la desaparición forzada, el secuestro y el daño a bienes, pues los casos que registran el lugar de ocurrencia del hecho no sobrepasan el 20 %. Sin embargo, los registros con información sobre las víctimas de los asesinatos selectivos ubican el lugar de ocurrencia en un 73 % de los casos; en el caso de las víctimas de masacres el registro alcanza el 65 %; y en el caso de las víctimas de acciones bélicas llega al 55 %.



Fuente: Elaboración propia, basada en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto. Centro Nacional de Memoria Histórica.

Entre 1984 y 1994 estos barrios estuvieron sometidos a enfrentamientos por el control de territorios entre milicias independientes, grupos armados afines a las guerrillas, grupos paramilitares, bandas y miembros de la fuerza pública. Entre 1997 y 2002 casi los mismos barrios fueron escenarios del proceso de urbanización del conflicto armado y, por tanto, lugares en los que se presentaron fuertes disputas armadas entre los bloques paramilitares, las milicias guerrilleras, los Comandos Armados del Pueblo (CAP), las organizaciones del crimen organizado y la fuerza pública. En todos ellos, con mayor o menor intensidad, operaron estrategias de control social por parte de los grupos armados y, como correlato, en todos hubo un despliegue importante de violencias orientadas al control de los territorios. Por eso en las memorias de la gente que los habitan *la violencia no pasó de lado*.

3.2.2. El uso de la capucha: “fueron los muchachos”

En el taller realizado con estudiantes de la segunda cohorte del Diploma en Periodismo y Memoria Histórica de la Universidad de Antioquia un joven periodista de la ciudad elaboró un cuadro en el que reconstruyó cinco eventos que había presenciado, relacionados con el conflicto armado en la ciudad. En él detalló fechas, lugares, formas y repertorios de violencias, pero intencionalmente no incluyó ningún dato en la casilla correspondiente al victimario. Para explicarlo señaló que él no se quería poner en el lugar del intérprete, pues su intención era describir lo que significaba para cada comunidad nombrar a los victimarios. Su argumento era contundente: “en el momento del despliegue de las modalidades de violencia la comunidad y los testigos no nombran al victimario, no preguntan por él, no quieren saber quién fue” (CNMH, hombre joven, taller de memoria con estudiantes de la segunda cohorte del Diploma en Periodismo y Memoria Histórica, Medellín, 2016). Entre otras razones porque quienes ejercen la violencia recurren al uso de la capucha como una estrategia de invisibilidad y ocultamiento de sus identidades o porque esos actores imponen “el silencio a las víctimas y a los testigos con el propósito de impedir la denuncia y obstaculizar la investigación judicial” (CNMH, 2013, página 33).

A las víctimas y sus familias les resultaba imposible identificar al actor armado que comete el hecho y alcanzar alguna explicación razonable sobre el porqué, precisamente por el ocultamiento del rostro y por la intencionalidad de ser anónimos. A veces, incluso, las víctimas consideran que es innecesario identificarlo. En la mayoría de los casos no establecen la identidad del victimario y sólo pueden incluir alusiones generales a “los muchachos”, “los encapuchados”, “los milicianos”, “las guerrillas” y “los paras”; y en otras narraciones se incorporan rumores sobre algún actor específico. La madre de un joven asesinado en el barrio Santa Cruz en enero de 1990 recordó:

Mi hijo se encontraba en la casa y más o menos a las ocho de la noche llegaron unos encapuchados, derribaron la puerta de la casa e ingresaron. Luego se le acercaron a mi hijo y lo sacaron, acto seguido se lo llevaron hacia la zona de la terminal de buses y allí lo asesinaron. Aunque nunca se escucharon comentarios sobre qué grupo hizo esto, sí tengo conocimiento que las milicias operaban en el barrio (CNMH, OMC, Base de casos Medellín, Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

El uso de la capucha refleja otro rasgo central de los actores del conflicto. En un número amplio de casos esos actores no son exógenos a los barrios y a las comunidades: son los muchachos, los vecinos, el próximo o el prójimo (Theidon, 2004). La *violencia entre prójimos*, que se circunscribe al barrio, contextualiza los relatos sobre la guerra y desentraña los vínculos concretos “entre el Conflicto Armado (con mayúsculas) y las conflictividades barriales, dado que

es en la convivencia diaria y la cercanía donde se construye el tejido de relaciones sociales que van a «alimentar» el conflicto y que permiten entenderlo en sus verdaderas dimensiones” (Blair, Grisales y Muñoz, 2009, página 40). Un hombre de 56 años, pensionado del Seguro Social, habitante del barrio Miramar, rememoró la muerte de su hermano en los siguientes términos:

Mataron a mi hermano. Fue hace dos años, cerca de la casa, en el barrio Miramar. Él tenía 52 años y era profesor de literatura. Él estaba en una heladería y en ese momento llegaron unos individuos en busca de alguien más. Hubo un antecedente maluco entre todos los muchachos. Llegó alguien armado y mi hermano fue uno de los que trató de salir, pero en el altercado lo mataron. Fue un hecho excepcional en este barrio [...]. Ya prácticamente la violencia en este sector ha desaparecido, hay mucha unión entre todos los vecinos e, incluso, entre los que nosotros llamamos “los muchachos”. Entre ellos hay de todo, incluso paramilitares desmovilizados (Martin y Atehortúa, 2015, página 58).

La capucha oculta el rostro del hijo del vecino (o al vecino) y por eso las formas y repertorio de violencias no son totalmente ajenos a las dinámicas comunitarias. En un número importante de casos los grupos armados con presencia en muchos barrios tratan de enlazar, solucionar o agudizar conflictos latentes o precedentes de esas comunidades e incluso resolver conflictos que tienen un carácter profundamente privado. Una administradora de empresas del barrio Santo Domingo Savio de 39 años recordó esa violencia entre próximos cuando mataron a su hermano menor:

Lo perdí en la época de los noventa, en el 92. Tenía diecinueve años. Él estaba estudiando y se fue a visitar a la novia a San Pablo. Él no parecía tener conflictos de cruces de barrio. Pero, después de su muerte, nos dimos cuenta de que tenía cierta relación con las milicias populares. Fue un golpe muy duro para la familia porque ignorábamos totalmente que estuviera involucrado en esas cosas [...]. Al chico que lo mató lo mataron a los dos años, inclusive era un amigo de mi hermano. Todo eso fue un conflicto interno de las milicias [...]. He vivido acá toda la vida, es decir 36 años y, por ello he tenido cierta relación directa con los que generan la violencia, pero también con las víctimas [...]. Todo eso era muy doloroso. Salir una de allá y encontrarse con las personas que patrocinaban esos enfrentamientos que les daban el armamento, que les decían: «Vean, vayan, hagan esta vuelta a tal barrio», y uno decirles: «Hey ¿por qué eso? Hey muchachos pero pilas, ¿qué pasa? ¡Miren, no lo hagan!». Pero ellos respondían: «No Luzma, usted con lo suyo y nosotros con lo nuestro» (Martin y Atehortúa, 2015, página 65).

3.2.3. Los aprendizajes criminales

En Medellín las violencias asociadas al conflicto armado tienen la apariencia de un rompecabezas mal diseñado. Pese a los esfuerzos por armar una narración sobre ellas, las piezas no encajan perfectamente y se tiene la sensación que en la caja se han colado piezas de otros

rompecabezas. Un número importante de los relatos de las personas que participaron en los talleres recurren a frases como: “Yo no sé quién lo hizo, en esa época había mucha violencia” o “yo no puedo distinguir muy bien porque eso siempre han sido los muchachos”. Estos testimonios muestran las dificultades existentes para definir de manera nítida las violencias asociadas al conflicto armado, pues en las representaciones sociales que los habitantes de la urbe poseen sobre esas violencias no es posible separarlas de la violencia del narcotráfico y del crimen organizado.

Tal como lo señala el Grupo de Memoria Histórica: “guerrillas, paramilitares y miembros de la fuerza pública recompusieron y ajustaron sus prácticas de violencia de acuerdo con los cambios en la lógica de la guerra y los objetivos que cada uno de estos grupos perseguía” (CNMH, 2013, página 35). A esto se suman los desafíos que imponían las formas de violencia desplegadas por las organizaciones criminales en contextos específicos, las disputas por el control territorial y las lógicas de retaliación que se iban generando, haciendo que en cada nuevo ciclo de violencia los actores asociados al conflicto armado y al crimen organizado desplegaran modalidades, repertorio y mecanismos de victimización marcados por el aprendizaje de violencias previas, de naturaleza política o criminal.

En Medellín los actores del conflicto armado aprendieron del repertorio de violencias usadas por las organizaciones criminales y los incorporaron a sus formas de acción¹¹⁹ y, a su vez, los actores del crimen organizado incorporaron en sus acciones modalidades y estrategias de victimización propias de la guerra¹²⁰. Esos elementos comunes del rompecabezas hacen referencia, entonces, a la aplicación de justicias privadas y castigos ejemplarizantes, a la pretensión de regular conductas, a la búsqueda del control de territorios, poblaciones y recursos y, fundamentalmente, a la aplicación de las mismas modalidades de violencia. Todos los actores del conflicto armado en la ciudad apelaron a asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, violencia sexual, desplazamientos forzados (individuales y masivos), masacres, secuestros, reclutamientos de niños, niñas y adolescentes, y daños a bienes civiles. Pero lo hicieron en diferentes magnitudes y con diferentes objetivos.

En términos generales, los grupos paramilitares recurrieron además a masacres, torturas, amenazas y ajusticiamientos. Estratégicamente, esas violencias ejemplarizantes respondían a la intención de crear una reputación violenta¹²¹ en aquellos barrios y comunas objetos de control,

¹¹⁹ Por ejemplo, el asesinato selectivo a través de sicarios.

¹²⁰ Por ejemplo, el desplazamiento forzado a través de la amenaza individual y colectiva.

¹²¹ El CNMH señala: “Una reputación de violencia es la imagen que un grupo armado construye deliberadamente de sí mismo, a partir de las acciones de violencia que desencadena para reforzar la credibilidad de sus amenazas y apuntalar su dominio con base en la intimidación que proyecta desde su

hacerse visible y mostrar que el territorio había cambiado de dueño. A ellas se sumaba el uso de una violencia retaliadora en contra de aquello que consideraban subversivo.

Guerrillas y milicianos recurrieron, mayoritariamente, a asesinatos selectivos, secuestros, daños a bienes, acciones bélicas, reclutamiento de menores, desplazamientos selectivos, torturas, “pelas”¹²² y amenazas. Estratégicamente, esas violencias justicieras y retaliadoras respondían a la pretensión de castigar a aquellos que se suponían “contrarios a los intereses del pueblo”. Pero guerrillas y milicias también usaron la violencia ejemplarizante pretendiendo lograr la aceptación comunitaria o el control de barrios de la ciudad.

La violencia ilegal de algunos miembros de la fuerza pública se centró en asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y masacres. Estratégicamente, esas violencias retaliadoras respondían a la pretensión de compensar las fallas institucionales y los límites impuestos por la legalidad para enfrentar las amenazas contra el orden social, económico y moral.

Finalmente, Pablo Escobar y el grupo de los Extraditables recurrieron a atentados terroristas, secuestros políticos y asesinatos selectivos de jueces, periodistas, policías y militantes de izquierda, en este caso, en complicidad con el grupo Muerte a Secuestradores (MAS) y la fuerza pública. Estas violencias justicieras, vengativas y selectivas pretendían someter e intimidar a sectores del Estado y de la sociedad que amenazaban sus intereses.

3.2.4. La crueldad y el exceso

Otro elemento común a todos los actores y sus formas de violencia en Medellín fue el uso de la crueldad y los excesos. La socióloga Elsa Blair sostiene que “la muerte en Colombia es excesiva, no sólo por la cantidad de muertos producida [...], sino por lo excesivo de la carga simbólica inscrita en las maneras utilizadas para ejecutarla, y de las formas simbólicas (el lenguaje, el arte, la imagen) para nombrarla y para narrarla” (Blair, 2014, página xix). Esta dimensión simbólica del exceso tuvo una clara manifestación en las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín.

Los mecanismos y repertorio de violencias de los grupos armados en la ciudad trascendieron el acto de matar y amenazar e incluyeron estrategias de sometimiento que siempre llevaban las huellas del terror. Torturar y asesinar, desaparecer, penetrar al ámbito íntimo y privado para

propia capacidad de daño. Tener esa reputación de violencia reduce paulatinamente la frecuencia e intensidad de las acciones violentas, pues la sola amenaza es suficiente para generar los efectos buscados entre los afectados” (CNMH, 2013, página 40).

¹²² Esta es una expresión que se utilizó en el trabajo de campo para identificar uno de los dispositivos de castigo y control de los grupos armados. Se refiere, principalmente, a golpizas a aquellos que se salieran de las conductas impuestas. Por lo general, “las pelas” son un primer eslabón de otras formas de castigo que luego derivan en desplazamientos forzados, violaciones o asesinatos selectivos.

someter y violar a las víctimas, torturar y asesinar niños y adolescentes porque no se dejan reclutar, masacrar a jóvenes ubicados en una esquina, violar individualmente o en grupo (como hicieron los grupos paramilitares), someter a alguien al sufrimiento del secuestro, descuartizar y desmembrar los cuerpos para dejarlos en bolsas, enterrar, incinerar o inhumar clandestinamente a las víctimas para que no queden huellas e indicios, asesinar en presencia de las familias o en la vía pública, y quitar y despojar de sus viviendas y bienes a los desposeídos, son formas brutales de intimidación, aniquilación y sometimiento de las personas y las comunidades. En términos de Blair:

La muerte no significa lo mismo si se trata de un asesinato «limpio» a la muerte cometida con sevicia y alevosía. Tampoco es igual la que termina en el acto de la muerte física a la que se acompaña de mutilaciones sobre el cuerpo y es, de alguna manera, mensajera de terror, y más significativa desde sus dimensiones simbólicas que físicas, es decir, desde el exceso, mediante una acción sobrecargada de significaciones apresadas en las formas de ejecución de la muerte: no un balazo sino veinte; un cuerpo no sólo muerto sino muerto y mutilado, etc. (2014, página 7).

Esas formas de matar y esos tratos del cuerpo muestran los horrores de la confrontación armada y el uso de mecanismos para crear una reputación violenta del actor que sirva como estrategia ejemplarizante contra potenciales colaboradores del enemigo. Para recrear una auto-representación de los miembros del grupo como poderosos e invulnerables, para cobrar venganza por violencias precedentes o actos de traición, o para imponer o ratificar el control sobre territorios y personas.

Fueron muchas víctimas, fue mucha gente inocente la que se murió, hacían justicia muy feo. Los niños que fumaban marihuana los amarraban con cabuya, los bajaban arrastrados por las escaleras sin camisa, en pantaloneta, a pie limpio, mataban muy cruelmente. Le mataron el hijo a un señor de por mi casa, el papá se arrodilló, les rogó, les explicó que no lo mataran, no señor lo vamos a matar (le dijeron) lo llevaron a la iglesia le pegaron tres tiros en la cabeza y el papá se tuvo que quedar arrodillado en el piso porque si no dejaba que mataran a su hijo lo iban a matar a él también (CNMH, grupo focal con miembros del Ejército, Medellín, 2015).

A él lo bajaron de unas escalas, lo amarraron en una casa, lo torturaron, como era enfermo mental, él se reía, recibió puñaladas, quemaduras de cigarrillo, amputación de partes nobles, amputación de la lengua, pero él se reía, los agresores le indagaban que si él era el sapo del barrio, luego de la tortura le dieron tres tiros [Manrique San José La Cima 2] (CNMH, OMC, Base Violencia Sexual. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

A las 4:00 pm salió de la casa para la Minorista a trabajar y no se volvió a saber de él, hasta seis días después que lo encontramos en la vereda Palmitas del corregimiento San Cristóbal, zona de control paramilitar. Estaba torturado, le arrancaron los testículos, un pedazo de bigote y un pedazo de ceja, y le dieron un tiro en la cabeza, al parecer le echaron ácido porque tenía la piel toda quemada [...]. Mi hijo desapareció un viernes y apareció al miércoles siguiente, por palmitas: torturado, sin genitales, tasajeado, el cuerpo como un pescado, barbilla y la cabeza quemada. Él vivía por Enciso y vendía frutas en la Minorista, yo creo que fueron los del Bloque Metro que eran los que mandaban en Enciso (CNMH, OMC, Base Violencia Sexual. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

3.2.5. Las violencias que se callan o esconden

En su trabajo *Entre Prójimos*, Kimberly Theidon dice que “la violencia efectúa un asalto tremendo sobre los sentidos y los significados” (2004, página, 49), puesto que esta se vive no sólo en los campos de batalla o en la infraestructura de campos y ciudades, sino también en los recuerdos de quienes la padecen. Esto se ve en la afectación de los estados de ánimo, pero también en la enfermedad, la angustia y las marcas físicas en las personas. Lo anterior propone un vínculo entre los acontecimientos sociales y las experiencias individuales que implica que “cuando el cuerpo individual comunica la angustia, podemos escuchar en él el malestar social” (Theidon, 2004, página, 50). En la recopilación de testimonios se identificaron marcas corporales del sufrimiento y la violencia, a través de secuelas físicas, mentales, psicológicas y emocionales. Estas marcas exponen la profundidad de lo vivido y lo implacable que resulta el efecto de la crueldad y el exceso de aquellas violencias que pueden asociarse directamente al conflicto armado, y esas otras que por diferentes razones no se pueden incluir en este conflicto.

En las actividades de campo fue posible rastrear, también, otras formas de expresión de las violencias. Estas tienen que ver con actitudes corporales que impiden la narración, como la falta de respiración, el llanto descontrolado o síntomas de enfermedad; o bien aparecieron silencios que muestran no la ausencia de formas de victimización sino una serie de violencias que se esconden. Se trata de aquellas que no se narran porque sus manifestaciones y protagonistas se encuentran todavía presentes en el territorio. Son violencias que se evaden porque aún no es el momento de hablar de ciertos temas, es decir, aún no es tiempo para la memoria por lo costosa que esta puede resultar.

Para muchos interlocutores del trabajo de campo fue cómodo hablar de las violencias lejanas de finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, pues ni los armados ni sus amigos representaban una amenaza para sus vidas, y contaban con la certeza de que eran violencias superadas. No obstante, esto no pasó con las violencias del nuevo siglo, que se ocultaban y evadían en el relato por la amenaza que implicaban para el narrador. Una de las

mujeres entrevistadas manifestó que entendía la importancia de contar, pero no podía hacerlo por el peligro al que aún estaba enfrentada. Para ella, aunque el conflicto ha virado en intensidad y presencia sigue latente en algunos barrios y algunos actores otrora articulados en siglas específicas y hoy asociados a los combos o a bandas del sector.

Con otro nombre u otro jefe algunos de los armados siguen en los barrios, asociando las violencias que se esconden con aquellos aprendizajes criminales que deja la guerra. En una de las entrevistas se cuestionó que el informe preguntara “¿qué pasó en Medellín?” y no “¿qué pasa en Medellín?”, ya que hoy suceden hechos violentos en los barrios. Pensar en una pregunta en pasado se hace imposible no porque el conflicto tenga la misma intensidad o naturaleza, sino porque aún quedan las reputaciones de violencia de ciertos actores, porque algunos sujetos siguen allí después de transitar a grupos de la criminalidad organizada y porque la violencia política sigue operando contra líderes comunitarios y sociales.

Además, hay violencias que en varias situaciones son inconfesables, porque avergüenzan a la víctima (por ejemplo, la violencia sexual). Dado el carácter íntimo de aquello que es dañado y el estigma social asociado al que se ven sometidas las víctimas, esta forma de violencia suele llevar a que muchas decidan silenciar lo que les sucedió. Esta modalidad de victimización en varios casos no permite que quien la sufre se construya como sujeto de reivindicación, y tiende a aislar a los sujetos violentados por el temor a ser juzgados. La violencia sexual es una de las modalidades en las que el silencio puede ser fundamental por la carga que implica, por la imposibilidad de contar con un proceso judicial adecuado o por los altos costos que tendría la memoria para algunas personas por señalamientos o estigmatizaciones.

Si existe un tema capaz de imponer silencio, éste es claramente el de la violación. Las mujeres cuentan con muchas razones para ocultar que han sido violadas y, con la justicia como un horizonte muy distante, aparecen pocos motivos para hablar acerca de una experiencia estigmatizante y vergonzante (Theidon, 2006, página, 71).

Estas posibles estigmatizaciones también aparecen en el caso del secuestro. Los estereotipos sociales hacen suponer que quien es secuestrado debe tener recursos o pertenece a una clase social alta, lo que hace que se omitan y escondan algunos relatos sobre esta modalidad. Desde la perspectiva de Theidon: “si ser un sujeto implica contar una historia, entonces quizá [muchos] eligen no narrar episodios de victimización como el punto central de quiénes son hoy, el núcleo del sí mismo con el que viven y que presentan a sus interlocutores” (2006, página, 87). Este silencio es visto por Veena Das (2001) como una capacidad de agencia de los sujetos, debido a que no es un silencio débil o ausente, sino una “negación activa” que posibilita la tramitación del

duelo, la protección de la vida en el presente, o la sobrevivencia en escenarios donde aún la violencia sigue latente.

3.3. Las violencias que se cuantifican

Las cifras recopiladas por el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH indican que las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín produjeron 25.623 víctimas directas desde 1980 hasta 2014. Si se incluyen allí las 106.916 víctimas de desplazamiento forzado que aparecen registradas en el RUV¹²³ el total víctimas directas de las violencias asociadas al conflicto armado durante ese lapso ascendería a 132.539 personas¹²⁴. Estas cifras no incluyen las víctimas de amenazas (16.636 personas), tortura (263 personas) y de minas antipersona o munición sin explotar (28 personas), que aparecen registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV). Con ellas, el número de víctimas directas del conflicto armado en el lapso 1980-2014 llegaría a 149.466 personas¹²⁵. Si se apela a una metáfora espacial, se puede afirmar que con el número de ciudadanos de la urbe sometidos a procesos de victimización directa se podría llenar más de tres veces el estadio de fútbol Atanasio Girardot.

No obstante, es importante anotar que existe una brecha enorme entre lo conocido y lo ocurrido, y posiblemente la cantidad de casos identificados está por debajo de las dimensiones reales de la violencia producida por el conflicto armado en la ciudad¹²⁶. Pero los datos recopilados esclarecen algunas de las proporciones de lo sucedido y dan una dimensión numérica a las narraciones, memorias y dramas de cada una de esas víctimas.

Las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín no han sido homogéneas ni constantes en el tiempo. De una violencia relativamente baja y estable a lo largo de la década de los setenta, la ciudad pasó a una tendencia creciente en las modalidades de victimización a partir de 1982 y hasta 2004 (gráfica 7). Ese incremento estuvo fuertemente relacionado con la presencia de dos grandes ciclos violentos: el de la guerra sucia y la turbulencia (1982-1994), y el de la urbanización

¹²³ Todas las cifras que se incluyen del RUV tienen como fecha de corte el 1 de marzo de 2017.

¹²⁴ Es importante anotar que esta cifra sólo corresponde a las víctimas reconocidas en el marco del conflicto, pues hay un gran número de personas que no son reconocidas como tal por la Unidad para las Víctimas y por ende no aparecen en el Registro Único de Víctimas (RUV). En total, son 121.251 personas que se autodefinen como víctimas del conflicto armado y no son reconocidas como tal por la Unidad para las Víctimas.

¹²⁵ A esta cifra se podrían agregar las víctimas indirectas de asesinato (56.924 personas), desaparición forzada (3.663 personas) y secuestro (57 personas) que aparecen en el RUV. Con ellas la cifra total de víctimas directas e indirectas del conflicto armado asciende a 210.110 personas.

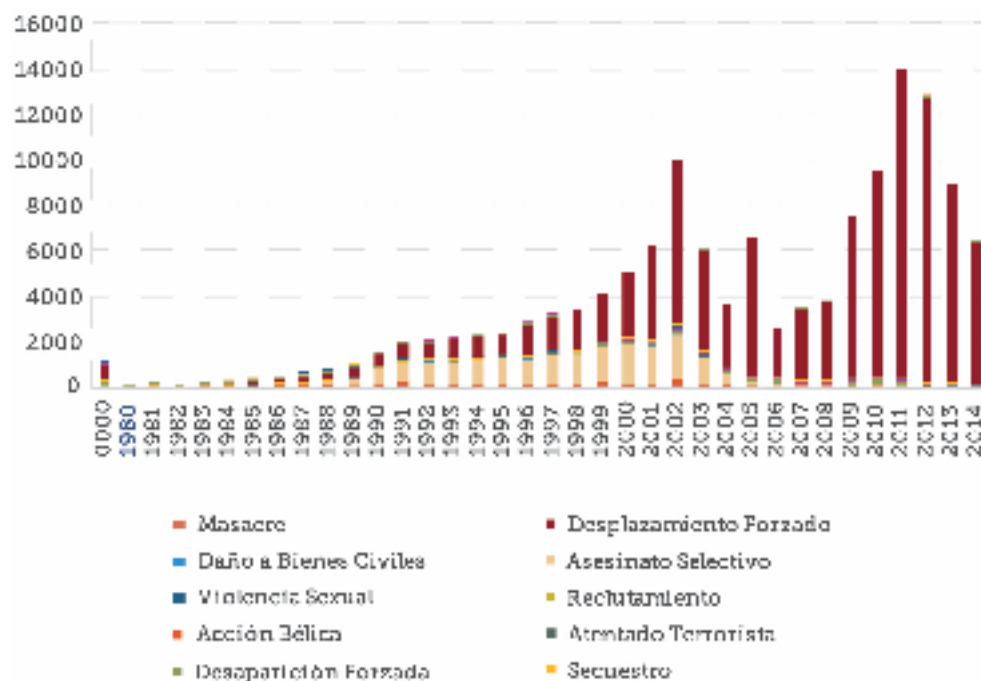
¹²⁶ Como bien lo menciona el *¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*, “establecer las dimensiones reales de la violencia producida por el conflicto armado es una tarea que enfrenta numerosas dificultades. Por una parte, la recolección y el procesamiento de la información se inició tardíamente en el país, debido a la falta de voluntad política para reconocer la problemática y afrontarla, y porque el mismo conflicto armado no se ha contemplado en su verdadera magnitud. A ello se suman obstáculos logísticos y metodológicos para captar y registrar la información, y problemas derivados de la dinámica misma de la guerra, tales como su extensión en el tiempo, las transformaciones en los mecanismos de violencia de los actores armados y el entrecruzamiento de múltiples tipos de violencia. Todo lo anterior incide en el subregistro de los hechos violentos” (CNMH, 2013, página 31).

de la guerra (1995-2005). En el primero de ellos la dinámica de la violencia estuvo marcada fundamentalmente por el aumento de los asesinatos selectivos y, en el segundo, además de lo anterior, por el crecimiento vertiginoso de los procesos de desplazamiento forzado intraurbano. Este segundo ciclo refleja la preponderancia de las formas de violencia que tienen por objeto las disputas territoriales.

La transformación en las formas de intervención del Estado, sumada a la derrota militar de los grupos guerrilleros con presencia en la ciudad y la desmovilización de los paramilitares, se reflejaron en un nuevo descenso en las modalidades de victimización a partir de 2004. Esta tendencia a la baja se rompió en 2005 y entre 2007 y 2011 como consecuencia de las disputas territoriales y de mercados entre organizaciones criminales y el aumento de los casos de desplazamiento forzado intraurbano.

Gráfica 7.

Evolución de las cifras sobre las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín: 1980-2014



Fuente: Elaboración propia, basada en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016.

3.3.1. Las violencias letales



"6:15 de la tarde, mi papá había acabado de llegar de, pues ya llevaba rato de llegar de trabajar. Se quitó el uniforme y se fue para el frente de la casa a tomarse una gaseosa y a jugar con los viejitos que eran sus amigos y yo corrí por toda la casa. Había muchas ventanas y vi a unos tipos que se colocaron unas máscaras y entonces presentí que era para él porque hacía 4 años nos habíamos venido desplazados también de un pueblo" (CNMH, testimonio mujer, colcha de memoria, taller con mediadores de Casa de la Memoria, Medellín, septiembre de 2015). Fotografía: Corporación Región.

Las violencias letales asociadas al conflicto armado en Medellín están profundamente vinculadas con los *asesinatos selectivos*¹²⁷. Según los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, el número de víctimas asociadas a esta modalidad de violencia en la ciudad asciende a 19.832 personas: 18.318 hombres, 1.154 mujeres y 360 personas de las que no se tiene información. En el RUV las víctimas directas de homicidios ascienden a 82.822 y las indirectas son 56.924 personas; mientras que la base de datos del informe de organizaciones sociales, *Colombia Nunca Más*, reporta 1.576 casos de asesinatos selectivos entre los crímenes de lesa humanidad. La base de datos del CNMH muestra que entre 1987 y 2002 las víctimas aumentaron cada año, con dos leves disminuciones en 1996 y 2001.

En términos generales, estos asesinatos fueron realizados bajo la modalidad del sicariato o el ajusticiamiento en la vía pública, y por actores que casi siempre usaban pasamontañas. Por lo regular el asesinato selectivo fue llevado a cabo por actores endógenos a los barrios y comunas, es decir, fue la modalidad de victimización desplegada por prójimos cercanos. Pero esta forma de violencia también incluye los muertos por balas perdidas en enfrentamientos entre grupos armados, las incursiones de varios hombres encapuchados en las viviendas para asesinar a uno

¹²⁷ El asesinato selectivo se entiende como el homicidio intencional de tres (3) o menos personas en estado de indefensión en iguales o diferentes circunstancias de modo, tiempo y lugar, perpetrado por actores del conflicto armado o grupos criminales organizados que presten sus servicios, se asocien o se articulen a los actores del conflicto armado, o grupos criminales organizados y que cumplan con tres condiciones: tienen una estructura militar mínima y hacen un uso sistemático de la violencia; tienen una estructura de mando jerarquizada; y son capaces de imponer estrategias de poder y control sobre territorios, poblaciones y recursos.

o varios de sus miembros, los atentados desde vehículos y motos sin placas a grupos de personas que se encontraban reunidas en espacios públicos (la cancha, el parque o la esquina) o establecimientos comerciales (los billares, la taberna o la tienda). Una habitante de Medellín describió la incursión armada de milicianos y el asesinato de su hijo en un parque del barrio Moravia de la siguiente forma:

Mi hijo [...] de 15 años de edad, quien era estudiante de bachillerato en el ITM [Instituto Tecnológico Metropolitano], lo mataron el día 8 de abril de 1997, en el barrio Moravia, en el parque de Los Álamos. Este parque queda pasando la autopista del barrio Moravia. Él estaba en este parque con unos amigos [...]. Ese grupo de los Elenos estaba detrás de un joven que estaba en el parque [...], lo que sé es que llegaron dando tiros por todas partes y mi hijo trató de correr y le dieron un tiro en la cabeza, lo alcanzaron a recoger y transportarlo hasta el hospital San Vicente en el cual murió al llegar, cuando me avisaron ya estaba muerto, a mí me amenazaba mucho ese grupo que desocupara la casa, nunca la dejé hasta que vi tanta muerte en contra de mi familia de parte de ese grupo (CNMH, OMC, Base de datos Asesinatos Selectivos. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

Los principales segmentos poblacionales que fueron víctimas de asesinatos selectivos fueron los jóvenes y los habitantes de los barrios populares de la ciudad. A ellos se sumaron miembros de organizaciones y partidos políticos de izquierda, líderes sindicales, defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios, docentes, personas pertenecientes a sectores LGBTI, funcionarios de la rama Judicial, periodistas, políticos, militares fuera de servicio y empresarios. Estos asesinatos suelen acompañarse de una serie de estrategias de terror cuya finalidad consiste en “silenciar a las víctimas y garantizar así la impunidad del crimen” (CNMH, 2013, página 45). Pero los asesinatos selectivos “no sólo fueron una estrategia de invisibilización, sino que se integraron a los mecanismos de terror de los actores armados, junto con las huellas de la sevicia y la tortura en los cuerpos expuestos públicamente y con el asesinato de personalidades públicas” (CNMH, 2013, página 45).

En muchas ocasiones las personas fueron sacadas de sus casas, sitios de trabajo o lugares públicos de esparcimiento, por sujetos encapuchados que llegaban en vehículos con vidrios polarizados y sin placas. Las víctimas eran obligadas a irse con ellos y aparecían días después con señales de tortura, incluyendo, en varios casos, signos de violencia sexual. Muchos de los cuerpos se encontraron en fosas comunes, basureros, quebradas y calles. La manera como se describe el encuentro de los cuerpos es a través de frases como “la dejaron tirada en la calle” o “la encontraron tirada en el kilómetro 4”. Esto hace que la desaparición forzada aparezca como hecho asociado, en varios casos, a los asesinatos cometidos en Medellín, pues las víctimas eran etiquetadas como desaparecidas hasta que eran encontradas o identificadas. Una mujer,

habitante del barrio Vallejuelos, relató la desaparición y asesinato del padre de sus tres hijos de la siguiente manera:

Mi compañero, mis tres hijos menores [...] y yo vivíamos en el barrio Vallejuelos, en un rancho de invasión. El día 30 de agosto de 1998 en las horas de la noche, por ahí a las 9 de la noche llegaron varios tipos, eran como 8 tipos encapuchados, tocaron la puerta duro y entraron y preguntaron por mi compañero, él estaba ahí y lo cogieron, lo amarraron y se lo llevaron. [...] Él preguntaba que por qué se lo llevaban y que por qué lo iban a matar y ellos sólo le daban la orden de que caminara y lo insultaban. Esa noche no regresó y al día siguiente empezamos a buscarlo y lo encontramos en el anfiteatro, le habían pegado varios disparos en el barrio un grupo de paramilitares (CNMH, OMC, Base de datos Asesinatos Selectivos. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

Muchos jóvenes y habitantes de la ciudad fueron asesinados en medio de las disputas territoriales de los actores del conflicto armado colombiano y de los enfrentamientos entre grupos milicianos, bandas y combos. Pero también fueron víctimas de formas de justicia retaliativa, desplegadas por algunos sectores de la Policía y escuadrones de la muerte, así como formas de justicia ejemplarizante que tenían como finalidad recordar los buenos comportamientos que debían tenerse, en coherencia con el orden social impuesto por los actores armados. Además, muchos líderes sociales y comunitarios, maestros, estudiantes, raperos, miembros de sindicatos y organizaciones sociales y culturales, fueron asesinados “con el fin de eliminar a quien se considera amenazante y, especialmente, como una forma de demostrar a los sobrevivientes el dominio que podían llegar a tener sobre la población” (CNMH, 2011a, página 132).

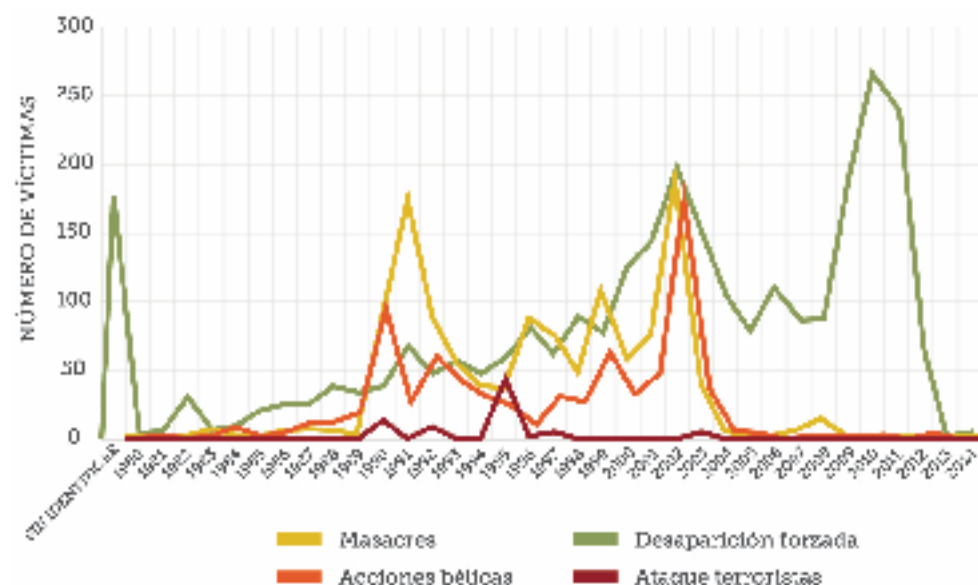
Los asesinatos selectivos tenían como consecuencia desplazamientos forzados intraurbanos, bien sea por amenazas directas de los actores armados a los habitantes de algunos barrios o por el miedo de ser víctimas de hechos similares a los ocurridos a “personas cercanas que cumplían el mismo rol, realizaban la misma actividad o tenían la misma edad” (CNMH, 2011a, página 133).

El asesinato como motivo de desplazamiento de la población en Medellín ha sido referido por la Personería de Medellín en cada uno de sus informes desde el 2006. En ese año, el 3 % de un total de 776 declarantes señaló el asesinato como motivo de su desplazamiento. La proporción de personas que huye como resultado de un asesinato aumentó en 2007: el 8 % de un total de 228 familias declarantes se desplazó por asesinatos. Entre el 2008 y el 2010 este patrón se mantuvo; en 2008, de 407 declaraciones el 3 % declaró este motivo de desplazamiento, y en 2010 el 8,8 % de un total de 1.378 declarantes señaló este su motivo de desplazamiento (CNMH, 2011a, páginas 131 y 132).

A las cifras de asesinatos selectivos se suman las víctimas de las *masacres* (gráfica 8)¹²⁸. En Medellín, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, entre 1980 y 2014 ocurrieron 221 masacres que dejaron un número total de 1.175 víctimas: 574 hombres, 59 mujeres y 542 personas de las que no se tiene información. Por su parte, la base de datos del informe *Nunca Más* reporta 980 víctimas de masacres. Los años más mortales fueron 1991, 1996, 1999 y 2002, en los cuales se sumaron 547 víctimas.

Gráfica 8.

Evolución del número de víctimas de masacres, desaparición forzada, acciones bélicas y ataque terroristas cometidas en el marco del conflicto armado en Medellín: 1980-2014



Fuente: Elaboración propia, basada en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016.

Los relatos obtenidos en el trabajo de campo y en la información del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH mencionan que entre 1990 y 1993 grupos armados encapuchados descendían de los vehículos y empezaban a disparar indiscriminadamente a quienes departían en espacios públicos o en establecimientos comerciales. En un número importante de casos las masacres respondieron, en primer lugar, a la acción de grupos de limpieza social surgidos a la sombra del paramilitarismo y de los grupos milicianos y, en segundo lugar, a la retaliación de miembros de organismos de seguridad del Estado contra jóvenes de las barriadas populares que soportaban el estigma de ser identificados como pistoleros al servicio del narcotráfico o miembros activos de las guerrillas.

¹²⁸ La masacre se entiende como el homicidio intencional de cuatro (4) o más personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que se distingue por la exposición pública de la violencia y la relación asimétrica entre el poder absoluto del actor armado y la población civil.

El repertorio de violencias con las cuales se llevaron a cabo las masacres durante este lapso hicieron muy difícil reconocer a los responsables, por eso en la mayoría de los registros aparecen como “actores no identificados”. Sin embargo, en varios de los relatos escuchados en esta investigación se señala que a comienzos de los noventa los responsables fueron principalmente paramilitares, agentes de la fuerza pública y grupos milicianos. En todo caso, la masacre ha sido un elemento central en el repertorio de violencias desplegadas por actores que eran exógenos a los barrios y comunidades, es decir, era una modalidad de violencia desplegada por “los otros”, los extraños al sector. Un integrante de la Policía, víctima de las acciones terroristas desplegadas por el Cartel de Medellín, reconoce el papel de la Policía en este tipo de violencia:

Cuando usted habla de si la Policía ha tenido responsabilidades, pues poniéndolo así, de muchos de los muertos que hay en Medellín, yo digo que sí [...]. Tuve una persona, un comandante, cuyo nombre no voy a decir pero que participó en ese tipo de cosas. Por ejemplo, mataron en la bomba de Colombia, mataron tantos en tal parte. Cogemos un carro y nos robamos cinco y los matamos. Y eso ocurrió en Medellín, y eso ocurrió y la Policía tiene mucho que ver también en muchos de los muertos que pasó en esa época; porque si a mí me mataron a mi hermano y yo sé quién lo mató, yo tomo represalias y así pasó y así es (CNMH, grupo focal con miembros Policía, Medellín, 2015).

La familiar de una víctima de la masacre ocurrida en el barrio Kennedy el 10 de febrero de 1990 recordó así lo sucedido:

El día 10 de febrero de 1990 salió de la casa más o menos a las 7:00 p.m., ingresó con unos amigos a una heladería del barrio Kennedy de nombre Heladería la Tertulia. A la hora salió a comprar comida a una señora que tenía un carrito. Al momento de estar comiendo, en la espalda unos encapuchados comenzaron a dispararle a él, de ráfaga con metralletas. Siguieron disparando hacia adentro del local, e hirieron a 17 personas y murieron 8 personas. Este hecho fue una masacre, y según versiones del público, los encapuchados bajaron de un carro gris y comenzaron a disparar a todo el mundo (CNMH, OMC, Base de datos masacres. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

Las masacres en este período también se cometían señalando previamente a las víctimas. En estos casos, los actores armados llegaban al sitio definido para cometer el hecho, amarraban a las personas, las ponían contra una pared o boca abajo, y las ajusticiaban, bien fuera con tiros de gracia o disparando ráfagas de metralla o fusil. El caso más emblemático de estas masacres selectivas fue la cometida contra jóvenes de la Juco en 1990.

Las víctimas fueron asesinadas por miembros de la banda paramilitar Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista que el 24 de noviembre a las 4 de la tarde llegó a la sede de la Juco a bordo de un

automóvil, penetraron en el interior, obligándolas con las armas en la mano a subir a sus víctimas al segundo piso. Allí los hicieron tender boca abajo en una pequeña cocina y les dispararon a quemarropa, dando muerte a 5 y causando heridas a 2 más (CNMH, OMC, Base de datos masacres. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

Los relatos escuchados en la investigación dijeron que entre 1997 y 2002 los encapuchados que perpetraban las masacres eran miembros de los grupos armados que tenían o pretendían tener el control de los barrios. Las masacres respondieron a: disputas de guerrillas y milicias contra las bandas y combos por el control de los barrios; acciones de los grupos paramilitares que intentaban cooptar a los actores del mundo criminal para enfrentar, posteriormente, a las guerrillas y milicias; y algunas acciones de la fuerza pública. A finales de la década de 1990 y comienzos de la siguiente la gente identifica como victimarios, fundamentalmente a los grupos paramilitares (47 % de los casos), a guerrillas y grupos de milicias (15 % de los casos), a otras organizaciones criminales (7 % de los casos) y a la fuerza pública (3 % de los casos). En el 28 % de los casos el actor se reporta como desconocido¹²⁹.

A estas modalidades de la violencia letal se suman, además, las *acciones bélicas* (gráfica 7)¹³⁰. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, entre 1980 y 2014 murieron 784 personas, como resultado de las 676 acciones bélicas ejecutadas por los actores del conflicto armado en la ciudad: 539 hombres, 62 mujeres y 183 personas de las que no se tiene información. El RUV registra 2.015 víctimas de actos terroristas, atentados, combates y hostigamientos; mientras que la base de datos del informe *Colombia Nunca Más* reporta 22 víctimas de atentados terroristas, 8 de ataques terroristas, 14 de acciones bélicas y 10 de ataque a población.

La sucesión cotidiana de eventos como contactos armados¹³¹, emboscadas, operativos militares y hostigamientos y ataques a instalaciones de las Fuerzas Armadas por parte de los grupos milicianos y las guerrillas explica que en muchos sectores de la ciudad los pobladores evocaran la violencia a través de la narración de acciones propias de la guerra. La presencia de acciones bélicas en el contexto urbano hirió o causó la muerte de muchos civiles, destruyó bienes, provocó

¹²⁹ Información elaborada con base en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH.

¹³⁰ Se entiende por acciones bélicas (militares) en el marco del conflicto armado “[...] aquel acto que se lleva a cabo bajo el que hacer legítimo de la guerra, teniendo en cuenta que responda a un objetivo militar definido y haga uso de medios y armas lícitos en el combate” (CNMH, 2013). En las acciones bélicas se ven involucradas al menos dos partes, de un lado las Fuerzas Armadas gubernamentales o estatales, y del otro lado, los grupos armados organizados, que bajo la dirección de un mando, son los que conducen directamente las hostilidades (CICR, Vietri, Melzer, 2010), así como los combates que enfrentan a estos últimos.

¹³¹ Un contacto armado es el enfrentamiento que se da entre dos grupos, generalmente fuerza pública y otro actor del conflicto armado.

pérdidas económicas importantes, y alteró la tranquilidad de las personas de la ciudad que residían cerca de los comandos y puestos de Policía, o de las brigadas militares.

A esto se suman las víctimas de los enfrentamientos entre diferentes grupos armados en muchos barrios de la ciudad. Quedar en medio del fuego cruzado de dos actores, no poder salir o entrar al barrio por los enfrentamientos, no poder transitar por ciertas cuadras o barrios por la existencia de “fronteras invisibles”, o caer muerto por la acción de “una bala perdida” son hechos que aparecen en la memoria de muchos habitantes de los barrios populares como momentos de la violencia propios del desarrollo de la guerra. Una joven estudiante de modelaje, habitante del barrio El Salado, de la comuna 13, describió las dificultades para regresar a su casa en medio de los enfrentamientos entre milicias y paramilitares:

Caminamos por el borde de la calle, por las partes con más sombras para que no nos vieran, porque había luna. Pero cuando pasábamos por el lado de la cancha de fútbol del liceo, se vino otra vez la balacera, pero ya cerquítica, como uno de esos aguaceros que se sueltan ligero, que al principio son goteras y al momento diluvio. Así se vino [...]. Nos quedamos quietos, tirados bocabajo en la parte más oscura. Y las balas silbando por encima de nosotros. Eso fue lo más horrible, porque desde donde estábamos podíamos ver a la gente que estaba disparando, y los insultos que se decían. Al mucho rato se fueron yendo para otro lado, se fueron alejando los disparos. Ahí aprovechamos y corrimos hacia la iglesia (Aricapa, 2015, páginas 164-165).

El enfrentamiento de Pablo Escobar contra el Estado y los Pepes, el crecimiento y la expansión de movimientos milicianos en la ciudad, y las disputas entre grupos paramilitares, guerrillas, bandas y combos por el control territorial y social de algunos barrios y comunas son elementos centrales para comprender por qué la mayor cantidad de víctimas de acciones bélicas se dieron en medio de contactos y enfrentamientos armados entre los diferentes actores del conflicto¹³². Esto dejó un alto porcentaje de víctimas civiles que los reportes oficiales denominaron producto de las “balas perdidas”. Incluso, muchos relatos mencionan que al día siguiente de ocurridos los hechos, los actores armados se dirigían a las casas de las víctimas a pedir perdón y a decir que todo “fue un error”. Una mujer del barrio Popular 2 recordó la muerte de su hijo por una bala perdida, en medio del enfrentamiento entre paramilitares y una banda del sector:

Ese día yo lo había mandado que le llevara el almuerzo al papá, eran como la 1 de la tarde. En ese tiempo había muchos problemas entre los paramilitares y la banda de Los Calvos. Cuando mi hijo llegó a la casa, la banda de Los Calvos decía “dispárale” (a los paramilitares) y empezó la balacera. Yo estaba en

¹³² 59 % del total de los casos referidos a acciones bélicas.

el segundo piso de mi casa, al bajar al primer piso, mis otros hijos y unos amigos estaban escondidos dentro de mi casa, cuando miré para la puerta de la calle vi a mi hijo Mauricio tirado en el suelo y se echó la bendición. Mientras duró la balacera no pudimos ayudarlo. Luego lo llevamos a la Unidad Intermedia de Santa Cruz y luego al Hospital San Vicente de Paul, donde falleció. Al otro día del entierro fueron como 10 paramilitares a decir que eso no era para mi hijo, pero que había caído una víctima inocente, que con eso no solucionaban nada, pero que eso no era para él. Mi hija fue la que les abrió la puerta. Los paramilitares siempre estaban vestidos con uniformes. Quiero corregir, los que disparaban era los paramilitares a los de la banda de Los Calvos. Ellos eran los que decían: “ve a esos hijueputas ¡dales, dales!” (CNMH, OMC, Base de datos acciones bélicas. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

Los enfrentamientos entre actores ocasionaron también desplazamientos forzados de muchas personas que por temor a caer en fuego cruzado o ser víctimas de alguno de los coletazos de las acciones bélicas, decidieron desplazarse de sus barrios hacia otros que consideraban menos peligrosos. Estos se dieron, principalmente, en el período de urbanización de la guerra. En la comuna 13, por ejemplo, hubo desplazamientos asociados a este hecho, y por ello la gente se fue del barrio “[...] por motivos de seguridad, es decir, para evitar el impacto del fuego cruzado, para escapar al horror que generó la contundencia de los enfrentamientos en las calles” (CNMH, 2011a, página, 123).

La representación de los barrios como el espacio en el que se libró una guerra también alcanzó a permear a toda la ciudad a comienzos de la década de los noventa, a raíz de la incertidumbre provocada por los *atentados terroristas* (gráfica 7)¹³³. El Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH identificó 13 atentados terroristas ejecutados por los actores centrales del conflicto armado. Se trató de atentados con dinamita ejecutados fundamentalmente por milicias afines a grupos guerrilleros contra las sedes de corporaciones financieras o gremios económicos, las instalaciones policiales y militares, las casas de periodistas o jueces, las sedes de los partidos políticos, y oficinas de empresas públicas o privadas. Esos atentados produjeron un total de 363 heridos y 80 muertos civiles: 28 hombres, 23 mujeres y 29 personas de las que no se tiene información.

[El 6 de diciembre de 1999] guerrilleros de la UC-ELN hicieron detonar un vehículo Renault 18, color blanco, modelo 83, de placas KCJ-338 cargado con varios kilos de dinamita, a la 1:50 a.m., frente a las instalaciones de Isagén, la mayor empresa de generación de energía eléctrica en Colombia, ubicada en la carrera 43A Núm. 11A-80, barrio El Poblado. En el hecho resultó herido un vigilante y quedó semidestruida

¹³³ El *atentado terrorista* se entiende como todo ataque perpetrado con explosivos contra objetivos civiles en lugares públicos con un alto potencial de devastación o letalidad, cuya finalidad principal es generar temor en la población. Son perpetrados por los actores del conflicto armado o grupos criminales organizados que presten sus servicios, se asocien o se articulen a los actores del conflicto armado, o grupos criminales organizados que cumplan con las tres condiciones mencionadas en la definición de los asesinatos selectivos.

la sede de dicha empresa, un edificio de seis pisos (CNMH, OMC, Base de datos atentados terroristas. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

[El 24 de junio de 1997] presuntos milicianos de las FARC atentaron contra la sede de la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA), agremiación de productores de la región de Urabá. La explosión de mediano poder dejó 11 personas heridas, daños en la sede y en las edificaciones vecinas (CNMH, OMC, Base de datos atentados terroristas. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

[El 20 de enero de 1997] miembros de las Milicias Populares activaron una bomba contra la sede de Asocomunal, ubicada en la calle 52 con calle 53, causando la muerte de 5 personas y heridas a 56 más. El artefacto explosivo, compuesto aproximadamente por 70 kilos de dinamita amoniaca fue activado a control remoto y colocado en la escalera que conduce a la sede de una Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Rural, Convivir, denominada Asepal (CNMH, OMC, Base de datos atentados terroristas. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

A las acciones anteriores se suman los atentados terroristas atribuidos a Pablo Escobar y el Cartel de Medellín entre los años 1988 y 1993, que dejaron un total de 105 muertos¹³⁴; el atentado en el parque San Antonio de Medellín, adjudicado al ELN¹³⁵; que segó la vida de 22 personas el 10 de junio de 1995; el atentado en el Centro Comercial El Tesoro el 10 de enero de 2001 que dejó una víctima fatal; y el atentado en el parque Lleras el 17 de mayo de 2001, adjudicado a la banda La Terraza, que dejó 8 muertos. Estos atentados ocupan un lugar central en la memoria de los habitantes de la ciudad por su magnitud, por ejercer una violencia indiscriminada y por la sensación de incertidumbre generalizada que produjeron.

Además de las modalidades anteriores, una de las formas de violencia más recordada en Medellín por su atrocidad y capacidad de generar terror es la *desaparición forzada* (gráfica 8)¹³⁶. El Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH recopiló información sobre 2.784 casos de desaparición forzada en la ciudad entre 1980 y 2014; 2.364 hombres, 402 mujeres y 18 personas

¹³⁴ Aquí se hace referencia a los 15 grandes atentados que fue posible rastrear en la prensa. La lista de esos atentados es la siguiente: explosión de carro-bomba en el centro de Medellín contra las instalaciones del periódico *El Colombiano*, el 10 de marzo de 1988; ataque con bomba a una sede de Drogas La Rebaja en Medellín el 19 de agosto de 1988; bomba frente a las bodegas de Pintuco en Medellín el 30 de agosto de 1989; carro bomba contra patrulla del Cuerpo Élite de la Policía en el puente “el pandequeso” de Medellín el 11 de abril de 1990; carro bomba contra patrulla del Cuerpo Élite de la Policía el 25 de abril de 1990; carro bomba cerca al Hotel Intercontinental de Medellín el 24 de mayo de 1990; carro bomba contra estación de Policía en El Poblado el 15 de junio de 1990; carro bomba contra la Estación Libertadores de la Policía el 28 de junio de 1990; ataque con bomba contra la Escuela Carlos Holguín de la Policía el 12 de diciembre de 1990; atentado terrorista en la Plaza de Toros La Macarena de Medellín el 16 de febrero de 1991; carro bomba a cinco cuadras del estadio Atanasio Girardot de Medellín el 3 de diciembre de 1992; carro bomba en el barrio Laureles el 24 de diciembre de 1992; atentado con bomba contra estación de la Policía el 27 de diciembre de 1992; carro bomba en el estacionamiento de un edificio donde residían varios jueces el 6 de enero de 1993; carro bomba en la calle 49 con carrera 50 en Medellín el 24 de febrero de 1993. Fuente: *El Colombiano*, *El Tiempo*, *Semana* y *El Mundo*.

¹³⁵ Según fuentes de prensa se afirma que “se encontraron panfletos del Eln y un croquis a lápiz de la sede de la Brigada” (*El Tiempo*, 11 de junio de 1995).

¹³⁶ La *desaparición forzada* se entiende como el sometimiento de una persona a privación de su libertad, contra su voluntad, cualquiera sea su forma: arresto, detención, secuestro o toma de rehén, por parte de agentes del Estado, miembros de grupos armados ilegales que toman parte en el conflicto armado, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de su ocultamiento y/o de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley.

de las que no se tiene información. El RUV registra 5.190 víctimas directas y 3.663 indirectas. Por su parte, la base de datos del informe *Colombia Nunca Más* reporta 194 víctimas.



“Pasó toda la noche bailando conmigo: ‘ma, venga bailemos para que quedemos en la grabación’. Y sí, yo me quedaba ayudándole a hacer dizque a la señora de la casa, dizque ayudándole a atender la gente y él salía pa’ la sala. Cuando no me volvió a sacar, no me volvió a sacar, cuando asomo yo a la sala y veo a todos los compañeros del colegio de él y les digo: ‘muchachos ¿y dónde está Jefferson?’ y me dicen ‘ay doña M, a Jefferson se lo montaron en una moto y se lo llevaron’” (CNMH, mujer, colcha de la memoria, taller de memoria Madres de la Candelaria, Medellín, 30 de noviembre de 2015). Fotografía: Corporación Región.

En términos de su evolución esta modalidad de violencia presenta los siguientes momentos claves: el año 1979, correspondiente a la expedición del Estatuto de Seguridad Nacional; el año 1982, en el que se comienzan a sentir los primeros coletazos de la creación del MAS y el comienzo de la guerra sucia; el lapso que va de 1984 hasta los primeros años de la década de los noventa, marcado por el despliegue del proyecto paramilitar y la estrategia de aniquilamiento contra organizaciones políticas de

izquierda en todo el país¹³⁷; los años finales de la década de los noventa y los primeros años del nuevo siglo, que corresponden al proceso de urbanización de la guerra en la ciudad; y el lapso comprendido entre 2009 y 2011, marcado por el reacomodo de las estructuras criminales, en el que se registra el número más alto de personas desaparecidas. Ello se debe, según el Informe sobre desaparición forzada de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, a que los

¹³⁷ En el período 1987-1993 la desaparición forzada se asoció con agentes del Estado, especialmente la Policía, el F2 y el B2. Las milicias populares también fueron sindicadas de desaparecer personas, especialmente en la zona nororiental. Esto lo hacían sacando a las personas de sus casas. En varios casos las personas eran encontradas en quebradas del sector, con evidentes signos de tortura. En las acciones que ejecutaron tanto las milicias populares como los agentes del Estado, la mayoría de víctimas son hombres, muchos de ellos jóvenes.

procesos de desmovilización paramilitar no dieron fin a las acciones de violencia política en la ciudad (Alcaldía de Medellín, 2015).

Una de las características de la desaparición forzada es la pretensión de los actores de negar y ocultar toda información sobre el paradero y la identidad de la víctima, por lo que no se puede afirmar tajantemente su letalidad, dado que el desenlace de ella es incierto. La víctima puede encontrarse viva, muerta o puede no ser encontrada, perpetuando en el tiempo su condición de desaparecida. Por otro lado, la investigación escuchó relatos en los que las personas aparecen muertas a los pocos días de reportada su desaparición, pero el estado en el que se encuentran los cuerpos muestra la intención del perpetrador de borrar la identidad de la víctima usando técnicas macabras como el descuartizamiento, la incineración, la inhumación clandestina, la extracción de la dentadura y la amputación y quema de huellas dactilares. En otros casos las víctimas sólo se pueden reconocer por la presencia de objetos metálicos puestos en operaciones (platinas o tornillos) o por las prendas de ropa que se encontraban cerca a los cuerpos. Algunas fueron encontradas en fosas comunes o en canecas de basura.

En la mayoría de los casos reportados sobre desaparición forzada los familiares no tienen información sobre cómo ocurrió la desaparición de sus familiares ni quiénes fueron los presuntos responsables, y en los relatos aparece con frecuencia la frase “salió de la casa y nunca volvió”. En el 65 % de los casos el victimario se reporta como desconocido o grupo armado no identificado.

Ellos me entregaron una foto, un retrato que hicieron a medida del hijo mío porque al hijo mío le desfiguraron la cara y eso siempre es así, en esos falsos positivos, en esas desapariciones que siempre tienen que ver con el Estado, a ellos siempre como que los desfiguran mucho como para que dé más lidia identificarlos (CNMH, testimonio mujer, taller Madres de la Candelaria, Medellín, 2015).

La desaparición forzada es una forma de violencia silenciosa, cruel, inacabada y permanente, con un comienzo para los familiares de la víctima y en la mayoría de los casos sin un final. Tiene muy poco impacto social, una mínima visibilidad en los medios de comunicación, y un margen de denuncia sumamente escaso, debido a las presiones de los actores armados y a la clara y documentada participación de agentes del Estado en la perpetración de muchos casos de este tipo de delitos (CNMH, 2013, página 58). Es precisamente por estas características que las cifras se han incrementado en los últimos años, lo que ha coincidido con el descenso en las cifras de asesinatos selectivos pues, como ya se mencionó, hace parte de los aprendizajes criminales de diversos grupos armados, que intentan borrar las evidencias del delito para poder evadir la acción de la justicia.

3.3.2. Las violencias no letales

Las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín incluyen varias no letales como el secuestro, la violencia sexual, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el daño a bienes civiles y el desplazamiento forzado. Estas modalidades de violencia muestran un rostro no menos intenso de la violencia en el que juega un papel fundamental el uso de la crueldad y el exceso para lograr el sometimiento¹³⁸. Aquí el objetivo no es tanto el exterminio de la víctima sino la subordinación del enemigo y crear terror para controlar poblaciones y territorios. Por eso son violencias ejemplarizantes, con un mensaje que trasciende a la víctima, y se dirige también contra aquellos que se consideran colaboradores, amigos, familiares, financiadores y apoyos del contrario, o contra aquellos que fueron estigmatizados como una amenaza a la moral y el orden porque no encajaban en los estereotipos sociales de los victimarios o no cumplían con algunas de sus normas sociales y costumbres.

Entre las violencias no letales, el *secuestro*¹³⁹ es un elemento central para comprender la dinámica global del conflicto armado colombiano (CNMH, 2013b, página 13) pues su expansión y práctica rutinaria fue un factor determinante de la generalización de la justicia privada y tuvo una incidencia notable en la degradación de la guerra. El secuestro dotó discursivamente a los paramilitares de un lenguaje justificativo¹⁴⁰ y fue una de las prácticas por las que se articularon y crearon nexos entre los actores del conflicto armado y el crimen organizado. En relación con este último asunto resulta claro que, en muchos momentos, por acción o reacción, la práctica del secuestro borró la línea de diferenciación de los actores armados con la delincuencia común. El surgimiento del grupo MAS es un ejemplo; la venta de secuestrados a la guerrilla es otro.

El Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH registra 484 víctimas de secuestro en Medellín entre 1980 y 2014: 370 hombres, 107 mujeres y 7 personas de las que no se tiene información. El RUV registra 485 víctimas directas y 57 indirectas. Entre 1984 y 1991 el secuestro fue un fenómeno aislado y esporádico asociado al crimen o a las estrategias de grupos guerrilleros que lo utilizaban como un instrumento de propaganda política, un mecanismo de presión política o como fuente de financiación.

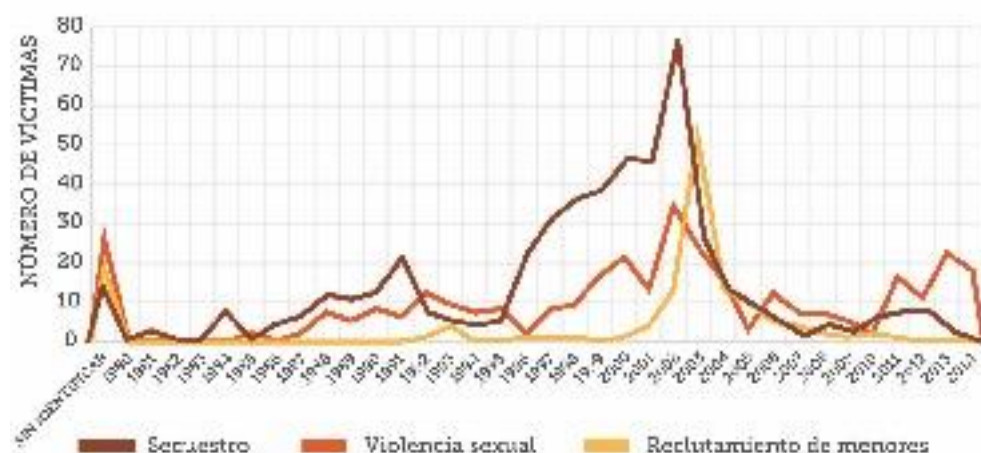
¹³⁸ Si se excluyen los casos de desplazamiento forzado se puede afirmar que estas modalidades de violencia presentan un subregistro mucho mayor que los asesinatos selectivos, las masacres, los atentados terroristas y la desaparición forzada.

¹³⁹ El secuestro es el arrebato, substracción, retención u ocultamiento de una persona, en contra de su voluntad, por medio de la intimidación, violencia o engaño, por parte de los actores del conflicto armado o con su participación. Este puede ser simple, cuando no tiene una finalidad manifiesta, o extorsivo cuando se realiza con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político (Congreso de la República, 2000).

¹⁴⁰ El paramilitarismo no se puede explicar como una reacción de las élites al secuestro. Pero en términos prácticos resulta innegable el papel de esta forma de victimización en la expansión del discurso justificatorio de la acción de este autor. La lucha contra el secuestro creó puentes entre los paramilitares, las élites rurales y amplios sectores de las clases medias urbanas y fue un elemento fundamental en la justificación dada a la acción paramilitar.

Gráfica 9.

Evolución del número de víctimas de secuestro, violencia sexual y reclutamiento de menores ocurridos en el marco del conflicto armado en Medellín, 1980-2014



Fuente: Elaboración propia, basada en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016. Para elaborar la curva de reclutamiento forzado se tomaron los datos del RUV.

En algunos casos, esta modalidad se asoció a las acciones del MAS, pero también a las estrategias del Cartel de Medellín contra algunos sectores de la ciudad. Sobre ese primer momento un empresario de la ciudad dijo:

Yo pienso que hay que mirarlo por etapas. La primera es el proceso de los años ochenta donde se consolida Pablo Escobar y se apodera de todo el manejo del hampa en Medellín. Amenaza a todas las personas que se oponían a sus ideas. Llevó a cabo secuestros a empresarios como Manuel Santiago, Julián Echavarría el hijo de Norman, en fin. Fueron muchos los empresarios que se vieron directamente atacados porque no eran del agrado de lo que quería Pablo Escobar, que era tomarse esta ciudad por asalto con su poder económico (CNMH, entrevista a empresario, Medellín, 2016).

Pero entre 1997 y 2002 esta forma de victimización aumentó notablemente (gráfica 8)¹⁴¹ y se convirtió en un instrumento sistemático de guerra utilizado por milicias y guerrillas, especialmente bajo la modalidad exprés. El secuestro fue especialmente frecuente en la comuna 13, donde fueron llevadas varias personas secuestradas en la ciudad, que luego serían devueltas a sus familias después de pagar los respectivos rescates. Allí también eran retenidas algunas personas por varias horas mientras sus acompañantes o familiares negociaban y recogían las sumas de dinero solicitadas. Una mujer de la ciudad recordó el secuestro de su sobrina, en el sector de Los Molinos, en el barrio Belén, de la siguiente manera:

¹⁴¹ En esos años se presentaron el 74,4 % de los casos.

Un día una de mis hermanas que es muy loca me llama a las 6 a.m. gritando “se la llevaron, se la llevaron”. Yo decía: ¿esta qué?, está loca. “Sí, iba en un carro y se la llevaron”. Yo le decía “cálmate querida, a quién se llevaron”. Me dice “se llevaron a [...]” y a mí se me desconfigura el mundo. “¿Cómo así que se la llevaron? ¡No entiendo!”. Salimos corriendo donde estaba mi hermana, mi hermana estaba descompuesta y la historia era que [...] mi sobrina [...] se montó en el carro con un vecino y cuando iba pasando por lo que es ahora Los Molinos, que antes no eran Los Molinos, dos motos la bajan del carro y se la llevan. Hasta ahí es la historia, el señor se devuelve a contar la historia y le preguntan “¿Usted por qué estaba con ella?”. La historia era un poco loca. El señor dice “ella me pidió el favor que la llevara y yo la llevé”. Entonces empieza toda una agonía, porque ¿quién se la llevó, qué hay que hacer? Mi hermana no tenía calma para hacer la denuncia, el día pasó en todo ese voleo. Como a las 5 p.m. estábamos todos reunidos y fue la primera llamada. Bueno “tiene que vender el carro, nosotros tenemos a una monita muy bonita, muy querida, haciéndola muy objeto sexual a ella, bueno nos tienen que dar \$ 50 millones por ella mañana a las 8 a.m.”. Fue una cosa muy horrible, ya estaba el Gaula, la Policía, diciéndonos “es un objeto; usted tiene que decir no me importa, quédese con ella”. Eran unas conversaciones tan absurdas, yo decía: “este es un país de locos, ¿cómo hacemos esas conversaciones tan absurdas?”. Además con la boca del estómago abierta (CNMH, testimonio mujer, taller equipo de investigación, Medellín, 2015).

Pero el secuestro también fue un mecanismo utilizado por grupos paramilitares en su “lucha contrainsurgente” y una empresa criminal altamente lucrativa. Durante el período correspondiente a la urbanización de la guerra todos los actores del conflicto usaron y desplegaron esta modalidad de victimización, en diferentes magnitudes y de diversas formas. Entre las violencias asociadas al conflicto armado, un porcentaje bastante alto de los secuestros fueron cometidos por las guerrillas y los grupos milicianos (52 %). A los paramilitares se les imputan el 11 % de los casos y a las organizaciones criminales el 2 %. En un número elevado de casos los perpetradores no fueron identificados (33 % de los casos). Un comerciante del barrio San Germán, liberado después de pagar a las FARC, recuerda así su secuestro:

Siendo las 8:30 a.m. me encontraba en el parqueadero de mi familia, en el sector de San Germán. Ingresaron siete sujetos de las FARC con armas cortas preguntando por mis hermanos; al no encontrarlos me llevaron a mí y me desplazaron al oriente, a una vereda en Cocorná. Estuve 18 meses en cautiverio, encadenado de pies y manos a un árbol. Compartí el cautiverio con otros seis secuestrados más. La liberación se produjo una vez se pagó el dinero exigido por dicho grupo [...] (CNMH, OMC, Base de Secuestro. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

Una modalidad de violencia muy frecuente en la ciudad pero de la que no suele hablarse o denunciarse, es la *violencia sexual*¹⁴². Esto se debe a las profundas huellas que causa esta forma

¹⁴² La violencia sexual incluye todos aquellos actos de naturaleza sexual perpetrados por uno o varios de los actores del conflicto armado, sobre personas en estado de indefensión y cuya voluntad es sometida no sólo a través de la fuerza física, sino también por diversas modalidades de coerción y engaño. Estos actos se llevan a cabo, por ejemplo, con la intención de: aleccionar a las comunidades, controlar el cuerpo de las víctimas, castigar de manera

de victimización y al temor que generan los posibles señalamientos a los que son sometidas las personas que pasan por estos hechos. Una funcionaria pública que trabaja desde hace varios años en el tema señala que en Medellín existe un subregistro oficial de esta modalidad de violencia, pues no son pocos los casos en que las víctimas son coaccionadas para guardar silencio o no se atreven a denunciar por la posibilidad latente de ser revictimizadas.

No es muy claro, porque siempre median amenazas graves sobre la vida de la persona y el resto de la familia, entonces es un asunto del que no se habla no sólo por la vergüenza o por la pérdida de valor sobre sí misma sino por las amenazas que hay allí presentes. Con mucha frecuencia les dicen “sabemos dónde está usted, dónde está su familia, entonces ni siquiera se acerque a la Fiscalía”, con el agravante de que en varios casos hemos dado el paso de ir a la Fiscalía y a los dos o tres días están los agresores nuevamente agrediendo a esa mujer entonces decimos: “qué relación tan estrecha entre los agresores y la Fiscalía que se supone es quien debe ejercer el elemento investigativo y de sanción de este tipo de violencias” (CNMH, testimonio de mujer adulta, funcionaria pública, Medellín, 2015).

La violencia sexual también pasa desapercibida por “la pervivencia de aspectos sociales y culturales que han naturalizado la violencia contra la mujer y la población LGBTI” (CNMH, 2013, página 77) o porque “los arreglos de género que imperan en el entorno social de la víctima sesgan la percepción del hecho victimizante como hecho de violencia” (CNMH, 2013, página 77), o porque en ciertos contextos la víctima termina por normalizar la violencia y la asume como una forma de acceder y construir su sexualidad. Muchas mujeres y personas de sectores LGBTI que se encuentran inmersos en el mundo de la prostitución llegaron a asumir en lo cotidiano como normal los abusos y atropellos que cometían los actores armados, creyendo que debían aceptarlo porque ese era el orden de las cosas. En estos casos la violencia sexual terminaba siendo una forma de acceso a la sexualidad y al “romance”, y una situación normalizada por los actores del conflicto y las víctimas. Por ello, aquellas personas que no se sometían y no accedían a las peticiones sexuales de los miembros de los grupos ilegales eran golpeadas y maltratadas. Una mujer trans, en ejercicio de la prostitución, describió esta situación de la siguiente manera:

Yo fui golpeada una vez porque ellos creen que uno está en la calle y que está en lo público y que uno va a acceder a los propósitos de ellos. Entonces bajo esas circunstancias yo me negué y entonces me golpeó que porque yo era muy creída, entonces yo suponía que las otras personas a las que él había accedido cosas probablemente de mi identidad habían accedido. Pero entonces uno tiene la decisión, la libre autonomía de decir con quién quiere estar o no y fui golpeada por ello. Eso ocurre también

generalmente (CNMH, mujer trans, taller de memoria con población LGBTI, Medellín, 2015).

En Medellín, entre 1980 y 2014, el Observatorio de Memoria y Conflicto registra 336 víctimas de violencia sexual asociada al conflicto armado: 41 hombres y 295 mujeres. El RUV registra 238 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual. En los primeros años de la década de los noventa esta modalidad tuvo una presencia notable, aunque su naturaleza responde al uso circunstancial y no reiterado que hacen de ella los actores armados (gráfica 9). Durante este lapso la violencia sexual fue usada, principalmente, por milicianos o integrantes de bandas como venganza contra las mujeres que se negaban a tener relaciones eróticas o afectivas con ellos, o bien como castigo porque hombres jóvenes de los territorios no quisieron formar parte de los grupos armados. Así mismo, se mencionan casos en que la violencia sexual fue ejercida de manera aleccionadora contra personas trans, lesbianas y homosexuales, pues los grupos armados asumían que de este modo se “corregirían sus conductas”. En todos los casos las violaciones fueron acompañadas de tortura, la mutilación de genitales, golpes en diferentes partes del cuerpo, señas de cortes en la piel o el desprendimiento de uñas y cabello.

Entre 1997 y 2004 la violencia sexual perdió este carácter circunstancial, aumentó notablemente (gráfica 9) y se convirtió en una estrategia de guerra utilizada por los actores armados para someter a los habitantes de ciertos barrios con el uso del horror y la crueldad. El objetivo central de la violencia sexual era degradar y castigar a las mujeres que tenían una condición de liderazgo; humillar al enemigo hombre o a su comunidad a través de la violencia ejercida contra sus conocidas, hermanas o novia; someter y humillar directamente al enemigo hombre; castigar a las mujeres a través de la violación de los hombres cercanos; o “corregir” conductas transgresoras de aquellos que se consideraban desviados o por fuera del orden. En la ciudad de Medellín también se presentaron varios casos de milicianos de las FARC y paramilitares que secuestraban mujeres para obligarlas a prostituirse.

Una joven estudiante y líder comunitaria de la ciudad describió la agresión de la que fue víctima:

Yo iba para el colegio a pagar un dinero. En el camino me interceptaron seis hombres vestidos con pantalones camuflados, camisetas verdes claritas, botas y encapuchados. Todos estaban armados con armas largas y cortas y tres de ellos tenían brazaletes que decían AUC. Me preguntaron para dónde iba y yo les dije que para el colegio y les di la espalda. Dos de ellos me sujetaron de los brazos y otro me vendó los ojos con un trapo negro. Me obligaron a caminar por fuera de la carretera hacia abajo. Luego de unos cuatro o cinco minutos de caminar –durante esos minutos sentía que salían más hombres, por las voces, por las risas, ya no eran seis eran más, creo que por ahí unos 15 hombres– cuando nos detuvimos, uno de ellos, al parecer el jefe, se paró frente a mí y comenzó a decir: «Decime la verdad, vos de dónde sos. Te

conocemos, sabemos qué hacés, sabemos que sos guerrillera, que sos revolucionaria, decinos la verdad. Si nos decís mentiras te va a ir peor» [...]. Luego otro se arrimó y me dijo: «Te vamos a matar, pero primero vamos a gozar con vos un rato». Se sentía que movían armas, se reían, había varios radioteléfonos. Uno al parecer recibió una llamada y dijo «aquí está». Luego me tiraron al suelo y me sujetaron los brazos, las piernas abiertas y me violaron unos tres hombres diferentes, me rasgaron la ropa, me hirieron en reiteradas ocasiones con algo cortopunzante, al parecer una cuchilla de afeitar, mientras todos me manoseaban. Me cortaron la boca, los senos, los muslos, las nalgas. Me jalaban el cabello y hacían una especie de turno, uno de ellos me cogió el antebrazo y al parecer con la cuchilla me marcó en la piel las siglas AUC. Luego me pararon bruscamente, yo me caí y me arrastraron del cabello, me subieron nuevamente hasta la carretera y en el camino me decían: «Si hablás, te matamos, si te movilizás, te matamos. Te vas para tu casa, que si te volvemos a ver en esta zona de nosotros, te matamos» (CNMH, OMC, Base Violencia Sexual. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

En algunos casos la violación se cometía en las casas de las víctimas con la intención de saldar cuentas, como venganza por alguna afrenta cometida¹⁴³ o por considerarlas colaboradoras del enemigo. En otros casos las víctimas, generalmente mujeres, eran abordadas en la calle y obligadas a caminar hacia zonas oscuras para ser violadas. En otros el abuso era cometido por varios hombres, quienes se turnaban a la víctima y luego de varias horas la dejaban ir. En muchos de estos casos también se utilizaba como justificación del acto la venganza por no ceder a las pretensiones sexuales de individuos pertenecientes a los grupos armados. En esos casos fueron recurrentes frases como “si no era pa’ él no iba a ser para nadie” o “como él le tenía muchas ganas”. La madre de una víctima del Bloque Metro recordó lo sucedido a su hija el 19 de enero de 1999:

Mi hija fue a visitar a unas tías, salió a bailar, le gustó al comandante de los paracos y como no le hizo caso fue llevada para un rancho, allí abusaron sexualmente de ella, la torturaron y la ahorcaron (CNMH, OMC, Base de violencia sexual. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

En el 49 % de los casos los perpetradores de la violencia sexual no fueron identificados. En los casos donde el victimario fue identificado, un 25 % son adjudicados a los paramilitares, un 15 % a las guerrillas y milicias, un 10 % a organizaciones criminales y un 1 % a miembros de la fuerza pública. En la mayoría de relatos las víctimas son mujeres (87 %), pero algunos casos involucran la violencia sexual contra hombres (13 %). En estos casos las víctimas guardan silencio sobre lo

¹⁴³ Esto lo sufrió una líder de la comuna 13 y fue narrado en una de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo. Así mismo, en la base de datos se reporta un caso similar para la comuna 1: “En 2002, en el barrio Santo Domingo Savio, ubicado en la comuna 1 de Medellín (Antioquia), una mujer líder puso en riesgo su integridad física para evitar que sus hijos fueran reclutados por el Bloque Cacique Nutibara. En retaliación por haber protegido a sus hijos, cuatro integrantes de ese bloque la amarraron y encerraron en su propia casa durante toda la noche y la mañana siguiente, tiempo en el que la violaron en varias oportunidades. Posteriormente, la amenazaron de muerte si no guardaba el silencio cómplice de la impunidad y del desplazamiento a que fue obligada” (CNMH, OMC, Base de violencia sexual. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

ocurrido porque consideran que hacer público el hecho mina su masculinidad y sus privilegios. Los valores del orden social hacen que los hombres heterosexuales se vean obligados a encubrir a sus agresores para evitar ser juzgados y excluidos. Por ello los pocos casos documentados se hacen por la voz de sus esposas. Una de ellas recordó la agresión de la que fue víctima su esposo en el barrio Pedregal en julio de 1993:

Él estaba cuidando las reses [en el Sena de Pedregal], llegaron 6 hombres y lo secuestraron, lo metieron a un bus y se lo llevaron a las 10:30 am, y como a las 1:30 o 12 ya le estaba haciendo el levantamiento. Él fue torturado, lo quemaron con un soplete y lo violaron, le pegaron una puñalada, él estaba con un hermano al que amenazaron con una pistola en la cabeza mientras se llevaban a Jorge, a él lo habían invitado a meterse a las milicias y como no quiso creo por eso lo mataron (CNMH, OMC, Base de violencia sexual. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

Varios testimonios referencian la mutilación de genitales (pezones, testículos, pene) como mecanismo de tortura. Estos actos, en su mayoría, fueron cometidos por paramilitares, especialmente del BCN. Un ejemplo brutal ocurrió a finales de 2002, cuando

una muchacha de 14 años fue desvestida en una de las calles del barrio [no es posible identificar cuál] y le fue colocado un cartel en donde decía: 'Soy lesbiana'. De acuerdo a la versión de pobladores del barrio, fue violada por tres hombres armados, presuntamente paramilitares. Días después fue hallada muerta, con los senos amputados (CNMH, OMC, Base de violencia sexual. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

El despliegue de violencias asociadas al conflicto armado en la ciudad también presupone la presencia de procesos de *reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes*¹⁴⁴ y *el uso de menores de edad para la comisión de delitos*¹⁴⁵. Posiblemente esta sea una de las modalidades de violencia más difíciles de cuantificar y, por tanto, la que presenta un mayor subregistro. Los procesos de cooptación realizados por guerrillas y paramilitares de muchas bandas y combos de la ciudad borró los contornos y fronteras existentes entre los procesos de reclutamiento de menores de 18 años a las estructuras criminales y los procesos de uso de menores de edad para la comisión de delitos por parte de organizaciones criminales.

¹⁴⁴ Se entiende el reclutamiento forzado como el hecho en el cual, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, se recluta o utiliza a niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años de edad), o se les obliga a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas (Artículo 162 de la Ley 599 de 2000).

¹⁴⁵ El uso de menores de edad para la comisión de delitos no puede equipararse al reclutamiento en términos del contenido del tipo penal en tanto abarca muchas otras afectaciones que sufren los niños, niñas y adolescentes como la violencia sexual, la trata de personas, los tratos inhumanos y degradantes, y el comercio de estupefacientes (Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, 2016).

La base de datos suministrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta 136 casos de menores reclutados desde 1992 hasta 2011: 118 niños y 18 niñas. Es importante señalar que el ICBF en ningún caso registra a mayores de 18 años (desmovilizados) así hayan sido reclutados antes de esta edad; es decir, las cifras existentes son de desvinculación y no de reclutamiento propiamente. De igual forma, el RUV registra 252 casos de niños, niñas y adolescentes vinculados al conflicto en la ciudad.

De acuerdo con la información consignada en el RUV, la mayoría de los casos de reclutamiento se presentaron entre 2002 y 2005 (gráfica 9), momento que corresponde a los procesos de urbanización de la guerra, enfrentamientos armados entre guerrillas, paramilitares y bandas por el control de barrios, y al sometimiento armado e inserción de muchas organizaciones criminales con los grupos del conflicto armado. El alto número de menores reclutados en 2003 se da por la desmovilización paramilitar, pues varios menores fueron mostrados como hombres alzados en armas. Además, algunos jóvenes fueron reclutados para trabajar en actividades del narcotráfico (GHM, 2011, página 89). En el 54 % de los casos se identificó a los paramilitares como los principales responsables de esta modalidad, seguido de un 25 % en donde no se tiene información sobre el grupo; 19 % guerrilla, y 2 % grupos posdesmovilización.

El fenómeno del reclutamiento de menores no sigue un mismo patrón y responde a las lógicas de la confrontación armada en cada uno de los barrios de la ciudad. La presencia previa de combos y bandas, el nivel de control que ejercen sobre cada territorio y la naturaleza de las disputas que se dan entre esas estructuras criminales y las guerrillas y paramilitares definen la forma y el nivel de participación de los niños, niñas y adolescentes en las dinámicas de la violencia asociadas al conflicto armado. Estos elementos perfilan las formas de reclutamiento. Podemos distinguir entre aquellas basadas en el despliegue radical de la violencia contra quienes se niegan a participar y aquellas que se estructuran a partir de las posibilidades que brindan estos grupos a los menores de ser reconocidos, tener estatus, acceder a recursos y reconstruir identidades amenazadas por la presencia de entornos familiares marcados por el abuso y la violencia.

Él ese día me llamó y me dijo que iba para una finca, que a los 15 días regresaba. Él no volvió a regresar y yo no volví a saber del él. A los 15 días un grupo armado me dijo que a mi hijo se lo habían llevado ellos porque necesitaba gente (CNMH, OMC, Base de reclutamiento de menores de 18 años. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

El 11/12/91 mi hijo fue secuestrado a eso de las 4 p.m. por un grupo de milicianos en el barrio Caribe de Medellín. A los días lo encontraron muerto y torturado en la vereda Las Palmas de El Retiro. Parece ser que el motivo fue que ese grupo lo invitó a pertenecer a ese grupo armado y él no aceptó (CNMH, OMC, Base de reclutamiento de menores de 18 años. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

Un día Diego vio caer los documentos de un policía, Diego los recogió y un integrante de un grupo armado se los quitó. Cuando el policía fue por sus documentos, Diego lo llevó hasta donde se encontraba el hombre. Desde ese día ese grupo obligaba a hacer cosas a Diego, a hacer lo que ellos querían: transportar armas, etc. (CNMH, OMC, Base de reclutamiento de menores de 18 años. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

[...] más que todo, la guerrilla, pues el reclutamiento lo entiendo yo así, más que todo con las guerrillas y los grupos ilegales, y ya la vinculación creo que se ve más en los barrios [...]. De este modo se hace referencia a que “ya a los pelados no los atraen así vinculándolos a la fuerza, sino que los atraen con la droga, con la fama, con la plata, entonces de ahí es más sensato hablar de vinculación que de reclutamiento” (IEP, 2015, página 67).

Entre 1997 y 2002 el reclutamiento forzado fue usado tanto por paramilitares como por milicias guerrilleras. Muchos de los relatos señalan que el reclutamiento fue de carácter forzado, pues los jóvenes eran obligados a pertenecer a los grupos. Las mujeres eran reclutadas para labores domésticas como cocinar o realizar el aseo de campamentos y sitios de encuentro. Los hombres eran obligados a enrolarse en los grupos como guerreros.

En el año 2001 a mi hija se la llevaron a la fuerza a trabajar a una cocina de los paramilitares. Mi hija se les escapó y regresó a Medellín día 27 de marzo de 2001. Ella llegó con señales de tortura con heridas de arma blanca y con morados en la piel, así que fuimos a la clínica donde la trataron. Mi hija me decía que tenía miedo porque el que se les escapaba lo mataban y el día 4 de mayo hicieron esto, la asesinaron en el sector del centro de Medellín (CNMH, OMC, Base de reclutamiento y utilización de menores de 18 años. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

En las entrevistas del trabajo de campo se señaló que los armados (principalmente milicianos de las FARC) invitaban a jóvenes a participar de campamentos o actividades organizadas por ellos. Los jóvenes eran recogidos en buses y llevados fuera de la ciudad; muchos de ellos están hoy desaparecidos. Así mismo, algunos jóvenes eran reclutados como “carritos” para transportar drogas, armas, municiones o mensajes. Además, en los casos de reclutamiento en los que los jóvenes se negaban a participar de los grupos o se escapaban, por lo general eran asesinados u obligados a desplazarse del barrio con sus familias. En Medellín muchas familias prefirieron desplazarse antes de que sus hijos fueran vistos como aptos para ser reclutados (CNMH, 2011a).

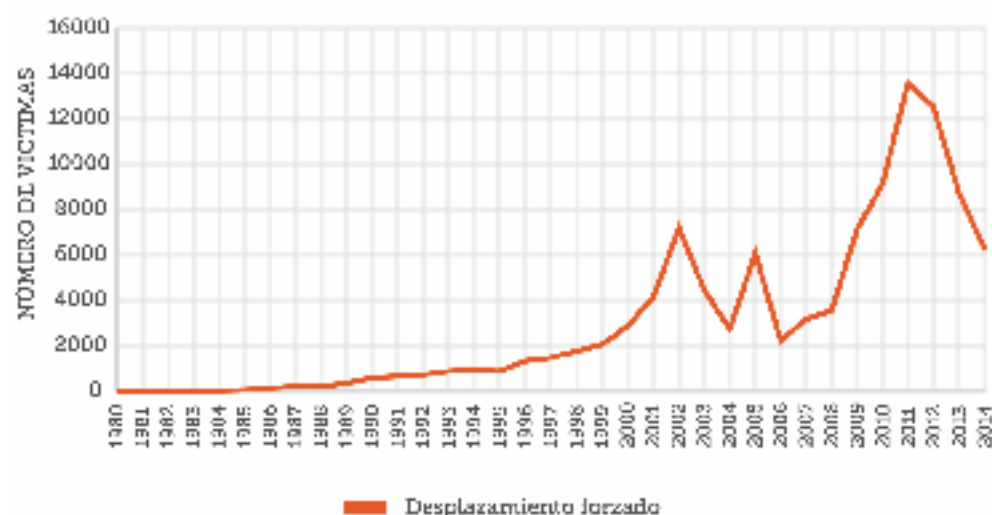
Finalmente, una de las modalidades de violencia no letal que más ha impactado a la ciudad es el *desplazamiento forzado intraurbano*¹⁴⁶. Este ha afectado con bastante fuerza a la población de

¹⁴⁶ Se entiende por desplazamiento forzado intraurbano toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio de la ciudad, abandonando su localidad de residencia, barrio o actividades económicas habituales, porque sus vidas, integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran

Medellín y se ha concentrado especialmente en las comunas 1, 3, 6, 8, 9 y 13 (CNMH, 2011a, página 320) (ver mapa 2: Medellín por comunas y barrios). En el lapso 1980-2014, el RUV identifica 106.926 víctimas de desplazamiento en la ciudad¹⁴⁷. Este fenómeno aparece como una consecuencia directa de la orden de desalojo dada por los grupos armados, principalmente grupos paramilitares, con la intención de controlar territorios y poblaciones. En otros casos es la consecuencia indirecta de la puesta en marcha de otras formas de violencia como el reclutamiento de menores, los asesinatos selectivos, la violencia sexual, las acciones bélicas o las masacres. En muchos casos las cifras de desplazamiento intraurbano aumentan después de la ocurrencia de alguno de estos hechos violentos en los territorios¹⁴⁸.

Gráfica 10.

Evolución del número de víctimas de desplazamiento forzado intraurbano ocurridos en el marco del conflicto armado en Medellín, 1980-2014



Fuente: Elaboración propia, basada en las cifras Registro Único de Víctimas. Fecha de corte: 1 de octubre de 2016.

amenazadas por causa y con ocasión del conflicto armado interno o por las violaciones masivas de los derechos humanos. El carácter de desplazados internos no surge de aspectos formales, ni de interpretaciones restrictivas, sino de una realidad objetiva: el retiro del lugar natural que los desplazados tenían, y la ubicación no previamente deseada en otro sitio.

¹⁴⁷ En la medida que nos ocupan las dimensiones del fenómeno de expulsión forzada, más allá del lugar en el que estas personas se reasientan o declaran, haremos uso de la categoría de *personas expulsadas*. Sobre esta se debe hacer la salvedad de que los datos de expulsión del RUV sólo incluyen a aquellas personas que fueron reconocidas como víctimas por el Estado colombiano luego de un trámite administrativo. Lo anterior puede hacer una diferencia en dos sentidos. De un lado, que un número importante de solicitudes de reconocimiento de la situación de victimización estén en trámite y aún no se encuentren reportadas por la Red Nacional de Información (RNI). Del otro lado, que los porcentajes de rechazo de las solicitudes sean bastante grandes y por lo tanto estos datos expuestos por la RNI no reflejen con suficiencia los verdaderos volúmenes de expulsión. Sin embargo, lejos de la pretensión de dar datos exactos, esta fuente permite advertir con claridad las tendencias en la expresión de esta modalidad de desplazamiento forzado (RUV).

¹⁴⁸ Uno de los problemas del desplazamiento forzado intraurbano son los subregistros en el número de casos. Por una parte, este delito empieza a cuantificarse entre 2003 y 2005. Por otra, muchas personas que han sido desplazadas en la ciudad no se consideran víctimas y no denuncian los hechos. Pero también muchas personas se abstienen de declarar la presencia latente de los actores armados en los barrios en los que generalmente se refugian. No obstante, el registro ha mejorado debido a la expedición de documentos normativos que reconocen el desplazamiento forzado intraurbano como una modalidad de victimización producida en el conflicto armado, y con la expedición de las sentencias T-268 del 27 de marzo de 2003 y T-602 del 23 de julio de 2003, que “representa el avance más significativo en términos de la interpretación del desplazamiento intraurbano como una modalidad de desplazamiento interno” (CNMH, 2011a, página 235).

Hasta 1996 el desplazamiento forzado intraurbano en Medellín se caracterizó por ser individual y “gota a gota”. Los 7.431 casos de desplazamientos registrados desde 1980 hasta 1996 fueron provocados por las presiones y abusos cometidos por las bandas en los barrios y por las acciones de grupos milicianos que decían garantizar el orden en los territorios apelando a la limpieza social. En estos contextos, aquellos que se consideraran “indeseables o peligrosos”, como los “malos padres, malos hijos, malos vecinos, además de una larga lista de personas que transgredían el modelo de orden que se quería imponer” (CNMH, 2011a, página 63) eran amenazados o atacados, lo que provocaba su desplazamiento y el de sus familiares. Durante estos años el desplazamiento forzado intraurbano tiene un bajo reconocimiento en las cifras oficiales, sin embargo, “hace parte de la memoria de [los] pobladores” (CNMH, 2011a, página 59).

Entre 1997 y 1999 los casos de desplazamiento forzado intraurbano se asocian a la presencia de milicianos y guerrilleros que amenazaban y daban ultimátums a aquellos que se negaban a pagar extorsiones. Pero también están relacionados con los asesinatos cometidos por estos actores en lugares públicos, especialmente contra líderes comunitarios o personas reconocidas y valorados por las comunidades, con la intención de generar terror y consolidar su dominio sobre la población. El elemento común en estos dos momentos es la presencia de formas de desplazamiento individual.

Nos avisaron dos vecinas sobre la muerte de mi hermano. Se comenta que habían sido las milicias populares los responsables de este hecho, ellos se identificaron como milicianos. Al día siguiente de haber enterrado a mi hermano nos hicieron un atentado, es decir nos hicieron dos disparos por una ventana. Ocho días después de la muerte de mi hermano fueron a decirnos que nos teníamos que ir del barrio y que ellos eran milicias populares y que nos daban dos días para desocupar el barrio. Mi hermano no tenía vicios al menos que nosotros conociéramos, no tenía amenazas ni enemigos. Ese día sólo murió mi hermano en ese sector (CNMH, OMC, Base de asesinatos selectivos. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016).

Los años que van entre 1999 y 2003, que coinciden con la incursión paramilitar, presentan picos altos de expulsión de la población, con un total de 20.841 víctimas, cifra que corresponde al 40,7 % del total de población desplazada entre 1980 y 2008 en Medellín. En este período “se agudiza la confrontación armada entre paramilitares, guerrillas y milicias y se produce una intervención de la Fuerza Pública que también generó desplazamiento” (CNMH, 2011a, página 48). La presencia de los paramilitares en ciertos barrios de la ciudad se dio a través del patrullaje de hombres armados, que pintaron las paredes de los barrios y distribuyeron panfletos con amenazas a los pobladores. En el barrio Popular 1 de la comuna 1, y el barrio El Salado de la comuna 13, esas amenazas estaban acompañadas de un plazo perentorio para desocupar el barrio. En estos

casos hay un cambio en el uso de la modalidad, pues se pasó de desplazamientos “gota a gota” a desplazamientos masivos, que se convirtieron “en un recurso al cual apelaron los paramilitares para lograr el destierro de sectores de residentes considerados como aliados de la guerrilla y para controlar territorios estratégicos para la confrontación militar” (CNMH, 2011a, página 75). Sobre el desplazamiento en el barrio Popular, una mujer social afirmó:

En el momento en que ingresan los paramilitares [al Popular en 2011], porque siempre en esa entrada, digo entrada porque fue entrada, eso fue a las 3 de la mañana y entraron una cantidad de hombres disparando todo lo que usted se imagine, todo lo que usted se imagine. Rayando las paredes con todo lo que usted se imagine, cortaron las líneas telefónicas, eso fue entrada tal cual; sólo en esa entrada pudieron haber matado [...] de los líderes de La 38, por ahí unos 3-4, que encontraron en las casas porque muchos se dieron cuenta antes de eso y se fueron (CNMH, entrevista mujer lideresa social, Medellín, 2016).

En el caso de la fuerza pública, el desplazamiento forzado intraurbano fue una consecuencia de las operaciones militares efectuadas en los territorios, particularmente en las comunas 3 y 13 de la ciudad. En el caso de la comuna 3, la operación Estrella VI ocasionó varios desplazamientos en el barrio La Honda y La Cruz, territorios señalados de ser simpatizantes de las FARC.

Entre 2003 y 2006, durante la desmovilización paramilitar, el desplazamiento forzado intraurbano disminuyó y volvió a ser individual como consecuencia de las “amenazas directas contra personas o sectores de la población” (CNMH, 2011a, página 92). Sin embargo, el mayor aumento en las cifras de este delito en la ciudad se dio en el lapso comprendido entre 2009-2013, con un total de 51.376 personas desplazadas, equivalente al 48 % del total de casos. Este incremento se produce por la extradición de *Don Berna* y otros jefes paramilitares. Este hecho generó disputas por el control de plazas y mercados ilegales por parte de los mandos medios de la Oficina de Envigado, especialmente por las disputas entre *Sebastián* y *Valenciano*. Adicionalmente, se activó la reorganización del crimen en la ciudad y la multiplicación de disputas entre bandas que dejaron de estar sometidas al poder hegemónico de *Don Berna* y el BCN. Esto trajo enfrentamientos entre bandas, amenazas a líderes sociales y nuevas disposiciones sobre los territorios. En estos años los desplazamientos se caracterizaron por ser principalmente individuales, aunque se dieron algunos casos de desplazamientos masivos, como el caso del barrio El Salado en 2010 y la vereda La Loma del corregimiento San Cristóbal¹⁴⁹ en 2012 y 2013.

¹⁴⁹ De acuerdo con el Instituto Popular de Capacitación, el desplazamiento forzado intraurbano aumentó considerablemente en este corregimiento, “el cual pasó de reportar 87 declaraciones de desplazamiento forzado intraurbano en todo el 2012, a 176 declaraciones entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2013. El incremento estaría relacionado con el enfrentamiento entre bandas de los Urabeños y La Oficina” (Hernández, 2013). En 2013 se presentaron tres eventos de desplazamiento de 96 familias de La Loma (Hernández, 2013a).

Además de esto, Medellín es la segunda ciudad de Colombia con mayor recepción de personas desplazadas de otros lugares del país, con 338.161 casos. En el primer puesto se ubica Bogotá con 343.414 casos, y en el tercer puesto Buenaventura con 162.925 personas¹⁵⁰. Estas cifras sobre Medellín explican que en la mayoría de los talleres y ejercicios de trabajo de campo se hiciera referencia a la importancia de Medellín como albergue de población desplazada, y a los impactos y transformaciones que esto ha traído en la ciudad. Incluso, buena parte de los participantes eran personas desplazadas de otros municipios de Antioquia. En los siguientes relatos se narraron los itinerarios de campesinos que llegaron a la ciudad huyendo de la guerra.

Este es como mi recorrido desde Urabá hasta el Chocó, desde el Chocó retomar otra vez acá a Medellín, o sea ha sido un recorrido tremendo y, pues, en mi salida lo único que pude sacar fue un rollito de cobija, una pequeña blusita y dejar la casa allá para que pudiera aprovecharla, la desgracia (CNMH, taller de memoria con víctimas, Medellín, 2015).

En 1988 empezaron por la fincas de Granada a fallecer personas que venían de otros lugares y a tratar de incorporar gente a los grupos armados, entonces pues eso provocó un éxodo masivo de campesinos, entre ellos nosotros. Yo estuve un tiempo en Bogotá, en diferentes ciudades del país, yo vine a estar nuevamente aquí a Medellín y pues los nubarrones siguen siendo grises, no se ve todavía la anhelada paz, el reconocimiento no ha llegado a los desplazados. Solamente a partir del año 91, pero los de antes no, y todos sabemos pues que antes también había desplazamiento. Entonces esa es como una denuncia que tengo para contar (CNMH, taller de memoria con víctimas, Medellín, 2015).

En la mayoría de relatos recopilados se hace alusión a las dificultades que muchos de ellos pasaron al llegar a la ciudad. En efecto, para aquellos que son desplazados “el cambio más importante respecto a la vida que tenían en el campo es llegar a vivir a la ciudad bajo condiciones que dificultan su subsistencia básica, lo que los hace sentir que pasan de tenerlo todo a no tener nada” (Díaz y Molina, 2016, página 37). Esto implica que las personas se vean sometidas a dificultades para conseguir alimentos, un techo digno, acceso a servicios públicos, trabajo y dinero. Esto se suma, además, a la sensación de desarraigo, de no tener un lugar que pueda sentirse como propio. “En el campo, aunque no tuvieran dinero, estas personas eran dueñas de sus animales, sus plantas, su agua, sus casas; en la ciudad no pueden apropiarse de nada sin dinero, recurso que les es escaso en los contextos de llegada” (Díaz y Molina, 2016, página 38).

¹⁵⁰ http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/all/themes/portal_rni/PaginasEstaticas/Especiales/DesplazamientoForzado/residencia-actual.html. Fecha de corte: 1 de enero de 2016.

Sobre la sensación de desarraigo provocada por el desplazamiento, una lideresa social del barrio Popular señaló:

Si vos tenías una rutina en ese barrio, unos amigos, unas relaciones sociales, todo eso se fractura por completo. ¿Pero sabes que es lo que más duele? ¿O por lo menos qué es lo que a mí más que ha dolido? Dejar mi casa, porque era tu espacio, porque tú ya tenías todo: tu habitación, tu cocina, tu sala, tú sabías que tal espacio te gustaba. Para mí lo más duro fue eso y siento que para la gente es eso, porque es que lo que significa para nosotros tener una casa pues, para la sociedad en general y para el mundo en general, digamos que para la mayoría, hay muchos que no le dan lugar a eso. Pero el espacio que uno ha construido por tantos años, lo que significa es muchísimo. Entonces lo que se trastoca uno es (...) son asuntos muy simbólicos, pero también asuntos económicos porque es que vos ya tenías asegurada una casa (CNMH, entrevista mujer lideresa social, Medellín, 2016).

Estas situaciones hacen que las personas se desplacen varias veces, dada la imposibilidad de arraigarse en el lugar al que llegan después de la expulsión. No obstante, la ciudad, en algunos casos, también se presenta como una nueva oportunidad, es decir, como un lugar en el que la vida continuó a pesar de la guerra.

Pero aquí estoy y amo mucho a Medellín, la amo porque ha sido la tierra que me ha dado muchas satisfacciones a pesar de ser una ciudad violenta. He sacado a los hijos, a los cuatro que nacieron aquí y les han dado oportunidad de estudiar. El hijo mayor ya se va a graduar de comunicador social de la Universidad de Antioquia, actualmente está haciendo la tesis en Ciudad de México, y estudia la otra hija mía, el otro hijo mío va a ser ingeniero de sistemas, y estoy muy contenta por esta ciudad maravillosa que de 17 años me acogió, y a mis hijos, a pesar de tantos problemas (CNMH, taller de memoria con víctimas, Medellín, 2015).

Finalmente, es importante señalar que Medellín es el municipio del país donde se registra el mayor número de *daño a bienes civiles*¹⁵¹. Entre 1980 y 2014 el Observatorio de Memoria y Conflicto registra 472 casos, con un saldo total de 12 víctimas. El RUV registra 881 víctimas de pérdida de bienes muebles o inmuebles en la ciudad.

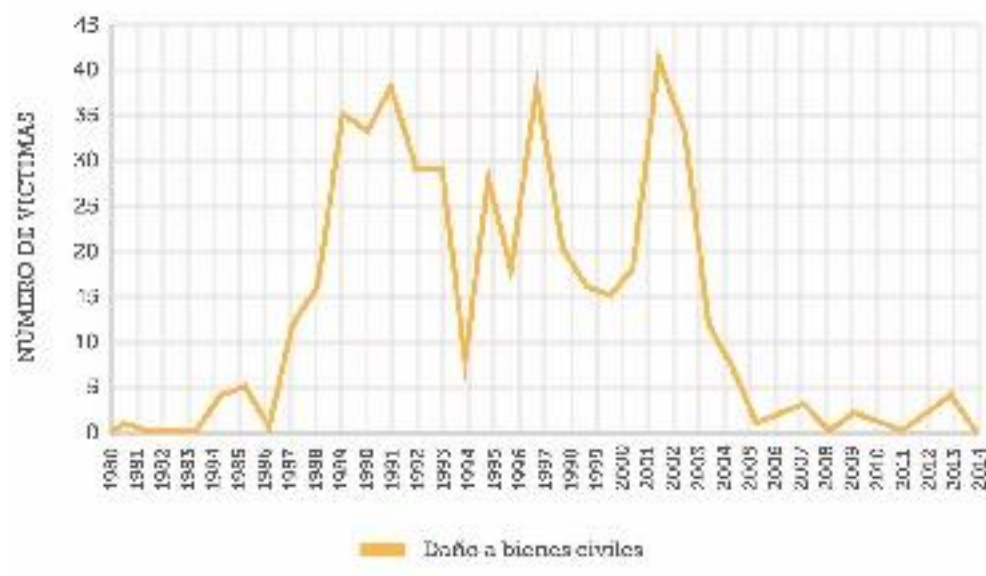
Entre 1987 y 1992 esta modalidad de violencia presentó una curva ascendente, y después de un notable descenso en 1993 volvió a aumentar para alcanzar su tope máximo en 1996 con un total de 38 casos. Después de una nueva disminución en el número de casos, la curva volvió a mostrar

¹⁵¹ Se refiere a los daños, totales y parciales, causados a bienes materiales que no son objetivos militares y que no deben ser objeto de ataque o represalia por parte de los actores del conflicto armado.

niveles importantes entre 2000 y 2002. Esta modalidad de violencia incluye el ataque a sedes de los partidos políticos tradicionales, corporaciones financieras, sedes gremiales, instituciones del Estado y la quema de buses. A las guerrillas se les atribuye el 53 % de los casos, a los paramilitares el 5 %, a grupos posdesmovilización el 1 %, y a los agentes del Estado 1 %. En el porcentaje restante no se identifica al presunto responsable.

Gráfica 11.

Evolución del número de casos causados por ataque a bienes ocurridos durante el conflicto armado en Medellín: 1980-2014



Fuente: Elaboración propia, basada en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto. Fecha de corte: 18 de noviembre de 2016.

Como vemos, aunque todos los actores del conflicto armado en la ciudad apelaron a modalidades similares lo hicieron en diferentes magnitudes y con diferentes objetivos. Las diferencias responden al énfasis otorgado a la implementación de estrategias acordes con objetivos que se querían alcanzar en el marco del conflicto armado a nivel nacional, así como a la importancia otorgada al control de territorios, la implantación de modelos de orden y la expansión de redes criminales.

4. Una ciudad herida: daños, pérdidas y transformaciones

Como se ha visto, las acciones de los distintos grupos armados no se limitaron a las zonas rurales del país. En medio de las violencias y las dinámicas producidas por la confrontación armada, la vida cotidiana de sus habitantes y los usos de la ciudad se vieron trastocados. Este capítulo recoge los principales impactos ocasionados por estas violencias en Medellín entre 1980 y 2014.

Las vidas que se perdieron fueron descritas como la mayor pérdida experimentada por la ciudad en el conflicto armado. La violencia homicida se concentró en las personas jóvenes especialmente (como se mostró en el anterior capítulo) y en los varones de los barrios periféricos. Esas vidas fueron denominadas en diferentes espacios de memoria como “la generación perdida”.

La imagen de jóvenes que en distintos lugares de la ciudad y su área metropolitana caían día a día dejó una marca en la memoria de quienes hoy se llaman a sí mismos “sobrevivientes” de esa ola de violencia, como lo hace este hombre que, al igual que muchos otros, perdieron a sus amigos, familiares, vecinos, parejas:

Yo se los digo con toda honestidad que soy viviente, superviviente de esa juventud que fue aniquilada, porque muchos de mis amigos murieron en ese momento. Yo diría que sólo por ser jóvenes, porque aparte de la violencia del Estado, el fastidio de la Policía y el temor al Ejército, porque uno estar en una esquina y llegar con la batida, o llegar dando bala (“fumigando”, era la expresión), yo creo que con eso era suficiente. Sin embargo, estaba la otra violencia que empezó a poner el narcotráfico. Yo perdí muchos amigos y ese también soy yo. Yo digo que fue un proyecto de juventud perdida, [...] se perdieron personas supremamente valiosas, de aquellos que no tenían la marca social del delito ni de la rebelión —que tampoco justifico sus muertes—, sino de aquellos que pasaban por la vida silenciosos y construyendo otras trayectorias distintas: la trayectoria del muchacho que llegaba a trabajar como albañil, el que era ayudante de mecánica, el que trabajaba en un almacén [...]. Es la música que se quedó en los barrios populares y de alguna manera la que nos consoló de la desolación que nos producía ser jóvenes sin futuro, porque ninguno apostaba por nosotros [...] (CNMH, hombre, taller de memoria con personas mayores de 40 años, 2015).

Un artículo de prensa de 1992 se preguntaba “¿acaso es delito ser joven?”, haciendo eco de los cuestionamientos que habitantes del barrio Villatina realizaron en torno la masacre cometida en aquel barrio por miembros la Policía Nacional en la que perdieron la vida 9 jóvenes. Los años

venideros no fueron mejores, entre 1993 y 2005 hubo en Medellín una reducción notable de la población joven masculina entre 15 y 30 años (Sardi, 2010, página 340). De modo que ese “proyecto de juventud perdida”, como fue nombrado, es irreparable, al igual que incalculable es el impacto que esto ha tenido en la ciudad.



“¿Acaso es delito ser joven?”. Fuente: *El Colombiano*, 17 de noviembre de 1992, página 2A.

Pero el repertorio de violencias de los actores armados no se limitó al asesinato. Otras formas de victimización han producido distintos impactos en las personas, en las comunidades, en los territorios y en la ciudad, los cuales se expresan a través de huellas o marcas en la cotidianidad de la vida urbana y de las memorias de la ciudadanía. Podríamos afirmar que algunos de ellos se han constituido en pérdidas, algunos como daños y otros como transformaciones.

Se identifican como pérdidas cuando son irreparables, como es el caso de las vidas que la guerra se llevó y los elementos materiales o simbólicos que las personas tuvieron antes del conflicto y que nunca volverán. Otros se consideran daños, es decir, “el resultado de acciones criminales que vulneran los derechos de una persona o de una colectividad”, causan sufrimiento a las víctimas y afectan todas las dimensiones que soportan su vida íntima, familiar, social, política, cultural y productiva (CNMH, 2014, página 10). Otros impactos son identificados como transformaciones, entendidas como cambios que se han producido en las comunidades y en la ciudad, en los cuales

el conflicto armado ha desempeñado un papel preponderante, pero de los que no es posible afirmar que respondan de manera unidireccional a las violencias asociadas a aquél, pues en ellas han concurrido diversos factores, algunos de los cuales se relacionan con cambios que trascienden el ámbito local.

Los impactos generados por el conflicto armado han sido múltiples. Estos han recaído sobre las víctimas directamente afectadas por alguna de las modalidades de violencia, aunque no de manera exclusiva. El conflicto armado también ha producido profundos efectos en la vida colectiva y en lo que se puede llamar el derecho a la ciudad. El miedo se ha convertido en un sentimiento colectivo preponderante y ha moldeado las subjetividades, las relaciones sociales y los usos de la ciudad. Al tiempo, la desconfianza ha deteriorado el tejido social. La vida se ha visto constreñida, la participación política limitada y la estigmatización sobre grupos sociales y territorios, recrudescida.

No sólo el miedo habitó la ciudad, también lo hizo la tristeza, la rabia, la impotencia y el deseo de venganza, un conjunto de emociones generadas por la experiencia directa o indirecta de las violencias asociadas al conflicto armado que transformaron las subjetividades de la ciudadanía, así como las maneras de ser y estar en la ciudad.

Aunque es posible afirmar que las violencias asociadas al conflicto armado golpearon a todo Medellín, si se tiene en cuenta la concentración en lugares específicos de la ciudad y contra ciertos perfiles de personas, es preciso considerar la existencia de unas afectaciones diferenciadas, como se verá a lo largo de este capítulo.

4.1. Una ciudad con miedo

La pérdida de vidas en la ciudad, la preocupación por el riesgo de los jóvenes, la magnitud y la cercanía de las experiencias de violencia, la diversidad de formas de victimización y el temor a que “algo me pase” o a alguien cercano han generado impactos profundos en la emocionalidad individual y colectiva de las personas, las comunidades y la ciudad. A pesar de que la violencia se haya hecho cotidiana y de que la ciudadanía haya desarrollado una cierta adaptación a ese orden de cosas, la ocurrencia de hechos violentos no ha dejado de causar conmoción en el entorno. Esta reiteración de las violencias produjo poco a poco un ambiente marcado por emociones colectivas vividas en medio de las dinámicas de la confrontación armada.

A medida que se intensificó en Medellín la presencia de grupos armados en los territorios y, con ello, se desbordaron los hechos de violencia en la ciudad, creció entre su población una sensación de miedo, no sólo por lo que pudiera ocurrir, sino también por la angustia, la

incertidumbre y la zozobra que experimentaban amplios sectores de la ciudadanía al no entender lo que pasaba y quiénes estaban detrás de los hechos violentos. Las huellas del miedo se han expresado en las memorias de personas provenientes de lugares muy distintos de la ciudad y de edades muy diversas, incluso de muchos jóvenes a quienes esa época no les tocó pero que han heredado esta carga emocional. En un taller con investigadores e investigadoras de la violencia se decía que “los que vivimos en Medellín siempre vamos a tener esas imágenes de Medellín; aunque tengamos diferentes edades hay muchas cosas en común, el miedo lo nombramos casi todos” (CNMH, taller de memoria con equipo de investigación, 2015).

El miedo se experimentó primero en las zonas de la ciudad donde los actores armados se hicieron visibles con acciones que afectaron la cotidianidad de sus habitantes, como fue el caso de la zona nororiental en la década de 1980 (Angarita, Jiménez y otros, 2008). En ese momento todavía el problema de la violencia parecía circunscrito a barrios periféricos. Sin embargo, el tipo de acciones comandadas por el Cartel de Medellín hizo que la confrontación se sintiera en toda la ciudad. Entonces el miedo se desató y produjo incertidumbre en la ciudadanía: “el miedo fue creciendo, y una cosa que tengo muy clara es la incertidumbre, uno no sabía qué le iba a pasar” (CNMH, joven artista, grupo focal, 2015).

La confusión y la ausencia de una comprensión clara de lo que ocurría por parte del común de la ciudadanía produjo que la sensación de temor generalizado oscilara entre el miedo y la angustia. Según Delamau (2002), “el miedo tiene un objeto preciso al cual se le puede enfrentar ya que está bien identificado”, mientras la angustia, al contrario, “es una espera dolorosa frente a un peligro aún más temible que no se identifica claramente” (página 10). Esas sensaciones de no entender lo que ocurría y de zozobra en medio de un ambiente confuso aparecen de manera reiterada en los relatos de memoria recopilados para este informe. Por ejemplo, una persona participante en un grupo de maestros y maestras narraba lo siguiente a propósito del miedo generalizado de los años noventa:

Era una violencia que hacía que uno por las noches temiera salir a la calle y que encontrarse con una camioneta con vidrios polarizados después de las 9 o 10 de la noche era casi que ver la muerte de frente, ¿cierto? A mí me pasó que un día en una rumba fuimos dizque por una grabadora a mi casa y nos fuimos unos amigos para otra casa a escuchar música, y pasó precisamente una camioneta despacio y todos nos quedamos como conteniendo la respiración, y cuando la camioneta giró todos ahí mismo como que resucitamos y salimos corriendo para la casa del amigo. Era una época donde podía ser el cura de la cuadra que estaba ahí, pero el hecho de que fuera una camioneta con vidrios polarizados era ya como sinónimo de muerte, era una década de mucho miedo (CNMH, hombre, taller de memoria con educadores y educadoras, 2015).

Las estrategias adoptadas por el Estado para la garantía del orden público, como los toques de queda y las “batidas” (redadas), más que protección, aumentaron la percepción de inseguridad. Así lo expresan múltiples relatos, como el de este empresario, quien señaló que:

Recuerdo la época de las bombas que nos ponían, [toques de quedas] todos los días o cada dos o tres días, quedaba una situación de pánico en la gente que prácticamente la gente se volvió histérica. Fue una cosa descomunal, no salíamos a la calle, [...] en ese tiempo uno salía por la mañana y no sabía si regresaba por la noche [...]. Fue muy duro realmente, uno pensaba que no podía sobrevivir y veía a amigos con unas dificultades tremendas [...] es que la gente creía que no teníamos futuro ya (CNMH, entrevista a empresario, 2016).

De modo que, más allá de las medidas estatales orientadas al orden público, las personas optaron poco a poco por el encierro como una estrategia de protección de sí y de sus seres cercanos. Las relaciones sociales y el uso de la ciudad se vieron constreñidos en medio del miedo generalizado, como lo narra un grupo de personas que vivió de primera mano la ola de violencia que se desató en la ciudad:

No es ni siquiera que salieran anuncios de prensa que dijeran: “Ustedes no pueden salir a cine después de las 6 de la tarde, no pueden salir en las madrugadas o salir al centro”, sino que era algo autoimpuesto, muchísimas veces por las mamás, por las esposas, por los esposos, otras veces por personas que tenían poder (CNMH, hombre, taller con personas mayores de 40 años, 2015).

A medida que el conflicto armado se agudizó en la ciudad, los sectores económicos más altos empezaron a sentir que la violencia también les tocaba y el sentimiento de estar permanentemente en riesgo los alcanzó, tal como lo narró un empresario de la ciudad:

En esos años del ochenta y ocho al noventa y pico los presidentes de Unibán, de Banacol y de Probán¹⁵² tuvieron que tener carros blindados. Todos tenían, tanto en Medellín como en la zona, las oficinas protegidas. Entrar a las oficinas de Banacol o Unibán era muy difícil porque tenían filtros de seguridad, porque había cincuenta mil cosas. A Mineros de Antioquia de la época, que ahora se llama Mineros S.A., en el edificio le pusieron una bomba, [...] y entonces la cosa pa'l empresariado fue muy complicada. Lo de Sofasa¹⁵³ [...] el impacto de la guerrilla de las FARC, del EPL y del ELN con el empresariado antioqueño fue muy fuerte en Medellín. En las oficinas de Medellín las juntas directivas se tenían que cuidar, las

¹⁵² Empresas comercializadoras de productos alimenticios, principalmente banano y plátano.

¹⁵³ Empresa dedicada al ensamblaje de automóviles Renault en el país.

presidencias y las gerencias de las comercializadoras y de algunos bananeros grandes eran fortines y el enemigo era la guerrilla. [...] Ahí había una oficina de Augura, a esa también le pusieron una bomba y hubo intentos de fusilamiento o ataques, y eso fue la guerrilla en Medellín, en El Poblado, al frente del Club Campestre y al lado de la iglesia Santa María del Rosario, la guerrilla metida aquí (CNMH, entrevista a empresario, 2016).

El miedo llevó inscrito el correlato de la seguridad. La “seguridad” se convirtió en la respuesta al miedo y fue un factor central en el escalamiento de la confrontación armada en Medellín. Distintos actores armados se autodesignaron como la solución al problema, y la sensación que sentían amplios sectores de la ciudadanía fue usada para legitimar su presencia y sus acciones en la ciudad y sus territorios. El caso de la operación Orión en la comuna 13 es emblemático de la asociación miedo-seguridad y, especialmente, de la manera como el miedo generado por las acciones de violencia y la confrontación desplegadas allí se propagó en toda la ciudad.



“Intensidad del conflicto riega el temor por el resto de la ciudad”. Fuente: *El Colombiano*, 17 de octubre de 2002, página 3A.

Ese sentimiento generalizado e invasivo de miedo ha sido uno de los impactos más fuertes del conflicto armado en la ciudad. Ese miedo detonó relaciones de desconfianza hacia las demás personas y, a su vez, los sentimientos de desconfianza fueron un factor importante en el debilitamiento del tejido social y comunitario (Villa, Jaramillo y Sánchez, 2003, páginas 150-151). La incorporación del miedo en la subjetividad de la ciudadanía ha limitado la acción colectiva de un amplio número de personas en la ciudad que ven en ello un elemento de peligrosidad para la vida:

Se vuelve realidad personal y se vuelve realidad familiar, salir y no saber si volvíamos o no volvíamos a

la casa [...]. Obviamente se produce la expansión del miedo como forma de relación, el miedo se vuelve una forma de relación con el uno y con el otro, generado por la inseguridad, pero también trayendo como consecuencias indiferencias, apatías [...] (CNMH, hombre, taller con personas mayores de 40 años, 2015).

El temor y la desconfianza hacia los “otros”, hacia las personas distintas, y la consecuente dificultad para construir lazos de solidaridad provocaron la pervivencia de un constante estado de alerta que se manifestó en expresiones de trato hostil con los demás, el cual se ha exacerbado hacia sectores de la sociedad que aún cargan con los estigmas producidos o reforzados por la confrontación armada. En este sentido, se produjo “una apelación a la desconfianza, como forma de sobrevivencia urbana” (Villa, Jaramillo y Sánchez, 2003, página 151).

4.2. Una ciudad que acuna la desconfianza

En medio del ambiente de miedo, zozobra e incertidumbre que se produjo durante los años críticos de la confrontación armada en la ciudad, las relaciones interpersonales entre sus habitantes, al igual que los espacios de encuentro y las formas de cohesión comunitaria, se vieron transformadas. Este impacto es notorio principalmente en los barrios periféricos de la ciudad donde las violencias y las dinámicas asociadas al conflicto armado fueron más crudas. Como ya se señaló, la cotidianidad de las violencias y las dinámicas que desencadenaron en el día a día produjeron un repliegue en el uso del espacio público por parte de la ciudadanía. En medio de este ambiente creció una sensación de desconfianza hacia las demás personas en la escala territorial, así como también en la escala de la ciudad (Blair, 2008).

Habitantes de distintos barrios señalaron como uno de los daños más visibles la afectación del tejido social y la cohesión comunitaria que caracterizó los primeros años de la formación de muchos de los barrios de Medellín, como los de la zona noroccidental y nororiental en las décadas de 1960 y 1970, o de los barrios más periféricos de las zonas centro-oriental y centro-occidental años después. En estas memorias se puede ver un especial cariño hacia la época de los llamados “convites”, donde grupos de personas se reunían para gestionar la infraestructura del barrio, como escuelas, iglesias, centros de salud, casas barriales, calles, entre otros, y también para ayudarse entre sí a construir las casas donde cada familia vivía.

El grueso de la población que se estableció en estos barrios provenía de zonas rurales de Antioquia y de departamentos cercanos. Muchos llegaron huyendo de la violencia bipartidista, otros persiguiendo la posibilidad de un futuro mejor y de nuevas oportunidades de formación para sus hijos e hijas (CNMH, 2011, páginas 54-58). En medio de ese sueño compartido entre muchos se construyeron solidaridades barriales que buscaban gestionar y construir ese territorio colectivo, como lo deja ver el relato de un líder de la zona noroccidental de la ciudad:

Es un barrio que va a vivir mucho la solidaridad en la organización de las casas: si el vecino va tirar la loza, entonces hay que ayudarlo a entrar la arena, hay que ayudarlo a entrar el cemento, hay que ayudarlo a entrar los adobes y hay que ayudarlo a echar a plancha. Hay solidaridades por ejemplo para el tema del agua: el agua no llegaba todos los días, había unas pilas en la esquina, y bueno, yo no recuerdo exactamente en qué año llegó la luz, pero eso fue llegando y poco a poco se van abriendo las calles, y primero se abren en tierra y después se le hecha un afirmado y después se pelea por la pavimentación. Todo eso estaba consolidado (CNMH, entrevista a líder de la zona noroccidental, 2015).

Estas personas llegaron a la ciudad con un arraigo importante en las tradiciones culturales de las zonas de las que procedían. Estas no eran homogéneas, sin embargo, había en ellas rasgos comunes que confluyeron e intentaron pervivir, como era el caso de los rituales religiosos colectivos o de espacios cohesionadores diversos, como las fiestas en la calle o el carnaval:

Todos terminamos alrededor de la propuesta comunitaria, había mucha cohesión por parte del proceso, del proyecto, de lo que se hacía ahí [...]. Había gente que tenía un poco más de dinero y tenía otra perspectiva de juntarse con los otros. Desde siempre hubo sectores comerciales un poquito más destacados, era gente con otras perspectivas, pero los otros que estaban en ese asunto de la casa, conseguir un mejor empleo, mejor vivienda, ir consiguiendo lo básico, la pavimentación de las calles. A mí me tocaron muchas calles destapaditas. Había mucha cohesión, ir a misa era un evento categórico, ir a la cancha a ver jugar el campeonato de los domingos era el evento, era todo un paquete: misa, partido de fútbol, si tenía uno con qué, comerse algo por ahí o juntarnos todos en la casa de la abuela a comer. Y no sé si en casa de las otras personas era así, pero nosotros nos juntábamos en la casa de la abuela 20 o 30 a ver Sábados Felices, a ver una película, y los ritos pues sociales, pues 24 y 31, el 24 y 31 eran unos carnavales, todo el barrio era un carnaval completo (CNMH, mujer, taller de memoria con empleados del sector financiero, 2015).

Aunque había conflictos en los barrios, tensiones entre vecinos y problemas cotidianos, la vida en estos territorios estaba marcada por un profundo deseo del futuro mejor que la ciudad prometía, y la formación de estos vínculos de solidaridad hacía parte del camino para la materialización de esos sueños. A medida que las dinámicas asociadas al conflicto armado se intensificaron, especialmente en los dos períodos de crisis descritos anteriormente en este informe, las solidaridades barriales se fueron diluyendo y empezó a ganar terreno un ambiente de desconfianza, al tiempo que se reducían los espacios y los ritos de cohesión comunitaria en los barrios más afectados.

Aunque en el conflicto armado en Medellín han tenido participación personas exógenas que “llegaron” a los territorios provenientes de otros sitios, como ocurrió en algunos casos de las milicias y con las estructuras paramilitares, los grupos armados han estado integrados, fundamentalmente, por los jóvenes que crecieron en distintos barrios de la ciudad (Salazar, 1990; Riaño, 2006). En muchas ocasiones los enfrentamientos han tenido como protagonistas a los propios vecinos, a los amigos de infancia y a los familiares, de manera que la sociedad civil no ha estado lejana a la cotidianidad de la confrontación. En los barrios con mayor concentración y presencia de grupos bélicos, las violencias se han vivido como próximas, incluso para quienes no las han sufrido de manera directa, para quienes la violencia “les ha pasado de lado”.

Por esta característica del conflicto en la ciudad, las relaciones en el territorio estuvieron marcadas por el odio y el resentimiento entre jóvenes, entre familias, entre una cuadra y otra o entre barrios vecinos. Los más simples conflictos cotidianos —como los celos, la envidia, una burla o un insulto— llegaron a desencadenar amenazas, desplazamientos y enfrentamientos armados. Los problemas crecían como una bola de nieve. Lo que pasara con alguien producía una retaliación por parte suya o de sus allegados, que a su vez era respondida por el “bando contrario”, lo que producía una suerte de círculo vicioso alimentado por el deseo de venganza.

De este modo, lo que podríamos denominar los móviles “racionales” del conflicto, es decir, los aspectos ideológicos que configurarían los repertorios discursivos de cada grupo armado, se entremezclaron con una serie de emociones que se producían en medio del conflicto armado en la ciudad. Como se verá, en las comunidades crecieron los resentimientos a medida que las situaciones que detonaban violencias o enfrentamientos estaban más definidas por tensiones vecinales y deseos de venganza. De esta manera narraron los habitantes de los barrios la guerra fratricida que se desató en la ciudad a raíz de la presencia y las acciones de los actores armados.

Es que eso era una bola de nieve horrible, porque entonces en el velorio (...) como a mi primo lo querían tanto en el colegio porque era el niño juicioso, demás que fumaba marihuana y toda la cosa, porque yo no voy a decir, como de todos los muertos, que era un santo, pero a comparación de todos esos pelaos de por allá él era súper juicioso en el colegio, tenía sus amigos como más sanitos. Pero entonces los del colegio lo querían, “porque vea que este joven no se deja convencer de nadie”. Y entonces en el velorio llegó un grupo que uno los reconocía, de manes como raros que le decían a la mamá de mi primo: “¡Ah! Tranquila, que nosotros sabemos quién fue ese hijuemadre que lo mató”, y ella les decía: “No, deje eso así que Dios se encarga de todo”. La misma mamá les decía: “No, es que van a seguir con una bola de nieve que no se va a acabar nunca”, y ellos: “No, que cómo así, que Andresito, que tal”. Entonces ellos tenían como unos ritos ahí raros, entonces le iban a amarrar una cosa en el pie al muerto que porque eso era una promesa de que mataban al que lo mató en no sé cuánto tiempo. Entonces la mamá: “No, no, déjemelo tranquilo, no me lo coja”, porque ellos llegaron y lo sentaron ahí muerto y lo peinaban, y entonces ella decía: “No, pero

pues ya se murió, déjenlo tranquilo”, pero los mismos que prometieron eso, pues sí, efectivamente (...) no fue a los meses, pero sí como al año, lo mataron y fueron a la casa de mi tío y le dijeron a la señora: “Ah, vea, tranquila que ya lo matamos”. Y ella: “Pues es que yo no necesitaba eso”. Antes ella como que sentía más angustia por cómo estos muchachos se estaban matando entre ellos pues. Y entonces ya el hermano mayor de ese dijo que iba a matar al que mató a (...). No, pues, jeso era una bola de nieve impresionante! (CNMH, mujer, taller de memoria con empleados del sector financiero, Medellín, 2015).

El miedo a las violencias, los odios que se tejían, la angustia y la zozobra producidas por el caos y la confusión estimularon en las personas una actitud de alerta, una cierta crispación colectiva que se activaba ante cualquier eventualidad. Problemas cotidianos, como si fueran una chispa, encendían los ánimos y la disponibilidad de armas que existía en su territorio lo hacía más grave. En medio de ese estado, la resolución de los conflictos cotidianos llegó a estar definida por la facilidad para conseguir los medios para acabar con la vida de los demás. La intensidad de estas emociones y la disponibilidad de las armas dificultaban la creación de condiciones para una resolución no violenta de los conflictos cotidianos en algunos territorios de la ciudad. Este impacto, como lo expresa el siguiente relato, apareció desde la conformación de las bandas barriales y las milicias en los barrios, continuó con la presencia de los paramilitares y las acciones de organismos de seguridad del Estado para recuperar el monopolio de la fuerza en los territorios y está vigente, aún hoy, con la pervivencia de estructuras criminales en la ciudad:

Es que también la violencia que todavía se sigue generando en los barrios por los combos, que todavía cualquier problema antes que solucionarlo con los vecinos, el otro te dice “Ah, yo te echo a los pelados”, porque ellos tienen la legitimidad, pues son ellos los que todavía cobran las vacunas y que eso viene de generación en generación. En Moravia me tocó mucho lo de las milicias, lo que hablaba anteriormente el compañero de la Curva del Diablo, que mucha gente que venía de fiesta los fines de semana tenía casi que andar por la orillita, porque cualquier cosa que hiciera y que no estuviera de acuerdo a lo que dijeran en el barrio, inmediatamente la desaparecían e iba a parar en la Curva. Y me tocó ver pues muchas muertes de gente que estábamos bailando y en un momento salían peleando porque no le caías bien o no venías del barrio y ahí mismo (...) dizque para crear ejemplo ante los demás (CNMH, hombre, taller de memoria con personas de los sectores afro, 2015).

El ambiente de desconfianza descrito anteriormente terminó por deteriorar los lazos y el tejido social comunitario (Hincapié, 2008). La ausencia de ciertas personas a causa de los asesinatos, las desapariciones y los desplazamientos, hizo que las comunidades perdieran figuras aglutinadoras, muchas de las cuales se habían ganado un reconocimiento en la comunidad por su activa participación en la creación de los barrios. Algunas de estas figuras eran líderes religiosos, integrantes de sindicatos, educadores y educadoras, entre otros. Adicionalmente, la

instrumentalización de la sociedad civil como objetivo de los grupos armados generó una intensa disputa por el control de las organizaciones comunitarias, sociales y de defensores de derechos humanos en la ciudad.

4.3. Una ciudad dolida

Como se ha visto, las dinámicas y las violencias asociadas al conflicto armado produjeron grandes impactos emocionales en la ciudadanía, los cuales han sido experimentados de manera individual por las víctimas, pero también de manera colectiva por sus entornos familiares, comunitarios y urbanos. Algunos de estos impactos han sido debilitantes e incluso paralizantes, como la tristeza, el dolor, la culpa o la vergüenza, mientras que otros, como la rabia o el deseo de venganza, se han vuelto un motor que, en ocasiones, ha retroalimentado las dinámicas del conflicto.

4.3.1. Las huellas del sufrimiento: tristeza y dolor

El dolor y la tristeza producidos por la ausencia de quienes murieron o fueron desplazados, desaparecidos, secuestrados, violentados sexualmente o forzosamente reclutados, abundan en las memorias de familiares, amigos y amigas, vecinos y vecinas.

Los familiares y amigos de las víctimas de asesinato y desaparición forzada insistieron reiteradamente en los relatos recogidos para esta investigación en cómo la ausencia de sus seres queridos transformó su vida. Estos sentimientos se ven agravados por la imposibilidad de elaborar un duelo cuando no se conoce el paradero de su ser querido. El dolor y la tristeza se han expresado en la pérdida de motivación para seguir con las actividades cotidianas, la alteración del sueño y la hostilidad para relacionarse con otras personas.

Para muchas personas, los seres que perdieron representaban importantes figuras de soporte económico y afectivo. La concentración de víctimas mortales en los varones hizo que, en medio de una sociedad tradicionalmente patriarcal —donde los hombres solían cumplir el papel de proveeduría económica, mientras las mujeres se hacían cargo de las labores domésticas y de cuidado— las mujeres debieron asumir roles inesperados después de la muerte de los suyos. Esta transformación se materializó de manera importante en el hecho de que muchas tuvieron que asumir cargas laborales y económicas para las cuales no estaban preparadas, pero que finalmente abordaron con determinación. Si bien a algunas mujeres esta lucha les produjo satisfacción al lograr sobreponerse, en otras lo que dejó la experiencia fue la descompensación emocional y una constante sensación de abandono, cansancio y desolación. La esposa de un agente de la Policía asesinado durante la época del plan pistola desatado por Pablo Escobar, por

ejemplo, después de exaltar las cualidades de buen padre de su esposo, relató así el impacto emocional en ella y su hijo:

Ese niño tiene una discapacidad cognitiva y todos esos problemas fueron agudizándole mucho más su dificultad. [...] Llegó un momento en que yo empecé a ir a citas psicológicas con él en el Centro Neurológico de Antioquia —me acuerdo que me pagó la cita una tía—. Y me dice la psicóloga: “Es que usted necesita más tratamiento que su hijo”. Era tanta la situación que yo no paraba de llorar, era metida en ese cementerio y me tuve que meter un año a tratamiento psicológico y psiquiátrico. [...] Era un drama impresionante el que uno vive, y yo era: “Bueno, ¿aquí que hago?” [...]. Una desolación, una tristeza, una angustia, una preocupación de toda la vida (CNMH, mujer, taller de memoria con familiares de la Policía, 2015).

En medio del duelo y la tristeza, una sensación de luto continuado se tomó la cotidianidad de la vida familiar y comunitaria. Las actividades y los rituales —como la celebración de cumpleaños o de fechas especiales como la Navidad o el Año Nuevo— se dejaron de realizar. Los habitantes de los territorios más afectados, como las familias del barrio La Loma (corregimiento de San Cristóbal), lo narraron como una pérdida: “ya no era igual”, “se sentía como si ya no hubiera nada que celebrar”. En las memorias de las víctimas es recurrente este cambio en las dinámicas familiares:

Desde la muerte de mi hermano cambió la situación en mi casa, mi mamá cambió, en mi casa ya no hay Navidad, en mi casa ya no hay tanta alegría como había antes cuando él estaba vivo, porque mi mamá dice que él se le llevó parte de la vida de ella, entonces para mí ha sido muy triste [...] aunque ha habido demasiadas muertes en mi familia, esta es la que más me ha llegado al alma, porque a raíz de la muerte de él ha cambiado mucho, mucho, en mi casa, no tanto cuando nos desplazaron, pero esta muerte nos ha dolido mucho, demasiado, [...] entonces por eso es que a mí me ha llegado más al alma esta (CNMH, mujer, taller de memoria con habitantes del barrio La Loma, 2015).

Muchos de los asesinatos, desapariciones e incluso hechos de violencia sexual, fueron cometidos frente a las propias familias. Las crudas imágenes de jóvenes que fueron arrebatados de sus hogares y nunca más volvieron a sus casas con vida, de chicos del barrio asesinados frente a los ojos de sus familiares y amigos, o de mujeres violentadas sexualmente frente a sus hijos e hijas, quedaron marcadas en la memoria de muchas personas que vivieron los años críticos del conflicto armado en la ciudad. Estas imágenes, según muchas voces, vuelven una y otra vez a la mente, y se niegan a marcharse.

Otras víctimas narran el dolor que les produjo la sensación “de perderlo todo”, refiriéndose no sólo a la precariedad producida por la pérdida material de sus casas y enseres —como en el caso de

las personas desplazadas— sino fundamentalmente por lo que representaban esos bienes en relación con sus seres queridos: los recuerdos que allí habitaban, las memorias familiares que guardaban, la sensación de “un lugar propio”. En las memorias de las víctimas es recurrente la nostalgia cuando se narran hechos como el desplazamiento forzado:

Es que no solamente es que lo desplazan a uno y ya, y perdió su casa. No. Cuando a uno lo desplazan no solamente pierde la nevera, sino que pierde sus vecinos, sus amigos, su comunidad política, el entorno [...] se pierden muchas cosas (CNMH, mujer, taller de memoria con víctimas del conflicto armado, 2015).

De allí que la tragedia del desplazamiento forzado no sólo haya significado para quienes lo vivieron la pérdida material y simbólica de sus bienes, sino también un daño a las relaciones de sociabilidad vecinales, de amigos y amigas, de los caminos transitados en la cotidianidad de estos territorios, a ese mundo apropiado, habitado y construido. Una mujer víctima de desplazamiento afirmaba que lo peor del conflicto armado en el país es que “si tienes algo, te lo quita violentamente, [...] lo que pierdes es la identidad”.

Aunque esta modalidad de victimización se ha concentrado en los sectores más empobrecidos de la ciudad, la experiencia de perder “la vida conocida” afectó también a personas de sectores medios y altos. Este fue la experiencia, por ejemplo, de artistas, de lideresas y líderes barriales y políticos y sus familiares, o de familiares de actores armados —como ocurrió en el caso de “capos de la droga” y de otros—, que vieron truncados sus proyectos de vida y resquebrajadas sus familias al tener que huir a otras ciudades o incluso exiliarse, a veces con sus familias, y en otros casos en ausencia de ellas, tal y como narró esta mujer, exmilitante de la UP:

Yo tenía que llevarle las niñas a hoteles o a casas de compañeros. Yo tenía un listado cada mes de gente que se me ofrecía sin ser de la UP ni nada y me decían: “Puede llevar a su esposo a dormir esta noche”. Como éramos con escoltas, entonces teníamos escoltas para todo, para el carro, y yo les decía “Vámonos para tal dirección”, pero ellos informaban para dónde íbamos, [...]. Teníamos que cambiar continuamente, las peladas tenían que ir a hoteles donde se veían con él y ellas piensan en las cartas que son muy lindas, [...] y mi hija dice que el papá era muy ausente, dice lo mismo que vos, pero ella entendía lo que el papá le explicaba, que estaba luchando por un país, y las cartas que él les mandaba desde el exterior, desde el exilio, todavía las conservamos [...] en las cartas él les explicaba por qué él estaba ausente del hogar, entonces yo quedaba con las niñas (CNMH, mujer, grupo focal con familiares de la UP, 2015).

Las cartas a las que se alude en este caso fueron la forma de comunicación y vínculo con las familias. Así, quienes vivieron la experiencia del exilio narran los impactos en términos de la dificultad de abandonar la vida construida en el país para tener que reiniciar otra que comúnmente resultaba más precaria que en Colombia. Mientras muchos y muchas de ellos y ellas tenían una profesión reconocida en la ciudad, debían llegar a “rebuscar” (es decir a realizar trabajos temporales o negocios de cuenta propia) lo que resultara en otra parte, viéndose adicionalmente en la obligación de enfrentar el racismo que pesa sobre las personas colombianas y latinoamericanas en algunos países.

Estas dificultades que se narran en torno a la vivencia de hechos como el desplazamiento o el exilio han afectado no sólo a personas mayores con dinámicas laborales y familiares definidas, sino a jóvenes, niños y niñas que se vieron enfrentados a crecer lejos de sus seres queridos; algunos porque tuvieron que marcharse con su núcleo familiar y perdieron contacto con su lugar de origen y su familia extendida, o porque alguno de sus familiares (padres, madres, hermanos, hermanas u otros) debieron ausentarse y no regresar por años. Así recordó la hija de un militante de la UP el sufrimiento que significó para ella, entonces apenas una niña, la persecución, el exilio y posterior asesinato de su padre:

A mí me parece que es importante señalar las diferencias entre lo que vivieron las viudas y lo que vivieron los hijos. Por ejemplo, nosotros también estuvimos exiliados —eso fue en 1980, y volvimos en el 85-86, mi papá volvió en el 86 cuando se creó la Unión Patriótica—, y cuando volvemos y mientras mi papá era alcalde de [un pueblo antioqueño], pues a él le hicieron un par de atentados y de amenazas y nosotros desarrollamos como una especie de código para comunicarnos por teléfono, porque como dijo la otra compañera, no se podía decir “voy tal día”. Y a nosotras en el colegio también había una persona que cuando salíamos del colegio era ahí vigilándonos. Entonces para mí eso era una cosa horrible, yo no tenía por qué vivir eso, yo no había hecho nada, yo era una niña [...]. Y también lo que les dije ahorita: yo vi la lista de las personas que iban a matar en [un pueblo antioqueño]. Yo tenía 12 años, es algo que no tuviera que haber visto, eso es una cosa absurda que un niño tenga que ver una lista de esas y ahí vea a su papá, entonces yo veía las noticias y a quién iban matando [...]. Otra cosa importante es la separación de las familias. Por ejemplo, la compañera decía ahorita que ella tenía que llevar a las niñas a ver a su papá a otra parte, nosotros ya en el año 88 no vivíamos con mi papá porque mi mamá tenía mucho miedo, entonces teníamos que estar separados por cuestiones de seguridad (CNMH, mujer, grupo focal sobre exilio, 2015).

Otras familias también han visto afectadas sus dinámicas por la ausencia de los jóvenes que fueron reclutados por distintos grupos armados. En algunos casos esos jóvenes lograron mantener algún tipo de vínculo con sus seres queridos, pero en otras ocasiones la comunicación resultó difícil o, incluso, prohibida y sancionada.

En otros casos como el de la desaparición forzada, donde no está claro el paradero y el estado del ser querido, las familias manifiestan incapacidad para tomar ciertas decisiones —como cambiarse de barrio o ciudad, aceptar una posibilidad de trabajo o estudio, emprender un proyecto—, pues la dinámica de vida, especialmente para madres, padres y cónyuges, termina girando en torno a la esperanza del regreso. En este sentido, uno de los aspectos más dramáticos de la desaparición forzada es la dificultad de elaboración del duelo por las familias, una situación que termina produciendo una sensación “traumática” de incertidumbre e indecisión (Blair, 2004, página 119).

Así mismo, la incertidumbre de las familias, al no conocer el paradero de un ser querido desaparecido, se ha manifestado en sentimientos de zozobra y angustia e, incluso, algunas de estas personas empezaron a desarrollar hábitos como el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas o a experimentar reiteradamente ideas e intentos suicidas. Estas sensaciones dejaron una huella que para muchos ha sido indeleble, como narran las mujeres pertenecientes a la organización Madres de la Candelaria de Medellín, quienes a través de la creación de sociabilidades y la configuración de redes de apoyo colectivo, han logrado “sobreponerse” al dolor, la incertidumbre y la angustia (CNMH, taller de memoria con la organización Madres de la Candelaria, 2015). Este panorama pone además en evidencia la imperiosa necesidad de una estrategia potente de recuperación emocional para las víctimas, sus entornos y la ciudadanía.

4.3.2. Una responsabilidad que se invierte: la sensación de culpa y vergüenza

En medio de la búsqueda por encontrarle algún sentido a lo que les ocurrió a ellas o a sus allegados, muchas personas han terminado por “auto culparse” o por culpar a otras personas cercanas por las violencias experimentadas, y así han diluido la responsabilidad de los actores armados y de las instituciones estatales en lo ocurrido.

Así ha pasado, por ejemplo, en el caso de líderes y lideresas políticos y barriales que han sido desplazados por su participación y trabajo político. Esto ha desatado para algunas personas recriminaciones por parte de sus familias por las consecuencias que ha tenido para sus vidas y la de su entorno (CNMH, 2013, página 265).

La inversión de la culpa se expresa principalmente en los casos de violencia sexual. En una cultura como la colombiana, en la que las relaciones de género son profundamente desiguales y desventajosas para las mujeres, la responsabilidad de los hechos de violencia sexual suele terminar atribuyéndose a estas víctimas que, como se mostró en el capítulo anterior, son principalmente mujeres. La autoinculpación por lo ocurrido ha contribuido a que ellas guarden silencio y se nieguen a denunciar, pues, como argumentan: “a nosotras las mujeres nos negaron

el derecho a hablar”, “nos enseñaron a callar” y, por esa razón, “muchas no denunciábamos (...) no denunciábamos por la vergüenza que se siente” (CNMH, grupo focal con mujeres víctimas de violencia sexual, 2015).

A esta situación se suma el tabú que rodea lo referido al cuerpo y la sexualidad. Este entramado no sólo ha puesto en mayor riesgo a las mujeres, sino que también ha hecho más hondos los impactos de la violencia sexual tanto en hombres como en mujeres. Quienes han sido víctimas de violencia sexual narran la sensación de culpa y, sobre todo, de vergüenza que les ha dejado esta forma de violencia, por sentir destruida su “dignidad” en medio de una sociedad que ha depositado en la genitalidad el valor social de las mujeres. Muchas han olvidado que lo ocurrido no fue su responsabilidad:

Después de eso yo todos los días me preguntaba (...) ese mismo día que me paré sucia, vuelta nada, oliendo asqueroso, yo decía: “Dios mío, a mí se me acabó el mundo”, yo caminaba y no sentía mis pies, no sentía nada, a partir de ese momento me cambió totalmente la vida, yo empecé a desvalorarme, porque no me valoraba. Yo sentía que empieza uno a bajarse la autoestima, uno sentía que todo el mundo iba detrás de mí, yo me iba a la tienda y me devolvía porque sentía que los hombres me perseguían, encontraba hombres con esa (...) de gafas y de cachucha, y yo decía “son ellos”, es una cosa impresionante, a uno la vida le cambia totalmente (CNMH, grupo focal con mujeres víctimas de violencia sexual, 2015).

Esta sensación de culpa y vergüenza que ha minado la autoestima, también ha sido experimentada por hombres víctimas de violencia sexual. Algunos de ellos narran la tristeza, la rabia y la impotencia producida por no haber defendido su “virilidad”, especialmente en el contexto de una sociedad que espera de ellos “fuerza”, “coraje” e incluso sacrificar la vida para defender su “hombría”. En ambos casos, la mayoría de las víctimas ha asumido el silencio como conducta por el temor que les produce enfrentar el estigma social asociado a hacer público lo ocurrido. A las mujeres las culpan por no “prevenirlo” y a los hombres por no “defenderse”. La vergüenza y el encerramiento originados por la violencia sexual fueron narrados así por un joven que fue víctima de un integrante de las milicias populares en 1995:

Yo no tenía interacción social, yo me sentía avergonzado, sentía como si los demás me vieran el letrero acá en la frente de “me violaron”, “me violó un hombre”. Yo me fui cerrando, me fui cerrando, me fui cerrando; fueron creciendo en mí muchos miedos. Yo ya no era capaz de acercarme a una niña porque me sentía avergonzado, como si eso me hubiera marcado y la marca se viera en la piel, y me fui alejando y me fui alejando, alejando. Eso me marcó [...]. Hubo hechos similares, sí, pero la gente no lo hablaba, no lo comentaba por miedo, por vergüenza, por conmiseración, por dolor, por no reconocer que eso sucedió dentro de un núcleo familiar, porque aún en esa época y hoy en la actualidad seguimos con el tabú de que

las violaciones son para el género femenino, que lo comete un hombre hacia una mujer, pero cuando nos encontramos con que un hombre fue violado, eso no cabe en nuestro imaginativo y lo vemos como algo gracioso (CNMH, hombre, entrevista con víctima de violencia, 2015).

Por todas estas características —el orden de género hegemónico, el señalamiento social a las víctimas en vez de al victimario y la pérdida de confianza en otros y otras—, la violencia sexual y sus huellas en la vida de las personas suelen vivirse en silencio y soledad. Las víctimas narran esta experiencia como un “morir en vida” o como una “mutilación del alma” que se ha manifestado en asuntos tales como la ruptura emocional con seres cercanos que no logran comprender lo que pasa, el aislamiento, la pérdida de motivación, la depresión y la ideación suicida.

4.3.3. Rencor, odio, venganza y más violencia

Al lado de sentimientos como la tristeza y el dolor, la culpa y la vergüenza emergen sentimientos de odio, rencor y venganza, los cuales, según se ha visto, terminan constituyéndose en un motor para la reproducción de las violencias asociadas al conflicto armado. Víctimas provenientes de distintos territorios y lugares sociales han señalado dicho fenómeno. Este se ha visto empeorado por la circunstancia de que la confrontación en Medellín ha tenido, entre otras, las características de una lucha fratricida, en donde se han asesinado y violentado entre familiares, vecinos y personas cercanas, lo cual ha sido terreno abonado para disputas y venganzas de largo aliento.



“La violencia de nuestro país llevó a un miembro de mi familia a ser parte de esta de la forma más cruel, su deseo de venganza, odio y desprecio por la humanidad” (CNMH, mujer, colcha de la memoria, taller con habitantes zona noroccidental, Medellín, octubre 2015). Fotografía: Corporación Región.

Buena parte de las memorias recogidas hablan de cómo frente al escalamiento de la violencia, muchas personas se sintieron invadidas por una sensación de desesperanza, de “no futuro”, acompañada de un creciente resentimiento contra un Estado ineficiente que tenía

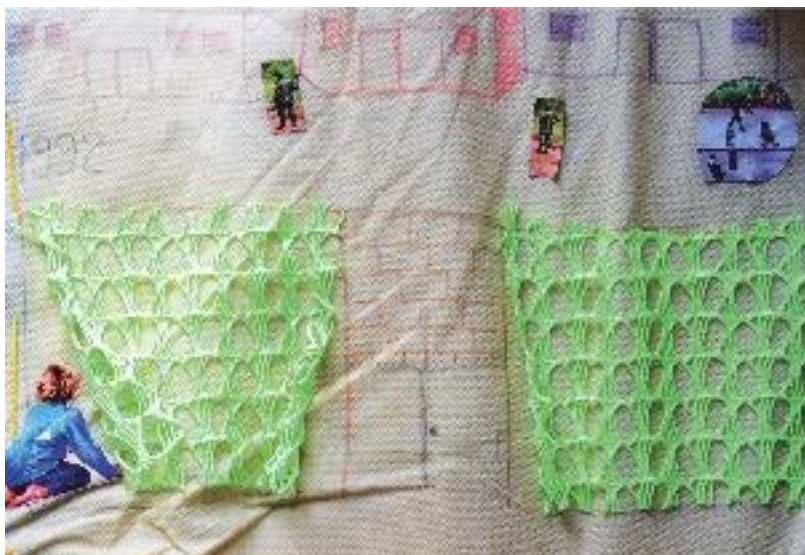
responsabilidades en la creciente ola de violencia tanto por acción como por omisión. Esa desconfianza frente al Estado como garante de justicia sumada a la carencia de apoyo sicosocial que relatan las personas afectadas por las atrocidades del conflicto armado ha generado a su vez nuevos sentimientos de impotencia y desprotección, que han alimentado la ira y un afán de venganza por mano propia:

Muchas veces cuando hay violencia se genera más violencia [...]. Hablo desde una experiencia que pasó en mi familia y fue que en algún momento un grupo armado asesinó a uno de mis tíos y en represalia uno de mis primos dijo: “Me voy a meter al grupo opuesto y voy a enfrentarme a ellos y me voy a vengar de la persona que mató a mi papá”. Él se convirtió en una persona demasiado cruel, demasiado fría, hasta el punto de realmente asesinar, torturar y matar personas de una manera espantosa y sin en cierta forma lograr sus objetivos de venganza [...]. En algún momento él fue a visitarnos y aunque yo sabía que él no iba a hacer nada en contra de la familia, entre comillas, en realidad las historias que contaba de cómo él asesinaba y mataba a la gente, de cómo él desató terror en pueblos, yo estaba realmente aterrada, yo no era capaz de mirarlo a los ojos, y yo era rogando al cielo que se fuera de mi casa y que nunca más volviera, porque no quería tener a esa persona cerca sabiendo lo que había hecho y el dolor que significaba para otras familias (CNMH, mujer, taller de memoria con habitantes de la zona noroccidental, 2015).

En muchos casos esos sentimientos de rabia y rencor se mezclaron con la sensación de impotencia que provenía no sólo de los hechos de violencia, sino de la inefectiva respuesta estatal, de la impunidad y de la ausencia de garantías para la no repetición de las mismas. De esta manera se generó un clima propicio para alimentar deseos de venganza y la consecuente reproducción de la violencia en la ciudad.

4.4. Una ciudad coartada

La agudización del conflicto armado produjo un ambiente marcado por el miedo, la zozobra, la angustia y la incertidumbre. Esto fue reconocido en los distintos espacios de memoria convocados como un “estado de terror” que se tomó la ciudad y que dejó profundas huellas en la subjetividad de las personas, pero también en las formas de pensar y de relacionarse. Uno de los impactos más visibles de aquel “estado de terror” fue la sensación de coerción que experimentaron amplios sectores de la ciudadanía: la vida cotidiana, el tránsito por el territorio, las relaciones interpersonales o la participación política se vieron afectados por el temor que producía la dinámica del conflicto armado en el territorio.



“En el barrio de nosotros, cuando estaban persiguiendo a Pablo Escobar, vivía un hombre de él, de los fuertes (...). Una noche se oyeron helicópteros y los vecinos salimos a brujar. Aquí estamos representadas mi mamá y yo. En ese momento yo era la menor que protegía a los otros 4 con ella, nos asomamos a la ventana, escasamente veíamos los policías corriendo y resulta que el hombre que estaban persiguiendo logró escaparse por los techos nos dijeron; al final lo cogieron pero no en el barrio. Pero el asunto es que por estas cosas cayeron personas que nada que ver (...). Uno no sufría por a quién mataron, si hubo sangre por acá y todo, sino que era esa idea de protección, de resguardarse, de ayudar a proteger” (CNMH, testimonio mujer, colcha de la memoria, taller de memoria con personas mayores de 40 años, 2015). Fotografía: Corporación Región.

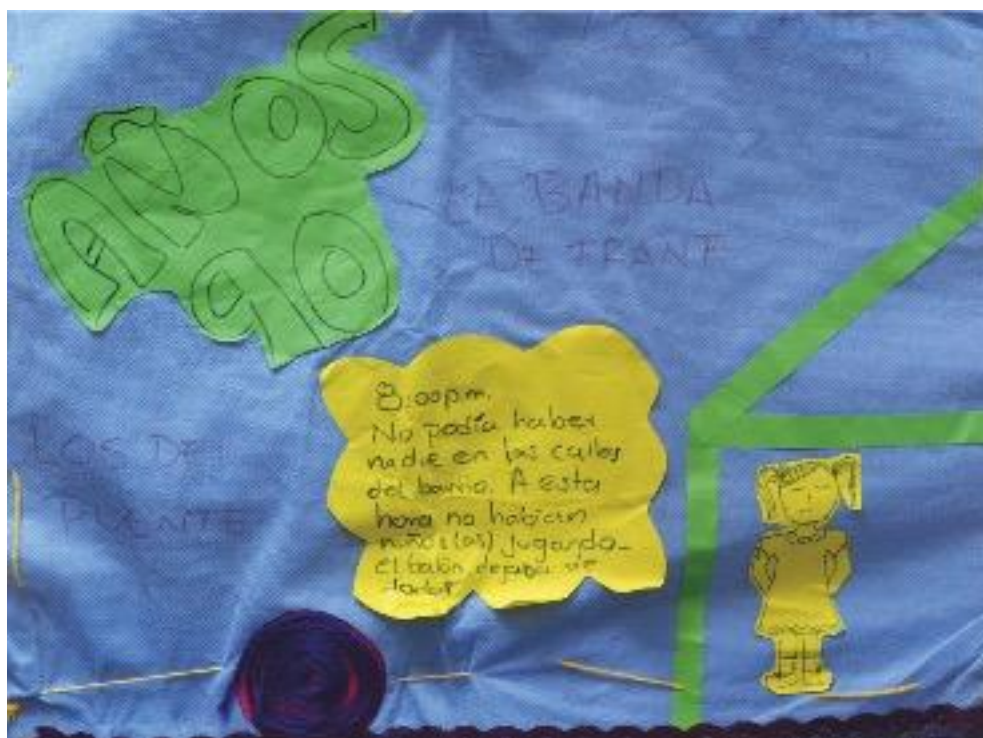
4.4.1. La limitación de las libertades y la autonomía

Las disputas por el control del territorio y la implantación territorial de un orden a través del poder armado limitaron las posibilidades para habitar el vecindario, el barrio y la ciudad. Como consecuencia, la ciudadanía se replegó hacia sus hogares y la autonomía personal, familiar y comunitaria se vio reducida. En ocasiones esas limitaciones fueron explícitamente establecidas por los actores armados, como ocurrió en barrios como La Esperanza o Los Mangos con la implantación de las llamadas “fronteras invisibles” (Ruiz y Vélez, 2004). Pero provinieron también de disposiciones de seguridad adoptadas por los gobiernos local y nacional para enfrentar la amenaza de los actores armados ilegales, como lo fueron los toques de queda implementados desde agosto de 1989 en Medellín y que pervivieron como política local en varios momentos de la década de los noventa.

En otras ocasiones, estas limitaciones para el tránsito por los territorios y la ciudad no tuvieron como origen el mandato explícito de los actores armados, sino que fueron asumidas por la ciudadanía como una forma de prevenir una “tragedia”, es decir, como táctica de protección de las violencias. De esta manera la ciudadanía se vio constreñida en medio de la sensación de que lo que ocurría era una amenaza generalizada de la que nadie estaba exento. Los habitantes de la ciudad narraron así la manera en que sintieron coaccionada su autonomía para la libre circulación por sus territorios:

Bueno, entonces a partir de esto nunca volvimos a salir por las noches, porque era muy peligroso [...]. Entonces empezaba como un mito urbano: “Este fin de semana van a salir otra vez a hacer masacres”. Entonces ahí empezó todo, como en las casas. [...]. Y entonces hubo un momento en el que hubo el toque

de queda, entonces la gente no salía por susto de que se encontrara con una masacre de esas [...]. Eran también mitos y uno no sabía nada en verdad [...]. Es que también empezaba como la imaginación [...] entonces que si ven muchos carros en la calle, van a entrar a la casa y a matar a todo el mundo. Pues yo no sé si pasó alguna vez, pero pues váyase sin carro, váyase pa' una casa, no vayan a sitios públicos, salga temprano [...]. Pues eran como muchas cosas, yo me acuerdo sobre todo como de eso del toque de queda (CNMH, hombre, taller de memoria con empleados del sector financiero, 2015).



“Yo vivo en un barrio que se llama París que limita con Picacho. Entonces en ese momento recuerdo que llegaba como una hora de la noche donde nos decían a todos los niños, y pues a la gente que estaba en la calle, que ya deberíamos estar en las casas. Y lo que sucedía era que más o menos a las once de la noche, supongo yo, habían unos enfrentamientos y yo escuchaba siempre en mi familia mencionar como algunos personajes que ocasionaban esos enfrentamientos o que estaban detrás de esos enfrentamientos: la banda de Frank, por ejemplo” (CNMH, testimonio mujer, colcha de la memoria, taller con Mesa de Víctimas, octubre de 2015). Fotografía: Corporación Región.

La militarización de algunos territorios por la presencia continuada de algún actor armado restringió sus relaciones sociales internas y su relación con la ciudad. Cada actor armado estableció sistemas normativos propios que coartaron las dinámicas, costumbres e identidades de las personas y las comunidades, afectando las libertades fundamentales individuales y colectivas de la ciudadanía (Londoño, 2016). Como lo deja ver el anterior relato, el rumor fue uno de esos dispositivos expeditos que los actores armados usaron para la propagación del miedo con el cual se aseguraría la aceptación de su orden.

De este modo fueron amenazadas, hostigadas, desplazadas, sexualmente violentadas y/o asesinadas aquellas personas a las que, conforme al dictamen del actor armado de turno, se consideraba un “enemigo” capaz de alterar ese orden establecido. Así ocurrió, por ejemplo, en barrios como Popular 1 y 2, Villatina, Manrique, Villa del Socorro, El Triunfo y el 13 de Noviembre en la década de 1980 y 1990 con las milicias que implantaron un sistema de normas que incluía

entre los actos considerados punibles el comercio y consumo de sustancias psicoactivas, la violencia intrafamiliar o la participación política de líderes y lideresas locales en ciertos espacios convocados por la administración local, como parte de su estrategia antiestatal (Jaramillo, Villa y Ceballos, 1998, páginas 60-67).

Una situación similar se presentó posteriormente con la incursión de los bloques paramilitares a finales de los años noventa, como el Bloque Metro y el BCN. En medio de las disputas por el control del territorio se socavó el derecho a la libre circulación, a la participación política y al libre desarrollo de la personalidad. Un ejemplo paradigmático es la comuna 13, donde los paramilitares incursionaron arrasando con lo que consideraban cualquier vestigio de la presencia de las milicias y las guerrillas (Angarita, Jiménez y otros, 2008). Asesinaron, desaparecieron y desplazaron a líderes y lideresas que representaban para ellos un obstáculo para la materialización de sus intereses. Igualmente iniciaron un exterminio paulatino de quienes cuestionaban el orden impuesto y establecieron un sistema de castigos donde sobresalió la tortura, la sevicia y el escarnio público como estrategia para asegurar su dominio a través del terror.

El despliegue de este repertorio de violencias por parte de los actores armados en los años más álgidos produjo una sensación de inseguridad en la calle y en los espacios públicos que replegó a la población al encierro. La calle y lugares como las canchas o los parques fueron apropiados por actores armados que limitaron su uso. Calles, plazas, parques y barrios fueron estigmatizados y los habitantes vieron restringido el uso libre del espacio público y la circulación por el territorio. Así lo recuerdan habitantes de la zona noroccidental:

Yo hablaba, por ejemplo, de cuando ellos se apropian de los espacios públicos: el grupo armado llega y se toma una cancha, un sector, entonces ya la gente no va a ese lugar [...]. El miedo a salir. Yo les contaba, por ejemplo, yo llegaba con los refrigerios de los niños y una señora iba saliendo y la mataron por tener a un muchacho de esos al lado. Entonces la señora tenía 58 años y ella se murió, pero el muchacho no, y yo con ese miedo de: “¡Juemadre!, yo iba para allá, que terrible lo que me pasó a mí, que terrible lo que le pasó a la señora”, y estuve mucho tiempo que ni a la tienda quería ir (CNMH, mujer, taller de memoria con habitantes de la zona noroccidental, 2015).

También las personas jóvenes han visto limitadas sus libertades en el territorio y la ciudad, especialmente quienes han habitado en los barrios donde se concentró el conflicto armado. Si bien el grueso de los grupos armados estaba compuesto por jóvenes, la gran mayoría de este sector de la población no hacía parte de estos. Aun así, los hombres jóvenes de los barrios populares fueron vistos como potenciales delincuentes y como sospechosos de pertenecer a estructuras armadas ilegales (Villa, Sánchez y Jaramillo, 2003, páginas 163-145).

La sospecha, por un lado, y las agresiones, por otro, que recayeron sobre los sectores jóvenes de la sociedad se materializaron en diversas formas de violencia, vigilancia y control por parte de miembros de la Policía Metropolitana y de organismos tales como el F2, el B2 y el DOC. Así narraron la presencia constante de esos organismos personas que vivieron su juventud en medio del conflicto armado:

Recuerdo mucho la época del DOC. En la época del DOC era miedosísimo, porque uno iba por San Juan o por el Centro, cualquier parte, y estos manes iban por ahí descaradamente, con las armas así. Y me tocó presenciar una vez que iba un motociclista, como que una camioneta de esas lo tiró y el motociclista le reviró, les dijo alguna vaina, y en el semáforo siguiente ¡pam! Hijuemadre, pues cosas totalmente absurdas (CNMH, hombre, taller de memoria con personas mayores de 40 años, 2015).

Las personas jóvenes no estuvieron sólo bajo la sospecha de organismos del Estado, sino también de los actores armados ilegales. Para estos, empeñados en salvaguardar su hegemonía territorial, cualquier persona externa al territorio local era considerada “sospechosa” de pertenecer al enemigo, sobre todo si se trataba de jóvenes varones. Estos grupos establecieron fronteras territoriales que funcionaron principalmente para limitar la circulación de ellos a través de los distintos barrios, lo que minaba la autonomía y el libre tránsito, y ahondaba la segregación y la fragmentación de la ciudad:

Entonces había fronteras invisibles. Yo iba allá [barrio Santa Cruz] siempre que estaba en vacaciones de junio del colegio, iba en las vacaciones de diciembre, siempre que tenía un espacio libre, dos, tres días, me iba para allá a jugar con mis primos. Pero entonces la cosa era que no podíamos bajar a la tienda de la cuadra de allá porque así fuéramos niños no podíamos cruzar las fronteras [...]. Entonces para mí eso era algo muy normal, pero yo contaba eso en mi colegio o cosas y me decían: “Pero, ¿cómo así que no vas a poder ir a la tienda de la esquina?”. Y yo: “No, porque esa hace parte de otro combo, entonces no podemos pasar a ese combo”. Es más: los combos eran pelaítos hasta de la misma edad de uno, que lo miraban a uno raro sólo porque uno era de la otra cuadra, y era una cosa rarísima, pero pues [...] ahora que uno lo ve, dice: “Eso es terrible, uno tener que haber vivido esas cosas”, pero en ese momento eran pues como muy normales (CNMH, hombre, taller de memoria con empleados del sector financiero, 2015).

La libertad y la autonomía de las mujeres también se vieron afectadas. La desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres se agudizó ya que la militarización de la vida creó nuevas situaciones de vulnerabilidad para las mujeres que afectaron sus posibilidades de ejercer autonomía sobre sus vidas, sus cuerpos y su existencia. En la cotidianidad del conflicto ellas fueron vistas por los actores armados como objetos. El acoso y los hostigamientos de los que

muchas fueron objeto provienen del hecho de que los hombres armados en los territorios veían a las mujeres como suyas (Sánchez, Corrales y López, 2008). La violencia sexual contra niñas y mujeres, principalmente, da cuenta de esta lógica de apropiación del cuerpo de las mujeres. La percepción de estos riesgos diferenciados para ellas hizo que muchas se replegaran del espacio público al sentir coartada su libertad para transitar por sus territorios de forma segura.

Los momentos más álgidos del conflicto en la ciudad coincidieron con un contexto de transformación importante que ya se estaba dando en el mundo. El desarrollo acelerado de una cultura urbana en Medellín coincidió con el fenómeno global de transformación cultural de los años setenta y ochenta, el cual se expresó con la llegada de nuevas opciones, modas, identidades, y expresiones como el rock, el punk y el hip-hop. Una nueva ola de subjetividades se hizo visible en la ciudad: ropas oscuras y ropas anchas, expresiones corporales poco comunes para aquel momento —como tatuajes o perforaciones—, al igual que nuevas expresiones artísticas, literarias y musicales, inundaron las calles y los barrios de Medellín. Estas nuevas expresiones ofrecieron ideas alternativas que marcaban una ruptura con las expresiones tradicionales, con críticas dirigidas a los problemas de la ciudad, entre ellas las dificultades para el ejercicio de las libertades y libre desarrollo de la personalidad (Nieto, 2009).

Las estructuras paramilitares y las fuerzas del Estado vieron con desconfianza la emergencia de algunos de estos nuevos nichos culturales. Muchas de estas expresiones fueron señaladas y perseguidas, y se acusó a las agrupaciones artísticas de hacer propaganda de grupos subversivos. Algunos sectores de artistas y creadores fueron hostigados y tuvieron que abandonar sus proyectos, desplazarse a otras ciudades o exiliarse en otros países. Algunas personas huyeron por las violencias ocurridas contra ellas o contra sus seres cercanos, y algunas otras lo hicieron al sentirse asfixiadas por la imposibilidad de crear “mundos alternativos” en una ciudad donde prevalecía la violencia. En la memoria de algunos artistas vinculados a la movilización social en la ciudad en los primeros años 2000 está el recuerdo de haber tenido que huir de Medellín en ese entonces por la amenaza de violencias en su contra debido a sus expresiones artísticas. Hombres y mujeres artistas vinculados a la protesta social y a las reivindicaciones políticas alternativas y de izquierda vieron limitada la posibilidad de expresar sus ideas. Varios tuvieron que abandonar la ciudad y exiliarse en otros países, como sucedió con la banda musical Los Pasajeros, cuyos integrantes salieron del país en 2005 debido a amenazas e intimidaciones.

4.4.2. La participación coartada

En medio de estos órdenes impuestos a través de las armas, las libertades civiles de los líderes y lideresas barriales se vieron coartadas, quedando supeditadas a los límites que los actores

armados impusieron. Muchos de aquellos, que a través de la veeduría y la denuncia pública le reclamaban a los grupos armados por sus acciones en los territorios, fueron objeto de amenazas, desplazamiento o asesinato. Este tipo de violencias sirvieron como intimidación para los otros que intentaban cuestionar el orden impuesto, lo que creó un ambiente coercitivo donde debía prevalecer el silencio para no ser catalogado como “sapo” (delator) y ser asesinado.

La presencia inmediata y cotidiana de los actores armados en los barrios más impactados por la confrontación, como el caso de la comuna 13, limitó y se tradujo en la vigilancia y el control permanente de las acciones emprendidas por los movimientos barriales, lo que coaccionaba el ejercicio político comunitario que se configuró en los barrios de la ciudad. Para líderes y lideresas, la presencia de los actores armados y las dinámicas de confrontación entre los mismos significaron un daño a la autonomía en sus proyectos políticos, como lo expresaron habitantes del barrio La Loma (corregimiento de San Cristóbal):

Para mí, como líder de La Loma de muchos años, ha sido muy duro, bastante duro, el que todos estos grupos armados hubieran llegado al territorio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos el trabajo comunitario, pues, era muy bueno, y todos ustedes lo pueden corroborar así, de que el desplazamiento de nosotros por todo el territorio fue sin dificultad, sin problemas, a cualquier hora del día, de la noche, tomara uno aguardiente, o no, no había esos enfrentamientos, no habían problemas, y si habían problemas, ¿cómo se resolvían?, con unos planazos o con unos puños. En fin, entonces para uno es muy duro, cuando uno ha considerado todo este territorio, como un territorio que le ha brindado a uno tantas cosas buenas, que en el desplazamiento, que en el trabajo social, el comportamiento y la relación con los ciudadanos de este territorio ha sido muy buena, con las familias, con los vecinos, con los familiares, con los amigos, entonces que lleguen grupos armados de otras partes a instalarse aquí, a influenciar sobre los jóvenes, sobre los ciudadanos, sobre las familias de este territorio, es muy bravo (CNMH, hombre, taller con habitantes del barrio La Loma, 2015).

Líderes y lideresas vieron condicionadas las posibilidades para expresar sus posturas, para auditar los recursos locales, y para hacer veeduría y control. Ellos y ellas debieron enfrentarse a la decisión de guardar silencio sobre ciertos temas para proteger su vida y la de sus personas allegadas, o continuar con su trabajo incluso cuando afectara el orden impuesto por algún grupo, escenario en el cual su permanencia en el territorio e incluso sus vidas quedaron expuestas. Este riesgo fue asumido por varias organizaciones y liderazgos en la ciudad.

Por su carácter barrial, estas formas de violencia política han tenido menos resonancia en la ciudad, no obstante, su intensidad ha sido notable. Las violencias contra los liderazgos barriales se intensificaron principalmente en la segunda mitad de los años noventa durante el período que se ha denominado el de “urbanización de la guerra”, sobre todo por parte de los grupos

paramilitares en medio de su afán por imponer un nuevo orden en los territorios (Gil, 2016, páginas 42-46).

Sin embargo, esta participación política no sólo se vio restringida por el ejercicio de la violencia por parte de grupos paramilitares. De tiempo atrás, los líderes barriales de los territorios donde los grupos milicianos hicieron presencia debieron aprender a pactar sus acciones con estos y los combos (Londoño, 2016, página 134). No obstante, la capacidad de aquellos para negociar con el poder regulador impuesto por estos sobre el territorio fue fuertemente afectada durante la llamada urbanización de la guerra. Las disputas por el poder territorial afectaron profundamente el ejercicio político de líderes y lideresas, debido al asesinato selectivo y las amenazas dirigidas a jóvenes vinculados a procesos políticos barriales. De esta manera se narró esta experiencia:

En daños políticos, hablábamos de las barreras invisibles, que como ustedes saben afectan el desplazamiento libre de muchos líderes, muchas personas, y se notaba más en los jóvenes, hombres y mujeres, más que todo en los hombres. La afectación a los liderazgos, unos más que otros. Había líderes que, por su juventud, podían ser más marcados: evitar de que se desplazaran libremente, algunos de nosotros aún con la edad que tenemos nos daba cierto temor ya llegar a algunos espacios. Eh... el temor limita la continuidad de los procesos sociales, en muchos casos se vio tapar las amenazas y señalamientos a los líderes. Otros, pues, no hemos tenido amenazas, pero sí nos hemos llenado de temor de desplazarnos, a ciertos temores por los combos, por las bandas, por la gente tan desconocida que a veces llegan allá, que ustedes saben que eso ha llevado a que muchas personas han perdido sus vidas (CNMH, hombre, taller de memoria con habitantes del barrio La Loma, 2015).

Este tipo de violencias se usaron como intimidación para otros sujetos políticos que intentaban contravenir el orden impuesto, lo que debilitó la continuidad de procesos sociales y políticos en la escala comunitaria. De esta manera se vieron condicionadas las posibilidades para expresar los propios puntos de vista, lo que hizo que se sintieran obligados a ejercer su derecho a la participación dentro de los límites impuestos por los actores armados para proteger su vida, la de otros liderazgos y la de personas allegadas. Es así que las violencias asociadas al conflicto armado han producido un daño al tejido organizacional y político barrial.

Este tipo de impacto ha sido también un obstáculo para la relación entre los territorios y la administración municipal. Los espacios de participación e interlocución con las instituciones se vieron limitados por la injerencia de representantes e, incluso, integrantes de los grupos armados, quienes han llegado a imponer sus agendas políticas o la destinación de los recursos en detrimento de los intereses comunitarios. Según informes de derechos humanos de la Personería de Medellín han sido reiteradas las denuncias por parte de la ciudadanía sobre el interés de

algunos grupos armados por cooptar recursos de presupuesto participativo en las juntas de acción comunal (JAC):

Existen graves denuncias sobre acciones de intimidación contra organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias que se han enfrentado a las organizaciones influenciadas por los grupos de desmovilizados en el proceso de discusión del presupuesto participativo para Medellín. Las acciones empleadas son rumores, tergiversaciones y difamaciones, así como amenazas veladas e intimidación a los líderes que trabajan con estas organizaciones” (Personería de Medellín, 2005, página 16).

La capacidad de líderes y lideresas para gestionar las necesidades básicas de infraestructura y desarrollo social en los barrios más afectados por el conflicto se vio truncada por la injerencia de actores armados, a pesar de su condición de desmovilizados, como en el caso de la Corporación Democracia. Según el testimonio:

Hay muchos asuntos soterrados de la violencia en esta ciudad y hay muchos miedos instalados en nosotros todavía frente a estos procesos. Miedos porque muchas personas que han sido actores de la violencia como los desmovilizados del Bloque Nutibara que luego fueron Corporación Democracia son hoy actores políticos de esta ciudad, con cargos en las secretarías de la ciudad. Ahí uno no sabe, porque cuando uno se pone a mirar que lo único que va quedando de Corporación Democracia. ¿Dónde están ubicados, entonces? ¿Qué lectura se le hace a eso y quiénes son los que están hoy orientando asuntos de la planeación del desarrollo local y decidiendo la ejecución de recursos en los territorios y que bravean al alcalde? Ellos están infiltrados, ellos accedieron al poder (CNMH, mujer, taller de memoria con líderes comunitarios, 2016).

Asimismo, la violencia política y sus impactos en la ciudad se han hecho claramente visibles en la persecución que las organizaciones sociales y los movimientos cívicos y políticos han sufrido a partir del repertorio de violencias que en su contra han cometido los grupos armados, como las amenazas, los asesinatos, las desapariciones, los desplazamientos, la criminalización y la estigmatización.

En los años ochenta estos movimientos cívicos, políticos y sociales habían logrado convertirse en un actor relevante en las discusiones públicas de la ciudad. Los sindicatos tenían fuerza, comenzaban a multiplicarse los grupos, asociaciones y liderazgos, y algunos partidos políticos no tradicionales como la Unión Patriótica habían logrado representación en cuerpos colegiados como los Concejos Municipales y la Asamblea Departamental de Antioquia (CNMH, 2014, páginas 179-189). Sin embargo, la violencia política contra estos sectores generó limitaciones al florecimiento

y desarrollo de nuevas ideas políticas en la ciudad, uno de los pilares fundamentales para el ejercicio de la democracia.

Un caso representativo de la persecución de organizaciones sociales fue el Instituto Popular de Capacitación (IPC), entidad no gubernamental reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos en la ciudad (Hernández, 2013b). Las acciones en contra de esta organización han producido daños políticos que afectaron su imagen y posibilidades de relacionamiento:

Esos primeros dos años después de esos eventos fueron terribles, eso fue devastador. La gente, o bien por postura política o bien por cuidarse, prefería no estar cerquita del IPC [...]. Eso después de la entrega de esos secuestrados fue terrible, hermano. Esa soledad, eso de que nadie quería hacerse con nosotros ¡Es duro! Porque la solidaridad fue impresionante, pero una vez pasados los hechos vino la distancia. Y cuando la bomba, ahí sí [...] la bomba sacó a todos los amigos del lado, porque la bomba ya daba cuenta digamos como de un propósito de exterminio ¿cierto? [...]. Eso fue muy complejo, eso digamos es el primer impacto, y casi no nos recuperamos de eso (CNMH, entrevista a defensor de derechos humanos, 2015).

Debido a los múltiples daños que fueron ocasionados, esta organización fue considerada por la Unidad de Atención a Víctimas como sujeto de reparación colectiva. Hoy esta organización reivindica que parte de su reparación sea justamente el reconocimiento de la memoria y los impactos del conflicto en el movimiento de derechos humanos.

Como este, han sido varios los impactos de la violencia política para la ciudad. El alto número de violencias y la fuerte estigmatización dirigida hacia estos sectores políticos de la sociedad civil produjeron un ambiente de temor que ha dificultado la pervivencia del pensamiento crítico y la organización social en torno a la defensa de los derechos humanos en la ciudad (Gil, 2016). En uno de los espacios de memoria convocados, líderes sindicalistas expresaron que en medio de ese ambiente que se produjo en los años críticos de la guerra sucia contra estas expresiones políticas, las personas decidieron alejarse de la movilización para proteger la vida lo cual repercutió en la dificultad para que existiese un relevo generacional que hiciera pervivir la movilización:

Las incidencias de todo eso que hemos venido hablando es que, antes de que todo esto pasara, cuando el sindicalismo estaba más o menos posesionado, había un proceso de formación de las bases para cualificarlas y que fueran el reemplazo de la dirección sindical (uno). Y dos, que las huelgas y las propias asambleas de los sindicatos iban mostrando los activistas, los que podían llegar a reemplazar a la dirigencia. Desde las huelgas era de donde salía, digamos, el semillero para después llegar a la dirección

sindical; ahí era donde uno veía al compañero que se comprometía, que iba hasta el fondo y, en fin. Cuando viene toda esta escalada, se llegaba a las asambleas a elegir a una junta directiva [...]. A veces había que decir debajo de la mesa “¿quién se propone para llegar a la junta?”. Nadie quería llegar a la junta, nadie quería arriesgar el pellejo de ser una persona que podía ser amenazado. Había sindicatos que solamente elegían 7, 8 en la junta, no la acababan de ajustar porque la gente tenía físico miedo (CNMH, hombre, taller de memoria con sindicalistas, 2015).

Así mismo, el hecho de que esta violencia política estuviera dirigida fundamentalmente hacia los liderazgos, organizaciones y expresiones políticas que cuestionaban el orden establecido produjo hacia mediados de los años ochenta la sensación de que no era posible hacer transformaciones políticas profundas a través de las vías democráticas. Esta sensación se vio alimentada por las violencias dirigidas hacia personas que habían hecho parte de la lucha armada y se habían desmovilizado en los procesos de paz bajo los gobiernos de Belisario Betancur y César Gaviria Trujillo en los años de 1982 y 1990, respectivamente, con grupos como el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el EPL y el Movimiento Armado Quintín Lame.

Experiencias como el exterminio de la Unión Patriótica (UP) o el asesinato de líderes como Héctor Abad Gómez hicieron que líderes, lideresas y organizaciones sintieran que no era posible hacer críticas radicales, sino que debían conformarse con una participación crítica condescendiente con la política tradicional, si no se quería poner en riesgo la vida. Un líder vinculado a la movilización de los derechos humanos durante los años crudos de la violencia política (1997-2003) rememoró este cambio de una crítica radical a una crítica suave por el miedo de aquellos años:

La violencia debilitó muchísimo las posibilidades de actuación de grupos y de colectividades centradas en el tema de derechos humanos y en los temas democráticos. [...] Si uno viera hoy cuál es la expresión mayor del movimiento social es mejor irse por temas no tan duros ¿sí? Les queda mucho más fácil a los jóvenes y a muchos sectores sociales que están más en esas coordenadas que las coordenadas de la crítica fuerte a los temas democráticos y de derechos humanos de la ciudad. [...]. ¿Qué pasó en Montería y qué pasó en Medellín? En Montería hubo una captura total ¿cierto?, la gente tuvo que callarse del todo. Aquí no fue una captura total, pero sí sabíamos que había un poder muy fuerte que nos podía hacer lo que quisiera cuando quisiera, entonces nos fuimos corriendo, ¿si me entiende? [...]. Terminábamos era básicamente como críticos de los informes de la Policía, se estaba a toda hora hablando de homicidios y no hablando de derechos humanos, pasamos de analistas de derechos humanos a violentólogos [...] (CNMH, entrevista defensor de derechos humanos, 2015).

Esta transformación ha sido narrada en detalle por el movimiento sindical de la ciudad, que se vio especialmente afectado por la intensidad de violencias en su contra en los años ochenta y noventa, perpetradas principalmente por grupos armados ilegales y organismos de seguridad del

Estado como el F2 y el B2. Sólo para el caso de ADIDA (Asociación de Institutores de Antioquia), desde la década de 1970 hasta 2007, se han registrado 98 asesinatos a sindicalistas del sector educativo en la ciudad de Medellín. (ENS, 2016, páginas 81 y 126).

Esta persecución que con tanta insistencia narran las y los defensores de derechos humanos dejó una huella en los proyectos políticos alternativos de la ciudad, principalmente de izquierda y limitó sus posibilidades de representación en diferentes ramas del poder de la institucionalidad local.

Este impacto se vio profundizado por las violencias en contra de algunos sectores de los medios de comunicación, cuyos miembros fueron asesinados en el ejercicio de su labor investigativa: sólo entre 1989 y 1995, época del recrudecimiento de las violencias perpetradas por estructuras del narcotráfico, se reportaron 13 homicidios de periodistas en la ciudad de Medellín (CNMH, 2015). Esta situación ha promovido una amenaza constante a ese “cuarto poder” que es el periodismo, lo que ha afectado el ejercicio de la tribuna pública y generando un ambiente de hostilidad hacia la crítica, la denuncia y la libre expresión, otra de las condiciones necesarias para el desarrollo de una democracia en la ciudad.

4.5. Una ciudad estigmatizada

El miedo, la zozobra y la incertidumbre abonaron el camino para la exacerbación de la estigmatización de sujetos y territorios. Así, en el señalamiento de ciertos sujetos como “enemigos” han proliferado representaciones sociales estigmatizantes contra poblaciones y territorios. En algunos casos, estas representaciones sociales han sido usadas por los grupos armados para legitimar el ejercicio de su violencia, llegando a profundizar imaginarios excluyentes que existían previamente, ahondando así las condiciones para la reproducción de la violencia.

Como se ha mostrado, la mayoría de las personas que han integrado los actores armados en conflicto en la ciudad han hecho parte de las comunidades, es decir, no han sido personas ajenas a ellas. En medio de esa cotidianidad se han tejido proximidades con integrantes de estos grupos armados, ya sea por vínculos familiares, por el trabajo, el colegio, la infancia o la simple convivencia en el barrio. También para quienes han deseado un territorio libre de violencia, habitar el mismo territorio que los sujetos armados ha sido inevitable. Sin embargo, esta realidad que hace parte del desarrollo de una guerra irregular, ha servido para que personas y territorios hayan sido señalados por organismos estatales y por actores armados ilegales de pertenecer o colaborar con un bando u otro, lo que ha afectado el buen nombre de las personas, las comunidades y los territorios (Blair, 2008).

De esta manera se ha llegado a estigmatizar barrios y comunas enteras. Durante los años ochenta la zona nororiental fue vista como el origen de la violencia en la ciudad; durante las décadas de los ochenta y los años dos mil, las comunas 8 y 13 fueron tildadas del lugar de resguardo de “guerrilleros” y posteriormente de “paramilitares”. La población civil en general fue marcada, como si todos sus habitantes hicieran parte del enfrentamiento, negando el dolor y la angustia cotidiana que ha representado para estas comunidades la presencia de los armados en su territorio.

Así ocurrió el 29 de junio de 2002 cuando “paramilitares del Bloque Cacique Nutibara (BCN) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incursionaron en la parte alta del barrio El Salado, sectores 6 y 7, en la comuna 13 de Medellín” (CNMH, 2011a, página 64). Durante los hechos fue asesinada una persona, nueve ranchos fueron incendiados y la comunidad fue violentada física y verbalmente. El que esta zona hubiera sido poblada con apoyo de células urbanas del ELN no significaba que sus habitantes fueran guerrilleros. Incluso algunos de ellos habían sido víctimas de hechos cometidos por este grupo en el ejercicio del control territorial que realizaron. Nada de esto fue tenido en cuenta y el señalamiento como “guerrilleros” desembocó en este hecho que dejó 170 familias desplazadas de las 200 que allí habitaban.

Quienes han residido en la comuna 13 han experimentado en el día a día los vejámenes y estigmatización por parte de fuerzas de Policía, el Ejército y los grupos paramilitares, que los tildaban de milicianos, guerrilleros y colaboradores. Estos imaginarios estigmatizantes han servido de justificación para la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos en este territorio (CNMH, 2011a, páginas 229-259).

Estos estigmas también han tenido consecuencias en otros ámbitos de la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, habitantes de la zona Nororiental recuerdan que durante la década de 1980 hasta mediados de los noventa, tenían mayores dificultades para integrarse a la dinámica de la ciudad. Sintieron limitado el acceso a las oportunidades de empleo y educación, pues se desconfiaba de ellos al ser señalados como potenciales delincuentes. La idea anteriormente expuesta de que la violencia provenía del “norte” de la ciudad, subyacía a este tipo de imaginarios, y como efecto de la misma, la brecha entre “la ciudad” y estos barrios se ahondó.

Por otra parte, la participación y la movilización de ideas políticas de izquierda, al igual que los liderazgos dirigidos a la promoción y defensa de los derechos humanos fueron tildados de “guerrilleros”, “farianos” (en referencia a las FARC), “elenos” (en referencia al ELN), entre otros adjetivos que han servido para descalificar e invalidar políticamente las propuestas de sectores políticos democráticos (Gil, 2016, página 63). Como se vio, este tipo de hechos ha limitado las

posibilidades de acceso a cargos de elección popular para dirigentes que representan estas ideas políticas, como lo fue el caso de la UP o incluso de sectores alternativos de partidos políticos tradicionales como el Nuevo Liberalismo.

En medio de las dinámicas del conflicto armado se han construido estigmas, pero también se han reapropiado, transformado y exacerbado imaginarios preexistentes sobre determinados grupos sociales.

Los actores armados también buscaron ejercer control sobre las subjetividades e identidades que de una u otra forma atentaban contra el orden social que intentaban imponer. En virtud de ello, algunos grupos sociales fueron tachados de “indeseables” dentro de los territorios. Habitantes de calle, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, consumidores de sustancias psicoactivas y personas que ejercían trabajo sexual, fueron cotidianamente violentadas como una estrategia de castigo y aconductamiento. En ocasiones, algunas de estas personas fueron asesinadas, desaparecidas o desplazadas como una forma de, según la retórica de los grupos armados, “limpiar el territorio” (CNMH, 2015).

Las personas consumidoras de sustancias psicoactivas identificadas o señaladas como drogadictas, en su mayoría hombres jóvenes, han sido sistemáticamente perseguidas y violentadas por los grupos armados en la ciudad. A estas personas se les ha asociado con figuras como la del “sicario”, el “ladrón”, o la de algún actor armado ilegal, lo que ha creado un estereotipo en el cual toda persona que hace uso de sustancias psicoactivas es un delincuente que debe ser exterminado. Los docentes de las instituciones educativas narran la estigmatización y la persecución a la que fueron sometidos los jóvenes consumidores de estas sustancias, quienes, según los relatos, tenían sentenciada la muerte por el sólo hecho de fumar marihuana. “Yo digo que el que fumaba marihuana tenía la vida sentenciada o la muerte súbita” dijo una profesora participante de uno de los talleres de memoria (CNMH, taller de memoria con educadores y educadoras, 2015).

De otro lado, los imaginarios estereotipados que han asociado a las personas afrodescendientes con la delincuencia se han visto reflejados en el reforzamiento de una mirada de sospecha sobre ellas, con la consecuente persecución que esto ha representado por parte de actores armados e integrantes de la fuerza pública, sobre todo para los jóvenes afro en condición de pobreza. En algunos barrios se ha acusado a las personas afro que han llegado desplazadas de lugares como Urabá y Chocó de traer la violencia a la ciudad o de tener vínculos con grupos armados de esas zonas del país, razones por las cuales han sido violentadas por los grupos armados o discriminadas dentro de las comunidades. Así lo recuerda un grupo de líderes y lideresas afro al

hablar sobre el caso de la comuna 8 (Ver mapa 2: Medellín por barrios y comunas), donde muchas personas afro del departamento y departamentos vecinos como el Chocó han llegado en situación de desplazamiento:

Estoy hablando que los bajaban de los buses de Caicedo, Villa Lilián, la Sierra, los bajaban [...]. Eso nunca se había visto así en la ciudad, o sea, que a la gente la bajaban con fierro en mano y pa' abajo y los flagelaban por ser negros y por vivir en esos barrios. Además, porque, decían ellos, que tenían una guerra territorial ahí con los Urabeños, y entonces decían que los que llegaban desplazados eran urabeños [...]. Como son supuestamente de Urabá y era mucha gente negra (CNMH, hombre, taller de memoria con personas afro, 2015).

Estos imaginarios racistas se han engranado con otros sexistas que han hipersexualizado el cuerpo de las mujeres afro e indígenas. Esto ha sido la base para que estas mujeres sean vistas como sexualmente disponibles para los hombres armados, lo que las ha puesto en riesgo de hechos de violencia sexual (Marciales, 2013).

Las personas en situación de habitabilidad de calle han sido de las víctimas más invisibilizadas. Este sector social también ha experimentado la estigmatización y las violencias que de ello se han derivado. Señaladas de “vagas”, “mendigas”, “peligrosas”, como si fueran una mancha en el panorama de la ciudad, estas personas han sido tratadas como sujetos indeseables en distintos lugares. Estas violencias han sido invisibles debido a sus condiciones de vulnerabilidad, a las débiles redes de soporte con que cuentan y a la dificultad para que las denuncias sean tenidas en cuenta.

Estos imaginarios no sólo han permeado a los actores armados, también lo han hecho con la población en general. La preexistencia de imaginarios sociales estigmatizantes sobre estas personas facilitó la reapropiación de estas ideas en medio de las dinámicas del conflicto. Una de las principales dificultades es que estos estereotipos han calado profundamente en la ciudadanía, y han servido de justificación para la ocurrencia de hechos violentos, lo que ha llevado a una especie de “naturalización”, es decir, que estos hechos violentos no sean mal vistos sino, por el contrario, asumidos como “normales” y hasta “deseables”. Al respecto una mujer lesbiana argumentaba que:

Esta violencia que se da tiene una particularidad y es que se ejerce con la complicidad del resto de la sociedad. Mientras en otras situaciones la comunidad se manifestaba y se indignaba, cuando era contra los LGBTI no. Entonces fue una estrategia para muchos actores armados en los barrios periféricos que establecieron esta modalidad de lo que es bueno y lo que es malo para la sociedad: si la mataron era

porque algo estaba haciendo. A las trans se les dice prostitutas, que son violentas, problemáticas, que venden droga, que es promiscua, que es drogadicta y está infectada y está contagiando a la gente [...]: de ese modo se justifica. Esa es una particularidad que vale la pena contar (CNMH, hombre, taller de memoria con sectores LGBTI, 2015).

La complejidad de casos como este o los que han ocurrido contra otros sectores sociales que han sido vistos como “indeseables” por un amplio segmento de la ciudadanía radica en que estos imaginarios son compartidos tanto por los actores armados como por sectores de las instituciones estatales y de la ciudadanía, que, incluso, han llegado a defender la promoción de discursos de odio (CNMH, 2015; CNMH, 2016).

No sólo fueron estigmatizadas las personas, los territorios y algunos grupos sociales. También la ciudad y sus habitantes en general fueron estigmatizados a nivel nacional e internacional, y han sido ampliamente asociados a las figuras del narcotráfico y la delincuencia. Este estigma sobre la ciudad ha traído consecuencias para sus habitantes, por ejemplo en fronteras y aeropuertos donde por varios años fueron tratadas con particular sospecha.

4.6. Un Estado entre varios fuegos

La crisis de violencia que ha sufrido la ciudad durante el desarrollo del conflicto armado también ha tenido repercusiones sobre funcionarios públicos locales y nacionales de las diferentes ramas del poder público, y ha limitado el funcionamiento y la capacidad del Estado para el ejercicio de sus funciones. Esto no ha sido un hecho aislado, ha hecho parte de las estrategias de los poderes armados para garantizar la protección de sus intereses (Duncan, 2011).

Como consecuencia de las violencias perpetradas por grupos armados ilegales, los funcionarios públicos locales vieron limitado el ejercicio público de sus funciones dentro de un Estado fragmentado, con escasa presencia en el territorio y en medio de un proceso de modernización que comenzó desde 1950 y de descentralización administrativa que comenzó en la década de 1980 (Leyva, 2015, páginas 12-15). En el ámbito local, miembros de la administración municipal y funcionarios de organismos policivos y judiciales seccionales han sido amenazados, perseguidos, secuestrados y asesinados, lo que ha creado un ambiente de constante amenaza y hostigamiento a los representantes del poder estatal (CNMH, 2013, página 199). Según el Fondo de Solidaridad de las Víctimas del Poder Judicial (FASOL), se tiene registro de por lo menos 74 asesinatos a funcionarios de la rama Judicial —especialmente del CTI— entre 1989 y 2008 en Medellín” (*Verdad Abierta*, s.f.).

Uno de los casos más recordados por los funcionarios judiciales en los talleres de memoria fue el caso de un destacado investigador del CTI perseguido por sus indagaciones en torno a las actividades criminales de la Oficina de Envigado y quien fue asesinado el 15 de febrero de 1999 por sicarios pertenecientes a la estructura paramilitar dirigida por *Don Berna*:

La muerte de él fue muy triste porque el día que mataron al compañero, lo mataron porque pudo identificar donde vivía *Don Berna* y llegó hasta la puerta de la casa y había una cámara, y lo grabó a él haciendo sus labores. Después a este señor Uber¹⁵⁴ le preguntaron: ¿Quién es ese? Ese es [nombre omitido] la dirección es esta y trabaja en tal, bueno de ahí para arriba. Lo más triste fue que el mismo día que lo mataron fue el día que hubo un procedimiento en La Unión (Antioquia), se fue medio CTI y DAS a hacer exhumaciones y fueron emboscados por las autodefensas. Gracias a Dios no hubo ahí más muertos, porque mi Dios es muy bueno. A [nombre omitido] lo matan a las 7 a.m., lo mataron en la 65 al frente de Makro. Cuando lo mataron todo el mundo estaba en el Oriente, entonces era por el radio relatando: que hirieron a uno, que secuestraron a dos, que secuestraron a tres. Cuando una compañera me dice: Vamos, vamos al levantamiento. Pero, ¿cómo que al levantamiento si nadie se ha muerto? Cuando vimos que era [nombre omitido] y ese día lo vimos. Conmigo fuimos 8 personas, fuimos muchos, y al medio día ya estaba cremado. Lo que me parece triste es que sus compañeros ni siquiera lo vieron (CNMH, hombre, taller de memoria con funcionarios judiciales, 2015).

La infiltración en los organismos policivos y judiciales por parte de narcotraficantes y paramilitares menguó profundamente la legitimidad del Estado, generó una sensación de desconfianza en los organismos judiciales y temor al momento de realizar las investigaciones relacionadas con grupos armados ilegales, mientras crecía la frustración y la denuncia de la impunidad por parte de la ciudadanía y algunos sectores del Estado. Así describió esta situación un funcionario judicial:

Las violencias que son frente a organizaciones delincuenciales son más difíciles de investigar, precisamente porque ellos tienen ayuda de funcionarios estatales. Entonces investigar se hace más difícil. La impunidad se vuelve mayor, más riesgoso para el funcionario. Yo tenía una carpeta y una investigación que me tocaba esconderla cada ocho días porque nos daba miedo que se filtrara la información. Cuando se pidieron las capturas tuve que pedirle al centro de servicios que borrara el *back up* y me entregara todas las copias a mí. Cuando al señor lo capturaron lo que el señor les dijo fue: “¿cómo así que orden de captura? A mí nadie me dijo nada” [...]. Es también asumir que todas las profesiones tienen un riesgo, sin embargo, en el desarrollo de las investigaciones también nos ha tocado enfrentarlo, sabemos de organizaciones que hacen hojas de vida de los funcionarios que son correctos y que trabajan y que los atacan. Entonces a cada uno le hacen una carpeta, cada carpeta tiene la foto, dónde está ubicado, dónde estudian los hijos, qué hace, a qué hora sale, le graban audiencias para analizar dónde no somos tan fuertes, por Dios, a qué nos

¹⁵⁴ Uber Duque Álvarez fue jefe de investigaciones del CTI en la década de 1990. Según reportes de la justicia estuvo vinculado como informante y asesor de las estructuras paramilitares de la ciudad Medellín. Fue asesinado en 2004 (*El Espectador*, 17 de diciembre de 2011).

enfrentamos (CNMH, mujer, taller de memoria con funcionarios judiciales, 2015).

Paralelo a la intimidación y persecución a funcionarios judiciales, el asesinato indiscriminado de miembros de la fuerza pública, principalmente en la época del plan pistola creó un ambiente de tensión constante ante el riesgo de convertirse en víctima de atentados al transitar por lugares cercanos a estaciones de Policía. Sin embargo, fue la infiltración y cooptación de organismos policiales por parte del narcotráfico y el paramilitarismo lo que en mayor medida incidió en su deslegitimación al ser señalados por la ciudadanía como colaboradores de los grupos ilegales en la ciudad. Para un funcionario que lleva años trabajando en la Personera Municipal, esta era una realidad inocultable:

Cuando estábamos en la Personería lo decíamos nosotros: el 85 % de la Policía de Medellín está en la nómina de los bandidos, cuando vamos a recorrer la ciudad eso es lo que nos dice la gente, porque nosotros siempre le preguntamos: “¿Bueno y la Policía?”, “La Policía no, la Policía está con ellos”. Pero eso mire que también se encuentra con otra cosa que es contradictoria: ¿Entonces pa’ usted es lo mismo si se va la Policía? No, no, que no se vaya (CNMH, hombre, taller de memoria con funcionarios públicos, 2015).

Los problemas de corrupción en instancias de la justicia y los vínculos de funcionarios con narcotraficantes y paramilitares ahondaron la desconfianza de la ciudadana hacia sus actuaciones y la sensación de impotencia por parte de funcionarios judiciales, al apreciar cómo desde el mismo Estado se ponían obstáculos al desarrollo de importantes investigaciones:

Una cosa que a mí me más me impactó del conflicto armado fue el homicidio de mis profesores, de Jesús María Valle, de Luis Fernando Vélez, y yo ya estaba en la rama Judicial cuando eso, en el Tribunal Administrativo, ese no era un tema que tuviera nada que ver con el Estado aparentemente. El tribunal administrativo no pasaba por ahí para nada, pero los compañeros que habíamos estudiado, que nos habíamos preparado en los cursos de oratoria con el profesor pues cómo íbamos a dejar su muerte en esta impunidad tan horrible y se empiezan a hacer todas estas investigaciones y estas empiezan a dar y a mostrar por dónde va el agua al molino. Pero desde la IV Brigada empiezan a entorpecer las investigaciones, a amenazar a los fiscales, a amenazar la gente cuando se abre la investigación por el homicidio de Jesús María Valle (CNMH, hombre, grupo focal con funcionarios y funcionarias de la rama Judicial, 2015).

Esta situación ahondó la desconfianza frente al proceder de autoridades judiciales, al considerar que actuaban de una manera parcializada y humillante con las víctimas:

Nosotros somos vistos, los familiares de los desaparecidos o los que hemos estado en el movimiento social, como insurgentes. Otros que si no somos insurgentes somos los que los apoyamos y la fuerza pública también ha hecho ese eco y ha tenido —no solamente la fuerza pública sino las instituciones del Estado— una mirada de desprecio con los familiares de los desaparecidos. A nosotros nos miran diferente, nos miran con desprecio. El tema del trato no es un trato digno para una persona cuando va a reportar un desaparecido, siempre está el tema de: “¿Por qué no espera a que aparezca? ¿Será que está borracho? ¿Será que se fue con otra persona?”. Entonces ha sido también como eso lo que ha permitido [...] esa ha sido la excusa, la trampa que ha utilizado la Fiscalía también para permitirles a los que hacen las desapariciones, a los que generan las desapariciones ocultar el cuerpo (CNMH, hombre, taller de memoria con víctimas de desaparición forzada, 2015).

La debilidad del sistema de justicia y la corrupción de las instituciones estatales a través de su infiltración por parte de las estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo fragmentaron el ejercicio político de los organismos del Estado y, en ese sentido, se produjo más impunidad en el caso de las víctimas del conflicto armado.

Además de este constreñimiento de “lo político”, la disputa por el poder territorial y el control del orden público entre los diferentes actores armados conllevó un debilitamiento de las vías democráticas para la resolución de los conflictos y garantizar la no repetición de los hechos victimizantes. Algunos funcionarios y agentes de los organismos del Estado fueron cómplices en las violaciones a los derechos humanos, a través de acciones de hecho o por omisión, lo que generó desconfianza e incertidumbre en la sociedad civil. Esta situación se aunó a una crisis de la institucionalidad y, en últimas, ocasionó un daño directo a la relación entre el Estado y la sociedad civil.

4.7. Una ciudad en transformación

La cultura es probablemente la dimensión donde los impactos del conflicto armado se han expresado con más fuerza, pero, al tiempo, es la dimensión donde más fácilmente se diluyen, lo que hace más ardua su identificación. La cultura de la ciudad se transformó rápidamente desde la década de 1970 hasta los días presentes. Las violencias, las dinámicas y ese nuevo ambiente que produjo la agudización de la confrontación armada fueron determinantes en los rumbos que tomó el ambiente cultural de la ciudad frente a las transformaciones globales que ocurrían en el ámbito mundial. En ese sentido, es difícil reconocer los cambios en la cultura sólo desde la perspectiva de los daños, pues en realidad las transformaciones que se han dado en la cultura han sido el producto de muchos y muy distintos factores locales y globales, aunque con un peso importante del conflicto. En medio de esas transformaciones hay continuidades y discontinuidades entre “lo tradicional” y lo “nuevo”: algunos elementos preexistentes han sido

reapropiados, a la vez que se han inventado otros. Sin embargo, más allá de esta complejidad, los relatos acopiados para este informe identifican algunas líneas gruesas que permitirían hilar la trama de los impactos culturales producidos por las violencias asociadas al conflicto armado.

En los distintos espacios de participación que se convocaron en el marco de este proceso de reconstrucción de memoria histórica, las personas de muy distintas latitudes de la ciudad afirmaron con vehemencia que los impactos más profundos que ha dejado el conflicto en Medellín están en la cultura, en la forma en que las personas sienten, desean, piensan y valoran.

Para las personas de mayor edad, estos impactos culturales se notan especialmente en las generaciones que nacieron y crecieron desde los años ochenta hasta los años recientes. Según estas voces, los aspectos donde más se puede ver la influencia de las dinámicas y las violencias asociadas al conflicto armado son la exacerbación de algunos rasgos que producen y reproducen ciertas formas de desigualdad, como las de género y las de clase; la ruptura entre las aspiraciones materiales y las vías que se imaginan para lograrlas entre las generaciones anteriores a los años ochenta y quienes crecieron después de esa década; los nuevos referentes y “modelos de ser” para las personas jóvenes; y la transformación de los valores sociales y culturales que subyacen a la ética de amplios sectores de la ciudadanía.

La crisis económica y social del Medellín de los años setenta, marcada entre otras cosas por la presencia de una gran cantidad de jóvenes con pocos referentes y posibilidades, fue un escenario propicio para que la cultura que empezaba a configurarse en medio de las dinámicas del conflicto se instalara y expandiera rápidamente por la ciudad (Salazar y Jaramillo, 1992, páginas 105-127). El desarrollo de los grupos delincuenciales en los barrios, la llegada y emergencia posterior de grupos armados como las milicias y los paramilitares, y la expansión de las redes del narcotráfico en todas las capas sociales, dieron pie al surgimiento de un nuevo referente cultural, que no se percibía como algo lejano, sino que fue experimentado en la cercanía de la cotidianidad. En los barrios donde hicieron abiertamente presencia los grupos armados, la figura del hombre armado se convirtió en un modelo a seguir para los jóvenes y con él se instalaron en la subjetividad de los mismos nuevas aspiraciones, nuevos deseos, al tiempo que aparecían nuevos valores y se reinterpretaban otros (Ortiz, 1991). En palabras de una mujer que ha liderado procesos culturales en la ciudad y quien participó de este informe, “hay un daño en la manera de desear, como diría Estanislao Zuleta, porque lo que se desea es material, lo que se desea es abundancia, lo que se desea puede conseguirse de cualquier manera” (CNMH, entrevista con mujer dinamizadora de procesos culturales, 2016).

De esta manera se instaló lo que en diversos espacios de memoria las personas nombraron una “cultura del dinero fácil”, donde el trabajo como valor, que según las narrativas de las personas era constitutivo de la cultura campesina, se vio opacado por el mandato de “conseguir plata a como dé lugar”, o como lo decían en un taller de memoria: “se mutó la mentalidad de los jóvenes al dinero fácil”. La emergencia de esa cultura es descrita en los siguientes términos por uno de los participantes:

Porque recordemos que aquí toda la vida en Guayaquil hubo los “malevos”, atracadores y todo, pero con Pablo Escobar se creó la cultura del dinero fácil y yo creo que desde ahí empieza la gran descomposición, con esas grandes organizaciones criminales que sacaron a los pelaos de las comunas de Medellín o de toda parte, porque no fue solamente de las comunas de Medellín, fue de toda parte (CNMH, hombre, taller de memoria con funcionarios judiciales, 2015).

Esta cultura del dinero fácil aparece como un factor explicativo importante y en relación con lo que se considera una mentalidad propia de los antioqueños:

Los habitantes de esta ciudad son muy propensos al dinero fácil, o sea, esta ha sido una ciudad donde la gente le ha gustado mucho hacer fortuna. Entonces desde el siglo XIX viene esa mentalidad, ¿cierto?, y se dice siempre que la cultura paisa es echada pa’ delante, que es una verraca pa’ los negocios. Entonces ahí está como el caldo de cultivo para que acá los narcos hicieran como su nicho, porque es una ciudad en donde la gente quiere todo rápido (CNMH, hombre, taller de memoria con educadores, 2015).

Sin embargo, analistas como Gustavo Duncan han llamado la atención sobre el hecho de que este elemento cultural preexistente en Medellín no es suficiente para explicar el nivel de incorporación de los nuevos valores que emergieron en la cultura de la ciudad. Siguiendo su perspectiva, uno de los elementos centrales en la transformación cultural de Medellín consistió en la eficacia con que las redes del narcotráfico lograron instaurarse en una sociedad caracterizada por la valoración de la infracción a las normas —recuérdese ese dicho antioqueño que reza “la plata, tuya o ajena, pero que no falte”— y por la existencia de redes clientelares tradicionales fundamentadas en marcadas jerarquías sociales y en relaciones económicas que tenían “unos niveles mínimos de desarrollo de las relaciones capitalistas entre los sectores populares”. En palabras de Duncan, “La diferencia de los antioqueños con el resto de Colombia no estuvo entonces en la cultura de violación de las normas sino en que este rasgo cultural estuvo acompañado de un mínimo de sentido comercial y de relaciones monetarizadas en las clases bajas” (2011, página 184).

Así, las historias de amigos y familiares que se vincularon a los mercados que giraban en torno a los grupos armados ilegales se hicieron cada vez más frecuentes después de los años ochenta. En estos mercados se podía conseguir altas sumas de dinero en poco tiempo, pero poniendo siempre en riesgo la vida y la libertad. Las imágenes de hombres multimillonarios, con poder, armados, rodeados de mujeres y lujos ostentosos se instauraron como modelo en el diario vivir de los jóvenes. La figura del hombre fuerte, mujeriego y “sin miedo”, que reclamaba la vida de quien deseara, se volvió cada vez más un referente. Los medios de comunicación se apropiaron de estas imágenes y las hicieron masivas en sus programaciones, validando estos modelos en el imaginario colectivo. Estos referentes no sólo provinieron de los actores armados en conflicto, sino que también se producían y circulaban desde otros contextos a escala global.

Estas representaciones y los círculos sociales donde comenzaban a anclarse fueron experimentados por la juventud de la ciudad como un referente identitario a partir del cual dotaban de sentido sus experiencias de vida. En el corazón de estos nuevos nichos culturales se producían códigos, lenguajes y sistemas de valores que rápidamente se extendieron por la ciudad. Muchos jóvenes encontraron en estos grupos no sólo la promesa del “dinero fácil”, sino también una red de solidaridad e incluso afecto que en medio de la adversidad se hacía seductora.

Así, desde la mirada de algunas personas, los valores éticos se vieron trastocados: era más valorado tener dinero a cualquier costo que aspirar a estudiar —proyecto de vida que implica gran inversión de tiempo— o adoptar una vida laboral en el mercado formal donde, para la mayoría, era más lento y restringido el acceso a bienes de lujo. Así lo afirma una participante de un taller de memoria:

De pequeño nos vendieron la idea: hay que estudiar, hay que salir adelante y una mamá y un papá juntos que estuvieron ahí dando la pelea hasta que lo sacaron a uno adelante. En cambio ahora reinan los antivalores que se volvieron moda, entonces sea ventajoso, ponga la zancadilla, la hipocresía, el afán de consumo, o sea, los antivalores están rampantes (CNMH, mujer, taller de memoria con educadores, 2015).

La valoración de los capitales culturales que se podían adquirir a través de la educación y la formación se vio desplazada por el consumo desmedido y la hipervaloración del capital económico (Duncan, 2011, página 164). Esta promesa del dinero fácil no atrajo sólo a quienes “no tenían nada”, ni estos modelos se restringieron a los barrios periféricos de la ciudad, sino que fueron también adoptados por personas de los sectores medios y de las elites de la ciudad. Una importante cantidad de jóvenes se vieron seducidos por la aspiración de encarnar esos nuevos valores, materializados en el reconocimiento del estatus por parte de sus pares a partir de la

tenencia de un carro de lujo, una moto de alto cilindraje o de ser pareja o amigo/a de quien lo tuviera.

Esta matriz cultural naciente reforzó estructuras sociales desiguales que preexistían en la ciudad y en el país. Las desigualdades de género se hicieron más profundas. En estos modelos culturales emergentes, las diferencias materiales y simbólicas entre hombres y mujeres se hicieron más evidentes, el modelo dicotómico del hombre violento y con dinero frente a la de la mujer débil, bella y sin autonomía ganó una amplia acogida en la sociedad. Los parámetros para las mujeres basados en la hiperbolización de sus atributos físicos se hicieron más fuertes, a la vez que aumentaban las violencias contra las mujeres que exigían autonomía sobre su cuerpo y que priorizaban los capitales sociales y culturales por encima de los capitales económicos y los atributos físicos (Arango Jaramillo, 1988).

La sanción social para los hombres y mujeres que se alejaron de este canon emergente se hizo más agresiva. Estos nuevos referentes no sólo ahondaron las representaciones hegemónicas entre hombres y mujeres, sino que también recrudecieron los imaginarios racistas, clasistas y heteronormativos en la ciudad. Como se vio en el apartado sobre estigmatización, el reforzamiento de la dicotomía masculinidad/feminidad conllevó mayor agresividad contra aquello que no encajaba en el modelo, como el caso de los hombres afeminados o las mujeres masculinizadas. También reforzaron la visión predominante de las personas pertenecientes a minorías raciales y sus tradiciones culturales como lo opuesto al ideal estético y material creciente, y, en medio de la hipervaloración del capital económico, las personas de pocos recursos fueron abiertamente denigradas.

En los distintos espacios convocados para este informe varias personas reiteraron también que una de las afectaciones más profundas en la cultura de la ciudad está relacionada con el “acostumbramiento” a la violencia o, como las personas lo nombran, la “naturalización de la violencia”. Sin embargo, tal como lo han hecho ver quienes se han dedicado a estudiar el fenómeno, hay que tener un especial cuidado con esta idea que en los estudios académicos ha sido nombrada comúnmente como la “banalización de la violencia”. Esta banalización, marcada por una total desacralización de la muerte, se ha puesto en evidencia en aquella generación que creció desde los años ochenta, especialmente entre aquellos que se vincularon directamente a las dinámicas de la guerra, como lo fueron los “sicarios” de La Terraza o del Cartel de Medellín, para quienes la vida se convirtió en un valor canjeable en medio de estas “subculturas” que se produjeron (Riaño, 2006).

Aun así, esta idea de la “banalización” no es en absoluto generalizable a la mayor parte de la población. Que amplios sectores de la ciudadanía guardaran silencio frente a las violencias no significó necesariamente una “banalización”. El ambiente de terror marcado por el miedo, la desconfianza y la amenaza generalizada de una violencia contra sí produjo que —en medio del replegamiento de la ciudadanía— se construyera un orden donde alzar la voz en defensa de alguien o en contra de la presencia y acciones de los grupos armados fuera suficiente motivo para que estos tomaran represalias. Así ocurrió en muchos casos en los que las personas fueron asesinadas por auxiliar a un vecino o intentar evitar que a un joven lo reclutaran.

Adicionalmente, a pesar de los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil y de organismos del Estado, como la Consejería Presidencial para Medellín, una amplia porción de la ciudadanía no contó con suficientes recursos disponibles para comprender el significado y la dimensión del conflicto armado local y nacional. En el marco de interpretación de la población no estaba la comprensión de los factores que subyacían a estas violencias. Al tiempo, circulaban ampliamente discursos que legitimaban las violencias y reproducían señalamientos estigmatizantes e imaginarios que pusieron el énfasis de la responsabilidad de lo que ocurría sobre las víctimas y no sobre los actores armados.

Como consecuencia de estas escasas comprensiones, es posible identificar en las voces de la ciudadanía dos grandes relatos o formas comunes a partir de las cuales se explican los hechos de violencia asociada al conflicto armado en la ciudad. La primera de ellas, la de las “víctimas inocentes”, es la narración que emerge cuando la ciudadanía hace afirmaciones tales como: “no sabemos por qué ocurrió, era un buen muchacho”, o “ella era muy juiciosa, no era brincona ni estaba por ahí en la calle”. De otro lado, está la explicación de las “víctimas culpables”, que emerge cuando la ciudadanía justifica la violencia por algún motivo a partir de afirmaciones tales como: “no se metía con nadie, pero se mantenía fumando marihuana” o “es que estaba dañando el barrio”.

La reproducción de estas argumentaciones explicativas ha dificultado la comprensión social y cultural del conflicto porque ha invertido la carga de la responsabilidad quitándosela a quienes han perpetrado la violencia y endosándosela a las víctimas, legitimando así las violencias y las dinámicas mismas del conflicto armado. De tal modo, en gran parte de la ciudadanía se instaló la idea de que algunas vidas importaban más que otras. Algunas violencias fueron repudiadas, pero otras fueron legitimadas de manera tácita. El criterio para que unas vidas importaran y otras no guardó estrecha relación con los imaginarios sociales preexistentes sobre ciertos territorios o personas —como el rechazo de las comunidades a personas de los sectores sociales LGBTI, a líderes y lideresas de líneas políticas no tradicionales, a las mujeres que defendían la libertad y la

autonomía frente a su sexualidad o a quienes consumían drogas de uso ilícito— y con la estigmatización que actores armados ilegales, medios de comunicación, organismos de seguridad e instituciones del Estado han proyectado sobre algunas comunidades y sectores sociales en la ciudad. Un ejemplo de esto han sido las acusaciones públicas y los señalamientos que se han dirigido en contra de organizaciones cívicas, políticas y sociales.

En medio de este entramado se produjo en la ciudad una tendencia a habituarse a la violencia que ha llevado a ver estos hechos como “normales” o inevitables, lo cual ha sido ampliamente denunciado por sectores de la sociedad civil, entre ellos intelectuales locales y artistas, quienes han buscado narrar la crudeza del conflicto, al tiempo que buscaban enfrentar las imágenes reduccionistas y estigmatizantes que sobre la ciudad se construyó, por ejemplo, en los medios de comunicación. Este fue el caso de personas como Ehter Gilmour, Víctor Gaviria, Libia Posada o Jesús Abad Colorado (Giraldo, 2016). Lo que obras como las suyas o las acciones políticas que desde distintos territorios se lideraron dejaron ver es que en medio de ese acostumbramiento no dejó de existir un cierto grado de conmoción frente a la violencia por parte de un vasto sector de la ciudadanía.

Medellín es una ciudad en la cual se pueden apreciar los múltiples impactos generados por el conflicto armado en el contexto urbano y que no sólo atañen a sectores sociales y territorios más directamente afectados por la presencia y las acciones de los actores armados sino al conjunto de la sociedad. Todas las dimensiones que soportan la vida íntima, familiar, social, política, cultural y productiva se vieron severamente afectadas, así como la posibilidad de disfrute de la ciudad y el ejercicio de los derechos de libre expresión, movilidad y participación política. Las múltiples pérdidas dieron lugar a una variada gama de reacciones, miedo, rabia, dolor, desconfianza; sin embargo, no tuvieron un efecto paralizante y se convirtieron en un factor que sirvió de acicate para sobreponerse a la adversidad y construir variadas formas de respuesta, aspecto del cual se dará cuenta a profundidad en el siguiente capítulo.

5. Memorias de resistencia y sobrevivencia

Por muchos años prevaleció en la memoria de los habitantes de la ciudad y del país el relato sobre las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín. No obstante, al mismo tiempo, pero de modo menos visible, se construía el relato de las resistencias. Si bien algunos habitantes de la ciudad fueron indiferentes, indolentes, temerosos e incluso hubo quien fue oportunista frente a las complejas situaciones que en el marco del conflicto armado vivían buena parte de los habitantes de Medellín, otros encontraron la forma de hacer sus vidas, proteger a sus familias y vecinos, relacionarse con los actores armados, comprender su entorno y saber cómo hacer las cosas para no correr riesgos; organizarse para sobreponerse al miedo, para ocupar los espacios que la guerra pretendía cooptar; utilizar todos los recursos disponibles para hacerle frente a la violencia, decir lo que pensaban, proponer alternativas, denunciar. En últimas, para sobrevivir y resistir.

En este capítulo se abordarán las memorias de resistencia y sobrevivencia de los habitantes de Medellín; se mostrarán algunas de las formas como los sujetos padecieron las violencias, pero también, cómo las enfrentaron, evadieron, negociaron para sobrellevarlas, adaptarse, y redefinir órdenes, relaciones y estructuras sociales (Ortega Martínez, 2008; Uribe de Hincapié, 2006). Es preciso resaltar lo profuso de las acciones, organizaciones, iniciativas y procesos que han existido en la ciudad. La ciudad resistió y sobrevivió porque sujetos, comunidades y colectivos se organizaron, por su capacidad para comprender su entorno, trabajar juntos y superar sentimientos como el miedo, la angustia y la desesperanza. En la ciudad se dio una confluencia de acciones individuales, de organizaciones sociales y respuestas institucionales que permitió encontrar salidas a momentos de crisis. Fue también central la participación de agencias de cooperación internacional, como veremos más adelante y como se mostró en los capítulos anteriores.

Se parte del supuesto de que los sujetos tienen capacidad de agencia, es decir, la capacidad y la posibilidad de maniobra y transformación de las condiciones del contexto¹⁵⁵. Queremos resaltar, primero, el carácter intersubjetivo de los procesos sociales y, segundo, la capacidad-posibilidad de los actores individuales y colectivos de producir efectos y modificaciones de contextos

¹⁵⁵ La categoría de agencia la retomamos del análisis que para el caso colombiano hacen García, Guzmán y otros (2014). Según los autores, el concepto *agencia* incorpora hábitos, elementos y recursos del pasado, formas de hacer las cosas; pero también una orientación hacia el futuro, identificar nuevos sentidos, resignificar experiencias, crear soluciones novedosas para responder a demandas y contingencias, reflexionar comparativa e históricamente sobre las problemáticas. De este modo los autores se distancian de las condiciones binarias de obediencia/desobediencia, cooperación/no cooperación, para centrarse en el concepto de agencia que permite entender las variadas posiciones que los sujetos pueden asumir respecto a los patrones de acción y pensamiento y a las capacidades de maniobrabilidad y transformación de las condiciones del contexto (página 6).

coercitivos y de violencia mediante el despliegue de diversas prácticas (García y otros, 2014, página 10). Dentro de la investigación se analizarán dos modalidades de agencia: la resistencia y la sobrevivencia, que pueden presentarse de manera combinada o diferenciada.

Por repertorio de resistencia se entiende aquí aquellas acciones de oposición, confrontación, inconformidad por parte de sujetos y colectivos, frente a estrategias de dominación de grupos armados relacionados con el conflicto armado, que involucran prácticas prioritariamente no violentas (García y otros, 2014, página 11). Una lucha sin armas que supone un aprendizaje y una conciencia del riesgo. Por ello la resistencia cobra importancia en las organizaciones sociales a la luz de ciertos ideales de ciudadanos que se asumen como sujetos de derecho. En este contexto ganan importancia el recurso de la palabra y el uso de prácticas convencionales como las marchas, los plantones, las huelgas, pero también otras más sorprendentes, creativas y simbólicas (Osorio, 2001, página 71). También se entiende el concepto de acciones de resistencia como aquellas prácticas que buscan restituir, de alguna forma, la cotidianidad de los lugares, la “normalidad”, esto es, la posibilidad de existencia por fuera del marco de orden que se pretende implantar.

Pero la guerra y la violencia asociada a ella imponen, más allá de la resistencia, unas prácticas de sobrevivencia en las que las negociaciones, los cruces, los acuerdos contingentes, los pactos y las alianzas transitorias resultan ser muy eficaces para protegerse, mantenerse con vida y poner algunos límites a las acciones de los grupos armados (Uribe de Hincapié, 2006). Por repertorio de modos de sobrevivencia se entienden aquellas formas de hacer “algo”, procedimientos silenciosos usados cuando la situación no favorece el uso de interpelaciones abiertas o de acciones colectivas públicas de rechazo. En tales situaciones los ciudadanos apelan a prácticas de sobrevivencia que no llaman la atención de quien ostenta el poder, pero que logran hacer más fácil el día a día. Este tipo de acciones no son visibles y pasan desapercibidas por mucho tiempo, pero en el relato de los habitantes de la ciudad estas emergen con fuerza pues encontraron formas de sobrevivir y de resistir, fracturando por lo bajo las estructuras de dominación de los actores armados.

No quiere decir esto que haya una separación clara entre acciones de resistencia y sobrevivencia. Ambas coexisten, se relacionan y sus fronteras son porosas. Tampoco que sea más importante una que la otra o que deba darse una secuencia predeterminada. Serán el contexto y las posibilidades de acción de los pobladores los que determinen el recurso a una u otra. Centrar la atención en el repertorio de resistencias y sobrevivencia permite indagar por la astucia, la creatividad, la diversidad de las prácticas cotidianas de los sujetos frente al conflicto. Estas

acciones dan luces para responder a la pregunta de por qué los habitantes de Medellín no sucumbieron ante la violencia asociada al conflicto armado.

En cuanto a las acciones colectivas de resistencia es posible caracterizar tres períodos: el primero va de 1982 a 1994 y está marcado por acciones colectivas orientadas a la defensa de los derechos humanos y el derecho a la vida. En el segundo, 1995-2005, las víctimas irrumpen en el espacio público, haciendo evidentes los daños y las pérdidas que el conflicto armado les había provocado y reclamando por políticas públicas de atención a esta población. En el tercero, 2006-2014, aumentan las iniciativas de memoria como eje de resistencia frente a la pretensión de olvido. Este último período se destaca por la consolidación de las organizaciones sociales, sus denuncias sobre los daños causados por la guerra y la exigencia de justicia y reconocimiento de ese daño.

En segunda instancia se abordarán las formas de sobrevivencia y resistencia en lo cotidiano, el día a día de los pobladores, pequeñas e invisibles formas con las que los ciudadanos lograron mantenerse con vida, recuperar su dignidad y sobreponerse al miedo.

5.1. Por la defensa de los derechos humanos y el derecho a la vida: 1982-1994

Durante este período se presentaron acciones colectivas de denuncia y resistencia frente a la violencia política del Estado y los grupos paramilitares. En medio de uno de los momentos más aciagos de la historia de la ciudad surgieron organizaciones sociales y culturales importantes que tendrían un fuerte protagonismo en el período siguiente. Las acciones ciudadanas demandaban la defensa de la vida y la necesidad de establecer un pacto social que pusiera fin a la violencia que la ciudad vivía.

5.1.1. La defensa de los derechos humanos como resistencia frente a la violencia política

La mayoría de las acciones registradas en este momento están asociadas a la violencia política, el exterminio de la Unión Patriótica (UP), la desaparición forzada y el asesinato de sindicalistas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. Sus protagonistas son las organizaciones de derechos humanos y en particular el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. El sentido de las acciones era la defensa de los derechos humanos, pero este discurso fue estigmatizado y asociado con la izquierda armada, lo que generó a su vez asesinatos, amenazas y desapariciones hacia aquellos que promulgaban estas denuncias de violaciones de los derechos humanos: “Lo cierto del caso es que en todos los ires y venires, quienes teníamos cierta

convicción sobre los derechos humanos empezamos a ser señalados por la fuerza pública como guerrilleros” (CNMH, Grupo Focal Defensores de Derechos Humanos, hombre, Medellín, 2015).

En los testimonios son repetidas las referencias a la “guerra sucia” que marcó a los movimientos sociales y comunitarios. Esta condujo a la disminución, neutralización y al cambio en su repertorio de acciones, especialmente hacia aquellos orientados a hacerse menos visibles y camuflarse. En particular, obligó a desplegar un nuevo discurso público de lucha que dejó de ser reivindicativo y contra estatal para asumir la forma de un discurso en pro de los derechos humanos, bajo el supuesto de que así estarían más protegidos:

Esa coyuntura de los ochenta hace emerger una cantidad de grupos que ya se denominaban defensores de derechos humanos, que eran la única forma de actuar en política, eso nos permitía hacer relaciones internacionales, reunirnos con el alcalde, etc. Con esto el movimiento social encontró una forma de hacer unas jugadas (CNMH, grupo focal defensores de derechos humanos, hombre, Medellín, 2015).

Pero el discurso público sobre los derechos humanos también provocó discusiones en las organizaciones sociales en torno a cuál era su alcance y su nivel de compromiso:

El tema de los derechos humanos lleva a un fuerte debate en la ciudad en relación con quiénes eran los responsables de esas violaciones, si era sólo el Estado o si había otros responsables. Esos debates tenían que ver con lo siguiente: lo primero, sobre quién viola los derechos humanos y estoy hablando de la década de los ochenta. Hay una respuesta inmediata: el Estado, el Estado es el único que viola los derechos humanos, pero alguien dijo: el Estado es el principal violador pero no el único, los particulares también violan los derechos. [...] Y entonces aquí aparece el debate sobre la dimensión jurídica de los derechos humanos y luego la dimensión ética de los derechos humanos. Todo ese debate se movía mucho ya no sólo en las organizaciones de derechos humanos sino también en las organizaciones no gubernamentales, o sea, ya se movía ese debate en el IPC, en la Escuela Nacional Sindical, en el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, a nivel nacional el CINEP, el Comité Permanente de Derechos Humanos (CNMH, entrevista, hombre, defensor de derechos humanos, Medellín, 2015).

En este escenario cobró protagonismo el papel desempeñado por el Comité de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH), presidido por Héctor Abad Gómez. El Comité se preocupó por el creciente número de asesinatos y desapariciones forzadas que se registraban en Medellín, denunciaba públicamente las múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, pero también las acciones de los grupos paramilitares y sus vínculos con otros sectores de la sociedad.

El CDDH lideró diferentes acciones orientadas a despertar debates y a concientizar a la ciudadanía acerca de lo que estaba pasando. En sus columnas de opinión en el periódico *El Mundo* Héctor Abad Gómez y Alberto Aguirre señalaban las violaciones a los derechos humanos que sucedían en Medellín y en el departamento, responsabilizaban al Ejército y los grupos paramilitares, pero también a la guerrilla de las acciones contra la población civil. Para lograr que el tema de la desaparición forzada y la violencia política fuera visible, el Comité organizó eventos en la ciudad, ejemplos de ellos fueron el primer Foro Nacional por los Desaparecidos y la conmemoración del primer aniversario de los acontecimientos ocurridos en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1986.

La UP, apoyada por el CDDH, lideró manifestaciones en contra de la violencia política y el asesinato de sus integrantes. El 12 de septiembre de 1986, la UP convocó a la jornada Canto a la Vida por la Paz y veinte mil personas se unieron a la marcha. Días después, el 29 de septiembre, la coordinación departamental de la UP convocó al CDDH y a otros sectores de la ciudad al Gran Acto de Convergencia por el Derecho a la Vida que se realizó en el Parque de Berrío.

Entre 1984 y 1986 es necesario destacar dos acciones realizadas por iniciativa de familiares de víctimas de desaparición forzada. Se nombran, no porque sean los únicos, sino por haber sido representativos de un sector de la población que, sin tener ningún vínculo con organizaciones de defensa de los derechos humanos y ninguna experiencia en el trabajo político, buscaron apoyo en estas organizaciones para denunciar la desaparición de sus hijos; usaron un repertorio de acciones novedoso para denunciar los hechos y darle visibilidad a una práctica que pasaba desapercibida para la sociedad. Nos referimos a doña Fabiola Lalinde y su operación Sirirí y al colectivo Los Amigos de José Mejía.

Fernando Lalinde, estudiante de último semestre de Sociología en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y miembro del PCML fue desaparecido por el Ejército en octubre de 1984. Doña Fabiola, madre de Luis Fernando, en compañía de sus hijos, se dio a la tarea de averiguar qué había pasado con Luis Fernando. Es así como empezó lo que posteriormente se denominaría la operación Sirirí: “Los militares hicieron la operación Cuervos para desaparecer a Luis, entonces yo me inventé mi propia operación. De niña, mi papá me decía que yo era un Sirirí y cuando le pregunté el significado, me respondió que era un pájaro muy insistente que defendía a sus crías de los cuervos sin matarlos” (Verdad Abierta, 2015). La estrategia de Doña Fabiola consistió en persistir en su propósito hasta encontrarlo: envió cartas, comunicados, participó en foros, reuniones, denunció públicamente en instancias locales, nacionales e internacionales. No sólo para saber qué había pasado con su hijo, sino también para hablar sobre un delito, la desaparición forzada, del que poco se sabía y que era permanentemente ignorado por las

autoridades y por la sociedad. Tal vez el resultado más elocuente de ese esfuerzo fue su archivo, donde ella recopiló a lo largo de años los documentos que salieron a la luz durante la lucha por encontrar a su hijo y que hoy es no sólo en un archivo de derechos humanos protegido por el Centro Nacional de Memoria Histórica y su Dirección de Archivos de Derechos Humanos, sino que además fue incluido por la Unesco en el registro regional del programa Memoria del Mundo.



Después de 23 años Fabiola Lalinde regresa a la vereda Verdún, Antioquia, para visitar el lugar donde fue visto por última vez su hijo Luis Fernando Lalinde Lalinde. Jardín, Antioquia, 2015. Fotografía: María Paula Durán para el CNMH.

El colectivo Los Amigos de José Mejía se creó luego de que el estudiante de Economía de la Universidad de Antioquia del mismo nombre desapareciera el 8 de febrero de 1986. Los Amigos de José Mejía, para llamar la atención sobre su desaparición, lanzaron una campaña cuyo título era: “Que aparezca vivo mi amigo José Mejía, desaparecido el ocho de febrero”. En un comunicado público afirmaban:

No desconocemos que esta desaparición está inserta en un problema social general que día a día se agrava y por lo tanto llamamos a los demás familiares y amigos de los desaparecidos a que enarbolan sus nombres y acompañen sus campañas con las nuestras. No somos una organización política, somos un grupo amplio que trata, en torno a un problema, articular infinidad de sentimientos acumulados de dolor por las injusticias en nuestro país (comité Los Amigos de José Mejía, 1986)

Afirmar que no eran una organización política era una forma de protección frente a los señalamientos y la estigmatización de los defensores de los derechos humanos, a la vez que lograba movilizar los sentimientos de solidaridad, compasión y empatía. Esta acción quería destacar los vínculos familiares y de amistad de José Mejía, mostrándolo como una persona

cualquiera, con vínculos, con afectos. Según un testimonio, el trabajo del grupo Los Amigos de José Mejía animó a otras personas que tenían familiares desaparecidos a unirse para denunciar:

A raíz de esa desaparición de José Mejía se formó este grupo de Los Amigos de José y en torno a esto se fue como aglutinando un gran movimiento, muy acelerado, muy rápido, para trabajar el tema de los desaparecidos. [...] Fue un proceso de recopilar y recoger rápido los desaparecidos que habían, algunos todavía del setenta, parte de lo que había en los ochenta que no estaban digamos muy documentados, ni asociados, ni agremiados, pues no había como una agremiación en Medellín que permitiera esto. Este movimiento, que se empezó a generar a principios del año 86, permitió la llegada y la confluencia de muchas personas, muchos familiares, muchos procesos, muchas historias de desaparecidos que llegaron allí y muchas organizaciones que se comenzaron a aglutinar en torno a esto: el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, muchos sindicatos. El movimiento estudiantil estuvo muy pendiente como de todo el proceso, el movimiento artístico y cultural de la época estuvo muy activo porque además a ellos les golpearon mucho. [...] La desaparición de José que fue un caso de esos emblemáticos que se tomó como bandera, pero eso lo que permitió era que afloraran otra historias y poder conocer y abrir ventanas para que mucha gente pudiera también mostrar sus casos (CNMH, grupo focal desaparecidos, hombre, Medellín, 2015).

En 1987 se presentaron manifestaciones en el centro de la ciudad reclamando por las personas desaparecidas. Una de las más recordadas fue la Marcha de los Claveles Rojos, realizada el 13 de agosto. Encabezaban la marcha Carlos Gaviria Díaz, Leonardo Betancur Taborda, Héctor Abad Gómez, Pedro Luis Valencia Giraldo. Detrás de ellos estaban los familiares de las personas desaparecidas y asesinadas portando carteles con las fotos y sus nombres.

El día posterior al asesinato de Luis Felipe Vélez Herrera, Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur Taborda, por lo menos cinco mil personas recorrieron las calles de Medellín desde el Paraninfo de la Universidad de Antioquia hasta el cementerio Campos de Paz para rendir el último homenaje a los líderes asesinados. El sindicato de profesores ADIDA declaró un paro de 72 horas, que rápidamente obtuvo apoyo nacional. Este hecho permanece en la memoria de los participantes en esta investigación. No obstante, no fue la única acción: durante todo 1987 los universitarios se manifestaron contra los asesinatos selectivos de estudiantes y profesores, las acciones fueron variadas e involucraron otros sectores de la población como los campesinos y los obreros¹⁵⁶.

¹⁵⁶ Entre las acciones realizadas para denunciar los asesinatos de profesores y estudiantes de la Universidad, destacamos la toma del bloque administrativo de la Universidad de Antioquia; la declaración de huelga de hambre para protestar contra la ola de crímenes que azotaba la Universidad; la toma, el 18 de agosto, de la Catedral Metropolitana y el 24 de agosto del claustro universitario y posteriormente del edificio de la Procuraduría.

Pero no fueron sólo los sindicalistas y estudiantes: en el barrio La Floresta se realizó una marcha del silencio contra la violencia. También el 25 de octubre de 1987, muchos medellinenses participaron del primer Carnaval Contra el Miedo y la Violencia convocado por habitantes de la ciudad dedicados a disciplinas afines al arte. El Parque Berrío se llenó con aproximadamente dos mil personas que, con sus caras pintadas o disfrazados, entonaron un canto que afirmaba “viva la vida” (*El Tiempo*, 25 de octubre de 1987).

A pesar de las movilizaciones de ese año quedó en la memoria de un sector importante de los habitantes de la ciudad la percepción de que con el asesinato de Héctor Abad Gómez se había llegado a un límite de lo posible. Ese hecho significaba el inicio de otro momento, marcado por la desesperanza y el miedo:

Lo de Héctor Abad Gómez marca un tránsito a otra cosa, es ya la juntura de todas esas estructuras de narcotráfico con las autodefensas del Magdalena Medio, eso se estaba dirigiendo desde aquí. Y lo de Héctor Abad ya son las fuerzas del narcotráfico y paramilitares en asociación con otras fuerzas del Estado, seguramente para producir esos efectos, eso fue un crimen político. A mí me tocó el tránsito de que la violencia pasara de las páginas rojas y judiciales a las páginas políticas y de derechos humanos (CNMH, grupo focal creadores, hombre, periodista, Medellín, 2015).

Los asesinatos de estas personas marcaron un punto de quiebre y no retorno, no sólo por la conciencia del riesgo “si mataron a Héctor Abad, pueden matar a cualquiera” (CNMH, taller mayores de 40 años, mujer, Medellín, 2015), sino también porque significó un resquebrajamiento del movimiento político, un temor de actuar en lo público y desesperanza frente al futuro. La sensación de que ya todo estaba perdido.

Para mí un punto de inflexión ahí es la muerte de Héctor Abad, o sea es como quién dice: le vamos a dar no solamente a los líderes de los movimientos sociales guerrilleros, si no que le vamos a dar también a quienes los defiendan. Y ese golpe al Comité Permanente a mí me significó como un campanazo, o sea, estamos en guerra, fue como lo que yo sentí (CNMH, grupo focal defensores de derechos humanos, hombre, Medellín, 2015).

El miedo y la zozobra se impusieron en la ciudad. El contexto de violencia generalizada e indiscriminada hizo difícil definir de dónde podía provenir el peligro, frente a quién hacer resistencia. El uso del terror para intimidar fue trágicamente eficaz. El conflicto armado además dificultaba expresiones políticas y movimientos sociales autónomos. Pero como veremos más adelante, las personas encontraron la forma de recuperar los espacios a la guerra.

5.1.2. Construcción colectiva de un pacto social para buscar alternativas para la ciudad

Los primeros años de la década de los noventa parecían el punto máximo de violencia. La magnitud de los problemas que enfrentaba la ciudad y las presiones ejercidas por diversos sectores civiles que criticaban la respuesta del Gobierno, enfocada en las acciones represivas y punitivas, llevaron a que finalmente se pensarán estrategias para intervenir con un enfoque integral. En este contexto, el Gobierno creó, mediante el Decreto 1875 del 17 de agosto de 1990, la Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana.

Para algunos de los entrevistados el aporte fundamental de la Consejería y sus programas fue crear un espacio público donde la participación ciudadana fuera el eje. Inició entonces lo que según estos significó “la construcción de lo público en la ciudad” (CNMH, entrevista, hombre, directivo de ONG, Medellín, 2016).

En febrero de 1991 fueron convocados los foros comunales. La convocatoria fue amplia y sin distinciones a grupos o líderes sociales; al llamado acudieron más de mil personas y cerca de 435 organizaciones sociales de las distintas comunas y municipios del Área Metropolitana. En los foros se debatían los problemas locales, sectoriales y de ciudad, los habitantes de los diferentes territorios pudieron intercambiar sus experiencias, descubrir otros lugares de la ciudad y problemas que eran comunes a todos o específicos de ciertos sectores; allí se discutieron las alternativas de futuro para Medellín de acuerdo con la visión de los pobladores. (Camacho, 1992)¹⁵⁷.

¹⁵⁷ Como resultado de los foros se redactó un documento titulado “Propuestas de Futuro para Medellín visión de sus pobladores”. Entre los participantes a los foros, se eligieron 60 representantes encargados de elaborar un documento que debía retomar los 712 proyectos presentados para agruparlos y seleccionarlos. Finalmente, en el texto se plasman 59 propuestas, con las cuales se formuló el texto a partir del cual se estructuró el proceso del pacto social. En ese documento se especifican seis áreas de acción: empleo e ingresos; vivienda y espacio público; salud y medio ambiente; educación y cultura; recreación y deporte; características de la organización comunitaria (Camacho, 1992).



Visita de María Emma Mejía, consejera presidencial para Medellín, a la comuna nororiental, 1992. Fuente: archivo Corporación Región.

Este espacio público de debate y deliberación sobre el futuro de la ciudad dio como resultado la idea de generar un “pacto social”. La instalación en septiembre de 1991 del I Seminario Alternativas de Futuro para Medellín y su Área Metropolitana significó, en palabras de María Emma Mejía, “el destape de una ciudad desconocida, que ha permitido en cierta medida el descubrimiento mutuo y público, entre los diferentes actores de la sociedad –los desconocidos y los anónimos– siguen su camino hacia la formulación de un verdadero pacto social” (Camacho, 1992, página 10).

El Seminario Medellín Alternativas de Futuro, en sus cuatro versiones, se transformó en un gran evento de ciudad, como bien lo expresó María Teresa Uribe:

Todos estaban allí, aún fragmentados y atomizados, dueños de sus miedos y de sus fantasías, de sus reclamos y de sus justificaciones, de sus terrores y recelos, pero confundidos en un propósito común: buscarle alternativas de futuro a una ciudad doliente y estigmatizada, después de décadas de oscuridad y silencio. Llegaron de todos los rincones de la ciudad, llevando auestas el fardo del dolor, muerte y resentimiento que han dejado en todos los sectores sociales los recientes años de violencia, pero dispuestos a escucharse (Uribe, 1992. Página 12).

Estas palabras resumen lo que significó la celebración del primer Seminario: la posibilidad de crear un espacio para el debate de lo público, para encontrar conjuntamente salidas a la situación de violencia indiscriminada que vivía Medellín. El Estado, los ciudadanos y los representantes de las organizaciones sociales se unieron como interlocutores válidos para pensar la ciudad, hacer un diagnóstico de la crisis y buscar soluciones. Como afirmó uno de nuestros entrevistados, si en

los años ochenta la lucha era “contra el Estado”, la época de la Constitución del 91 y la Consejería les mostró que se podía trabajar “con el Estado”:

Los años ochenta era una mentalidad contra el Estado, era una lucha contra el Estado [...]. Y al aire de la Constitución del 91, el asesoramiento de la Consejería Presidencial nos llevó a otro escenario que es con el Estado: venga pues concertemos el desarrollo con el Estado. Claro, una coyuntura para nosotros especialmente favorable porque la Consejería encuentra una comunidad organizada con una propuesta de intervención integral en el centro del barrio que le sirviera a toda la comunidad y era una propuesta, entonces ellos la asumen y coinciden con la concesión de Núcleos de Vida Ciudadana y hacen una inversión grande y ahí nos encontramos con la nororiental y con otras comunas donde también había inversión, etc. Muy ligero nos damos cuenta que realmente si no tenemos una incidencia en el poder del Estado la inversión no tiene continuidad, desaparece la Consejería y la Alcaldía no asume y abandona los espacios incluso, o sea muchos de los espacios fueron abandonados todavía hoy (CNMH, entrevista, hombre, líder comunitario, 2016).

Como lo afirmaba uno de los coordinadores de los foros, en ellos se pusieron en diálogo los diversos saberes: el saber académico de las universidades, el saber técnico de los funcionarios del Estado y el saber popular que la gente, los grupos, y las comunidades habían construido a lo largo de décadas de resolver, a través de convites y formas organizativas, sus más inmediatas necesidades colectivas. Al mismo tiempo, asuntos que hasta entonces se decidían en las oficinas de funcionarios o de agentes concretos del Gobierno con especialistas, como el tema de la seguridad, pasaron a ser discutidos en los foros, es decir, se volvieron temas de ciudad: “Y aquí lo volvimos un problema público, la seguridad como un problema y una cuestión pública, entonces la gente en los barrios opinaba sobre el problema, las organizaciones sociales, académicas” (CNMH, entrevista, hombre, directivo ONG, Medellín, 2016).

Entre los programas¹⁵⁸ que se ejecutaron durante ese primer año de la Consejería estaban los Núcleos de Vida Ciudadana, los proyectos de Inversión Semilla, el programa de Mejoramiento de Barrios Subnormales, los programa de Empleo para Jóvenes. Según uno de nuestros entrevistados “lo que pretendían esos programas era generar dinámicas urbanas que promovieran la convivencia, atendieran los problemas de injusticias social y la inclusión” (CNMH, entrevista, hombre, funcionario de la Consejería, Medellín, 2016).

¹⁵⁸ Para la implementación de los programas se invitaron a las comunidades a participar en talleres donde le fueron consultadas sus opiniones, a partir del conocimiento de su propio territorio, analizando conjuntamente las estructuras existentes, los espacios, las actividades que cotidianamente se realizaban e identificando ellos mismos sus carencias y necesidades. Los proyectos fueron evaluados en términos de viabilidad y prioridad y finalmente aprobados por la Consejería, la Alcaldía y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

¿Por qué la Consejería tuvo ese impacto sobre la ciudad? ¿Por qué aún hoy es posible identificarlo como un hito de memoria que surge con frecuencia en los relatos de los pobladores de Medellín? En palabras de uno de nuestros entrevistados: “La Consejería como tal tiene ese impacto gracias a que establece una llave con las organizaciones de la sociedad civil” (CNMH, entrevista, hombre, directivo ONG, Medellín, 2016). Según Gerard Martin (2012), la Consejería no sólo puso a la ciudad a reflexionar sobre sí misma, sino que implementó nuevos modelos de gestión pública, donde los diagnósticos y la participación ciudadana fueron centrales.

Durante esos años, 1991 a 1994, los y las habitantes de Medellín buscaron formas de consenso, miraron su realidad para pensar un futuro posible y se propusieron realizar un “pacto social” para alcanzarlo. De hecho, las propuestas para la ciudad que surgieron de los foros, mesas, seminarios y demás espacios de debate y deliberación pública fueron las bases de lo que en 1996 sería el Plan Estratégico para Medellín¹⁵⁹.

5.1.3. La Mesa por la Vida y la Convivencia: “elegimos la vida”



Marcha por la Vida. Medellín, Plazuela Uribe Uribe, 1992. Fuente: archivo Corporación Región.

Uno de los eventos más dolorosos en la memoria de los habitantes de la ciudad fue la masacre de Villatina en 1992¹⁶⁰. La conmoción que provocó el hecho llevó a que varios sectores de la

¹⁵⁹ Sergio Naranjo, electo para la Alcaldía entre 1995 y 1997, propuso la elaboración de un Plan Estratégico para Medellín, asunto que ya se discutía en otras grandes urbes en el mundo como Barcelona, Porto Alegre y Bogotá. Pero lo que debemos destacar es que, si bien la elaboración del Plan Estratégico no fue un proceso tan participativo como el de la Consejería, sí retomó muchos de los proyectos, insumos y propuestas que allí se presentaron.

¹⁶⁰ Véase capítulo 3.

sociedad se reunieran para analizar lo que estaba pasando. El 19 de noviembre de 1992 se efectuó una reunión en la que participaron representantes de la Policía, el Ejército, la Consejería Presidencial para Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Procuraduría, el Comité de Derechos Humanos Héctor Abad Gómez y la Arquidiócesis de Medellín. El objetivo era promover en la ciudad una discusión sobre el derecho a la vida (*El Tiempo*, 2 de mayo de 1993). El 16 de diciembre se dio una nueva reunión liderada por la Arquidiócesis de Medellín en la que participaron más de 30 organizaciones sociales, ONG y representantes gubernamentales. Decidieron que su objetivo de trabajo era generar una “cultura de la vida” en Medellín y la convocatoria a una movilización ciudadana por el derecho a la vida.

En las reuniones era tan alto el nivel de participación¹⁶¹ que decidieron crear la Mesa de Trabajo por la Vida, liderada por monseñor Héctor Fabio Henao¹⁶². El objetivo fundamental de la Mesa era constituirse en un espacio de concertación y deliberación que permitiera diseñar estrategias para la convivencia pacífica en la ciudad y apoyar en la solución de los conflictos en los barrios de Medellín, así lo explica Hurtado (1996) en su análisis:

Para ello se hace una convocatoria a los distintos actores sociales y políticos y al Estado mismo, entidades con capacidad de decisión, de tal manera que se dé viabilidad y respuesta eficaz a los diferentes problemas planteados en la Mesa. Una de las características fundamentales de la Mesa es la pluralidad social, política y religiosa de sus miembros, allí se permite el intercambio de opiniones desde diversos puntos de vista (Hurtado, 1996, página 77).

La Mesa de Trabajo por la Vida desarrolló diversas acciones para sensibilizar sobre el valor de la vida, entre las que estuvieron la primera Fiesta por la Vida, que se realizó el 27 de febrero de 1993 en el Jardín Botánico y a la que asistieron habitantes de la zona nororiental. Posteriormente se realizaron en la zona noroccidental, Bello y Villatina. En total fueron nueve Fiestas por la Vida durante 1993. En ellas, además de conciertos, actividades, culturales, chirimías, mimos, comparsas y juegos deportivos, se realizaron foros sobre el derecho a la vida, talleres, un

¹⁶¹ A la Mesa asistían los representantes de Pastoral Social y de la Comisión de Justicia y Paz por parte de la Iglesia; la Consejería Presidencial para Medellín y el Área Metropolitana, la Secretaría de Gobierno Municipal, la Procuraduría Departamental, la Personería de Medellín y algunos miembros del Concejo de Medellín. Organizaciones como Asocomunal, la Corporación Región, ASFADDES, el Comité Permanente para los Derechos Humanos “Héctor Abad Gómez”, la Escuela Nacional Sindical, La Unión de Ciudadanas de Colombia y la Fundación Progresar; los gremios representado en la ANDI; líderes sociales, artistas y cineastas. Asociaciones y grupos juveniles, culturales, estudiantiles, comunales y barriales (Hurtado, D., 1996, página 77).

¹⁶² Desde 1992, antes de la masacre, la Iglesia había implementado una estrategia de inserción social en Medellín. El propósito era unir esfuerzos y recursos para brindar respuestas a los conflictos y retos de la ciudad, contribuir a la construcción de una sociedad más justa, pacífica y solidaria. En 1992 monseñor Héctor Rueda Hernández creó la Vicaría Episcopal para la Evangelización de lo Social y la Pastoral para la Promoción de los Derechos Humanos. La Iglesia se comprometía a generar procesos organizativos en las comunidades para la defensa de la vida y la dignidad del hombre; fomentar una cultura de la vida; capacitar a los sacerdotes de la parroquias y a los habitantes de los barrios en derechos humanos, respeto a la vida y convivencia pacífica; realizar campañas educativas por los medios de comunicación, entre otras actividades. (Hurtado, 1996).

plebiscito por la vida en la comuna 11, cabildos comunitarios por la paz y la convivencia, jornadas de ayuno por la paz y eucaristías y encuentros artísticos (Hurtado, 1996).

En 1994 se realizó la Semana por la Paz, de octubre 3 al 9, que incluyó fiestas comunitarias, cabildos comunitarios por la paz y la convivencia; jornada de ayuno por la paz, celebración litúrgica por la paz, la eucaristía y la oración para pedir el don de la paz. Encuentro de ciudadanos y líderes comunitarios por la paz con el objetivo de fortalecer los lazos de unión y compromiso.

La Mesa también intervino en la búsqueda de solución a los conflictos en diferentes barrios: Moravia, Trinidad, La Paralela, Alfonso López y Villatina. Participación en los procesos de paz con la Corriente de Renovación Socialista y con las Milicias Independientes del Valle de Aburrá; también como testigos en el compromiso con la paz entre las bandas de los barrios Santa Inés y las Granjas. Intervinieron en los problemas del Liceo Gilberto Alzate Avendaño, del Marco Fidel Suárez y de la Universidad de Antioquia; incluso en los problemas de los venteros ambulantes y estacionarios. Participaron en la Reunión de la Red Nacional por el Derecho a la Vida, convocada por la dirección de Iniciativas Nacionales contra la Guerra y por la Paz. En este evento se puso en evidencia que se habían instalado en todo el país varias mesas de trabajo por la vida, además, se planteó que se estaba dando inicio a un movimiento por la paz a nivel nacional que llegaría a ser fundamental en los siguientes años (Hurtado, 1996, página 86).



Pacto por la paz y la convivencia. Medellín, Barrio Villatina, 1993. Fuente: archivo Corporación Región.

5.1.4. Quitar espacios a la guerra y al miedo

A finales de la década de los ochenta e inicio de los noventa, en la ciudad, las comunas y sus barrios los jóvenes accedieron a la imagen mediática de una ciudad violenta a través de hechos atroces y espectaculares. El sicario se convirtió en un personaje de la mitología nacional y todos

los jóvenes habitantes de las laderas de la ciudad quedaron cobijados por este manto. La Medellín de estos años, urbanizada, conflictiva, en crisis, desbordada, se empezó a ver gracias al frenético relato de los medios de comunicación. En este contexto se entiende la importancia fundamental que tuvo en 1979 Helí Ramírez y su relato de una generación que había nacido “en medio de regueros de sangre”. Como afirma Giraldo (2016), el poeta Helí Ramírez le puso como nombre a su canto brutal “En la parte alta abajo” (1979) que era donde él estaba y soñaba y sobrevivía.

Por su parte, Víctor Gaviria y Alonso Salazar pusieron el dedo en la llaga y mostraron la cruda realidad en la película *Rodrigo D. no futuro* y el libro *No nacimos pa' semilla* (1990), ambos proporcionaron una mirada casi antropológica y documental de los jóvenes. Como afirma Gerard Martin estos exploraron “la fascinación por el sicario, su mundo, su religiosidad y su parlache”¹⁶³ (2012, página 269). La ciudad se debatía entre la atracción y el horror por las historias allí contadas.

Los jóvenes fueron también el objeto de análisis y reflexión para la academia, las ONG y la sociedad¹⁶⁴. Era evidente que debían atenderse asuntos como el desempleo, la precaria infraestructura y la falta de cobertura educativa en las comunas, el fenómeno del narcotráfico y de las drogas, las bandas, las milicias y demás grupos armados que reclutaban a los jóvenes en sus filas. Pero 1990 también representó la participación activa de muchos jóvenes universitarios, con el impulso dado por ellos a la “séptima papeleta”, movimiento que convocó la Asamblea Nacional Constituyente y llevó a la promulgación de la Nueva Constitución de 1991 (CNMH, entrevista, hombre, rector de colegio y funcionario público, 2016).

Esa transformación se hizo evidente también en la organización de los jóvenes de la ciudad. La Red Juvenil es un buen ejemplo de ello: creada en 1990, inicialmente era un movimiento articulador de diversas propuestas de organización juvenil en la ciudad; su objetivo era modificar el estigma de los jóvenes como peligrosos. Más adelante, en 1997, entró con fuerza la reflexión sobre la no violencia activa como una postura filosófica y política. Para 1999 la objeción de conciencia al servicio militar y la no violencia pasaron a convertirse en la reivindicación fundamental de la Red Juvenil (Restrepo Parra, 2007).

¹⁶³ Término usado para referirse al lenguaje creado por los jóvenes en los barrios de Medellín. Véase: Castañeda Naranjo y Henao Salazar (2001)

¹⁶⁴ Corporación Región propuso en agosto de 1990 un simposio titulado: la Comuna Nororiental de Medellín, Violencia Juvenil, Diagnóstico y Alternativas; de la Consejería Presidencial Para Medellín y el Área Metropolitana surgió la Mesa sobre Juventud.

El interés por mostrar otros jóvenes diferentes a aquellos que los estereotipos definían llevó a la creación, en 1993, de uno de los programas de televisión más recordados de aquella época: *Muchachos a lo bien*, producido por Teleantioquia en asocio con la Fundación Social y la Corporación Región.

Con *Muchachos a lo bien* la idea explícitamente era dar visibilidad a aquellos jóvenes que tuvieran una experiencia de vida bacana, interesante, para que fuera eso lo que se viera en los medios y no el joven que está articulado al bandido tal o el que es el representante del capo no sé qué. Fue una narrativa visual alrededor de experiencias de vida de jóvenes con proyectos de vida interesantes, se cumplió perfectamente y, por supuesto, *Arriba mi barrio* cumplía exactamente con el mismo propósito pero con un formato de magazín que fue muy interesante (CNMH, Hombre, entrevista, hombre, directivo ONG, 2016).

Pero los “muchachos” también mostraron su gran potencial de organización y de cambio a través de la cultura. Fueron ellos y ellas quienes con el arte, la música, la danza y diversas manifestaciones culturales desafiaron el miedo y se tomaron las calles. Fue así como gracias a organizaciones sociales de jóvenes, a su apuesta por la cultura, lo comunitario, la identidad barrial, lograron hacerle frente a la violencia e intentaron crear otros espacios y relaciones que permitieran devolver la alegría y la vida a sus territorios. En 1991 se inició un proceso de reconocimiento de las organizaciones y grupos culturales de la zona nororiental, que tuvieran puntos en común y les permitiera reunirse para llamar la atención sobre lo que pasaba en esos territorios. Querían mostrar que en esas comunas había también otras realidades, otras formas organizativas que debían ser visibilizadas (CNMH, Entrevista, hombre, líder cultural, Medellín, 2016).

La movilización con las organizaciones y los habitantes de la comuna nororiental hizo posible superar temporalmente el miedo para traspasar las fronteras invisibles que limitaban su espacio vital, exigir el respeto por la vida y el fin de los asesinatos de jóvenes en las comunas.

Y nosotros vemos la necesidad a finales de los noventa como de convocar a otras organizaciones que estaban en las comunidades cercanas para ver como activábamos el rescate de los espacios públicos, las canchas, y las partes para que fueran menos violentas y que la gente perdiera el miedo y recuperara el espacio de la vida, del territorio. Entonces surge una cantidad de propuestas en la zona de la comuna nororiental, donde vamos identificando cantidades de grupos que estaban también haciendo trabajos similares a nosotros, como es: Nuestra gente, “Convivamos” (estamos hablando de los comienzos de los años noventa). Y lo que hicimos fue como encontrar un mapa de organizaciones que habitaban en la comuna nororiental y con ellos lo que hicimos fue concertar no un día cultural en el 91, sino 10 días. Terminaron siendo de gran impacto cultural, es decir, donde todo nos reunimos y hicimos una movilización para ese rompimiento de esas fronteras, para ayudar a la población a que se fortaleciera, es decir, que pudiéramos

entrar como a unas metodologías de diálogo o algo que no rompiera tanto los lazos entre la comunidad y el Estado. [...] Entonces se genera un movimiento que se llamó la comparsa del barrio, Barrio Comparsa, donde participaron en el 91, entre el 4 de marzo y el 11 de marzo, más de 56 organizaciones de la zona. Inclusive algunos grupos de la ciudad se unieron a esta movilización y creo que empezamos como a intervenir el espacio público y hacer un llamado a los medios de comunicación y buscar las formas y las alternativas de cómo el Estado se involucrara más en este territorio. Es cuando llega ya la Consejería Presidencial, María Emma, y también nace Arriba mi barrio y los tres nos juntamos en impactar esta movilización (CNMH, hombre, líder cultural, Medellín, 2016).

Barrio Comparsa surge en la década de los noventa como una alternativa lúdica, recreativa y de encuentro, creación y convivencia de las comunidades barriales. Rescatando el juego como posibilidad de realización, potenciación y transformación del ser humano y de sus relaciones con el entorno. Desde entonces Barrio Comparsa ha venido desarrollando diversas actividades con jóvenes en los barrios populares de Medellín y su área metropolitana que buscan la reelaboración de nuevos referentes simbólicos, la recuperación de espacios públicos y la socialización creativa y festiva. Lo que ellos denominan como “la red de la alegría”.



“La vida es bonita”. Obra de teatro callejero del grupo Barrio Comparsa, 1996. Fuente: archivo Barrio Comparsa.

Barrio Comparsa se unió a otras organizaciones sociales que estaban desarrollando trabajos similares en la comuna nororiental. Convivamos, que surgió en 1990 en Villa Guadalupe, comuna nororiental, fue una de ellas. Desde su creación Convivamos le apostó a la cultura popular, la comparsa, el teatro callejero, la magia, la chirimía, el circo y el arte como estrategias para que los

jóvenes expresaran lo que sentían y pensaban, el arte como denuncia y movilización popular. Así, actividades como La Fiesta Popular, que nació durante la primera Semana por la Paz, en 1994, eran escenarios para la construcción del tejido social, procesos de participación y proyección comunitaria y la convivencia. Lo que buscaban en ese momento era habitar los espacios, romper las fronteras invisibles en barrios como Villa Guadalupe, La Salle, San Pablo, San Blas y El Jardín.

Del mismo modo, en la comuna 2, Santa Cruz, en el barrio La Paz, estaba la Corporación Cultural Nuestra Gente. Fue creada en 1987, uno de los años más aciagos de la ciudad, cuando era casi impensable un espacio en la comuna dedicado a las artes, el teatro, la música, la danza, la literatura, las manualidades y los procesos formativos de jóvenes y habitantes en general. Pero ahí estaba Nuestra Gente y su Casa Amarilla para contrarrestar los estigmas, la indolencia de la guerra y retomar la calle y la posibilidad de habitarla a través del proceso creativo y las artes (Corporación Cultural Nuestra Gente, 2016).



Corporación Cultural Nuestra Gente, taller de derechos humanos. Medellín, barrio Santa Cruz, 2010.
Fuente: archivo Corporación Cultural Nuestra Gente.

La comuna nororiental no fue una excepción, en la noroccidental hacían presencia organizaciones como la Corporación Casa Mía, creada en 1989, dedicada a los temas de convivencia, reconciliación y mediación con jóvenes víctimas y victimarios del conflicto:

Casa Mía nace como medio de intervención del conflicto de 9 bandas de Santander, París, Bello, Castilla, Pedregal. ¿Por qué nos estamos matando? Si somos los mismos jóvenes que crecimos juntos. Nace como la creación de un tercer escenario que permitiera que esos jóvenes antes que asumir la vida del otro, buscaran solucionar la problemática social (CNMH, conversatorio teatro al aire libre, Pedregal,

hombre, Medellín, 2015).

Con el lema “Detener la muerte apostándole a la vida”, logró consolidar espacios de convivencia, generar nuevos referentes sociales mediante la promoción de diversas manifestaciones culturales, vincular a niños y jóvenes con la metodología de trabajo “lo efectivo es lo afectivo” que daba lugar a compromisos de defensa de la vida por encima de todo (Casa Mía, 2016).

Otra organización importante es la Corporación Para el Desarrollo Picacho con Futuro. Surgió en 1994, conformada por ocho organizaciones comunitarias de la comuna 6 de Medellín¹⁶⁵. Su objetivo era contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comuna 6, parte alta, a través de la gestión, ejecución y evaluación de programas y proyectos de los ejes de intervención del plan de desarrollo local. También buscaba salidas no violentas y marcadamente democráticas, surgidas del interior de las comunidades, para la resolución de conflictos (Corporación para el Desarrollo Picacho con Futuro, 2016).

Pero no fue sólo en las comunas donde las y los ciudadanos buscaron alternativas a la guerra. En el centro, en el corazón de la ciudad, surgió el que se transformaría con el tiempo en el gran evento de ciudad, congregando multitudes en torno a la poesía. ¿Cómo era posible que los habitantes de Medellín, en medio de la espiral de muerte y de violencia que vivían en 1991 pensarán en sentarse en una plaza pública a escuchar poemas? El Festival Internacional de Poesía es para muchas de las personas entrevistadas un hito de memoria y resistencia en la ciudad. En él multitudes se reunían a escuchar poesía. Durante la década de los noventa, los habitantes salían del encierro al que el miedo les tenía sometidos para reunirse en espacios públicos, de manera tranquila y con una increíble sensación de seguridad, de que nada podría pasar, nadie podría atentar contra un espacio como ese.

El Festival de Poesía fue uno de esos espacios, pero hubo otros. Latina Estéreo, una de las emisoras de salsa en la ciudad, programó entre 1989 y 1992 dos festivales de salsa multitudinarios. En la “época de las bombas” llenó de gente las calles de Manrique y Castilla para bailar sin temor a ser feliz, como dice la canción de salsa. Otros eventos pequeños pero de una grata recordación entre los habitantes de la ciudad fueron el festival cultural Bazarte, en el sector de Suramericana, el cual reunía artesanos, artistas, músicos, libreros e incluso escritores de cartas de amor para convocar a los ciudadanos a un fin de semana de encuentro alrededor

¹⁶⁵ Integrado por las Asociaciones de Madres comunitarias Amor y Esperanza y El Triunfo, Juntas de Acción Comunal Santa Teresa y La Pradera, Organización Juvenil Juventud Unida Comunicaciones, los grupos de Afectividad y Vida en Familia París y Santa Mariana, el Comité de Deportes Barrios Unidos, la Corporación Comunitaria Antena Parabólica Doce de Octubre y seis organizaciones juveniles que hacían parte de la red de organizaciones juveniles de la comuna 6 parte alta.

de la cultura y el arte. La cinemateca El Subterráneo, la del Museo de Arte Moderno de Medellín y el Centro Colombo Americano y su sala de cine, con la presencia emblemática de Luis Alberto Álvarez, eran los lugares de los jóvenes universitarios. Allí el séptimo arte era la excusa para encontrar otras salidas a una realidad avasalladora.

5.1.5. El arte le susurraba a la ciudad que algo andaba mal¹⁶⁶

En medio de acontecimientos tan sensacionalistas como la creación del grupo Muerte a Secuestradores en 1981, algunos artistas de la ciudad se negaban a esconder una realidad que era cada vez más evidente. Así, con rumores gráficos musitados por el artista Adolfo Bernal¹⁶⁷ y sus carteles que inundaron la ciudad con el nombre “Medellín, Medellín, Medellín”, cuando esa palabra era sinónimo de miedo, drogas, sicarios. Este fue otro “Cartel de Medellín” que anunciaba a la ciudad misma como la función central.

Como afirma Giraldo (2016) cada vez era más difícil no ver lo que estaba pasando. El desacomodo entre los discursos oficiales y las realidades urbanas se fue volviendo un tema de reflexión para los artistas. Juan Camilo Uribe con su obra *Medellín, un lecho de rosas* (1982)¹⁶⁸ hace un comentario mordaz a la euforia colectiva, en esta “década conflictiva [...] la ficción de estabilidad estaba ya indudablemente herida y gracias al atrevido juego de palabras y de objetos, esta cama se erigía como un demoledor artefacto de crítica política” (Giraldo, 2016, página 6).

Los artistas empezaron a llamar la atención sobre lo que estaba pasando. Clemencia Echeverri, artista dedicada a realizar esculturas geométricas y monumentales, estremeció al público con los gritos de un cerdo sacrificado en una de sus obras. Por su parte, Ana Claudia Múnera mostró las alas de una paloma muerta en sus videos, poblados en otras ocasiones de velos, cunas o juegos infantiles. Capas de óleo rojo inundaron paisajes desolados de la habitualmente fría y conceptual obra de Ana Patricia Palacios. Las reflexiones formales y geométricas de Alberto Uribe terminaron convertidas en cruces de un camposanto (Giraldo, 2016).

¹⁶⁶ Esta sección está basada en el documento elaborado por Giraldo (2016a).

¹⁶⁷ Adolfo Bernal, *Intervención urbana con carteles*, 1981.

¹⁶⁸ Un ensamblaje donde el artista instala sobre una cama de hierro un jardín de rosas plásticas, las cuales sin embargo tienen tallos como espinas que se entretrejen por debajo en una masa agresiva y brutal.



El pájaro de Botero. Recorrido de memoria. Parque de San Antonio, Medellín, 2015. Fotografía: Focus Narrativo para el proyecto de investigación.

Pero Giraldo (2016) llama la atención para la escultura *El Pájaro*, de Fernando Botero, como la expresión final del llamado que los artistas hacían para evidenciar lo que pasaba en la ciudad:

Sin embargo, la bomba que explotó el *Pájaro* de Fernando Botero puede considerarse, si no el beso del príncipe, si la bofetada que despertó definitivamente a la bella durmiente de las artes de la ciudad. [...] El escultor, quien en 1987 había dicho públicamente: “Sólo quiero ser pintor. Quiero ver los temas como pintor, no como comentarista, filósofo o psicoanalista” (Villegas, 2003), hizo entonces uno de los comentarios políticos más fuertes y decisivos de estos años. Cuando se enteró de los acontecimientos, pidió que no retiraran los restos de la escultura, que dejaran los restos del pájaro: [...] “Quiero –dijo en ese momento– que esa escultura quede ahí, como recuerdo de la imbecilidad y de la criminalidad de Colombia” (Becerra, 1998). Y de esta manera terminó protagonizando uno de los actos más contestatarios del arte de este momento. (Giraldo, 2015, página10)¹⁶⁹.

Esta escultura destruida y propuesta como testimonio, y posteriormente apropiada y completada por la acción de los transeúntes, fue de las primeras en demostrar que en unos momentos históricos y sociales como los de la sociedad medellinense de esos tiempos, las formas acabadas, esteticistas y cerradas se quedaban cortas¹⁷⁰. El agujero y la fragmentación de esta forma terminó logrando todo lo que la forma cerrada y completa no pudo: dialogar con su entorno, narrar un momento, resistir a la lógica de la muerte.

¹⁶⁹ “Aunque cinco años después volvió a donar una escultura igual a la destruida a la que llamó *Pájaro de la Paz*, como un voto de confianza por los nuevos tiempos pidió que no retiraran al primero. La pareja alada se quedó desde entonces en el parque, pero el pájaro que convoca no es el redondo y sin historia, sino el otro, el “herido” (como se le conoció desde entonces)” (Giraldo, 2015).

¹⁷⁰ Así lo registra en una crónica el periodista Juan Miguel Villegas: “En 2009, cuando levantaron de su pedestal al Pájaro herido para llevarlo a Plaza Mayor por poco más de un mes, de las grietas y rincones del ave cayeron al piso cientos de monedas de diferentes nacionalidades, estampitas y medallas: pequeñas ofrendas dejadas por creyentes para pedir favores a las almas de las víctimas [de la explosión] (...). Es uno de los objetos más visitados, fotografiados, acariciados, rayados y observados del centro de Medellín. Un objeto, además, en el que se reza y se llora. Un santuario, mejor dicho. Como lo sabe todo aquel que pasa un día en el Parque San Antonio. Como lo saben quienes se congregan cada año para honrar la memoria de los muertos” (Giraldo, 2015).

Proponemos este hecho cargado de historia, estética, política y simbolismo, como el paradigma de lo que sucedería con el arte durante las siguientes décadas en Medellín (Giraldo, 2016, página 12).

5.2. Las víctimas irrumpen en el escenario de la ciudad, 1995-2005

Las acciones de resistencia durante el período que va de 1995 a 2005 dan cuenta de la consolidación y el empoderamiento de procesos sociales y comunitarios que empezaron a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa. Grupos sociales diversos: desplazados, jóvenes, mujeres, conformaron sus propias organizaciones para emprender acciones de reivindicación de sus derechos, apoyados por varias ONG, organizaciones sociales y grupos de derechos humanos que habían surgido en la década de los ochenta.

Entre sus reivindicaciones más urgentes estaban el derecho a la vida y a la no participación en la guerra; visibilizar los daños ocasionados por esta y exigir acciones por parte del Estado para atender a la población o para impedir nuevas modalidades de victimización. Buscaban también hacer un llamado al Estado y a la sociedad sobre la necesidad de iniciar procesos de diálogo y negociación a nivel nacional con la guerrilla y a nivel local promover acuerdos, pactos y negociaciones entre grupos armados (bandas, combos, milicias), así como recuperar espacios a la guerra y la violencia.

5.2.1. Visibilizar los daños

Como se vio, durante el período 1995-2005 la guerra alcanzó su punto más álgido. Fue un período de reconfiguración del poder de los actores armados en la ciudad, por lo cual era necesario para muchos grupos poblacionales hacer visibles los daños que habían sufrido y exigir acciones por parte del Estado para atender a los afectados. Así mismo era preciso denunciar e impedir modalidades de victimización como el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado, el secuestro, la desaparición forzada, los asesinatos políticos y las fronteras invisibles en los barrios.

Entre 1996 y 1997 entraron en escena miles de desplazados que llegaron a la ciudad junto con una variedad de acciones de resistencia. Granada y González (2009) proponen una periodización para comprender las dinámicas de la acción colectiva de la población desplazada en la ciudad. Los autores identifican dos ciclos de protesta: el primero, entre 1996 y 2003, que es el inicio de las acciones colectivas que buscan visibilizar en el escenario público la problemática del desplazamiento, así como sus aprendizajes políticos previos y sus iniciativas de interlocución con la administración. En el segundo ciclo, entre 2004 y 2009, se muestran los cambios en la creación

de instituciones responsables de apoyar a la población desplazada y, como se vio en el capítulo 1, hay una tendencia a la estabilización del orden institucional, lo que permite usar un repertorio de acciones diferentes sin abandonar los ya utilizados en el ciclo anterior. Según los autores, es posible observar un cambio en el discurso de los sujetos afectados por la violencia, porque ahora exigen las garantías de los derechos otorgados consagrados en la legislación, y mantienen en el tiempo la organización y participación de la población desplazada y su interacción con las instituciones del gobierno municipal canalizadas a través de la Mesa de Organizaciones de Población Desplazada en Medellín. La evidencia aportada por muchos testimonios escuchados en la investigación del *Medellín: memorias de una guerra urbana* corroboran esta periodización.

Algunas de las acciones que se destacan en el primer ciclo de protesta señalado son: la conformación de asentamientos en Vallejuelos, La Cruz, La Honda, El Pacífico y Mano de Dios; la toma de la iglesia de La Veracruz en 1998 y 2001; la toma de la Universidad de Antioquia en 1996 y 2002¹⁷¹; los bloqueos de vías en el año 2000, cuando un grupo de aproximadamente mil desplazados bloqueó la Autopista Medellín-Bogotá, cerca de la Curva de Rodas¹⁷² (Murcia, 2011; Tobón y Gallego, 2009).

Igualmente es notable la conformación de organizaciones de desplazados para exigir la garantía del derecho a la vida y la dignidad humana, la intermediación y respuesta efectiva de las autoridades locales y la solución a su situación de desplazamiento. En 1995 se constituyó la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), conformada principalmente por desplazados de la zona de Urabá¹⁷³. A principios de la década del dos mil se creó el Movimiento Social de Desplazados de Antioquia (MOSDA), antes denominado Comité de Desplazados, que estuvo integrado por líderes de diferentes asentamientos (Vallejuelos, Olaya Herrera, El Pinal, entre otros). Sin embargo, debido al problema que significó la construcción del mismo y el proceso de criminalización y persecución contra él, sus participantes se redujeron a las comunidades de La Honda, La Cruz y Bello Oriente¹⁷⁴.

¹⁷¹ Esta última toma de la universidad, fue llevada a cabo por la comunidad desplazada ubicada en La Honda, La Cruz y Bello Oriente, la cual fue asesorada por el Movimiento Social de Desplazados de Antioquia y la Asociación Campesina de Antioquia, y apoyada por algunos estudiantes y miembros de la Pastoral Social.

¹⁷² La manifestación tenía tres motivos: denunciar las deficientes condiciones de vida de 35 asentamientos subnormales ubicados en Medellín y Bello; oponerse a la orden de desalojo emitida por la Alcaldía de Medellín contra 400 familias del asentamiento Mano de Dios y exigir el cumplimiento de las reubicaciones de las familias de El Pinal, Vallejuelos y El Picacho (Granada, 2008; Murcia, 2011).

¹⁷³ Esta iniciativa contó con el apoyo de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA) con la cual se desarrolló un proceso de coordinación para llevar a cabo diversas acciones, como la toma de un sector del barrio Villatina con aproximadamente 75 familias, las que duraron allí dos meses hasta ser desalojadas por la fuerza pública. Después, estas familias se tomaron la Catedral Basílica Metropolitana (1996) y de allí fueron trasladados por la Secretaría de Bienestar Social para un albergue en Belencito. Después de dos años, se reubicaron 19 familias en una finca en el municipio de Campamento (Tobón y Gallego, 2009).

¹⁷⁴ La organización social no se limitaba a asuntos netamente políticos u organizativos; su labor se manifestaba además en el aspecto económico y en las obras de mejoramiento físico del sector que se hacían a través de convites. Finalmente, después de la operación Estrella VI en 2003 y los constantes atropellos y hostigamientos sufridos por parte de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, el MOSDA prácticamente desapareció (Tobón y Gallego, 2009).

Pese a la magnitud del fenómeno del desplazamiento forzado en la ciudad, la sociedad parecía poco consciente y en ocasiones incluso indiferente frente a la dramática situación que vivían los afectados. Para hacerlo visible como uno de los resultados dramáticos de la guerra y propiciar un diálogo con la ciudad, la Corporación Región, en asocio con la artista Gloria Posada, creó, en 2000 una propuesta artística denominada “Tenemos nuevos vecinos”.

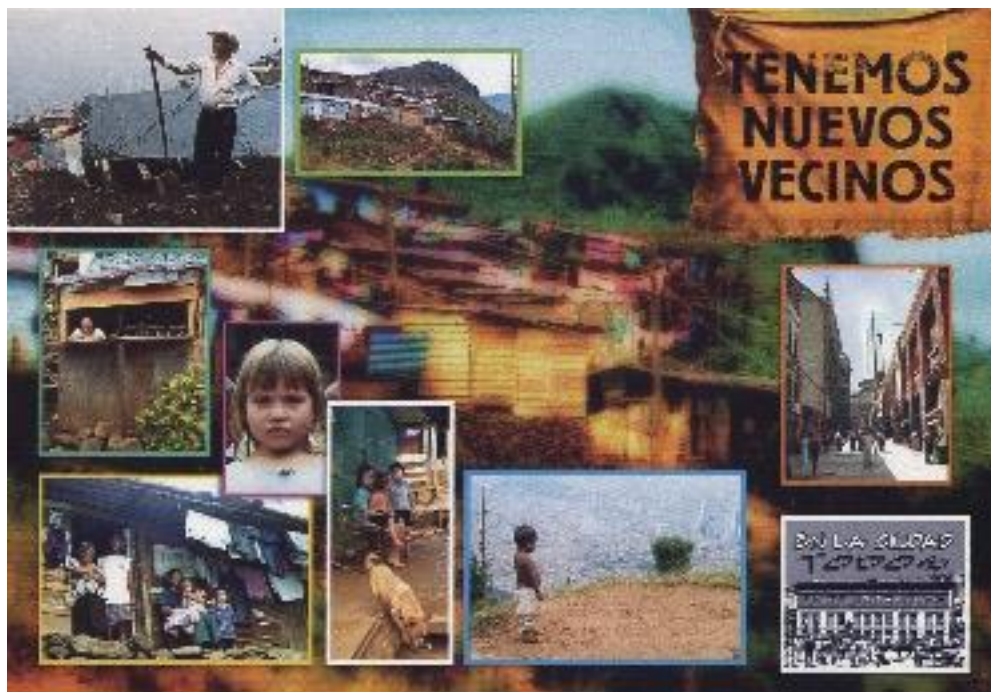


Imagen promocional de la campaña Tenemos Nuevos Vecinos. Medellín, 2000. Fuente: archivo Corporación Región.

La iniciativa intentaba responder la difícil pregunta de cómo comunicar los problemas sociales cuando las cifras no le decían nada a las pobladores de la ciudad, llegaron a la conclusión de que debía ser a través del arte, que esa sería la mejor forma (Giraldo, 2016, página 29). Como señala el relato de un integrante de la Corporación Región:

Nosotros hicimos una campaña que se llamó “Tenemos nuevos vecinos”. Eso en algún momento fue una cosa muy arriesgada incluso, porque una de las estrategias que había era construir unos “cambuches” [Casa de construcción precaria con plástico y madera] en espacios públicos con toda la experiencia que tenían las personas que llegaron desplazadas a la ciudad [...]. Fue una experiencia muy valiosa para nosotros pero muy tenaz desde el punto de vista simbólico. [...] En casi todos los otros lugares se produjo lo que nosotros queríamos: la gente se acercaba y nos preguntaba a nosotros por qué estábamos ahí, en el Parque Lleras no, no se acercó nadie, nadie se acercó a hablar con la gente que estaba ahí (CNMH, hombre, directivo ONG, entrevista, Medellín, 1 de septiembre de 2016).

Como se vio en capítulos anteriores, Medellín fue una de las ciudades con más víctimas de secuestro. Frente a este flagelo la ciudadanía se manifestó en diversas ocasiones. En 1985, ante

la magnitud del fenómeno en el país (la prensa hablaba de más de tres mil ganaderos secuestrados), los ganaderos y agricultores se reunieron en la Feria de Ganados de Medellín para celebrar una misa por sus colegas secuestrados. Ese día las actividades de la Feria fueron suspendidas (*El Tiempo*, 20 de marzo de 1985). En 1996 partieron desde el Teatro Pablo Tobón Uribe un grupo de madres de soldados retenidos por las FARC. Marchaban para pedir una pronta liberación y mostrar su oposición al secuestro y narcotráfico (*El Mundo*, 17 de octubre de 1996). El 15 de diciembre de ese mismo año se realizó otra marcha que contó con una mayor participación de público y a la que asistieron los familiares de soldados secuestrados, pero también otros familiares de secuestrados civiles. El futbolista Luis Fernando “Chonto” Herrera, cuyo hijo había sido secuestrado, leyó el mensaje que envió el presidente de la Fundación País Libre, Francisco Santos (*El Tiempo*, 15 de diciembre de 1996). Si en un inicio las personas preferían ocultar el secuestro o resolver el problema por su propia cuenta, la presencia de las madres de soldados y policías secuestrados mostró a la ciudad y al país que este no era un problema individual, por el contrario, era una violación a un derecho humano fundamental como es la libertad y por lo tanto era un deber moral y ético de la sociedad ocuparse de ello y reclamar acciones para detener esa práctica, respetar la vida de los secuestrados y liberarlos.

Si bien las marchas contra el secuestro continuaron en el país, un evento significativo, el secuestro del gobernador Guillermo Gaviria Correa y su asesor de paz Gilberto Echeverri, por parte del Frente 34 de las Farc, el 21 de abril de 2002, mientras lideraban una marcha por la Noviolencia, que pretendía llegar desde Medellín hasta Caicedo (Occidente antioqueño), motivó nuevas manifestaciones. En agosto de 2002 más de veinte mil personas se reunieron en el estadio Atanasio Girardot para manifestar con la palabra *libertad* sus deseos de un mejor país (*El Colombiano*, 25 de agosto de 2002). Las personas pedían la liberación del gobernador, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri¹⁷⁵.

¹⁷⁵ El gobernador Gaviria, su asesor de paz y ocho suboficiales y oficiales del Ejército que también permanecían secuestrados en el mismo lugar fueron asesinados por las FARC en una frustrada operación de rescate en un área rural del municipio de Urrao durante el primer mandato del presidente Álvaro Uribe.



Fuente: *El Colombiano*, 6 de mayo de 2003, página 1a (portada).

Como parte de las respuestas sociales para visibilizar los daños ocasionados por la guerra y exigir justicia también se encuentra la conformación de organizaciones sociales, comunitarias, de mujeres y de familiares de víctimas¹⁷⁶. Durante este período fue particularmente notoria la participación de las mujeres, quienes se movilizaron alrededor de una consigna por la paz e imprimieron su propia voz a esta reivindicación, compartida con otros actores sociales. Como ya se ha visto, las mujeres han sido también víctimas del conflicto armado, no obstante han sido quienes en buena medida han reclamado por las pérdidas y cumplido un papel protagónico a la hora de denunciar públicamente los efectos de la guerra. Pero el lugar protagónico de las mujeres no se debe sólo a que son las sobrevivientes de una violencia que ha afectado en particular a los hombres; se debe también a que han sabido movilizar sus demandas por justicia, verdad y reparación, y han logrado crear comunidades afectivas, apoyos, solidaridades, reconocimiento social de los daños. Ellas, desde su lugar de madres, esposas e hijas, legitiman sus reclamos¹⁷⁷.

¹⁷⁶ Predominan las organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas del secuestro, del paramilitarismo y de desaparición forzada, dentro de las que cabe destacar la Mesa de Derechos Humanos de la comuna 6, Corporación Manos de Amor y Paz, Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), Fundación Sumapaz, Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), y Movimiento Social de Desplazados de Antioquia (Mosda).

¹⁷⁷ Se destacan las organizaciones de mujeres y de familiares de víctimas que tienen como propósito la defensa de los derechos humanos, la visibilización de los daños, la exigencia de reparación y justicia y la construcción de paz, derivadas de un proceso de consolidación de las mujeres como agente social frente a las violaciones cometidas en el conflicto armado. Algunas de estas organizaciones son: Asociación Mujeres de Las Independencias (1996), Ruta Pacífica de las Mujeres (1996), Coordinación de Mujeres de la Zona Nororiental (1997), Mujeres de Negro (2000), Corporación Madres de la Candelaria (1999), Caminos de Esperanza y Línea Fundadora y Mujeres Sembradoras de Esperanza (2001).

Este protagonismo se refleja en la convocatoria y participación en acciones como la Marcha de Solidaridad, realizada en 2002, convocada por la Ruta Pacífica de Mujeres y Mujeres de Negro. La marcha se originó por la detención de tres mujeres integrantes de la Asociación Mujeres de las Independencias (AMI) en la operación Orión, como manifestación de solidaridad con los habitantes del sector y respaldo a las integrantes de AMI. La movilización salió desde el centro de la ciudad y llegó a la comuna 13 con cientos de mujeres vestidas de negro que exigían la libertad de Teresa Yarce, Socorro Mosquera y Mery Naranjo. A la marcha de personas y organizaciones de afuera de la comuna 13 se unieron algunos habitantes y líderes de la comuna (CNMH, 2011a).



Las Mujeres de Negro acompañaron diversos territorios marcados por el conflicto armado. En 2007, en el asentamiento Altos de la Torres, comuna centro oriental. Fuente: archivo Corporación Región.

Otro ejemplo claro en la ciudad es el surgimiento de Madres de la Candelaria, en 1999, a través de ejercicios de denuncia como marchas y tomas inspiradas en la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Se trató de un colectivo que continuó la línea de denuncia precedente en los años ochenta en torno a la desaparición forzada, como la operación Sirirí (1984), Los Amigos de José (1986) y el capítulo Antioquia de ASFADDES. Inicialmente se congregaron en torno a la denuncia de la desaparición forzada pero posteriormente también incluyeron la denuncia de secuestros y homicidios.

Este grupo está conformado por familiares de las víctimas, especialmente por las madres, quienes fueron las principales protagonistas de las movilizaciones y empezaron a aparecer como importantes actores políticos de resistencia al conflicto armado. Su origen se encuentra en la confluencia de varias mujeres que deciden “hacer algo”, no quedarse quietas ante los hechos. Muchas de ellas ya habían vivido victimizaciones anteriores como desplazamientos o asesinatos

de familiares; sin embargo, fue la desaparición, como hecho que victimiza día a día y queda inconcluso, lo que provocó su insistencia en el activismo y su permanente búsqueda. Así lo expresó una de sus integrantes en un testimonio:

Entonces dijimos que no nos podemos quedar aquí, hay que organizarnos, aunque el dolor jamás pasa, ese dolor es latente, es permanente. Pero tratamos de levantarnos de esto, porque enterramos a los que nos habían matado, pero los desaparecidos ¿qué pasará con ellos? Ese “qué pasó” es fundamental porque siempre lo recordamos. Pero a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que no nos podemos quedar en el “pobrecita”, ya venimos buscando otra transformación. Una transformación que uno dice “nos tenemos que levantar de esta y no más”, pero eso continúa, porque decir que tengo 13 personas muertas y desaparecidas en mi familia, uno siente que no va a ser capaz. Pero no. Siendo una lideresa tengo que pensar en las mujeres que van llegando a mi asociación para ser el apoyo (CNMH, grupo focal víctimas de desaparición forzada, mujer, Medellín, 2015).

Las Madres tienen como particularidad la realización de una acción que se ha vuelto emblemática en la ciudad: el plantón en la iglesia La Candelaria en el Parque de Berrío. Este plantón involucra el uso de pancartas y arengas, permite no sólo la denuncia y visibilización, sino el crecimiento permanente del mismo pues es fácil de ubicar y mediante la rutina de la acción esta se hace cada más visible. Muchas de sus integrantes llegan al grupo “mientras caminan por el centro”, por el voz a voz o porque vecinas que conocen o vieron el plantón las llevan a la toma de la iglesia.

Las Madres prestan servicios sicosociales, jurídicos, de emprendimientos y de estudios. Sin embargo, tal vez lo más destacado por ellas mismas es que se trata de un “sitio de encuentro” en el que se construye una nueva comunidad de sentido, de autorreconocimiento y superación a través del encuentro con la historia de otras. Se habla del colectivo como “una familia”, aludiendo tal vez a su título de madres. “En Madres de la Candelaria encontré otra familia, porque en la familia uno no sabe si lo están escuchando, en cambio en Madres llega uno y si quiere conversar, conversa con la otra, si quiere llorar, llora con la otra” (CNMH, grupo focal víctimas de desaparición forzada, mujer, Medellín, 2015).



Madres de la Candelaria. Semana contra la desaparición forzada, 2014. Fotografía: Álvaro Cardona para el CNMH.

Estas mujeres crearon estrategias en el espacio público para exigir reconocimiento del daño y darles un valor político a sus pérdidas. Pusieron de presente su condición de madres como elemento de autoridad moral y mostraron su tránsito entre el dolor personal y las causas colectivas, entre sufrimiento y justicia, entre las diferentes dimensiones que el luto adquiere como proceso al tiempo individual y social. Hablaban de sus historias, de las relaciones construidas a partir de la muerte o desaparición de sus familiares, ponían en evidencia cómo ese hecho transformó el curso natural de sus vidas, destruyó vínculos morales y afectivos, reformuló el propio sentido del tiempo en un antes y un ahora determinado por ese instante inolvidable y a la espera de un futuro de justicia y reconocimiento que parece no llegar nunca (Vianna, 2011).

Además, este es un discurso que se legitima por su lugar social de enunciación: la madre. Que busca conmover con una narrativa de luto: el dolor que nunca pasa, y no tienen nombre el llanto, la soledad, la incompreensión y la enfermedad en los cuerpos y en el alma. Pero también denuncian públicamente pues sienten que su causa es justa y que su condición de madres las protege. En esa narrativa de luto usada por las mujeres ha habido un tránsito entre su caso particular y el de otras madres. Su discurso al tiempo que reivindica justicia para sus hijos, hace visibles otras madres y lo que ellas vivieron, y crean comunidades afectivas a partir de la condición fundamental de madres cuyos hijos fueron asesinados o desaparecidos. Dicha des-singularización abandona el “no me pasó sólo a mí” y pasa al “a otras les pasaron cosas peores” y es la condición fundamental para expandir su denuncia, para que tenga una repercusión pública (Arenas Grisales, 2014).

5.2.2. La no violencia, la convivencia y el respeto por la vida

En la década de los noventa, particularmente en los años comprendidos entre 1995-1997 y 1999-2003, los habitantes de diferentes barrios promovieron acuerdos y pactos de no agresión entre

grupos armados, con el objetivo de facilitar la convivencia y la defensa de la vida¹⁷⁸. El papel de las instituciones en estos procesos fue importante¹⁷⁹. A mediados de los años noventa con la apertura de la Oficina de Paz y Convivencia y hasta finales del año 2000, la administración municipal emprendió acciones que buscaban promover procesos de mediación y firma de pactos con y entre combos y bandas que hacían presencia en los barrios. Como se señaló ya en los capítulos anteriores, era evidente una tendencia en el Estado hacia la negociación del desorden¹⁸⁰.

Estos pactos y acuerdos de no agresión hacían parte de la política de convivencia y seguridad ciudadana en Medellín y tenían como propósito desactivar conflictos específicos entre bandas. En algunos casos hubo entrega de armas a cambio de programas y proyectos de empleo y talleres de capacitación, entre otros. La mayoría de estos pactos contaron con el respaldo de las comunidades, con amplia difusión en los medios de comunicación, con la mediación de la Oficina de Paz y Convivencia de la ciudad, y recibieron aportes económicos para lograr su continuidad y éxito. Todo esto hasta la finalización de la administración de Juan Gómez en diciembre del año 2000 (Vélez, 2001).

Pero los pactos fueron también iniciativa de los habitantes de los barrios, quienes contaron con el apoyo de instituciones como la Iglesia, asociaciones y organizaciones sociales y comunitarias y en particular de la Mesa de Trabajo por la Vida¹⁸¹. En 1995, dadas las confrontaciones entre bandas de distintos sectores del Barrio Antioquia, comenzaron a gestarse nuevos pactos. En 1996 surgió Probapaz, organización creada para coordinar el pacto de no agresión entre las bandas del Barrio Antioquia y emprender programas educativos, recreativos y comunitarios con niños y jóvenes. Se creó desde la misma comunidad un proyecto de paz y convivencia comunitario que buscaba completar el proceso iniciado en 1993, con el objetivo de recuperar el

¹⁷⁸ Se pudo establecer que se realizaron pactos de no agresión entre grupos armados en: 1-Popular: San Pablo, Carpinelo, Moscú 2, Granizal, La Avanzada, Santo Domingo 1 y 2, Popular; 2-Santa Cruz: Santa Cruz, Playón de los Comuneros, Pablo VI, La Isla, La Francia, Andalucía, La Rosa, Moscú; 3-Manrique: Manrique oriental, Las Granjas, Versalles 1 y 2, Santa Inés, El Pomar, María Cano, Carambolas; 4-Aranjuez: Moravia, Aranjuez, Campo Valdez, La Piñuela, San Isidro, Manrique central; 5-Castilla: Alfonso López, Castilla, Plaza de Ferias, Boyacá, Toscana, Héctor Abad Gómez; 6-Doce de octubre: Doce de Octubre, El Triunfo, Santander, Pedregal, Picacho, La Esperanza, Kennedy, Mirador del Doce; 7-Robledo: Fuente Clara, Bosques de San Pablo, Cerro El Volador, La Iguaná, Aures 1 y 2; 8-Villa Hermosa: Enciso, El Pinal, La Libertad, Villatina, San Antonio, La Sierra, Las Estancias; 9-Buenos Aires: Buenos Aires, Loreto, Cataluña, Los Cerros, El Vergel, San Pablo, 8 de Marzo; 10-La Candelaria: Sector La Bayadera; 15-Guayabal: Guayabal, Trinidad; 16-Belén: Los Alpes. Fuente: elaboración propia con información de prensa, Riaño (2006) y Probapaz (1998).

¹⁷⁹ Aunque a mediados de 1994, en el gobierno de Ernesto Samper, se cerró la Consejería Presidencial para Medellín, y con ello se dio el retiro de la administración nacional del proceso de reinserción de las milicias (dejando esta competencia en manos de los gobiernos locales).

¹⁸⁰ Producto de estas acciones institucionales para 1999: "Se habían establecido en la ciudad procesos de mediación y pactos que comprometían a cerca de 160 bandas, combos y milicias, para cubrir unas 3.000 personas en 86 sectores de la ciudad" (Vélez, 2001, página 282). Esto también fue cuantificado por Giraldo y Mesa (2013), quienes señalan que "entre 1995 y 1999 se realizaron 57 pactos de este tipo con igual número de bandas o milicias, en 71 barrios, en 5 de las 6 zonas de Medellín, muchos de los cuales implicaron transferencia de dineros públicos a los grupos armados" (página 232).

¹⁸¹ Este tipo de iniciativas se identifican desde el período anterior, 1980-1995, a raíz del papel que jugó la Mesa de Trabajo por la Vida, convocada por la Arquidiócesis de Medellín tras la masacre de Villatina en 1992 y acogida por organizaciones cívicas, no gubernamentales, de defensa de los derechos humanos, sindicales, juristas y periodísticas de la ciudad, y que poco a poco se ganó un espacio de respeto entre la comunidad. Algunos de los pactos impulsados por la Mesa de Trabajo por la Vida se iniciaron desde 1993, por ejemplo en Villatina y el Barrio Antioquia.

estado de convivencia y paz que logró el barrio en los dos años anteriores, a través de un proceso de acercamiento con los actores involucrados en el conflicto. Esta segunda etapa del proceso posibilitó una concertación más específica de lo público, lo privado y lo comunitario.

Como líderes barriales nos vimos motivados a promover nuestra propia política de paz, porque nos sentíamos saturados de violencia [...]. La estrategia que se utilizó para llegar a estos jóvenes que se encontraban en conflicto fue el diálogo directo con ellos y el compromiso de que nosotros hablábamos con las otras cinco bandas del sector para hacer un pacto de caballeros de no agresión y no más muertes violentas [...]. Fue así como reunimos a los muchachos líderes de cada grupo en una bodega del barrio a conversar y aunque asistieron entre 30 y 40 muchachos, todos armados, se hizo un pacto de paz entre ellos. Sin prometerles nada (trabajo, ayudas económicas, libretas militares, capacitaciones, etc.) los jóvenes se entregaron a esta propuesta de paz, la aceptaron y la sostuvieron durante algún tiempo [...]. El 27 de diciembre se produce un pacto de paz entre las seis bandas a partir de la convocatoria que hace Roldán, un líder del sector, a los diferentes combos. Inmediatamente la dinámica del barrio se transforma, la gente empieza a salir a las calles y aparece uno de los cuerpos que le da unidad al barrio: la fiesta y la rumba, y es por eso que el 31 de diciembre de 1993 tiene un significado muy grande en el imaginario de sus habitantes. Fue ese día en el que la gente volvió a salir tranquilamente a la calle, se integró y recuperó el espacio que estaba sitiado por el conflicto armado. En 1994 entran las diferentes entidades: Estado, empresa privada, ONG, organizaciones barriales y la Iglesia a apoyar ese pacto de paz desde diferentes propuestas de trabajo para los jóvenes (entrevista a líder del Barrio Antioquia, Probapaz, 1998).

Los cambios producidos por los pactos de convivencia en el día a día de los habitantes de los barrios eran tan evidentes que el interés por promoverlos venía de los sectores sociales, integrantes de bandas y organismos estatales, pero también involucraba a toda la comunidad, toda vez que “las muertes correspondían a gentes del barrio producidas por gente del mismo barrio”. Esto implicaba, por un lado que fuese más difícil el perdón y la reconciliación, pero también que fuera más probable la intervención de ciertos líderes para proponer negociaciones y pactos que pusieran límites a los actores (Nieto, Alzate y otros, 2008, página 242).

Por esta razón el respeto a los pactos de paz se volvió central para la convivencia en los barrios, de ahí que durante este período fueran reiteradas las acciones que promovían el respeto por lo pactado. Se destacan la Marcha por la No Violencia en la zona nororiental, Manrique y Aranjuez en 1993 y 1996, y, en 1997 la Semana por la Paz y la Mesa de Diálogo por la Paz en el barrio Manrique Oriental, La Cruz. Igualmente se recurría a actividades culturales para convocar a la comunidad y propiciar espacios de encuentro y fortalecimiento de la convivencia.

Una entrevista con un líder de un barrio de la zona noroccidental dejó claro que los problemas entre los grupos armados se debían al control de los negocios en el territorio, pero en buena medida a malos entendidos, viejas peleas entre vecinos o rivalidades. Pero todos eran conscientes de la necesidad de proteger sus negocios, resguardar la vida de los vecinos y que las bandas no querían que se “calentara el parche”¹⁸². Sin embargo, aunque los pactos traían la tranquilidad temporal al barrio, algunos vecinos cuestionaban esos acuerdos pues existía el riesgo latente de la ruptura del pacto y además era difícil lograr que se prolongara en el tiempo, de ahí que las negociaciones no resultaran como se esperaba. Así lo narró un líder comunitario:

Bueno, el impacto fue interesante, se podía caminar de noche más tranquilos, que ellos [jóvenes pertenecientes a grupos armados] de alguna manera acompañaban las actividades sociales. Claro, para mucha gente nosotros estábamos siendo condescendientes con los delincuentes y decía: “entonces uno se tiene que volver delincuente para que le den trabajo, pues porque si ustedes a mí no me dan trabajo y a ellos sí les dan trabajo, entonces ¿qué hacemos?”, y yo: “bueno, estamos tratando de encontrar un camino para que haya más tranquilidad en el barrio, y una manera es buscarle una alternativa económica a estos muchachos, bregar a que se motiven a estudiar, a que sigan algo en su vida”. Yo creo que con muchos no lo logramos, logramos que se pacificara, que entraran en una lógica de participación en cosas, pero en cosas: en una semana cultural, en una actividad deportiva, en una película. Teníamos que ser muy creativos para mantener algún interés en ellos. Ahora, eso dura hasta que claro [...] cuando se acaba la plata, ¿ya qué? Ya nos abandonaron y fuera de eso viene la crisis de la cooperativa y peor unos dicen: “nos endulzaron y nos abandonaron”. Yo voy por allá y me dicen cosas, me dicen: “qué hace que ustedes nos embaucaron en un cuento, nos endulzaron un tiempo y nos abandonaron después”. Algunos recuperaron, recuperaron familias, hay pelados que se lograron rescatar en la droga o por lo menos evitar que entraran a ese círculo de carritos y de que se volvieran el [...] fortalecían pues esas bandas algunos, obviamente hay nuevas generaciones que surgen ahí (CNMH, entrevista, hombre, líder comunitario, Medellín, 2016).

Este período finalizó con la decisión del alcalde Luis Pérez Gutiérrez de cerrar la Oficina de Paz y Convivencia (responsable de los pactos de no agresión y de la mediación con los actores armados locales), con el argumento de que no había cumplido su papel y que los recursos a su disposición se usaban para fines ilícitos, e hizo un llamado a la revisión del programa. El cierre de la Oficina dejó a la ciudad sin una política oficial para manejar el conflicto armado y puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre la naturaleza de las negociaciones de paz con los actores armados locales (Riaño, 2006).

¹⁸² La expresión hace referencia a que en el territorio se llamara mucho la atención de las autoridades por los altos índices de violencia.

5.2.3. Música para decirle no a la guerra

Debido a la agudización de las confrontaciones entre actores armados y a su fuerte presencia en los territorios, los jóvenes se vieron obligados a crear estrategias para la apropiación y el uso del espacio. Como parte de estas estrategias, propiciaron la creación de organizaciones sociales y actividades como conciertos, festivales, actos conmemorativos, religiosos y deportivos, que tenían el sentido de reivindicar el derecho a la vida y la no participación en la guerra.

La mayoría de estas acciones tuvieron una dimensión barrial. En 1996 se llevaron a cabo múltiples acciones que reclamaban por el derecho a la vida, las Jornadas por la Vida en el barrio Popular 2, comuna 1, la Semana por la Paz en la zona nororiental, la Fiesta por la Vida en la comuna 13, organizada por la Corporación Sal y Luz, las Fiestas por la Vida en la comuna 8 y en la zona nororiental (ver mapa 2: Medellín por barrios y comunas). También, en ocasiones, estas acciones tuvieron una intención de denuncia, por ejemplo en la zona Noroccidental en 1996 se convocó a una marcha para decir “No a la violencia” y denunciar las alianzas entre integrantes de la fuerza pública y bandas delincuenciales. Una de las consignas era: “No a la Policía, al Ejército y a los grupos paramilitares y sí a la comunidad organizada” (Urán, 2000, página 148).

En el Barrio Antioquia, a pesar del impulso de alianzas y pactos para cesar la guerra, la confrontación entre bandas continuaba. No obstante, la actividad comunitaria crecía en los campos recreativo, cultural y educativo. Aparecieron nuevos liderazgos, particularmente de mujeres y jóvenes que compartían una visión de su barrio, en la que a partir de la valoración de la historia local, la cultura y el trabajo con los niños ofrecían los medios para reconstruir un sentido de comunidad y una paz duradera. Después de 1997 el trabajo de estos líderes obtuvo un reconocimiento importante y logró involucrar a cientos de niños en actividades deportivas, de arte, danza y grupos juveniles de teatro. Sin embargo, factores como las renovadas guerras territoriales, la ausencia de fondos para financiar sus programas y los cambios en la política local y en las alianzas amenazaron la continuidad de su trabajo y su liderazgo (Riaño, 2006).

Se destaca para este período el festival Antimili Sonoro. Esto inició como un acto para conmemorar el día internacional de la objeción de conciencia y mostrar las formas de reclutamiento forzado de los jóvenes en la ciudad. El Antimili era una forma de “liberar espacios” pero también una acción de resistencia frente al dominio de actores armados, organizado por un colectivo de grupos de diversos géneros musicales y la Red Juvenil, se realizó durante 15 años desde 1998 en el Parque Obrero del barrio Boston. Como señaló el relato de uno de los entrevistados:

Con la música pudimos liberar espacios, porque eran espacios de la ciudad donde operaba otra lógica,

la ciudad funcionaba de otra manera, funcionaba colaborativamente. Yo fui a la Red Juvenil y conversamos. Yo recuerdo que hablé con dos parceros [amigos] y yo les conté: “parce a mí la verdad yo siento que aquí hay como dos cosas en las que nos podemos ayudar. Ustedes tienen una idea bacana, están hablando de una cosa que es importante para esta ciudad que es la objeción de conciencia, pero no mucha gente los está escuchando y nosotros tenemos una herramienta para llamar gente que es la música y sobre todo una música que de alguna manera resuena con ese tipo de causas y vueltas, entonces pues la gente va a tener como unos oídos bien dispuestos” (CNMH, entrevista, hombre, músico, Medellín, 2015).

Entre 2000 y 2003 la fuerte confrontación armada vivida en la comuna 13 y en la comuna 3, sumada a las operaciones militares que se hicieron en varias zonas de la ciudad (como operación Orión, Mariscal, Estrella 6), llevaron a los habitantes a emprender acciones de tipo simbólico y cultural para hacer frente a esa violencia. En el caso de la comuna 13, mientras sus habitantes resistían e intentaban recuperarse de las diferentes operaciones militares, los jóvenes comenzaron a hacer del hip hop la herramienta para contar sus historias, para decirle “no más” a los violentos. En ese sentido, se destaca la realización del festival musical convocado por la Red Hip Hop La Élite de la comuna 13, el cual nació en el año 2002 con la consigna “En la 13 la violencia no nos vence”, y que sirvió como antecedente al festival “Revolución sin muertos” que tuvo lugar a partir del año 2004, como una jornada por la paz, la memoria y la no violencia. Este proceso contó con el apoyo de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ-YMCA), organización con sede en San Javier y que ha acompañado el trabajo con jóvenes y organizaciones de la comuna 13.



Festival Revolución Sin Muertos. Comuna 13, 2010. Fuente: archivo Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ).

También en la comuna 13, como una forma de responder a las “fronteras invisibles” y cierres por parte de los actores armados, se desarrollaron acciones que buscaban recuperar espacios de uso colectivo de la comunidad como la calle, las canchas y el tiempo de la noche. Los líderes de los semilleros y grupos juveniles, en especial La Corporación Jóvenes Líderes Unidos, realizaron

eventos públicos que intentaron recuperar el sentido del encuentro social con actividades como alboradas y torneos de fútbol. Estas acciones, según los jóvenes, buscaban reclamar justicia y reforzar el mensaje de la no violencia como alternativa (CNMH, 2011a).



Caravana juvenil. Porque los límites ¡no son fronteras! Junio 2008. Fuente: archivo ACJ-YMCA.

El deporte, en particular los torneos de fútbol, también fueron una forma de recuperar espacios a la guerra en los barrios. Por ejemplo, en el barrio Independencias III se realizó una semana nocturna, la gente reunía equipos con los grupos juveniles de 4 Esquinas, los de Juventud XXI, los de Conquistadores y los del 12 para jugar partidos relámpagos a partir de las 10:30 de la noche hasta las 11:30 p.m. En el año 2001, ante la presencia y confrontación de diferentes grupos armados en el barrio Los Mangos y las fronteras invisibles, se desarrollaron actividades deportivas impulsadas desde la Mesa de Convivencia del barrio (Nieto, Alzate y otros, 2008).

En cuanto a las actividades deportivas, vale la pena destacar el papel del Instituto de Deportes y Recreación (INDER) como promotor y acompañante de muchos de estos procesos. Su acción se vio encaminada a promover el deporte como un medio para calmar los ánimos y buscar el retorno a la cotidianidad en los barrios en contextos de confrontación entre actores armados.

Como se señaló anteriormente, el protagonismo de los jóvenes durante este período se vio también reflejado en la participación y conformación de organizaciones artístico-culturales como Crew Peligrosos y su proceso 4 Elementos Skuela, Realizadores de Sueños, Red Élite Hip Hop, Fundación Forjando Futuros, Corporación Pasolini en Medellín, Corporación Cultural Diáfora, entre otras.

5.2.4. Inicia el proceso de construcción colectiva de la memoria

Entre 1995 y 2002 hubo una serie de acciones de tipo reivindicativo y conmemorativo de la memoria de las víctimas de la violencia en el marco del conflicto armado en la ciudad. Para ello se realizaron intervenciones artísticas, marchas, plantones y placas conmemorativas a través de las cuales fue posible recordar a las víctimas y denunciar lo ocurrido.

La bomba puesta en el Parque Lleras tuvo una respuesta por parte de la sociedad, como relató una participante de los talleres de memoria. A pocos días de los hechos, se congregaron familiares, amigos, vecinos que, superando el miedo al terrorismo, realizaron un acto de memoria a las víctimas:

Pero ese sábado siguiente por la noche mucha gente se fue para el Parque Lleras y hubo como un acto en memoria de las víctimas, pero estaba todavía todo quemado. Y en todo el parque montaron un escenario y cantó Andrés Cepeda y era pues todo el mundo llorando y mis papás: vamos, vamos. [...] Entonces me llamó mucho la atención fue la gente, no sé cómo habrá sido la bomba de verdad, pero aquí la gente se fue para la calle y se fue para el lugar de los hechos a decir ¡juepucha! Es que cantaban [...] había una canción que decía que el amor es más fuerte, y la cantaban y la cantaban y la gente lloraba, pues mis papás lloraban y yo no entendía eso, pero claro, para uno como de mi edad y de pronto los que ya eran mayores de edad que podían ir a esas partes, pues, lo estaban viviendo tan en carne propia. A otros les estaba removiendo un pasado como con un delirio de persecución (CNMH, taller de memoria empleados sector financiero, mujer, Medellín, 2015).

También hubo expresiones artísticas como la jornada “Altavista pintó el dolor” en 1996, una jornada cultural para rendir tributo a la masacre de 16 jóvenes y exigir el esclarecimiento de los hechos, organizada por juntas de acción comunal, grupos juveniles y la Corporación Jurídica Libertad (Urán, 2000, página 151). En la zona nororiental, ese mismo año se colocó la placa conmemorativa por el asesinato de Silvio Salazar, director operativo de Con-vivamos, asesinado el 11 de febrero de 1996. La placa está acompañada de un grafiti en homenaje a Silvio, el cual fue realizado por Con-vivamos y por el grupo cultural y artístico Rajaleñas ese mismo año.



Restauración del mural homenaje a Silvio Salazar en el marco del día de los liderazgos comunitarios. Medellín, Barrio Villa Guadalupe. Fuente: archivo Corporación Convivamos.

Otra experiencia pionera de construcción de memoria colectiva a partir de acciones simbólicas fue “La piel de la memoria”, un proyecto interinstitucional del que participaron la Corporación Región, Presencia Colombo Suiza, la Secretaría de Cultura de Medellín y Comfenalco. Bajo la dirección de la antropóloga Pilar Riaño y la artista Suzanne Lacy y a partir de un proceso de recuperación de la historia del barrio, se impulsó este proyecto de arte público comunitario que consistió en la construcción de un bus itinerante en el que se consignaron 500 objetos significativos para los residentes del barrio relacionados con sus vivencias. Según Giraldo, “debía ser itinerante porque el reto era que recorriera los diferentes sectores del barrio que no se podían comunicar, por razones de la guerra y el conflicto que se vivía allí”, cuenta el investigador Mauricio Hoyos (Giraldo, 2016, página 43)¹⁸³.

¹⁸³ Una explicación de esta experiencia puede consultarse en Hoyos (2001).



Piel de la Memoria. Medellín, Barrio Antioquia, 1997. Fuente: archivo Corporación Región.

5.2.5. La defensa de los defensores de derechos humanos

Hacia finales de la década de los noventa, en un contexto de recrudecimiento de la violencia en la ciudad y de persecución a defensores y organizaciones de derechos humanos, se produjo una proliferación de acciones enfocadas en la denuncia, protección y defensa de los defensores de los derechos humanos, sindicalistas, estudiantes y de otros líderes sociales. Especialmente en el período 1999-2001 fue álgida la persecución contra defensores y organizaciones de derechos humanos, como la Corporación Jurídica Libertad, Semillas de Libertad Codhesel y el Instituto Popular de Capacitación, entre otros. Las formas de acción en contra de estas organizaciones no eran sólo la amenaza, desaparición y asesinato, sino la judicialización de sus integrantes, algo que no sólo pretendía deslegitimar sus denuncias y señalarlos de aliados de la guerrilla, sino también llevarlos a prisión.

La paradoja de este período es que, si bien se trata de un momento en el que surgieron múltiples proyectos, premios, alianzas y posibilidades para las organizaciones sociales, comunitarias y de derechos humanos, también aparecieron persecuciones, señalamientos y vulneraciones a representantes y miembros de estas organizaciones, quienes se vieron incluidos en las lista de los sectores previamente afectados por la violencia política, como los líderes de derechos humanos, sindicalistas y académicos. Particularmente el año 2000 llegó con la desaparición de dos líderes de ASFADDES y la explosión de una bomba puesta en su sede, precisamente cerca al lugar donde esta organización almacenaba los archivos de sus investigaciones. En 1995 surgió el Proyecto Colombia Nunca Más, un proceso iniciado por varias organizaciones sociales y de derechos humanos, convocado a nivel nacional y realizado por numerosas organizaciones sindicales, campesinas, comunitarias, eclesiales y culturales, de carácter local, regional y

nacional, que se fueron articulando a través de los equipos de trabajo de diferentes regiones¹⁸⁴. El proyecto Colombia Nunca Más terminó siendo una iniciativa para recuperar la memoria de las víctimas de la última etapa de violencia política en el país.

Hacia finales de la década de los noventa, la Universidad de Antioquia se constituyó en un espacio desde el cual estudiantes, profesores y empleados promovieron acciones por la defensa de los derechos ante el recrudecimiento de la violencia sobre la Universidad. Se destacan como hechos de gran impacto para las resistencias ejercidas desde la academia y por la defensa de derechos humanos los asesinatos de Jesús María Valle en 1998, jurista y defensor de derechos humanos, y en 1999 de Gustavo Marulanda y Hernán Henao, estudiante y profesor de la Universidad de Antioquia respectivamente.

En este contexto se recuerda la valentía y el compromiso de sujetos y organizaciones que mantuvieron el ejercicio académico y de denuncia a pesar de las violencias (CNMH, taller de memoria Equipo Basta Ya, 2015; CNMH, grupo focal defensores de derechos humanos, 2015). Después de estos asesinatos surgieron en la Universidad colectivos como el Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda que sostuvieron una estrategia de denuncia y protección de sindicalistas, estudiantes y líderes sociales. Desde el año 1999 se celebran en la Universidad de Antioquia las Jornadas por la Vida y la Libertad Jesús María Valle, un espacio académico, político y cultural impulsado por estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho como un homenaje a este defensor de los derechos humanos.

5.2.6. El valor de llamar las cosas por su nombre

Entre 1995 y 2002 los artistas, escritores y cineastas de la ciudad lograron con sus trabajos expresar lo que sucedía y capturar las particularidades de la guerra en la ciudad. Libros, crónicas, películas, pinturas y música se convirtieron en actos de resistencia en sí mismos pero también en ventanas informativas que buscaron visibilizar, denunciar, alertar, hacer comprender lo que pasaba en la ciudad, para que sus habitantes conocieran lo que estaba sucediendo (taller de memoria empleados sector financiero, taller de memoria zona noroccidental, grupo focal creadores).

En 1995 apareció la obra de Fredy Serna, joven de Castilla, estudiante de Artes de la Universidad Nacional:

¹⁸⁴ La idea de este proyecto surgió en la etapa final de la campaña denominada “Colombia Derechos Humanos Ya” realizada por organizaciones sociales y de derechos humanos no gubernamentales a mediados de los años noventa. Estas pretendían hacer una denuncia nacional e internacional de las múltiples violaciones a los derechos humanos y de la impunidad en que se encontraban. Algunas de las organizaciones que hicieron parte fueron: ASFADDES, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, Corporación Jurídica Libertad, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (MOVICE, 2008).

[...] quien empezó a decir cosas entonces impensables como: “aunque en nuestras montañas se cruzan fuerzas duras, salvajes, también son tiernas, fantásticas, llenas de encantos”. Su principal aporte [...] fue cambiar el punto de vista desde donde se estaban construyendo los relatos de Medellín. Estas inéditas apropiaciones espaciales lograron un giro no sólo estético sino político de la mirada. [...] Serna se convirtió en el cronista de la “segunda fundación de medellín” (Salazar, 1996), como ha sido nombrada la apropiación caótica de sus laderas” (Giraldo, 2016, páginas 18- 20).

Mata que Dios perdona es una obra de Patricia Bravo creada en 1996. “Es una instalación en la que el horizonte y el cielo se tiñen de rojo en tres grandes fotografías. Sobre esta mancha se reproduce una lista con los nombres de las 4.675 personas que tuvieron una muerte violenta en Medellín ese año” (Giraldo, 2015, página 21). Por su parte, en *Horizontes*, versión de Carlos Uribe, 1999:

El dedo del campesino señala una tupida selva sobre la que vuela una avioneta mientras riega glifosato sobre los campesinos antioqueños sembrados ahora de coca. [...] Uribe retomaría esta reflexión en 2010, como un mural realizado en el Centro Colombo Americano, donde el campesino de Cano se transforma en Pablo Escobar, personaje que parece ser ahora el descubridor y señalador de los nuevos y tumultuosos horizontes. Una lectura tan descarnada y polémica que a casi dos décadas de la muerte del capo causó un profundo malestar en la ciudad, con repercusiones en la prensa nacional (Giraldo, 2015, páginas 21 y 22).

La artista Gloria Posada, cuando era todavía estudiante “se había interesado por las huellas de los habitantes del campus de su universidad y había seguido las sinuosidades de sus devenires espontáneos, contradiciendo cotidianamente las rígidas pautas de movilización que imponía el orden arquitectónico del lugar”. En 1997, volvió a tratar el tema pero ya desde una perspectiva macropolítica. Entonces se interesó por los caminos de la exclusión de un país expulsor, siguiendo el rastro de la población desplazada de Sabanalarga. Tomó fotos de las manos de estos nómadas de la guerra y construyó con esas líneas nuevas rutas en la instalación-territorio *Caminos de vida* (Giraldo, 2015, página 25).

Estas obras “se habían decidido por un acercamiento a planteamientos más o menos generales sobre la violencia”, sin embargo, “puede rastrearse al tiempo en la producción artística de estos años otra tendencia a ocuparse de hechos concretos, con nombre propio, que así se proponen como símbolos más o menos complejos de la reciente historia colombiana” (Giraldo, 2015, página 29). Masacres y bombas han sido registrados por distintos artistas, aunque desde técnicas y sobre todo perspectivas diferentes, como por ejemplo: *La muerte de Pablo Escobar* (Botero, 1999), *Guayacán* (Ethel Gilmour, 1994). Las recurrentes bombas que se pusieron en las calles de Medellín también ha sido un tópico retomado por varios de nuestros artistas: *Carrobomba* (Botero, 1999), *Lo que quedó* (Bravo, 1997).

También es importante resaltar para este período otros artistas que han contribuido a esas formas de narrar la violencia y la guerra en la ciudad: Clemencia Echeverri, Ana Claudia Múnera, Jesús Abad Colorado, Taller 7, Mauricio Carmona, Germán Arrubla, Víctor Muñoz, Ana Patricia Palacios, Libia Posada. Igualmente es importante señalar iniciativas como el Programa Desearte Paz, liderado por la galería del Centro Colombo Americano desde 2002, encabezada por su director, Juan Alberto Gaviria. Este espacio fue una apuesta social de la Galería de Arte, en la que se promovía un modelo de desarrollo cultural comunitario a través de prácticas artístico-sociales, donde artistas internacionales, nacionales y locales orientaron procesos creativos en comunidad, que conllevaron a los y las participantes de la experiencia a una reflexión de las realidades del entorno que atentaban contra la calidad de vida o el libre y digno desarrollo individual y colectivo. El modelo implicó reflexionar sobre las realidades que atentaban contra la calidad de vida. La búsqueda no era sólo contribuir, por ejemplo, a la construcción de vivienda, era también recordar que desde la metáfora se sanan psicológicamente las comunidades afectadas (Giraldo, 2015).

En la literatura y el cine se encuentran obras que narran y reconstruyen la Medellín del narcotráfico. Como lo describe Alzate, las características principales de este grupo de relatos son la crudeza y la crueldad de los episodios narrados: la ciudad que se desangra, la guerra incesante y la lucha por el poder. Las narraciones del narcotráfico sintetizan una violencia en la que convergen la violencia política, la violencia armada y la violencia que se desprende de la injusticia social. Son relatos que tienen como eje la figura del joven sicario, el asesino a sueldo de las barriadas cuyas motivaciones son la situación de exclusión y el deseo de superar la pobreza, su credo el amor por la madre y su mayor contradicción ontológica la confianza en la Virgen María (Véase Alzate, 2015, página 20).

Una intervención artística que es importante destacar es la que se llevó a cabo en el Metro de Medellín durante la década de los noventa, en la que se elaboraron figuras religiosas en casi todas las estaciones. Mientras Alberto Valencia fue gerente del Metro, entre 1993 y 1998, el miedo a un ataque con bombas fue una preocupación para muchos en la ciudad, de ahí que el artista Humberto Pérez le propusiera poner Marías a custodiar el Metro para evitar que el atentado sucediera.

Las estaciones del joven metro de Medellín en plena década de los noventa fueron decoradas con representaciones de múltiples advocaciones marianas, como en los tiempos de la Colonia, ni más ni menos. Con esta acción, que repetía la tradición popular de una virgencita en cada esquina de la ciudad, se esperaba contener la desatada violencia de aquellos años. [...] En medio de esa oleada de carros bombas

y atentados, Hernán Pérez le dice al gerente del Metro: “nos van a hacer un atentado terrorista, entonces encomendémosle las estaciones a las vírgenes”. Por eso las vírgenes, esas figuras de la mamá, de la religiosidad, se pusieron allí. Se encomendó, entonces, cada estación a una virgen. Sin embargo, fue una mirada y una propuesta muy artística. Hubo vírgenes de todos los colores y de todas las técnicas (Giraldo, 2016, página 38).

5.3. La memoria como resistencia: 2006-2014

Como se vio en capítulos anteriores, durante el período 2006-2014 hubo una importante reducción del número de homicidios y un cambio en las características de la violencia. De igual forma la ciudad pudo sentir el impacto de la tregua de los paramilitares y su posterior desmovilización. Fue un período de fortalecimiento de las instituciones locales, de fuertes apoyos por parte de agencias internacionales de cooperación y de ejecución de políticas públicas con énfasis en los derechos humanos y creación de programas de apoyo a las víctimas del conflicto armado. En buena medida todo ello fue una respuesta institucional a las demandas de organizaciones sociales y de víctimas, como se mostró en el apartado anterior. Este es un escenario propicio para que la acción colectiva de las organizaciones sociales exponga en el escenario público sus demandas de reconocimiento de lo vivido durante el conflicto armado, se reivindiquen las memorias de las víctimas de ese conflicto y se reclame por verdad, justicia y reparación.

Es así como emergieron con fuerza y se consolidan acciones encaminadas a garantizar los derechos de las víctimas y resistir al olvido. Los protagonistas fueron las víctimas del conflicto armado, particularmente las mujeres y jóvenes, y sus organizaciones. Gracias a la demanda continua de estas y al acompañamiento de ONG tanto locales como nacionales, se ha logrado avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, reflejado en el diseño institucional a partir de 2005 (Muñoz, 2015). Pero también el arte, la música, el grafiti, los performance, los festivales, las pequeñas y cotidianas acciones de memoria de los familiares y amigos han hecho que en Medellín se presenten acciones profusas y variadas para llamar la atención sobre el pasado, pero visto desde el presente y con el objetivo de evitar que ocurra nuevamente.

5.3.1. En honor a nuestras víctimas, para que no nos vuelva a pasar

Entre 2001 y 2003 se presentó una agudización del conflicto armado en la ciudad, cuyo ápice fueron las acciones militares a gran escala en la comuna 13 y en la comuna 3 (ver mapa 2: Medellín por barrios y comunas). Como respuesta a estos operativos y a la violencia anterior y posterior a los hechos, los habitantes desarrollaron acciones y procesos con un sentido conmemorativo, pero también con la intención de exigir verdad, justicia y garantías de no

repetición, dadas las violaciones a los derechos humanos que trajeron consigo los operativos militares y la consolidación de los grupos paramilitares en la ciudad.

En la comuna 13, desde 2002, cada 21 de mayo y 16 de octubre se realiza la conmemoración de la operación Mariscal y la operación Orión, respectivamente. Con una gran variedad de acciones como foros, vigiliass, recorridos, performances y el Festival Revolución Sin Muertos, se conmemoran estos hechos y su significado para la población. Los jóvenes han relatado con el hip hop lo que sucede en la ciudad y pueden considerarse agentes de memoria debido a sus canciones pero también a los grafitis, fiestas y estéticas que dan cuenta de lo que pasó en el barrio, en particular sobre las operaciones militares de 2001-2002¹⁸⁵. Uno de los colectivos de hip hop que guarda la memoria en sus letras y acciones es Agroarte. Ellos combinan el hip hop con la siembra: “Esta es una apuesta de acrobacia, un grupo de raperos que enseña rap, hip hop, pero como condición le enseñan a los niños que deben aprender a sembrar, a arar la tierra” (CNMH, Recorrido Centroccidental, hombre, Medellín, 2015). Han recurrido a la siembra y a la metáfora de la tierra que da frutos para preservar la memoria. Es así como a las afueras del cementerio de San Javier crearon un jardín vertical y en cada planta se escribe el nombre de un ser querido ausente: asesinados o víctimas de desaparición forzada. Uno de los líderes de Agroarte expresa: “Es muy loco porque nosotros juntamos tradiciones normales de la gente y la metemos dentro de un contexto. Mira, nosotros no somos ni que religiosos ni nada, pero nos gusta la gente cómo simboliza la vida, o sea, los símbolos, la ritualización de la vida, o de la muerte” (CNMH, entrevista, hombre, Medellín, 2015).

¹⁸⁵ Es el caso de la canción “Amargos recuerdos”: “lo recuerdo / hay fechas memorables / cómo recuerdo / el nombre de personas inolvidables / hay historias aterradoras / de asesinos despreciables / un 21 de mayo, 16 de octubre / no se hable (...) / Mariscal y Orión / acertijos indescifrables / en calles cientos de heridos / y una lista interminable / y como todos saben / no han hallado el responsable / miembros de la autoridad / con sus verdes trajes / a diestra y siniestra / disparan con sus ideales / ideales inestables / de una guerra tan insoportable / lo mismo son de asesinos / sólo que estos son legales. / Nadie sabe qué se siente / hasta que sucede / llanto, rabia, miedo e impotencia (...)” (C.E.A., “Amargos recuerdos”).



Conmemoración Operación Orión. Medellín, 2016. Fotografía: Harold García para el CNMH.

El grafiti y los murales han sido elaborados en diferentes partes de la ciudad para hacer homenaje y memoria de personas asesinadas. El grafiti narra, interpela y cuestiona en tiempos presentes, pero también preserva la memoria de tiempos pasados y hace llamados al futuro. Para Kbala, rapero de la comuna 13, el grafiti opera como preservador de la memoria; sobre la obra *Mariscal*¹⁸⁶, explica:

[Mariscal] deja como resultado siete niños asesinados. Socorro Mosquera [...] sale a la calle con un pañuelo blanco y empieza a gritar que no más guerra. Eso genera una acción colectiva donde todas las personas de la comuna 13 desde los balcones y las ventanas sacaron pañuelos y sábanas blancas y gritaron “no más guerra”. Ese día esa acción colectiva, esa unión de la comuna ganó y la guerra, por ese día se detuvo. Cada una de las obras representa la acción colectiva con el pañuelo blanco (Giraldo, 2015, página 53).

El grafiti ha sido una expresión tan fuerte en la comuna 13 que incluso ha dado lugar a la realización de uno de los recorridos más reconocidos en la ciudad, se trata del “Grafitour”, “un recorrido histórico, estético y político” liderado por los jóvenes de Casa Kolacho y en la cual se camina por las calles de la comuna para conocer sus dinámicas. Narran las acciones violentas que la comuna 13 ha vivido, pero también, y muy especialmente en la narrativa de los últimos años, el “Grafitour” conserva la memoria de las acciones de resistencia en el territorio.

¹⁸⁶ Su nombre hace referencia a la operación militar llevada a cabo el 21 de mayo de 2002. En la obra se observan tres animales, cada uno con un pañuelo y con un significado particular: el águila, la libertad; la lechuza, la sabiduría y el conocimiento; y los elefantes, la memoria, ya que el elefante es el animal que más memoria tiene (Giraldo, 2015, página 53).





Grafitours comuna 13. Medellín, 2011. Fuente: archivo personal Jenny Giraldo.

Al occidente de la ciudad, en la comuna 6, se mantiene viva la memoria del defensor de derechos humanos Jesús María Valle¹⁸⁷, y hay diversas acciones que así lo muestran¹⁸⁸. Si bien esas marchas tienen el sentido de recordar la memoria de Jesús María Valle, también son ocasiones para activar otras demandas, para dialogar con los grupos armados del territorio y pedir que paren las fronteras invisibles y los asesinatos de jóvenes. En un acto simbólico, los marchantes llevaban ataúdes vacíos con espejos para que cada uno de los que se aproximaba a ellos viera su imagen reflejada y comprendiera que la violencia podía acabar con la suya propia. Con su acto exigían: “Ni un muerto más en mi comuna”.

Fue frecuente en este período la creación de organizaciones centradas en la recuperación de la memoria histórica de los barrios y comunas. Una de ellas fue el Comité de Impulso de Acciones de Memoria de la Comuna 13, fundado en febrero de 2012. El Comité ha liderado las conmemoraciones anuales de las operaciones Mariscal y Orión y ha acompañado el proceso de exigencia de verdad en torno a La Escombrera. Es un espacio de encuentro de diversos ejercicios relacionados con la memoria y la reparación. De esta forma buscan “que todo el que participe pueda cumplir sus objetivos aportando a su vez a la construcción de posibilidades de reflexión y reparación a las víctimas desde la memoria y la no violencia” (Comité de Impulso de Acciones de Memoria de la Comuna 13, s.f.).

¹⁸⁷ Como rechazo a la muerte del abogado Jesús María Valle y defensa de su labor, la banda de rock Parlantes grabó la canción “Camino al valle” (2005): “La primera parada / mirar el mostrador / un yogurt un pan / cuánto valen por favor / soy gotera de agua / en el espejo retrovisor / no termina la marcha / la promesa se gasta / camino eterno / es el camino al valle / el camino al valle / mi camino al valle / Jesús María Valle”.

¹⁸⁸ En 2005 se realizó una marcha por Jesús María Valle, llamada Marcha Contra la Violencia, en la cual participaron los colegios de la comuna portando una pancarta con la imagen de defensor de los derechos humanos.

Otra organización es Lluvia de Orión, una corporación que trabaja con la pedagogía de la memoria y la no repetición. Lluvia de Orión, como sus mismos creadores lo afirman, parte del concepto de la “memoria recreada”, entendida como una metodología propia que pretende acercarse “a la memoria del conflicto armado como si fuese una cantera de historias que debemos recrear”. Consideran que la recreación, en el sentido de la reelaboración de las memorias, pero también del movimiento, permite que los participantes tomen un papel activo en el presente a partir de la divulgación de dichas historias; se habla de papel activo en tanto los participantes se valen de diversas técnicas artísticas para hacer memoria (Lluvia de Orión, s.f.).

En la comuna 3, la Red de Instituciones y Organizaciones Comunitarias de los barrios La Cruz, la Honda y Bello Oriente, en asocio con el Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia (2013), realizó un proyecto que tenía como objetivo la reconstrucción de la memoria colectiva de los procesos de asentamiento y poblamiento de estas comunidades. Esta acción ayudó en la consolidación del tejido social, el autorreconocimiento como agentes de resistencia a reconstruir sus procesos de organización, de defensa de sus derechos a habitar la ciudad, de la violencia que han debido enfrentar, pero también de la resistencia civil para hacerle frente.

Hay algunas iniciativas gestionadas y ejecutadas por la administración municipal, que para algunas víctimas de la ciudad son un logro de sus reivindicaciones y demandas. Es el caso del Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado¹⁸⁹, de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas¹⁹⁰ y de la Casa Museo de la Memoria. Una de las lideresas de las víctimas de desplazamiento forzado y participante de la Mesa de Participación de Víctimas de Medellín se refirió así a la Unidad de Víctimas:

Esta movilización y organización de las víctimas en Medellín comenzó fuerte desde 2005 y así logramos que la Alcaldía de Medellín fuera la primera con una gerencia de desplazados y hoy ya tenemos la Unidad Municipal. Así logramos tener una atención diferencial del Estado, porque logramos que se nos reconociera

¹⁸⁹ El Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, creado mediante acuerdo municipal 045 de 2006, hizo parte de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín. Su objetivo era trabajar por el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado y el reconocimiento de su dignidad. Para ello el Programa trabajó desde cuatro áreas: Reparaciones y acompañamiento jurídico, oferta institucional y sostenibilidad económica, asesoría, acompañamiento/atención psicosocial y memoria histórica. Algunos de los proyectos desarrollados por el Programa de Víctimas son: “Museos comunitarios” tuvo como eje la participación ciudadana como posibilidad para la construcción de conocimiento desde la reflexión y el hacer; para ello se conformaron grupos en diferentes barrios de la ciudad con la pretensión de identificar sus patrimonios, articular los proyectos desarrollados en estos territorios y fortalecer las dinámicas grupales. El concurso “Experiencias Comunitarias de Memoria del Conflicto Armado” es una propuesta que buscó reconocer y fomentar las iniciativas comunitarias sobre memoria histórica a la vez que se fortalecían las organizaciones sociales mediante los estímulos económicos que se otorgaban. De cada comuna se seleccionaba la iniciativa con más puntaje, las cuales debían hacer parte de una de las siguientes áreas: pedagógica, medios alternativos de comunicación o creativa (literatura, artes escénicas, audiovisual, artes visuales o música) (Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, 11 de noviembre de 2011).

¹⁹⁰ En 2012, tras la promulgación de la Ley 1448 de 2011, la Alcaldía fusionó el Programa de Atención a Víctimas y la Unidad de Atención a Población Desplazada y creó en noviembre de ese año la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas como responsable de coordinar la política pública de atención y reparación a víctimas del conflicto armado en la ciudad. La Unidad continuó con proyectos como “Museos comunitarios” y “Ruta de memoria joven”, entre otros. (Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, 2013).

como víctimas con derechos y no como población de pobres históricos (Unidad para las víctimas, 2016).

Como se desprende de ese testimonio, para que estos programas funcionaran mucho antes de la Ley 1448 de 2011 fue fundamental la fuerza organizativa de las víctimas. Así también lo reconoce una funcionaria de la Casa Museo de la Memoria entrevistada:

Eso es fundamentalmente por la fuerza organizativa de las víctimas que ha ayudado mucho a que la ciudad no se quede tranquila, que la ciudad tenga ese tema latente ahí. Yo creo que pues también ayudamos mucho a que la ley se construyera, a que hubiera una respuesta ya de política pública por esa demanda que hubo. Pero el origen del programa de víctimas fue muy bello porque activó, movió y dio mucha voz (CNMH, entrevista, mujer, funcionaria de la Casa Museo de la Memoria, Medellín, 2016).

La Casa Museo de la Memoria de Medellín, inaugurada en diciembre de 2011, es un espacio que logró ser apropiado por parte de comunidades y organizaciones de víctimas de la ciudad. La iniciativa fue gestionada y puesta en ejecución por parte del Área de Memoria Histórica del Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado¹⁹¹. Algunas organizaciones de víctimas, comunitarias y colectivos culturales se han apropiado de la institución. Ellos hacen mayor énfasis en el apelativo de “Casa” que de “Museo”, porque la sienten como un lugar para estar, su punto de encuentro, discusión, construcción y ejecución de muchas de sus iniciativas de memoria y construcción de paz, además de tener un papel protagónico en las decisiones sobre el enfoque dado a los procesos a su interior.

Yo creo que la dinámica estaba, lo que faltaba era la convocatoria, yo creo que las organizaciones estaban ahí listas y dispuestas y llenas de procesos, proyectos, iniciativas y de un montón de cosas importantes, yo no creo que el Museo hubiera hecho nada particular o distinto a convocarlas y darles un lugar. Eso es un trabajo de ellas, ese no es un trabajo nuestro, pues el lugar les da resonancia y les da articulación con otros procesos y otras organizaciones, pero la convocatoria era convocarlas (CNMH, entrevista a funcionaria Casa Museo de la Memoria, Medellín, 2016).

La Casa Museo de la Memoria apoyó el desarrollo de proyectos como “Memorias en Diálogo”¹⁹², el cual surgió en 2014 con el objetivo de “dinamizar acciones tendientes a la construcción de memoria y el fortalecimiento de iniciativas de Paz en las comunas 1, 6, 8 y 13 de Medellín”.

¹⁹¹ Fue incluido en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 “Medellín es solidaria y competitiva”, en la línea 1. Medellín, ciudad solidaria y equitativa, en los componentes: Reconciliación, restablecimiento de derechos y reintegración social y económica – Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado. En este sentido, esta iniciativa es leída como una respuesta del Estado para cumplir con su deber de memoria.

¹⁹² El proceso está integrado por la Corporación Convivamos (comuna 1), la Corporación Picacho con Futuro (comuna 6), La Corporación Ciudad Comuna (comuna 8), la Asociación Cristiana de Jóvenes (comuna 13), La Corporación Pulp Movies y el Museo Casa de la Memoria.

Pero la memoria ha sido una forma de resistencia política mucho antes de la aparición de estos programas de la Alcaldía. En la ciudad abundan las marcas de la violencia y de la resistencia, es así como los grafitis, murales, altares, placas conmemorativas, vírgenes, santos, jardines han sido expresión de la memoria en los espacios de lo cotidiano, íntimo, familiar o comunitario. Todos ellos realizados por personas interesadas en mantener la memoria de aquellos que murieron debido al conflicto armado y la violencia en la ciudad (Medellín, Alcaldía, Programa de Atención a Víctimas, 2010; Arenas Grisales, 2014).



Se construyó por iniciativa del sacerdote Julián Gómez junto con habitantes del barrio, desmovilizados del grupo paramilitar Cacique Nutibara y exmilitianos. Hacía parte de un proceso de negociación entre grupos armados y de reconciliación entre estos y los vecinos del barrio. Los nombres en el mural incluyen a los vecinos que murieron en las confrontaciones entre grupos armados por balas perdidas o por cruzar fronteras invisibles, entre otras circunstancias, pero también los de hombres y mujeres que hicieron parte activa de estos grupos armados y que fueron responsables de las muertes de sus vecinos. La construcción del mural tuvo el objetivo de fortalecer los vínculos de identificación debilitados por los enfrentamientos entre los diferentes bandos. El lugar se transformó en un espacio de conmemoración. No era sólo una forma de expresión de memoria: el mural demandaba transformaciones y reconocimiento del pasado. La frase escrita en él: “En honor a nuestras víctimas, para que no nos vuelva a pasar”, dejaba claro la responsabilidad social del acto de recordar. El mural señalaba un horizonte ético al demandar que esos actos no deberían ocurrir de nuevo. No obstante, por inscribir en él tanto a víctimas como a perpetradores instauró la discusión sobre quién merecía ser reconocido como víctima y qué vidas eran dignas de ser recordadas, sobre la posibilidad o imposibilidad de reconocimiento del daño y la vulnerabilidad como factor común (Arenas y Coimbra, 2016).

5.3.2. Resistir en medio de la confrontación armada

Dadas las particularidades del conflicto en la ciudad es fundamental destacar las acciones que quisieron resistir frente al dominio de los actores armados. Tal vez una de las acciones más anclada en la memoria de los habitantes de la comuna 13, pero de igual forma en muchos habitantes de la ciudad, es aquel momento durante la operación Mariscal el 21 de mayo del 2002, cuando una multitud de personas agitaron pañuelos blancos desde sus ventanas o salieron a la calle para exigir el cese al fuego. La acción buscaba parar la guerra para permitir llevar a los heridos al centro médico. Según el Informe del CNMH sobre el desplazamiento forzado en la comuna 13 (2011), una niña se paró en la calle con un palo y agitando una sábana blanca pidió detener la confrontación. El relato quedó inscrito en la memoria colectiva de la guerra como una acción intrépida que logró detener los combates. Un joven líder de procesos comunitarios, a quien le tocó de manera directa dicha operación, compartió un relato casi heroico del momento:

La gente empezó a salir con banderas, con pañuelos, con sábanas, con manteles, con toallas blancas para que pararan la guerra, estaban diciendo: ¡Basta ya que nos van a matar! ¿Cierto? Y creo que esa es la historia que más me ha tocado y que me gusta compartirla y que me gusta contarla porque no fueron los milicianos o no fue el Gobierno o no fue la Policía o no fue [...] no fue ningún encabezado de todos que dijera: “Paren ya la guerra y que bajen ya las tanquetas”, fue la gente que tuvo el poder, fue la gente que

tuvo la fuerza de decir ¡No más! Todos al unísono, creo que es lo más rescatable y lo más importante: que todos hacemos la fuerza (CNMH, entrevista, hombre, líder comunitario, Medellín, 2015).

Menos conocida por los habitantes de Medellín, la Declaratoria de Asentamiento de Refugiados Internos es otra acción de resistencia que buscaba parar la guerra y exigir el respeto por los habitantes de esos territorios donde se llevaron a cabo operaciones militares. Fue realizada en el año 2003 por habitantes de los barrios La Honda, La Cruz, Altos de Oriente y El Pinar, comuna 3, como una manera de protegerse y resistir a las violencias generadas en el desarrollo de la operación militar Estrella 6. En la Declaratoria fue muy importante el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos y de agencias internacionales.

Según los testimonios, durante la operación los vecinos resistieron simbólicamente con banderas blancas en sus casas y denunciando públicamente lo que ocurría: “Mucha gente se unió, todos pusieron banderitas blancas en las casas, esa foto es de ese día (señala). La ACA [Asociación Campesina de Antioquia] la registra, está el video donde ellos registran el hecho, eso levantó polvorera aquí en Medellín, en Bogotá y sale a nivel internacional y se muestra qué era lo que pasaba, es que no eran ni tres ni cinco desplazados” (CNMH, entrevista colectiva comuna 3, mujer, Medellín, 2015).

En 2003 nació La Red de Organizaciones de Instituciones Comunitarias de Bello Oriente y la Red de Bello Oriente, en respuestas a las oleadas de violencia que vivió la comuna 3 en ese año debido a la operación Estrella VI, particularmente en La Honda y la Cruz, barrios conformados en su mayoría por personas desplazadas por la violencia, en especial de Urabá y el oriente antioqueño. La comunidad tuvo el apoyo de organizaciones como ANDAS (Asociación Nacional de Ayuda Solidaria), ACA (Asociación Campesina de Antioquia) y Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL); y con organizaciones internacionales como la Cruz Roja Internacional y agencias de la ONU. Los hechos posteriores a Estrella VI llevaron a que las acciones de resistencia continuaran en esta comuna:

Después de la desmovilización vino la reorganización en términos institucionales y legales de los paramilitares, nace la Corporación Democracia y otra serie de organizaciones e instituciones avaladas y constituidas por ellos [...]. Uno de los grandes desmovilizados lo que hace es ir llamando a reuniones y llamó a la junta de acción comunal de La Cruz y de La Honda que eran las únicas de la comuna que no le habían copiado en llamados anteriores. Lo que hicieron las juntas de acción comunal en ese tiempo fue ir a las organizaciones que nos estaban apoyando, la Pastoral social y demás y ellos los asesoraron. De igual manera tuvieron que ir, eran tres tipos con las armas en la mesa y decían: “bueno, ustedes tienen que hacer parte de algunas de nuestras organizaciones o tener integrantes en sus juntas de acción comunal y desde

ahí trabajar juntos, una idea muy organizativa, pero se les pararon en la raya y les dijeron que no, incluso fue alguien de la OEA a esa reunión y la Pastoral Social, cuando vieron que no iban solos sino acompañados entonces se timbraron mucho y como ellos estaban recibiendo ciertas garantías legales no podían imponer demasiado porque si no sus procesos judiciales se iban a pique entonces fueron cuidadosos, el hecho fue que La Cruz y La Honda en ese tiempo no se le arrodillaron al control paramilitar” (CNMH, entrevista colectiva comuna 3, hombre, Medellín, 2015).

5.3.3. La cultura como alternativa de vida y resistencia

El papel de la resistencia y la generación de alternativas de vida mediante diversas expresiones culturales ha sido una constante en la ciudad. Durante los años 2005-2014, las expresiones artísticas que expresaban rechazo al conflicto armado y sus actores tuvieron un alto componente musical¹⁹³ y performativo. El hip hop por esencia ha sido de resistencia y en la ciudad, además de ser un medio de expresión y de denuncia, se ha convertido en la posibilidad de articular organizaciones sociales y juveniles, de preservar la memoria de las violencias y las resistencias en la ciudad y de ofrecer oportunidades de vida a los niños y jóvenes.

En las comunas 13 y 6 cobra protagonismo el hip hop, y muchos de sus desarrollos se ligaron a la creación de organizaciones o agrupaciones musicales como Red de Hip Hop La Élite (2001), Casa Kolacho (2004), Agroarte, Red Artística y Popular Cultura y Libertad (2006), Red Cultural y Artística Comuna 5 (2009) y Red Juvenil Arte, Talento y Cultura (2012). Estas organizaciones tuvieron un doble sentido: el desarrollo artístico, ser un espacio de reivindicaciones políticas, como la preservación de la memoria; y como alternativas de vida, en tanto permiten la formación de niños, niñas y jóvenes en diversas áreas.

Casa Kolacho es un proceso “estético y político” que incluye actividades como el “Grafitour”, pero también escuelas de formación gratuita para niños de la comuna en música y arte. Agroarte combina la formación en hip hop con la siembra. Todos los sábados el colectivo sale a sembrar y enseñar a sembrar como una manera de volver a conectarse con la madre tierra. Tiene dentro de sus áreas de trabajo, Semillas del Futuro, programa en el cual no sólo participan niños, niñas y jóvenes, sino que también hay cabida para los adultos:

Semillas del Futuro, que es una metodología de renovación generacional, son chicos, chicas, adultos; [...] ¿por qué adultos? Porque en últimas Semillas del Futuro permite acentuar lo que hacemos, o sea, hacer

¹⁹³ La música ha dado cuenta del pasado y el presente, las letras de sus canciones narran el secuestro, el asesinato, la violación a derechos humanos y múltiples realidades más de la historia de la ciudad, ha servido como escenario de denuncia y resistencia, como ocurre con Mojiganga, grupo de ska-punk, que en la canción “Secuestrados” relata la condición de las personas que han sido privadas de la libertad (2007): “¿Cuánto cuesta una vida? / ¿Cuánto cuesta la libertad? / Callejón sin salida / ¿Cuánto cuesta? / (No es justo) / Condenado por salir a la calle / No hay sentencia, solamente impaciencia / Incertidumbre abrumadora / Que no deja pensar / En cualquier lugar / En cualquier lugar / No hay respeto, no hay seguridad / en cualquier parte te pueden lanzar / No hay respeto, no hay seguridad / Condenado al azar”.

lectura de lo que hacemos, sin necesidad de hacer cátedra, si no invitando también a actores, y que comprendan a través de los cuerpos, los chicos, chicas, aprendan la historia de este país a través de los cuerpos que lo han vivido, y que después si ellos deciden se referencien a los libros, hay unas alusiones en el tipo nacional que tenemos. Entonces la renovación generacional, o sea, los nuevos liderazgos, no importa si sean jóvenes, adultos, niños, pero en ultimas que cada persona entienda que en cada territorio hay que armar un pedacito, es creo que también, digamos yo como A.K.A, no quiero estar dentro de un año como cabeza. O sea, yo soy una de las cabezas más visibles pero hay que entregar, pa' que se renueve o pa' que mute, pa' que mute o desaparezca, es necesario (CNMH, entrevista, hombre, Medellín, 2015).

Una de las estrategias de los grupos armados ha sido tomarse espacios públicos o privados y ejercer un control sobre ellos. Por esto las comunidades han decidido reapropiarse de sus espacios mediante actividades como marchas, instalación de placas, realización de partidos de fútbol, reuniones comunitarias, carnavales y caravanas (Nieto, Alzate y otros, 2008); Angarita y otros, 2008). En la comuna 13, luego de las operaciones militares de 2002, se han realizado carnavales en los cuales los vecinos recorren la comuna en un acto de “traspasar fronteras” o de unir territorios. Esta movilización se realiza acompañada de consignas, disfraces, zancos, pinturas, entre otras. Se destacan también las caravanas realizadas en 2007 y en 2008, lideradas por la Red Cultural Expresarte.

Un proceso también ilustrativo de este sentido fue la recuperación de la Casa Vivero ubicada en el barrio Pinares de Oriente de la comuna 8. La Casa fue construida por la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social (CORVIDE) para que fuera un vivero. En 2005 la administración municipal entregó la Casa a la Corporación Democracia para que la administrara, pero “durante esta etapa la casa se fue convirtiendo en dos espacios, uno de día y otro de noche; de noche se daban las órdenes de desaparecer personas, se torturaba, violaba y se asesinaba, debido a esto fue empezando a reconocerse como la “casa del terror” (Comité de Memoria Zona Centroriental, 2016, página 14).

Durante 2009 y 2010, la Alcaldía reclamó esta Casa, la cual estuvo un tiempo abandonada. Posteriormente los vecinos la recuperaron para resignificarla como un lugar para las víctimas y la memoria, de encuentro de los habitantes de la comuna, sede social de la junta de acción comunal, la Mesa de Víctimas y la Mesa de Vivienda y Servicios Públicos, organizaciones que han liderado procesos de reivindicación de derechos de los habitantes de este sector. En noviembre de 2016 tomó el nombre Casa Vivero Jairo Maya, en honor al reconocido líder social y comunitario de la comuna que murió el 23 de marzo de 2016 y quien desde los años noventa articuló y lideró importantes procesos para la reivindicación de derechos y la vida digna de los habitantes de la comuna.

Otro caso de recuperación de espacios se dio en las comunas 5 y 6, con una acción de resistencia ante el toque de queda impuesto por los actores armados. Con ella, los jóvenes querían enviar un mensaje de posibilidad de disfrute de sus espacios y de defensa de su tiempo y territorio. En esta acción los jóvenes y otros habitantes de la comuna salieron por las calles en la noche con disfraces, instrumentos musicales y zancos, en una especie de carnaval que permitió hacer frente a la restricción impuesta por los actores armados. Con el tiempo, esta acción se convirtió en un proceso que en la actualidad se conoce como Colectivo Toque de Salida en 2009.

En esta misma línea se destacan acciones como el “Transbordador por la calle frente a las fronteras invisibles”, realizado desde el año 2010 en el barrio Picacho, liderada por la Mesa de Derechos Humanos de la comuna 6. En la comuna 8, en 2012, se realizó el carnaval por la vida Yo Soy Comuna 8, el cual tuvo como objetivo hacer frente a las fronteras invisibles, particularmente a la de Tres Esquinas, considerada la más antigua de Medellín.



Plegable convocatoria campamento juvenil. Toque de Salida. Barrio Picacho, 2010. Fuente: archivo Corporación Picacho con Futuro.

La toma de espacios no sólo hace alusión a los espacios físicos y materiales, sino también a espacios intangibles pero poderosos como los espacios de la comunicación:

El papel determinante desempeñado por los y las jóvenes durante la fase post-Orión radica en que asumieron la tarea de promover la comunicación, teniendo en cuenta que se trata de una práctica necesaria dentro y fuera de la comuna. [...] Decidieron ejercer su autonomía frente a los distintos actores del conflicto armado y también ante los medios masivos de comunicación, los cuales —según los y las jóvenes— ayudaron a generar la estigmatización sobre la comuna. [...] Esas son las razones que los y las justifican para que ahora hayan decidido crear medios propios, como periódicos y programas de televisión, pues, según ellos y ellas, necesitaban contrarrestar la información manipuladora de algunos medios masivos (Angarita, y otros, 2008, página 251).

Luego de Orión se crearon las emisoras Cuenta la 13 y Morada Estéreo. Los medios de comunicación comunitarios, además de narrar sus realidades han mostrado otra cara de la comuna y han buscado reducir la estigmatización, a la vez que han ofrecido oportunidades a los jóvenes mediante la formación en diferentes áreas del periodismo y la comunicación.

5.3.4. Exigir verdad, justicia y reparación

Esta es una época de reconocimiento legal de los derechos de las víctimas, en la que se da continuidad a manifestaciones de rechazo frente a diferentes victimizaciones perpetradas y se exige derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Con este propósito se realizaron acciones que van desde las exigencias legales, la realización de marchas y tomas, hasta la creación de organizaciones.

En este período se acentuó la polarización del país y ha sido difícil el diálogo entre las víctimas de diferentes actores armados. Hubo dos marchas paradigmáticas que dieron cuenta de esta polarización: la marcha contra el secuestro del 4 de febrero¹⁹⁴; y la marcha del 6 de marzo de 2008, llamada en “solidaridad con las víctimas de crímenes de Estado”, que buscó visibilizar la práctica estatal de victimización a sus ciudadanos¹⁹⁵. La primera, de carácter nacional, conocida también como “marcha contra las FARC” o la “marcha del No Más” fue uno de los eventos más recordados por lo multitudinaria y en la que se pudo advertir la capacidad de convocatoria desde las redes sociales.

Mirada desde los territorios, en este período en las comunas 6¹⁹⁶ y 13 se concentraron muchas de las acciones de defensa de la vida y rechazo a la muerte. En la comuna 13 se ha mostrado el rechazo a la violencia, a los asesinatos y al discurso oficial, según el cual en la comuna reina la paz. En el año 2009¹⁹⁷ se llevó a cabo la Caravana por la Vida, convocada por la Red Élite Hip Hop, el Colectivo Son Batá y la Red Cultural Expresarte¹⁹⁸.

¹⁹⁴ En especial se hicieron críticas por parte de organizadores de la marcha del 6 de marzo contra la marcha del 4 de febrero al considerar que esa fue una marcha manipulada por sectores políticos y medios de comunicación y excluía a las víctimas del Estado.

¹⁹⁵ Además de estas dos, durante 2008 también se realizó la marcha contra el secuestro de militares. En esta participaron 17 militares discapacitados, quienes en sillas de ruedas se movilizaron desde Medellín hasta Bogotá. Otras acciones en contra del secuestro fueron la jornada contra el secuestro realizada en la Basílica Metropolitana en 2007 y la marcha contra el secuestro, en 2011, que fue de carácter nacional.

¹⁹⁶ Con acciones como las mencionadas en “La memoria como resistencia y no repetición”.

¹⁹⁷ En 2009 se realizó la marcha: Resistencia a las formas de violencia, convocada por la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna, en la cual querían manifestarse en contra de la “guerra silenciosa” que estaban viviendo.

¹⁹⁸ Otros territorios de la ciudad, donde se han desarrollado este tipo de acciones son en la comuna 1: Marcha por la Paz, en 2010; zona nororiental: Marcha Contra La Violencia en 2009; comuna 2, la Lunada Juvenil por el Derecho a Tener Alternativas Diferentes A La Violencia, llevada a cabo durante 2010; Convidarte Festival por la Vida en Belén en el año 2012 y en la comuna 8, en Caicedo, la Marcha pidiendo por la paz, ante la guerra desatada entre los combos, en esta marcha del año 2012 se izaron banderas y telas de color blanco.

Entre las organizaciones creadas en este momento se encuentra el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

(MOVICE)¹⁹⁹, el cual ha tenido un papel activo en el acompañamiento a víctimas en sus denuncias y elaboración de memoria. Algunas de las acciones más destacadas del MOVICE en Antioquia fueron la realización de asambleas y audiencias públicas de víctimas, como la Audiencia Nacional de Víctimas en La Alpujarra en 2010 y la Asamblea Regional de Víctimas en 2013, en las cuales se documentaron y denunciaron las afectaciones sufridas.



Movice, Capítulo Antioquia. Marcha 30 de agosto, 2014. Día del detenido desaparecido. Fuente: archivo Movice.

Asimismo, son muy recordadas las acciones realizadas durante las audiencias públicas de los paramilitares. En ese momento, organizaciones de víctimas se movilizaron hacia los lugares donde se llevaron a cabo dichas audiencias para conocer la verdad sobre sus seres queridos. Estas movilizaciones fueron prohibidas por la administración municipal en 2007, cuando se desarrolló la audiencia pública de *Don Berna*, pero las víctimas siguieron manifestándose:

Si no nos dejaban ir a La Alpujarra íbamos a ir a los barrios, que en su momento ir a los barrios era muy complicado, la gente no lo hacía. Fuimos a la comuna 13 en unos buses y nos pusimos unos antifaces, unas cosas simbólicas. Le íbamos a entregar a la gente papelito y la gente de miedo no lo aceptaba, entonces lo metíamos debajo de las casas “denuncien, mire que estos son los teléfonos, tal cosa”, les dábamos algunas recomendaciones frente al tema, luego nos fuimos para la comuna nororiental Santo Domingo, y fuimos a Villa de Guadalupe donde funcionaba la Corporación Democracia. Allá estaba [...] sentado en la cancha de Villa de Guadalupe, allá fuimos nosotros y empezamos a gritarle, “asesino,

¹⁹⁹ Este movimiento tuvo como origen el I y II Encuentro de Víctimas de Crímenes de Estado, realizado en Bogotá durante los años 2004 y 2005 respectivamente.

asesino” [...] nos acompañó la Personería PBI, otra gente y estaba la Oficina de Naciones Unidas” (CNMH, entrevista, hombre, Medellín, 2015).



Plantón Mujeres de Negro durante audiencia de Justicia y Paz. Medellín, 2007. Fuente: archivo Corporación Región.

Durante buena parte de este período disminuyeron los homicidios, pero aumentaron las desapariciones forzadas, por esto muchas de las acciones estuvieron dirigidas a visibilizar este fenómeno, y también a realizar exigencias en materia de verdad y justicia. Entre estas acciones está la campaña nacional de 2006 “¿Y de los desaparecidos qué?”, la audiencia pública “La verdad sobre las desapariciones en Antioquia”, promovida por MOVICE y ASFADDES en 2008 y la audiencia preparatoria del Tribunal Internacional de Opinión sobre Desaparición Forzada, convocada por ASFADDES en ese mismo año.

En el tema de desaparición forzada se destaca la labor de los familiares de las personas desaparecidas y enterradas en La Escombrera, un vertedero de desperdicios de construcción ubicado en la comuna 13. Los hechos asociados a este sitio llevaron a la creación de Mujeres Caminando por la Verdad en 2003 y a la realización de actos como marchas, vigiliass, campañas, misas y actos simbólicos y jurídicos que pedían detener el arrojo de escombros en este lugar y, sobre todo, iniciar las excavaciones para encontrar a las personas enterradas allí. El 7 de junio de 2014 se realizó una de las vigiliass, sobre aquella ocasión se cuenta: “Nos quedamos hasta las 11 de la noche, fueron casi 300 personas. Nos llovió parejo, como desde las 3 de la tarde, sin embargo, la gente subía así en medio del aguacero” (CNMH, recorrido zona centro occidental, hombre, 2015).

Mujeres Caminando por la Verdad, colectivo de mujeres que buscan la verdad sobre lo que pasó con sus seres queridos, se ha dado a conocer especialmente por las acciones colectivas y jurídicas llevadas a cabo con el acompañamiento y la asesoría de organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad, el MOVICE, y la Fundación Social Madre Laura en una dimensión sicosocial.



Vigilia en la Escombrera, 2014. Fotografía: Álvaro Cardona para el CNMH.

El arte fue muy importante para visibilizar los daños y se vio una línea de manifestaciones artísticas enfocadas en interpelar y narrar las dinámicas y efectos del conflicto armado, ya no centradas en los actores sino en las formas de victimización y sus efectos. Libia Posada abordó el desplazamiento forzado en *Hacer casa al andar*, obra en la que inscribió en las piernas de mujeres desplazadas los recorridos e historias de sus desplazamientos, para luego realizar fotografías en blanco y negro y en gran formato.

La Corporación Región también ha narrado con el arte el desplazamiento forzado como forma de acercar los problemas y dinámicas asociadas al desplazamiento a la sociedad en general. En 2004, bajo la idea de que “las casas están hechas de memoria” se realizó una convocatoria para que las personas en situación de desplazamiento reconstruyeran imaginariamente su casa y luego se ubicaron en algunas calles de la ciudad, en el marco de la intervención “Esta es tu casa”²⁰⁰.

²⁰⁰ “24 formaleas de casas intervenidas artísticamente se desplazaron por la ciudad y cuando llegaban a determinados puntos se extendía sobre el asfalto un mapa gigante de Medellín que rodeaban las casas ambulantes. Allí pedazos de telas con la frase “Esta es tu casa” fueron entregados a los transeúntes que se acercaban, para que tejieran en el mapa gigante el punto en el que estaba ubicada su propia casa. Así, la representación de Medellín se convirtió en un mapa construido con las puntadas y las casas de todos. Fue un intercambio de ideas, pensamientos y propuestas donde 12 gestores 1 (no todos artistas) y 12 familias en condición de desplazamiento se visitaron unos a otros en sus respectivas casas, en un acto de reciprocidad y horizontalidad (Región)” (CNMH, 2015, página 29).

El Museo de Antioquia también ha realizado una labor importante para reconocer y llamar la atención, a través del arte, sobre la situación de las víctimas y sus demandas de reparación. En septiembre y noviembre de 2008 realizó la exposición *Destierro y reparación*²⁰¹, la cual llamó la atención sobre el desplazamiento forzado en Colombia, “teniendo en cuenta los costos en términos sociales, económicos y culturales que una tragedia humanitaria como estas trae consigo” (Entretenimientoplus, 13 de septiembre de 2008)²⁰².

Hasta ahora hemos visto una gama amplia de acciones colectivas y públicas de resistencia a la guerra y cómo la tradición de organización social en Medellín ha sido un factor importante para comprender las estrategias de resistencia de sus habitantes. Las marchas por la defensa de la vida y los derechos humanos, las denuncias por las graves violaciones a esos mismos derechos, las estrategias para denunciar y llamar la atención de lo que pasaba en la ciudad, el esfuerzo por demandar derechos, reclamar justicia y hacer memoria. Esas fueron las acciones de resistencia en lo público que le permitieron a muchos de los habitantes de Medellín resistir. Pero ¿cómo fue sobrevivir el día a día y convivir con los grupos armados?

5.4. Acciones de sobrevivencia y resistencia en lo cotidiano

¿Cómo sobrevivieron a la guerra las y los habitantes de Medellín directamente afectados por la violencia y las acciones de los actores armados? ¿Qué aprendizajes y transformaciones les dejó vivir en estos contextos? En este apartado veremos algunas de las tácticas de sobrevivencia y resistencia en lo cotidiano, en el día a día. La comprensión del orden, la desobediencia, los acomodos, las adaptaciones, la solidaridad, los silencios y las múltiples formas que encontraron para expresar, denunciar y cuestionar. Una variada gama de acciones de resistencia subterránea de las que habla María Teresa Uribe en su análisis sobre la resistencia civil en contexto del guerra (2006)²⁰³. Para reconstruir las acciones de sobrevivencia se recurrió a las memorias construidas y compartidas a lo largo de talleres, grupos focales y entrevistas. Lo que aquí se

²⁰¹ Para la realización del proyecto se contó con el apoyo de más de 70 entidades, dentro de las cuales se encuentran: Corporación Región, Centro Internacional de Justicia Transicional, revista *Semana*, Alcaldía de Medellín y Museo de Antioquia.

²⁰² *Destierro y Reparación* tuvo cinco ejes de trabajo transversales: antecedentes históricos, impactos del desplazamiento forzado, reparación a las víctimas de desplazamiento forzado, casos emblemáticos y destierro y refugio en el contexto internacional; y cuatro componentes: expositivo (artistas y fotógrafos internacionales), académico (seminarios y conversatorios diarios con investigadores nacionales e internacionales), cultural (conciertos, documentales, teatro, poesía, entre otros), y pedagógico (módulos educativos para colegios y escuelas con el fin de crear una reflexión sobre el destierro (*El Mundo*, 1 de septiembre de 2008).

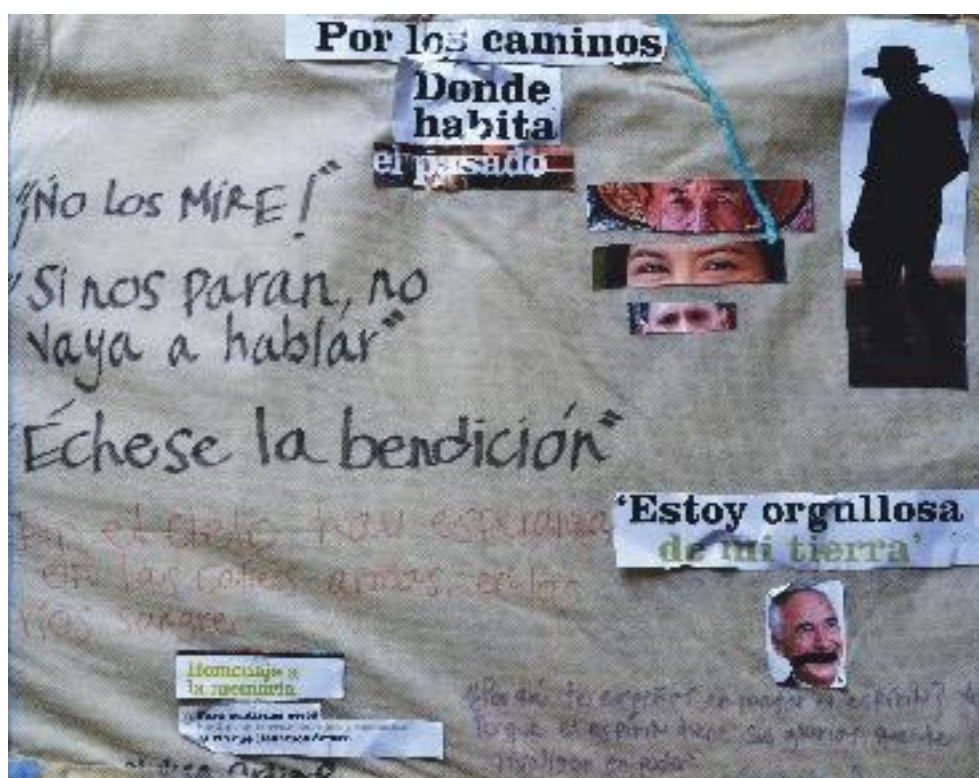
²⁰³ Para pensar las formas de sobrevivencia y resistencia invisibles y subterráneas retomamos el análisis elaborado por Uribe (2006). La autora retoma las tesis generales de James Scott en su obra *Los dominados y el arte de la resistencia* para discutir las formas de resistencia de los grupos subordinados en contextos de guerra o violencia generalizada. Para la autora, a pesar de los intentos de dominio y control de los operadores de violencia en Medellín durante las tres últimas décadas, estos no lograron imponerse completamente. La población encontró la forma de oponerse, adaptarse, responder o rebelarse. Son formas no convencionales de resistencia, que recurren a acciones ocultas o solapadas para resquebrajar el intento de dominio y encontrar la manera de negociar o de cambiar la situación en la que se encuentran.

presenta no pretende agotar el tema, pero sí busca dejar evidencia de esa memoria de sobrevivencia que buena parte de los habitantes de Medellín comparte.

5.4.1. Códigos de sobrevivencia: “aprendiendo a moverse”

¿Cómo sobrevivir en una ciudad tan violenta como Medellín? ¿Cómo transitar por territorios marcados por órdenes diversos y cambiantes? ¿Qué hacer frente a tantos y tan diversos actores armados? Un joven de la comuna nororiental daba el siguiente testimonio que resulta revelador de la situación y de qué hicieron para sobrevivir:

Yo aprendí desde muy cachorrito a moverme, a moverme como se mueven los territorios. Entonces no soy ingenuo, y a los territorios que entro y aún utilizo [...] y “es muy gonorrea”²⁰⁴ yo a veces me pongo a pensar. Pero así nos criaron, con la rutina militar y la rutina militar es no dar el chico²⁰⁵, y no dar el chico no se trata de esconderse, no. Se trata de saber qué se mueve en cada territorio, quiénes son, quiénes hablan de nosotros y tener satélites, satélites que nos digan: podemos, no podemos (CHMH, entrevista, hombre, Medellín, 2015).



“Íbamos mucho donde mi abuelita. Entonces en el camino había mucha guerrilla, yo creo que era guerrilla pues estaba muy pequeña y mi mamá me decía que no los mirara, me decía que me echara la bendición, pues cosas así. Y yo siempre me quedaba mirando y me sorprendía que nunca, como los del ejército siempre sonríen, ellos eran pues con cara pues de malos, entonces eso me parece pues algo muy importante en mi vida. Entonces puse, pues el título se llama Por los caminos donde habita el pasado y puse una frase un poquito sarcástica y es: “Estoy orgullosa de mi tierra”. Pues no es que no esté orgullosa, pero hay cosas que no están bien” (CNMH, testimonio mujer, colcha de la memoria, taller pobladores zona noroccidental, Medellín, 2015). Fotografía: Corporación Región.

²⁰⁴ “Desagradable”.

²⁰⁵ “No exponerse, no dar oportunidad de atacar”.

En Medellín los habitantes aprendieron a reconocer el orden en cual vivían. En contextos de violencia como los que se han descrito en los capítulos anteriores, con una gran diversidad de actores armados y de estrategias de poder, comprender ese orden, saber percibir sus cambios, sus matices y sus códigos, resultaba central para la sobrevivencia. Esa idea de conocer las reglas, saber cómo comportarse, qué hacer, adónde ir, por dónde caminar, cómo protegerse, cómo actuar y qué esperan los actores armados de la población, son preguntas que aparecen con frecuencia en las narraciones. Aprender a moverse dentro del territorio era central para sobrevivir.

Cuando la situación era de control por parte de un grupo armado y este se imponía a través de la violencia, lo mejor era hacer “como si no” se viera, conociera o escuchara. Las personas se acomodaban a ese orden impuesto y no expresaban públicamente su rechazo; acataban, en apariencia, sus órdenes y prohibiciones y simulaban ignorar sus desafueros. Como lo muestran muchos de los testimonios aportados al informe, se esperaba a cambio seguridad, disminución de la incertidumbre y protección a la vida y los bienes. De lo contrario, si eran identificados como testigos, serían perseguidos o incluso asesinados. El rector de un colegio en la comuna nororiental contó cómo un estudiante le salvó la vida al indicarle qué hacer en el momento en que asesinaban a un hombre en la calle:

Mucha gente se tuvo que ir del barrio porque vivían al lado de eso o porque le tocó ver, entonces los muchachos decían “no miren”. A mí me tocó el asesinato de un muchacho, y yo iba llegando a la terminal y un muchacho del colegio me alcanzó: “¿Qué es lo que está pasando?”. “No mire, no mire, rector camine pero no mire” un alumno del colegio me decía. Entonces esa es como la cotidianidad: “camine y no mire”, y mataron el muchacho, el me animaba para salvarme la vida, me decía “camine rector pero no mire, camine, camine” y yo me paralicé porque la bala que estaban disparando estaba adelante con manos cruzadas (CNMH, entrevista, hombre, Medellín, 2016).

Al discutir la situación de otro docente amenazado, otra maestra señalaba que este mostraba demasiado interés en saber asuntos del barrio y de la vida de los jóvenes. Al ser cuestionada por el rector, argumentando que esa era su responsabilidad como docentes, ella respondió: “no, aquí no se puede saber mucho, aquí hay que saber lo menos posible” (CNMH, entrevista, hombre, Medellín, 2016).

El testimonio de otro hombre, habitante de un asentamiento de desplazados nos permite ver cómo ellos, a pesar de desconocer la ciudad, supieron leer esos códigos del territorio, aplicando los aprendizajes dejados por la guerra. Este afirmaba que a pesar de su militancia en la UP en Urabá, en la ciudad no debía mostrar mucha simpatía por la guerrilla, pues sabía que cuando

perdieran el control en el asentamiento en que vivían, alguno de los vecinos podría señalarlo frente a los nuevos grupos armados. Él sabía que se trataba de soberanías inestables, en vilo (Uribe de Hincapié, 1998) por lo tanto, si quería permanecer en el territorio y no ser nuevamente desplazado, debía mantener una relación amable, pero distante, sin comprometerse (CNMH, entrevista colectiva, hombre, Medellín, 2015).

Para saber transitar la ciudad y reconocerla era frecuente la referencia a evitar transitar por ciertos lugares. A inicios de la década de los noventa, en pleno auge de la violencia asociada al narcotráfico, de los atentados con bombas y el asesinatos de policías, las personas desarrollaron una táctica que consistía en transitar por lugares alejados de estaciones y cuarteles, no pasar ni parquear cerca de los Centro de Atención Inmediata (CAI) o de patrullas de Policía, cambiarse de andén, alejarse o tomar otro camino por temor a un atentado.

La “época de las bombas” también fue recordada en función de acuerdos entre las familias y los amigos: después de las explosiones debía buscarse un teléfono público (no existían celulares ni internet) para llamar y dar reporte de vida y ubicación, además para saber dónde habían ocurrido los hechos. La radio y la televisión eran centrales, especialmente las noticias de última hora, pues funcionaban para saber dónde habían ocurrido los hechos, quiénes eran los afectados y dónde estaban los heridos.

Finales de los años ochenta y primeros años de los noventa significó para buena parte de la ciudad la instauración de los toques de queda por parte del Gobierno en 1989, pero que se autoimpusieron en la población por mucho más tiempo (CNMH, grupo focal etario, hombre, 2015). Había cierto consenso sobre asuntos cotidianos como no dejar muchos carros parqueados fuera de una casa cuando había alguna celebración nocturna, ya que las reuniones eran percibidas como amenazantes. También era preferible quedarse a dormir en otras casas en caso de que “a uno lo cogiera la noche” y así evitar salir (CNMH, taller de memoria empleados sector financiero, mujer, Medellín, 2015).

Otra estrategia de supervivencia era encontrar una manera de decir las cosas. Desde saber entablar una conversación con los actores armados para tratar de calmar los ánimos o para defender alguna posición o controvertir una orden, hasta aprender a comunicarse con otros sin levantar sospechas. En otros casos esos lenguajes cifrados se presentaban en situaciones dolorosas: la hija de una de las víctimas de la UP en Antioquia narró cómo su padre debía separarse de la familia por amenazas y cuando lograban tener contacto lo hacían mediante lo que ella denomina un “lenguaje encriptado”, para ponerse de acuerdo en un encuentro o saber cómo estaban (CNMH, grupo focal exilio, mujer, Medellín, 2016).

Luego de la desmovilización de los paramilitares en 2005, en algunas comunas los márgenes de acción para las organizaciones sociales y comunitarias se estrecharon. Además de la presión a la que eran sometidas por parte de otras estructuras organizativas promovidas por los paramilitares con el fin de ganar reconocimiento social, dichas organizaciones estaban siempre bajo vigilancia y eran estigmatizadas asociándolas a la acción de la guerrilla (Ramírez, 2008). Sin espacios para el trabajo organizativo, debieron ser cada vez más cautelosos al hablar, sabían que en público no se podía decir “cualquier cosa”, por ello crearon estrategias para comunicar lo que querían sin despertar sospechas. Este relato de un dirigente comunitario de la comuna 3 lo ilustra:

Claro, nunca se puede decir todo lo que uno quisiera, pero uno se arriesga un poco. La gente cree en uno, después de tantos años en esto no hay cómo quedarse en silencio [...] ya hemos aprendido muchas cosas. La carreta [el discurso] es la misma pero cambia según cada tema, según lo que pasa en el barrio, en la ciudad, la gente que llega [...] sino se habla aquí, ¿quién nos va a creer después? (entrevista con dirigente, comuna 3. En Ramírez, 2008, página 70).

Incluso los espacios más cotidianos, como las tiendas de barrio o los billares, dejaron de ser lugares en los cuales se podía hablar. Un testimonio de la investigación realizada por Nieto, y otros (2008) describe cómo allí debía usarse un lenguaje cifrado:

Ellos empiezan a involucrar a los muchachos menores de edad [...] donde esos grupos mandan a los muchachos a escuchar lo que están hablando las personas. Uno estaba hablando, tomándose los aguardientes, en la tertulia, cuando de pronto termina con unos muchachos poniendo cuidado. Entonces la gente empieza a detectar eso y dice “pilas”, obligándolo a utilizar muchas veces un lenguaje cifrado (testimonio de líder social. En: Nieto y otros, 2008, página 227).

Saber dónde hablar y “cómo decir las cosas” podía hacer la diferencia. Hablar directamente, nombrar los hechos y los responsables, pedir justicia, en pocas palabras, hablar claro, significó para muchos la muerte:

Igual nosotros iniciamos un proceso de mesa con Ana Fabricia [Córdoba Cabrera, lideresa de Organizaciones de Desplazados, asesinada en 2011], y nosotros tenemos que aprender en nuestro liderazgo también a preservar nuestra vida y la de nuestra familia, y la de los compañeros. Entonces [...] tenemos que saber qué terreno estamos pisando, qué vamos hablar, delante de quién lo vamos hablar, cómo vamos a hacer esa incidencia de que no se note, porque eso nos pone a nosotros en un riesgo muy latente cuando empezamos por ejemplo la defensa de los territorios. Entonces yo creo que también es un aprendizaje de todo aquello que ha pasado. Entonces uno tiene que saber con ellos, porque yo no me

puedo poner a enfrentar con él [...] esa cuestión que yo sí llamo la atención porque a veces nos emocionamos mucho en el liderazgo. Y a Ana Fabricia le decíamos a cada rato “Ana Fabricia no digas eso”, porque ella era muy latente en sus cosas que decía, en los espacios que hablaba. Entonces es como eso: para preservar nuestra vida y la de nuestras familias, nuestras comunidades. Eso nos enseña a nosotros, sin dejar de hacer la incidencia, pero cómo la vamos hacer (CNMH, taller Mesa de Víctimas, mujer, Medellín, 2015).

Otra estrategia consistió en encerrarse, “guardarse” en la casa, pues era allí donde se sentían seguros. Durante los años ochenta y noventa era frecuente hacer las fiestas en la casa porque había toque de queda en la ciudad o por el temor a los “taxis amarillos” donde circulaban los responsables de las masacres de jóvenes en los barrios o porque “era la época de Pablo Escobar y no se podía”. Varios relatos dan cuenta de cómo los niños eran obligados a encerrarse y dejar sus juegos a tempranas horas de la noche porque más tarde iniciaban los enfrentamientos. Una joven lo ilustró en uno de los talleres:

Bueno yo recordé, fui a mi infancia. Los años noventa, yo creo que era que 95 o 96 más o menos y yo vivo en un barrio que se llama París que limita con Picacho. Entonces en ese momento recuerdo que llegaba como una hora de la noche donde nos decían a todos los niños y, pues, a la gente que estaba en la calle, que ya deberíamos estar en las casas [...]. Era un asunto muy difícil porque digamos que ese espacio de la calle, de poder compartir con los niños y las niñas, en ese momento se perdía y era difícil no poder compartir, no poder estar tranquilos en las calles y no lo comprendíamos muy bien. [...] Pues 8:00 pm: no podía haber nadie en las calles del barrio. A esa hora no habían niños jugando. Este es el balón, el balón dejaba digamos de rodar en ese momento y ya (CNMH, taller víctimas, mujer, Medellín, 2015).

De igual forma en los talleres y recorridos en la comuna 13 o en los testimonios compilados en la Casa Museo de la Memoria se encuentra que la práctica de encerrarse fue usada por varias generaciones de jóvenes que encontraban en la calle y en las esquinas de sus barrios un lugar de peligro.

En aquellos territorios donde los grupos armados eran conformados por los mismos habitantes del lugar pertenecer a ciertas familias tradicionales o con algún reconocimiento social, hacer parte de la Junta de Acción Comunal, grupos juveniles, casas de la cultura o de las actividades de la iglesia, eran un escudo protector. Esas sociabilidades básicas de los barrios significaron para muchos una especie de código de protección:

No, no. Yo me sentía muy seguro y siempre me siento muy seguro. No sé si todavía lo puedo decir, pero yo en estos días estuve en un callejón con un amigo allá tomando unas fotos y yo dije: si se me acercan

esos manes yo les digo “parce yo soy sobrino de Irma, soy de la casa de doña Blacina”, la familia era respetada de alguna manera, nos generaba un blindaje (CNMH, entrevista, hombre, Medellín, 2015).

En ocasiones la familia ejercía cierta presión para que los jóvenes buscaran otras alternativas, infundían en ellos la idea de que eran diferentes, que podían pensarse por fuera de la realidad que se les imponía en el barrio. Estudiar, trabajar, buscar “buenas compañías”, dedicarse a la música o al arte. Todo con el fin de mantenerlos por fuera de las dinámicas violentas. Este relato es revelador en ese sentido:

Ahí en Andalucía a mí no me dejaban juntar con nadie de la cuadra. Habían familias muy particulares: había una familia que le decían “los cagaos”, había otra familia que les decían “los marcianos”. Entonces mi mamá me decía: “usted no se junte con nadie por aquí, usted es distinto, estos son una mata de gamines”. Entonces mi infancia fue: mi hermana se va a estudiar primero que yo a coger la escuela y yo lo que hago es pasar más tiempo con mi mamá y jugar solo, entonces parte como de mi manera de ser se construyó fue ahí, jugando solo ¿sí o qué? (CNMH, entrevista, hombre, Medellín, 2016).

5.4.2. Resistencias subterráneas: “hacerle el quite”

En Medellín no sólo sobrevivieron, también resistieron. El trabajo de campo reveló una serie de acciones individuales o de pequeños grupos para hacer frente al dominio de los actores armados, recurriendo a tácticas de negociación, cuestionamiento, desobediencia, oposición frente a órdenes, imposiciones y castigos considerados injustos, excesivos o abusivos. Intentaban poner un límite, interpelar la pretensión de control de sus vidas y de su entorno. Para algunos representaron costos muy altos en términos de vidas humanas, pérdida de sus propiedades, desplazamiento o inseguridad. Eran por lo general actos aparentemente insignificantes, pero aun así las personas los recuerdan hoy como acciones de resistencia que tienen el valor de la disidencia, la desobediencia y el cuestionamiento.

Las y los habitantes de la ciudad debieron enfrentar a los actores armados sin más recursos que la palabra. Eran conscientes de su vulnerabilidad, sin embargo confrontaron, se negaron a obedecerles o pusieron en riesgo sus vidas para defender su dignidad, continuar con su trabajo, defender la vida de familiares o vecinos, propiedades o reclamar por sus derechos. Aunque los grupos armados lograron establecer formas de dominación sobre los territorios y los habitantes, también debieron crear mecanismos de mediación. Eso abría un margen para la negociación y la interpelación.

El testimonio de una mujer transexual muestra en qué forma hacerse respetar era una posición de confrontación directa, posesionándose activamente en lugar de evadirlos o invisibilizarse. Este

desafío frente a la pretensión de control sobre su vida fue para ella una forma de reivindicar su orientación sexual e identidad de género, marcar una posición y demandar respeto. Ella, en lugar de evadirlos, los enfrentó:

Cuando ellos saben que no tienen el poder del miedo sobre uno se acobardan o al menos se frenan. Yo ya tenía una posición de enfrentamiento porque ya había pasado por eso, bueno yo ya no soy su mariquita, ya soy una marica. Ah ¿qué tal cosa? pues entonces nos damos. Las cosas empiezan a cambiar por cómo me paro frente al otro pero no quiere decir que uno ya pueda todo, sino que empiezan a verlo de una manera diferente (CNMH, taller LGBTI, mujer, Medellín, 2015).

En Medellín las personas de sectores LGBTI debieron recurrir a diversas formas de resistencia. Desde negociar con los grupos armados para que les permitieran habitar en el territorio o conservar sus relaciones afectivas, convertirse en sus amantes, ocultar su orientación sexual y su identidad de género, hasta desafiar abierta y públicamente esos poderes y sus amenazas. Así lo cuenta el testimonio del informe del CNMH *Aniquilar la diferencia* (2015). Un caso relatado allí muestra una acción de resistencia simbólica frente a las amenazas de un grupo desmovilizados:

[Nosotros] le hicimos como una contrarrespuesta [a los panfletos], sacamos un nuevo panfleto pero como al contrario, [decía]: “No queremos en nuestro territorio a los bandidos”, como ese tipo de cosas así. También lo hicimos, colocamos [en el barrio] el que ellos enviaron y colocamos el de nosotros, entonces nosotros nos calentamos mucho. Eso es lo que nos ha dado como el reconocimiento en la comuna frente a los otros líderes (CNMH, Jhon, hombre gay, 28 años, entrevista, 2 de agosto de 2014; CNMH, 2015, página 377).

Esta acción les trajo el reconocimiento de otros hombres y mujeres líderes de sectores LGTBI y de los líderes comunitarios, puso en evidencia las amenazas que recibían y fue un desafío simbólico al poder de esos grupos.

Son significativos los testimonios de personas que enfrentaron a los actores armados para defender la vida de sus vecinos. Un hombre habitante de La Loma, narró cómo sus vecinos evitaron que los paramilitares lo mataran: “Ellos no me mataron porque unos vecinos que ya habían sufrido el asesinato de sus hijos, salieron muy valientemente y los enfrentaron, sobre todo una muchacha, la hija de [...]. Salieron los dos y le dijeron reiteradamente que yo no tenía nada que ver” (testimonio, hombre, base de datos Casa Museo de la Memoria).

Un comerciante del barrio Santo Domingo Savio debía enfrentar constantemente los abusos de los grupos armados. Era a ellos a quienes debía pagar el arriendo del local, no a su dueña, iban al local a consumir los productos sin pagar, hasta que un día los descubrió robando energía de su local comercial para otros usos. En ese momento los enfrentó: “Necesito hablar con ustedes” y no salió nadie, no salía nadie y yo “ah, siempre les da miedo, ¿cierto?, siempre temen de uno ¿cierto? Por qué no frentean a uno y le dicen”. Pero algunos días después llegaron los mismos hombres y le ordenaron que los acompañara, eran órdenes del “patrón”. El hombre cuenta como lo retuvieron durante un día:

No, me tuvieron al pie de un majol [sic] ese día, eso fue antes [...] entonces llegó otra gente amigos del barrio y vecinos dijeron “yo no creo que ustedes hagan eso con ese señor, para nosotros es un señor y no tienen ese derecho a hacer eso, muy mal hecho me parece”. Yo les dije “primero muerto que meterme a ese majol”. “¿Sí?” y se paró por allá. Al mucho rato que vio que molestaron y bregaron, yo le dije “que pena, yo no me dejo”. Se paró, se recostó por allá a un poste de luz y a lo último le dijo “sabe qué, vámonos, déjelos, vamos”. Y ya después, ese día del último problema ese, que fue definitivo pa’ no volverme dejar ir al barrio y amenazarme (testimonio hombre, base de datos, Museo Casa de la Memoria).

Este hombre debió abandonar su local comercial y desplazarse del barrio. Una mujer del barrio Santo Domingo no tuvo tanta suerte. Interpeló a un miliciano que había amenazado a su hijo de muerte por el simple hecho de burlarse del perro de su esposa. Frente a lo absurdo de la situación la madre del joven va hasta la casa del miliciano y lo interpeló: “Pasó eso, yo fui y lo busqué y le dije: que como era que si él era novio mío, marido, esposo o algo pues conmigo, que él iba a llegar a mi casa a sacarme las cosas, que si el perro se moría que me lo cobrara a cuotas [...]” (testimonio, mujer, Casa Museo de la Memoria). A pesar de todo, el miliciano cumplió su amenaza y asesinó al hijo de la señora.

Se interpelaba al actor armado en especial cuando se le conocía y/o era del barrio, confrontando sus decisiones, amenazas o comportamientos. Sin embargo, no siempre daba resultado, como vimos en el testimonio anterior. Del mismo modo el testimonio de una mujer de la comuna 13 nos muestra los altos costos que implicaba enfrentar a los grupos armados. Ella narra cómo evitó que se llevaran a un grupo de niños que supuestamente iban para una actividad cultural, pero ella suponía iban a ser reclutados por los grupos armados, como le había ocurrido antes a su hermano menor. Ella enfrentó al hombre encargado de llevarse a los niños y les ordenó bajar del bus. Él la amenazó, pero ella no permitió que se llevaran a los niños. Días después esos hombres entraron a su casa y la violaron como castigo, según ella, por su desafío (CNMH, testimonio, mujer, 2016). Como se ve, las mujeres interpelaban a los grupos armados, desafiaban su poder a

través del uso de la palabra y de su lugar de madres. No obstante, ellas fueron también objeto de múltiples formas de violencia.

A pesar del temor que los grupos armados producían, las personas trataron de hacer algo, de defender a los suyos, de hacer evidente lo arbitrario de los actos de los grupos armados. Un joven de la zona nororiental narró cómo su familia, durante los inicios de la década de los noventa, señalaba con desconfianza a los grupos de milicianos que recién empezaban a conformarse en el barrio, les extrañaba que intervinieran en asuntos familiares o de vecinos y pretendieran asumir la posición de autoridad. Como señal de su inconformidad no les permitieron el acceso a los programas y locales donde funcionaba la organización social de la cual eran parte:

Recuerdo que una cosa que se comentaba entre mis tíos y mis papás que no les gustaba, era que ellos empezaban a meterse en problemas familiares, en lo doméstico. Cuando había un papá agresor y esas cosas, entonces se metían a dirimir sobre los hijos, los hijos malcriados, a los que no les prestan atención en la casa. Y empiezan a hacer los Festivales de la Cerveza, que son como las peñas culturales que hacían, donde hacen sancochos, juegos para los niños, se reparten regalos en navidad, ellos eran mucho de esa onda también. Ellos [los milicianos] hablaban que estaban por la gente, por el bien de la comunidad. Yo conocí como la perspectiva de mi familia, mi familia trataba de evadirlos, nunca les permitió reunirse en la fundación, ellos se pararon en la raya, ustedes por un lado y nosotros con el trabajo que estamos haciendo nosotros (CNMH, testimonio, hombre, Medellín, 2015).

También en el corregimiento de La Loma las y los habitantes fueron enfáticos en señalar que, si bien los milicianos y paramilitares hicieron presencia en el territorio, lograron mantenerlos al margen de sus actividades. Un líder comunitario nos describió ese esfuerzo:

Incluso como la época de las milicias, los milicianos quisieron sentarse con los de la Mesa de Trabajo allá, y nosotros no lo permitimos. Hubo personas de la Mesa de Trabajo que se pararon en una de las reuniones y dijeron: si esa gente llega acá, hasta ahí llegamos nosotros. Entonces [...] pero ahí ya había una decisión de la Mesa de que no, y lo que hacían ellos era darnos [alrededor de la reunión de la Mesa de Trabajo Barrial] vuelta, mirar quiénes estaban, mirarnos, pero en ningún momento nos llenó eso de temor, ni de miedos y continuamos los trabajos sean con dos personas, tres, diez, veinte, los que llegaran en su momento (CNMH, taller La Loma, hombre, Medellín, 2015).



“En la comuna 9 les llegaron unos panfletos que decían que no se podía ir a los parques, que no se podía salir a determinadas horas. Entonces nos reunimos un grupito de amigos (...) sacamos una especie de panfleto que decía lo contrario: que no nos dejáramos intimidar, que hay espacios y que no nos pueden asustar tanto. Entonces lo que hicimos fue: conseguimos el fogón, la pipeta y nos íbamos (...) entonces poníamos el fogón para hacer un promedio de cien cafés o chocolates, pues depende de lo que hubiera en el billete. Entonces nos reuníamos alrededor mientras nos preparaban el chocolate, siempre en los parques y nos pasábamos dos o tres horas en el parque tratando de sobrepasar la hora que habían dicho. Sí, entonces por eso le ponía *Resistencia con café, pan e historia*” (CMH, testimonio hombre, colcha de la memoria, taller con hombres, noviembre de 2015). Fotografía: Corporación Región.

Realizar las actividades culturales y organizativas era entendido por las y los habitantes como una forma de resistencia, vencer el temor a reunirse para realizar una actividad cultural o sobreponerse al miedo que les producían los asesinatos en los días previos, era demostrarles que no lograban controlar las dinámicas del barrio. Si bien no expresaba un discurso público de resistencia, en su interpretación ese seguir con la vida fue una forma de resistir:

Si no se hacen los eventos culturales, en una parte donde hay conflicto armado, es como darle razón a los malos [...]. Entonces eso es una forma de resistir, a través de la cultura, la otra es: si hoy asesinan tres o cuatro personas en La Loma, y mañana hay un evento yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo dejar de hacer el evento, es que no puedo, porque sería un irrespeto a la comunidad, eso no nos funciona. Entonces mire, a través de la cultura, a través de los programas sociales podemos erradicar la fuerza de los vándalos (CNMH, taller La Loma, hombre, Medellín, 2015).

Un líder comunitario de la Loma narró cómo debió enfrentar a los grupos paramilitares que lo acusaban de ser aliado de las milicias por aparecer en algunas fotografías participando de actividades donde estaban también algunos milicianos. El líder enfrentó los señalamientos del comandante paramilitar exigiendo respeto por su trayectoria como líder comunitario, llamó la

atención sobre el reconocimiento social que tenía dentro de la comunidad y el respeto ganado por su trabajo social. Afirmaba que a pesar del reclamo del comandante de las autodefensas, logró “salvarse” porque no salió huyendo, se mantuvo en el territorio confiando en que su trayectoria social quedaría demostrada frente a este nuevo actor armado que hacía presencia. La defensa de su trabajo, el hecho de mantenerse en el barrio y de responder frente a los señalamientos y cuestionamientos de los paramilitares fue, según él, lo que lo mantuvo con vida (CNMH, testimonio hombre, taller La Loma, 2015). De igual forma un líder de la junta de acción comunal en el barrio 8 de Marzo que intentaban organizar las fiestas comunitarias por el aniversario del barrio, contó lo difíciles que resultaban las negociaciones, pues eran tanto con ELN como con AUC. Pero las fiestas eran la única forma de integrar a la comunidad, de mantener el contacto con los pobladores y de reactivar los lazos de confianza y reconocimientos con sus líderes tradicionales. Eran pequeños espacios en los que por cortos períodos de tiempo ellos lograban nuevamente ejercer su liderazgo, recordarles quiénes eran y lo que habían logrado. Estos eventos permitían, además, socializar informaciones sobre el desarrollo de algunas actividades barriales y gestiones ante organismos gubernamentales.

Dábamos algún mensaje, algún logro como el bachillerato nocturno, comentábamos lo nuevo que habíamos logrado, hacíamos un recuento de la historia del barrio, eso lo hacíamos y lo seguimos haciendo. Después de las fiestas de aniversario las cosas volvían a la calma, ellos seguían con su dominio (testimonio líder comunitario. En Nieto y otros, 2008, página 224).

Esta actitud no es una acción menor si consideramos que los grupos armados impusieron estrategias de terror para generar miedo y silenciar a los habitantes. Dicha interpelación y confrontación es directa, pero no involucra acciones violentas. Los habitantes del asentamiento de La Honda, comuna 3, narraron la manera como debieron enfrentar a los paramilitares desmovilizados cuando estos pretendían entrar a hacer parte de las organizaciones sociales. Si en un primer momento, cuando detentaban el poder armado, la táctica era no mostrarles miedo, en este segundo momento, cuando estaban desmovilizados y trataban de integrar sus organizaciones, la estrategia era no reconocerlos y hacer públicas y conocidas sus intenciones, por ello la importancia del acompañamiento institucional:

Hay algo y es que después de la desmovilización vino la reorganización en términos institucionales y legales de los paramilitares [...]. Desde el 2005-2006 hacen un llamado a todas las juntas de acción comunal de la comuna 13, y en todo Medellín yo creo, en Santa Inés, en Manrique. Uno de los grandes desmovilizados lo que hace es ir llamando a reuniones y llamó a la junta de acción comunal de La Cruz y de La Honda que eran las únicas de la comuna que no le habían copiado en los llamados anteriores. Entonces lo que hicieron las juntas de acción comunal en ese tiempo fue ir a las organizaciones que nos

estaban apoyando, la Pastoral social y demás, y ellos los asesoraron. De igual manera tuvieron que ir, eran tres tipos con las armas en la mesa y decían: “bueno, ustedes tienen que hacer parte de algunas de nuestras organizaciones o tener integrantes en sus juntas de acción comunal y desde ahí trabajar juntos, una idea muy organizativa”. Pero se les pararon en la raya y les dijeron que no, incluso fue alguien de la OEA a esa reunión y la Pastoral Social. Cuando vieron que no iban solos sino acompañados, entonces se timbraron mucho y como ellos estaban recibiendo ciertas garantías legales no podían imponer demasiado porque si no sus procesos judiciales se iban a pique, entonces fueron cuidadosos. El hecho fue que La Cruz y La Honda en ese tiempo no se le arrodillaron al control paramilitar. Igual siguieron las organizaciones brindando apoyo (CNMH, entrevista colectiva La Honda, hombre, Medellín, 2015).

Las personas intentaron poner un freno, marcar un límite, de manera individual o colectiva, aprovechando actos públicos o hablando directamente con ellos en sus casas, intercediendo por sus familiares o por los vecinos para controvertir órdenes, para impedir su presencia, para reclamar por sus actos. Tanto frente a grupos armados consolidados en el barrio, como frente a aquellos que recién llegaban e intentaban someter a la población con el miedo.

Desobedecer era una forma de resistir: “Ellos han aprendido es cómo hacerles el quite y cómo mejorar sus condiciones, eso se centra mucho en cómo mejorar su vida” (CNMH, entrevista, mujer, antropóloga investigadora del desplazamiento forzado, Medellín, 2016). Tal vez esta frase ilustre bien en qué consiste la desobediencia en contexto de dominación. Así, por ejemplo, encontramos testimonios de personas que prefirieron desplazarse antes que obedecer o, por el contrario, aquellos que decidieron quedarse como una forma de desobedecer las órdenes de abandonar sus casa.

Una mujer en la zona nororiental contó la historia de cómo desobedeció la orden de abandonar su hogar y optó por encerrarse en su casa y no salir más para que pensarán que ya no vivía nadie en ella (Patricia, entrevista. Museo Casa de la Memoria. Habitante del barrio popular 2). Esa decisión de quedarse a pesar de todo y atrincherarse fue también practicada por muchos empresarios de la ciudad durante los años ochenta y noventa. A pesar de la violencia del narcotráfico, del riesgo inminente de que sus empresas fueran compradas por los grupos de narcotraficantes, de tener que enfrentar cambios sustanciales en sus estilos y ritmos de vida para protegerse y proteger a su familia, los empresarios decidieron permanecer en la ciudad. Como afirmaba un empresario, ellos se atrincheraron en las mismas instituciones que habían creado para proteger sus intereses gremiales a inicios de la década de los ochenta:

Porque sí hay una amenaza clara a la estabilidad empresarial de Antioquia, sobre todo el Valle de Aburrá, y yo lo siento mucho cuando me toca hablar de estas cosas: sirvieron esas amenazas en que la gerencia no se fue de aquí. Se atrincheraron en Proantioquia y en esas instituciones; comenzaron a

arroparse y ahí sí aparecieron los gremios. Y como la gerencia no se fue de aquí y, por ejemplo, estas empresas estaban agonizando [...] y un rico comprando y yo bregando a defenderme aquí y entre toda esa solidaridad que se creó nace el GEA que antes se llamaba Sindicato Antioqueño (Lopera, 2016, páginas 16-17).

La resistencia acabó por ser un aprendizaje social y familiar. Uno de nuestros entrevistados afirmó que le llamó la atención a su hijo para que evitara involucrarse demasiado con las milicias. Hacer como si obedeciera, pero no involucrarse de lleno con ellos, pues tenía la certeza de que en cualquier momento ese poder no estaría presente y serían las mismas personas del barrio las encargadas de señalarlos como colaboradores. Pero de la misma forma, cuando hicieron presencia los paramilitares él cuenta cómo simulaban aceptar su dominio, pero no cumplían las normas ni acataban sus mandatos:

Hubo muchas formas de resistencia mientras pasaba todo eso [...] con este señor que era de un bloque paramilitar X. Él era presidente, a mí me contaban que cuando él estaba, mucha gente no iban a la asamblea, ellos se ponían de acuerdo, lo deslegitimaron y la Alcaldía no decía nada. Entonces lo que empieza es una desobediencia entre ellos para irlos sacando y luego retomaron una junta [...]. El asunto es que una cosa que dijeron en Medellín que dolía mucho era que todo el mundo se había arrodillado a los paras y eso no fue cierto y lo digo con mucho orgullo que lo que fue La Cruz y La Honda lograron resistir sin arrodillarse, eso fue muy bonito (CNMH, entrevista colectiva La Honda, mujer, Medellín, 2015).

Las diversas trayectorias de las víctimas les permitieron acumular aprendizajes en su recorrido. Así, una mujer narró el momento en que las personas de un barrio, la mayoría víctimas de la violencia se pusieron de acuerdo para no legitimar la autoridad de los grupos armados. La decisión consistía en no acudir a ellos para resolver sus problemas:

Entonces cómo vamos a solucionar el que los combos no vengán a solucionar nuestros problemas, de que los combos no sean los que vengán a solucionar nuestras dificultades. Porque si nosotros empezamos a que ellos sean parte de nuestras vidas, entonces ¿cuándo vamos a salir de ese punto donde ellos tienen la potestad sobre donde vivimos, sobre la familia? Entonces prohibido ir a poner quejas, prohibido ir a solucionar problemas con ellos, eso también nos puso a pensar: vamos a sentar y vamos a ver cómo solucionamos el conflicto del ruido, de que esto, que lo otro. Entonces empezamos hacer todas esas charlas y el encuentro de nosotros es muy chistoso porque se lavan los bloques cada 10 o 15 días y ahí nos contamos todo, y ya uno es con la emoción de que llegue ese día porque cada uno con la escoba, con el límpido se van contando todo, decimos que ha pasado, pero fue una forma de decir que quitarnos todo esto (CNMH, taller Mesa de Víctimas, mujer, Medellín, 2015).

Encontramos estas formas de interpelación y confrontación a actores armados en muy diversos sectores: profesores universitarios que se enfrentaron a grupos de encapuchados, maestros de instituciones educativas públicas que evitaron que hombres armados entraran a los establecimientos o se llevaran consigo a estudiantes o profesores, grupos de jóvenes (punkeros antimilitaristas) y líderes sociales que realizaron sus actividades culturales o de celebración muy a pesar de las órdenes de mantenerse en casa o de no usar el espacio público.

5.4.3. Lugares de refugio: “yo sobreviví gracias a...”

Hay lugares de la ciudad marcados por la violencia y el miedo, sitios por los que pasar causa escalofrío sólo con imaginar las cosas que allí ocurrieron y que fueron señalados en los ejercicios de memoria realizados: las casas de pique, las canchas, la esquina, el F2 en Belén, por mencionar sólo algunos. Pero hay otros que significaron lugares de refugio, de posibilidad de escape y de vida: las casas de la cultura, las casas juveniles, las organizaciones culturales, las escuelas de música, los colegios, universidades, bibliotecas, iglesias y las familias o grupos de amigos se convirtieron en lugares estratégicos que permitieron encontrar una alternativa a la violencia. Es importante destacar algunos de los relatos que dan cuenta del significado y la importancia de esos lugares. Fue allí donde el germen de la resistencia cotidiana frente a la violencia dio su fruto, fue allí donde se gestó la idea del poder de lo colectivo como resistencia. Esos espacios que tuvieron su origen en la tradición del convite, del trabajo comunitario, de la construcción colectiva, tan propio de las comunas de la ciudad, permitieron que pervivieran otro tipo de sociabilidades, otras formas de concebir la relación con los otros y con el territorio.

Instituciones como Ratón de Biblioteca, el programa de Escuelas de Música, la Escuela Popular de Arte, la Casa Rosada en la comuna 13, Casa Kolacho, entre muchas otras, generaron en los jóvenes que los frecuentan una posición diferente frente al mundo:

Lo chimba²⁰⁶ de Ratón de Biblioteca era que todo era literatura, había unas promotoras de lectura. Unas locas a mí me leyeron Anaïs Nin a los catorce, descubrí a Bradbury, descubrí a Juan Rulfo, descubrí unas bombas, y dejaban llevar los libros para la casa, y era gratis, entonces te llevabas cuatro o cinco libros y eso era uff [...]. Ellos ya cuando me vieron que yo era tan entroncito entonces ya me hicieron del parche [...]. Entonces fueron como un montón de lugares donde yo llegué y donde esos adultos me dieron un sí, como una autonomía para hacer cosas ahí (CNMH, entrevista, hombre, habitante comuna nororiental, Medellín, 2015).

²⁰⁶ “Lo emocionante, lo interesante”.

Fueron muchas las ocasiones en las cuales escuchamos la frase “yo sobreviví gracias a la biblioteca”, “gracias a la Fundación”, “gracias a la Corporación”, esos lugares que propiciaron otro tipo de sociabilidades más ligadas a las solidaridades, la confianza mutua, las artes, la cultura, la música, el teatro, la danza le permitieron a los jóvenes encontrar otras formas de relacionarse y de habitar sus propios territorios.

El testimonio de un hombre sobre los años ochenta es revelador sobre lo que significó el encuentro con esa otra opción: relató cómo su contexto familiar y barrial estaba marcado por la violencia, pero él supo encontrar en la lectura, los grupos culturales y las bibliotecas populares un espacio propio:

Una de las cosas que me ayudó muchísimo fue haberme vinculado a proyectos culturales desde los 14 años, de educación popular, de bibliotecas populares, de escritura, de lectura. Me parece que eso fue muy significativo y le puedo decir que casi todos los que sobrevivimos nos integramos a esos procesos de grupos juveniles, de organizaciones artísticas. O sea, eso me marcó y me llevó a ser profesor y a tener vocación de maestro y ese es mi horizonte porque siento que hay un compromiso muy fuerte como hecho reconstructivo y constructivo de otras posibilidades. Yo diría que soy hijo de una propuesta de educación que fue muy perseguida pero funcionó en los barrios populares (CNMH, taller mayores de 40 años, hombre, Medellín, 2015).

En el recorrido por la comuna noroccidental, la Casa de la Cultura de Castilla, la Biblioteca Popular de la Esperanza, la Fundación Picacho con Futuro, la Corporación Simón Bolívar, Casa Mía, los bares de rock, fueron nombrados como lugares de refugio, espacios que le permitieron a los jóvenes expresarse culturalmente, en una comuna donde el rock y el punk tenían una gran fuerza.

Los grupos juveniles liderados por la Iglesia fueron también espacios donde los jóvenes se sentían protegidos y respetados: “Entonces casi que el refugio de uno era Pastoral Social o ahí con los grupos juveniles y como que yo pienso que en algún momento eso también hizo que la gente lo respetara a uno, pues porque veían que uno era una buena persona” (CNMH, testimonio, hombre, 2015). Esa idea de que ciertos lugares les proporcionaban un blindaje, un aura protectora, fue también enunciada por jóvenes hombre y mujeres que hacían parte de organizaciones sociales, casas juveniles y bibliotecas populares.

Las bibliotecas no sólo fueron un lugar alternativo frente a la violencia, literalmente se convirtieron en lugares de refugio frente a la guerra. La Biblioteca Comfenalco Centro Occidental en la

comuna 13²⁰⁷ fue un ejemplo de resistencia en al menos dos aspectos: por permanecer abierta y funcionando a pesar de los fuertes enfrentamientos entre grupos armados de la más diversa procedencia, y por ofrecer una alternativa de vida frente a la guerra y por ser lugar de refugio y protección en medio de los combates. En varios testimonios los habitantes de la comuna 13 hicieron hincapié en el hecho que la biblioteca fue la única institución en permanecer abierta a pesar de la intensidad de los conflictos. Pero los bibliotecarios no sólo mantuvieron la biblioteca abierta, llevaron a cabo muchas acciones de resistencia frente a la guerra, en particular tratando de hacer de la biblioteca un lugar seguro frente a la violencia. Desde lo más básico, que era qué hacer en el momento de los enfrentamientos armados: cerrar las puertas para evitar que los combatientes entraran, ubicar un lugar seguro debajo de las escaleras para resguardarse, alejar a las personas de las ventanas, llamar a las casas de los niños para avisar que estaban a salvo y sólo cuando el enfrentamiento terminara los niños podrían salir. Hasta mantener una buena porción de agua aromática para darle a los usuarios e intentar tranquilizarlos. Durante los enfrentamientos era también común que a los niños les presentaran películas infantiles con el volumen alto para evitar que escucharan y así aislarlos de la situación.

Durante los días siguientes a la operación Orión, la biblioteca Centro Occidental de Comfenalco prestó un servicio esencial a la comunidad para acceder a la información básica y ubicar a sus familiares heridos o presos, lograr denunciar o hacer respetar sus derechos:

El Servicio de Información Local se volvió como un referente, “vea mi hijo no aparece, vea mi niño no sé qué, se lo llevaron no sabemos dónde está”. Entonces, claro, nosotros vamos a llamar a la Procuraduría, vamos a llamar a la Defensoría del Pueblo. Nosotros con ese teléfono todo el tiempo tratando de ubicar la gente llamando hospitales, a las clínicas que estaban ahí cerquita a ver qué heridos había ahí, yendo a los entierros entonces claro la gente nos veía en todo eso y decían estos manes son de aquí, estos son de nosotros (CNMH, grupo focal bibliotecólogos, hombre, Medellín, 2016).

Desde antes, las y los funcionarios de la biblioteca intentaron crear un referente diferente al de la guerra para sus usuarios, crearon espacios lúdicos, recreativos y formativos que representaban una oferta cultural en la comunidad.

“El estudio” como lugar de refugio, la idea de “salir adelante” fue un referente frecuentemente asociado por los testimonios a las formas de resistencia y sobrevivencia. Resulta revelador el testimonio de un joven de la comuna 13 que relató la violencia sexual sistemática de la cual era

²⁰⁷ Inaugurada el 21 de diciembre de 1995, hacía parte del plan para el fortalecimiento de las bibliotecas públicas de la Consejería Presidencial Para Medellín y el Área Metropolitana y la Alcaldía de Medellín, las cuales convocaron a participar a las Cajas de Compensación Familiar.

víctima por parte de un paramilitar. A pesar de la violencia padecida durante largo tiempo, describe cómo “el estudio” fue para él su posibilidad de escapar a esa situación:

El conocimiento, el irme a la Universidad, el trasnocharme, mire, todos estas son cicatrices del trabajo, mi piel guarda los registros por mucho tiempo, por mucho tiempo, es algo genético, creo. Y esto son marcas que me recuerdan que haber encontrado en ese contexto del estudio, lo académico, prepararme para ser útil a una sociedad; funciona, da resultados, ¿sí? Estudiar para mí se convirtió en esa puerta de escape. En esa forma de resistir (CNMH, entrevista, hombre, Medellín, 2016).

Durante finales de los años noventa y la década del dos mil fueron creados varios lugares de encuentro de las víctimas, considerados también como lugares de refugio. Las Madres de la Candelaria son enfáticas al afirmar que la Asociación es como su segunda casa, aquello de lo que no pueden hablar en casa, es expresado abiertamente entre sus compañeras, allí encuentran la comprensión y la solidaridad que buscan (CNMH, grupo focal desaparición forzada, Medellín, 2015). Las mujeres y hombres víctimas de violencia sexual han encontrado en la Unidad de Víctimas y en particular en el servicio de apoyo psicológico un lugar para comprender lo que vivieron, para empoderarse y sobreponerse a la violencia a la que fueron expuestas.

5.4.4. Cuando el espacio del trabajo es un campo de batalla: “haciendo frente”

Este apartado se centra en algunas profesiones que debieron enfrentar cotidianamente actores armados o situaciones de violencia o amenazas, así como salvaguardar, proteger vidas o mitigar los daños de personas bajo su responsabilidad, proporcionar alternativas o simplemente acompañar. Son sólo algunos casos que se espera puedan poner en evidencia la multiplicidad de acciones, estrategias y tácticas que las personas llevaron a cabo para sobrevivir y resistir en medio del conflicto.

En la ciudad, personas de muchas profesiones (medicina, educación, rama Judicial, bibliotecología, periodismo, comercio, transporte, sacerdotes, entre muchos otros) debieron hacer frente a las demandas de los grupos armados, desafiar sus órdenes, exigir respeto por los lugares de trabajo e incluso acceder a cumplir órdenes para proteger sus vidas o las de otros. En el taller de la Universidad de Antioquia, uno de los docentes de Medicina afirmaba que durante los años ochenta y noventa los médicos de Medellín debieron hacerse cautos en el lenguaje y en la manera de tratar los pacientes, pues nunca sabían a quién se estaban enfrentando (CNMH, taller Universidad de Antioquia, hombre, Medellín, 2015). Del mismo modo, en una entrevista con médicos de la ciudad, estos narraban las diversas situaciones a las que se vieron enfrentados, desde la atención en urgencias durante la época del terrorismo de las bombas, hasta las acciones militares en los barrios de la ciudad. Eso llevó a que algunos médicos en Medellín sean hoy

especialistas en atención de emergencias e incluso entrenen a otros médicos en el país (CNMH, entrevista colectiva médicos, Medellín, 2016).

Los docentes de escuelas y colegios debieron enfrentar a los actores armados para preservar la neutralidad de las instituciones educativas. El rector de un colegio en la comuna nororiental durante la década de los noventa contó como tenía que negociar con los actores armados para proteger el colegio y sus estudiantes, no sólo de los cobros de cuentas de bandas o narcotraficantes, sino también de milicias que pretendían “limpiar” el barrio de supuestos bandidos (CNMH, entrevista, hombre, profesor, 2016). Estos docentes no tenían más recurso que la palabra y el diálogo, su autoridad y legitimidad social para enfrentar a estos actores:

Hubo un momento en que un capitán del Ejército que llegó al colegio, y cuando yo miré, todas las puertas de los salones tenían un soldado, todo el colegio estaba militarizado. Como tenía tres sedes, ellos fueron a buscar a un niño de 13 años en el colegio para llevárselo. Van a rectoría, entonces yo les digo que no lo podía entregar, que yo se lo entrego es a los padres de familia, y dijeron que necesitaban hacerle una indagatoria porque él está expendiendo droga. Y yo les decía pero cómo se llama, y me dio el nombre. Y le dije permítame yo busco en la secretaría a ver en qué grado está porque son 1.200 muchachos [...]. Yo llamé al coordinador y le dije que el muchacho lo escondieran como fuera, pero que no lo fueran a entregar. Efectivamente al muchacho lo escondieron en el sótano de una casa al frente. ¡Claro! Los rectores no colaboran, ellos son los que tiene los muchachos, están escondidos [afirmaba el militar] y daban un informe por radio. Pasaron dos años y el muchacho se graduó en el colegio, él estaba en séptimo y se graduó, yo luego hable con él, le comenté y le pregunté que qué es lo que pasaba, y me dijo: “Es que mi abuelita empaca la droga en unas cajillas de fósforo y yo las llevo a la terminal, yo las entrego”; él me contó todo. Cuando el muchacho me cuenta, uno tiene que definir lo ético, la formación y entonces yo empiezo a preguntarle y me dice que ellos no tienen de qué vivir: “mi abuelita no tiene”, pero que ya están dejando eso, el caso es que las condiciones que se dan ahí es eso, y que todo lo que uno hace, una ayuda humanitaria imprimiendo unos principios (CNMH, entrevista, hombre, educador, Medellín, 2016).

Educadores en la comuna 13 enfrentaron milicias, guerrilla, Ejército y paramilitares. Incluso algunos de sus estudiantes hacían parte de esos ejércitos. Ellos, al igual que el rector de la comuna nororiental mencionado, sólo tenían la palabra para resistir, incluso cuando eran señalados como auxiliares o promotores de los otros grupos armados:

Nosotros de alguna manera pues también nos les paramos en la raya, pues les dijimos que no, que el colegio no era una zona de guerra, era una zona neutral, que ellos no podían irrumpir así en la institución así fueran parte del Estado. Entonces ellos nos acusaron de que nosotros cantábamos [...] el himno de las FARC. Nosotros dijimos que eso era totalmente mentira, que eso nunca había pasado, que si ellos tenían pruebas nos las mostraran, si tenían grabaciones, todo eso porque eso nunca había sucedido. Entonces

pues a regañadientes terminaron por aceptar y salirse del colegio (CNMH, grupo focal educadores, hombre, Medellín, 2015).

Por su parte, los y las periodistas optaron por narrar la guerra a pesar de los riesgos que enfrentaban y que cobraron la vida de algunos de ellos. Las masacres, los carros bombas, los magnicidios, los atentados eran los temas predominantes en la agenda informativa, particularmente en la década de los noventa. Es el caso de los corresponsales y el personal administrativo de *El Espectador* que debieron enfrentar las arremetidas de Pablo Escobar contra el periódico. Las amenazas eran permanentes hasta que en octubre de 1989 asesinaron a Marta Luz López, administradora de la sede el periódico y jefe de publicidad y a Miguel Arturo Soler, jefe de circulación. Carlos Mario Correa (2008), corresponsal en Medellín para el diario, ofrece un relato que constituye un testimonio de resistencia, sobrevivencia de los periodistas. En su libro nos cuenta cómo lentamente el periódico fue haciéndose invisible para protegerse de los ataques, cómo era vivir con la incertidumbre y zozobra por la inminencia de una bomba, qué hacían día a día para mantenerse con vida. Un fragmento de su libro es particularmente elocuente sobre cómo el periódico, pero también la ciudad, fue lentamente cerrando sus espacios vitales y contrayéndose para huir del peligro, para hacerse imperceptible:

La sala de redacción quedaba en una de las habitaciones que daba hacia la calle. Un mes después de mi ingreso nos tocó abandonar la primera pieza y nos corrimos a un cuarto interior, pensando que si ponían la bomba, el peligro era menor adentro de la casa. Por esos días nadie llevaba carro a la sede, era menos arriesgado llegar a pie o en taxi. [...] La suma de nuestros temores nos fue arrinconando y finalmente, debido a los numerosos atentados en Medellín y a la información de la policía sobre una inminente bomba a la sede de *El Espectador*, nos metimos tres piezas más al fondo, hasta terminar en la cocina. Allí acomodamos de la mejor manera posible todas las oficinas de *El Espectador* (Correa, 2008, páginas 31-32).

Tal vez uno de los hechos más significativos en términos periodísticos sea la creación de la sección Unidad de Paz y Derechos Humanos del periódico *El Colombiano*: Carlos Alberto Giraldo le sugirió a la directora del periódico, Ana Mercedes Gómez, crear una unidad especial para explicar, con un contexto más amplio, lo que estaba pasando en Medellín y en el departamento. Así nació la Unidad. Allí se registró la consolidación del paramilitarismo en la ciudad, los secuestros y crímenes de las milicias y de la guerrilla, el surgimiento de las organizaciones como las Madres de la Candelaria, las amenazas al IPC y a la Corporación Jurídica Libertad; la toma militar de la comuna 13 y de la 3. De este grupo surgieron fotógrafos como Jesús Abad Colorado y Natalia Botero, quienes nos mostraron en imágenes la dura realidad de la ciudad y del país.

Hubo también quienes se atrevieron a contar otras historias, de esas que es necesario estar muy atento para vislumbrar. Los periodistas de *La Hoja*, periódico local que surgió en 1992, se atrevieron a mirar a Medellín con otros ojos para mostrarnos a personas protagonistas de historias minúsculas, desgarradoras algunas veces, pero llenas de vida. Las crónicas y reportajes publicados en el periódico mostraron que había otra Medellín y que valía la pena internarse en ella.

5.4.5. Gritos, susurros, silencios: las formas de contar, expresar o negar la violencia

Hasta ahora se ha mostrado cómo las organizaciones sociales lograron establecer contactos, redes y alianzas con instituciones y ONG locales, nacionales e internacionales para denunciar lo que pasaba en la ciudad. Los pobladores de Medellín, organizaciones e instituciones no dudaron en hacer visible la realidad de lo que se vivía. La ciudad se pensó e invitó a otros a pensarla para tratar de encontrar salidas. En este apartado se indaga sobre las formas cotidianas en que las personas lograron o no hablar de lo que pasaba, denunciarlo, y de los riesgos que ello representaba.

Denunciar la violencia asociada al conflicto armado con el propósito de que algo cambiara, dar a conocer la situación, buscar solidaridad, fue un recurso muchas veces usado. Ya vimos cómo algunas de las acciones colectivas de resistencia tienen como propósito fundamental llamar la atención hacia los fenómenos de violencia, denunciar, exigir soluciones, proponer pactos, reglas de juego, defender esos pactos. Pero hubo también individuos que se atrevieron a denunciar a pesar de los riesgos que corrían.

Dos casos estuvieron presentes en el recuerdo de los empresarios entrevistados: Pablo Peláez, exalcalde de Medellín, y Germán Posada, ganadero. Ambos pagaron con sus vidas haber denunciado públicamente el narcotráfico:

Pablo Peláez en esta reunión fue muy crudo y muy crítico contra los narcotraficantes y se atrevió a decir cosas muy fuertes en público. Y en ese evento, un evento público, había, no sé, 500 personas. En el Palacio de las Exposiciones había una mesa larga, él estaba muy cercano al centro y dijo unas cosas muy duras ahí. Muy parecidas a las que dijo German Posada en una asamblea del Fondo Ganadero de Antioquia y se apoyó en un mural que tenía la oficina del Fondo Ganadero y había unos buitres y unos gallinazos y empezó a decir quién representaba cada gallinazo y entre ellos metió gente de Medellín vinculada con la mafia y con Pablo Escobar. Después de esos dos discursos los mataron a los dos. Violentamente. A Germán Posada lo persiguieron, él iba manejando su carro, lo persiguieron. El tipo trató de escaparse hasta que tuvo que parar el carro, lo chocó, no recuerdo, y ahí lo acribillaron. A Pablo es parecido: iba con su chofer en el carro de Holasa, en El Poblado y lo acribillaron ahí, miserablemente (Lopera Becerra, 2015, página 28).

Hablar alto y claro era un riesgo, pero muchas personas lo asumieron como un compromiso social impostergable. Del mismo modo, los universitarios han buscado por todos los medios hacer público su rechazo a la violencia y llamar al diálogo como alternativa. La palabra ha sido su principal estrategia para sobrevivir y resistir a la violencia²⁰⁸. Los actos violentos tuvieron respuestas en medidas de seguridad representadas en más vigilancia, cámaras, requisas en la entrada y salida, entre muchas otras (Pérez Toro, 2015). Pero también se llevaron a cabo campañas de sensibilización y actos simbólicos que tenían como objetivo hacer un llamado a respetar la integridad de los miembros de la comunidad universitaria y sus instalaciones²⁰⁹. Reunirse para tratar de comprender esa violencia a la que se vieron enfrentados fue una práctica inherente a su quehacer, de ahí que fueran frecuentes las iniciativas de diálogo y concertación como encuentros, “mesas”, “comités” o “comisiones”, conformadas por diversos públicos: estamentarias, multiestamentarias, institucionales o interinstitucionales o aun multisectoriales.

Otros también encontraron en la potencia de la palabra y la denuncia una manera de gritarle a la sociedad lo que vivieron. Las mujeres víctimas de violencia de todo tipo han encontrado en el colectivo Ave Fénix una forma de representar y visibilizar a través de la escritura la violencia vivida. Muchas de ellas han logrado con ayuda de la Unidad de Víctimas un proceso de transformación, de ser víctimas silenciosas a denunciar ante las autoridades y la sociedad lo que vivieron.

Después surgieron grupos de apoyo como para promover que la persona hablara, se promovió que la gente denunciara a través de las Personerías, la Procuraduría, la Fiscalía, pues entonces se fue derrumbando un poco el mito de que hay que guardar silencio y se empezó a hablar, aparecieron los museos de la memoria, las casas de la memoria, y las entidades pues [...]. Primero fue la Ley 1448 que promovió la ley de víctimas y eso dio como una autorización como para que la gente hablara de la violencia y se denunciara (CNMH, entrevista, mujer, sicóloga Unidad de Víctimas, Medellín, 2016).

Sin embargo, algunas personas decidieron guardar silencio. Las razones del silencio son muchas y tan diversas como los contextos y los sujetos. El miedo, la intimidación, la sensación de la

²⁰⁸ A finales de los años noventa hubo presencia clandestina de grupos de la guerrilla y paramilitares en la Universidad de Antioquia y una relación compleja de desconfianza, tensión y confrontación abierta con la fuerza pública. Los diferentes grupos armados realizaron acciones violentas en la Universidad, como el asesinato de profesores, estudiantes y del administrador de una de las cafeterías. Estos eventos dificultaban la acción colectiva pues los integrantes de la Universidad preferían silenciarse y no participar por temor a las represalias, incluso algunos de ellos debieron salir del país.

²⁰⁹ Iniciativas que tuvieron origen tanto en el estamento administrativo como estudiantil y profesoral. Algunos ejemplos: Jornada por la vida y la seguridad (1998); Jornadas por la vida y Todos somos el blanco (2002-2004); Jornadas de Reflexión (2005); Cuida tu Alma (2005-2013); Abracemos la Universidad (2006); Y la muerte no tendrá señorío (2007); Libertad, bien sagrado (2007); Nuestra voz (2009); Un Alma con muchos rostros (2009); El espejo del Alma (2010); Ahora con el Corazón-Defendamos la vida como un bien supremo (2010); Soy de la Universidad de Antioquia y me identifico con ella (2010); Marcha silenciosa Artes (2010); Ahora con el corazón. Defendamos la vida como un bien supremo (2010); Cultura de la Legalidad (2103). Tomado de Pérez (2015).

inutilidad de la denuncia, las amenazas, la vergüenza, el no tener alguien dispuesto a escuchar, el temor a que no se creyera lo que se había vivido, o la percepción de ser la única persona que le había pasado algo similar, entre muchas otras, fueron las razones esgrimidas por los entrevistados. Una mujer, habitante de la comuna 13, afirmaba que el silencio era una forma de proteger a sus hijos del odio y el deseo de venganza. Ella guardó todo su dolor y angustia para proteger su familia del horror que significaría la violencia sexual a la cual fue sometida. Pero además desconocía que había muchas otras en su misma situación, fue su ingreso al programa de atención psicológica de la Unidad de Víctimas la que la llevó a comprender lo vivido, a dimensionarlo y a saber que había muchas como ella:

Yo lo callé, no le conté a mis hijos que eran muy pequeños, no se lo conté a mi esposo, no se lo conté a nadie, fui a un hospital demasiado golpeada, omití, negué, no dije lo del abuso sexual. Pero nunca pensé qué era que lo hacían, pensé que me lo hicieron a mí pero nunca me imaginé que se lo hicieron a otras personas (CNMH, entrevista, mujer, Medellín, 2016).

Un joven, también residente de la comuna 13 y víctima de abuso sexual, narró cómo guardó silencio por vergüenza: “eso me cambió la vida, yo no me sentía con ánimos, yo ya no era capaz de mirar a nadie a la cara, yo me convertí de cierta manera en un niño especial, en un muchacho especial. Yo no tenía interacción social, yo me sentía avergonzado, sentía como si los demás me vieran el letrero acá en la frente de “me violaron” (CNMH, entrevista, hombre, Medellín, 2016). Así también lo narró una mujer víctima de estos abusos: “otra estrategia fue guardar silencio no decir nada, no ver nada, tratar de llevar la vida lo más normal posible y pues como protegerse uno” (CNMH, taller con víctimas de violencia sexual, mujer, Medellín, 2015).

Otra forma de silenciarse la contó el hijo de un abogado de izquierda, que narró cómo su padre, luego de verse perseguido y su familia amenazada, decidió renunciar a sus acciones políticas: “mi padre renunció conscientemente a sus aspiraciones políticas por la protección de su familia” (CNMH, grupo focal creadores, hombre, Medellín, 2015). Otro relato revelador de estos silencios lo presentó una mujer, habitante del barrio Villa Lilian, a quien le asesinaron su hijo. Ella sabía quién era el asesino, aun así, debía actuar como si no supiera nada:

Era muy horrible, muy duro, porque uno con miedo porque era un asesino, yo lo saludaba normal, y yo sí decía “ay Dios mío bendito, dame paciencia, que yo pueda pues ver a este hombre y no decirle nada”. Mi esposo decía lo mismo, no, eso era mejor como comer callado porque yo todavía tenía cuatro hijos para sacar adelante (Archivo de Testimonios, Museo Casa de la Memoria).

5.4.6. Solidaridad y protección: levantarse día tras día

Las acciones de solidaridad y protección se encuentran unidas, porque a veces la línea divisora entre estas no es muy clara y hay acciones que terminan correspondiendo a los dos sentidos. Lo que sí es claro es la necesidad de dar cuenta de este tipo de acciones, ya que han sido fundamentales no sólo para la sobrevivencia de las personas, sino para generar posibilidades de continuar la vida y los procesos sociales a pesar de las violencias y las victimizaciones vividas.

En muchos relatos es posible identificar formas muy diversas de protegerse y de tejer lazos de solidaridad para hacer frente a la violencia y sobrevivir. Algunas permanecen en el tiempo e incluso a veces en diferentes grupos y sectores poblacionales, otras emergen según las circunstancias de cada momento: tipo de victimización o posible victimización, diferencias en el control territorial por parte de los grupos armados (control homogéneo o territorios en disputa), el día o la noche, entre otras circunstancias.

Durante los momentos de mayor confrontación entre grupos armados o de incursiones armadas del Ejército o la Policía, las personas aprendieron a acudir a ciertas acciones para sobrevivir: “trancar las puertas” para evitar que durante los enfrentamientos entraran a las casas; identificar los lugares de las casas que eran más seguros: los baños, la parte trasera, aquellos lugares de la casa contruidos con material (adobes y cemento); no dormir sobre los colchones, sino debajo de ellos; colocarle cintas a las ventanas para que en caso de explosiones o disparos los vidrios no explotaran sino que se resquebrajaran; identificar los lugares del barrio que eran seguros y donde podían guarnecerse en caso de enfrentamientos.

En el contexto de la operación Orión en la comuna 13, un habitante del barrio Belencito Corazón, dio cuenta de un repertorio de acciones de protección, con la diferencia de que en la siguiente historia se dio de manera continua:

Todas las noches llegábamos muy temprano a casa para “atrincherarnos” en nuestras casas, exactamente en el cuarto de mi madre, debajo del colchón de la cama de ella, ya que la mayoría de las noches había enfrentamientos entre la guerrilla o los paramilitares contra el Ejército. Esas noches eran aterradoras, horas de disparos, balas sobre la casa, el sonido que hacían al romper el viento, ese inolvidable silbido de muerte manchado de sangre, mi madre nos contaba cuentos o historias mientras esto sucedía para evitarnos un posible trauma (CNMH, estrategia “Llegó la carta”, carta 14, Medellín 2015).

La anterior historia también refleja una acción de sobrevivencia y de cómo una mamá piensa no sólo en la protección física de sus hijos, sino también en la protección emocional cuando decide, en medio de las confrontaciones, contarles cuentos para tratar de hacer menos difícil la situación.

Las mujeres y sectores LGBTI han tenido que desarrollar sus propios códigos para sobrevivir y protegerse, algunos de ellos están relacionados con invisibilizarse para no parecer atractivas o llamativas a la vista de los actores armados:

Yo soy de la comuna 13 y me acuerdo que cuando niña, yo no era niña, era un machito más, porque estaba a cargo de mis hermanos, porque violaban mucho a las niñas entonces yo no me echaba el brillo porque me daba miedo ser una más violada encontrada en una manga. Era muy común cada 8 días, los fines de semana, encontraban en la manga al frente de mi casa una niña muerta, violada con una varilla introducida hasta acá, porque si esto está grabado lo van a estudiar y encuentran reportes de que esto es verdad (CNMH, grupo focal de violencia sexual, mujer, Medellín, 2015).

Pero esa acción de camuflarse e invisibilizarse era mucho más frecuente y no se limitaba sólo al riesgo de la violencia sexual o de la estigmatización, era también una práctica de muchos de los sectores de izquierda política o líderes sociales para protegerse. Camuflarse, estar atentos a la calle, quién te seguía y cómo llegar a la casa o al lugar de trabajo: “esa fue una época en la que como dicen ustedes ahí tocó camuflarse, como camuflarnos, implementar medidas de seguridad desde que salías de la casa hasta llegar a la Universidad, desde que salías de la Universidad hasta llegar a la casa, para dónde te movías, cómo te movías” (CNMH, taller mayores de 40 años, mujer, Medellín, 2015).

Incluso los policías debían cuidarse, pues era justo el camino de la estación hasta llegar a sus casas el que resultaba más peligroso. Ellos llamaban antes de salir para sus casas, con el fin de verificar que todo alrededor estuviera normal, que no hubiera sujetos extraños o situaciones anómalas. Como estrategia de sobrevivencia, en las familias de policías también recurrían al ocultamiento de la identidad. Sus madres o esposas debían poner a secar los uniformes en los baños, ocultos de los ojos de los vecinos, para que no supieran cuál era su profesión (CNMH, grupo focal policías, hombre, Medellín, 2015).

Algunos empresarios también narraron cómo sus vidas cambiaron, en particular durante los años noventa, en el auge de la guerra contra el narcotráfico. Ellos y sus familias modificaron sus hábitos en la vida cotidiana. A lo largo de las entrevistas con empresarios fue evidente como este sector de la sociedad comenzó a realizar cambios en las rutas de movilidad, formas de vestir, el carro en el que se transportaban, hacían lo posible por no ser llamativos. Los empresarios debieron encargar sistemas de seguridad privada para ellos, sus empresas y sus familias, portar armas, crear circuitos de protección:

Entonces recuerdo mucho esas anécdotas: alguna vez, en alguno de los tantos entierros a los que había que ir, me bajé del carro blindado, los guardaespaldas estaban al lado, yo andaba en la parte de adelante del carro, yo no andaba atrás. Estaba con el changón [arma de dotación] al lado, entonces el changón se vio y la gente se quedó horrorizada. Mire dónde estamos (CNMH, entrevista, hombre, empresario, Medellín, 2015).

Encerrarse, crear esquemas para protegerse, cuidar las amistades, invisibilizarse, camuflarse, cambiar las formas de hablar y de expresarse, todas esas acciones lo que hicieron fue romper el tejido social y el sentido dotado a lo cotidiano: “¿podemos recuperar en forma inmediata la calidad de vida que hemos perdido en Medellín? ¿Podemos volver a restaurantes, ir a conciertos, a teatro, a cine? Los problemas de seguridad en Medellín nos obligaron prácticamente a enclaustrarnos en nuestras propias casas” (CNMH, Entrevista, hombre, empresario, 2015).

La seguridad privada fue otra estrategia de protección. Las unidades cerradas o la contratación de vigilancia privada (guardaespaldas) para protegerse: a ellas han acudido tanto personas de estratos altos de la ciudad como líderes políticos que se han visto amenazados y desconfían de las fuerzas del Estado:

Cuando él quedó de diputado, él hizo unas denuncias de la primera masacre que hicieron los paramilitares aquí en un pueblo de Antioquia. Entonces a él le hacen un atentado al frente de la IV Brigada, nosotros vivíamos aquí por Laureles y él va para la casa y le hacen el atentado en todo el frente de la IV Brigada. Lógico que él tenía derecho a escoltas del Gobierno, pero él no confiaba en ellos y tenía privados, yo creo que por eso salvó esa vez (CNMH, grupo focal exilio, mujer, Medellín, 2015).

Las acciones de solidaridad, el organizarse, protegerse y construir colectivamente son lo que ha permitido que la ciudad no sucumba a la violencia. Muestran una serie de tejidos entre vecinos, familiares, víctimas, ONG, organizaciones comunitarias y universidades, los cuales en ocasiones han sido fragmentados, pero nunca totalmente eliminados, porque siempre están emergiendo nuevos apoyos y procesos de solidaridad y resiliencia. Además de las mujeres, los hombres y los jóvenes también se han unido y han tenido acciones de solidaridad para protegerse, particularmente esto se ha visto en contextos donde hay confrontaciones armadas o reclutamiento forzado. Entrar o salir de los territorios en grupos, acompañándose unos a otros; llamar a ciertos locales que son claves para pedir información sobre el estado de seguridad del barrio; ir a los entierros, acompañar a los dolientes en esos momentos de aflicción. Los grupos de mujeres de los asentamientos de desplazados que emprendían largas caminatas en busca de alimentos para toda la comunidad.

Las mujeres, a través de lo simbólico, lo espiritual, el rol y la fortaleza que les da el ser madres, la capacidad e importancia que le dan a la socialización y la palabra, podrían catalogarse como “titulares” de las acciones de solidaridad, sin desconocer el importante papel que juegan otros grupos poblacionales como los hombres y los jóvenes. En el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual, el compartir con otras mujeres que han vivido experiencias similares, hablar sobre eventos que no le han contado a nadie, les ayuda a dejar de sentirse seres aislados y muchas veces culpables, y empiezan a redimensionar la victimización vivida. En estos casos el acompañamiento sicosocial²¹⁰ individual o grupal, ha sido fundamental y así ellas lo reconocen, ya que de estos acompañamientos han surgido importantes procesos de sanación y solidaridad para ellas.

Los espacios de escucha entorno a lo simbólico: la luz, las flores, el agua, un abrazo, han sido muy importantes en los procesos de sanación de las mujeres, porque son espacios de apoyo, solidaridad y acompañamiento entre ellas mismas. Es el caso de Mujeres Tejiendo por la Paz, lo han hecho aun sin el apoyo de profesionales o alguna institucionalidad, así lo expresa una de sus integrantes:

Por ejemplo nadie cree pero una velita prendida, las florecitas, el abrazo que nosotros nos damos es una parte de la reparación que nosotros simbólicamente recibimos. [...] Estos talleres para nosotras de tanta violencia nos ha traído mucho beneficio, de ir aceptando estas cosas, de ir las aceptando, no de olvidarlas, pero sí de ir aceptando e ir llevando la vida un poco más tolerante porque era que aquí hemos llorado, pero sí que hemos aprendido de esto (CNMH, taller de memoria, mujer, Medellín, 2015).

El rol de madres y la consideración que sobre la familia tienen las mujeres, es una condición que las ayuda a sobreponerse ante las pérdidas:

Lo que me ha ayudado a salir de esta situación es el amor de madre, los valores que uno como madre le inculca a los hijos. Así su padre haya sido asesinado, hay que inculcarle valores y respeto a los demás. Sin odio y sin venganza. Nadie se muere por el dolor más duro, hay que seguir viviendo, por los hijos, por la familia (CNMH, taller de memoria, mujer, Medellín, 2015).

²¹⁰ En este acompañamiento hubo una referencia importante a instituciones como la Universidad San Buenaventura, la Universidad de Antioquia, la Universidad Luis Amigó, Provisame, Museo Casa de la Memoria, Corporación Matamoros, Fundación Corazón Verde, Corporación Ave Fénix, entre otras.

Los jóvenes también reconocen la importancia del afecto como una estrategia que posibilita, constituye y representa la solidaridad, dentro de la cual destacan el papel que tiene la mujer como protectora:

Personalmente lo que me protege a mí [...] yo a muchos sitios no puedo ir, a muchos sitios de la ciudad, yo estoy amenazado en varios lugares, pero yo ando con la tranquilidad de la cadena de afectos, es la cadena de afectos lo que me mantiene vivo. Es la gente que nos quiere, la gente que nos respeta y nos mantiene vivos, ¿cierto? Entonces esa cadena de afectos es también el respeto, el respeto de llegar a tal territorio y no es que “llegó ¡ehhh!”. O sea, cualquier parche o una unión entre comunas, y no somos visajosos²¹¹, ni les prometemos a la gente cosas que no podemos hacer, no, hacemos con la gente. [...] Nuestra raíz principal. Empieza por las doñas ¿sí ven? Es las doñas que están ahí: la abuela, las mamás, que están ahí y que están según eso, una cosa de familia y esos son los únicos que nos pueden proteger, pues es lo que vemos (CNMH, entrevista, hombre, Medellín, 2015).

Para finalizar, hay un relato que sintetiza la importancia de las acciones de solidaridad y protección, mediadas en gran medida por la organización social y por el papel de las mujeres:

¿Por qué sobrevivió esta ciudad? Yo creo que, primero que todo, por dos cosas: porque asociarse, el trabajo comunitario aquí ha sido muy bonito, ha sido fuerte y ha sido un ejemplo para el país. Y segundo porque esta ciudad tiene muchas mujeres. Yo con el movimiento de víctimas me di cuenta que una sociedad se levanta dependiendo de la labor de la mujer ahí. Una mujer tiene una cosa: que es terca. Es terca hermano y el día que usted la ofenda, se embolsó, te lo recuerda toda la vida, pilas. Y esa mujer se va a negar, nunca se va a negar a olvidar a su hijo, a su ser querido, va a luchar siempre por ello y esta sociedad yo no sé cómo encuentran las mujeres para levantarse día tras día después de todo lo que han vivido, lo que han sufrido ellas en carne propia y por sus seres queridos. Pero esas son las que nos han dado muchas veces el ejemplo para salir adelante y las mujeres ni siquiera te hablan de venganza. Las mujeres te hablan de justicia y creo que es una cosa que debe quedar clara en cualquier informe, porque una gente dice que muchas veces uno recuerda pa’ reclamar venganza. A mí me han enseñado mucho las mujeres y por eso también he cesado mucho como mi activismo, como mi condición de accionar insurgente sino mi accionar de derechos humanos es porque las mujeres me enseñaron que uno por lo que tiene que clamar es por el tema de justicia (CNMH, entrevista, hombre, Medellín, 2015).

5.5. A modo de síntesis

Medellín resistió a la violencia gracias a la confluencia de acciones individuales, de organizaciones sociales y respuestas institucionales que permitieron encontrar salidas a

²¹¹ “Ser discreto, no llamar la atención”.

momentos de crisis. La ciudad resistió y sobrevivió porque sujetos, comunidades y colectivos se organizaron para comprender lo que pasaba, trabajar juntos y superar sentimientos como el miedo, la angustia y la desesperanza.

La década de los ochenta está marcada por la defensa de los derechos humanos y la presencia de organizaciones como el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entre otros, que denunciaron la violencia política contra estudiantes, profesores, sindicalistas, líderes sociales.

En el momento más fuerte de la violencia, los primeros años de la década de los noventa, la Consejería Presidencial Para Medellín y su Área Metropolitana y la Nueva Constitución Política de 1991 crearon un marco institucional de posibilidades que permitieron a las organizaciones sociales debatir públicamente, en diversos escenarios, sobre el futuro de la ciudad, las prioridades de las comunidades y la definición de políticas públicas. La Consejería y los escenarios de debate y participación como los foros ciudadanos, las mesas de trabajo y el Seminario Medellín Alternativas de Futuro, sentaron las bases de lo que sería el Plan de Desarrollo Estratégico para Medellín y lo que en buena medida representa el cambio sustancial de la ciudad.

Durante el segundo momento crítico, entre 1995 y 2005 es posible identificar dos etapas: la primera entre 1995 y 2003 con fuerte presencia de población desplazada en la ciudad que buscan visibilizar en el escenario público su problemática, las condiciones de precariedad en que viven y las permanentes amenazas que reciben por parte de los actores armados. Una segunda, entre 2004 y 2014, en que tanto organizaciones de desplazados como otras organizaciones de víctimas empiezan a surgir y a demandar la garantía de los derechos que la legislación les otorga. En este lapso hay un uso recurrente de lo simbólico y la lúdica para denunciar las acciones violentas, reclamar justicia y reparación y construir una memoria colectiva sobre hechos de violencia que marcaron la ciudad y sus habitantes en las tres últimas décadas. En las organizaciones surgieron otros protagonismos diferentes a los tradicionales, los jóvenes y las mujeres fueron esenciales. Las y los jóvenes con el recurso al arte, la cultura popular, la música. Y las mujeres con el discurso de la justicia y el reconocimiento y con su acción persistente de visibilizar los daños.

La población de Medellín encontró siempre formas de resistir a los intentos de dominio y control de los diferentes grupos armados. Acciones de resistencia subterránea, simulación de connivencia o adaptación fueron usadas en toda la ciudad, como parte de un repertorio de estrategias singulares de supervivencia que van desde la confrontación y el cuestionamiento a las

pretensiones de imponer un orden o un castigo, hasta aquellas acciones invisibles que evadían las normas o permitían reconfigurar una cotidianidad perdida por la guerra.

Recomendaciones

Para formular recomendaciones de cara a lo establecido en el presente informe, se procede a plantear algunas consideraciones iniciales.

En primer lugar, queda claro que en el caso de lo acontecido en Medellín se está ante procesos de violencia originados en un contexto de conflicto armado, pero que se han mezclado con otras dinámicas, objetivos, actores y prácticas que se retroalimentan entre sí. Como se ha descrito en el transcurso de este informe, consideramos necesario hablar de “violencias asociadas al conflicto armado” y no simplemente de “conflicto armado” para dar cuenta de esta complejidad.

En segundo lugar, estas violencias no sólo han victimizado a quienes han sufrido su impacto directo, sino que, dada su magnitud y trascendencia, han generado un impacto colectivo sobre la sociedad de Medellín e incluso, si bien en el informe no se ahonda en esta dimensión, en todo el departamento de Antioquia. En esa medida, las recomendaciones buscan contribuir a transformar tanto las situaciones que han sufrido las víctimas como reparar a la sociedad en su conjunto y contribuir a remover las causas de estas violencias.

Por último, dado el contexto actual de negociación política del conflicto armado que se adelanta en el país y la implementación del Acuerdo de paz logrado entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, algunas de las recomendaciones al respecto buscan generar y profundizar acciones que, desde los territorios, aporten a los objetivos generales de la justicia transicional, es decir, a una garantía plena de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y a la no repetición.

En materia de verdad, se recomienda que:

1. El Estado colombiano, encabezado por el poder Ejecutivo, tanto nacional como departamental y local, reconozca sus responsabilidades, contribuya al esclarecimiento y pida perdón por las violencias y victimizaciones que ha vivido la población de la ciudad. Lo anterior debido a que por acción, por omisión o por connivencia con grupos ilegales este falló en su deber de protección de los derechos humanos de los habitantes de Medellín e incumplió sus obligaciones de mantener el monopolio de la fuerza en manos de las fuerzas legalmente constituidas para este fin.
2. En el marco de la implementación de lo establecido en el Acuerdo de paz, especialmente la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la

Convivencia y la No Repetición, se realicen investigaciones pormenorizadas que permitan establecer diferencias entre los organismos y grados de responsabilidad de determinados agentes del Estado: de miembros de las Fuerzas Armadas por sus acciones y omisiones, tanto en materia de derechos humanos como del derecho internacional humanitario; de servidores de la Fiscalía por sus omisiones en su deber de investigación; de personas vinculadas al Ministerio Público por sus falencias en materia disciplinaria y de garantía de los derechos humanos; y de otros funcionarios públicos de otras dependencias responsables de violaciones a los derechos humanos.

3. En el marco de la implementación de lo establecido en el Acuerdo de paz, en particular la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, las guerrillas que tuvieron presencia en Medellín reconozcan sus responsabilidades en el conflicto armado en la ciudad y contribuyan al conocimiento de lo que pasó y a la identificación de autores intelectuales y materiales. Se alienta, igualmente, a un pedido de perdón público por sus infracciones al derecho internacional humanitario y las violaciones a los derechos humanos.
4. La Fiscalía General de la Nación, en cabeza de su Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, sistematice la información que posee sobre el accionar paramilitar y guerrillero en la ciudad de Medellín, identifique los puntos estratégicos que debe establecer en materia de responsabilidades intelectuales y materiales, e instruya a sus funcionarios para que indaguen sobre estas conductas con los beneficiarios de la Ley 975 de 2005.
5. Se promueva la discusión y se tomen medidas progresivas orientadas a la desclasificación de los archivos de inteligencia de organismos de seguridad del Estado que han actuado en la ciudad, así como procesos tendientes a preservar, proteger y dar acceso a los mismos, con el fin de esclarecer el papel de estos organismos en las violencias de la ciudad.
6. Se promuevan nuevos procesos de reconstrucción de la memoria histórica, articulando iniciativas institucionales, académicas y de organizaciones de la sociedad civil que permitan abordar otros temas y dimensiones del conflicto armado. De manera particular, es urgente que las universidades públicas y privadas asuman un papel de mayor liderazgo en la realización de investigaciones orientadas a explorar asuntos poco trabajados y claves en el esclarecimiento, como el papel de la justicia, de las iglesias, del sector productivo, de los medios de comunicación, entre otros, en la magnitud y prolongación del conflicto armado en la ciudad de Medellín.

7. Se fortalezca el Museo Casa de la Memoria como símbolo del compromiso del Estado con los principios relativos al deber de memoria del Estado. El Museo Casa de la Memoria es un espacio ciudadano para el reconocimiento de las víctimas en toda su pluralidad, para el desarrollo de procesos pedagógicos para la comprensión del conflicto armado y la guerra y el impulso de procesos de diálogo y reconciliación. Se insta también a que se fortalezca su papel en la valoración y apoyo de procesos comunitarios, territoriales y poblacionales de reconstrucción de la memoria que se vienen adelantando en diferentes lugares de la ciudad. En este sentido, el Museo Casa de la Memoria podrá aportar para que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición establecida a partir del Acuerdo de paz tenga en la ciudad de Medellín uno de sus focos centrales de actividad.
8. El Museo Casa de la Memoria, en alianza con la Agencia para la Reincorporación y Normalización, promueva ejercicios de memoria específicamente orientados hacia excombatientes de la guerrilla y los paramilitares que permitan reconocer estas voces como parte de la memoria colectiva para aportar de este modo a procesos de reintegración y resignificación de sus vidas.
9. Teniendo en cuenta las dimensiones de formas de victimización como la desaparición forzada y el secuestro, se unan esfuerzos para que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en el Acuerdo de paz, se ocupe de manera prioritaria de lo que ha pasado en la ciudad de Medellín con estas formas de victimización. Esto implica esfuerzos urgentes y concretos de los gobiernos local y nacional para el establecimiento de cifras confiables sobre el número de víctimas, identificación y puesta en marcha de mecanismos concretos de búsqueda en cementerios y lugares de enterramientos clandestinos, así como la identificación rigurosa de restos y entrega en condiciones dignas de estos a sus familiares.
10. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas fije como una de sus prioridades la atención a las víctimas de modalidades poco visibles como la violencia sexual y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y cree los dispositivos para su reconocimiento y atención integral.
11. La Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, en coordinación con el Gobierno nacional, vigorice un enfoque diferencial para el proceso integral de indagación, atención, reparación y superación de los impactos de las violencias, teniendo como criterio un enfoque poblacional que dé cuenta de variables como el género, la edad, la opción e

identidad sexual, la condición étnica y, asimismo, que tenga en cuenta la diversidad territorial.

Sobre la difusión de este informe, se sugiere que:

12. El Centro Nacional de Memoria Histórica, el Museo Casa de la Memoria, las organizaciones sociales, los centros académicos y educativos, los medios de comunicación y las organizaciones de víctimas promuevan amplios debates y discusiones públicas sobre el contenido de este informe.
13. El Centro Nacional de Memoria Histórica, el Museo Casa de la Memoria, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Comunicaciones, así como los medios de comunicación regionales y otros canales, se comprometan a la difusión de este informe. Igualmente, que se desarrollen propuestas para que sea incluido como componente pedagógico en las instituciones educativas y que las universidades desarrollen procesos de formación, investigación y extensión en torno a las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín como formas para complementar, ahondar y debatir sobre este Informe.

En materia de justicia, se insta a que:

14. La Fiscalía General de la Nación tome medidas para corregir comportamientos históricos de impunidad que ha predominado ante la responsabilidad individual en las violencias acontecidas en la ciudad. Se sugiere establecer un programa metodológico que permita corregir las fallas identificadas en la aplicación de la ley de justicia y paz con los desmovilizados de los grupos paramilitares. Y se recomienda que el diseño de la Jurisdicción Especial de Paz para que el caso de Medellín sea una prioridad.
15. La Procuraduría General de la Nación, a través de su oficina provincial Valle de Aburrá, trate como prioridad la identificación e investigación disciplinaria de aquellas personas que, en calidad de servidores y funcionarios públicos, sean responsables de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, en especial integrantes de la fuerza pública y de la Fiscalía General de la Nación, dado su protagonismo en las acciones de violencia de la ciudad. Algunos casos de los mencionados en este informe, como el de la masacre de Villatina o el de la operación Orión, podrían ser emblemáticos para un renovado compromiso institucional.

16. La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación divulguen sus sentencias y resoluciones y que estas sean conocidas por la población de la ciudad.
17. La Defensoría del Pueblo Regional Antioquia, la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Medellín fortalezcan sus procesos de acompañamiento a las víctimas para incrementar el acompañamiento jurídico para la asesoría y orientación para el restablecimiento de sus derechos.

En materia de reparación integral, se sugiere que:

18. La Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, su oficina regional en Antioquia, y la Unidad de Víctimas de Medellín sean fortalecidas para que puedan cumplir las necesidades de reparación integral de las víctimas. De la misma manera, se recomienda identificar los recursos de las FARC-EP que puedan ser destinados a la reparación de víctimas en la ciudad, tal como quedó consignado en el Acuerdo de paz de noviembre 24 de 2016.
19. La Alcaldía de Medellín y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en alianza con otras entidades públicas y privadas relevantes, diseñen e implementen programas de apoyo médico y psicológico que permitan afrontar los profundos impactos y afectaciones emocionales, sicosociales y la atención a discapacidades ocasionadas por el conflicto armado.
20. La Alcaldía de Medellín, a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, identifique los predios urbanos dedicados a vivienda y comercio que fueron objeto de despojo con el fin de implementar programas de restitución de estos bienes a sus legítimos propietarios.
21. El Gobierno nacional y la Alcaldía de Medellín, bajo la coordinación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, implementen planes de reparación colectiva y restablecimiento de su dignidad a sectores sociales que sufrieron colectivamente el impacto de las violencias asociadas al conflicto armado: sindicalistas, líderes e integrantes de organizaciones sociales, partidos y movimientos políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes e integrantes de organizaciones comunitarias, juveniles, de mujeres, de afrodescendientes, entre otros.

En materia de garantías de no repetición, se insta a que:

22. La Alcaldía de Medellín vigorice los planes y las políticas públicas que buscan mejorar las condiciones de seguridad y convivencia, equidad y justicia social en Medellín. Para ello se pueden adoptar políticas que estén focalizadas en territorios y poblaciones que presentan mayores problemas de exclusión socioeconómica.
23. Las Secretarías de Cultura, Educación y Juventud, y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín, en alianza con organizaciones del sector educativo y cultural, lideren un plan de transformación cultural tendiente a modificar conductas discriminatorias que han servido como justificación para la eliminación y ataque a grupos poblacionales por motivos de género, edad, condición socioeconómica, opción e identidad sexual, identidad étnica, entre otras. Igualmente, se recomienda avanzar en acciones encaminadas a la transformación de imaginarios negativos sobre integrantes de organizaciones de izquierda, líderes políticos, sindicalistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
24. La Alcaldía de Medellín, encabezada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Unidad de Víctimas y la Secretaría de Seguridad, en alianza con el Instituto de Bienestar Familiar, diseñen un plan de prevención del reclutamiento forzado y la vinculación de niños, niñas y adolescentes a estructuras armadas a partir un diagnóstico preciso de la situación actual.
25. La Alcaldía de Medellín, en alianza con la Agencia para la Reincorporación y Normalización, lideren un proceso de sistematización y diálogo ciudadano sobre la experiencia de la ciudad en materia de procesos de desmovilización, desarme y reintegración de excombatientes de grupos armados. Este proceso debe servir como insumo para posibles articulaciones con el proceso de paz y como fuente de aprendizajes en torno a lo que no se debe repetir en la atención de desmovilizados del grupo guerrillero FARC-EP.
26. El Estado, a través de los Ministerios de Justicia y del Interior, así como las Secretarías de Gobierno departamental y municipal, promuevan el fortalecimiento, la cobertura, la calidad, y el fácil y equitativo acceso a los mecanismos alternativos de tramitación para la resolución pacífica de conflictos, por medio de, entre otras cosas, la capacitación y asesorías técnicas continuas. De esta manera se puede contrarrestar la búsqueda de formas privadas de justicia que han estado en el epicentro del conflicto armado.

27. El Gobierno nacional y la Alcaldía de Medellín asuman el compromiso total con el monopolio del uso de la fuerza en todo el territorio de la ciudad y busquen la adopción de enfoques democráticos y de seguridad humana para los planes y programas que se implementen en esta materia.
28. La cooperación internacional acompañe la implementación de estas recomendaciones, junto con las entidades estatales competentes y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil que corresponda.

Referencias

Abad, H. (2006). *El olvido que seremos*. Bogotá, Planeta.

Acemoglu, D.; Fergusson, L.; Robinson, J.; Romero, D.; Vargas, J. F. (2016). "The Perils of Top-Down State Building: Evidence from Colombia's False Positives", Working Paper 22617. National Bureau Of Economic Research.

Agencia Colombiana para la Reintegración (2015). *Base de datos sobre lugar de nacimiento de desmovilizados*. Información suministrada para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

Aguilera, M. (2014). *Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013*. Bogotá, Centro Nacional de Memoria Histórica.

_____ (2014a). *Contrapoder y justicia guerrillera*. Bogotá, Debate.

Alcaldía de Cali-Observatorio Social (2016). *Evolución de los homicidios en Cali entre 1980 y 2013*. Información suministrada para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

Alcaldía de Medellín-Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de Medellín (2016). *Evolución de los homicidios en Medellín entre 1980 y 2013*. Información suministrada para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

Alcaldía de Medellín (2015). *Desaparición forzada de personas: Aproximaciones al fenómeno*. Medellín, Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, Subsecretaría de Derechos Humanos y Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas.

Alonso, M.; Giraldo, J. y Sierra, J. D. (2012). "Medellín: el complejo camino de la competencia armada". En: Espinal, M. A.; Pérez, W. F; Toro J. C., Vélez J. *Ensayos sobre conflicto, violencia y seguridad ciudadana en Medellín, 1997-2007*. Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (2003). *Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos*.

Álvarez, V. (1996). "La educación superior en Medellín, 1948-1990". En Melo, J. O. (ed.). *Historia de Medellín*. Medellín, Compañía Suramericana de Seguros, páginas 551-561.

Alzate, C. (2016). "El Medellín de la violencia visto por la literatura y el cine". Documento elaborado para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

Amnistía Internacional (2005). *Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?* Recuperado de http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_962.pdf, el 8 de septiembre de 2016.

Angarita, P. E. y otros (2008). *Dinámicas de guerra y construcción de paz. Estudio interdisciplinario del conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín*. Medellín, Universidad de Antioquia.

Arango, L. G. (1991). *Mujer, religión e industria: Fabricato 1923-1982*. Medellín, Universidad de Antioquia, Universidad Externado de Colombia.

Arango, M. (1988). *Impacto del narcotráfico en Antioquia*. Medellín: Editorial J. M. Arango.

Arango, G. (1974). *Obra negra*. Buenos Aires, Cuadernos latinoamericanos.

Arango, L. E.; Posada, C. (2006). "La tasa de desempleo de largo plazo en Colombia". En *Borradores de Economía*, No. 388, Bogotá, Banco de la República. Recuperado de <http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra388.pdf>, el 7 de diciembre de 2016.

Aranguren, M. (2001). *Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos*. Bogotá, Oveja Negra.

Arboleda, J. C. (2016, 25 de noviembre). "Misioneros de la paz". Hacemos memoria. Recuperado de <http://hacemosmemoria.org/2016/11/22/misioneros-de-la-paz/>

Archila, M. (2003). *Idas y venidas, vueltas y revueltas: protestas sociales en Colombia 1958-1990*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia—Centro de Investigación y Educación Popular.

_____ (2008) "El maoísmo en Colombia: La enfermedad juvenil del marxismo-leninismo". En *Controversia No 190*, Bogotá, Cinep, páginas 148-195.

Archivo Histórico de Medellín (1981). *Tomo 1123, Acta N° 17 de 1981 de las sesiones del Concejo de Medellín*. Consultado en septiembre de 2015.

_____ (1982). *Tomo 1129, Acta N° 04 de 1982 de las sesiones del Concejo de Medellín*. Consultado en septiembre de 2015.

Arcos, A. (2005). *Ciudadanía armada: Aportes a la interpretación de procesos de defensa y aseguramiento comunitario en Medellín. El caso de las Milicias Populares* (Tesis inédita de Maestría). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Arenas, S. P. y Coimbra, J. C. (2016). "A memória e a comunidade na experiência da vulnerabilidade: o mural de Santo Domingo Sávio". En *Estudios Políticos*, 49, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, páginas 95-111.

Arenas Grisales, Sandra. (2014). *Os Vaga-lumes da memoria: altares espontâneos e narrativas de luto em Medellín, Colombia*. (Tesis de Doctorado). Río de Janeiro: UNIRIO.

Aricapa, R. (2015). *Comuna 13. Crónica de una guerra urbana. De Orión a La Escombrera*. Medellín: Ediciones B Grupo.

Arquilla, J. y Ronfeldt, D. (Eds.) (2001). *Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime And Militancy*. Santa Mónica, Rand Corporation.

Bahamón, A. (1991). *Mi guerra en Medellín*. Bogotá, Intermedio.

Base de datos del informe Nunca Más (s.f.). Recuperado de <http://datoscolombianuncamas.org/>, el 22 de julio de 2017.

Base de datos Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica (s.f.).

Base de datos Registro Único de Víctimas (RUV) (s.f.). Recuperado de <http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV>, el 22 de julio de 2017.

Bedoya, D. A. y Jaramillo, J. (1991). *De la barra a la banda*. Medellín, El Propio Bolsillo.

Bedoya, J. (2010). *La protección violenta en Colombia*. Medellín, Instituto Popular de Capacitación.

Bedoya, P. (2016). *Construir paz con diversidad: reflexiones sobre las violencias heteronormativas en el marco del conflicto armado y el escenario del pos-acuerdo*. Conferencia dictada en el seminario Reflexiones Acerca de la Cultura de Paz, la Diversidad Sexual y de Género. Medellín, noviembre de 2016.

Beltrán, I. (2014). *Aprendizaje criminal en Colombia. Un análisis de las organizaciones narcotraficantes*. Bogotá, Ediciones de la U–Ingeniería Jurídica.

Beltrán, W. M. (2013). *Del monopolio católico a la explosión pentecostal. Pluralización religiosa, secularización y cambio social en Colombia*. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia.

Bernal, J. A. (2005). “Características de Medellín en los años noventa”. En Bernal, J. A.; Álvarez, L. S., *Democracia y ciudadanías. Balance de derechos y libertades en Medellín*. Medellín, Corporación Región, Escuela Nacional Sindical, Confiar, Viva la Ciudadanía, páginas 27-45.

Betancourt, D. y García, M. (1994). *Contrabandistas, marimberos y mafiosos. Historia social de la mafia colombiana (1965-1992)*. Bogotá, Tercer Mundo Ed.

Betancur, I. (2010). *Impacto sobre el crimen de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (BCN)*. Tesis de maestría presentada para optar al título de magíster en economía de la Universidad de los Andes, Bogotá, Universidad de los Andes-Facultad de Economía.

Betancur, J. M. (2013). *Déjame gritar*. Medellín, Planeta–Alcaldía de Medellín.

Blair, E. y Quiceno N. (2008). “De memorias y guerras”. En INER, *Programa de víctimas, Secretaría de Gobierno Alcaldía de Medellín*. Medellín, Editorial Universidad de Antioquia.

Blair, E. (2004). *Muertes violentas. La teatralización del exceso*. Medellín, Editorial Universidad de Antioquia.

Blair, E.; Grisales, M.; Muñoz, A. M. (2009). “Conflictividades urbanas vs. «Guerra urbana»: otra «clave» para leer el conflicto en Medellín”. En *Universitas Humanística*. Vol 67. Núm. 67.

Bobbio, N.; Mateucci, N.; Pasquino, G. (2002). *Diccionario de política*. México, Siglo XXI.

Botero, F. (1996). "La planeación del desarrollo urbano de Medellín, 1955-1994". En Melo, J. (Ed.). *Historia de Medellín*. Medellín, Compañía Suramericana de Seguros, páginas 521-530.

Botero, N. (2015). *Memorias Develadas. Laboratorio fotográfico de narrativas visuales*. Laboratorios Visuales *Medellín: memorias de una guerra urbana*. Medellín, Ministerio del Interior, Centro Nacional de Memoria Histórica, Alcaldía de Medellín, Corporación Región.

Calle, J. (2011). "Detrás de una carta 20 años". En *Universo Centro*. Recuperado de <http://www.universocentro.com/NUMERO24/DetrasDeUnaCarta.aspx>, el 5 de diciembre de 2016.

Calvo, Ó.; Parra, M. (2012). *Medellín (rojo) 1968. Protesta social, secularización y vida urbana en las jornadas de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano*. Medellín, Planeta–Alcaldía de Medellín.

Camacho, Á. (1992). "Violencia urbana: Cali y Medellín", en Hurtado, C. (Ed.). *Medellín: Alternativas de Futuro*. Medellín, Presidencia de la República, Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana, páginas 293-298.

_____ (2014). *Obra selecta. Violencia y conflicto en Colombia. Volumen III*. Bogotá, Ediciones Uniandes-Programa Editorial Universidad del Valle.

Camacho, A; Guzmán, A. (1990). *Colombia: Ciudad y violencia*. Bogotá, Foro Nacional por Colombia.

Casa Mía (s.f.). "Quiénes somos". Recuperado de: <http://www.corpcasamia.org/quienes-somos.html>, el 22 de julio de 2017.

Castañeda Naranjo, E.; Henao Salazar, J. (2001) *Parlache*. Medellín: Universidad de Antioquia.

Ceballos, R. (2000). "Violencia reciente en Medellín: una aproximación a los actores". En *Bulletin de l'Institute d'Études Andines*, vol.29, núm. 3. París, Instituto de Estudios Andinos.

Centro Nacional de Memoria Histórica (2011). *San Carlos: Memorias del éxodo en la guerra*. Bogotá, CNRR- Grupo de Memoria Histórica.

_____ (2011a). *La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la comuna 13*. Bogotá, CNRR- Grupo de Memoria Histórica

_____ (2013). *¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá, Imprenta Nacional.

_____ (2013a). *Recordar y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir memoria histórica*. Bogotá: CNMH.

_____ (2013b). *Una sociedad secuestrada*. Bogotá: Imprenta Nacional.

_____ (2014). *Aportes teóricos y metodológicos para la valoración de los daños causados por la violencia*. Bogotá: CNMH.

_____ (2014a). *Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC. 1949-2013*. Bogotá, Centro Nacional de Memoria Histórica.

_____ (2014b). *La huella invisible de la guerra: desplazamiento forzado en la Comuna 13*. Bogotá, Centro Nacional de Memoria Histórica.

_____ (2014c). *Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia, 1982 - 1997*. Bogotá: CNMH.

_____ (2015). *Aniquilar la Diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano*. Bogotá, CNMH - UARIV - USAID - OIM.

_____ (2015a). *Limpieza social. Una violencia mal nombrada*. Bogotá, Centro Nacional de Memoria Histórica, Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

_____ (2015b). *Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia*. Bogotá, CNMH – UARIV.

_____ (2015c). *La palabra y el silencio*. Bogotá, Centro Nacional de Memoria Histórica.

_____ (2015d). *El derecho a la justicia como garantía de no repetición: graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012, volumen I*. Bogotá, Centro Nacional de Memoria Histórica.

_____ (2016). *Memorias de una masacre olvidada. Los mineros de El Topacio, San Rafael (Antioquia)*, 1988. Bogotá, CNMH-Colciencias-Corporación Región.

_____ (2016a). *Granada Memorias de guerra, resistencia y reconstrucción*. Bogotá, CNMH-Colciencias-Corporación Región.

Cívico, A. (2009). *Las guerras de “Doblecero”*. Bogotá, Editorial Intermedio.

Colorado, V. (2015). “Contexto regional de la violencia antisindical en Antioquia”. En Castaño, E. (compilador). *Nos hacen falta. Memoria histórica de la violencia antisindical en Antioquia, Atlántico y Santander (1975-2012)*. Medellín, Escuela Nacional Sindical, páginas 95-120.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1993). *Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia*. Recuperado de <http://www.cidh.org/countryrep/colombia93sp/indice.htm>, el 28 de noviembre de 2016.

Comité Amigos de José Mejía (1986). *Que aparezca vivo mi amigo José Mejía, desaparecido el 8 de febrero*. [Folleto]. HAG D27C142F47. Medellín: Universidad de Antioquia, Biblioteca Carlos Gaviria, Archivo Héctor Abad Gómez, 4 de marzo de 1986.

Comité de Impulso de Acciones de Memoria de la Comuna 13 (s.f.). Recuperado de : <https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-de-Impulso-de-Acciones-de-Memoria-de-la-Comuna-13-311405862390979/>, el 5 de diciembre de 2016.

Comité de Memoria Zona Centroriental (2016). *Memoria, resistencia y vida de la Casa Vivero Jairo Maya*. Medellín.

Corporación Cultural Nuestra Gente (s.f.). *Nuestro origen*. Recuperado de <http://www.nuestragente.com.co/organizacion.html>.

Corporación para el Desarrollo Picacho con Futuro (s.f.). Recuperado de <http://cpfcorporacion.webnode.es/quienes-somos/>.

Correa, D. (s.f). *Bloque Metro de las Autodefensas. Acuerdos por la verdad*. Centro Nacional de Memoria Histórica

Coupé, F. (1996). "Migración y urbanización 1930-1980". En Melo, J. O. (Ed.). *Historia de Medellín*. Medellín, Compañía Suramericana de Seguros, páginas 563-570.

Crespo, F. (2009). "La élite en Cali algunos estudios empíricos". En *Revista CS, No. 4*, Cali, Universidad Icesi, páginas 177-192.

Crettiez, X. (2009). *Las formas de la violencia*. Buenos Aires, Waldhuter Eds.

Cubides, F. (1998). "La organización como factor diferencial". En Cubides, F.; Olaya, A. C. y Ortiz, C. M. *La violencia y el municipio colombiano. 1980-1997*. Bogotá, Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional de Colombia.

Das, V. y Kleinman, A. (2001). "Introduction". En *Remaking a World: Violence, Social Suffering and Recovery*. Veena Das, Arthur Kleinman, Margaret Lock, Mamphela Ramphele, and Pamela Reynolds (eds.). University of California Press, Berkeley.

Daza, A. (2016). *Guerrilleros en la ciudad y guerrilla urbana: el proyecto insurgente y Medellín*. Documento elaborado para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

_____ (2001). *Experiencias de intervención en conflicto urbano. Tomo II, suplemento Avances de investigaciones y otros artículos*. Medellín: Programa de Convivencia Ciudadana del Municipio de Medellín

Delamau, J. (2002). "Miedos de ayer y de hoy". En *El miedo. Reflexiones sobre su dimensión social y cultural*. Medellín: Corporación Región.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (1973, 1985, 1993, 2005). *Censos generales de Demografía y Población*. Recuperado de <http://www.dane.gov.co/>.

_____ (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). *Gran Encuesta Integrada de Hogares*. Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos>

Departamento Nacional de Planeación (1991). *Programa presidencial para Medellín y el área metropolitana, Documento 2562*. Bogotá, Departamento Nacional de Planeación.

Díaz, V.; Molina, N. (2016). *El destierro y sus duelos: la reconstrucción de la vida tras el desplazamiento forzado*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.

Duncan, G. (2015). *Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y México*. Bogotá, Debate.

_____ (2006). *Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*. Bogotá, Planeta.

_____ (2016). *Narcotráfico y violencia en Medellín (1980-2013) una mirada desde el papel de las élites y de la cultura Informe de Consultoría*. Documento elaborado para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

Duque, L. F.; Toro, J. A.; Montoya, N. (2010). "Tolerancia al quebrantamiento de la norma en el área metropolitana de Medellín, Colombia". En *Opinião Pública*, vol. 16, No. 1, Campinas, páginas 64-89.

Echandía, C. (1999). "Expansión territorial de las guerrillas colombianas: geografía, economía y violencia". En Llorente, M. V.; Deas M. *Reconocer la guerra para construir la paz*. Bogotá, Cerec–Ediciones Uniandes–Norma, páginas 100-149.

Ejército Nacional de Colombia (2015). *Datos estadísticos CJM 1995-2014*. Inédito. Informe entregado por la IV Brigada para esta investigación.

Entretenimientoplus. (2008, 13 de septiembre). "Destierro y Reparación". Recuperado de : <http://entretenimientoplus.com/artes/destierro-y-reparacion/>, el 5 de diciembre de 2016.

Escuela Nacional Sindical (ENS) (2016). *Basta ya: violencia antisindical en Medellín*. Documento elaborado para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

Franco, J. (2014). *El mundo de afuera*. Medellín, Alfaguara.

Franco, S. (2009). "Momento y contexto de la violencia en Colombia". En Sánchez, G.; Peñaranda, R. (compiladores). *Pasado y presente de la violencia en Colombia*. Medellín, La Carreta, páginas 379-406.

Fukuyama, F.; Colby, S. (2011). "Half a Miracle". En *Foreign Policy*, recuperado de <http://foreignpolicy.com/2011/04/25/half-a-miracle/>, el 5 de diciembre de 2016.

Galvis, L. A.; Meisel, A. (2010). "Persistencia de las desigualdades regionales en Colombia: un análisis espacial". En *Documentos de trabajo sobre economía regional, No. 120, Cartagena, Banco de la República-Centro de Estudios Económicos Regionales*. Recuperado de <http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-120.pdf>, el 7 de diciembre de 2016.

García de la Torre, C.; Guzmán, A.; Aramburo, C.; Rodríguez, A. y Domínguez, J. (2014). "Ordenes locales y conflicto armado, una metodología comparada". En *Análisis Político, No. 81*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

García, H. I.; Giraldo, C. A.; López, M. V.; Pastor, M. C.; Cardona, M.; Tapias, C. E.; Cuartas, De.; Gómez, V. y Vera, C. Y. (2012). "Treinta años de homicidios en Medellín, Colombia, 1979-2008". En *Cadernos de Saúde Pública*, vol. 28, No. 9, Rio de Janeiro–Ministério da Saúde–Fundação Oswaldo Cruz–Escola Nacional de Saúde Pública, páginas 1.699-1.712.

Gaviria, A. (2010). "Cambio social en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX". En *Documentos CEDE, No. 30*. Bogotá, Universidad de los Andes-Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. Recuperado de https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/dcede2010-30.pdf, el 7 de diciembre de 2016.

Gil, M. Y. (2009). *Paramilitarismo y conflicto urbano. Relaciones entre el conflicto armado nacional y las violencias preexistentes en la ciudad de Medellín: 1997-2005*. Tesis de grado para el título de Maestría en Ciencia Política. Medellín. Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Antioquia.

_____ (2016). *Aproximación a las dinámicas de violencia política en Medellín*. Documento elaborado para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

Giraldo R. J. (editor académico) (2011). *Economías criminales en Antioquia*. Medellín: Universidad EAFIT – Fundación Proantioquia – ESU.

Giraldo, J. (2008). "Conflicto urbano y violencia homicida: el caso de Medellín". En *Urvio. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*. Quito, Flacso Ecuador, páginas 99-113.

_____ (2015). "Política y guerra sin compasión". En *Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia*. Bogotá, Ediciones desde Abajo, páginas 471-518.

Giraldo, J.; Mesa, J. P. (2013). "Reintegración sin desmovilización: el caso de las milicias populares de Medellín". En *Colombia Internacional*, No. 77. Bogotá, Universidad de los Andes, páginas 217-239.

Giraldo, J.; Preciado A. (2015). "Medellín, from Theater of War to Security Laboratory". En *Stability: International Journal of Security & Development*, páginas 1-14.

Giraldo, S. A. (2016). *Arte y Memoria en Medellín (1980-2013). Las grietas del espejo*. Documento elaborado para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

Gómez, W. (2014). *Bloque Héroes de Granada. Acuerdos por la verdad*. Centro Nacional de Memoria Histórica.

Gonzales, F.; Bolivar, I. y Vásquez, T. (2002). *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción de estado*. Bogotá, Cinep.

González, C. (1996). "La educación primaria y secundaria (1880-1950)". En Melo, J. O. (Ed.). *Historia de Medellín*. Medellín, Compañía Suramericana de Seguros, páginas 748-760.

González, C. (s.f.). "Los héroes de la Justicia". En *Verdad Abierta*, recuperado de www.verdadabierta.com/documentos/victimas-1/general-3/934-tabla2/file, el 22 de julio de 2017.

González, J. I. (2010). "Las ciudades y la trampa de pobreza". En Hermelin, M.; Echeverri, A.; Giraldo, J. (eds.). *Medellín. Medio ambiente, urbanismo y sociedad*. Medellín, Fondo Editorial Universidad EAFIT, páginas 256-270.

Gossain, J. (2016, 29 de octubre). "Soledad en Bogotá, crisis en Cali, progreso en Barranquilla y Medellín". En *El Tiempo*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/bogota/juan-gossain-bogota-decae-medellin-y-barranquilla-avanzan/16737765>, el 2 de diciembre de 2016.

Grajales, J. (2011). "El proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia: entre lo político y lo judicial". En *Desafíos*, Vol. 23, No. 2. Bogotá, Facultad de Ciencia Política, Universidad del Rosario.

Granada, J. G. (2008). *Desplazamiento forzado y acción colectiva. La Mesa de Organizaciones de Población Desplazada de Medellín*. Tesis de Maestría. Universidad de Antioquia, Medellín.

Granada, J. y González, S. (2009). "Acción colectiva de las organizaciones de población desplazada en Medellín. Ciclos, contextos, repertorios y perspectivas". En *Estudios Políticos*, núm. 35. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, páginas 107-130.

Grupo de Memoria Histórica (2010). *La Rochela. Memorias de un crimen contra la justicia*. Bogotá, Grupo de Memoria Histórica-Taurus-Fundación Semana.

_____ (2010a). *Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia*. Bogotá, Grupo de Memoria Histórica-Taurus-Fundación Semana.

Gutiérrez, F. (2012). "Una relación especial: privatización de la seguridad, élites vulnerables y sistema político colombiano". En *Estudios socio-jurídicos*. Bogotá, Universidad del Rosario, páginas 97-134.

Gutiérrez, F.; Jaramillo, A. M. (2004). "Crime, (counter-) insurgency and the privatization of security –the case of Medellín, Colombia". En *Environment and Urbanization*, vol. 16, No. 2, páginas 17-30.

Gutiérrez, F.; Pinto, M.; Arenas, J. C.; Guzmán, T.; Gutiérrez, M. (2013). "The importance of political coalitions for the successful reduction of violence in Colombian cities". En *Urban Studies*, volume 50, No. 15, páginas 1-18.

Guzmán, A. (2011). "Sociología y violencia urbana en Colombia". En *Memorias del X Congreso Nacional de Sociología. Herencia y ruptura en la sociología colombiana contemporánea*. Cali, Universidad Icesi, páginas 2339-2355.

_____ (2012). "Ciudad y violencia: Cali en el siglo XX". En Morera, E. (Ed.). *Historia de Cali. Siglo XX*. Tomo II. Política. Cali, Universidad del Valle, páginas 327-373.

Henderson, J. D. (2012). *Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en Colombia*. Bogotá, Siglo del Hombre.

Hincapié, A. (comp.) (2008). *Conflicto armado Medellín-Colombia. Compresiones y acciones*. Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.

Hoyos, M. (2001). *La piel de la memoria. Barrio Antioquia: pasado, presente y futuro*. Medellín, Corporación Región.

Huggins, M. (1991). *Vigilantism and the state in Modern Latin America. Essays of extralegal violence*. Library of Congress.

Hurtado Galeano, D. (1996). *La Iglesia Católica: un actor social perviviente*. Trabajo de grado para optar al título de sociólogo. Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Sociología.

Instituto de Estudios Políticos (IEP) (2015). *Reclutamiento, Vinculación y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en Medellín*. Universidad de Antioquia, Medellín, mimeo.

Instituto Popular De Capacitación y Corporación Jurídica Liberad (2010). *Memoria de la impunidad en Antioquia: Lo que el Estado no quiso ver sobre el paramilitarismo*. Medellín, IPC.

Jaramillo A. M.; Villa, M. I. y Ceballos R. (1998). *En la encrucijada: conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa*. Medellín, Corporación Región.

Jaramillo L. y Valencia G.D. (2015). "Atipicidades del proceso de paz con las Milicias Populares en Medellín". En *Estudios Políticos* No. 46. Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Medellín, páginas 263-282.

Jaramillo, A. M. (1993). "Las milicias populares en Medellín: Entre lo privado y lo público". En *Revista Foro*, No. 22. Bogotá, Foro Nacional por Colombia.

_____ (1994). *Milicias populares en Medellín: entre la guerra y la paz*. Medellín, Corporación Región.

_____ (1996). "Criminalidad y violencia en Medellín, 1948-1990". En Melo, J. O. (Ed.). *Historia de Medellín*. Medellín, Compañía Suramericana de Seguros, páginas 551-561.

_____ (2009). “Acerca de los estudios sobre conflicto armado y violencia urbana en Medellín (1985- 2009)”. En Giraldo, J. (Ed.). *Economía criminal en Antioquia: Narcotráfico*. Medellín, Universidad EAFIT, Fundación para el Progreso de Antioquia (Proantioquia). Empresa para la Seguridad Urbana, páginas 63-149.

Jaramillo, A. M. y Gil, M. Y. (2014). “Medellín en su laberinto. Criminalidad y violencia en los inicios del siglo XXI”. En Jaramillo A. M. y Perea C. M. (eds.). *Ciudades en la encrucijada: violencia y poder criminal en Río de Janeiro, Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez*. Medellín: Corporación Región, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia.

Jaramillo, A. M.; Ceballos, R.; Villa, M. (1998). *En la encrucijada: conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa*. Medellín, Corporación Región, Alcaldía de Medellín-Programa de Reinserción.

Jiménez, C. (1986). *Una Procuraduría de opinión. 1982-1986: Informe al Congreso y al país*. Bogotá, Procuraduría General de la Nación.

Kalmanovitz, S. (1986). *Economía y nación: una breve historia de Colombia*. Bogotá, Centro de Investigación y Educación Popular, Universidad Nacional de Colombia, Siglo XXI.

Leyva, S. (2010). “El proceso de construcción de estatalidad local (1998-2009): ¿la clave para entender el cambio de Medellín?”. En Hermelin, M.; Echeverri, A.; Giraldo Ramírez, J. (eds.). *Medellín. Medio ambiente, urbanismo y sociedad*. Medellín, Fondo Editorial Universidad EAFIT, páginas 271-293.

Leyva, S.; Aristizábal, J. S. (2016). *El rol de la Alcaldía de Medellín en la contención del crimen organizado y el conflicto en los últimos 30 años: una revisión de la relación entre la debilidad de las políticas públicas de seguridad y convivencia, y el surgimiento de un orden social con regulación criminal*. Medellín, Documento de consultoría elaborado para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

Llorente, M. V. (1999). “Perfil de la policía colombiana”. En Llorente, M. V.; Deas M., *Reconocer la guerra para construir la paz*. Bogotá, Cerec–Ediciones Uniandes–Norma, páginas 391-473.

Lluvia de Orión (s.f.). Página web de la organización. Recuperado de: <http://lluviadeorion.com/> el 22 de noviembre de 2016.

Londoño, H. (2016). *Sistemas punitivos y derechos humanos. El caso de la comuna 13 de Medellín*. Bogotá, Ediciones Jurídicas Andrés Morales.

Lopera, A. F. (2016). "Violencia y empresariado en Medellín, 1980-2014". Documento elaborado para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

López, C. (2007). "La ruta de la expansión paramilitar y la transformación política de Antioquia. 1997 a 2007". En Romero, M. (ed.). *Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*. Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris, páginas 123-232.

_____ (2016). *¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres Colombias*. Bogotá, Debate.

Marciales, C. X. (2013). *Violencia sexual en el conflicto armado: Los rostros afro de la reparación. Asociación de Mujeres Afro por la Paz (AFROMUPAZ)*. Tesis de maestría en Estudios de Género. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

Márquez, F.; Mejía, C. (2015). "Historia de la política de juventud en Medellín". En Leyva, S. (ed.). *Análisis de Política Pública Poblacional. La juventud en Medellín: crisis, cambios e innovación*. Medellín, Fondo Editorial Universidad EAFIT-Alcaldía de Medellín, páginas 44-63.

Martin, G. (2014). *Medellín. Tragedia y resurrección. Mafias, ciudad y Estado. 1975-2013*. Medellín, La Carreta Editores.

_____ (2012). *Medellín. Tragedia y resurrección. Mafia, ciudad y Estado. 1975-2012*. Bogotá, Planeta.

Martin, G.; Atehortúa, K. (2015). *Muertos cercanos*. Medellín, La Carreta Ed., Universo Centro.

Marulanda, I. (1990). *Testimonio al borde del abismo*. Bogotá, Folio.

McDermot, J. (2016). "Élites y crimen organizado en Colombia: 'Don Berna' ". En *InSight Crime*. Recuperado de <http://es.insightcrime.org/investigaciones/elites-y-crimen-organizado-en-colombia-don-berna>.

Medina, C. (s.f). *Ejército de Liberación Nacional. Notas para una historia de las ideas políticas*. Recuperado de www.cedema.org/uploads/Medina_Gallego_ELN

Medina, G. (2006). *Una historia de las milicias de Medellín*. Medellín, Instituto Popular de Capacitación.

Mejía, H.; Londoño, C.; Granda, A. (1990). "Historia de la población y la ocupación del territorio colombiano". En *Población y Desarrollo, Bogotá, Corporación Centro Regional de Población–Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes*. Recuperado de <http://www.jorgeorlandomelo.com/histpobla.htm>, el 5 de diciembre de 2016.

_____ (1994). *La juventud de Medellín y la construcción de la democracia*. Medellín, Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.

_____ (Ed.) (1996). *Historia de Medellín*. Bogotá, Compañía Suramericana de Seguros.

_____ (1994). "Medellín: crisis y perspectivas". Intervención en el Seminario Alternativas de Futuro (1994). Recuperado de <http://www.jorgeorlandomelo.com/medellincrisis.htm>, el 5 de diciembre de 2016.

Melo, J. O. (1990). "Historia de la población y la ocupación del territorio colombiano". En *Población y Desarrollo, Bogotá, Corporación Centro Regional de Población–Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes*. Recuperado de <http://www.jorgeorlandomelo.com/histpobla.htm>, el 5 de diciembre de 2016.

Melzer, N. (2010). *Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el Derecho Internacional Humanitario*. Comité Internacional de la Cruz Roja. Recuperado de: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0990.pdf

Memorias en Diálogo (s.f.). Video Memorias en Diálogo. Recuperado de <https://memoriasendialogo.wordpress.com/2016/07/21/video-memorias-en-dialogo/>, el 20 de noviembre de 2016.

Moscovici, S. (1988). "Notes towards a Description of Social Representations". En *European Journal of Social Psychology*, vol. 18, No. 3, páginas 211-250.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) (s.f.). Recuperado de <http://www.movimientodevictimas.org/>

Murad, R. (2003). "Estudio sobre la distribución espacial de la población en Colombia". En *Población y desarrollo*, No. 48, CEPAL. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7186/S0311812_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y, el 7 de diciembre de 2016.

Murcia, J. A. (2011). *Población desplazada en Medellín: acción colectiva y reivindicación del derecho a la ciudad, 2000-2009*. Medellín: Universidad de Antioquia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Colección mejores trabajos de grado.

Naranjo, G. (1992). *Medellín en zonas*. Medellín, Corporación Región.

Nieto, J. R.; Alzate, M. L.; Higueta, K.; Vélez, E.; García, N. (2008). *Resistencia civil no armada al conflicto armado y la exclusión social: casos comunas 8, 9 y 13 de Medellín, 2002-2006*. Informe final de investigación, Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Medellín: Universidad de Antioquia. Centro de Investigaciones Sociales y Humanas (CISH).

Nieto, J. R. (2009). "Resistencia civil no armada en Medellín la voz y la fuga de las comunidades urbanas". En *Análisis político*, No. 67, páginas 38-59.

Nieto, P. (2008). *Llanto en el paraíso: crónicas de la guerra en Colombia*. Medellín, Editorial Universidad de Antioquia.

Ocampo, J. A. (2010). "Un siglo de desarrollo pausado e inequitativo: la economía colombiana, 1910-2010". En Calderón, M. T.; Restrepo, I. (Eds.). *Colombia 1910-2010*. Bogotá, Taurus, páginas 119-196.

Ogliastri, E.; Dávila, C. (1988). *Estructura de poder y desarrollo en once ciudades intermedias de Colombia*. Bogotá, Universidad de los Andes-Facultad de Administración.

Organización de los Estados Americanos. Misión de apoyo al proceso de paz. (2008). *Las Madres de la Candelaria*. Bogotá: Organización de los Estados Americanos.

Orozco, I. (2006). *Combatientes, rebeldes y terroristas*. Bogotá. Temis.

Ortega Martínez, F. (2008). "Rehabitar la cotidianidad". En Ortega, F. A. (Ed.) *Veena Das: sujetos del dolor, agentes de dignidad*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar.

Ortiz, C. M. (1991). "El sicariato en Medellín. Entre la violencia política y el crimen organizado". En *Análisis Político*, No. 14, páginas 66-73.

_____ (1998). "Ciudades y áreas metropolitanas: Medellín". En Cubides, F.; Olaya, A. C.; Ortiz, C. M. *La violencia y el municipio colombiano. 1980-1997*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-Centro de Estudios Sociales, páginas 105-112.

Palou, J. C.; Llorente, M. V. (2009). "Reintegración y seguridad ciudadana en Medellín: un balance del Programa de Paz y Reconciliación (2004-2008)". En *Informes FIP*, No. 8. Bogotá, Fundación Ideas para la Paz, recuperado de http://archive.ideaspaz.org/images/reintegracion_seguridad_final_version_web.pdf, el 7 de diciembre de 2016.

Parra, R.; Jaramillo, B.; González, O. L. (1985). *Ausencia de futuro. La juventud colombiana*. Bogotá: Plaza y Janés.

Pécaut, D. (2003). *Midiendo fuerzas: balance del primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez*. Bogotá, Planeta.

_____ (2006 [1979]). "Colombia de 1974 a 1979: del mandato claro a la 'crisis moral'". En Pécaut, D. *Cuatro décadas de política colombiana*. Bogotá, Norma, páginas 211-276.

_____ (2006a [1983]). "Una democracia en la encrucijada". En Pécaut, D. *Cuatro décadas de política colombiana*. Bogotá, Norma, páginas 277-309.

_____ (2006b [1987]). "Crisis, guerra y paz". En Pécaut, D. *Cuatro décadas de política colombiana*. Bogotá, Norma, páginas 311-343.

_____ (2006c). *Crónica de dos décadas de política colombiana*, Bogotá, Grupo Editorial Norma.

_____ (2012 [1987]). *Orden y violencia: Colombia 1930-1953*. Medellín, Universidad EAFIT.

Perea, C. M. (2016). *Limpieza social: una violencia mal nombrada*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

_____ (2016a). *Vislumbrar la paz. Violencia, poder y tejido social en ciudades latinoamericanas*. Bogotá. Debate y IEPRI.

Pérez, W. F. (2005). "Orden jurídico, negociación paz y reinserción. La constante imbricación entre guerra, política y derecho en Colombia". En *Estudios Políticos*, No. 27. Medellín, Universidad de Antioquia, páginas 67-100.

_____ (2016). *Violencia en la universidad y sobre la universidad*. Documento de consultoría elaborado para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

Pérez, W. F.; Vélez, J. C. (1997). "Seguridad ciudadana y homicidio en Medellín". En *Estudios Políticos*, No. 11. Medellín, Universidad de Antioquia, páginas 99-129.

Personería de Medellín (2005). *Informe anual de la situación de Derechos Humanos en Medellín*. Medellín.

Pizarro, E. (2006). "Las FARC-EP: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión? En Gutiérrez, F. (coordinador académico); Wills, M. E.; Sánchez, G. (coordinadores editoriales) *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales–Norma.

Pizarro, E. (2015). "Una lectura múltiple y pluralista de la historia". En *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia*. Bogotá, Comisión Histórica del conflicto y de sus Víctimas, Ediciones Desde Abajo, páginas 45-46.

Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (2016). *Policía víctima de la violencia armada: ciudad de Medellín*. Medellín. Documento elaborado para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

Posada, E. (2006). *La nación soñada*. Bogotá: Norma.

Primed (1996). *Una experiencia exitosa en la intervención urbana*. Medellín, Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellín.

Programa de atención a las víctimas (2010). *Imágenes que tienen memoria*. Medellín, Alcaldía de Medellín.

_____ (2011, 6 de noviembre). “IV Semana por la Memoria”. Recuperado de <http://programa-atencionavictimas.blogspot.com.co/search/label/Memoria>, el 20 de noviembre de 2015.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2003). *El conflicto, callejón con salida*. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia. Bogotá, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Proyecto Barrio Antioquia de Paz (PROBAPAZ) (1998). Seminario Conflicto Urbano, Análisis de experiencias documentadas, instrumentos, metodologías e indicadores de intervención y seguimiento. Medellín 23 y 24 de noviembre. Documento de trabajo.

Quevedo, N. (17 de diciembre de 2011). “Una procuradora en apuros”. En *El Espectador*. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/una-procuradora-apuros-articulo-317233>.

Radicado No. 30.690 (9 de marzo del 2011). *Sentencia condenatoria contra Guillermo León Valencia Cossio, Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia*. Magistrado ponente: Jorge Luis Quintero Millanes. Recuperado de <http://www.verdadabierta.com/documentos/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/926-setencia-valencia-cossio/file>

Raleigh, C. y Dowd, C. (2015). *Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) Codebook*.

Ramírez, H. (1979). *En la parte alta abajo*. Medellín, Ediciones Acuarimántima.

Ramírez, O.L.; Corporación Mujeres que crean (2016). “Violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado – Medellín 1980 – 2013”. Documento de consultoría elaborado para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

Ramírez., S. P. (2011). “Cuando Antioquia se volvió Medellín, 1905-1950. Los perfiles de la inmigración pueblerina hacia Medellín”. En *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, vol. 38, No. 2. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, páginas 217-253.

Red de instituciones y organizaciones comunitarias, Barrio la cruz, la Honda y Bello Oriente. Departamento de Sociología Universidad de Antioquia (2013). *Red de eventos memorables del proyecto: Reconstrucción colectiva de la memoria histórica de las comunidades de los barrios La Cruz, La Honda y Bello Oriente, de la ciudad de Medellín, en el período 1980 hasta 2010*. Medellín.

Restrepo, A. (2007). *Ciudadanía no violenta: jóvenes y antimilitarismo en Medellín*. Universidad de Antioquia, Medellín.

Restrepo, J.D. (2015). *Las vueltas de la Oficina de Envigado. Génesis, ciclos de disputa y reorganización de una empresa criminal*. Bogotá, Icono.

Restrepo, N. (2011). *Empresariado antioqueño y sociedad, 1940-2004: influencia de las élites patronales de Antioquia en las políticas socioeconómicas colombianas*. Medellín, Editorial Universidad de Antioquia.

Restrepo, A. y Contreras, M. (2000). *Flor de abril. La Corriente de Renovación Socialista: De las armas a la lucha política legal*. Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris.

Restrepo, W.; Pérez, W. F.; Vélez, J. C. (2012). "Aproximación al estudio de la violencia urbana en Colombia y de la criminalidad homicida en Medellín". En Alonso, M.; Pérez, W. F.; Vélez, J. C., *Ensayos sobre conflicto, violencia y seguridad ciudadana en Medellín, 1997-2007*. Medellín, Universidad de Antioquia–Instituto de Estudios Políticos, páginas 15-52.

Riaño, P. (2006). *Jóvenes, violencia y memoria en Medellín. Una antropología del recuerdo y el olvido*. Medellín, Editorial Universidad de Antioquia.

Roldán, H.; Franco V. y otros (2004). *Conflictos urbanos de las comunas 1,3 y 13 de la ciudad de Medellín*. Medellín, Universidad Autónoma Latinoamericana.

Romero, M. (2003). *Paramilitares y autodefensas. 1982-2003*. Bogotá, Planeta.

Romero, R. (2015). "Un 25 de agosto, Medellín sufrió la peor andanada paramilitar contra la inteligencia". Bogotá, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Recuperado de <http://centromemoria.gov.co/un-25-de-agosto-medellin-sufrio-la-peor-andanada-paramilitar-contr-la-inteligencia/>, el 22 de julio de 2017.

Ronderos, M. T. (2014). *Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*. Bogotá, Penguin Random House Grupo Editorial S.A.S.

Rubio, M. (1999). *Crimen e impunidad. Precisiones sobre la violencia*. Bogotá, Tercer Mundo-Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes.

Ruggiero, V. (2009). *La violencia política*. Barcelona, Anthropos.

Ruíz, J. C. (2015). "La Policía en Medellín entre 1980 y 2013: víctimas y victimarios". Documento elaborado para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

_____ (2016). "La Policía en Medellín entre 1980 y 2013: víctimas y victimarios". Documento elaborado para el proyecto *Medellín: memorias de una guerra urbana*.

Ruiz, J. y Vélez, B. (2004). *Medellín: fronteras invisibles exclusión y violencia*. Medellín: CEO - Universidad de Antioquia.

Salazar, A. (1990). *No nacimos pa' semilla. La cultura de las bandas juveniles en Medellín*. Bogotá, Centro de Investigación y Educación Popular.

_____ (2001). *La parábola de Pablo: auge y caída de un gran capo del narcotráfico*. Bogotá, Planeta.

Salazar, A.; Jaramillo, A. M. (1992). *Las subculturas del narcotráfico*. Bogotá, Centro de Investigación y Educación Popular.

Salazar, B. (2015). "Cali: Narcotráfico, poder y violencia". En *Documentos CIDSE*, No. 163. Cali, Universidad del Valle. Recuperado de [http://cms.univalle.edu.co/socioeconomia/media/files/DOCUMENTO%20DE%20TRABAJO%20CIDSE%20N%C2%B0%20163\(1\).pdf](http://cms.univalle.edu.co/socioeconomia/media/files/DOCUMENTO%20DE%20TRABAJO%20CIDSE%20N%C2%B0%20163(1).pdf), el 7 de diciembre de 2016.

Sánchez Jabba, A. (2012). "La reinención de Medellín". En *Documentos de trabajo sobre economía regional*, No. 174. Cartagena, Banco de la República-Centro de Estudios Económicos Regionales. Recuperado de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/dtser_174.pdf el 7 de diciembre de 2016.

Sánchez, L. A. (2016). "El Museo Casa de la Memoria de Medellín: realidades y sentidos de su existencia". En *Trialog* vol. 3-4, núm. 118/119, páginas 46-57.

Sánchez, O. A.; Corrales, S. y López, S. y otros (2006). *Palabras representaciones y resistencias de mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano. Historias de vida de mujeres de: Chocó, Cauca, Medellín y Putumayo*. Bogotá, Gráfico Eds. S.A.

Sardi, E. (2010). "Cambios sociodemográficos en Medellín: período intercensal 1993-2005". En Hermelin, M.; Echeverri, A.; Giraldo, J. (Eds.). *Medellín. Medio ambiente, urbanismo y sociedad*. Medellín, Fondo Editorial Universidad EAFIT, páginas 331-360.

Serrano, A. (2009). *Paracos*. Bogotá, Debate.

Silva, R. (2010). "Cultura, cambio social y formas de representación". En Calderón, M. T.; Restrepo, I. (Eds.). *Colombia 1910-2010*. Bogotá, Taurus, páginas 277-350.

Soares, R.; Naritomi, J. (2010). "Understanding High Crime Rates in Latin America: The Role of Social and Policy Factors". En Di Tella, R.; Edwards, S.; Schargrotsky (Eds.). *The Economics of Crime: Lessons for and from Latin America*. University of Chicago Press, páginas 19-55.

Stannow, L. (1996). "Social cleansing in Colombia". Tesis de grado Master of Arts. Simo Fraser University, Vancouver. Citado por Perea Restrepo, C. M. (2016). *Limpieza social: una violencia mal nombrada*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Theidon, K. (2004). *Entre prójimos. El conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

_____ (2006). "Género en transición: Sentido común, mujeres y guerra". En: *Cuadernos de Antropología Social*. No.24. Buenos Aires. pp. 62 - 92.

Thoumi, F. (1994). *Economía política y narcotráfico*. Bogotá, Tercer Mundo.

Tobón, V. H. y Gallego, W. (2005). *La organización de las comunidades desplazadas: Movimiento Social de Desplazados de Antioquia (MOSDA)*. Trabajo realizado en 2005 para la cátedra sobre

desplazamiento forzado en la Universidad de Antioquia recuperado de <http://prensarural.org/spip/spip.php?article2924>.

Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas (2016). *Informe reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. Comprensiones desde el análisis de la comuna 5*. Medellín, Alcaldía de Medellín.

_____ (2013). *Balance del proceso de atención a las víctimas del conflicto armado de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas 2012*. Alcaldía de Medellín. Recuperado de https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_0_0_0/IndicadoresyEstadsticas/Shared%20Content/Documentos/2015/Medellin_BalanceVictimas2012.pdf, el 20 de noviembre de 2016.

_____ (2016). *La Mesa de Víctimas de Medellín: propositiva para incidir en el plan de desarrollo municipal*. Recuperado de <http://www.unidadvictimas.gov.co/es/participaci%C3%B3n/la-mesa-de-v%C3%ADctimas-de-medell%C3%ADn-propositiva-para-incidir-en-el-plan-de-desarrollo>, el 20 de noviembre de 2016.

Urán, O. (2000). *La ciudad en movimiento: movimientos sociales, democracia y cultura en Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá*. Medellín, Instituto Popular de Capacitación.

Uribe, M. T. (1992) *Introducción. Seminario: Medellín Alternativas de Futuro*. Medellín, Presidencia de la República, Consejería presidencial para Medellín y su área Metropolitana.

_____ (1997). "Antioquia entre la guerra y la paz en la década de los 90". En *Revista de Estudios Políticos*, No. 10. Medellín, Universidad de Antioquia.

_____ (2001). *Nación, ciudadano y soberano*. Medellín, Corporación Región.

_____ (1990). "La territorialidad de los conflictos y de la violencia en Antioquia". En *Realidad Social*. Tomo I. Medellín, Departamento Administrativo de Planeación-Gobernación de Antioquia, Edinalco.

_____ (1990a). "Los destiempos y los desencuentros. Una perspectiva para mirar la violencia en el país". En *Memorias del primer Seminario Internacional de Periodismo Hecho en Medellín*. Medellín, Imprenta Municipal, páginas 40-55.

_____ (1997). "Antioquia: entre la guerra y la paz". En *Estudios Políticos*, No. 10. Medellín, Instituto de Estudios Políticos–Universidad de Antioquia, página 126-137.

_____ (1997a). "La negociación de los conflictos en el ámbito de viejas y nuevas sociabilidades". En Giraldo, J., *Conflicto y contexto. Resolución alternativa de conflictos y contexto social*. Bogotá, Tercer Mundo, Instituto Ser de Investigaciones, Colciencias, páginas 165-180.

_____ (1998). "Las soberanías en vilo en un contexto de guerra y paz. Estudios Políticos". En *Estudios Políticos*, No. 13, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Páginas 25-49.

_____ (2006). "Notas preliminares sobre resistencias de la sociedad civil en un contexto de guerras y transacciones". En *Estudios Políticos*, No. 29, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, páginas 63–78.

_____ (2010). "Poder político y región". En Hermelin, M. (ed.). *Geografía de Antioquia*. Medellín, Fondo Editorial Universidad EAFIT.

Urrutia, M. L. (2012). "Política económica y social en el régimen de coalición (1958-1978)". En Caballero, C.; Pachón, M.; Posada, E. (compiladores). *Cincuenta años de regreso a la democracia: nuevas miradas a la relevancia histórica del Frente Nacional*. Bogotá, Universidad de Los Andes, páginas 241-258.

Valencia, G. y Paz, L. (2015). "Atipicidades del proceso de paz con las Milicias Populares de Medellín". En *Estudios Políticos*. Recuperado de <http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/estudiospoliticos/article/view/20469>

Vásquez, E. (1990). "Historia del desarrollo económico y urbano en Cali". En *Boletín socioeconómico*, No. 20. Cali, Universidad del Valle-Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica.

Vélez Rendón, J. C. (2001). "Conflicto y guerra: la lucha por el orden en Medellín". En *Estudios Políticos*, 18, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, páginas. 61-89.

Vélez, J. C. (2001). "Conflicto y guerra: la lucha por el orden en Medellín". En *Estudios Políticos*, No. 18, Medellín, Universidad de Antioquia-Instituto de Estudios Políticos, páginas 61-89.

Vianna, A.; Farias, J. (2011). "A guerra das mães: dor e política em situações de violência institucional". En *Caderno Pagu*, No, 37. Brasil.

Vicepresidencia de la República (2002). *Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Bitácoras de prensa 2002*.

Villa M. I.; Jaramillo, A. M. y Sánchez, L. A. (2003). *Rostros del Miedo: una investigación sobre los miedos sociales urbanos*. Medellín: Corporación Región.

Villarraga, A. y Plazas, N. (1994). *Para reconstruir los sueños: Una historia del EPL*. Bogotá, Progresar

Villarraga, A. (comp.) (2009). *Biblioteca de la paz: serie el proceso de paz en Colombia 1982-2002, Tomo III*. Bogotá, Fundación Cultura Democrática.

Webber, I.; Ocampo, A. (1975). *Valores, desarrollo e historia: Popayán, Medellín, Cali y el Valle del Cauca*. Bogotá, Ediciones Tercer Mundo.

Fuentes periodísticas

Corporación Jurídica Libertad (2012). "Por más que intenten el maquillaje, tarde o temprano se cae". Recuperado de

http://www.cjlibertad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=765:por-mas-que-intenten-el-maquillaje-tarde-o-temprano-se-termina-cayendo&catid=36:area-metropolitana&Itemid=72, el 22 de julio de 2017.

El Colombiano (5 de Junio de 1985). "Autorizan campamentos del M-19 con limitaciones", página 1.

El Colombiano (15 de noviembre de 1993). "Villatina, un año después de la visita de los lobos", página 11A.

El Colombiano (12 de Agosto de 1997). "Las Milicias Populares, realidad persistente", página 15A.

El Colombiano (25 de agosto de 2002). “Un grito de libertad se escuchó en el estadio”, página 3A.

El Colombiano (24 de octubre de 2002). “Expulsados por la guerra regresan a la Comuna 13, página 1.

El Colombiano (30 de octubre de 2005). “Tres años después del despertar en la 13”.

El Espectador (28 de octubre de 2013). “Hugo Aguilar y la historia de la persecución de Pablo Escobar”. Recuperado de <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/hugo-aguilar-y-historia-de-persecucion-de-pablo-escobar-articulo-454948>

El Mundo (17 de Octubre de 1996). “Marcha por liberación de soldados en Medellín”, página 1.

El Mundo (26 de noviembre de 2002). “Medellín: escenario de la confrontación armada”.

El Mundo (1 de septiembre de 2008). “Destierro y reparación: reflexión desde lo estético”. Recuperado de <http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=94166>

El Mundo (17 de mayo de 2013). “La Loma: tierra de guerra y olvido”. Recuperado de http://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/la_loma_tierra__de_guerra_y_olvido.php#.WW3wH9M1-u4, el 5 de diciembre de 2016.

El Mundo (30 de mayo de 2015). “25 años sin Federico Estrada”. Recuperado de http://elmundo.com/portal/noticias/politica/25_anios_sin_federico_estrada.php#.WEXD8vnhBPY, el 5 de diciembre de 2016.

El País de España (4 de mayo de 1996). “El Procurador General de Colombia se entrega a la justicia en una iglesia”. Recuperado de http://elpais.com/diario/1996/05/04/internacional/831160808_850215.html, el 5 de diciembre de 2016.

El Tiempo (20 de febrero de 1985). “Hoy en Medellín. 3 mil ganaderos en la misa por los secuestrados”. Recuperado de <https://news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19850220&id=caccAAAIBAJ&sjid=IWIEAAAJ&pg=3603,1313047&hl=es>, el 5 de diciembre de 2016.

El Tiempo (4 de julio de 1991). “Extraditables: Fin del terror”. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-114707>, el 5 de diciembre de 2016.

El Tiempo (2 de mayo de 1993). “Medellín: en la fiesta por la vida”. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-116236>, el 5 de diciembre de 2016.

El Tiempo (8 de mayo de 1994). “Justicia privada, 30 años a la orden del día”. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-122418>, el 5 de diciembre de 2016.

El Tiempo (23 de mayo de 1995). “Sentencia por carro bomba en La Macarena”. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-330419>, el 5 de diciembre de 2016.

El Tiempo (7 de septiembre de 1996). “La paz formó una algarabía”. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-492976>, el 5 de diciembre de 2016.

El Tiempo (18 de octubre de 1996). “Destituido el Procurador General Orlando Vásquez”. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-545825>, el 5 de diciembre de 2016.

El Tiempo (15 de diciembre de 1996). “Cali y Medellín hoy contra el secuestro”. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-650123>, el 13 de julio de 2016.

El Tiempo (21 de abril de 1997). “Paramilitares se habrían unido”. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-514802>, el 5 de diciembre de 2016.

El Tiempo (4 de junio de 1999). “Dura guerra entre las guerrillas en Barranca”. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-942596>, el 5 de diciembre de 2016.

El Tiempo (15 de octubre de 1999). “Ex Sicarios marchan por el perdón”. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-960161>, el 5 de diciembre de 2016.

El Tiempo (17 de octubre de 2000). “Juicio por atentado a Gaula”. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1298025>, el 5 de diciembre de 2016.

El Tiempo (15 de enero de 2003). “Operación contra milicias”. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-975774>, el 5 de diciembre de 2016.

El Tiempo (22 de mayo de 2005). "Dónde están los políticos de la foto de Escobar con Santofimio". Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1695680>, el 5 de diciembre de 2016.

El Tiempo (26 de octubre de 2015). "En elecciones, abstención se redujo y voto en blanco siguió igual". Recuperado de <http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/abstencion-en-elecciones-2015-y-voto-en-blanco/16413181>, el 5 de diciembre de 2016.

La Prensa (2 de agosto de 2005). "Dos mil treinta y seis paras del Bloque Héroes de Granada entregan las armas". Recuperado de http://impresa.prensa.com/mundo/Bloque-Heroes-Granada-entregan-armas_0_1529847068.html3, el 5 de diciembre de 2016.

Insight Crime (9 de octubre de 2006). "Los Urabeños". Recuperado de <http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia/urabenos-perfil>, el 5 de diciembre de 2016.

Revista Semana (8 de diciembre de 2012). "La nefasta parábola de Mauricio Santoyo". Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/articulo/la-nefasta-parabola-mauricio-santoyo/269051-3>, el 5 de diciembre de 2016.

Revista Semana (julio 27 de 1985). "Terrorismo la nueva peste negra". Recuperado de <http://www.semana.com/mundo/articulo/terrorismo-la-nueva-pestes-negra/6732>, el 5 de diciembre de 2016.

Revista Semana (6 de enero de 1986). "Guerra total y guerra sucia". Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/articulo/guerra-total-guerra-sucia/7261-3>, el 28 de agosto de 2016.

Revista Semana (2 de enero de 1994). "Histeria y lágrimas". Recuperado de https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjku6uid7QAhVhrlQKHRSyBIYQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fnacion%2Farticulo%2Fhisteria-lagrimas%2F21545-3&usq=AFQjCNG4Sxr15pN_yFRxFvnO4v6Oar-qWw&sig2=N9nEvVptNPwH4BJGHWIKCg&bvm=bv.139782543,d.cGw, el 5 de diciembre de 2016.

Revista Semana (27 de junio de 1994). “Yo fui el creador de Los Pepes”. Recuperado de https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiE94bgkN7QAhXnsFQKHb8sBdsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fnacion%2Farticulo%2Fyo-fui-el-creador-de-los-pepes%2F22770-3&usg=AFQjCNGANKsi_mtpao5fo5NKOaSIDS6ybw&sig2=noeWP0t3ewymOuUqCPWixA&cad=rja, el 5 de diciembre de 2016.

Revista Semana (21 de septiembre de 1998). “Infierno en Barranca”. Recuperado de https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW6efBnd7QAhVhr1QKHcFiA9oQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fnacion%2Farticulo%2Finfierno-en-barranca%2F36364-3&usg=AFQjCNE1aS6UiAmFVuUx_UqgodTxS-Yn7A&sig2=M2LuiyRJS-f-9Rzgo6wy1A, el 5 de diciembre de 2016.

Revista Semana (25 de marzo de 2002). “Viaje al interior de los paras”. Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/articulo/viaje-interior-paras/50074-3>, el 5 de diciembre de 2016.

Revista Semana (19 de octubre de 2014). “Las confidencias de alias el Paisa”. Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/articulo/alias-el-paisa-sus-confidencias/399625-3>, el 4 de diciembre de 2016.

Revista Semana (27 de julio de 1985). “Terrorismo la nueva peste negra”. Recuperado de <http://www.semana.com/mundo/articulo/terrorismo-la-nueva-pestes-negra/6732>, el 5 de diciembre de 2016.

Verdad Abierta (7 de enero de 2009). “‘Don Berna’, Diego Fernando Murillo Bejarano”. Recuperado de <http://www.verdadabierta.com/la-historia/715-perfil-diego-fernando-murillo-bejarano-alias-don-berna>, el 5 de diciembre de 2016.

Verdad Abierta (2015). “Los archivos de la Operación Sirirí”. Recuperado de <http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/desaparecidos/5579-los-archivos-de-la-operacion-siriri>, el 8 de noviembre de 2016.

Verdad Abierta (s.f.). “La historia de las AUC”. Recuperado de <http://www.verdadabierta.com/victimarios/244-la-historia-auc/3556-muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo>, el 5 de diciembre de 2016.

Verdad Abierta (s.f.). “Muerte a Secuestradores. MAS: Los orígenes del paramilitarismo”.

Recuperado de [http://www.verdadabierta.com/victimarios/244-la-historia/auc/3556-muerte-a-secuestradores -mas-los-origenes-del-paramilitarismo](http://www.verdadabierta.com/victimarios/244-la-historia/auc/3556-muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo), el 5 de diciembre de 2016.

Documentos legales

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Radicado No. 30.690 (9 de marzo del 2011). Sentencia condenatoria contra Guillermo León Valencia Cossio. Magistrado ponente: Jorge Luis Quintero Millanes. Recuperado de <http://www.verdadabierta.com/documentos/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/926-setencia-valencia-cossio/file>, el 5 de diciembre de 2016.

Corte Constitucional de Colombia (1997). Sentencia C-572 de 1997. Magistrados ponentes: Jorge Arango Mejía y Alejandro Martínez Caballero. Recuperado de <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-572-97.htm>, el 5 de diciembre de 2016.

Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Proceso Radicado 11001600253200883280 (16 de marzo de 2012). Acusado: Orlando Villa Zapata y otros. Recuperado de <http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/03/2015-02-24-Orlando-Villa-Zapata-y-otros.pdf>, el 5 de diciembre de 2016.

Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Proceso Radicado 110016000253200682222 (30 de julio de 2012). Acusado: Edison Giraldo Paniagua. Recuperado de https://minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Sentencia%20El%20Pitufo-%20Primera%20Instancia%202012.pdf, el 5 de diciembre de 2016.

Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz (2016). Núm. 1100160002532010844442 (9 de septiembre de 2016). Acusado: Fredy Alonso Pulgarín. Recuperado de http://www.saladejusticiaypazmedellin.com/decisiones_sala/sentencias/09.09.2016-sentencia-cap-comandos-armados-del-pueblo-fredi-alonso-pulgarin-gaviria.pdf, el 5 de diciembre de 2016.

Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz (2016). Radicado núm. 1100160002532010844442. Sentenciado: Fredy Alonso Pulgarín.

Tribunal Superior de Medellín (2015). Sala de Justicia y Paz, radicado No 0016000253-2007-82700, Bloque Cacique Nutibara.

Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y paz (2015). Radicado No 0016000253-2007-82700, sentencia sobre el Bloque Cacique Nutibara.

Versión libre de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias *Don Berna* (julio de 2007). Orden: 110160. Versionado: Diego Fernando Murillo (*Don Berna*): comandante Bloque Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las AUC. Fiscal 6 de Justicia y Paz O.A. Hernández Roa.

Entrevistas y talleres de memoria CNMH

CNMH, entrevista a defensor de derechos humanos, 2015.

CNMH, entrevista a líder de la zona noroccidental, 2015.

CNMH, entrevista con exfuncionario de la Alcaldía de Medellín, 2015.

CNMH, entrevista con víctima de violencia, 2015.

CNMH, entrevista realizada a un artista de la escena local, 2015.

CNMH, grupo focal con artistas de la ciudad, 2015.

CNMH, grupo focal con mujeres víctimas de violencia sexual, 2015.

CNMH, grupo focal sobre exilio, 2015.

CNMH, taller de memoria con educadores/as, 2015.

CNMH, taller de memoria con empleados de sector financiero, 2015.

CNMH, taller de memoria con equipo de investigación, 2015.

CNMH, taller de memoria con familiares de la Policía, 2015.

CNMH, taller de memoria con familiares de miembros de la UP, 2015.

CNMH, taller de memoria con funcionarios judiciales, 2015.

CNMH, taller de memoria con funcionarios públicos, 2015.

CNMH, taller de memoria con habitantes de la zona noroccidental, 2015.

CNMH, taller de memoria con habitantes del barrio La Loma, 2015.

CNMH, taller de memoria con la organización Madres de la Candelaria, 2015.

CNMH, taller de memoria con líderes comunitarios, 2016.

CNMH, taller de memoria con personas de los sectores afro, 2015.

CNMH, taller de memoria con personas mayores de 40 años, 2015.

CNMH, taller de memoria con sectores LGBT, 2015.

CNMH, taller de memoria con sindicalistas, 2015.

CNMH, taller de memoria con víctimas de desaparición forzada, 2015.

CNMH, taller de memoria con víctimas del conflicto armado, 2015.

CNMH, entrevista a exintegrantes Bloque cacique Nutibara, 2016.

CNMH, entrevista realizada a empresario, 2016.

CNMH, entrevista con exmilitante de organización guerrillera, 2016.

Cibergrafía

Amnistía Internacional (1 de septiembre de 2005). “Colombia: Medellín saca a la luz los gravísimos defectos de la estrategia de desmovilización del Gobierno”. Recuperado de <http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230192005>, el 5 de diciembre de 2016.

Canal TeleAntioquia (2001). “Desplazamiento forzado intraurbano. Un drama silencioso pero real”. Recuperado de <http://reliefweb.int/report/colombia/desplazamiento-intraurbano-en-medell-n-c-clico-e-invisible>, el 5 de diciembre de 2016.

Corporación Jurídica Libertad (2009). Memoria histórica de la Comuna 13 de Medellín. Recuperado de http://www.cjlibertad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=132:memoria-historica-de-la-comuna-trece-de-medellin&catid=62:memoria&Itemid=97, el 5 de diciembre de 2016.

De la Urbe, Universidad de Antioquia (10 de marzo de 2015). “Masacre de el Viejo Baúl, otro caso sin respuestas ni responsables”. Recuperado de <http://delaurbe.udea.edu.co/2015/03/10/masacre-de-el-viejo-baul-otro-caso-sin-respuestas-ni-responsables/>, el 5 de diciembre de 2016.

De la Urbe, Universidad de Antioquia (10 de marzo de 2015). "Villa Tina verdad y reparación sin justicia". Recuperado de <http://delaurbe.udea.edu.co/2015/03/10/villatina-verdad-y-reparacion-sin-justicia/>, el 5 de diciembre de 2016.

Hacemos memoria (15 de julio de 2016). "Masacre en el bar Oporto, 26 años de impunidad". Recuperado de <http://hacemosmemoria.org/2016/07/12/masacre-en-el-bar-oporto-26-anos-de-impunidad/>, el 5 de diciembre de 2016.

Instituto Popular de Capacitación (30 de mayo de 2013). "Comienza a visibilizarse el desplazamiento intraurbano en Colombia". Recuperado de <http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2013/05/30/comienza-a-visibilizarse-el-desplazamiento-intraurbano-en-colombia/>, el 5 de diciembre de 2016.